Guatemala, 2014

Territorio, actores armados y formación del Estado

Matilde González-Izás

1ª edición

EDITORIAL CARA PARENS
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Universidad Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

320.97281
G643 González-Izás, Matilde
Territorio, actores armados y formación del Estado /
Matilde Gonzáles-Izás; Editora responsable Belinda Ramos. - -
Guatemala : URL : Editorial Cara Parens, 2014.
xi, 382 p. ; il.
ISBN: 978-9929-54-066-8

1. Guatemala – Política y gobierno
2. Guatemala - Historia
3. Guatemala – Condiciones sociales
4. Guatemala – Condiciones económicas
5. Territorio nacional
6. Guatemala – Geografía política
7. Zacapa – Guatemala – Condiciones sociales
8. Chiquimula – Guatemala – Condiciones sociales
9. Izabal – Guatemala – Condiciones sociales
10. Estado – Guatemala
11. Conflictos políticos
12. Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP)
I t.
II Ramos, Belinda, ed.

Territorio, actores armados y formación del Estado
Matilde González-Izás
1ª edición, 2014

Instituto de Investigaciones y Gerencia Política -INGEP-
Editora responsable: Mgtr. Belinda Ramos

Editorial *Cara Parens* de la Universidad Rafael Landívar

Reservados todos los derechos de conformidad con la ley. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su traducción, incorporación a un sistema informático, transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares del *copyright*.

D. R. ©
Editorial Cara Parens de la Universidad Rafael Landívar
Campus Central, Vista Hermosa III, zona 16, edificio G, oficina 103
Apartado Postal 39-C, Ciudad de Guatemala, Guatemala 01016
Teléfono: (502) 2426-2626, extensión 3124
Correo electrónico: caraparens@url.edu.gt
Sitio electrónico: www.url.edu.gt

Director:	Gustavo García Fong
Subdirectora:	Karen De la Vega de Arriaga
Coordinador editorial:	P. Alberto López, S. J.
Coordinador de diseño gráfico:	Pedro Luis Alvizurez Molina
Coordinadora administrativa financiera :	Liceth Rodriguez Ruíz
Diseño gráfico:	Michelle García Alegría
Fotografía de portada:	Colección Taracena, Fototeca/ Cirma/Guatemala

Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero de la Embajada de Suecia.

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Rector	Dr. Eduardo Valdés Barría, S. J.
Vicerrectora Académica	Dra. Lucrecia Méndez de Penedo
Vicerrector de Investigación y Proyección	Dr. Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S. J.
Vicerrector de Integración Universitaria	Mgtr. Luis Estuardo Quan Mack
Vicerrector Administrativo	Lcdo. Ariel Rivera Irías
Secretaria General	Lcda. Fabiola Padilla Beltranena de Lorenzana

AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y GERENCIA POLÍITICA -INGEP-

Director	Dr. J. Fernando Valdez Gordillo
Coordinadora de Investigación	Mgtr. Belinda Ramos Muñoz
Coordinador Administrativo Financiero	Mgtr. Fredy Leonel Palma Elvira

Índice

Pág. IX
Agradecimientos

Pág. 1
Introducción

Primera parte
Estado, economía y territorio

Pág. 13
Capítulo I
Configuración del Estado desde el territorio nororiental

Segunda Parte
Contiendas políticas y formación del Estado republicano

Pág. 65
Capítulo II
Formación del Estado, comercio transatlántico y disputas por el territorio

Tercera parte
Contienda revolucionaria y restauración del orden provinciano

Pág. 125
Capítulo III
La presencia del caudillo en la memoria del siglo XXI

Pág. 149
Capítulo IV
Movimiento antioligárquico y cambio revolucionario

Pág. 171
Capitulo V
El Movimiento de Liberación Nacional (1954-1962)

Cuarta Parte
La contradicción entre la seguridad o el desarrollo

Pág. 209
Capítulo VI
Formación del Estado en el contexto de la Guerra Fría

Pág. 253
Capítulo VII
La estrategia de seguridad y desarrollo

Quinta parte
Las consecuencias no previstas de la reforma del Estado

Pág. 285
Capítulo VIII
Apertura democrática *versus* reforma del Estado

Pág. 321
Capítulo IX
Repensar la reforma del Estado

Pág. 345
Bibliografía

Agradecimientos

Este libro no hubiera sido posible sin el apoyo decidido que recibimos de cada una de las personas que entrevistamos en Chiquimula, Camotán, Zacapa, Gualán, Jutiapa y la ciudad capital. A cada una de estas personas le agradecemos profundamente la confianza al abrirnos las puertas de su casa, pero, sobre todo, por permitirnos entrar en el fascinante mundo de su memoria. Con cada una de estas personas aprendimos muchísimo sobre el proceso de formación del Estado y sobre la historia del nororiente de Guatemala. Sus trayectorias de vida, su perspectiva del mundo y sus reflexiones acerca de lo político nos han permitido comprender algunos de los porqués de la conflictividad y violencia política de Guatemala. Pero, especialmente, nos permitieron comprender el dinamismo político del nororiente y la participación activa que han tenido los nororientales –de diferente extracción social y postura política– en el proceso de formación del Estado de Guatemala. Estamos conscientes de que en este libro no hemos aprovechado al máximo el *corpus* de información que construimos en el trabajo de campo de la investigación que da sustento a las ideas que aquí presentamos. La riqueza y profundidad de la memoria de cada una de las personas que entrevistamos nos seguirán haciendo pensar en la densidad histórica de las ideas y formas de entender lo político en este país.

Los resultados de este trabajo no hubieran sido posibles sin el apoyo decidido que recibimos de varias personas. En principio, de Ligia Macz Briones, quien fue la asistente de investigación. Su dedicación al trabajo y su compromiso con la compresión de la historia de Guatemala siempre nos permitieron avanzar a buen ritmo como equipo. Además de participar en varias visitas de campo a Chiquimula, Jutiapa, Zacapa y Gualán, Ligia tuvo a su cargo la transcripción de todas las entrevistas, el levantamiento de la información de archivo, el levantamiento de texto de reseñas bibliográficas y la construcción del archivo de fuentes orales de esta investigación. Su entusiasmo y apoyo en el trabajo siempre fueron muy reconfortantes.

En el trabajo de campo en el nororiente contamos con el apoyo de varias personas, particularmente de nuestra colega Rebeca Pérez, profunda conocedora de la historia y de los actores políticos en Zacapa. Su asesoría y acompañamiento nos permitió muy pronto identificar y establecer contacto con aquellas personas que debíamos entrevistar. Además, nos brindó copia de todo el archivo de la revista *Somos Zacapa* que ella coordinó en la década de los 90. Durante los últimos años, dicha revista ha sido un importante medio de difusión de las tradiciones e ideas de escritores zacapanecos de distintas perspectivas políticas. Hacer el trabajo de campo en compañía de *la Rebe* –como le decimos cariñosamente– fue muy interesante y placentero. Las discusiones sobre la historia de su pueblo siempre fueron reflexivas y de aprendizaje continuo.

En lo tocante al trabajo de campo de Chiquimula, agradecemos el apoyo de Ronaldo Porta España, quien se comprometió activamente en la reconstrucción de la historia del nororiente. El licenciado Porta nos apoyó en la reconstrucción de un cuadro dinámico de los actores políticos de Chiquimula, y además nos ofreció todos sus contactos para entrevistar a chiquimultecos de diferentes posturas políticas, incluso de aquellos que fueran críticos u opositores a su propia perspectiva. Además, nos permitió desarrollar el seminario-taller *La formación del Estado en el oriente de Guatemala* con sus estudiantes del doctorado en Derecho del Centro Universitario de Oriente (Cunori). Nuestra insistencia respecto a la necesidad de reflexionar críticamente sobre el proceso de formación del Estado desde el nororiente siempre fue bien recibida.

En el trabajo de campo en varias de las comunidades ch'orti' de Camotán, contamos con el apoyo, contactos y acompañamiento de Omar Gerónimo, reconocido dirigente campesino en la región. Las largas conversaciones con Omar y con cada uno de los ancianos ch'orti' que tuvimos oportunidad de conocer y entrevistar nos permitieron adentrarnos en la historia de despojo y lucha de las comunidades ch'orti', nos permitió romper la imagen de un nororiente homogéneo y ladino. Omar también nos permitió contactar a dirigentes campesinos de la histórica aldea La Trementina, en Zacapa.

Para realizar el trabajo de campo en Gualán, contamos con el apoyo decidido de Arturo Echeverría, crítico conocedor de la historia y de las personas de su pueblo. A Arturo le debemos el habernos adentrado en la vida cotidiana e historia contemporánea del nororiente. Su interlocución en la lectura de los hallazgos del

trabajo de campo, en la interpretación y redacción del informe de investigación han sido de incalculable valor.

Desde el diseño de investigación hasta el último borrador hemos contado con la lectura acuciosa y critica de varios colegas. Estamos particularmente agradecidos con nuestra colega Claudia Dary, una de las primeras académicas guatemaltecas que investigó el oriente y cuyas investigaciones nos han permitido adentrarnos en las problemáticas más agudas que enfrenta esta región. La generosidad intelectual, agudeza y aportes de Claudia han sido muy importantes a lo largo de todo el proceso.

También agradecemos la interlocución y aportes de Viviane Brachet, Marta Domínguez, Mónica Uribe, Alejandro Agudo, Edelberto Torres Rivas, Finn Steputat, María Victoria García, Juan Carlos Zarazúa e Ileana Moterroso. La discusión con cada uno de ellos sobre cómo entender el proceso de transformación del Estado, recuperando el dinamismo de los procesos sociales desde la perspectiva territorial, ha sido muy enriquecedora.

Finalmente, este trabajo no hubiera sido posible sin la escucha de Fernando Valdez, director del Ingep, quien nos permitió replantear de forma radical la investigación sobre los Consejos de Desarrollo. Su apoyo para ir al fondo de la problemática de *por qué* las políticas de descentralización del Estado no necesariamente llevaron a la democratización del espacio local ha sido muy importante en cada una de las etapas de investigación.

Agradecemos el apoyo de nuestros colegas en Cirma, particularmente a Telma Porres, directora del archivo histórico; a Miguel, Chema, Quicab, y Marta, de la biblioteca, Edgar y Anais García, directora de la Fototeca. A todos ustedes, infinitamente, gracias.

Matilde González-Izás

Septiembre de 2013

Introducción

Este libro aporta sugerentes respuestas a *por qué* las reformas políticas que pretendían promover el desarrollo y la democratización de la política local en los años 80 y 90[1] están siendo amenazadas de nuevo por el tráfico de influencias, las redes del comercio ilícito, la violencia e impunidad administrativa y judicial. Sabiendo que ni los actores políticos ni las instituciones se transforman *a partir de decretos de ley* (muy de moda en estos tiempos), en este trabajo priorizamos el estudio de los *procesos sociales* más relevantes que dieron forma al Estado en el periodo que va de 1954 a 2010, desde el nororiente de Guatemala (Zacapa, Chiquimula e Izabal). Para ello, rastreamos las trayectorias políticas, las redes de influencia, la cultura y prácticas de gobierno de tres generaciones de políticos orientales que participaron en la institucionalidad estatal, desde el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional (1954) hasta la actualidad. Al mismo tiempo, observamos las distintas maneras en que el Estado, y particularmente el Ejército, modeló las ideas, las formas de entender lo político y las prácticas gubernamentales de muchos de los actores políticos que hoy están al frente de la institucionalidad estatal en el espacio municipal/regional, y han sido ampliamente beneficiados por las políticas de la descentralización y el financiamiento destinado al desarrollo local.

Si bien el punto de partida de esta investigación fue la segunda mitad del siglo XX, las memorias de las personas que entrevistamos aluden al proceso de larga duración en el que se configura, no solo el territorio nororiental, sino el Estado de Guatemala. La reconstrucción de este proceso nos permitió evaluar la cultura e historia político-institucional sobre la que se asentó el modelo de reforma del Estado en el espacio local/regional/nacional. En este caso, el análisis socio-histórico nos ofreció sugerentes instrumentos para escudriñar en el tiempo-espacio aquellas ideas y prácticas gubernamentales que limitan (o eventualmente potencian) el desarrollo de la democracia en todas las escalas del mundo social.

1 Es importante aclarar que entendemos por *lo local* el espacio en donde se concretan o toman forma diferentes entramados de relación que articulan el espacio social en diferentes escalas (local, nacional, regional y/o transnacional).

De igual modo, nos permitió evaluar las limitaciones de aquellas perspectivas que reducen la complejidad del problema de la «gubernamentalidad» a la oposición entre autoritarismo *versus* democracia, o centralización *versus* descentralización del Estado.

Cabe aclarar que, aun cuando hacemos una reconstrucción socio-histórica del proceso de formación del territorio nororiental y su relación con el Estado, este libro no tiene la pretensión de explicar la historia del nororiente, ni siquiera la historia de un periodo en particular. Simplemente, rastrea en el tiempo-espacio algunas de las contiendas que definieron el curso que siguió el Estado de Guatemala desde este fascinante territorio. Asimismo, examina las ideas y prácticas militares y/o paramilitares que permearon el espacio público y privado de la sociedad guatemalteca durante el periodo de estudio. Esto último constituye un asunto relevante, sobre todo cuando tomamos en consideración que el Ejército fue la organización que reclutó a la mayoría de los jóvenes del área rural, principalmente en el nororiente, y buscó objetivos socializadores propios de las instituciones totales, como campo de entrenamiento para políticas antidemocráticas y como reservas para ideologías excluyentes (Brachet, 2001:73).

¿Cómo surge esta propuesta?

Esta investigación forma parte del proyecto *Liderazgo joven construyendo democracia*, el cual busca generar, desde los jóvenes, dinámicas locales y territoriales que influyan en la transformación de la ética y la práctica política de individuos, organizaciones y/o instituciones de intermediación entre el ciudadano y el Estado. Para responder con pertinencia a dicho objetivo, esta investigación propicia una reflexión seria que aporta a la comprensión del proceso de transformación del Estado a través del tiempo y desde el espacio territorial. Los hallazgos de la investigación que presentamos en este libro enriquecen los procesos de formación y debate de los diferentes grupos de jóvenes que participan en este y otros proyectos de formación impulsados por la Universidad Rafael Landívar, a través del Ingep. En la propuesta inicial del proyecto (*Liderazgo joven construyendo democracia*) se pensaba hacer una investigación sobre los Consejos de Desarrollo y el clientelismo político, en una o dos de las regiones en donde estamos trabajando. No obstante, al hacernos cargo de dicha investigación, luego de un primer estado del arte, muy pronto constatamos que dicho problema había sido abordado por diferentes investigadores e institutos de investigación,

entre los que destacan la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso/Guatemala), cuyos estudios se publicaron entre 1990 y 2004[2], y el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (Cedfog), cuya producción se registra en 2010[3]. Es importante decir que los trabajos de Flacso, Cedfog y el mismo Ingep se suman a muchos otros producidos por investigadores independientes y estudiantes de Ciencias Sociales, que han aportado significativamente a la comprensión de los entramados de poder, las ideas y las prácticas patrimonialistas que limitan el ejercicio de la democracia local desde los Consejos de Desarrollo. Particularmente reveladores de estas problemáticas son los trabajos de Ramos y Sosa (2010), quienes analizan las relaciones de poder que se establecen en el sistema de Consejos de Desarrollo y el sistema político electoral en los ámbitos comunitario, municipal y departamental, y sus condicionantes a escala nacional. Estos autores aportan elementos que ayudan a comprender las problemáticas que enfrenta la participación ciudadana (principalmente de las mujeres) y la gestión del desarrollo a través del sistema electoral y del sistema de consejos de desarrollo.

Revisando la literatura existente acerca de los procesos de descentralización y los Consejos de Desarrollo, me atrevería a decir que, en un primer momento (años 90), el entusiasmo en las políticas de descentralización y la formación de los nuevos Consejos de Desarrollo se asentó en una perspectiva binaria que identificó al Estado central como violento, ineficiente, despilfarrador y corrupto, en oposición a un poder local y/o comunal democrático, cercano a los ciudadanos y pertinente culturalmente, ignorando así las formas diferenciadas que adquirió el Estado en los diferentes periodos y territorios que dan forma a la actual geografía de la desigualdad. Asimismo, se ignoraron los profundos legados de la guerra

2 Algunas de las publicaciones de Flacso/Guatemala sobre descentralización y consejos de desarrollo son: Soto Ramírez, Carlos (1990) *La política de descentralización estatal en Guatemala y su sistema de consejos de desarrollo, ¿solución o problema?*; Thillet, Braulia (Comp.) (2004) *Los consejos de desarrollo frente al desafío de la transición hacia la democracia*; Escalante, Sergio (2004) *Contribución al debate sobre la modernización y descentralización del Estado: el caso de los consejos de desarrollo en Guatemala*; *Los consejos comunitarios y consejos municipales de desarrollo y el cambio de autoridades*; Pérez, Demetrio (2004) *Políticas públicas, poder local y participación ciudadana en el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural*; Barrientos, Claudia (2007) *Participación ciudadana y construcción de ciudadanía desde los consejos de desarrollo. El caso de Chichicastenango*; etc.

3 Entre las publicaciones producidas por Cedfog destacan los trabajos de Mérida, Cecilia (2010) *Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango. ¿Un espacio para la transparencia?*; Mérida, Cecilia, y Wolfgang Krenmayr (2010) *Prácticas de participación ciudadana: oportunidades y límites en los consejos de desarrollo de Huehuetenango*; Mérida, Cecilia (2010) *Consejos comunitarios de desarrollo: Espacios de lucha para las mujeres*; y Ramos y Sosa (2010) *Los caminos de la participación ciudadana, el clientelismo y la cultura política en Huehuetenango*. Esta publicación ofrece una síntesis interpretativa de las investigaciones realizadas por dicho centro de investigación.

y la cultura autoritaria que se fue modelando localmente, tras largos años de regímenes militares, violencia indiscriminada e impunidad. Hoy en día no son pocas las voces que nos alertan sobre la persistencia del clientelismo político, la corrupción, el nepotismo y un variado repertorio de *malas prácticas* en el diseño y administración de la política pública por parte de aquellos actores que ocupan cargos de dirección y/o administración en la institucionalidad descentralizada del Estado y en las organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover el desarrollo local o territorial.

Mi argumento es que muchos de los fracasos y/o deficiencias que ahora se imputan a las entidades descentralizadas del Estado responden, más bien, a la aplicación generalizada de fórmulas de reforma estatal que pasaron por alto *los procesos sociales* que modelaron la cultura y formas de entender lo político de aquellos actores que hoy se mueven en la arena política a escala local, regional y/o nacional. De igual modo, el diseño de estas «nuevas» estructuras descentralizadas de gobierno local se aplicó indistintamente, sin observar las grandes diferencias territoriales e identificar aquellos procesos que eran necesarios para desarrollar las capacidades humanas, económicas, técnicas y/o administrativas que se hubieran requerido para que estas nuevas estructuras efectivamente respondieran a las necesidades de la población. Por consiguiente, en esta investigación, el problema de la reforma del Estado y, en particular, el de la descentralización, se ubica en el debate más amplio acerca de las transformaciones del Estado que ocurren durante la segunda mitad del siglo XX.

Nuestro punto de partida es que los problemas que ahora observamos en las estructuras descentralizadas del gobierno local, regional o nacional no pueden explicarse al margen de una larga historia de conflicto social, militarización y violencia que dio forma al Estado de Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX. De igual modo, no pueden explicarse al margen de las transformaciones producidas por las nuevas dinámicas de la globalización y su impacto diferenciado en el ámbito territorial. Particularmente en un momento en el que la magnitud del problema ha llevado a los mismos teóricos del neoliberalismo a reconocer que las políticas de reforma del Estado (impulsadas en los años 80 y 90) profundizaron la pobreza y las desigualdades sociales, y que la actual escalada de violencia que se vive en los países en «vías de desarrollo» está directamente relacionada con la reducción de las capacidades reguladoras y los márgenes de acción estatal.

El problema radica en que las políticas de reforma del Estado coartaron de entrada la posibilidad de formar un Estado democrático, en tanto que ahondaron su incapacidad histórica de penetrar en el conjunto del territorio nacional y de incluir, en su radio de acción, a los diferentes segmentos de la sociedad, garantizando de forma universal el acceso a los servicios públicos esenciales en las áreas de salud, educación y saneamiento básico, así como la eficacia de sus ordenamientos legales (Diniz, 2009). En el caso de Guatemala, los gobiernos democráticamente electos han sido incapaces de poner un alto al desempleo, la precarización de las relaciones salariales y a la persistencia de una economía de la pobreza que provoca la migración internacional en condiciones de alto riesgo. Los partidos políticos continúan siendo subcontratadores de caciques locales, y los tratos clientelistas y corporativistas siguen intocables. En tales circunstancias, el Estado perdió la capacidad de realizar sus funciones básicas e intransferibles, consideradas por los mismos teóricos neoliberales como los «bienes públicos puros», tales como la garantía del orden y la seguridad.

Perspectiva de análisis

La discusión que desarrollamos en este libro recupera los aportes que dos perspectivas teóricas que, desde nuestro punto de vista, son ampliamente complementarias para analizar el proceso de formación del Estado en un país con una larga historia de dictaduras militares, cuya «transición» a la democracia ocurre en un contexto de políticas de ajuste estructural: la primera es la sociología histórica, cuyo eje de análisis son los procesos sociales; y, la segunda, la formación cotidiana del Estado, cuyo énfasis está puesto en la pluralidad/disparidad, tanto de los grupos de poder como de los actores subalternos; en la agencia política y las relaciones de fuerza que se establecen entre los diferentes actores políticos que intervienen en los procesos de formación del Estado.

En oposición a aquellos enfoques de la transición a la democracia que suelen dejar por fuera el análisis del Estado, y de aquellas perspectivas neoliberales que plantearon que «la mejor respuesta al mal gobierno era menos gobierno» y que «el Estado era el problema y el mercado la solución», un grupo de teóricos inspirados en los clásicos de la sociología histórica[4] (Evans, [1985] 2007; Skocpol, [1985] 2007; Oslak, 1978, 1981; O'Donnell, 1980, 1984, 1994, 2007; Brachet,

4 Tales como (Weber, [1965] 2002; Hintze, 1975; Moore, 1967; Tilly, 1975; Hobsbawn, 1992; Mann, 1986, 1993, 2000, 2006).

2001; Przeworski, 1988, 1989, 1998; Diniz, 2009, entre otros) sostienen que el Estado no solo tiene una función clave en los procesos de democratización y cambio estructural, sino constituye un actor insustituible en el impulso del desarrollo económico-social y en el logro de objetivos concretos en materia de políticas públicas. Esto significa, en palabras de Evans (1996), que el Estado no es el problema sino la solución del desarrollo económico y social.

La importancia de esta concepción del Estado estriba, según Brachet (2010), en que el análisis del proceso de formación del Estado no se limita a observar la adquisición o ejercicio del Estado de algunas capacidades sobre un territorio dado, sino que observa históricamente las formas de relación que se establecen entre el Estado y la sociedad, y que definen las formas que adquieren la desigualdad y la dominación. Para Brachet, esta perspectiva «se basa en una concepción del Estado como instancia política de dominación y complejo institucional-organizativo dotado de capacidades administrativas y coercitivas. En este marco general, las formas que toma el Estado son históricamente construidas y conforman y están conformadas por los pactos de dominación y formas particulares de mantener la desigualdad entre los dominantes y los dominados» (2010:32).

Otro de los grandes aportes de esta corriente consiste en que nos alerta respecto al riesgo analítico que supone el olvidar las diferentes maneras en que las estructuras y acciones del Estado están condicionadas por contextos transnacionales históricamente cambiantes, pues estos contextos influyen en los distintos Estados a través de las relaciones geopolíticas de dominación y competencia interestatal, mediante la comunicación internacional de ideas y modelos de política pública y a través de las pautas mundiales de comercio, división de las actividades productivas, flujos de inversión y finanzas internacionales. En otras palabras, esta perspectiva recupera y dinamiza la idea de Hintze ([1931] 1981), quien advierte que los Estados se sitúan en la intersección entre los órdenes sociopolíticos nacionales para sobrevivir y avanzar en relación con otros Estados. Por consiguiente, insisten en que el Estado moderno ha sido siempre, desde su nacimiento en la historia de Europa, parte de un sistema de Estados competitivos e interrelacionados.

Por ejemplo, en el caso de Guatemala, estas advertencias analíticas nos ayudan a contextualizar las transformaciones que experimentó el Estado de Guatemala en el periodo que va de 1954 a 1996 dentro del proceso de competencia interestatal que se produjo durante la Guerra Fría y el marcado interés de Estados Unidos

por mantener la hegemonía en la región. En este caso, más que el concepto de imperialismo (en boga durante los años 70 y 80), la noción de configuraciones de fuerzas nos ayuda a entender el dinamismo de la competencia interestatal y el trasfondo de las políticas anticomunistas de Estados Unidos. Asimismo, nos ayuda a comprender los márgenes de acción y negociación que alcanzaron los políticos, el Ejército y los grupos de oposición respecto a los intereses dominantes en la región. Sobre todo, nos ayuda a observar las distintas maneras en que la paranoia del «comunismo» –ampliamente difundida por la doctrina de seguridad nacional, tras el triunfo de la Revolución cubana– ofreció al Ejército guatemalteco (como a muchos otros en América Latina) la oportunidad de situarse como el interlocutor preferido del Gobierno norteamericano y el actor protagónico que definió el curso que siguió el Estado guatemalteco durante la segunda mitad del siglo XX. En síntesis, observar el proceso de formación del Estado dentro del dinamismo de la contienda interestatal nos permite observar el juego político de las élites en la región frente a las grandes potencias mundiales.

A medida que pongamos de nuevo al Estado en el primer plano que le corresponde en las experiencias del cambio social y la política –nos dice Skocpol ([1985] 2007)–, nos veremos obligados a respetar la historicidad intrínseca de las estructuras geopolíticas y asistiremos necesariamente a los ineludibles entrelazamientos de los acontecimientos a nivel nacional con los contextos históricos mundiales cambiantes. Este enfoque, lejos de dar por sentada la aceptación ciega e incuestionada de las élites políticas de la región frente a los intereses transnacionales, nos invita a observar la contradictoria y compleja actuación de los diferentes actores que definieron el curso de la política estatal. Nos invita a hurgar en los resquicios del juego político.

Quizás el aporte medular del estudio de la formación del Estado en América Latina consiste en que analiza la pluralidad/disparidad, tanto de los grupos de poder como de los actores subalternos, y las distintas maneras en que éstos se encuentran inmersos en complejas relaciones de fuerza. Buena parte de estos estudios subrayan la necesidad de recuperar la agencia de los actores subordinados, quienes han moldeado los procesos de formación del Estado y han sido modelados por éstos, tomando en cuenta que su lógica de participación es múltiple –una mezcla de acomodo pasivo, deferencia, ambivalencia y/o insubordinación– (Mallon, [1995] 2003; Roseberry, 1994; Joseph y Nugent, 1994).

Atendiendo a esta perspectiva, una interpretación compleja del proceso de formación del Estado de Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX (y sus consiguientes periodos de conflicto, pacificación, reforma del Estado, ingobernabilidad y violencia) nos lleva a observar cuidadosamente cómo cambian en el tiempo-espacio las instituciones, intereses y acciones del Estado y de los grupos socioeconómicos. Así, para los teóricos de esta corriente, situar de nuevo al Estado en el primer plano del análisis de la política y el cambio social supone revisar críticamente las generalizaciones a priori y problematizar algunos de los supuestos deterministas que guiaron su interpretación. En contrapartida, sugieren identificar las redes de actuación política que vinculan al sector público con el sector privado y situar el análisis del Estado en relación con los contextos socioeconómicos y socioculturales que lo configuran.

Esta perspectiva nos recuerda que desde la interpretación weberiana, el Estado no lo es todo, otras organizaciones y agentes también modelan las relaciones sociales y la política, y el análisis debe estudiar a fondo la estructura y las actividades del Estado en relación con éstos. En este momento, nos dice Skocpol ([1985], 2007), no necesitamos una gran teoría, nueva o restaurada del Estado, sino interpretaciones sólidamente fundamentadas y analíticamente profundas de las regularidades causales que subyacen en las historias de los Estados, las estructuras sociales y las relaciones transnacionales en el mundo moderno. Hacer sociología del Estado desde esta perspectiva es descubrir, observar, investigar y analizar los grandes procesos sociales que nos ayudan a explicar la realidad que caracteriza al presente (Brachet, 2010).

De manera específica, en esta investigación retomaré la propuesta analítica desarrollada por Brachet (2010 y 2001), para quien la formación de los Estados puede extenderse a lo largo de varios siglos y representar un proceso discontinuo, con altibajos, regresiones y mutaciones que se presentan de manera irregular. Por consiguiente, abarcar esta gran variedad de movimientos requiere adoptar una visión macroscópica y de longue durée. Y al mismo tiempo, observar con detalle aquellas contiendas que estallan en momentos precisos y se desarrollan dentro de un marco microscópico y de courte durée (ibíd. 20). Para esta socióloga, las interrelaciones entre Estado y sociedad que expresan la formación del Estado pueden observarse a través de la estructuración histórica de un complejo de reglas o pacto de dominación que designa «quién tiene derecho a qué» en el ejercicio del poder y la distribución del excedente (ibíd. 20). En otras palabras, lo que Brachet nos sugiere analizar es la formación del Estado como un proceso que alterna

entre la creación, reproducción y destrucción de los pactos de dominación[5]. En este caso, la autoridad ejercida por el Estado se concibe a la vez como legítima y contestada en todos los momentos, de manera que la hegemonía, entendida como punto final, nunca se logra cabalmente. En este modelo de interpretación resulta significativo seguir con atención las contiendas, en tanto que en muchas de ellas uno de los contendientes busca modificar el pacto de dominación (entendida como la manera específica en que un Estado domina sobre la sociedad).

Según Brachet, los pactos de dominación pueden estabilizarse por periodos muy largos, en el sentido de ser aceptados como algo «natural» por la mayoría de la población, aunque nunca en forma definitiva. Pues, además de dominar a la población bajo su jurisdicción por medio de la amenaza del uso de la fuerza, los dirigentes de los Estados suelen construir un discurso legitimador que hace más aceptable su dominación y menos visible la desigualdad que le corresponde. Traducido en lenguaje popular, esto último se traduciría al manejo calculado del palo y la zanahoria. En tanto que en lenguaje de la doctrina de la seguridad aplicada por el Estado de Guatemala durante las diferentes etapas del conflicto armado, esto se tradujo en el manejo calculado de las acciones de represión (la seguridad) y las acciones del desarrollo económico-social. En este caso, la legitimidad de la acción estatal se buscó alcanzar, no solo con el impulso de programas de desarrollo, sino con el involucramiento de importantes segmentos de la población en las acciones e instituciones represivas y con la oferta de prebendas y ascenso social que estas instancias ofertaban a sus colaboradores locales.

En vez de hablar del Estado como una entidad que desde siempre ha tenido ciertas características, funciones y formas de gobernanza, este estudio examina el proceso de formación del Estado de Guatemala como una configuración histórica contingente con una gama de lenguajes y prácticas de «gubernamentalidad» que han sido interpretadas y adaptadas de muy variadas formas en los diferentes

5 Para Brachet, la noción de pacto de dominación yuxtapone el cumplimiento con reglas conocidas (pacto) con el uso potencial de la coerción (dominación). Esto significa que una distribución dada del poder y de los recursos puede ser acatada durante largos periodos, aunque nunca logre ser hegemónica. La noción de pacto implica que niveles dados de desigualdad serán aceptados y dados por hecho como normales: *todo sucede como si hubiera un acuerdo entre los miembros de una sociedad de no pelear la distribución del poder y de los recursos y aceptarla como normal, y para algunos hasta legítima.* Lejos de constituir un conocimiento compartido e incuestionado (como lo sería un contrato), los pactos de dominación continuamente se redefinen y manipulan por parte de aquellos actores cuyos intereses son opuestos a los estatales. La brecha entre el discurso público de la dominación y el que varios grupos elaboran culturalmente alternará entre fomentar la hegemonía, acumular el agravio en la esfera privada, o provocar la expresión colectiva y pública de sentimientos de injusticia (Moore, 1978, citado en Brachet, 2010).

territorios del país. Así mismo, recupera las nociones locales y épicas que adquieren la autoridad y gobernanza estatal, así como las nociones de resistencia al poder del Estado en el espacio concreto del nororiente.

Organizamos la interpretación del proceso de formación del Estado desde el nororiente en cinco partes: en *la primera*, «Estado, economía y territorio», analizamos el proceso de configuración del territorio nororiental y su relación con la disputa imperial por el control de los circuitos del comercio (legal e ilegal) del Caribe y el triángulo norte del istmo centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador); en *la segunda,* «Contiendas políticas y formación del Estado», reconstruimos algunas de las disputas territoriales y rivalidades provincianas que se producen en el contexto del proceso de formación de la República y el Estado Federal de Centroamérica; en *la tercera*, «Contienda revolucionaria y restauración del orden provinciano», analizamos las disputas antioligarcas de mediados del siglo XX, los cambios profundos que introducen los gobiernos de la Revolución en el orden provinciano y la respuesta de las élites regionales frente a la amenaza del *statu quo*; en *la cuarta*, «Las contradicciones entre la seguridad y el desarrollo», examinamos el proceso de formación del Estado en el contexto de la Guerra Fría; y en *la quinta*, «Las consecuencias no previstas de la reforma del Estado», analizamos las implicaciones que tuvo para la Guatemala de posguerra la aplicación de las reformas del Estado y las políticas de la descentralización, y ofrecemos algunas reflexiones acerca de cómo replantearnos el proceso de rediseño del Estado, en un contexto de profundas desigualdades sociales y violencia generalizada.

Primera parte

Estado, economía y territorio

Capítulo I
Configuración del Estado desde el territorio nororiental

Desde los primeros años de la vida republicana hasta buena parte del siglo XX, la característica relevante del proceso de formación del Estado en Guatemala fue la disputa y fragmentación de sus territorios, la volatilidad y continua improvisación de sus instituciones y políticas de gobierno. Tras cada guerra de secesión, golpes de Estado o cambios de gobierno, las instituciones estatales prácticamente debían reorganizarse para dar cabida a las demandas de la red de colaboradores del nuevo caudillo (financistas extranjeros, finqueros, comerciantes y caciques provincianos que comandaban sus propias milicias y gobernaban sus territorios con amplios márgenes de soberanía provinciana). El principal reto de los nuevos gobiernos fue el asegurar la lealtad de estos caciques provincianos y las fuerzas militares, tanto estatales como privadas, a quienes debía su arribo al poder. De ahí la consiguiente necesidad de negociar, cooptar o sobornar a cualquier persona que fuera capaz de movilizar una fuerza armada opositora[6].

Los regionalismos, rivalidades provincianas y guerras entre diferentes facciones políticas se mantuvieron latentes durante el proceso de formación del Estado en el siglo XIX y primera mitad del XX. Estas rivalidades fueron particularmente evidentes entre las élites oligarcas de la ciudad capital y las élites regionales de Los Altos y el oriente de Guatemala, en donde la composición demográfica, económica y política de sus territorios guardaba significativas diferencias. Los intereses

6 El arraigo y reactualización de esta problemática se hace evidente al observar de cerca cómo se fraguó cada uno de los golpes de Estado en Guatemala, en el contexto de la Guerra Fría (años 60-80); identificamos que éstos siempre se llevaron a cabo con la participación de un sector del Ejército y fuerzas paramilitares vinculadas a alguno de los partidos políticos que enarbolaron la bandera del anticomunismo (MLN, PID o CAN). Estas fuerzas paramilitares solían estar comandadas por un pequeño sector de la oligarquía guatemalteca y aquellos caudillos orientales que habían participado en el Ejército de Liberación Nacional que derrocó al gobierno revolucionario en 1956. Si bien estas fuerzas operaban como típicos escuadrones de la muerte, su «legitimidad» ideológica, su organización y funcionamiento pueblerino aún respondían a una arraigada tradición caudillo-miliciana (ver capítulo *La formación del Estado de Guatemala en el contexto de la Guerra Fría*).

encontrados y regionalismos de arraigo colonial cobraban fuerza cada vez que un segmento de las élites provincianas veía amenazados sus intereses económicos o sus espacios de influencia política por otro sector de la élite y/o por un movimiento indígena/campesino, provocando así profundas divisiones en el país.

La conflictividad de los primeros años republicanos finalmente frustró la posibilidad de formar un Estado federal que aglutinara a todos los países del istmo centroamericano. En contrapartida, se formaron pequeños Estados rivales, cautivos de los vaivenes de la economía global, endeudados, y no pocas veces dependientes del financiamiento de inversionistas extranjeros, que utilizaban la deuda pública y el endeudamiento privado de sus funcionarios como un mecanismo eficaz para negociar significativas concesiones territoriales, la formulación de leyes o políticas públicas que viabilizaran la rentabilidad de sus proyectos extractivos, o la construcción de la infraestructura que necesitaban para la producción, circulación y exportación de sus mercancías. Con solo revisar los expedientes de archivo de los más influyentes acreedores del Estado de Guatemala para cada periodo, podemos observar las distintas maneras en que éstos influían activamente en el curso que siguió el Estado en aquellos sectores y territorios que eran de su particular interés.

Mi punto de partida en este estudio es que la formación del Estado es una construcción social que adquiere forma y sentido en los territorios concretos, y en la disputa por éstos. Al cartografiar las contiendas que definieron el curso que siguió el Estado de Guatemala desde el siglo XIX, observamos que estas fueron disputas por el dominio de territorios, rutas de comercio y recursos estratégicos para la expansión capitalista. De igual modo, estas contiendas estaban relacionadas con concepciones diferentes de entender lo político y gobernar a la población, sus territorios y sus recursos naturales. Como veremos a lo largo de este libro, la cuestión del control del espacio siempre fue una preocupación significativa para inversionistas privados (nacionales y extranjeros), funcionarios del Estado y militares involucrados en aquellas acciones estatales que introdujeron cambios significativos en la forma de entender, representar y administrar el territorio.

Aun cuando la mayoría de estas contiendas tenían un fundamento político y/o económico, en la práctica tomaron la forma de disputas regionales en contra de aquel sector de la élite que tuviera el control del centro nacional del poder. El gobierno central siempre fue incapaz de expandir su presencia y autoridad a todos los territorios del país; además, cuando intentaba hacerlo, solía encontrar

límites en aquellos territorios en donde prevalecía el poder de élites regionales que administraban sus territorios con amplios márgenes de soberanía provinciana. De igual manera, los gobiernos centrales se mostraron incapaces de entender la diversidad cultural de los pueblos indígenas y su particular forma de administrar sus territorios y recursos. Antes bien, sus políticas siempre fueron de carácter exclusionista y/o extractivista, lo cual provocó procesos de rebelión y defensa del territorio y/o defensa de espacios de autonomía por parte de diferentes comunidades indígenas. Lejos de aquella idea acerca de un Estado-nación fuerte y centralizador, en buena parte del siglo XIX y primera mitad del XX observamos un Estado chico y fragmentado, con una precaria presencia institucional, cuyo epicentro de acción gubernamental se redujo a aquellos espacios de interés económico.

Situando la escala del análisis en el territorio del nororiente, en los diferentes capítulos de este libro observamos algunos de los procesos sociales que fueron estratégicos en la formación del Estado en Guatemala. Además, al enfocar el lente analítico en la escala territorial podemos observar la espacialidad del poder y las formas de relación que se establecieron entre élites oligarcas, caciques provincianos e inversionistas privados, políticos, magistrados y autoridades gubernamentales (jefes políticos, alcaldes, síndicos, regidores, etc.) que intervinieron en la institucionalidad del Estado a escala local, nacional o transnacional. Del mismo modo, nos permite observar el tipo de interacción social que estos actores establecieron con las comunidades que vivían en los territorios objeto de su intervención. En otras palabras, podemos observar con precisión y detalle *la fragilidad* de los límites que se establecen entre el Estado, la economía y la sociedad.

En los diferentes capítulos de este libro observaremos la traducción territorial que adquieren algunas de las contiendas políticas que definieron el curso que siguió el Estado de Guatemala, desde el surgimiento de la república a la actualidad. De igual modo, observaremos que muchos de los conflictos relativos al territorio (su apropiación, uso y manejo) expresaban procesos de disputa social y relaciones de poder que iban más allá del espacio localmente peleado (Hoffmann, 2002). Esto último ha sido así en tanto que el territorio es el espacio concreto donde diferentes actores locales, nacionales y/o transnacionales luchan y conquistan sus respectivos intereses económicos y políticos. Como veremos en este capítulo, desde sus primeros años el proceso de formación del Estado en Centroamérica surge en estrecha relación con la contienda imperial por el dominio de los

territorios del litoral atlántico, que eran estratégicos para el desarrollo del comercio ultramarino y transfronterizo. El cartografiar los espacios en disputa, los intereses y cursos de acción de cada uno de los actores involucrados en esta contienda nos permite ubicar el proceso de formación del Estado en Centroamérica dentro de la contienda interestal, ello sin olvidar la agencia política de aquellos actores locales cuyos intereses estaban siendo afectados.

En todo caso, hay que tener presente que la expansión capitalista y las dinámicas globales siempre han desarrollado formas de intervención en los territorios y sociedades singulares, y las historias mundiales e historias locales se entretejen de diferentes maneras. A diferencia de la vieja historia política (autocentrada en las fronteras de la nación, la región o la localidad), el situar la mirada en la escala territorial nos invita a trascender las lecturas localistas acerca del Estado, y a identificar los entramados de relación que se tejen en todas las escalas del mundo social. Nos invita a observar las relaciones que se establecen entre los circuitos de producción y comercio internacional y las diferentes formas de gobierno local/nacional que se implementaron en cada coyuntura histórica y espacio geográfico. Desde esta escala de análisis podemos observar con detalle lo que Dean (2001) denominó *las artes internacionales de gobierno* que condicionan la formación de aquellos Estados cuyos territorios eran relativa o débilmente autónomos y soberanos, condicionando así el rol de sus recursos y poblaciones dentro del sistema moderno de Estados. Lejos de limitar la mirada al ángulo pueblerino de las administraciones locales o regionales, esta perspectiva nos remite a observar la intensa *circulación* de personas, capitales, mercancías, conocimientos y técnicas de gobierno de la población, el territorio y sus recursos que modelan la política pública en aquellos espacios, que una lectura más centralista del Estado definió como «la periferia» o los «márgenes» del Estado.

En sociedades agrarias como la guatemalteca, los estudios acerca de la formación del Estado desde una perspectiva territorial han demostrado que los campesinos e indígenas se involucraron en las luchas políticas nacionales, estableciendo alianzas cruzadas con las élites insatisfechas y otros grupos subalternos, constituyendo así las fuerzas que marcaron *los giros* de la formación del Estado en el siglo XIX (Brachet, 2010). Por otra parte, al centrar la atención en las luchas regionales interélites y populares que marcaron la formación del Estado, contribuyen a derribar el mito de «una clase capitalista unida», así como la visión instrumentalista de un Estado que exclusivamente protege los intereses capitalistas (ibíd., 2010:8). A medida que observamos las diferencias y disputas

entre los bloques oligárquicos y sus alianzas cruzadas con las élites provincianas y los actores subalternos, la historia política de Guatemala se vuelve más compleja y dinámica.

El incorporar la noción de territorio al análisis de las principales contiendas que fueron definiendo los procesos de formación del Estado nos permite cartografiar las formas que adquiere la dominación y la producción de la desigualdad social en términos espaciales; nos permite observar la desigual disposición y distribución del Estado en el territorio nacional, e identificar *cómo cambia la espacialidad del poder en cada una de las coyunturas históricas que han definido los diferentes pactos de dominación*. Esto último significa que si leemos el proceso de formación del Estado en leguaje cartográfico podemos identificar cómo cambian los epicentros de la institucionalidad y acción estatal, dependiendo de las prioridades del capitalismo o los imperativos de la «seguridad nacional» que se definieron para cada periodo. Paralelamente, podemos mapear aquellos espacios que permanecen olvidados o borrosos cual agujeros negros a la mirada de los diferentes agentes estatales. En síntesis, podemos cartografiar las distintas maneras en que el Estado ha contribuido a profundizar las diferencias y desigualdades socio-territoriales. Particularmente, en sociedades que se caracterizan por una acentuada desigualdad social, este enfoque nos permite observar cómo se naturaliza la desigualdad gracias al efecto duradero de la inscripción de la realidad en el espacio.

Estudiar el proceso de formación del Estado desde una perspectiva territorial permite reconstruir con información de campo e información de archivo (cartográfica, fotográfica y documental) las distintas maneras en que la presencia institucional y la aplicación de la política pública siguieron criterios altamente diferenciados e irregulares al interior de un mismo territorio, y entre los diferentes territorios del país. Esta perspectiva nos aporta nuevos elementos para problematizar, no solo los límites de la idea del Estado-nación, centralizadora y coherente, cuyos mecanismos de «gubernamentalidad» se extienden de arriba abajo y desde el centro a la periferia. Además, nos permite problematizar la concepción absoluta acerca del espacio nacional y la soberanía del Estado, a partir de la cual se buscó legitimar el despojo y la dominación de aquellos pueblos con una larga historia de defensa de sus territorios. Recordemos, nos dice Lefebvre (1975), que el espacio siempre ha sido político y estratégico. Si bien dicho espacio tiene un aspecto formal, neutro, indiferente con respecto a su contenido, es

precisamente porque ya ha sido ocupado, acondicionado, porque ya fue objeto de antiguas estrategias de poder de las que no siempre se consigue encontrar huellas.

Al leer los procesos de formación del Estado desde una escala territorial, tenemos presente que el territorio es una construcción social en la que diferentes actores compiten por su interpretación, apropiación y manejo en relaciones de desigualdad y desequilibrio de poder. Asimismo, tenemos presente que la pujanza, la modernidad o el desarrollo económico de un determinado territorio regularmente se construyen en relación de dependencia/diferenciación con otros territorios cuya marginalidad y pobreza se presentan como «naturales» o independientes al primero. Esto último se hace especialmente evidente cuando observamos las relaciones de dependencia que se establecen entre los territorios fértiles de las tierras bajas en donde se produce buena parte de los cultivos tropicales y los territorios de las tierras altas de montaña donde habita la mayoría de la población indígena que proveen con mano de obra mal remunerada a las plantaciones dedicadas a la agroexportación. Al tener presente estas relaciones de interacción y dependencia que se establecen al interior de un mismo territorio y/o entre territorios aparentemente independientes, podemos observar los mecanismos que reproducen, legitiman o naturalizan las desigualdades socio-espaciales y las distintas maneras en las que los actores tanto privados como estatales, intervienen en estas.

¿Por qué observar la relación Estado, economía y territorio desde el nororiente?

Escogí analizar el proceso de formación del Estado desde el nororiente (Zacapa, Chiquimula e Izabal) por varias razones: *La primera* porque desde el periodo colonial, el nororiente se configura como un territorio estratégico para el desarrollo de los circuitos de comercio transatlántico y transfronterizo del triángulo norte de Centroamérica. En el nororiente se construyeron las principales arterias por donde circulaban y continúan circulando las mercancías de importación y exportación, legales e ilegales, hacia el Atlántico Norte (Europa y Estados Unidos). Su posición estratégica en el circuito comercial más importante que ligó la economía de Guatemala, Honduras y El Salvador con el mercado mundial, contribuyó en buena medida a definir el papel que han desempeñado las élites nororientales en el proceso de formación del Estado en Guatemala.

La segunda razón por la cual elegir el nororiente como escala de análisis es que en esta región adquiere fuerza una sucesión de contiendas políticas que modificaron radicalmente el curso de la historia del Estado de Guatemala durante los siglos XIX y XX. Dos ejemplos paradigmáticos de este tipo de contienda son la rebelión campesina de la Montaña o el Movimiento de los Montañeses (1837-1838), dirigido por el emblemático caudillo Rafael Carrera, cuya alianza estratégica con los campesinos, las élites regionales del oriente, la jerarquía de la Iglesia y las élites patricias de ciudad de Guatemala le permitieron llegar al poder y echar por tierra los proyectos «modernizadores» de la primera generación de liberales representados en el gobierno de Mariano Gálvez. El segundo, el Movimiento de Liberación Nacional (aunque con menos legitimidad y arraigo popular que el primero), estuvo dirigido por el coronel Carlos Castillo Armas, quien logró moverse con astucia en una alianza cruzada entre el Gobierno y los empresarios norteamericanos con intereses e inversiones en Guatemala, la jerarquía de la Iglesia católica, el núcleo más conservador de la oligarquía, las élites regionales y un pequeño grupo de campesinos del nororiente (principalmente de Chiquimula). Esta alianza permitió a los dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional y a los asesores norteamericanos revertir los logros populares alcanzados durante los dos gobiernos revolucionarios (fundamentalmente, los concernientes a la Reforma Agraria y los derechos laborales de los trabajadores del campo). En su momento, y por distintas razones, ambos movimientos, de corte conservador, interrumpieron drásticamente el curso de la historia estatal y nacional. En este último caso, lo que nos interesa comprender es por qué las élites y un pequeño grupo de campesinos orientales participaron o simplemente simpatizaron con un movimiento de carácter oligárquico y pronorteamericano, qué intereses estaban en juego y cuál fue su relación con la economía y formas de entender lo político en el oriente.

La tercera razón para estudiar la formación del Estado de Guatemala desde el nororiente está relacionada con el surgimiento del primer movimiento guerrillero en el contexto de la Guerra Fría y la posterior ofensiva militar que reprimió, desplazó o silenció a aquellas expresiones de la izquierda política en la región. A partir de esta coyuntura histórica (años 60 y 70 del siglo XX) se fortaleció el dominio de la derecha política, el pensamiento anticomunista y el surgimiento de los principales grupos paramilitares en el nororiente. Esta prolongada historia de violencia contribuyó a definir el estereotipo del hombre nororiental como «macho», «guarura», «pistolero» o «matón». No obstante,

una mirada cuidadosa en aquellos procesos sociales que definieron la cultura de la violencia y la militarización que predominó en el nororiente a partir de los años 60, nos ayuda a deconstruir generalizaciones baratas que no logran ver la diversa composición de la población oriental, sus diferentes historias, repertorios culturales y trayectorias políticas.

La cuarta razón: desde el nororiente podemos observar las nuevas formas transnacionales de reordenamiento y gobernabilidad territorial. Más interesante aún, podemos observar las distintas maneras en que estas nuevas formas de intervención transnacional se empalman con historias más antiguas que fueron modelando, no solo al territorio nacional, sino a los medios de vida y a las estrategias políticas de los nororientales. Como veremos en el último capítulo de este libro, el nororiente está siendo interpretado actualmente por diversas empresas, agencias multilaterales y el Estado de Guatemala como un importante *corredor de la droga*, pero también como un *corredor transoceánico* (que vincule al Pacífico y al Atlántico mediante una megacarretera y línea férrea que atravesará el oriente de Guatemala, de sur a norte). De igual manera, está siendo visto como *un corredor seco* o *un corredor del hambre*. Dependiendo de qué empresa y/o institución transnacional o nacional interprete el territorio del nororiente, así será el tipo de relación que establezca con los actores locales y el tipo de acciones prioritarias que defina para éste. De este espacio observamos las nuevas lógicas de poder e intervención capitalista que están produciendo una nueva geografía del territorio nacional: por un lado, articulan los segmentos dinámicos de la sociedad, en tanto que aíslan o marginan a aquellos cuya población no tiene otro valor que el de su vida (Castells, 1999). Además, observamos los mecanismos a través de los cuales los cambios en la composición y la territorialización del capital están provocando que el Estado pierda soberanía, no solo en el manejo de sus territorios y recursos, sino en problemas tales como la macroeconomía, el medioambiente, el narcotráfico, el armamentismo y la violencia, los cuales se consideran cada vez más un asunto de política e intervención de organismos internacionales. En este caso, como en muchos otros, los procesos y prácticas características del Estado están siendo asumidos por instituciones transestatales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, AID o las diferentes instancias especializadas del sistema de la Organización de Naciones Unidas (PNUD, Pnuma, Unicef, etc.). Y las políticas y prácticas de estos organismos internacionales están produciendo efectos de Estado tan poderosos como

aquellos de los gobiernos nacionales, lo cual ha llevado a hablar del *Estado transnacional* (Blom y Stepputat, 2001).

La quinta, y muy importante razón, es que en el imaginario nacional se percibe al nororiente como un territorio «ladino», cuyas familias más antiguas reivindican ser descendientes de los primeros colonizadores españoles o de comerciantes y viajeros europeos que recorrían las rutas comerciales que conectaban la ciudad de Guatemala con el Atlántico. Esta idea acerca del origen español de la población ladina del nororiente, promovida por las élites de esta región y alguno de los intelectuales que estudió el proceso de colonización del oriente,[7] contribuyó a negar la historia de los pueblos indígenas en la región, silenció el despojo y la dominación que establecieron las élites regionales con la población ch'orti'. En el nororiente, como en muchos otros lugares de Guatemala, se vuelve difícil entender la violencia y anticomunismo practicados en la segunda mitad del siglo XX si no nos acercamos al racismo y a formas de dominación provinciana que establecieron las élites ladinas de la región frente a las comunidades indígenas cuyos territorios fueron replegados a las tierras agrestes de montaña.

1. Territorio ch'orti' y dominación colonial

> «En oriente no hay indígenas. Durante la colonia aquí hubo grandes asentamientos de españoles y en Estanzuela, Zacapa, hubo un fuerte asentamiento holandés. En el único lugar donde hay indígenas es en el departamento de Chiquimula, en un área cercana a la frontera con Honduras. Básicamente, para mí hay indígenas de la raza ch'orti' solo en Jocotán y Camotán, que son de los municipios que están a la par de Copán, porque el grupo ch'orti' tiene su capital en Copán, Honduras. Lo cierto es que tanto del lado de Honduras como de Chiquimula esa etnia indígena prácticamente ha desaparecido. El ambiente medio es más ladino y la absorbió. ¡Yo pago si me consiguen a alguien que hablé ch'orti'! Ya no hay nadie que hablé ch'orti', y la gente ya no se viste con traje típico ni cosas por el estilo [...] todo el mundo se viste normalmente […] Entonces, ya es una etnia indígena que ha sido absorbida por los ladinos» [E-Gt20-RP-02.2012].

La cita anterior expresa con elocuencia el pensamiento de la élite nororiental, para la cual los ch'orti' son «una raza en extinción», cuya historia y reclamos territoriales no tienen validez. Expresa también la hegemonía regional de aquellas familias ladinas que afirmaron su ascendencia española o europea

7 Ver los libros de Terga *El valle bañado de plata* y *La miel es abundante*, los cuales gozan de mucha popularidad en un segmento de la élite nororiental.

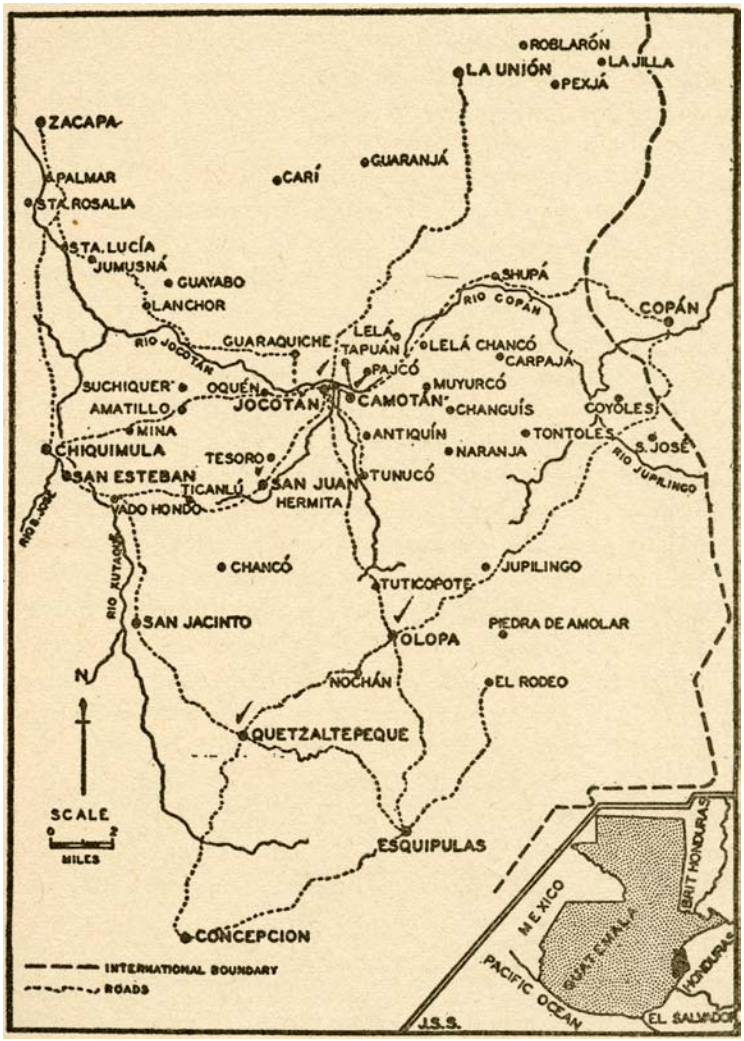
y ven con desprecio la raíz indígena del mestizaje que se vivió en oriente. Los acuciosos estudios de Wisdom (1961), Fedelman (1985), Metz (1995), Dary, Elias y Reyna (2002) y Palma Murga/Proyecto Ch'orti'/Horizont (2004), entre otros, documentan las distintas maneras en que la perspectiva hegemónica acerca de la *ladinidad* del oriente oscureció el largo proceso de dominación y despojo que sufrieron los pueblos indígenas de esta región. Sus estudios nos muestran un nororiente poblado por comunidades ch'orti' que a inicios del periodo republicano aún conservaban buena parte de sus tierras comunales y ejidales. Los títulos, autos de medida y composición de los ejidos y tierras del común de los pueblos ch'orti' dan prueba de que estos eran propietarios de buena parte de las tierras de Esquipulas, Quezaltepeque, San Juan Ermita, La Unión, San Juan Camotán, Santiago Jocotán, Olopa y San Jacinto. Incluso, la mayor parte de las tierras del actual centro histórico de Chiquimula están incluidas en el título de las 847 caballerías de tierras ejidales del pueblo ch'orti' de Chiquimula de la Sierra, registrado en 1737, amparado en 1798 y testimoniado en 1818 por el Juzgado Privativo de Tierras. Estos y muchos otros expedientes de archivo dan cuenta de las prolongadas disputas territoriales que hubo entre los pueblos ch'orti' y aquellos españoles y ladinos que se asentaron en su territorio[8]. En los años 30, cuando Charles Wisdom (1961) hizo su trabajo de campo, constató que la población ch'orti' vivía en las aldeas de los municipios de La Unión, Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, Olopa, Quezaltepeque y Copán. No obstante, las cabeceras municipales y pueblos que rodeaban el territorio ch'orti' ya estaban poblados por familias ladinas que ocupaban los espacios de poder en la región y paulatinamente habían desplazado a las comunidades indígenas hacia las tierras agrestes y periféricas de su antiguo territorio.

Los estudios lingüísticos que realizó el propio Wisdom en el nororiente de Guatemala muestran que el territorio ch'orti' se extendía a los departamentos de Chiquimula, Zacapa e Izabal (hasta el golfo Dulce). Luego, éste se extendía a los pueblos de Santa Rosa de Copán y Ocotepeque, en la República de Honduras, y hacia El Salvador. Por su parte, arqueólogos, etnólogos y lingüistas que hicieron su trabajo de campo en la primera mitad del siglo XX coinciden en plantear que el territorio ch'orti' fue el asiento de la civilización del antiguo imperio

8 Para profundizar en este tema es particularmente valioso el trabajo de identificación, paleografía y compendio de fuentes históricas sobre denuncias, medidas y remedidas, composiciones, titulaciones, usurpaciones, desmembraciones, litigios, tasaciones y remates de tierra del departamento de Chiquimula (años 1610-1946) que realizó el equipo de historiadores que trabajó en la colección *Esta Tierra es Nuestra*. Concretamente, en el tomo IV, el cual es una publicación conjunta entre el Proyecto Ch'orti' de la parroquia de Santiago Jocotán y Horizont 3000.

maya (Morley, [1920] 1972; Thompson [1938] 1959; Girard, 1949; Wisdom, 1961). Y que los ch'orti' pertenecen cultural y lingüísticamente a los grupos mayas meridionales y su historia prehispánica está estrechamente relacionada con la historia de los mayas de Yucatán, Belice, y la Guatemala septentrional (Thompson, ([1938] 1959); Wisdom, 1961).

Mapa No. 1
Área lingüística ch'orti'



Fuente: Wisdom, (1961:19).

En los siguientes apartados, nos acercaremos de forma general al lento y disputado proceso de reconfiguración del territorio ch'orti'. Observaremos las particularidades que adquiere la dominación colonial en el otrora extenso Corregimiento de Chiquimula de la Sierra; y pondremos especial atención en aquellas ideas y prácticas coloniales que dieron sentido a la desigualdad social que aún se vive en el nororiente de Guatemala en pleno siglo XXI.

2. La reorganización colonial del territorio: el corregimiento de Chiquimula de la Sierra

La conquista y dominación colonial del pueblo ch'orti' no fue una tarea fácil para los conquistadores. Recién concluida la primera expedición de conquista, los ch'orti' se sublevaron y negaron toda obediencia a los reyes españoles. Por tratarse de «indios rebeldes y levantiscos», narra Fuentes y Guzmán ([1690] 1933), los españoles se vieron obligados a enviar una segunda expedición conquistadora a esta región. Esta segunda empresa fue más breve y sangrienta que la primera, en tanto que las fuerzas conquistadoras enfrentaron la resistencia de los señores de Mictla, Jumay, Esquipulas y Copán[9].

Aun cuando oficialmente se dio por concluida la conquista y pacificación del nororiente de Guatemala a partir de 1530, la evidencias encontradas por historiadores colonialistas muestran que en 1535 el territorio ch'orti' continuaba siendo un territorio de guerra, y que su población se encontraba alzada o dispersa en las montañas de la región (Torres-Moss, 1997:18-19). La insubordinación ch'orti' impidió que las autoridades reales designadas para gobernar esta región concretaran el proceso de colonización; a los encomenderos les era imposible cobrar los tributos y muy pocos colonizadores veían factible establecerse allí. Según Torres-Moss (1997), el proceso de colonización propiamente dicho inició paulatinamente en el lapso de 1550 a 1580, cuando el corregimiento de Chiquimula de la Sierra ya se había conformado jurídica, política y administrativamente, y algunos vecinos de la ciudad de Guatemala y españoles recién llegados de la península escogieron aquellos lugares como área de asentamiento.

Durante esta primera fase de colonización, lo que hoy conocemos como el oriente de Guatemala se organizó en la alcaldía mayor de Amatique (Izabal); y

9 Según el cronista citado, esta expedición arrancó en 1529 y concluyó en 1530. Estuvo a cargo de Hernando de Chávez, Pedro de Amalín y Alonso de Larios, acompañados por un contingente de españoles, tlaxcaltecas, cholultecas y mexicas.

los corregimientos de Acasaguastlán (El Progreso y Zacapa); y Chiquimula de la Sierra (Chiquimula, Jalapa y el norte de Jutiapa) (Ramírez 1994). Hacia 1680 eran cuatro los ejes de concentración de la población indígena en el corregimiento de Chiquimula de la Sierra: Chiquimula, Quezaltepeque, Camotán y Esquipulas (Palma, 2004:vi). Para ese entonces, solo en el pueblo de Chiquimula de la Sierra vivían más de 450 familias de indios casados, 60 familias de españoles (y) 43 familias de mulatos y mestizos (ibíd. x).

A inicios del siglo XVIII, el corregimiento de Chiquimula estaba organizado en 20 pueblos: 1) Chiquimula de la Sierra, 2) San Joseph, 3) Pueblo de las Hermanitas (San Esteban y Santa Elena), 4) Santa Lucía, 5) Santiago Esquipulas, 6) San Francisco Quezaltepeque, 7) San Jacinto, 8) San Idelfonso Icpala (Ipala), 9) Santiago Jocotán, 10) San Juan Camotán, 11) San Juan Jocotán, 12) Asunción Mita, 13) Santa Catarina, 14) San Luis Xilotepeque, 15) Santa María Jalapa, 16) San Pedro Pínula, 17) Santiago Mataquescuintla, 18) San Cristóbal Jutiapa, 19) San Juan Yupiltepeque, 20) San José Acatempa (Ramírez, 1994:615).

En determinados periodos de su historia, el corregimiento de Chiquimula llegó a abarcar los actuales departamentos de Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Jalapa, El Progreso e Izabal. Uno de estos periodos fue en 1760, cuando se cumplió la Real Cédula del 30 de abril de 1758, en la que las autoridades reales ordenaban anexar el corregimiento de Acasaguastlán al de Chiquimula de la Sierra[10]. La anexión de estos corregimientos respondía a los cambios administrativos dispuestos en las reformas borbónicas, cuyo objetivo era crear una estructura de control burocrático más eficiente en la extracción de riquezas, la recaudación fiscal y el cobro del tributo indígena. A partir de esta anexión, el nuevo corregimiento llegó a administrar 30 pueblos, con 15,546 tributarios, que aportaban anualmente 47,596 tostones y medio real en tributos[11].

En ese entonces, el nororiente no era un territorio densamente poblado por comunidades indígenas (como sí lo eran las tierras altas centro y noroccidentales de Guatemala). No obstante, este sí fue un territorio estratégico para la extracción y producción de los principales artículos de exportación colonial: cacao, añil, ganado, azúcar y algodón; y la extracción de minerales como el hierro y la plata. Pero, sobre todo, era un territorio estratégico para el desarrollo del comercio y contrabando transatlántico. Esta combinación de factores llevó a

10 (AGCA, A1, leg. 6060, exp. 53887/Citado en Ramírez, 1995)
11 (AGCA, A1, leg. 4570, exp. 39331, fol. 7v./Citado en Ramírez, 1995)

que las formas de dominación colonial fueran más coercitivas y arbitrarias que en otros territorios del Reino de Guatemala. Los pueblos ch'orti' de la región continuamente denunciaron los excesos cometidos por las autoridades del corregimiento y se rebelaron frente a éstas de distintas maneras; la más frecuente fue el abandono de los «pueblos de indios» y su refugio en las montañas, lo cual dentro del pacto colonial constituía un acto de franca rebeldía, pues la primera y fundamental obligación de los indios era permanecer en sus pueblos (Martínez, 1991: 40).

El desplazamiento continuo de las comunidades ch'orti' a las montañas de la región implicó que el proceso de «reducción» y formación de los pueblos de indios en el nororiente fuera una tarea inconclusa durante todo el periodo colonial[12]. Por ejemplo, en los años 30 y 40 del siglo XVIII (dos siglos después de haber concluido «la conquista» y «pacificación» de este territorio) uno de los «méritos» que le reconocieron al corregidor de Chiquimula de la Sierra y Acasaguastlán, el capitán Joseph González de Rivera y Rancaño en su primer «Juicio de residencia», fue el haber logrado «la reducción de los indios dispersos en las montañas para que éstos viviesen en los poblados más próximos del corregimiento conforme las ordenanzas y reglamentos reales; quedando así garantizada la mano de obra y la recaudación del tributo»[13]. Casi un siglo más tarde (1809), la Real Audiencia de Guatemala emitió de nuevo una orden para que se «redujera» al partido de Jocotán a todos los indígenas de San Juan (San Juan Jocotán), Chacón y Copán que vivían *dispersos en las montañas* de la región y se les obligara trabajar en la reedificación de la iglesia (Torres, 1997:30).

Una de las consecuencias de la sobreexplotación colonial, la continua huida y desplazamiento de los ch'orti' hacia las montañas de la región fue la ocupación de sus mejores tierras en los valles por parte de españoles y ladinos que se asentaron en la región, estableciéndose con ello las bases de la marginación y precarización

12 La Reducción fue el proceso de concentración de los indígenas a un núcleo urbano (llamado «pueblo de indios»), cuyo objeto era facilitar el cobro de tributos, el abastecimiento de alimentos y servicios requeridos por los españoles, y la evangelización de los indígenas. A partir de 1551, tales núcleos de población fueron agrupados administrativamente en corregimientos o alcaldías, de acuerdo con su componente racial e importancia territorial (Ramírez, 1994:611).El principal punto de referencia del «pueblo de indios» era la plaza en cuyos costados se situaban la iglesia y la municipalidad o casa de cabildo. En las manzanas alrededor de la plaza se establecían los barrios. Los elementos que caracterizaron a los pueblos de indios fueron el cabildo indígena, las tierras comunales, las cajas de comunidad y la separación residencial de indígenas, españoles y ladinos (Diccionario Histórico y Biográfico de Guatemala, 2004:774-775).

13 Ver *Juicio de residencia del Corregidor González Rancaño* AGCA /Paleografía de Torres Moss, 1987:31.

de los medios de vida que aún enfrentan las comunidades ch'orti' del Nororiente de Guatemala, tal como veremos más adelante.

Los mecanismos de dominación empleados por las autoridades del corregimiento de Chiquimula de la Sierra, regularmente, buscaban dividir a los pueblos ch'orti': por un lado estaban aquellas autoridades indígenas dispuestas a colaborar con los oficiales reales y, por el otro, las autoridades y comunidades rebeldes que se movilizaban en contra de las injusticias del régimen, las arbitrariedades del corregidor y sus representantes. Estas divisiones se ahondaban cada vez que un sector de la comunidad huía a las montañas, y las autoridades del corregimiento decidían hacer pagar el tributo de los rebeldes a quienes se quedaban viviendo en las «reducciones». Esto último explica por qué a lo largo del periodo colonial los pueblos ch'orti' continuamente exigían a las autoridades del corregimiento que actualizaran el «padrón tributario», pues de lo contrario «los vivos y presentes» se veían obligados a pagar los tributos de «los muertos, los rebeldes y los ausentes»[14].

2.1 Reconfiguración del territorio ch'orti'

El proceso de migración de españoles y ladinos hacia nuevos espacios de colonización y su inserción en los pueblos indígenas del nororiente se intensificó por la crisis colonial que se vivió en el siglo XVII y primera mitad del XVIII, pero sobre todo por el terremoto de 1773 y las disposiciones impulsadas por las reformas borbónicas[15]. Particularmente, la política de composición y venta de tierra realenga o declarada como baldía que agilizó los trámites para la adquisición de tierras, y la re-organización de las milicias de españoles, ladinos y pardos que amplió los márgenes de poder de estos sectores de la población que buscaban establecerse o expandir sus propiedades en el territorio ch'orti'.

La presencia de españoles y ladinos en el territorio ch'orti' se hace evidente en el censo general de población realizado en 1778, en el cual se registra que la provincia de Chiquimula contaba con 52,423 habitantes[16], de éstos, 4,947 eran

14 (Ver AGCA. A1.24. Exp. 10,205. Leg. 1561. Fol.11/ Citado en Dary, Elías y Reyna, 1998:40)

15 Las *reformas borbónicas* fueron el más significativo esfuerzo de la Corona española para hacer más eficiente su administración e impulsar la modernización económica, política, eclesiástica y militar en todas sus colonias durante la segunda mitad del siglo XVIII. Las principales reformas administrativas buscaban centralizar el sistema imperial español creando una estructura de control burocrático que les permitiera hacer más eficiente la administración fiscal, la extracción de riquezas y la recaudación del tributo en los pueblos de indios.

16 Equivalente al 6.58% del total de población de la Audiencia de Guatemala, en la cual se registra un total de 797,214 habitantes.

españoles y 11,124, ladinos, siendo la cifra más alta de este sector de la población en toda la Audiencia de Guatemala (Lutz, 1995). Estas cifras son cruciales porque evidencian que a pesar de las prohibiciones explícitas respecto a que españoles y ladinos se asentaran en los «pueblos de indios» o en sus alrededores, en el nororiente ocurría lo contrario[17]. Es factible pensar que la flexibilidad de la Audiencia al permitir que estos ladinos se asentaran en los pueblos de indios del nororiente haya respondido a la necesidad colonial de reforzar el control y la seguridad de la principal ruta hacia el Atlántico en un momento de grandes cambios y crisis colonial, pues «estos pequeños núcleos ladinos ubicados en espacios indígenas le ofrecían lealtad política y obediencia militar a cambio de oportunidad económica» (Martínez, 1991:125)[18].

Lo cierto es que españoles y ladinos expandieron sus propiedades en los centros urbanos y los fértiles valles aluviales[19] de los ríos Copán, Torjá (en Pacrén), Carcaj (Los Planes, San Juan Ermita, Los Vados, Tierra Blanca) y Jupilinco –cuyo recorrido va tomando los nombres de río Camotán, Jocotán y río Grande de Zacapa, hasta llegar al punto de confluencia con el río Motagua–[20]; además, en los valles de la ciudad de Chiquimula, Quezaltepeque y Esquipulas (en Chiquimula), Santa Catarina (Temetapán) y Asunción Mita, Atescatempa y Acatempa (en Jutiapa).

Particularmente significativo fue el proceso de asentamiento de españoles y ladinos a lo largo del valle del Motagua, desde Gualán hasta San Agustín Acasaguastlán. La fundación de haciendas y pueblos en este territorio era

17 Durante todo el periodo colonial, nos recuerda el historiador Palma-Murga (2004), la Corona prohibió explícitamente a la población mestiza –pero también a la española– instalarse para vivir en los pueblos de indios o en sus cercanías. Esta prohibición tenía como propósito «proteger» a los indios de los eventuales abusos de que podrían ser objeto por parte de este sector de la población colonial. Pero lo que se perseguía era garantizar que no se distrajera a la población indígena de sus obligaciones fiscales para la Corona.

18 El periodo más intenso de formación de haciendas en los valles del corregimiento de Chiquimula-Acasaguastlán, según Margarita Ramírez (1995:378), se registra en el siglo XVII. En ese periodo se titularon cuando menos 56 propiedades: cinco estancias de ganado mayor, una estanzuela, seis haciendas y seis ejidos. De 1700 a 1750 se titularon solo terrenos de hasta 10 caballerías, de 1750 a 1800 se registraron otros de hasta 100 caballerías. En este periodo, la mayoría de los propietarios son hombres españoles y ladinos (solo seis mujeres registraron propiedades y solamente un indígena) Entre 1768 y 1770 había registradas 118 haciendas. Las tierras mejor cotizadas se encontraban en Chiquimula, Esquipulas, Jutiapa, Zacapa, Quezaltepeque y Gualán. (Ramírez, ibíd. 378).

19 *Los valles aluviales* son terrenos planos o ligeramente inclinados, formados con materiales arrastrados por efectos de la erosión de las partes altas y luego depositados en capas sucesivas. En el nororiente a estas áreas se las llama vegas o regadíos y tienen el mejor potencial agrícola. Solo el valle del río Jupilingo comprende aproximadamente 2,491 hectáreas (Dary, Elías y Reyna, 1998:82).

20 Ver Dary, Elías y Reyna, 1998:74.

ideal por diferentes razones: 1) la planicie de sus terrenos, la calidad de su clima tropical y su abundante agua permitía la producción de cacao, añil, caña de azúcar y ganado; 2) la navegación por el río Motagua y la accesibilidad al Camino Real, que conectaba los puertos del Atlántico con El Salvador, Honduras y la ciudad de Guatemala, impulsó el comercio regional y la formación de una élite provinciana que se situó como transportista e *intermediaria* en las redes del comercio transatlántico; 3) la calidez de su clima, variedad de su fauna y frondosidad de su vegetación permitió desarrollar diferentes medios de vida; 4) la existencia de comunidades indígenas a quienes los colonizadores sometieron a formas de trabajo forzado para llevar adelante sus empresas productivas. A pesar de la prohibición explícita de la Corona respecto a que ni encomenderos ni estancieros se sirvieran del trabajo indígena, la documentación de archivo de esta región da cuenta de los diferentes mecanismos a través de los cuales las autoridades del corregimiento y los potentados locales obligaron a los ch'orti' a hacer trabajos forzados en la carga, descarga y transporte de mercancías, la producción de las haciendas, trapiches de caña y obrajes del añil, la construcción y mantenimiento de caminos, la explotación minera y la construcción de edificios públicos y eclesiásticos.

El asentamiento de españoles en el oriente del país cambió la situación social y económica de la región. Los estancieros españoles introdujeron nuevos cultivos, como la caña de azúcar, el añil y la ganadería, la cual requería de grandes extensiones de tierra. Estas actividades productivas también pudieron realizarse gracias a que la Corona premió a conquistadores y primeros colonizadores con propiedades acorde con sus méritos: *caballerías para hombres de a caballo*, y *peonías para los que venían a pie* (Ramírez, 1994).

En su recorrido por el nororiente de Guatemala, a fines de los años 60 del siglo XVIII, Cortés y Larraz observó que las principales estancias en manos de españoles a lo largo del valle del Motagua medio eran: Patagalana, Estanzuela, Chispán, Río Hondo, San Juan, San Joseph, Trapiche, Estancia Grande, Tampú, Manzanotes, Lampura, La Pepesca, Guayabal, Porja, Tempisque, Choyoyo, El Arenal, El Encuentro, Biafra, Güiscoyol, El Mestizo, Taconaja. A medida que estas estancias coloniales se fueron heredando, vendiendo y desmembrando se convirtieron en aldeas en las que muchos de sus terratenientes medios y campesinos aún conservan los apellidos de los fundadores de la vieja hacienda colonial.

En 1955, cuando Richard Adams realizó el trabajo de campo de una de sus obras clásicas: *Cultura de los ladinos en Guatemala*, estableció que desde varias generaciones atrás, las familias de la clase alta oriental tenían bajo su control las tierras irrigadas de los valles, y que éstas reivindicaban ser descendientes directos de los primeros colonizadores del oriente (1956). Según Adams, en su afán de preservar su grupo étnico y los terrenos heredados durante la Colonia, estos «clanes hispánicos» optaron por casarse entre sus propios familiares como última medida de conservación. Este mismo fenómeno lo observó por todo el Motagua, especialmente en lugares como Río Hondo y Zacapa. Todavía en los años 80, Ricardo Terga (1982) observó que en estos municipios era frecuente escuchar combinaciones de apellidos como *Castañeda-Castañeda*, *Morales-Orellana, Orellana-Morales, Vargas y Vargas*, entre otros, que evocaban un patrón de relación endogámica el cual podía rastrearse hasta la Colonia (1982:8). Al grupo de familias que reivindican su ascendencia española, Richard Adams lo tipificó como «ladinos viejos»[21]. Actualmente, muchos de ellos son terratenientes medios y propietarios de los riegos de las vegas del Motagua.

En la encuesta que Adams realizó en los años 50, documentó que el riego más intensivo se encontraba en el corredor del Motagua medio, particularmente en el departamento de Zacapa, y en menor grado en el de El Progreso, Chiquimula y Baja Verapaz. Cabe aclarar que cuando se realizó la encuesta en mención aún no se había construido el exitoso proyecto de irrigación de La Fragua, de Zacapa, el cual aumentó significativamente la productividad de esas tierras. En los años 50, la propiedad en los llanos de La Fragua reflejaba una marcada diferencia social y de riqueza, y los propietarios de estas tierras constituían la élite regional del nororiente. En los últimos años, esta élite ha diversificado sus actividades económicas y comparte su poder y estatus con nuevos potentados locales.

En los años 50s, Adams observó que las comunidades ch'orti vivían en las tierras altas de ladera, las cuales eran en extremo pedregosas, con algún grado de erosión, o propensas a ella. «Tales tierras –explica Adams– no pueden labrarse

21 Cuando Adams se refiere a estas antiguas familias ladinas o («ladinos viejos» en sus términos) como familias ricas, se está refiriendo a un particular tipo de terrateniente medio que constituye la clase alta en la región del Motagua medio y bajo. No obstante, aclara Adams, esta clase alta no puede ser comparada con los grandes finqueros de la costa sur o la Alta Verapaz. Se trata de una clase alta regional, que probablemente existió desde el periodo colonial en los pueblos del nororiente, y que han conservado sus posesiones y con ellas su riqueza e influencia política a escala local, regional, incluso nacional. Adams determinó que la residencia local de algunos de estos terratenientes medios no era constante, pues éstos también tenían residencia en la capital del país y solían participar de una amplia red de influencia política.

con arado, y en ciertos casos, incluso presentan problemas para la labranza con azadón y se cultivan con macana» (1956:92).

A fines de los años 90, Dary, Elias y Reyna (1998) encontraron que el cultivo de las tierras altas en posesión de las comunidades ch'orti' estaban más allá de su capacidad de generación de servicios ecosistémicos, y que su proceso de degradación ambiental era acelerado. En esos años, la deforestación, la erosión y pérdida de la fertilidad natural de los suelos, la disminución de los acuíferos y la contaminación del agua ya presentaban un cuadro crítico para aquellas comunidades ch'orti' cuyos medios de vida dependían de dichas tierras. Actualmente, estas parcelas de ladera y montaña continúan siendo el principal activo natural del cual disponen las comunidades ch'orti' para la obtención de sus alimentos, combustible, materias primas para la actividad artesanal, forrajes para el ganado, plantas medicinales, agua para el consumo humano, así como una variedad de bienes y servicios que demuestran la estrecha vinculación entre los recursos naturales y las estrategias de sobrevivencia de estas comunidades indígenas (Dary, Elías y Reyna, 1998). Aun cuando el tema de la tierra y las formas de interacción ladino-indígena, parecieran no haber sido importantes en el Nororiente de Guatemala, el examen acucioso de la historia de esta región pone de manifiesto, no solo el racismo, sino la conflictividad interétnica y la disputa por el territorio que han definido el curso de su historia presente. Como veremos más adelante, esta conflictividad se hace explicita a partir de las diferentes posturas políticas que asumen los actores en contienda durante los períodos de la Revolución de Octubre (1944-1954) y la Contra-revolución.

Fotografía No. 1
Niña ch'orti' de las Tierras Altas



Fuente: Trabajo de campo Matilde González (2012).

Fotografía No. 2
Tierras Altas del Territorio Ch'orti'



Fuente: Trabajo de campo Matilde González (2012).

Fotografía No. 3
Tierras Altas del Territorio Ch'orti'



Fuente: Trabajo de campo Matilde González (2012).

3. El nororiente y el comercio transatlántico y transfronterizo

La historia económica y la formación del Estado en el nororiente, también están estrechamente ligadas a la historia de las rutas del comercio por donde circulaban y continúan circulando las mercancías entre los puertos en el Atlántico, la ciudad capital de Guatemala y/o las ciudades fronterizas de Honduras y El Salvador. Desde los años tempranos de la Colonia, las autoridades y un pequeño pero influyente grupo de comerciantes españoles y ladinos que se establecieron en los corregimientos de Chiquimula de la Sierra y Acasaguastlán jugaron un papel estratégico en el tráfico de mercancías a través del Camino Real, que comunicaba a Santiago de los Caballeros con los principales puertos situados en la costa atlántica de Honduras y Guatemala. De hecho, desde esos primeros años las élites nororientales se sitúan como intermediarios en las redes del comercio regional y se especializan como transportistas de mercancías.

Desde los corregidores hasta los lugartenientes del corregimiento de Chiquimula participaban activamente en las redes de comercio del cacao, añil y algodón[22].

22 Aun cuando la legislación indiana prohibía explícitamente que los funcionarios públicos y sus colaboradores más cercanos se dedicaran al comercio, en la práctica esta prohibición ponía de manifiesto lo que ocurría en la administración colonial.

De igual modo, los comerciantes más activos de la región ocupaban espacios importantes en la administración colonial, al tiempo que se dedicaban a sus empresas lucrativas. En esta región, los puestos públicos más apetecidos solían ser aquellos relacionados con la fiscalía y la administración de puertos y aduanas. Estos puestos eran particularmente importantes, en tanto que los comerciantes más influyentes de la ciudad de Guatemala hacían sus transacciones comerciales a través de toda *una red de intermediarios* situados en los puntos estratégicos del Camino Real, en los puertos del Atlántico y en los principales pueblos de las alcaldías mayores y corregimientos.

El Camino Real atravesaba todo el nororiente y comunicaba a Santiago de los Caballeros de Guatemala con el río Motagua y el puerto de San Antonio Las Bodegas o Bodegas del golfo Dulce; luego, a Santo Tomás de Castilla o alguno de los puertos situados en la bahía de Omoa en Honduras (puerto Caballos o puerto Cortés). Durante los siglos XVII y XVIII, este camino fue la ruta más importante del comercio colonial; por allí transitaban los productos de importación y exportación desde y hacia España. Distaba de Santiago de Guatemala tan solo 60 leguas, lo que hacía que este camino fuera uno de los más frecuentados, sobre todo en los meses de julio, agosto y septiembre, cuando llegaban dos o tres barcos a la costa atlántica (Ramírez, 1994:612). Y aun cuando no arribara ningún barco español, esta fue una ruta estratégica para las redes de contrabando que se establecieron entre la Audiencia de Guatemala y las otras potencias imperiales (Inglaterra, Holanda y Francia) que controlaban el tráfico de mercancías desde las islas del Caribe a través del sistema de «barcos de arribada rápida» y/o barcos piratas.

Los barcos que se dirigían a Guatemala eran descargados en uno de los puertos ubicados en la bahía de Omoa, o directamente en Santo Tomás de Castilla. De allí se iban al puerto de las Bodegas del golfo Dulce en pequeñas barcazas; al llegar a un determinado punto, la mercadería iba por tierra a las orillas del Motagua, de allí de nuevo emprendía el viaje hasta el puerto fluvial de Gualán en unas barcas llamadas *curros* o piraguas. En Gualán desembarcaban los pasajeros y comerciantes con su equipaje y mercancías. El siguiente trecho se hacía en mula, ya fuera a Santiago de Guatemala –siguiendo la ruta Zacapa, Vega de Cobán, Acasaguastlán y Ciudad Vieja–, o bien la ruta de Zacapa, Chiquimula, Honduras[23] o El Salvador. La mercadería se transportaba en mulas, mientras las personas más

23 Dependiendo del estado en que estuvieran los caminos, las mercancías que venían o iban a los puertos hondureños situados en la bahía de Omoa se transportaban por el Camino Real de Guatemala.

importantes (mercaderes, autoridades, eclesiásticos y otros) viajaban en bestias de silla o en sillas de manos cargadas por indios de los pueblos situados en el trayecto, quienes estaban obligados a prestar tal servicio (Cabezas, 1995:309).

Con el tiempo, españoles y ladinos radicados en Chiquimula, Zacapa y Gualán asumieron un papel preponderante como *intermediarios en el comercio, transporte y seguridad de las mercancías* que circulaban entre la Audiencia de Guatemala y España. Las autoridades y comerciantes orientales controlaban la seguridad y mantenimiento de la ruta, las aduanas, el transporte y el hospedaje de comerciantes y viajeros. Los comerciantes más acaudalados de la región eran propietarios de grandes patachos de mulas y convirtieron las llanuras de Zacapa y Acasagustlán en haciendas de ganado vacuno, caballar y mular. En algunas de las casas de las haciendas se servía alimentación a los viajeros, comerciantes, oficiales del Gobierno y del Ejército que transitaban por el Camino Real, mientras que en los pueblos de Zacapa, Gualán, San Cristóbal y San Agustín Acasaguastlán se abrieron posadas (Terga, 1982). Don Enrique Paz, miembro de una de las familias influyentes de Gualán, al narrar la historia del nororiente, argumenta que su pueblo ocupó un lugar muy importante en los flujos del comercio colonial.

> «El hecho más importante en la historia de Gualán –afirma don Quique Paz– es que fuimos un puerto fluvial. Otro hecho importante que derivó en muchas otras cosas […] es que en este pueblo se asentaron familias comerciantes de diferentes nacionalidades, a esa razón se debe la mezcla que tuvimos. Ellos llegaron a Gualán en las barcazas que transitaban el río Motagua para abastecerse de las mercaderías que se conseguían en el puerto fluvial que estaba en la confluencia del río Riachuelo y el río Motagua y con el tiempo se fueron estableciendo en esta región» (E-GZ-EP- 30-06-2011).

> «Según la cantidad de embarcaciones que vinieran a Gualán, en el desembarcadero de Gualán habían (sic) parqueados uno o dos patachos de entre 60 y hasta 70 mulas equipadas para jalar la mercadería que llegaba del Atlántico a la ciudad capital por caminos y extravíos. En las mulas se jalaba la mercadería y frutas diversas que venían de otros países, incluso telas, joyas, zapatos para las mujeres y cosas modernas. Los comerciantes tenían lugares donde se parqueaban y se detenían en su trayecto para ir entregando la mercadería, la correspondencia y la encomienda. De aquí de Gualán salían por tierra hasta la Antigua Guatemala. Gualán fue un puerto fluvial, hasta por lo menos ocho meses después de que entrara el ferrocarril» (E-GZ-EP- 30-06-2011)[24].

24 El texto citado hace parte de la entrevista de un hombre de 87 años, actual propietario de una gasolinera en la Ruta al Atlántico. Su familia era propietaria de una hacienda de ganado y de uno de los almacenes más acreditados del pueblo. En los años 60, él instaló la primera línea de transporte extra urbano Gualán-Ciudad Guatemala.

Más que un asentamiento propiamente de extranjeros, nos explica Dary (1995), San Miguel Gualán fue un pueblo de particular interés comercial porque en él confluyeron pobladores de varias culturas: indígenas ch'orti', españoles, ladinos, negros y extranjeros de diversas nacionalidades que se asentaron en la región. Fue la confluencia de estos diferentes grupos de población lo que hizo posible el dinamismo comercial que se vivía en este puerto fluvial durante el periodo colonial y primer siglo del periodo republicano.

Situado sobre las márgenes del río Motagua, Gualán era un paso obligado del tránsito de personas y mercancías en dirección a las Bodegas del golfo Dulce, el puerto de Santo Tomás de Castilla, Omoa o puerto Caballos. También, este puerto fluvial fue paso obligado del comercio de contrabando que autoridades y comerciantes de Guatemala establecieron con los ingleses que manejaban el comercio de la costa atlántica desde la Mosquitia, Roatán y Honduras Británica (Belice). En el puerto fluvial gualanteco existía un *receptor fiscal* para controlar las mercancías que se importaban y se exportaban (Dary, 1995:2). La función de esta receptoría fiscal era regular el cobro de impuestos de aquellas mercancías que entraban y salían por el Atlántico. En la práctica, ésta solía ser administrada con laxitud por los mismos comerciantes de la región y/o algún representante de los comerciantes de la ciudad de Guatemala.

Entre las familias orientales que concentraron el monopolio del comercio y el transporte de carga en el nororiente estuvieron los Cordón y los Porta. «Los Cordones», como les decían los orientales, se dedicaban exclusivamente al negocio de transporte de mercaderías y pasajeros de Zacapa hasta Santiago con sus propias bestias (Terga, 1982:62). Mientras que la familia Porta era de inmigrantes de origen italiano/catalán que se radicó en Gualán y luego se trasladó a Chiquimula y desde allí controlaba el comercio transfronterizo Guatemala/Honduras y El Salvador. Los Porta eran dueños de una de las flotillas de barcazas (curros) que transportaban las mercancías desde las Bodegas del golfo Dulce al puerto fluvial de Gualán. En Gualán, los Porta tenían estacionado su propio patacho de mulas para transportar la mercadería hacia Santiago de los Caballeros, o hacia Chiquimula de la Sierra y los pueblos vecinos de Honduras o El Salvador. Uno de los descendientes de la familia Porta nos explica:

> «Mi bisabuelo era comerciante. Un ascendiente de él puso una línea de barquitos desde el golfo Dulce a Gualán, cuando el Motagua todavía era un puerto fluvial. Mi bisabuelo heredó ese comercio. Él traía la mercadería en barquitos

> pequeños. Me imagino que un barco grande traía la mercadería desde España al golfo y de allí la jalaban en pequeños barquitos hasta Gualán. Ahí descargaban la mercadería y parte de esa mercadería se iba a Guatemala y la otra parte a Chiquimula, y seguía para El Salvador o para Honduras. Mi bisabuelo tenía un patacho de mil mulas; entonces, a mi abuelo le tocaba manejar esas mulas por el Camino Real, porque en mulas se venía de Gualán a la capital. Él fue uno de los hombres más ricos de Guatemala. En todo el oriente de la república él era quien acuñaba la moneda con su firma, porque en ese tiempo no había un Banco Central, ni emisores de moneda en Guatemala. En oriente la moneda que circulaba era la que él acuñaba con su firma» (E-CH-RPE/2012).

Aun cuando el transporte de mercaderías a lugares distantes se hacía, o «debía hacer», en patachos o recuas de mulas, cuando se trataba de distancias cortas era frecuente el empleo de cargadores indígenas. Esta práctica se inició desde el momento en que se abrió la primera brecha del Camino Real, y siempre fue motivo de protesta por parte de los pueblos indígenas, también de prohibición por parte de la Corona, que buscaba regular el usufructo colonial del trabajo indígena[25]. No obstante, esta como muchas otras prohibiciones impuestas al comercio raras veces fue acatada por las mismas autoridades del corregimiento, pues eran estas mismas quienes formaban las cuadrillas de trabajadores forzados para que los indígenas cargaran y descargaran los barcos y transportaran buena parte de las mercancías hasta sus lugares de destino. Durante el periodo republicano, esta forma de trabajo forzoso continuó vigente hasta que se introdujo el ferrocarril en las primeras décadas del siglo XX. Esto significó que a la par de las recuas de mulas siempre caminaba un buen número de cargadores indígenas, quienes estaban sujetos a la arbitrariedad de los comerciantes y contratistas.

Las narraciones de viaje de inmigrantes, viajeros y comerciantes que transitaron por la ruta desde y hacia los puertos en el Atlántico en el siglo XIX abundan en detalles acerca de los mecanismos que usaron para hacerse de un grupo de cargadores indígenas y del tipo de bultos, cajones y equipaje que éstos debían cargar. Por su parte, las quejas de los indígenas ch'orti' frente a la explotación y abuso que sufrían en las rutas hacia los puertos del Atlántico fueron continuas en todo el periodo colonial, y mucho tiempo después.

25 Una de las primeras prohibiciones se decretó el 23 de noviembre de 1607 cuando, por Real Auto, las autoridades del *Reyno* ordenaron que en ninguna parte del distrito de la Real Audiencia de Guatemala se permitían «cargas en los indios con ningún género de carga, de ninguna persona, de ningún Estado, calidad o condición, ni eclesiásticas que éstas fueran» A.G.D.C.A. A1.39. Leg. 1751. Fol. 93/Rubio Sánchez, 1973:170.

El auge del comercio y contrabando del añil

A fines del siglo XVIII, el comercio del añil se convirtió en el principal vínculo comercial con España e Inglaterra y la principal fuente de ingresos para la élite de la ciudad de Guatemala y sus intermediaros locales. Es más, argumenta Lindo (1993), la comercialización del añil sirvió de base para que un pequeño grupo de comerciantes guatemaltecos ejerciera el control sobre gran parte de las relaciones mercantiles a lo largo del territorio colonial que abarcaba la Audiencia de Guatemala, pues les permitió situarse como exportadores del tinte, importadores de manufacturas europeas y *prestamistas-habilitadores*. Gracias a sus conexiones con España, ellos tenían los contactos del comercio con Europa (particularmente con los comerciantes de Cádiz); además, su capacidad de otorgar crédito les permitía *enganchar* o *habilitar* las cosechas de los pequeños y medianos productores y controlar los puntos neurálgicos de la distribución interna a través del Consulado de Comercio[26]. Durante los años de auge del añil se decía que la mayoría de agricultores permanecían «reducidos a su vieja y miserable existencia, hipotecados por más que su valor intrínseco». La mayor parte de las utilidades del añil les quedaban a los guatemaltecos y a sus aliados mercantiles de Cádiz[27]. En estas circunstancias, la economía de la ciudad de Guatemala emergió de su pasado colonial, *no* como productora, sino como un *centro mercantil* que pretendía sostener el monopolio del comercio del añil (Torres-Rivas, 1989:18). Esto último exigió que el Gobierno de Guatemala prestara atención a su inadecuada infraestructura de transporte e iniciara la construcción de caminos y puertos. A partir de 1794, el Consulado de Comercio se dedicó a mejorar y darle mantenimiento al Camino Real hacia al Atlántico; fundamentalmente, concentró sus esfuerzos en aquellos puntos de dificultad crónica, como el tramo de la Montaña del Mico y los cruces de los ríos Motagua, Las Vacas y Los Plátanos[28]. Al mismo tiempo, impulsó la construcción de un puerto en el golfo Dulce, que estuviera protegido por el Castillo de San Felipe, el cual dominaba la salida del río Dulce al Caribe. En 1804, el Consulado se propuso

26 El Consulado de Comercio era la institución que agrupaba a los grandes comerciantes del Reino de Guatemala desde 1793. Tenía como finalidad estimular la producción, promover el comercio e impartir justicia en los diferendos mercantiles. No obstante, dicho Consulado se caracterizó por defender los intereses de los potentados guatemaltecos; ello causó que los «añileros» salvadoreños, así como los ganaderos hondureños y nicaragüenses, invocaran constantemente los principios del derecho natural, denunciaran un trato comercial injusto y buscaran mecanismos alternativos que les permitieran colocar sus productos en España sin pasar por la mediación de sus homólogos guatemaltecos (*Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala,* 2004).

27 A.G.I., Guatemala 669, Matias de Gálvez, 16/10/1783; Pedro Molina, Escritos, 2.211.12/Wortman (1991).

28 (A.G.C.A., A1, leg. 223, exp. 5251/ citado en Woodward, 1995:31).

reconstruir el puerto y el pueblo de Izabal en la ribera sur del lago, y abrir un camino aceptable desde ese lugar hasta la capital (Woodward, 1995:319).

La rigidez del sistema mercantil español y el desinterés por el comercio con las provincias centroamericanas incentivó la corrupción. No eran pocos los productores del añil, los comerciantes y oficiales que estuvieron dispuestos a asumir el riesgo de evadir impuestos o establecer transacciones con las otras potencias que manejaban las redes del comercio ilegal en el territorio español. Particularmente durante el periodo de la depresión económica, España no podía surtir las mercaderías que demandaba el creciente mercado de sus colonias. Peor aún, los altos gravámenes que cobraban las autoridades españolas en América encarecían todos aquellos artículos que entraban y salían por la vía legal; estos eran costos que los contrabandistas extranjeros no pagaban, por lo que sus productos siempre fueron más variados, baratos y codiciados (Cerda-Crespo, 2008). Según los cálculos de Wortman (1991), el costo de los gravámenes que el monopolio español impuso a los productos extranjeros, principalmente a los bienes ingleses, podía encarecer su precio de importación en 65 o 70%. Estos costos, sin duda, hicieron que el tráfico de contrabando fuera mucho más atractivo y rentable que el comercio legal. Por si fuera poco, los ingleses llegaron a vender a crédito, lo que facilitó enormemente las transacciones comerciales. Aun así, el comercio ilegal tenía sus riesgos y también sus costos adicionales. Se tenía que sobornar a los funcionarios españoles, quienes luego podrían incautar de todas formas su valioso embarque (Wortman, 1991:204).

A partir del siglo XVIII se produjo un notable incremento de aquellas transacciones comerciales –que la legislación indiana calificaba como «ilícitas»– entre las provincias de Centroamérica y las más agresivas y avanzadas naciones del noreste de Europa, principalmente con Inglaterra, Holanda y Francia, cuyas posiciones coloniales se ubicaban en las islas del Caribe, principalmente en Jamaica, Santo Domingo y más tarde Utila y Roatán (Honduras).

Las redes de comercio ilícito contribuyeron decisivamente, no solo al despegue económico del Reino de Guatemala, sino a la formación de importantes espacios de autonomía provinciana. Historiadores del comercio colonial (Rubio, 1973; Cabezas, 1995) registraron que entre 1798 y 1802 las exportaciones de añil y plata acuñada vía el golfo Dulce hacia España se incrementaron significativamente. Solo en esos años se registró la importación de 22,241 zurrones de añil por los circuitos del comercio legal; no obstante, aclaran, a esta cifra habría que añadir

por lo menos una cantidad semejante que fue sacada por los circuitos paralelos del contrabando con Inglaterra. Estos otros probables 22,000 zurrones de añil a los que hacen referencia los historiadores citados ilustran la magnitud que adquirió el comercio ilegal en los espacios periféricos de la Audiencia de Guatemala, en donde la Corona española restringió y normó con rigidez los flujos del comercio colonial, pero, al mismo tiempo, descuidó la relación comercial por extensos periodos de tiempo. El acucioso trabajo de Murdo MacLeod (1980) ilustra con elocuencia y detalle las distintas maneras en que el contrabando directo con extranjeros se había convertido en una de las fuentes principales de ingresos, si no la más importante, para los funcionarios centroamericanos de todos los niveles. El Gobierno español estaba consciente de ello y conocía los nombres de los individuos implicados, pero poco podía hacer cuando se protegían entre ellos MacLeod (1980:311). Los casos analizados por MacLeod ofrecen abundante evidencia de que entre los funcionarios implicados en los circuitos del contrabando figuraban la guardia del Castillo de San Felipe en el golfo Dulce y su comandante, además del presidente y oidores de la Real Audiencia y los corregidores de Zacapa y Chiquimula[29].

En Centroamérica, y particularmente en los circuitos del comercio nororiental que vinculan a Guatemala con Honduras y El Salvador, es difícil comprender los flujos del comercio legal que se efectuaban a través del golfo Dulce y los puertos en la bahía de Honduras sin abordar su contracara: el comercio ilegal (el contrabando, el robo de mercancías y la corrupción). Historiadores como Hall y Pérez-Brignoli (2003:132) argumentan que si el flujo del comercio legal y la navegación de la Audiencia de Guatemala con el imperio español aún es muy poco conocido, es precisamente porque el contrabando y las transacciones fraudulentas eran muy comunes entre los comerciantes de la región; no obstante, éstas aún continúan en la sombra. Sobre todo porque hasta muy recientemente el énfasis de los estudios del comercio colonial en Centroamérica se realizaba en la legislación indiana que buscaba «regular» el comercio en la región, y se descuidó observar cómo operaba éste en la cotidianidad de aquellos «deshabitados» e «insalubres» puertos de la costa atlántica de Honduras y Guatemala. Asimismo, se centró la atención en las élites patricias de Santiago de los Caballeros y se oscureció el papel decisivo que desempeñaban los comerciantes, transportistas y funcionarios provincianos que se situaron como *intermediarios* entre aquellos

29 Para más detalles ver MacLeod (1980) *Historia socio-económica de la América Central española 1520-1720*, particularmente el capítulo XX, «El crecimiento de una nueva solución: el auge del contrabando», páginas 294-315.

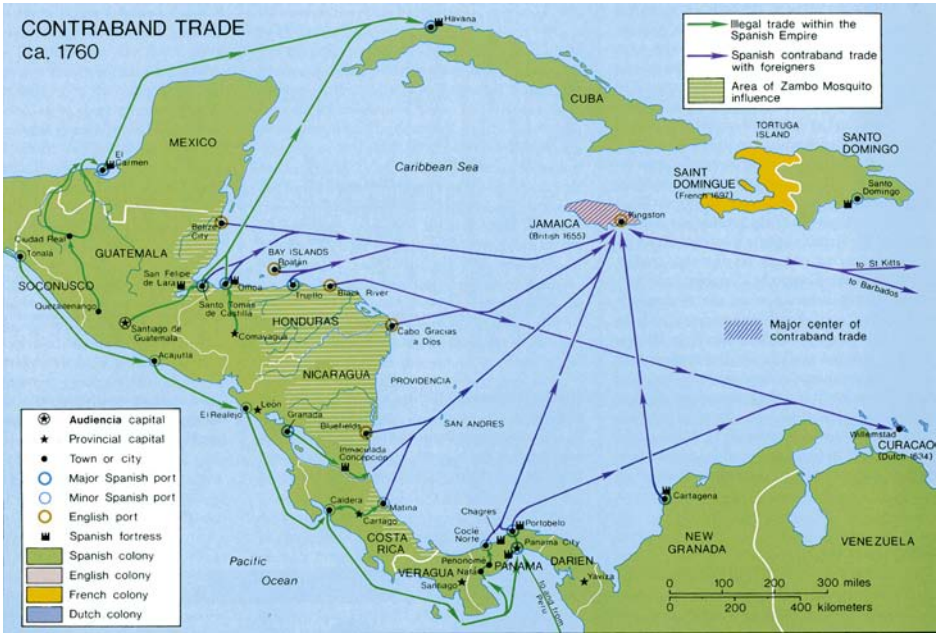
comerciantes extranjeros («traficantes», «piratas» o «corsarios») que arribaban a los puertos de la costa atlántica y los comerciantes cuyas prestigiosas casas comerciales se situaban en la ciudad de Guatemala.

La existencia del fraude y el contrabando en las márgenes del imperio español no solo eran muy conocidos sino ampliamente aceptados durante el periodo colonial. Investigaciones recientes sobre el comercio en Centroamérica sugieren que la magnitud que alcanzó el comercio ilegal en la región fue tal que daría pie a una radical reinterpretación de la historia económica en la región (Hall y Pérez-Brignoli, 2003:132). Las ventajas del comercio ilegal eran muchas en comparación con las poquísimas ganancias del comercio con el imperio español, cuyas restricciones situaban en desventaja a los comerciantes de las provincias de Centroamérica. Además, en los alejados territorios de la costa atlántica, los controles efectivos solían ser muy pocos, en tanto que la mayoría de los funcionarios de puertos y aduanas participaban activamente de las regalías del comercio ilícito. En términos generales, los comerciantes de las provincias preferían tratar directamente con los navíos extranjeros, evitando así la intermediación de los comerciantes radicados en la capital de la Audiencia. Una vez las potencias europeas adquirieron sus propias colonias en el Caribe, ellos controlaban o interceptaban una creciente proporción del comercio español con América (ibíd. 2003:133). La colonia holandesa de Curaçao y la colonia inglesa de Jamaica se convirtieron en los principales centros del contrabando con América Central. Posteriormente, los ingleses consolidaron sus posiciones en Utila, Roatán, Belice y la Mosquitia, y desde allí impulsaron sus empresas comerciales.

Los barcos ingleses arribaban regularmente con vino, coñac y municiones; y cargaban productos locales, navegaban al norte para cortar palo de Campeche y luego regresaban a Jamaica. Esta isla es, de hecho, la más cercana de las Antillas mayores al golfo de Honduras. Mercancías tales como tintes, zarzaparrilla, cacao o palo de Campeche podían ser transportadas en embarcaciones pequeñas y con escasa tripulación. Los bienes podían almacenarse en Jamaica, estación de paso y centro comercial, hasta que barcos rápidos pudieran llevarlos a los países del noroccidente europeo. Jamaica también contribuyó a disminuir los riesgos que corría el contrabando destinado a la América Central y a cualquier otra parte de las posesiones inglesas en el Caribe. Las mercancías destinadas a la venta en la América española podían ser almacenadas masivamente en Jamaica hasta que

se necesitaran en los diversos mercados. Al mismo tiempo, funcionaba como un escalón a los tan anhelados mercados europeos de Ámsterdam y Londres (MacLeod, 1980:309). En un inicio, Roatán, en la bahía de Honduras, se utilizaba como un depósito local y puerto de reparaciones, además, contaba con una colonia inglesa permanente, al igual que Belice y el cabo de Gracias a Dios. En los puertos de Honduras, el golfo Dulce y el puerto fluvial de Gualán, el mercado estaba repleto de mercancías europeas contrabandeadas procedentes de Jamaica. Posteriormente se fortaleció la posición de Belice en relación con el contrabando con Centroamérica (ver el siguiente mapa en el que Hall y Pérez-Brignoli (2003) representan con elocuencia el dinamismo de las redes del comercio ilegal).

Mapa No. 2
Fraud and Contraband



Fuente: Hall y Pérez-Brignoli (2003:176).

Para los comerciantes provincianos de Honduras y del nororiente de Guatemala el contrabando con los navíos extranjeros de «arribada maliciosa» se convirtió en el método más rápido y barato para obtener mercancías importadas y exportar sus productos. Era frecuente que los barcos de origen extranjero acusaran

desperfectos causados por las tormentas en el mar, carencia de agua o comida, y se involucraran con la población hasta la llegada de la mercadería en cuestión. También era frecuente que los comerciantes provincianos llevaran por tierra sus productos a lo largo de la costa de las colonias españolas hasta llegar a los puertos de las colonias inglesas en Belice, Roatán, Black River, cabo de Gracias a Dios y Bluefields. Además, había contrabandistas que salían de Centroamérica en pequeños botes en los que trasladaban las mercaderías a los grandes navíos en Jamaica o Curaçao que harían la travesía por el Atlántico (Hall y Pérez-Brignoli, 2003:133).

Cuando la producción de índigo se expandió por Centroamérica en el último cuarto del siglo XVIII, ello ocurrió como respuesta a la creciente demanda de tinturas en el noreste de Europa, particularmente en la industria textil inglesa. Buena parte de esta demanda fue abastecida a través de los canales establecidos por el contrabando. El fraude y el contrabando envolvieron a gente de todos los niveles en la sociedad centroamericana, desde los comerciantes más prestigiosos y los presidentes de la audiencia hasta los corregidores, recolectores de impuestos, oficiales de aduana, comerciantes, transportistas y arrieros que se ubicaban en la ruta hacia el Atlántico. Todos buscaban alcanzar alguna ganancia de la expansión de las oportunidades comerciales. En los puntos neurálgicos de esta ruta (puertos, ríos, aduanas, garitas de registro) el contrabando fluía sin tropiezos a través de un organizado sistema de comercio paralelo, ampliamente aceptado y extendido a través de los mismos circuitos del comercio legal.

El comercio de contrabando permaneció, en apariencia, como una característica importante del comercio centroamericano durante el periodo que estudiamos. Con las costas del Caribe escasamente pobladas, sin buenos caminos y vías de comunicación, puertos, facilidades de almacenaje y empleados de confianza, todos los esfuerzos de la Corona por formular un nuevo sistema de regulación comercial se venían abajo con empleados acostumbrados a tranzar con comerciantes y exportadores experimentados en la evasión de las restricciones mercantilistas. A pesar de los esfuerzos bienintencionados de los nuevos gobiernos, la administración de aduanas no era solamente ineficaz e inadecuada en su trabajo, sino también caprichosa y corrupta a nivel local (Naylor, 1988:59).

Aun cuando la documentación oficial sugiere que el comercio ilícito, terrestre o marítimo, era perseguido, pues constituía una evasión de impuestos, historiadoras como Beatriz Palomo (1995) han documentado varios casos en los que

funcionarios reales estaban implicados en el contrabando de esclavos, mercancías y armas, particularmente aquellos que administraban los puertos situados en la bahía de Omoa y el golfo Dulce. En estos lugares era muy difícil trazar una línea divisoria entre el comercio legal y el tráfico clandestino. Este último siempre estuvo vinculado con la piratería y tenía motivaciones tanto económicas como políticas (Palomo, 1995:137). Los barcos de «arribada» o de «entrada maliciosa» abundaron en el transcurso de la época colonial y proveyeron de bienes necesarios para la subsistencia. Las personas en puestos claves, como los funcionarios de puerto Caballos, Omoa, golfo Dulce y Gualán tenían, no solo la oportunidad, sino los medios a su disposición para beneficiarse del contrabando.

En el siglo XVIII, el contrabando alcanzó su mayor apogeo, según se deduce de un informe del capitán general de Guatemala, quien afirmó en 1737 que «los puertos de la costa atlántica solamente servían como abrigo para barcos extranjeros y que los habitantes de todo el territorio, incluyendo al clero y a los altos funcionarios del gobierno, estaban interesados tan solo en el comercio ilícito»[30]. Lo más irónico de todo esto es que las redes del comercio ilícito convirtieron los fuertes construidos con fines de defensa (Omoa y San Felipe), en lugares de almacenaje de las mercancías contrabandeadas; mientras que las autoridades milicianas encargadas de impedir la llegada y/o repeler el ataque de barcos extranjeros hacían parte de este lucrativo negocio.

Las redes del comercio inglés de contrabando tenían motivos políticos así como económicos. Dependiendo del gobierno inglés que estuviera en el poder, y del gobernador de Jamaica, las políticas más o menos deliberadas se destinaban a atraer más comercio y a destruir la hegemonía española en el Caribe (Wortman, 1991:209). Durante la Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748), el gobernador de Jamaica envió al agente Robert Hodgson a llevar a cabo ambas políticas[31]. Hodgson arribó a esta región en el mismo periodo que el ingeniero español Luis

30 Carta del presidente Pedro de Rivera al rey, citada por MacLeod (1980:314 y 417).

31 Regularmente, esta guerra es rememorada dentro del repertorio de leyendas piratas a lo largo de la costa atlántica del istmo centroamericano. No obstante, ésta constituye un punto culminante del conflicto colonial entre Inglaterra y España por el dominio del comercio de ultramar. Una de las singularidades del conflicto hispano-británico de 1739, según Cerda-Crespo (2008:16-17), fue el carácter mediático que ésta alcanzó luego de que el capitán Robert Jenkins denunciara en el Parlamento inglés la vejación sufrida a manos de los españoles, puesto que le fue amputada una oreja, práctica usual de «piratas». Este hecho provocó la indignación de los parlamentarios y de la opinión pública inglesa, lo que sumió a buena parte de la monarquía británica en un ambiente belicista y de repulsa hacia los «malos tratos» que estaban recibiendo algunos comerciantes ingleses en las colonias españolas. Los británicos venían mostrando sus quejas desde hacía años en relación con la obstrucción de lo que ellos entendían como su *legitimo comercio* en América.

Díez Navarro, responsable de diseñar la defensa de la soberanía española y dirigir la construcción de la fortaleza de Omoa. Los mensajes secretos de Hodgson sobre el contrabando en el Caribe occidental, junto con los informes de Díez Navarro, indican el grado de penetración inglesa en Centroamérica durante la mayor parte del siglo XVIII. Es más, los informes y propuestas de Díez Navarro para fortificar Omoa dejan ver que el problema más grave que enfrentaba España en esta región era que el contrabando había contaminado todas las relaciones burocráticas y comerciales. Por consiguiente, consideraba que no era oportuno que la administración de la nueva fortaleza dependiera de las autoridades de Honduras. En un informe, Díez Navarro sugiere a las autoridades españolas que el gobierno de la costa de Honduras esté a cargo de un nuevo funcionario español que radique en la fortaleza de Omoa:

> «…Me ha parecido conveniente exponer a V. E. que para poner el más pronto y eficaz remedio a los desórdenes y excesos que ha habido en esta provincia, así en la administración de justicia, como en celar y velar con más inmediación los ilícitos comercios que en dicha costa se hicieren, según me tiene mostrado la práctica y experiencia es que, el fortificado que sea el citado Castillo y que el Capitán Castellano alcalde de él se le diese así mismo el título de Gobernador de la Costa de Honduras…»[32]

En esos años, un contrabandista conocido, rastreado en los archivos coloniales por Palomo (1995:138) era Pedro Campos, quien en 1760 pasó por la aduana, sin permiso, telas, aguardiente de caña y papel; además, le incautaron 10 piezas de esclavos (seis negras y cuatro negros muleques) valuados en 290 pesos cada uno, sin contar el impuesto de 33 y medio pesos por cabeza. El año anterior se le habían decomisado 50 negros y negras. A raíz de estos hechos se pidió hacer inventario de los negros que estuvieran en el puerto de Omoa y en San Pedro Sula. En este caso, las autoridades de la Audiencia de Guatemala determinaron que el comandante de Omoa estaba ampliamente involucrado en el asunto. En un expediente de 1770, Palomo (1995:138) registró otro caso en el que de nueva cuenta el comandante de Omoa (esta vez Pedro Toll) había participado activamente en el contrabando marítimo, por lo que se le separó de la comandancia de dicho puerto, se ordenó la confiscación de todos sus papeles, baúles y ropa. Además, se puso bajo vigilancia al contramaestre, al piloto y al

32 Carta del ingeniero don Luis Díez Navarro al marqués de la Ensenada, Informándole sobre lo conveniente que sería al Real Servicio el formar un nuevo gobierno de la costa de Honduras, fortificando el puerto de Omoa (Guatemala, 31 de agosto de 1751/Paleografiado y publicado por Rubio-Sánchez [1988] en *Historia de la Fortaleza y Puerto de San Fernando de Omoa*, tomo II, Págs. 131-135).

capitán del paquebote guardacostas, sospechosos de trabajar en conjunto. El 22 de mayo de 1776 fue desestimada la acusación contra Toll, en tanto que éste había comerciado con mucha gente importante y nadie atestiguó en su contra. De hecho, la persecución al contrabando de mercancías y esclavos era una batalla perdida por la Corona española a pesar de sus reiterados intentos por disciplinar a los oficiales que integraban la Real Hacienda y así percibir los impuestos que –según su criterio– le correspondían. No es casual, entonces, que las gavetas del archivo relativas al comercio colonial en el siglo XVIII estén llenas de expedientes de órdenes reales, bandos, edictos y reglamentos que pretendieron regular lo que era irregulable en el terreno.

El contrabando con las colonias británicas en el Caribe se incrementó considerablemente cuando el Parlamento inglés emitió la primera Ley de Puertos Libres (Free Port Act) en 1766 y su posterior ratificación en 1787. Por este instrumento se legalizó el comercio con las colonias españolas a través de Jamaica y la Dominica, para mercancías que no compitieran con las que se producían en las colonias insulares británicas en las Indias Occidentales. Se trataba de incrementar y facilitar el intercambio de metales preciosos y tintes, sin tener que utilizar la ruta legal, más tardada y costosa, a través del monopolio gaditano (Cabezas, 1995:306). Durante este periodo aumentó el flujo de mercancías que llegaban desde Inglaterra a Jamaica y/o a Honduras Británica (Belice) destinadas a surtir el mercado hispanoamericano por medio de embarcaciones menores que arribaban en los puertos de las colonias españolas. En el istmo centroamericano, las embarcaciones inglesas traían telas, loza, ron y pólvora de *contrabando* a cambio de mercancías como cacao, añil, cochinilla, caoba, palo de tinte, zarzaparrilla, cueros, sebo, etcétera. En 1819, el presidente Carlos Urrutia y Montoya autorizó el comercio con Belice, con el objeto de combatir el contrabando y facilitar el comercio legal, propósito que no se logró (Woodward, 1995:86; Cabezas, 1995:306).

El estudio de los flujos del comercio transatlántico y transfronterizo mediante los cuales se llevaba a cabo la exportación e importación de mercancías del istmo centroamericano a través del Camino Real que atravesaba el nororiente de Guatemala, nos permite problematizar aquellas lecturas legalistas acerca del Estado y la economía que nos dicen poco, o nada, acerca de cómo funcionaban las redes del comercio legal y su contracara más dinámica: el comercio ilegal. Asimismo, nos permite acercarnos a la precaria institucionalidad estatal en

aquellos espacios de frontera donde históricamente ha existido el trasiego de todo tipo de mercancías, personas y armamento. Sobre todo, nos permite observar que el contrabando y los flujos extralegales no han sido *el otro lado* del capitalismo, sino que son inherentes al desarrollo de éste (Nordstrom, 2007). Por lo tanto, lo que interesa comprender son las distintas maneras en que comerciantes, transportistas, funcionarios públicos y gente común y corriente que vive en los territorios de frontera manipula, convive, se apropia o cuestiona los flujos del comercio ilegal en la vida cotidiana. Reconstruir la historicidad del comercio ilegal que fluía en el litoral atlántico y el triángulo nororiental entre Guatemala, El Salvador y Honduras es de crucial importancia para acercarnos a la comprensión de los nuevos flujos del comercio ilegal, el narcotráfico, la normativa que los restringe, y, al mismo tiempo, los hace más lucrativos y agresivos. Pero también para comprender la aceptación y/o legitimidad de que disfrutan las redes locales del narcotráfico en estos territorios de frontera. En otras palabras, nos permite distanciarnos de las lecturas moralistas acerca del comercio ilegal y comprender las distintas maneras en que el capitalismo ha propiciado su reproducción en la vida cotidiana.

4. Milicias orientales y defensa del territorio imperial

> «El Reino de Guatemala vivió un continuo estado de guerra desde 1534 hasta 1859, como consecuencia de las ambiciones colonialistas de los países europeos enemigos de España. Fueron tres siglos de alarma y sobresaltos. Las autoridades españolas confiaron de hecho la defensa de la provincia de Guatemala a los zacapanecos. España únicamente enviaba para el servicio en el Castillo de San Felipe a los altos oficiales [Castellano Gobernador, Alcalde y en algunas ocasiones, al condestable de la artillería]. El Capellán, los Cabos, Soldados, Oficiales, Artesanos y demás servicios […], eran de esta tierra, que durante trescientos años legó a sus mejores hijos a la defensa de la patria» [Revista Somos Zacapa, abril 1995:22].

> Cabe recordar, y dejarlo impreso, que desde que se fundó el castillo de San Felipe (1650) hasta la independencia (1821) únicamente dos guatemaltecos fueron distinguidos con los títulos de castellano gobernador y alcalde de la fortaleza de San Felipe, uno de ellos fue don Francisco Sagastume, que era vecino de Chiquimula, y el otro don Alejandro de Saavedra y Buenafé, que era vecino de la ciudad de Zacapa. Don Alejandro Saavedra, para gloria de esta tierra, fue nombrado para el cargo de castellano gobernador del fuerte de San Felipe por el ilustre gobernante don Matías de Gálvez, en el año 1781, y sirvió en el cargo hasta 1784. Nietos suyos fueron grandes personajes de la historia. Uno de ellos fue don Gerónimo Paiz y Saavedra, general del Ejército de Guatemala,

> comandante militar de Izabal, corregidor de Chiquimula y ministro de Estado en los despachos de Hacienda y Guerra. Fue grande y leal amigo del general Rafael Carrera y uno de los héroes de la batalla librada el 18 y 19 de marzo de 1840 en la Plaza Mayor de la ciudad de Guatemala, donde Francisco Morazán fue derrotado para siempre.
>
> «La continua presencia de los zacapanecos defendiendo el Castillo de San Felipe, le ha dado a Zacapa el singular privilegio de haber llevado a cabo la colonización del territorio de Izabal. En su intensidad, este caso no se ha dado en ninguna otra región de Guatemala y sin temor a equivocación, puede decirse que todas las familias antiguas de Izabal son DESCENDENCIA DE ZACAPANECOS[33]" [Revista Somos Zacapa, julio 1995:23]

Los tres párrafos citados arriba forman parte de la *Monografía de Zacapa*, escrita por Benedicto Pozuelos, que publicó la revista *Somos Zacapa* en varias entregas entre 1994 y 1996. Esta monografía, como otras del oriente de Guatemala que fueron escritas en el siglo XX, ilustra con elocuencia lo presente que aún están en la memoria e historiografía provinciana de esta región los grandes personajes, las condecoraciones, jerarquías y hazañas militares que libraron sus antepasados en la defensa de una «patria» cuyos confines se trazan con la idea de la *madre patria* y el territorio colonial del nororiente y la costa atlántica.

Quien narra este episodio de la historia de Zacapa destaca la participación de los milicianos zacapanecos como capellanes, cabos, soldados, oficiales y artesanos en la defensa del fuerte de San Felipe, pero, sobre todo, acentúa el papel que desempeñaron «los hombres distinguidos», «los ilustres», «los héroes» y «grandes personajes» que dieron gloria a la historia de Zacapa. Asimismo, indica que el servicio que prestaron las diferentes generaciones de zacapanecos en comandancia de dicho fuerte les permitió el privilegio de colonizar las tierras de Izabal. Lo interesante de esto último es que en distintos periodos de la historia, la élite provinciana del nororiente (principalmente zacapanecos y chiquimultecos) prestó algún *servicio en armas* para resguardar la costa y ruta hacia el Atlántico; en recompensa a sus servicios, muchos de ellos fueron gratificados con tierra, siguiendo la vieja usanza colonial de las «probanzas de méritos y servicios» que rendían los conquistadores y primeros colonizadores para hacerse de tierras, cargos públicos y exoneraciones de impuestos. Quizá el más significativo reparto de la tierra de Izabal ocurrió en los años 70 del siglo XX, cuando el general Carlos Manuel Arana Osorio compensó con tierra a los altos mandos del Ejército, a los

33 Las mayúsculas son del autor del ensayo.

comisionados militares y a sus colaboradores más cercanos que participaron en la estrategia contrainsurgente de los años 60 en el nororiente.

La vigencia de esta memoria épica en el oriente responde en buena medida a una vieja tradición *miliciana* que inicia desde la formación de los corregimientos de Chiquimula de la Sierra y Acasaguastlán, y se reedita con las diferentes generaciones de caciques y militares orientales que «prestaron servicio en armas al Estado en tiempo de necesidad» a cambio del derecho a usar la autoridad y la fuerza pública en defensa de sus privilegios en la región. El análisis de las milicias coloniales nos permite adentrarnos en esta *memoria más antigua* que ha dado sentido, aceptación –y en algunos casos legitimidad– a la formación de huestes privadas o fuerzas paramilitares que operaron en estrecha colaboración con el Estado con amplios márgenes de maniobra y autonomía provinciana. El examinar con detalle los principios organizativos, ámbitos de acción e ideología que dieron sentido a esta vieja institución colonial, nos permitirá descifrar las distintas maneras en que caciques y potentados orientales adecuaron a su tiempo y circunstancias particulares la idea de *la casa poblada,* entidad colonial que desempañó, entre otras, la función de mantener *gente, armas y caballos al servicio del rey*; pero, sobre todo, nos ayuda a entender las razones por las cuales algunos caudillos, políticos y militares que dirigieron el Estado de Guatemala acudieron con descarada asiduidad a estas fuerzas paramilitares para dirimir las contiendas políticas y llevar adelante sus más variadas empresas represivas.

4.1 Servicio en armas y dominación colonial

Gracias a su ubicación estratégica –en el camino del golfo Dulce–, su fuerza numérica y márgenes de acción, los elementos que integraron la oficialidad de las milicias del corregimiento de Chiquimula-Acasaguastlán siempre fueron de la mayor importancia para la Audiencia de Guatemala. A su responsabilidad estaban guardar la seguridad y el orden en la amplia jurisdicción del corregimiento, reprimir «desórdenes» y rebeliones indígenas, proveer un contingente de milicianos a las fortificaciones de Omoa y San Felipe, mantener la vigilancia a lo largo del río Motagua y en el golfo Dulce mediante el sistema de *vigías, f*renar y repeler las incursiones de fuerzas extranjeras (denominadas con los apelativos de piratas, bucaneros, filibusteros o, simplemente, contrabandistas); perseguir el contrabando y garantizar la paz colonial en su jurisdicción. Tal como vimos anteriormente, su papel en la defensa de las fortificaciones portuarias obedeció a los intereses de las autoridades coloniales; no obstante, la mayoría de ellos

aprovechó su posición privilegiada para llevar adelante sus propios arreglos y/o transacciones comerciales.

El poderío que llegaron a tener las milicias nororientales a partir del siglo XVII se debió *al servicio en armas* que prestaron en diferentes frentes de interés colonial, entre estos destacan: 1) el proceso de sujeción y dominación de los pueblos ch'orti'; 2) en el combate a las incursiones y asaltos cometidos por las otras potencias imperiales en los puertos de la costa atlántica; y 3) el resguardo de mercancías en diferentes trayectos del Camino Real, principalmente, a través de un sistema de vigías a lo largo del río Motagua. Desde sus inicios, las tropas veteranas de la Capitanía General de Guatemala no tenían la capacidad de articular una respuesta efectiva ante la inminente disputa imperial de sus posiciones en el Caribe[34]. Por consiguiente, la responsabilidad de formar las milicias del nororiente y custodiar la ruta y los puertos en el Atlántico de Guatemala corrió a cuenta de los corregidores de Chiquimula de la Sierra-Acasaguastlán, y del grupo de encomenderos que se asentaron en la región, quienes a cambio de los privilegios que gozaban se comprometían a mantener de su propia cuenta «gente, armas y caballos» (Webre, 1993:183). A mediados del siglo XVII, las milicias orientales ya operaban como un ejército al estilo feudal, integrado no solo por los encomenderos, sino por los hacendados y comerciantes españoles, ladinos y pardos que prestaban «servicio militar en tiempo de necesidad». A cambio del servicio prestado, los oficiales de las milicias obtenían amplios márgenes de poder, concesiones de tierra, exoneración de impuestos, tributos y trabajo indígena en sus empresas privadas (haciendas ganaderas, trapiches, obrajes de añil y casas comerciales que requerían de cargadores indígenas para descargar y cargar la mercancía de los barcos y trasladarla hasta su destino final)[35].

Para españoles y ladinos que se asentaron en el nororiente, las milicias fueron la vía más rápida y segura de ascenso económico y político. Desde esta institución militar se profundizaron las desigualdades sociales y las jerarquías raciales que

34 De hecho, la Corona española nunca contó con los recursos humanos y materiales suficientes para proveer una adecuada defensa a lo largo y ancho de su enorme imperio americano. Por consiguiente, las armas y tropas veteranas disponibles se destinaron para la protección de los puntos de mayor importancia estratégica y económica, tales como Nueva España, Cuba, Panamá, Cartagena y Perú, en tanto que regiones menos opulentas, como Centro América, recibieron muy poca atención (González-Alzate, 2006).

35 Las llamadas «probanzas de méritos y servicios» que los conquistadores y sus descendientes hacían para solicitar premios ante la Corona están llenas de referencias al estado de preparación militar que cada uno decía mantener de su propio bolsillo. Estas peticiones se fundamentaban en la idea de *la casa poblada,* institución socioeconómica que desempeñaba, entre otras, la función de mantener gente, armas y caballos para el servicio del rey (Webre, 1987:512-513).

ordenaron el mundo provinciano. Los estudios de Sanchiz (1976) y Webre (1987) muestran las distintas maneras en que estos militares se consideraban *hidalgos* (hombres distinguidos e ilustres) y anhelaban recrear en los territorios de las Indias una sociedad tradicional en donde la profesión más prestigiosa fuera la de las armas. Para estos hidalgos provincianos, *servir* en una compañía de caballería suponía prestigio social, no solo porque exigía fuertes gastos para el mantenimiento de la cabalgadura, sino por el hecho de que ésta se limitaba exclusivamente a los españoles, es decir, a *los blancos y pudientes de la región*.

En contrapartida, el servicio de infantería estaba abierto tanto a los españoles como a las llamadas «castas» (mestizos, mulatos y negros libres), mientras que el empleo de indígenas en el servicio militar era considerado fuera de lugar en la sociedad colonial del siglo XVII (Webre, 1987:519). No obstante, esta restricción nunca eximió a los ch'orti' de aquellos servicios que permitían el buen funcionamiento de las milicias; por ejemplo, hacer trabajosos forzados en la construcción de los fuertes de San Felipe y Omoa, proveer el abasto de las fuerzas militares destacadas en el corregimiento y los puertos del Atlántico, y cargar *a mecapal* las provisiones, materiales y pertrechos de guerra que estas fuerzas requirieran. En la descripción que Cortez y Larraz hizo en 1769 acerca de los pueblos de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita, hace constar que los tres pueblos se quejaron del demasiado rigor de su corregidor, quien «les tequiaba»[36] en sus personas y caballerías para enviar víveres al golfo sin pagarles lo que les debía. Cortés y Larraz constata también que dos años atrás, el corregidor les había quitado con violencia sus «maíces, frijoles y gallinas», por lo que dichos pueblos experimentaron años de hambre calamitosa, en que muchos murieron y muchos otros abandonaron sus pueblos.

Precisamente, la institución mediante la cual se manifestó con mayor severidad la dominación colonial fue la institución miliciana, *fuerza armada civil* encargada de mantener «el orden y la seguridad» en el interior del corregimiento. El control de esta institución permitió a los agentes reales y potentados provincianos negociar, desde su posición de ventaja, los términos del *pacto colonial* con los pueblos indígenas, y así mantener su posición dominante a lo largo de tres siglos (González Alzate, 2006). Más importante aún, las milicias contribuyeron a legitimar la autoridad de una *fuerza militar privada* autorizada para ejercer

36 De «tequio». Se dice de la tarea o faena que se realiza para pagar un tributo. Además, en América Central se usa este sustantivo que forma parte del corpus de la lengua y el verbo que de él se desprende para referirse a un acto molesto, que causa perjuicio. (N. del E.)

la violencia pública en su territorio, fundamentalmente si esta violencia se ejercía en contra del «otro», «el indio insurrecto y levantisco». De hecho, para los encomenderos, hacendados, comerciantes y autoridades del corregimiento de Chiquimula, las amenazas más significativas no provenían necesariamente de aquellas fuerzas extranjeras que incursionaban en la costa atlántica, sino de la población ch'orti' que continuamente se opuso a todas aquellas exigencias que expoliaban sus recursos, constreñían sus espacios de acción política y desbarataban el *precario equilibrio* del pacto colonial.

Los corregidores y milicianos locales eran quienes dirigían la represión frente a las protestas y rebeliones indígenas. En sus escritos se presentaban siempre pidiendo autorización para emplear *mano dura,* o justificando el haberla empleado, advirtiendo con insistencia que «la naturaleza de los indios y los intereses del rey aconsejaban el uso del máximo rigor». Y tan pronto como les llegaba la noticia de una expresión de rebelión indígena, el corregidor o el párroco convocaban a las milicias españolas, criollas y castas para que marcharan a la escena del conflicto a reprimir la conmoción comunal (Martínez, 1991). Aun cuando está pendiente efectuar un estudio profundo de las rebeliones indígenas y de los mecanismos de respuesta utilizados por las autoridades del corregimiento de Chiquimula de la Sierra, la información disponible da cuenta de un pueblo ch'orti' beligerante frente a la dominación colonial; asimismo, de una fuerza miliciana que no dudó en utilizar la violencia extrema para reprimir aquellas manifestaciones de descontento popular. Los Juicios de Residencia[37] que las autoridades reales hicieron a los corregidores de Chiquimula de la Sierra y Acasaguastlán al concluir su periodo de gobierno ilustran con elocuencia, no solo las formas de dominación colonial, sino la conflictividad y violencia que se vivía en este territorio. Particularmente ilustrativo de ello nos resulta el Juicio de Residencia que le instruyeron al capitán Joseph González de Rivera y Rancaño en 1744[38]. Entre los servicios meritorios que las autoridades reales le reconocen a este corregidor destacan, por ejemplo, «el que siendo él un hombre

37 Los Juicios de Residencia eran un medio de control al cual se sometía a los funcionarios reales al cesar en su cargo. Consistían en la llegada de un juez a quien se le daba el título de contador mayor, y quien después de anunciar públicamente la celebración del juicio recibía denuncias, reducía éstas a cargos concretos, escuchaba la defensa del interesado y luego preparaba un escrito con los cargos y condenas, que elevaba a la autoridad superior (Cabezas, 1994:479).

38 Este juicio fue paleografiado y publicado por Clodoveo Torres Moss (1987) en la Revista No.9 de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos. Aun cuando no coincidimos con la interpretación que este historiador hace del documento en mención, su paleografía y publicación constituyen un verdadero aporte para la comprensión del sistema de dominación colonial en el corregimiento de Chiquimula de la Sierra.

de armas y conociendo la función de las milicias en el mantenimiento del *orden público* y en la defensa y seguridad del reino, reorganizó las fuerzas militares del corregimiento formando 6 compañías de infantería y 4 compañías de caballería, eligiendo a personas idóneas como sus oficiales [...]» (Torres-Moss, 1987:37). Con estas fuerzas, González y Rancaño «guardó el orden en su amplia jurisdicción, reprimió desórdenes y alzamientos, persiguió el contrabando y garantizó la paz». Además, proveyó con cupos de milicianos a los castillos de Omoa y de San Felipe, y mantuvo la vigilancia mediante el sistema de vigías a lo largo del río Motagua y aun en el golfo Dulce (ibíd. 37).

Vale decir que entre los méritos que el tribunal real reconoció al corregidor en mención, acentúan su apoyo decidido a las autoridades y fuerzas milicianas del corregimiento de las Verapaces cuando «los indios de esa provincia se sublevaron contra los ladinos y autoridades coloniales poniendo en peligro la seguridad del reino» (ibíd. 32). Según este Juicio, González de Rivera «se trasladó en el término de la distancia a la provincia de Verapaz, sujetó y pacificó a los rebeldes» que protagonizaron uno de los más importantes levantamientos de la época (1735), «dejándolos de nuevo aplicados a sus trabajos». Igualmente destacaron su intervención «rápida y sin contemplaciones» frente el alzamiento de los ch'orti' del pueblo de Chiquimula en 1741, quienes por motivos semejantes a los de la provincia de Verapaz pretendieron «[...] echar a pedradas a españoles y ladinos de su pueblo [...]» (ibíd. 32).

La rebelión del pueblo q'eqchi' de San Juan Chamelco y San Pedro Carchá en 1735[39], así como la rebelión del pueblo ch'orti' de Chiquimula de la Sierra en 1741, ponen de manifiesto la amplitud de las tensiones existentes en el mundo colonial provinciano en un momento en que se están afinando los mecanismos de expoliación y dominación colonial. El conflicto en Chiquimula ocurrió en el contexto de reorganización del corregimiento de Chiquimula que implementó González de Rivera y Rancaño para regularizar la posesión de las tierras que ya estaban en manos de españoles y ladinos; reducir a poblados a los pueblos indígenas dispersos en la región y así hacer más efectivo el sistema de explotación colonial (el cual consistió en asegurar la producción, cobro y rentabilidad del tributo; y la disponibilidad del trabajo indígena en todos los ramos de la economía regional, incluso en aquellos en los que por disposición real se prohibía terminantemente el empleo del «repartimiento» de indígenas, tal

39 AGI-AG, 390; AGI.EC, 358ª/Citado en Bertrand, 1995.

como los obrajes del añil, la explotación minera, la carga, descarga y transporte de mercaderías que llegaban a los puertos del Atlántico)[40]. Además, los ch'orti' debían realizar los trabajos más pesados en la apertura de la red de caminos y brechas que comunicarían a los diferentes «pueblos de indios» del corregimiento con el pueblo de Chiquimula y las provincias vecinas de las región[41]; y trabajar en la construcción de edificios públicos y eclesiásticos, tales como las Casas Reales del corregimiento y las iglesias de cada uno de los pueblos de la región. Como ejemplo, vale decir que durante el primer periodo de gobierno de González de Rivera (entre 1732-1743) se construyeron las iglesias del Calvario de Chiquimula, Jocotán, Xilopeque, Santo Domingo Jutiapa, Santa Catarina Mita, San Jacinto, Santa Elena, San Pablo, San Juan Ermita e Ypala[42].

La rebelión ch'orti' del 41 estalló cuando la administración de González de Rivera aumentó la exigencia en el cobro, la cantidad y la calidad del tributo indígena. Durante su gobierno, el tribunal real reconoce que aumentaron significativamente las rentas y tributos del corregimiento de Chiquimula de la Sierra y Acasaguastlán[43]. Asimismo, aumentaron las tensiones entre las autoridades locales del corregimiento y los pueblos ch'orti' que continuamente protestaron frente al rigor y violencia de las autoridades del corregimiento, quienes les *tequiaban* en su persona y propiedades, y constantemente les inquirían defectos para castigarles severamente con azotes y cárcel.

40 Además de pagar el tributo del «situado» del castillo de San Felipe, los indígenas debían cargar a *mecapal* el correo, las mercancías y el equipaje de viajeros y comerciantes; y el pertrecho de guerra de las milicias del corregimiento cada vez que éstas marcharon a defender las posiciones españolas en la costa del Caribe.

41 Según González de Rivera, el objetivo de esta red de caminos era fomentar el comercio al interior del corregimiento y facilitar que españoles, ladinos e indígenas llevasen sus productos agrícolas y ganados a los tianguis de su jurisdicción, y a las otras provincias vecinas.

42 Ver Torres Moss 1997 y 1987.

43 Vale decir que en este corregimiento la producción y tributo indígena fue altamente diversificada, pues se cultivaba cacao, algodón, maíz y tabaco; se procesaba miel, cal, plata, obsidiana y copal, y se manufacturaban petates, mantas, cutarras (caites) y alpargatas (Ramírez, 1995:375). Los productos con que se pagaba el tributo prácticamente fueron los mismos en todo el corregimiento, excepto ciertas especialidades, como en Esquipulas, donde se pagaba el tributo en plata proveniente de los yacimientos del Real de Minas de Alotepeque; en Jalapa, Mataquescuintla y Asunción Mita también se tributaba tabaco; en Jocotán, cal y copal, y en Asunción Mita, cal y obsidiana. Sin duda, el tributo más odiado por los indígenas de esta región fue el algodón, pues este producto exigía no solo del trabajo de los hombres para su cultivo y cosecha, sino el trabajo de las mujeres en el tejido de un número determinado de mantas tasadas bajo el criterio de los recaudadores del corregimiento. El algodón se producía en los pueblos de Asunción Mita y Jalapa, y se tejía en casi todos los demás del corregimiento. Solo Jalapa, Mataquescuintla, San Luis Jilotepeque y Chiquimula producían, cada uno, más de 299 mantas anualmente. Jalapa y Mataquescuintla eran los mayores productores, con la cantidad de 1,110 mantas (Ramírez 1994:617).

Otra de las causas del descontento popular era la forma en que el corregidor estaba interviniendo en las disputas de tierras que el pueblo ch'orti' de Chiquimula sostenía con aquellos españoles y ladinos que se asentaron en la jurisdicción de su parcialidad y continuamente buscaban despojarles de sus mejores tierras en el valle. Este conflicto permaneció irresuelto durante todo el periodo colonial y se prolongó durante el primer siglo de vida republicana, cuando, finalmente, las élites ladinas de Chiquimula, a través de diferentes mecanismos administrativos, lograron despojar a los ch'orti' de buena parte de sus ejidos en la cabecera departamental. La bonanza colonial que alcanzó este corregimiento en los siglos XVII y XVIII estuvo acompañada de tensiones cada vez más intensas entre españoles, ladinos y pueblos indígenas. Entre éstas destacó la disputa por la tierra y las fuentes de agua, la rebelión indígena frente a los excesos en el cobro del tributo y el trabajo forzado (en la construcción o mantenimiento de las fortalezas y caminos, la descarga de barcos y la carga de mercancías, personas, equipaje y/o pertrechos de guerra a lo largo de la ruta al Atlántico) pero, sobre todo, el recurso a la violencia miliciana para dirimir los continuos reclamos populares.

4.2 La disputa imperial por la costa atlántica

Desde el momento en que los europeos llegaron a América, el Caribe se convirtió en un espacio disputado entre las potencias coloniales que pretendían el dominio de los enclaves comerciales desde dos posiciones encontradas: por un lado, la Corona española intentaba controlar el monopolio de todas las transacciones comerciales, en tanto que las otras potencias peleaban por el reparto de las abundantes materias primas del Nuevo Mundo, a la vez que surtían de mercancías a aquellos espacios coloniales que España era incapaz de abastecer en su totalidad (Cerda-Crespo, 2008). Todo ello se agudizó a mediados del siglo XVIII con una creciente producción manufacturera en potencias como Inglaterra, Francia y Holanda, convirtiéndose América en el mejor mercado para los productos de unas naciones que comenzaban a tener alta productividad, lo que les permitió disponer de excedentes para invadir los mercados americanos, hacer colapsar el comercio español y potenciar las redes paralelas del comercio ilegal.

Durante buena parte de los siglos XVII y XVIII, las rivalidades imperiales en Europa se volcaron hacia América y los nuevos territorios coloniales se transformaron en blanco de conflicto y búsqueda de oportunidades comerciales (Bornholt, 2007:117). Inglaterra, Francia y Holanda trataron de quebrar el

dominio de los españoles en el área mediante incursiones en las islas Antillas y la costa atlántica del istmo centroamericano. Una característica de esta nueva fase de expansión capitalista y guerras europeas fue la formación de asentamientos permanentes en el Caribe, con el fin de facilitar ataques bélicos contra las colonias españolas y penetrar comercialmente sus mercados. En este contexto, fueron particularmente apetecibles las posiciones españolas en la bahía de Honduras, los territorios de la Mosquitia hondureña y nicaragüense[44], el golfo Dulce y el cauce y puerto fluvial de Gualán.

Durante la primera mitad del siglo XVII, los piratas convirtieron la región alrededor de las Islas de la Bahía, en Honduras, en una especie de *mare nostrum*. No solo multiplicaron el número de ataques a los puertos, sino fomentaron el contrabando a grados extremos (Cabezas, 1994:471) En este contexto, la defensa del litoral atlántico del istmo se convirtió en una de las preocupaciones más apremiantes de los presidentes de la Audiencia de Guatemala. Para el imperio español, la importancia de Centroamérica radicaba más en su posición geográfica que en su rentabilidad económica. Ubicado estratégicamente *entre* las ricas provincias de la Nueva España y el Perú, el istmo representaba el punto más estrecho y vulnerable del continente que guardaba el acceso al mar del Sur (Webre, 1993:181). Una respuesta efectiva frente a la magnitud de tal amenaza hubiera requerido la pronta movilización de tropas regulares y artillería pesada a los puntos más vulnerables de la costa atlántica. No obstante, la debilidad militar que enfrentaba la Capitanía General de Guatemala la llevó a depender de los recursos y movilización de las milicias del reino, particularmente de las milicias del corregimiento de Chiquimula de la Sierra y Acasaguastlán, las cuales participaron activamente en aquellas operaciones militares que los presidentes de la Audiencia de Guatemala les convocaran.

Según la memoria oral y/o la historiografía provinciana, las milicias del corregimiento de Chiquimula y Acasaguastlán participaron en la construcción de los principales fuertes de la costa atlántica y en casi todas las acciones militares para repeler las incursiones de ingleses, holandeses y franceses en la bahía de Honduras y el golfo Dulce. Entre las acciones más recordadas destacan:

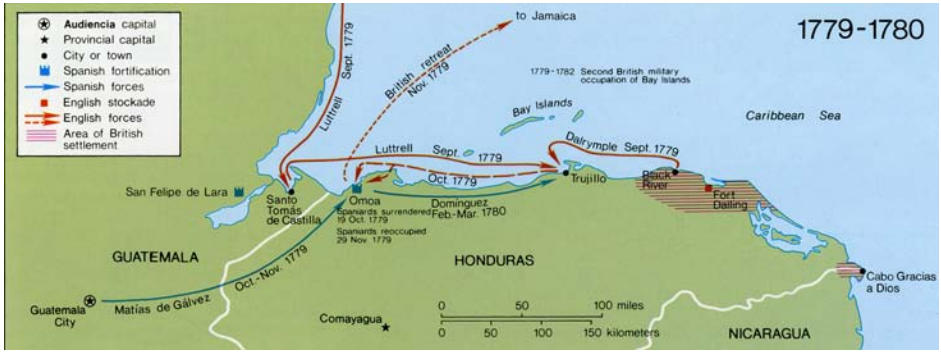
44 Término utilizado desde mediados del siglo XVII para referirse al litoral atlántico desde el río Aguán, en Honduras, hasta la desembocadura del río San Juan en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica (Webre, 1993:185). Los pueblos indígenas de este territorio permanecieron insurrectos «a pesar de las muchas expediciones que los españoles enviaron para conquistarlos y reducirlos» (Rubio Sánchez, 1973).

En 1650, su participación en la guerra entre Inglaterra y España, luego de que las tropas inglesas provenientes de Jamaica ocuparon las islas de Utila y Roatán en Honduras. Ante el inminente problema de seguridad que esta ocupación suponía, el presidente de la Audiencia de Guatemala, Antonio de Lara y Mogrovejo, convocó a las tropas milicianas de todo el país y solicitó el apoyo militar de las tropas regulares de La Habana y Santo Domingo. Según la historiadora chiquimulteca, Rosa Flores (1973), en esta guerra destacó la participación de un batallón de 50 milicianos de Chiquimula, al mando del capitán Juan Bautista Chavarría, el cual logró expulsar a los ingleses de sus posiciones en las islas del archipiélago hondureño. Esta guerra concluyó en 1663 con un tratado en el que Inglaterra se comprometió a demoler las fortificaciones construidas en estas islas. A pesar de estas victorias militares, el dominio español en el Caribe quedó reducido a la bahía de Honduras, en tanto que la presencia inglesa se extendió a lo largo de toda la costa de la Mosquitia, cuyos pueblos históricamente se opusieron al proceso de colonización española y decidieron aliarse a los británicos para negociar sus posiciones en el Caribe a través de la creación un «protectorado» en la región y el reconocimiento de un rey indígena alrededor de 1687 (Webre, 1993).

Entre 1704 y 1707, las milicias de Chiquimula participaron en diferentes enfrentamientos para desalojar a los ingleses e indios mosquitos del pueblo de Amatique, situado en la jurisdicción del golfo Dulce. Al referirse a estos enfrentamientos, Flores sugiere que aun cuando éstos fueron «muy penosos», los soldados chiquimultecos lograron desalojar a los mosquitos y regresaron a Chiquimula «*en actitud de vencedores*» (1973:51-52).

Entre 1779 y 1783, las milicias nororientales se enlistaron en la tropa que organizó el presidente de la Audiencia de Guatemala (Matías de Gálvez), luego de que éste visitara la provincia de Chiquimula y convocara a las milicias de San Agustín Acasaguastlán, Zacapa y Chiquimula a participar en las campañas militares en contra de los ingleses e indios mosquitos que controlaban el amplio territorio del Caribe centroamericano. En 1780, las tropas marcharon a desalojar a los ingleses del fuerte de Omoa. Restablecida la guarnición española en Omoa, se procuró mantener activa la fortaleza para proteger la costa atlántica de las incursiones de los ingleses.

Mapa No. 3
Central America and the War of America Independent 1779-1780



Fuente: Hall y Pérez-Brignoli (2003:147).

En 1782, con el objeto de desalojar a los ingleses que continuaron ocupando la isla de Roatán, Matías de Gálvez organizó otra campaña militar con fuerzas milicianas de varias partes del reino. En esta campaña también participó un fuerte contingente de milicianos del corregimiento de Chiquimula/Acasaguastlán. Retomando lo planteado por Gómez ([1892] 1906), Flores (1973:57) subraya que en el último trecho de la expedición solo se embarcaron algunos batallones de milicianos, entre estos destacaban los de Zacapa y Chiquimula. Y que entre los militares que mostraron más *arrojo* y *valor* se distinguieron los coroneles José Casasola y Joaquín de Posada, que comandaban las fuerzas chiquimultecas. En esta acometida a Roatán, agrega Flores, también «se distinguieron nuestros soldados ya que figuran sus jefes como entre los más decididos y valientes militares de la expedición [...], pues en todos los momentos de la historia los hombres de Chiquimula se han distinguido por tomar parte en las luchas para conservar la integridad del territorio de Guatemala».

En 1786 se nombró como teniente coronel de las milicias y capitán de la compañía fija de los pardos, erigida para guarnición y plaza de Omoa, a Félix Mir. Los hombres que integraron esta compañía militar fueron reclutados en el corregimiento de Chiquimula (Flores, 1973:54).

La participación de las milicias chiquimultecas en la guerra (1779-1783) para expulsar a los ingleses de sus posiciones en el Caribe ocurre en el contexto de las reformas borbónicas, a través de las cuales España buscaba racionalizar la

explotación de sus territorios en América, recuperar la hegemonía comercial y el control de sus territorios en las Antillas. Para lograrlo, revitalizó los sistemas de resguardo y guardias flotantes, impulsó la formación de escuadras de guardacostas reales, la vigilancia de las rutas de navegación y el combate y desplazamiento de los ingleses de sus más influyentes posiciones en las Antillas. En aplicación a estas disposiciones, el gobierno de Matías de Gálvez lanzó una ofensiva para frenar el poderío británico en la costa caribeña y desbaratar las redes del contrabando en las que participaban los comerciantes guatemaltecos; además, emitió una serie de órdenes destinadas a recuperar el monopolio del crédito y el comercio del añil (Wortman, 1991:205). En un momento dado, la participación de las milicias chiquimultecas en la guerra contra los ingleses y mosquitos y su expulsión del Caribe centroamericano pudo haber sido contradictoria, en tanto que muchos de los comerciantes y funcionarios públicos de la región formaban parte de las redes del comercio ilícito que se establecieron en los puertos de la bahía de Honduras, el golfo Dulce y el puerto fluvial de Gualán. Sin embargo, el ser milicianos y salir vencedores en la guerra les ofrecía nuevos espacios de poder y autonomía en el manejo de sus territorios.

4.3 Milicias y soberanía provinciana

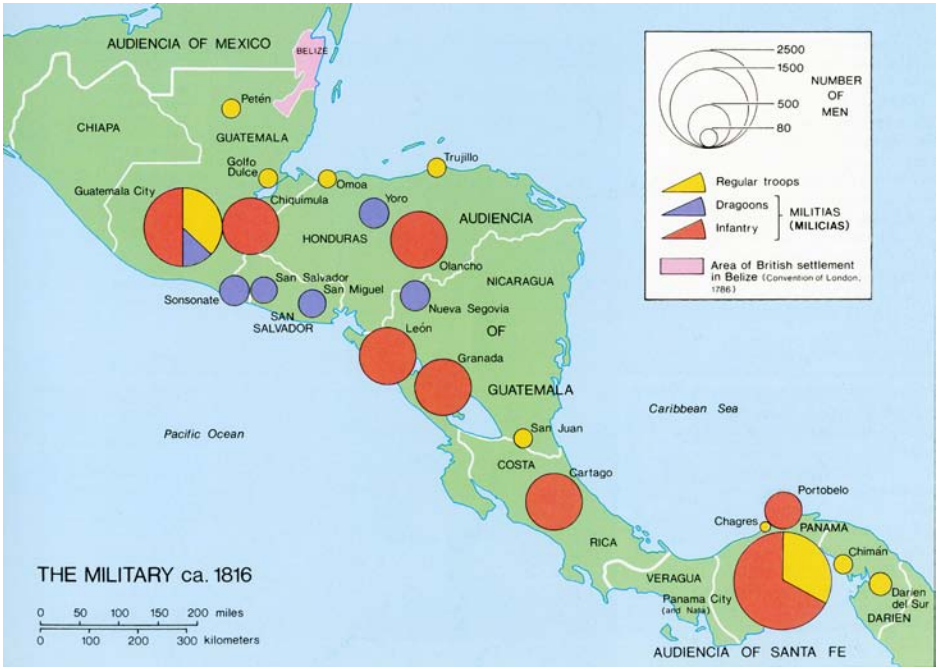
Los esfuerzos por defender o ensanchar el dominio español en Centroamérica dependieron casi siempre de los propios recursos de la administración colonial provinciana. Más bien, la Corona esperaba que la Audiencia de Guatemala asumiera el costo de la defensa de otras provincias que se consideraban más importantes. La necesidad de extraer de una colonia relativamente pobre el dinero para formar y sostener un cuerpo militar para fines de defensa, según Webre (1993), pudo haber sido uno de los desafíos más grandes que afrontaron los presidentes de la Audiencia. Sin mayores alternativas para lograr la defensa y seguridad del Reino, los mandatarios se vieron obligados a recurrir a las élites provincianas para formar ejércitos milicianos (relativamente privados), que contribuían a fortalecer su poder local y sus propios intereses. Presidentes y élites provincianas poderosas se vincularon entre sí, principalmente a través de los comerciantes mayoristas, quienes dominaban la economía colonial y la vida política de la ciudad de Santiago de Guatemala. Ellos constituían, aparte de la Iglesia, el único grupo que podía disponer de fuertes cantidades de dinero para hacer frente a los gastos de defensa del Reino (1993:199).

A cambio del apoyo en armas, los comerciantes lograban cierta *flexibilidad* de los presidentes a la hora de ejecutar las disposiciones reales, especialmente en lo concerniente al comercio y el pago de impuestos. En todo caso, hay que tener presente que Centroamérica no contaba con casa de moneda y la producción en metales preciosos era escasa; por consiguiente, el comercio exterior se convirtió en la principal fuente de moneda circulante. Por este motivo, los presidentes solían hacerse de la vista gorda frente al dinamismo del comercio ilegal, las infracciones a la ley y los recurrentes abusos que cometían los grandes comerciantes y sus intermediarios locales.

El *Servicio al Rey en Armas* confería a la oficialidad miliciana acceso a los círculos gubernamentales, conexiones políticas, financieras y sociales. Asimismo, los oficiales de mayor rango tendían a actuar en colusión con los corregidores de turno, generalmente formando lucrativas alianzas comerciales con ellos. En términos generales, el cuerpo de oficiales de cada compañía tendía a estar integrado por los comerciantes y hacendados españoles peninsulares y los criollos más *opulentos* y *socialmente distinguidos*, tal como lo exigía la reglamentación militar.

El papel que asumía la élite provinciana en la formación de las milicias se debía en gran parte a la escasez de financiamiento, armas, municiones y gente con experiencia en el ramo militar, por parte de la Audiencia de Guatemala. Además, el poder económico y prestigio social de los oficiales provincianos proporcionaba ventajas, aun frente a los pocos soldados profesionales que de vez en cuando aparecían en la colonia. La élite colonial sabía la importancia de su papel en la defensa del istmo, y reconocía igualmente que de ahí provenía, en mucho, el estado de privilegio y poder de que gozaba. De esa cuenta, ostentaba con orgullo los títulos militares. Además, en las numerosas peticiones de favores a la Corona, mencionaban repetidamente supuestos méritos militares obtenidos en el campo de batalla o la ayuda financiera prestada en tiempos de emergencia. A través del *servicio en armas,* las élites provincianas fueron adquiriendo conciencia de una existencia propia, independiente de la Corona española; de este modo, ensancharon su poder y afianzaron sus espacios de soberanía local.

Mapa No. 4
The Rise of the Military 1816



Fuente: Hall y Pérez-Brignoli (2003:145).

Segunda Parte

Contiendas políticas y formación del Estado republicano

Capítulo II
Formación del Estado, comercio transatlántico y disputas por el territorio

> «Los hijos del oriente, valientes por tradición supieron mantener encendido el patriotismo y pelearon siempre con varonil entereza, si alguna vez sorprendidos por dirigentes de mala fe o por ignorancia, alzaron las armas contra un régimen bien intencionado para con la patria, ellos indudablemente creyeron sostener las mejores causas e hicieron de esta región cuna de inacabables rebeldías». Rosa Flores, *Chiquimula en la historia*.

> «Guatemala tuvo diversas contiendas con países hermanos. Estos momentos bélicos de la patria dieron la oportunidad de medir la intensidad del patriotismo zacapaneco. En aquellas oportunidades el Gobierno se vio obligado a recurrir a los pueblos en demanda de ayuda, ora en semovientes, ora en dinero o en hombres para ir al campo de batalla». Álvaro Palma, *100 años de Zacapa.*

En este capítulo analizaremos la volatilidad, improvisación y violencia implícita en el proceso de formación del Estado en Centroamérica, desde la independencia hasta la primera mitad del siglo XX. Particularmente, daremos seguimiento a aquellas contiendas provincianas que fueron definiendo los términos de la dominación estatal, el patriotismo y la cultura política en la Guatemala republicana.

Desde los primeros años de vida republicana, en todos los países del istmo centroamericano el Estado fue una entidad frágil, en continua disputa y redefinición. Aun cuando la historiografía política reconstruyó este período de la historia estatal, en términos de la contienda entre liberales y conservadores, lo cierto es que, independientemente de la ideología pregonada por cada una

de las facciones en lucha, en el mundo provinciano prevalecieron muchas de las formas de relación y mecanismos de dominación colonial. El pensamiento de las élites regionales se asentó en una cultura política de arraigo colonial, que siempre rememoró el honor, el servicio en armas y el patriotismo provinciano, no necesariamente porque éstas tuvieran mentalidades «atrasadas», sino porque los cimientos de su poder político y económico descansaban en relaciones de tipo servil al interior de sus territorios de influencia. Por consiguiente, las formas de entender y ejercer el poder del Estado, regularmente, no correspondían al tipo de relaciones normadas por el Estado de derecho (Gledhill, 2001). Hasta bien entrado el siglo XX, para tener acceso al poder seguía siendo necesario buscar *los conectes* con aquellos actores que disfrutaban de influencias y establecer algunos *arreglos* que no necesariamente tenían que ver con la cara oficial de la institucionalidad estatal.

Desde los primeros años de la vida republicana, la presencia del Estado en el espacio regional fue precaria y radicalmente desigual. Tanto las élites políticas como aquellos caudillos que dirigieron el Estado siempre buscaron a los caciques regionales para establecer su autoridad, enfrentar las contiendas populares y dirimir sus diferencias con aquellas facciones con quienes sostenían disputas por territorios, rutas de comercio y espacios de poder regional/nacional. Por su parte, los caciques provincianos buscaban aquellas *palancas* que les permitieran influir en la institucionalidad del Estado para llevar adelante sus más variados intereses y proyectos. Esta relación de colaboración y/o competencia entre caudillos que se movían a escala nacional y caciques provincianos fue modelando el proceso de formación del Estado nacional, al mismo tiempo que su soberanía quedó *comprometida*, en tanto que fortaleció un modelo de Estado que reconocía las realidades del poder que existían y siempre han existido en las sombras (Gledhill, 2001).

En este capítulo analizaremos: 1) las rivalidades provincianas y el ciclo contencioso que definió la corta vida del Estado federal en Centroamérica. Pondremos especial atención a la contienda por el dominio de los territorios del comercio atlántico entre el Estado de Guatemala, las empresas de comercio británico/beliceñas y los comerciantes nororientales de Gualán, Zacapa y Chiquimula, quienes participaron activamente en el Movimiento de la Montaña; 2) analizaremos las transformaciones y reacomodos de poder ocurridos en el nororiente durante la dictadura oligárquica y los rasgos más importantes

del proceso de formación del Estado durante este periodo. Al reconstruir el proceso de formación del Estado, usando como escala de análisis el nororiente de Guatemala, observaremos los procesos dinámicos que *interconectaron* este territorio con el comercio transatlántico, las disputas imperiales y la expansión colonial que se ensayó en el siglo XIX.

1. Comercio ilegal y soberanías provincianas

La inestabilidad política, conflictividad y continuas rupturas que caracterizó la transición entre el régimen colonial y republicano en Centroamérica, se debió en parte a que la Real Audiencia de Guatemala nunca llegó a unificar política y económicamente su territorio. Antes bien, en estos confines coloniales predominó la fragmentación provinciana y la ausencia de una riqueza mineral que requiriera de una administración colonial sólida y un desarrollo mercantil capaz de integrar la región (Demyk, 1995). A ello se sumó la dispersión de los núcleos poblados, el predominio de una economía de subsistencia, el arraigo de las redes del contrabando y la evasión de impuestos, la mediocridad de las comunicaciones terrestres y la rigidez de la estructura de castas.

Muchos años antes de que se declarara la independencia de Centroamérica, España ya había perdido el control de la economía regional; el comercio de importación/exportación con Europa estaba siendo controlado por las redes de contrabando vinculadas a las casas comerciales inglesas radicadas en Jamaica y luego en Belice. De hecho, el convenio de libre comercio que se estableció con Inglaterra en 1817 solo vino a ratificar la debilidad del sistema comercial español frente al dinamismo del comercio ilegal que se había establecido con esta potencia.

Cuando Carlos de Urrutia Montoya y Matos, asumió la presidencia de la Real Audiencia de Guatemala en 1818, traía cuidadosas instrucciones de la corona española para hacer la paz con los más influyentes comerciantes de Guatemala (principalmente con los Aycinena, que tenían el control del cabildo de Ciudad Guatemala). Este presidente intentó hacer una pequeña reforma comercial al permitir que los comerciantes británicos entraran legalmente a los puertos centroamericanos, al mismo tiempo, ratificó la prohibición a los comerciantes guatemaltecos de viajar a Belice. Esta reforma, finalmente legitimó el tráfico de contrabando, en tanto que beneficiaba al gobierno a través de los impuestos

aduaneros sobre los productos de importación. No obstante, arguye Wortman (1991:277), *esta grieta en el dique pronto se convirtió en diluvio,* a medida que los comerciantes de la región viajaban -primero subrepticiamente y luego abiertamente- al asentamiento británico para llevar sus productos de exportación y abastecerse de las mercancías de importación.

Finalmente, el convenio de «libre comercio» sirvió para amparar los circuitos del comercio ilegal que operaban desde el triángulo norte del istmo centroamericano. A medida que el libre comercio y el contrabando se convertían en una práctica abierta, las provincias internas adquirían más autonomía. A manera de ejemplo, vale decir que desde 1812, la elite comerciante de la provincia de Chiquimula había liderado un movimiento de oposición al régimen que proclamaba la autonomía del nororiente de Guatemala, mientras que las provincias de Honduras y Nicaragua rechazaron al régimen guatemalteco un año antes de la independencia. Asimismo, cuando se declaró la Independencia, ésta fue proclamada en diferentes ocasiones y circunstancias por los cabildos independientes, nunca por una autoridad nacional.

Sin un soberano en España, la mayoría de los corregidores se convirtieron en soberanos que gobernaban independientemente sus territorios y se oponían abiertamente al poder central (Wortman, 1991:275). De allí en adelante, cualquier intento por conservar la unidad centroamericana no serviría de nada. En este contexto de fragmentación y guerras provincianas se formaron Estados pequeños y débiles con nuevas instituciones, pero con viejas prácticas de gobernar. De hecho, un factor que influyó decisivamente en la conflictividad y fragmentación política de la región fue la lucha que desplegaron las oligarquías provincianas por alcanzar la autonomía comercial y administrativa en sus territorios.

En los últimos años del dominio español, las élites comerciantes del nororiente, Honduras, Nicaragua y Costa Rica venían participando en las redes de contrabando manejadas por Inglaterra –desde sus bases caribeñas y Belice– para esquivar las cargas impuestas por la oligarquía comercial guatemalteca (Demyk, 1995:18). Esto último, sumado a la administración centralista y autoritaria ejercida por la aristocracia criolla y peninsular guatemalteca, llevó a que el ambiente político de la Audiencia de Guatemala se caracterizara por la disgregación, y en algunos casos por la ingobernabilidad, particularmente cada vez que los patricios guatemaltecos pretendían controlar los puestos claves de la

administración estatal, los circuitos de recaudación del impuesto comercial y del tributo indígena (Pinto Soria, 1983).

Al comparar la lenta ruptura del vínculo colonial que experimentó Centroamérica en relación con los procesos vividos en otros países de América Latina (México, Colombia, Venezuela, etc.), uno de los consensos académicos gira en torno a que la independencia en esta región no fue resultado de una guerra revolucionaria anticolonial que incluyera a todas las provincias y lograra establecer alianzas entre las oligarquías criollas y los sectores medios y populares de la sociedad. Esta diferencia se debió en parte al predominio de una oligarquía guatemalteca conservadora y reacia a cualquier movimiento que cuestionara el orden colonial; al arraigado localismo de las élites y a su incapacidad de establecer alianzas con otros sectores. De hecho, las rivalidades provincianas, las guerras entre diferentes facciones de caudillos y la exclusión de los pueblos indígenas serán algunos de los rasgos más distintivos del proceso de formación y posterior fracaso del Estado federal en Centroamérica.

De hecho, el Acta de Independencia fue el resultado de una lenta corriente que se alejó del gobierno central a comienzos del siglo XIX gracias al aumento de contactos comerciales con naciones extranjeras, y se fortaleció con los enredos militares destructivos de la metrópolis. En 1821, Centroamérica se disolvió en una multitud de cabildos independientes y localistas. Las élites provincianas controlaban los asuntos de cada región sin preocuparse por un gobierno colonial o por los asuntos o disposiciones del gobierno de la ciudad de Guatemala.

Cada uno de los corregimientos y alcaldías mayores que se reorganizaron durante las primeras décadas del siglo XIX respondió de manera diferente a los acontecimientos derivados de la crisis colonial. Aun cuando todos aceptaron la independencia de España, sus respuestas acerca del futuro inmediato fueron diversas y, en muchos casos, encontradas. Por ejemplo, Quetzaltenango y muchos de los pueblos de las tierras altas y la región conocida como Provincias Orientales del Imperio (Comayagua, León, Heredia y Cartago) buscaron adherirse a México temiendo, no solo la agresión extranjera, sino previendo que Guatemala buscara restablecer su dominio político. Mientras tanto, las provincias de Chiquimula de la Sierra, Tegucigalpa, Granada, San José Alajuela y San Salvador veían con recelo el liderazgo mexicano y rechazaban la idea de adscribirse nuevamente a un régimen imperial (Hall y Pérez 2003:41).

Frente a su propia crisis de gobernabilidad y su afán por mantener la posición de dominio frente a las demás provincias centroamericanas, la élite oligarca de la ciudad de Guatemala asumió la adscripción al proyecto imperial de Iturbide como la opción más adecuada ante la incertidumbre del momento, toda vez que el istmo no podía permanecer sujeto a la metrópoli, mientras en México y Colombia triunfaba la independencia (Vázquez, 2006). Además, veían en la alianza en el imperio de Iturbide el sustituto más cercano del poder colonial que le garantizaría respaldo para seguir disfrutando de sus privilegios coloniales. En otras palabras, los criollos guatemaltecos veían en la anexión a México la oportunidad de reposicionarse dentro del nuevo orden, en tanto que Iturbide les ofreció una alianza mutuamente provechosa respecto a las autoridades constituidas, y suficientes escaños en el Congreso mexicano.

En la decisión del Gobierno mexicano de anexar las provincias guatemaltecas, según Mario Vázquez (2006), prevalecieron algunos criterios que trascendieron la existencia misma del Imperio de Iturbide y refrendaron su vigencia a lo largo de los siglos XIX y XX. Algunos de estos criterios fueron la pertinencia de modificar los antiguos linderos coloniales, en aras de dotar de profundidad territorial a las fronteras del sureste; proyectar ampliamente la influencia mexicana sobre Centroamérica y el Caribe, con miras a fortalecer la posición del país en el escenario internacional; apuntalar su liderazgo en América Latina y buscarle un contrapeso a las potencias europeas y a los Estados Unidos.

En medio de profundas diferencias y objetivos contrapuestos entre el Gobierno de Guatemala y las autoridades del interior, y enfrentamientos entre grupos rivales dentro de cada provincia, finalmente, en el último trimestre de 1821 se concretó la anexión a México. No obstante, pocos meses después se hicieron evidentes los riesgos implícitos en dicha anexión, sobre todo después de que el gobierno de Iturbide estableciera una serie de medidas arbitrarias que buscaban controlar a la oposición política y hacer efectivo su dominio económico en toda la región[45].

La adhesión a México concluyó en 1823, cuando el imperio de Iturbide colapsó con el Plan de Casa Mata, y los liberales mexicanos restablecieron la República.

45 Algunas de estas medidas fueron el aumento de tarifas fiscales, la supresión de la Contaduría de Cuentas, el encarcelamiento de líderes políticos que se oponían a la anexión bajo el cargo de conspiración, el envío del Ejército a ocupar espacios estratégicos del istmo, la agresión militar a El Salvador y la reorganización de todo el territorio de Centro América en tres comandancias militares que transgredían las fronteras existentes entre las provincias (Vázquez, 2006).

En ese mismo año, las provincias de Centroamérica llamaron a un congreso constituyente, y en julio de 1823 impugnaron la anexión y declararon el antiguo Reino de Guatemala como una república independiente bajo el nombre de la Unión de Provincias de Centroamérica. Internamente, la conformación de la nueva república continuó siendo un proyecto accidentado e incierto, pues enfrentaba una sociedad en crisis y profundamente fragmentada, así como la oposición de importantes grupos de poder (principalmente la aristocracia comercial, la jerarquía de la Iglesia católica y la cancillería británica) que obstaculizarían todos aquellos esfuerzos tendientes a descolonizar la sociedad y fortalecer la unidad centroamericana.

Aun cuando el experimento anexionista tuvo una corta vida, no solamente evidenció la fragilidad de las ideas acerca de la unión de las repúblicas centroamericanas, sino lo arraigado de las contradicciones y diferencias al interior de éstas. Por otra parte, esta experiencia marcó el curso subsiguiente del Estado federal de Centroamérica y del propio Estado de Guatemala. En principio, porque los desaciertos y los desastrosos resultados de la anexión al imperio de Iturbide ahondaron la conflictividad y las posiciones encontradas entre las provincias y condujeron a la sangrienta guerra entre San Salvador y Guatemala, acaecida entre 1826 y 1829. Con esta guerra se inauguró el periodo de violencia que caracterizó a la primera mitad del siglo XIX en Centroamérica. Lo más importante de todo esto, nos dice Wortman (1991), es que la Centroamérica armada destruyó el sentido de orden y paz que había existido en la época colonial y fomentó una mentalidad militarista que condujo a una década de luchas destructivas y más de un siglo de violencia y desconcierto político, un doloroso legado que se reactualiza continuamente. La conflictividad social continuó dentro de las nuevas fronteras nacionales a medida que las familias de la élite provinciana competían por el control del centro. En algunos territorios el gobierno central se desvaneció completamente, en otras, el Gobierno, las familias y caudillos provincianos estaban en guerra.

La iniciativa de formar la República Federal de Centroamérica entre 1823 y 1842 se asentó en una sociedad fragmentada, con múltiples contiendas de poder y territorios en litigio. Algunas de estas contiendas eran: las antiguas disputas territoriales con Inglaterra en relación con las tierras bajas del litoral atlántico (particularmente Honduras Británica, hoy Belice, y la costa Mosquitia); los forcejeos entre las provincias y al interior de éstas por alcanzar su autonomía; las

disputas entre Guatemala y México por las provincias de Chiapas y el Soconusco; la negativa de los pueblos indígenas de las tierras altas centrales a jurar lealtad al Estado federal, y los continuos intentos de las élites criollas y ladinas de las tierras altas occidentales de separarse de la provincia de Guatemala y conformar el Estado de Los Altos. Es importante resaltar que durante las tres décadas siguientes a la independencia, la élite altense (quetzalteca y marquense), con el apoyo del grueso de la población ladina, se enfrascó en una tenaz lucha contra la élite comercial y política de la ciudad de Guatemala con el fin de obtener su autonomía regional. Según se verá más adelante, las tensiones y disputas de poder entre las élites oligarcas de la ciudad de Guatemala y las élites provincianas de Los Altos y el nororiente son claves para entender el proceso de formación del Estado que seguirá Guatemala durante el siglo XIX.

En una sociedad poscolonial, con múltiples disputas irresueltas y debilitada por la rivalidad provinciana, la incertidumbre política y territorial, diferentes caudillos y grupos de poder competían por el control de la Federación, la reorganización de las provincias del istmo y el control de sus recursos estratégicos: tierra, fuerza de trabajo, redes de abasto, flujos financieros, rutas comerciales e instituciones del Estado que les permitieran avanzar en sus iniciativas privadas. De esa cuenta, aquellas élites que pretendieran impulsar la modernización del istmo se enfrentaban a grandes desafíos para poder alcanzar algunos consensos básicos que les permitieran definir el ámbito político y fiscal del nuevo Estado centroamericano, demarcar las fronteras de su territorio, organizar una administración relativamente coherente y un ejército nacional que garantizara la seguridad interior. Otro reto, tanto o más difícil que los anteriores, era la construcción de un imaginario nacional que les diera identidad y cohesión a los muchos espacios fragmentados que durante tres siglos de dominio colonial habían experimentado amplios márgenes de soberanía provinciana y profundas rivalidades entre sí.

La ruptura del pacto colonial y la adopción de la forma federativa de gobierno suponían dejar atrás las antiguas formas de administración colonial. Suponían también, según Pinto Soria (1993), establecer formas de gobierno más complejas, compuestas básicamente por dos administraciones: el Estado federal y el Estado provinciano, lo cual demandaba la contratación de un mayor número de funcionarios con capacitación especializada y un mayor presupuesto de funcionamiento. Todos estos requerimientos implicaban serias dificultades para

una nueva élite gobernante sin legitimidad política, sin experiencia en las nuevas formas de gobierno federal y sin recursos para enfrentar la profunda crisis deficitaria que pesaba sobre la naciente federación, particularmente luego de que las élites provincianas se negaran a cumplir con sus responsabilidades fiscales y dejaran de pagar la cuota que les correspondía para sostener a las autoridades federales.

La fragmentación y conflictividad latente que se vivía en el nuevo Estado federal llevó a que sus dirigentes políticos recurrieran cada vez más a la formación de ejércitos caudillos y al endeudamiento externo para financiar los continuos enfrentamientos armados en los que se vieron involucrados a lo largo de los 20 años que duró la Federación. Así, desde sus inicios, el Estado centroamericano surgió estrechamente ligado a la formación de un ejército compuesto por diferentes grupos de milicianos, y a la intervención de aquellas potencias imperiales que financiaron las iniciativas guerreristas en la región.

1.1 Expansión colonial inglesa y contienda por el territorio Nororiental

Desde sus inicios, la relación que sostuvo la nueva República Federal de Centroamérica con Inglaterra giró en torno a dos asuntos medulares: el primero, la disputa de buena parte del territorio del istmo ubicada en la costa atlántica; y el segundo, la firma de un tratado comercial que regulara las múltiples transacciones que realizaban los comerciantes ingleses/beliceños en la región. El problema consistía, según Rodríguez (1995), en clarificar si Gran Bretaña podía o no reclamar derechos de soberanía sobre las tierras bajas en el litoral atlántico y sus islas adyacentes. Desde el principio, la disputa giró en torno al estado legal del territorio de Honduras Británica, hoy Belice, y de las Islas de la Bahía, en el golfo de Honduras. Inglaterra demandaba la estratégica isla de Roatán y todo el territorio de la Mosquitia, el cual abarcaba buena parte de la costa atlántica de Honduras, toda la de Nicaragua y una porción de la de Costa Rica.

Además, las empresas madereras inglesas ahora debían reconocer al Estado federal de Centroamérica como el nuevo garante de aquellas concesiones que le habían sido otorgadas desde 1780, justo en un momento en que estas empresas ya habían agotado las reservas forestales en sus antiguos dominios y necesitaban expandirse más allá de los límites originales fijados por los tratados del siglo XVIII. Por otra parte, Inglaterra tenía un acusado interés en los mercados potenciales de Centroamérica, y en las posibilidades que ofrecía la geografía de esta región

para la construcción de rutas y ejes transoceánicos que revolucionarían los flujos comerciales a escala mundial.

La apertura de relaciones comerciales directas con los británicos provocó un repentino aumento de las transacciones de contrabando. Los comerciantes de Belice, que habían traficado con Guatemala por más de veinte años, lograron acceso y contactos directos con la mayor parte de productores y comerciantes de las provincias centroamericanas (Wortman, 1991:277). Los bienes baratos de algodón entraban en la región y se vendían a precios tan bajos que la demanda aumentó y la economía centroamericana estuvo temporalmente estimulada. El enorme margen de utilidad del que disfrutaban los ingleses les permitía intercambiar textiles por añil barato, lo mismo que por plata.

Entre 1821 y 1825, cuando la economía británica se expandió y aumentó la demanda de añil, la Centroamérica independiente se conectaba con Inglaterra mediante Belice. Durante esos años fue particularmente importante el tráfico del comercio ilegal que se estableció en las rutas del nororiente que conectaban a las provincias salvadoreñas productoras de añil con Chiquimula, Zacapa y la ruta hacia el Atlántico a través del río Motagua y el puerto fluvial de Gualán (Ver el siguiente mapa sobre la ruta comercial de Belice). En esos años despuntan influyentes casas comerciales del nororiente, como lo fue la Casa Porta, que controló el comercio de importación-exportación y el comercio interior entre las provincias del nororiente de Guatemala y las provincias fronterizas de El Salvador y Honduras.

Mapa No. 5
La ruta comercial de Belice



Fuente: Naylor (1988: xiii). Reinterpretación de Luis González.

Además, Inglaterra pretendía que los nuevos Estados establecieran comunicaciones duraderas y seguras entre los centros de poblamiento, las plantaciones de la vertiente pacífica y los puertos de exportación de la costa atlántica. El siguiente mapa, trazado en 1830 por el cartógrafo británico John Baily, revela elocuentemente el creciente interés de Inglaterra en la apertura de diferentes rutas de comunicación interoceánica a través de Honduras, Nicaragua y Tehuantepec. Es importante aclarar que este mapa no fue publicado sino hasta 1850, momento en el que fue ampliamente criticado por los cartógrafos de las

otras potencias mundiales como muestra de un claro intento de los británicos por establecer su hegemonía en la navegación y el comercio transoceánicos a través del istmo centroamericano.

Mapa No. 6
Proyectos de canales interoceánicos



Fuente: John Baily.

Los intereses coloniales y geopolíticos de Gran Bretaña en el istmo centroamericano hicieron que la relación con esta potencia fuera agresiva, pero al mismo tiempo ambivalente, si no es que contradictoria. Desde sus inicios, Inglaterra se negó a reconocer la independencia y legitimidad de la República Federal de Centroamérica o a establecer relaciones diplomáticas con cualquiera de los cinco Estados centroamericanos. En otras palabras, Inglaterra se negó a reconocer el derecho de las nuevas repúblicas a negociar los territorios en disputa. En contrapartida, estableció relaciones bilaterales entre las casas comerciales inglesas y los gobiernos provincianos; fortaleció las redes de contrabando a través de las cuales operaban los comerciantes ingleses radicados en Belice y la Mosquitia nicaragüense y costarricense; y acudió a su fuerza naval para resolver

las disputas con cada uno de los nacientes Estados de istmo. Lejos de negociar con las nuevas autoridades republicanas, una de las principales responsabilidades del representante británico para Centroamérica –el peculiar personaje Frederick Chatfield– era el consolidar y ampliar los dominios coloniales de Inglaterra en la región. Esta pretensión siempre se fundó en el viejo principio del «derecho de ocupación efectiva», el cual establecía que, en la práctica, Belice era una colonia británica. Este derecho de posesión (o derecho prescripto) fue el eje a partir del cual Inglaterra reclamó como propias todas aquellas concesiones que el imperio español le había hecho en 1783 y 1886. A estas concesiones se sumaban todos aquellos territorios que ellos alegaban haber ocupado antes de la Independencia, y todos aquellos que en adelante les fueran concesionados.

Los dirigentes liberales involucrados en la organización del Estado federal argüían que el monopolio que ejercían las casas comerciales inglesas radicadas en Belice, sumado a la impunidad con que operaban sus redes de contrabando y la creciente expansión colonial de Inglaterra en el Atlántico, limitaba el desarrollo económico de la región. Y aun cuando intentaban restringir el poder de la oligarquía comercial inglesa-beliceña, el resultado de sus negociaciones se traducía frecuentemente en la ampliación de las concesiones y privilegios otorgados a estas casas comerciales. Ello en detrimento de los intereses de la población que radicaba en las tierras concesionadas.

En síntesis, la política del gobierno federal respecto a Inglaterra fue ambivalente y contradictoria. Una combinación de relaciones de intercambio comercial y contrabando, dependencia en el financiamiento y adquisición de las armas utilizadas en las guerras intestinas, disputa de unos territorios y, a la vez, generosas concesiones de otros con el fin de propiciar la inmigración europea, amortiguar las deudas contraídas a través de empréstitos condicionados, construir nuevos puertos y caminos, y frenar el poder de las élites provincianas. Como veremos en el siguiente apartado, esta contradictoria política del gobierno federal provocó el descontento, tanto de las élites (comerciantes y transportistas) como de los campesinos del oriente de Guatemala, que se organizaron en el levantamiento de La Montaña, una de las sublevaciones más decisivas que definió el proceso de formación del Estado de Guatemala en el temprano siglo XIX.

1.2 Modernización liberal, intereses provincianos y respuesta popular

Aun cuando las dos décadas que duró el Estado federal de Centroamérica se caracterizaron por su alto grado de conflictividad y por la rivalidad entre caudillos provincianos, vale la pena distinguir las dos grandes etapas de su proceso de formación: la primera arranca con la Asamblea Nacional Constituyente en 1823. En ésta se definen las bases institucionales y políticas del proyecto constitucional del Estado. En la segunda –que va de 1829 a 1838– se refunda el proyecto federal bajo la hegemonía del Movimiento Morazánico, el cual representaba los intereses de las élites modernizadoras de Honduras, El Salvador y Guatemala. En esta segunda etapa, dos de los ideólogos del movimiento (Francisco Morazán y Mariano Gálvez) llegan al poder e impulsan una serie de medidas tendientes a destruir las estructuras del antiguo régimen y a sentar las bases institucionales de una república centroamericana «moderna, progresista y acorde a los principios liberales». Ralph Woodward (1992), considera que en el corazón del nuevo Estado liberal estaba el deseo de un crecimiento económico rápido mediante la expansión de las agroexportaciones. De esa cuenta, entre 1831 y 1838, en Guatemala la administración de Mariano Gálvez intentó estimular el desarrollo del comercio, de la agricultura de plantación y de una extensa red de comunicaciones, pero con muy poca comprensión de los efectos que sus políticas tendrían en el bienestar de la mayoría de la población. Otras de las iniciativas modernizadoras impulsadas por Gálvez, y que finalmente provocaron el descontento popular, fueron:

a. La definición de una política de comercio que promovió las importaciones de textiles británicos a gran escala y llevó a la quiebra a las pequeñas empresas artesanales de textiles y a sus comerciantes locales.

b. El restablecimiento del impuesto directo de la capitación, reminiscencia del tributo cobrado por los españoles y que suscitó sostenidos procesos de rebelión indígena. La capitación estaba dirigida, principalmente, a recaudar el impuesto de los jornaleros e indígenas, quienes debían pagar un peso per cápita. Posteriormente, la administración de Gálvez elevó dicho impuesto a dos pesos, una cantidad difícil de pagar por un sector de la población cuya economía aún operaba mediante el intercambio de productos y favores. Además, los indígenas estaban molestos por la decisión del gobierno de Gálvez de tomar su dinero de las cajas de comunidad para sufragar los gastos del Gobierno. Esta decisión fiscal provocó un intenso debate entre los conservadores y los liberales. Los primeros opinaban que los indígenas podían utilizar esos fondos de la

manera que consideraran pertinente, mientras que los liberales aducían que se tenía que invertir un porcentaje de esos fondos en la educación (Dary, 2008:26).

c. La construcción de una extensa red de caminos y puertos que facilitaran la expansión de las agroexportaciones. Estos proyectos exigían, además de una fuerte inversión de capital extranjero y el uso de mano de obra forzada, por lo que el Gobierno estableció que los hombres de cada localidad tenían obligación de trabajar tres días al mes en la construcción de carreteras. En cumplimiento de esta disposición los comisionados locales debían enviar periódicamente las cuadrillas de trabajadores forzados a los puntos requeridos por las autoridades.

d. El impulso de una política de regularización, titulación y adquisición privada de las tierras públicas, tierras comunales y ejidales indígenas con el fin de estimular el aumento de la producción de agroexportación. Esta política, lejos de tener algún incentivo para los indígenas, provocó entre ellos un profundo malestar frente al poder que el Estado confirió a las autoridades ladinas de sus pueblos para que éstas decidieran sobre los recursos de su territorio. Por ejemplo, en 1833 los Principales de las comunidades ch'orti' de Gualán protestaron porque el gobernador de Chiquimula había vendido a unos ladinos de la región tierras que pertenecían a su parcialidad bajo el subterfugio de que éstas eran «tierras baldías». Al presentar sus reclamos al Gobierno, los representantes de los campesinos argumentaban: «en toda esta confusión del Gobierno solo los indios sufrirán»[46]. En esos mismos años, los funcionarios ladinos radicados en diferentes pueblos ch'orti' se sintieron con derecho a ocupar y/o meter su ganado en las tierras que pertenecían a las comunidades indígenas de la región[47].

46 Los vecinos del pueblo de Gualán al S. Presidente Ejecutivo, 1 de enero de 1833, AGCA, B119 Leg. 2519, Exp. 56873, Secretaria General del Gobierno al consejero representativo, febrero 21 de 1834, AGCA B119, Leg. 2519, Exp. 56832, Fol 1. /Ingersoll, 1972:67.

47 Por ejemplo, en febrero de 1830, los pobladores de Santa Cruz Chiquimula, en el distrito de Mita, presentaron una queja al Gobierno porque el ganado del hacendado Francisco Mora estaba dañando sus cultivos [AGCA, B. 119, Leg. 2553, Exp. 60057, Fol 1. /Ingersoll, 1972:67]. En octubre de 1831, el Común de Principales del pueblo de Santiago Jocotán se quejó ante el Gobierno porque el ganado de los hacendados ladinos de la región estaba dañando sus cultivos, causando graves daños a sus campos de caña y parcelas de frijol y maíz. «[…] Nosotros hemos tenido muchos problemas por el ganado y a pesar de que nosotros hemos enviado nuestras quejas al Gobierno ellos no nos han escuchado con justicia» [AGCA, B.10, Leg. 25.15, Exp. 56630/Ingersoll, 1972:67].

e. El retiro del clero y los religiosos de los espacios políticos, económicos y culturales que tradicionalmente venía ocupando. Entre 1829 y 1832 se expulsó a curas y religiosas; se confiscaron los bienes de las órdenes regulares, se prohibió el cobro del diezmo, se suprimieron los feriados religiosos y se decretó la libertad de culto. Más tarde, la legislación guatemalteca autorizó el matrimonio civil, legalizó el divorcio y eliminó la intervención de la Iglesia en la educación. Particularmente, se limitó el protectorado paternalista que la Iglesia católica ejercía en las comunidades rurales y se buscó «occidentalizar al indígena» a través de la educación laica.

Del conjunto de políticas impulsadas por el gobierno de Gálvez, quizá la más controversial para los pueblos del nororiente fue la política de inmigración extranjera, mediante la cual, el Estado de Guatemala otorgó buena parte del territorio nororiental (tierra y recursos estratégicos para el comercio y la industria de extracción maderera) a empresas extranjeras de colonización. Dada la importancia que estas concesiones tuvieron en la vida económica y política del país y de los nororientales en particular, les dedicaremos especial atención.

1.3 Los contratos de colonización extranjera

El proceso de formación del Estado en este periodo está íntimamente relacionado con el impulso del desarrollo capitalista a través de una serie de políticas de inmigración que promovían la llegada de inversionistas y empresas de colonización extranjera al país a cambio de extensas concesiones de tierra, lagos y ríos estratégicos en los circuitos del comercio atlántico. El razonamiento de los gobiernos liberales era que el costo de la apertura de puertos, caminos y rutas de navegación fluvial en las zonas del litoral atlántico estaba más allá de los recursos económicos de los capitalistas guatemaltecos y el presupuesto nacional (Griffith, 1959). Por consiguiente, si se quería impulsar el desarrollo económico/comercial de esta región debían atraer a empresas extranjeras y a cambio ofrecerles amplias prerrogativas: tierra, recursos naturales, franquicias y privilegios en la administración económica y sociopolítica de los territorios concedidos. Sin embargo, la laxitud respecto a las obligaciones contraídas por las empresas extranjeras vició el proceso y permitió que los empresarios incumplieran lo convenido con relativa asiduidad y descaro.

Durante los primeros años de formación de la república de Guatemala, el problema del desarrollo nacional se focalizó en el territorio colindante con Belice debido a la actuación nefasta que –a ojos de los liberales– estaban jugando los comerciantes y funcionarios de la vecina colonia británica en los asuntos centroamericanos. Los liberales estaban convencidos de que el escaso desarrollo económico del país se debía al hecho de que los comerciantes de Belice habían acaparado el comercio de la nueva república, tanto el legítimo como el de contrabando, al punto de convertirla en tributaria del establecimiento británico[48].

El gobierno de Gálvez esperaba que la colonización de las tierras de Izabal por parte de inmigrantes extranjeros y la habilitación del puerto Santo Tomás al comercio mundial pondrían freno al monopolio comercial y a la usurpación territorial ejercida por los comerciantes ingleses/beliceños. Sin embargo, al examinar los contratos contraídos entre el Gobierno de Guatemala y las empresas extranjeras de colonización que prometían construir en el puerto de Santo Tomás, se observa que, paradójicamente, la mayoría de sus socios y/o representantes eran ingleses –radicados en Belice– con una clara estrategia de expansión colonial en los territorios aledaños a la frontera beliceña, el golfo Dulce y las rutas del comercio atlántico y transfronterizo del istmo centroamericano. De esa cuenta, las concesiones, lejos de lograr la pretendida autonomía comercial y el impulso modernizante por parte de «inmigrantes industriosos», únicamente consolidaron la influencia de Gran Bretaña en la región, el monopolio comercial de Belice y su expansión en la industria extractiva de maderera.

Por otra parte, es importante señalar que desde sus inicios, el presupuesto de defensa del gobierno de la federación y de cada uno de los Estados que la integró siempre constituyó un mercado seguro para ciertas industrias y casas comerciales inglesas y alemanas. El contraste que existía entre el gasto militar y el social reflejaba tanto las circunstancias como las prioridades de las élites centroamericanas. Los conflictos al interior de cada provincia y los conflictos limítrofes con las otras provincias centroamericanas, hicieron que la federación mantuviera un presupuesto de guerra sumamente alto. La constante demanda de armas, equipamiento y uniformes aumentó la deuda y la dependencia del capital que éstas les ofrecían, y de consiguiente, contribuyó a reducir los ya

48 Según Griffith (1959:9) en los primeros años del siglo XIX Belice ya era un puerto marítimo con facilidades para recibir grandes barcos, contaba con la presencia de casas comerciales que mantenían contacto con los proveedores de mercancías europeas y con importadores de los frutos del Nuevo Mundo. Además, tenía presencia de casas comisionistas que vendían al crédito sus mercaderías a los comerciantes de la América Central.

exiguos márgenes de negociación con aquellas potencias extranjeras interesadas en expandir sus empresas de colonización en la región.

La influencia inglesa en Centroamérica se fortaleció por la vía de los empréstitos públicos que se realizaban a través del Estado con la garantía prendaria de extensos territorios, los ingresos de aduana o alcabala marítima u otras formas de impuestos al comercio exterior. La deuda contraída con Inglaterra siempre viabilizó la presión diplomática que esta potencia ejercía en la región, al mismo tiempo que embargó la posibilidad de capitalizar el erario público. Cuando se disolvió la Federación, los cinco países tuvieron que asumir una parte proporcional de la deuda contraída por el Estado federal. El gobierno de Guatemala por sí solo debía pagar 67,900 libras esterlinas, 5/12 del total de la deuda; sin embargo, ésta siempre quedó en mora y no es sino hasta 1856 que el gobierno conservador se vio obligado a contratar un nuevo empréstito por 100,000 libras para reconvertir la deuda (Torres-Rivas, 1989:18).

Los estudios de Griffith (1959 y 1965) e Ingersoll (1972) ofrecen abundantes detalles acerca de las concesiones otorgadas por el Estado republicano a diferentes empresas de colonización europea, el tipo de contrato firmado y los problemas que enfrentó el Gobierno cada vez que no obtuvo los resultados pactados en los convenios de colonización. Dada la importancia que estos contratos tuvieron en la vida económica y política del nororiente, a continuación presentamos una síntesis de los contratos más importantes, los compromisos contraídos entre las partes, sus beneficios y/o regalías, pues ello nos permitirá entender el porqué de la beligerante respuesta de los pueblos del nororiente frente a las políticas de colonización europea en sus territorios.

> **1831/** La Asamblea Legislativa autorizó contratar la construcción de un camino de ruedas que conectara la capital con el punto navegable en la costa atlántica; la apertura de canales y el establecimiento de líneas de vapores en el lago de Izabal y en los ríos Motagua y Polochic. A cambio, se ofrecía a los contratistas el privilegio exclusivo de la navegación durante un periodo que se prolongaba proporcionalmente a la extensión del servicio a la capital, el pago de intereses sobre el dinero invertido en la construcción de caminos, el derecho de cobrar peaje durante el periodo necesario para la indemnización del costo, el privilegio exclusivo de usar carruajes en esos caminos, el derecho de extraer madera de los bosques y de exportarla a través de los puertos habilitados por esas vías. Se autorizó también al Gobierno para sufragar los gastos necesarios para

la selección de las mejores vías terrestres y fluviales y para emprender por cuenta propia los trabajos en caso de que no se presentara ningún contratista particular[49].

1834/ la Asamblea decretó la formación de una compañía de colonización, industria, comercio y agricultura de la Verapaz, Livingston y Santo Tomás. La ley establecía que la colonización de la Verapaz se formaría con mil colonos a través de dos años, de los cuales doscientos cincuenta debían establecerse en Santo Tomás. Los colonos gozarían de las mismas concesiones, privilegios y derechos que se autorizaban en la Ley Federal de inmigración extranjera y colonización de 1824. Sin embargo, la compañía constructora disfrutó más derechos que los establecidos por dicha ley, entre ellos el monopolio de la extracción de caoba y otras maderas preciosas en la región de Verapaz durante un periodo de 20 años; el monopolio de la navegación del río Polochic y los otros ríos en la región concedida durante 12 años, y el derecho de cobrar peaje por el «uso comercial» de cualquier camino que se construyera o se mejorara entre el lago de Izabal, el río Polochic, el puerto de Santo Tomás y el interior[50]. Esta ley sirvió de base para la firma de los contratos de colonización con diferentes empresas extrajeras.

1834/ El gobierno de Guatemala firmó el contrato para la colonización de las « tierras baldías» de la Alta Verapaz con la Compañía Comercial y Agrícola de la Costa Oriental de América Central (Eastern Coast of Central América Comercial and Agricultural Company), domiciliada en Londres. Esta concesión también incluía los derechos de navegación por el golfo Dulce y los ríos Dulce, Polochic y Motagua.

1834/ El gobierno de Guatemala firmó el contrato para la colonización del departamento de Chiquimula con Marshall Bennett, de Belice, y Carlos Meany, de Guatemala[51]. Esta compañía inglesa/beliceña (Bennett & Meany) obtuvo en tres contratos separados en el extenso territorio de lo que fue el antiguo corregimiento de Chiquimula de la Sierra y el corregimiento de Totonicapán, así como dos mil caballerías de tierras baldías al lado norte del golfo Dulce para establecer una colonia de inmigrantes extranjeros (ver el mapa 07)[52].

49 Pineda de Mont, I, 774-775/Griffth,1959:12

50 Pineda de Mont, I, 820-822.

51 El contrato fue reproducido en *Arbitraje de límites entre Guatemala y Honduras*.

52 Según Regina Wagner (1996:18) esta concesión le fue denegada al alemán Carlos Klee, quien la había solicitado en pago de la deuda contraída por el gobierno de Gálvez un año antes por la compra de 1,000 fusiles (vale recordar que Klee era dueño de una de las más poderosas casas comerciales que operaban en ciudad de Guatemala y concentraba el monopolio del comercio de la grana).

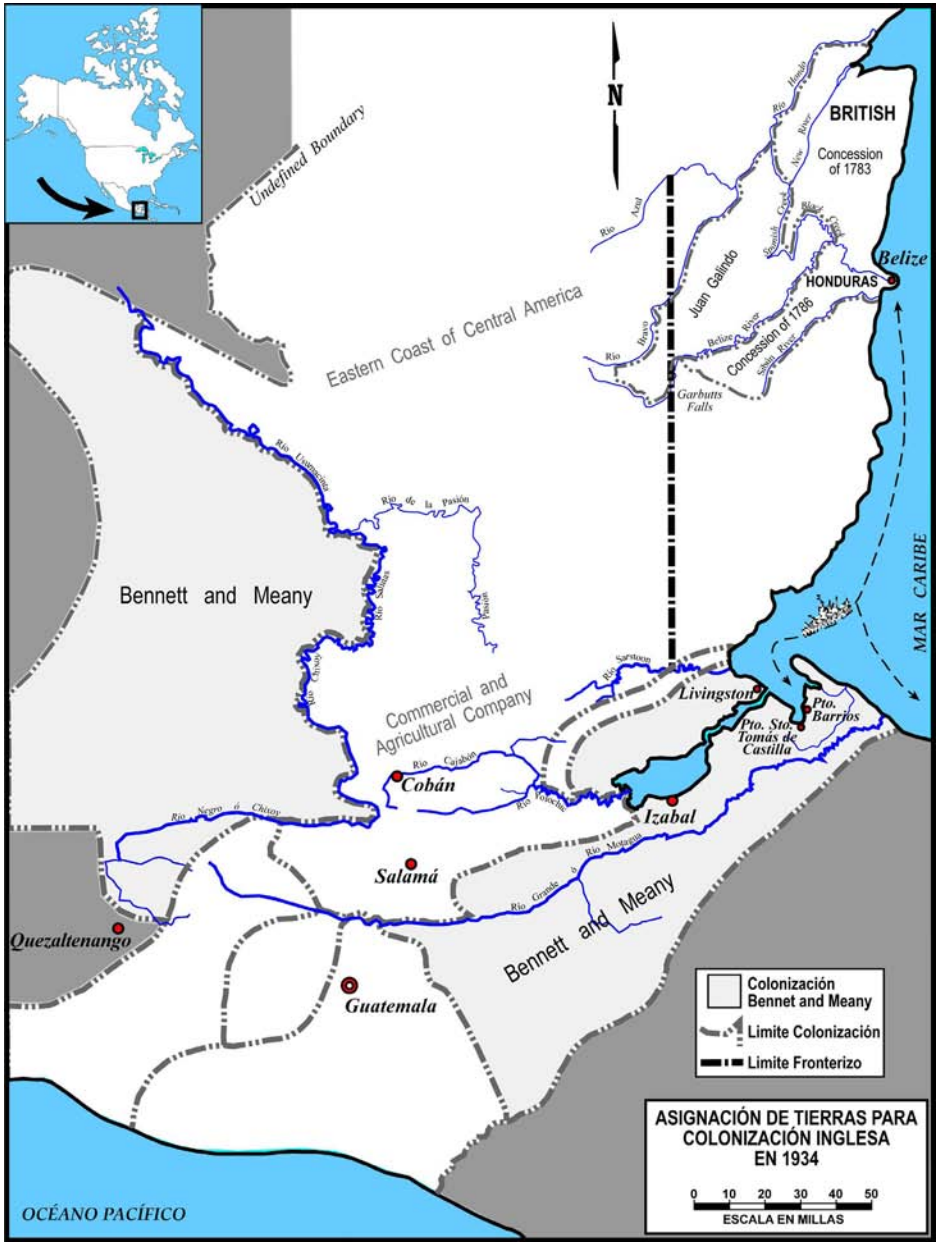
Marshall Bennett, era un coronel y comerciante inglés que llegó a Belice en 1787. Allí desempeñó los cargos de magistrado de la Corte Suprema, comandante de las milicias beliceñas y agente de la Lloyds Bank de Londres. Además de sus negocios de transporte marítimo y comercio transatlántico, era socio de las firmas Bennett & Martiny; Walsh, Bennett & Hall; y Bennett & Meany. A principios de los años 30, en sociedad con William Hall, estableció en Guatemala una sucursal comercial dedicada a la habilitación de pequeños productores de cochinilla, así como a la compra y exportación de la grana. En 1834 Bennett suscribió espléndidos contratos con el gobierno de Guatemala, en los que éste último le concedió el derecho a extraer caoba en el litoral caribeño de Guatemala, Honduras y Nicaragua.[53]

Entre marzo y agosto de 1834, el gobierno de Gálvez había otorgado a empresas extranjeras importantes concesiones, equivalentes a casi tres cuartas partes de las tierras estatales de Guatemala. La justificación preferida del gobierno fue el que las tierras otorgadas a las empresas extranjeras era «selváticas» y «deshabitadas». No obstante, al analizar la conflictividad alrededor de dichas tierras, se observa que éstas eran habitadas por campesinos medios y comunidades indígenas; asimismo, estaban ubicadas en la principal ruta comercial hacia el Atlántico -transitada por comerciantes, arrieros, cuatreros y toda clase de intermediarios locales que dominaban los circuitos del comercio trasatlántico y trasfronterizo del triángulo norte de Centroamérica-. Según observadores extranjeros, tales como el peculiar cónsul inglés (Frederick Chatfield), Gálvez ideó las políticas de colonización europea de esta región como medio para frenar las ambiciones y convulsionados planes de la «clase mestiza» o «raza mezclada» del nororiente, quienes (desde su perspectiva) venían conspirando con cierto éxito para tomar el gobierno de la república[54].

53 Ver *Fundación para la Cultura y el Desarrollo*, 2004:186-187.

54 Frederick Chatfield a Lord Palmerston, No. 22.11.12,1834. FO 15/14 fol. 298/Griffith, 1965:93.

Mapa No. 7
Asignación de Tierras a empresas de colonización inglesa



Fuente: Griffith (1965). Reinterpretado por Luis González.

Además, la administración de Gálvez creía que los europeos únicamente serían persuadidos a dejar las ventajas ofrecidas por sus propios países y enfrentar los riesgos de venir a Guatemala si se les ofrecían incentivos inusuales. Por eso, los contratos proveían para ambos (empresarios y colonos) una variedad de privilegios, concesiones y franquicias que ubicaban a los colonizadores en calidad de un distintivo grupo de individuos favorecidos por encima de «los hijos naturales de este país» (Griffith, 1965). Entre los más importantes incentivos estaban las ventajas económicas y fiscales, la exención de ciertas obligaciones demandadas a los ciudadanos y que podían resultar improductivas u onerosas para los nuevos colonizadores, privilegios y concesiones para que éstos se adaptaran a las disímiles tradiciones culturales y políticas del país.

Aun cuando el Gobierno pudo haber estado totalmente convencido de que estas concesiones eran necesarias, la opinión popular solía ser menos complaciente para con los futuros colonizadores. En este caso, sugiere Ingersoll (1972), la pregunta era si una sociedad tradicionalmente desconfiada de los extranjeros podría resistir el repentino choque de intimar con ellos. Específicamente, ¿podrían los habitantes encontrar tolerable que los extranjeros gozaran de las mismas ventajas, si es que no más que las que tenían los hijos nativos? ¿Podría la igualdad proclamada por los oradores de la independencia reconciliar con tales privilegios? ¿Podría una agresiva cultura ortodoxa tolerar la diversidad y el disenso? Quizá era inevitable que estas y otras preguntas relacionadas fueran convertidas en asuntos de orden nacional por aquellos ciudadanos que veían vulnerados sus derechos e intereses y/o personas con ambiciones políticas que estaban atentas para identificar aquellas áreas de controversia política.

1.4 La insurrección de los pueblos nororientales

Cuando se supo la noticia que el Gobierno de Gálvez había firmado los contratos de concesiones de tierras en el nororiente a favor de la empresa de Bennett & Meany, los primeros en reaccionar fueron los comerciantes y autoridades del puerto fluvial de Gualán. Muy pronto, los gualantecos presentaron un memorial de protesta en el cual pedían al jefe político de Chiquimula que respaldara sus reclamos y recomendaciones al Estado. La municipalidad de Gualán exigía nada menos que la anulación del acuerdo de concesión de los territorios de Izabal, Zacapa y Chiquimula. Los líderes del movimiento anticolonial calificaban como *ilegítimos* los contratos de adjudicación de tierra a empresas «extranjeras», en tanto que éstas afectaban los intereses de los hijos nativos del nororiente. El

argumento de la protesta se sintetizaba en una frase: «Si la tierra es propiedad nacional, nosotros somos miembros de esta nación, y tenemos más derecho a que ésta nos pertenezca; por tanto, nosotros nos oponemos a que sea vendida a extranjeros».[55]

A la protesta iniciada por los gualantecos, muy pronto se sumaron los otros pueblos del Nororiente. Los argumentos de los vecinos y autoridades municipales de estos pueblos incluían dos afirmaciones sobre los contratos de colonización: la primera, que la propiedad extranjera de la tierra en cuestión podría resultar en un desastre nacional; y, la segunda, que el Gobierno estaba totalmente equivocado al creer que el acuerdo podría rendir beneficios económicos al país. Si los réditos fiscales eran la justificación para conceder semejantes extensiones de tierra a los extranjeros, ellos alegaban que el Gobierno debió haber estado mejor asesorado para satisfacer las necesidades fiscales por medio de la recaudación de impuestos a sus ciudadanos. Además, la municipalidad de Gualán planteaba que este acuerdo de colonización extranjera abría nuevamente la cuestión sobre la disputa de límites con Belice. Pues si a los propietarios ingleses se les permitía tomar posesión de las tierras de la costa norte, era previsible que se repitiera la historia de la expansión británica en el territorio guatemalteco, tal como había ocurrido en el territorio de Belice. Recordaban que inicialmente Belice había sido un territorio «prestado» por el rey de España a Inglaterra para que esta potencia llevara a cabo el corte de madera, y, sin embargo, éste fue fortificado y el área original había sido extendida –sin autorización del Gobierno de Guatemala–, hasta la desembocadura del río Dulce por los empresarios ingleses-beliceños que en esos años se dedicaban a la extracción de madera. Los representantes de la municipalidad de Gualán consideraban absurdas y fuera de todo fundamento las expectativas del Gobierno respecto a los posibles «beneficios económicos» que traería el contrato de colonización. Asimismo, calificaban de iluso y contrario a la experiencia vivida por los pueblos del nororiente, el argumento del Estado respecto a que «los colonizadores extranjeros facilitarían a los guatemaltecos su industria y capital». Antes bien, recordaban que la costa de Belice ya había sido colonizada por ingleses, y que estos finalmente monopolizaron todo el comercio de Centro América y extraían millones de dinero en efectivo y/o en productos. Si los ingleses ganaban nuevos territorios en las costas del Caribe y el lago de Izabal (argumentaban), «ellos lograrían el control absoluto del comercio marítimo de

55 De la municipalidad de Gualán al C. Jefe político del departamento, septiembre 28, 1834 (Guatemala 1834). FO 15/14 fol. 132/Griffith, 1965:95-98.

Guatemala y precipitarían a la total ruina de la economía guatemalteca». Además, al poseer las tierras de la *bocacosta* y costa atlántica, los ingleses podrían extraer sin ningún registro cualquier cantidad de maderas preciosas y zarzaparilla de Guatemala, ello con perjuicio para los comerciantes nacionales, quienes tenían poco tiempo de haber principiado a explotar dichos productos. Si el contrato fuera consumado, la municipalidad predecía: «Este departamento [Chiquimula-Zacapa] será el más infeliz y arruinado de todos en el Estado».[56]

El gobierno no tomó conocimiento oficial del memorial presentado por la municipalidad de Gualán, más bien, Gálvez estaba ocupado en neutralizar a la oposición política que impugnaba su reelección. Por su parte, la oposición estaba buscando evidencias para desacreditar los desatinos de las políticas impulsadas por el líder liberal. La xenofobia, estimulada por las concesiones del territorio nororiental a empresas extranjeras, apareció como *la bomba* que permitía mover a Gálvez del poder. Particularmente, después de las agitadas cuestiones sobre Belice, y las amplias regalías hechas a los contratistas británicos, para ellos fue fácil levantar el sentimiento popular en contra de un Gobierno que hacía tratos inicuos con los extranjeros. Además, para incitar a la gente en contra del Gobierno estimularon el fanatismo religioso caracterizando a los colonizadores como «herejes».

El 31 de octubre de 1834, las autoridades detectaron una conspiración con el supuesto objetivo de derrocar al Gobierno, y destruir las vidas y propiedades de los extranjeros residentes en Guatemala. Chatfield y el cónsul francés exigieron a las autoridades locales que «advirtieran al público que los extranjeros no podrían ser "molestados", sin que ello quedara en impunidad»[57]. La conspiración fue controlada y la Asamblea Legislativa emitió un decreto en el que autorizaba al Ejecutivo condenar por «traición» a todos aquellos quienes promovieran agitaciones o presentaran peticiones a cualquier autoridad del Estado y/o a quienes por medio de documentos de cualquier tipo incitaran a otros a cometer actos considerados como «traicioneros». En la provincia de Chiquimula este decreto fue interpretado como la negación a la libertad de expresión. En tanto que sí eran permitidas todas aquellas voces que alabaran al Gobierno.

56 De la municipalidad de Gualán, al C. jefe político del departamento, septiembre 28, 1834 (Guatemala 1834). FO 15/14 fol. 132/Griffith, 1965:95-98.

57 Chatfield to Palmerston, No. 20, noviembre 7, 1834.FO 15-14 folio 276 y noviembre 12, 1834, fols. 297-298. Morning Herald (Londres), No. 16384 (febrero 17, 1835), p(2).

En el momento que el Gobierno ordenó a los autoridades de Zacapa-Chiquimula que dieran posesión de la tierra adjudicada a la empresa de Bennett & Meany, el parlamentario José Mariano Dorantes exigió a la Asamblea que suspendiera la orden mientras no se aclararan cuatro puntos en relación al convenio de concesión. Los puntos que Dorantes exigía esclarecer eran: ¿Cómo los ciudadanos guatemaltecos, habitantes en la región –de las concesiones– podrían acceder a la tierra otorgada a los extranjeros? ¿Bennett & Meany podrían comprar por el precio de 1,000 rifles la tierra pública de la provincia de Chiquimula? Y si Bennett & Meany fueran los propietarios, ¿en qué términos debían vender o rentar esa tierra a los hijos nativos del Nororiente? El bosque y la madera en la tierra otorgada, ¿pertenecían al Estado o a Bennet & Meany? Y, ¿En qué términos debería uno, o el otro, vendérsela a los empresarios locales? En todo caso -puntualizó Dorantes- si el propósito del contrato es colonizar el territorio nororiental y ello no contraviene el que los empresarios nacionales continúen extrayendo madera, ese punto debe quedar claro. Asimismo, planteó que debía establecerse con claridad aquellos lugares donde se edificaría las colonias de inmigrantes extranjeros, pues ello permitiría que el Gobierno disfrutara de los beneficios derivados de la explotación maderera hecha por empresarios nacionales.

En caso de que Bennett & Meany fueran los propietarios, ¿en qué términos podrían ser admitidos los colonos nacionales que desearan establecerse en la costa? ¿Qué precios y a quiénes deberían pagar por la compra o alquiler de esa tierra? ¿Podrían ellos seleccionar libremente cualquier lugar que ofreciera ventajas para vivir? Estas no eran preguntas fáciles pero sí cruciales para el destino del territorio nororiental, por lo que la Asamblea las refirió al "Comité de Peticiones". Esta instancia declaró que estos puntos eran de singular importancia para el Estado y recomendó que los mismos fueran referidos al Comité de Prosperidad Pública[58]. La asamblea aprobó la resolución del problema, el 10 de marzo de 1835; pero a ésta le siguió un total silencio respecto a las preguntas planteadas por parlamentario Dorantes.

La protesta presentada por los gualantecos muy pronto tuvo frutos en todo el territorio que había sido jurisdicción del corregimiento de Chiquimula/ Acasaguastlán, cuya historia miliciana rememoraba el valor de sus antecesores en la defensa del territorio de la costa atlántica frente a las continuas incursiones

58 Petición de José Mariano Dorantes a la Asamblea Legislativa, n.d., ANG, Congreso 1834, No 151, fols., 10-11 desclasificado/Griffith, 1965:97-98.

inglesas, francesas y holandesas. Por otra parte, recordemos que desde los primeros años de la Colonia, los españoles y ladinos que se ubicaron a lo largo de los valles del Motagua venían manejando el tráfico de las mercancías que entraban por los puertos de la bahía de Honduras, el golfo Dulce y el río Motagua. Además, manejaban el transporte de las mercancías que circulaban entre el Atlántico, ciudad de Guatemala, Honduras y/o El Salvador.

De hecho, la reelección de Gálvez en 1835 se vio entorpecida por la protesta general de los pueblos de toda la provincia de Chiquimula, ante la pérdida de buena parte de su territorio, particularmente de aquellos espacios estratégicos para el desarrollo del comercio atlántico. Durante el último trimestre de 1835 hubo levantamientos en Chiquimula que fueron reprimidos por el Gobierno. Pese a la represión estatal, nueve corporaciones municipales del corregimiento continuaron protestando por la actitud « entreguista y extranjerizante» del gobierno de Gálvez (Griffith, 1965; Ingersol, 1972). Desde el principio se opusieron a las concesiones de tierras y lograron desacreditar las políticas «modernizadoras» de Gálvez. Sus reclamos fueron exitosos en dos puntos: 1) la amenaza que representaban para la sociedad guatemalteca y para la religión católica las cláusulas de los contratos de colonización, que incluían la libertad de culto a los colonizadores; y 2) la administración de Gálvez no tenía ningún derecho de enajenar el territorio nacional y entregarlo a inmigrantes extranjeros, en tanto que ello iba en detrimento del interés de sus ciudadanos.

En el contexto de las protestas del nororiente (1835), la Asamblea Constituyente ofreció a toda familia que poblara el puerto de Santo Tomás una parcela de mil varas cuadradas en propiedad; además, durante un periodo de 20 años, la exención de toda clase de contribución directa o indirecta. Por su parte, el Gobierno trató de atraer a los habitantes de la capital, de Chiquimula, Zacapa y Gualán para que invirtieran los fondos necesarios en la construcción del puerto por medio de acciones de cien pesos cada una, productoras de intereses[59].

En febrero de 1835, como un gesto de conciliación hacia los ciudadanos de Gualán –sin pretenderlo–, Gálvez reabrió la controversia pública. Luego de haber rechazado los llamados de la Asamblea en tres oportunidades, finalmente aceptó escuchar sus reclamos y les escribió para asegurarles que su prioridad durante su segundo periodo sería desarrollar la prosperidad y bienestar de la provincia

59 Secretario General del Gobierno de Guatemala al Secretario de Hacienda del Gobierno Federal, 7 de enero de 1835, AN, leg. 163, exp. 3416/ Griffith, 1959:18.

de Chiquimula[60]. Gálvez prometió no descansar hasta haber logrado de manera exitosa lo propuesto para la construcción de las carreteras, la navegación de los ríos y el cultivo de las tierras marginales.

El 19 de abril de 1835, luego de que se leyera la carta del presidente Gálvez en Gualán, unos 45 ciudadanos de este pueblo vieron la oportunidad para reiterar sus objeciones a los contratos de Bennett & Meany. En esta oportunidad, los gualantecos apelaron al «sagrado derecho de petición, expresión y censura» y negaron que de su parte hubiera algún intento de fomentar la rebelión o ataques al Gobierno. Además, pidieron a la corporación municipal que fuera ésta la que formulara sus quejas[61]. En esta ocasión, el peso de los argumentos y exigencias de los gualantecos giraba en torno a que «el derecho de los ciudadanos, residentes en el nororiente estaba siendo vulnerado con las extensas concesiones de tierra otorgadas a los extranjeros». Este argumento difería del anterior, en tanto que ahora ponían el énfasis en las *inconsistencias legales* de los contratos de colonización y restaron atención a los beneficios que podían derivarse del mismo.

Además, el énfasis en la idea de *soberanía popular* y las derivaciones legales de ésta, permitió que sus argumentos tuvieran eco y avanzaran fácilmente. El primer argumento apuntaba a que los ciudadanos guatemaltecos eran propietarios de la tierra pública, sus riquezas y productos naturales. «Como pueblo, ellos constituían un poder soberano, por consiguiente debían ser beneficiarios de la gestión del Gobierno». De igual modo, subrayaban que «la soberanía residía en el pueblo y no en el Gobierno, quien simplemente debía ejecutar las leyes». Por lo tanto, cualquier funcionario de gobierno debía estar al servicio del pueblo, de quien obtenía su autoridad. El principio de soberanía era suficiente para mostrar que el contrato en el cual el Gobierno concedía a Bennett *&* Meany semejante extensión de tierra era ilegal, en tanto que se había hecho sin la aprobación del pueblo. Los litigantes subrayaban que el Ejecutivo no tenía la autoridad suficiente para ceder a extranjeros los privilegios exclusivos sobre un territorio que pertenecía a la nación. Argüían también que si se requería la aprobación de la Asamblea para un simple tratado, en este convenio era inadmisible que ésta no hubiera jugado un papel visible. Y aun cuando el cuerpo legislativo hubiera aprobado dicho convenio, ésta no tenía la autoridad para actuar en contra de los intereses y necesidades de la población. Usurpar sus derechos de libre determinación, en

60 Lorenzo Montúfar, Reseña Histórica de Centro América (1878) m II, 175-80/Griffith, 1965:99.

61 Petición de los ciudadanos de Gualán, 24 de abril, 1835. ANGm Congreso 1834 No. 151, fols. 15-21/ Griffith, 1965:99.

éste, como en cualquier otro caso, era nulo, en tanto que dicha medida nunca había sido ratificada por el pueblo. Subrayaban: «cualquier medida tomada en el interés de algunos y en contra del bienestar de los otros, es una burla para el pueblo, es un crimen que debe de ser condenado y jamás perdonado»[62]. En esta ocasión, los ciudadanos del nororiente no peleaban en contra del objetivo de colonizar las tierras inhabitadas del Estado, sino por *la igualdad de condiciones* entre extranjeros e hijos nativos, la cual debería ser asegurada en el momento mismo de abrir la oferta y en cada uno de los términos del contrato. Sin embargo –alegaban- que la práctica del Gobierno había sido contraria al interés público, y eso era una amenaza para la fragmentación del Estado, pues aun los gobiernos despóticos trataban de aumentar el área de su territorio, mientras que Guatemala ofrecía fragmentar el territorio nacional en un gran número de propiedades extranjeras, ello en perjuicio de sus propios habitantes.

Los nororientales concluían que el contrato en el que se otorgaba semejante concesión de tierra a los extranjeros había sido suscrito por el Gobierno en completa ignorancia del territorio que estaba cediendo; de la estrechez de las propiedades de los habitantes de la región y de la miseria sufrida por ellos en la guerra [federal] recién pasada; todo ello a pesar de su compromiso y apoyo manifiesto para con el Gobierno, que ahora se olvidaba de ellos. Como ejemplo, aludían que Gualán poseía únicamente una legua cuadrada de tierra ejidal, la cual servía para satisfacer solo una décima parte de sus necesidades.

La protesta de Gualán solo fue el inicio de una ola de memoriales presentados por los pueblos del Nororiente. En muy pocos días las municipalidades de Esquipulas, Quezaltepeque, Chiquimula, San Nicolás, Zacapa, Santa Elena, Estanzuela y Santa Lucía exigieron a la Asamblea que tomara cartas en el asunto, defendiera los derechos territoriales de los ciudadanos nororientales y anulara las conseciones otorgadas a los extranjeros[63]. Estas acciones fueron obviamente inspiradas en la protesta iniciada por los gualantecos. El tiempo, la similitud en el contenido y referencias a la información proporcionada por los ciudadanos de Gualán sugerían que los documentos fueron redactados

62 Petición de los ciudadanos de Gualán, 24 de abril, 1835. ANG Congreso 1834 No. 151, fols. 15-21/ Griffith, 1965:99.

63 Demandas y protestas presentadas a la Asamblea de Guatemala en 1835 por las municipalidades de la provincia de Chiquimula en respuesta a los contratos de concesión de tierras en dicha región a empresas de colonización extranjera: Esquipulas, 12 de mayo; Quezaltepeque, 13 mayo; Chiquimula, 16 de mayo; San Nicolás, 26 de mayo; Zacapa, 31 de mayo; Santa Elena (sin fecha clara), Estanzuela, 6 de junio; Santa Lucía, 7 de junio. Congreso 1835, No. 151, fols. 22-23, 34-53 no clasificados /Griffith, 1965:103-111.

con pequeñas variaciones de los argumentos presentados por los gualantecos. Espontáneos o inducidos, estos memoriales de protesta expresaban pasión y un sentido de pertenencia con profundas raíces (Griffith, 1965). Los memoriales presentado por los otros pueblos, quizá no aportaban nuevos argumentos, pero sí fortalecían la justificación para pedir la anulación de los contratos de concesión. En varios de los memoriales se señalaba que ni los sistemas políticos ni los Estados centroamericanos estaban totalmente desarrollados, y que los disidentes en el exilio podrían unirse a los extranjeros con quienes encontrarían similitudes para alterar el orden político. Desde su perspectiva, las condiciones internas no eran propicias para dar semejante paso con empresas extranjeras cuyos intereses de fondo aún no quedaban claros. Además, aducían que los gobiernos municipales de los pueblos del nororiente temían por la integridad e independencia de su territorio. De manera concreta, temían que gracias a la presencia y concesiones hechas a los ingleses, la población pudiera caer bajo el dominio de los colonizadores ingleses. Una vez en la posesión de la tierra, nadie podría garantizar que los ingleses actuaran de buena fe, sobre todo, tomando en cuenta la laxitud en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los acuerdos de colonización. Finalmente, ellos podrían forzar a los hijos nativos a vivir bajo una cultura y unas leyes extranjeras que atentarían en contra de la autonomía de sus pueblos. Preguntaban: ¿no será Bennett un agente de la expansión inglesa/beliceña, y las concesiones otorgadas a éste un segundo regalo a la colonia inglesa? Asimismo, subrayaban que la amenaza a la integridad política del Estado de Guatemala estaba siendo reforzada por las ventajas económicas de que disfrutaban los colonizadores. Ellos poseían los puertos del atlántico y estaban autorizados a importar bienes en cualquier cantidad libre de impuestos. Esta última ventaja fue calificada por la municipalidad de Quezaltepeque como «una guerra silenciosa en contra de nosotros [los comerciantes del nororiente]».

El más amargo resentimiento sobre el contrato era la concesión de tierras públicas a extranjeros. Las municipalidades criticaban la ubicación, la extensión y las risibles condiciones en las que se estaba otorgado un importante territorio nacional a empresas extranjeras. Además, señalaban las inconsistencias e irregularidades encontradas en los contratos y las consecuencias que éstas tendrían en la vida de los pobladores de la región. Además argumentaban que con estas políticas era previsible la depresión económica y el retraso del desarrollo nacional. Su conclusión era que el Gobierno había actuado sin conocimiento, sin justicia y sin autoridad legal. La concesión dada a Bennett & Meany superaba el marco de

la acción estatal, excedía los límites de la razón y los principios establecidos en la ley. La promulgación federal de 1824 establecía específicamente la donación para la colonización en un millón de varas cuadradas para cada familia. La Ley del Estado de 1825 establecía reservar un tercio de las tierras públicas para fines de colonización. No obstante, las autoridades ignoraron lo establecido en ambas leyes cuando hicieron la concesión a Bennett & Meany. La municipalidad de Chiquimula declaró: «Nosotros nunca accederemos a la colonización pactada por el Gobierno, dando las mejores y más fértiles tierras de nuestra provincia a ambiciosos y malintencionados extranjeros, es decir, dando toda la tierra pública del departamento a los ingleses».

También denunciaban los mecanismos irregulares en la ejecución del contrato por irregular. En principio objetaban que las tierras adjudicadas a las empresas inglesas nunca fueron abiertas a una subasta pública, y, por lo tanto, el Gobierno estaba perdiendo la oportunidad de obtener el mejor precio, pues muchos ciudadanos estarían de acuerdo con pagar un precio justo por dichas tierras. Las municipalidades fueron unánimes en su opinión respecto a que el contrato no confería ninguna ventaja al Estado. La municipalidad de Zacapa estableció el punto de vista más convincente: «En vano ellos pueden con estudiados argumentos hacernos creer a nosotros que el contrato ofrece grandes ventajas para el Estado. Nosotros somos de una opinión contraria. Nosotros hemos tocado con nuestras manos el mal, el infortunio y el daño al cual está expuesta toda la nación con las concesiones otorgadas a los extranjeros».

Las municipalidades del nororiente presentaron una serie de disposiciones más racionales sobre el área que estaba siendo cedida. El principio general sobre el cual todos estuvieron de acuerdo era que los extranjeros podían ser admitidos para que explotaran los recursos guatemaltecos «únicamente bajo condiciones que evitaran el perjuicio a los derechos de los ciudadanos guatemaltecos». Incluso, la más deseable alternativa era que se les permitiera a los hijos nativos adquirir la tierra y vender la madera de los árboles que allí crecían, ya que eso permitiría la disponibilidad de ingresos internamente para satisfacer las necesidades de los habitantes del nororiente y las del Gobierno.

Todas las municipalidades exigieron al Gobierno anular o modificar sustancialmente el contrato con la empresa de Bennett & Meany. Sus representantes reclamaban el soporte del Gobierno en virtud de los sacrificios y servicios prestados en armas y la lealtad al existente régimen. Argumentaban,

además, que la obligación de un gobierno popular era el atender las protestas de sus ciudadanos tal como estaba constituido. Si sus peticiones no eran escuchadas, ellos entendían que esta era una señal indirecta que les forzaba a asumir como último recurso el derecho a la revolución. La municipalidad de Chiquimula expresó: «Contraviniendo los principios proclamados por la república y el Estado, éste ha cesado de ser un gobierno y ha degenerado en una tiranía».

Durante el verano de 1835, el Congreso Federal, con sede en El Salvador, y la Asamblea de Guatemala, encararon los problemas levantados por las concesiones otorgadas a Bennett & Meany. El Congreso no estaba directamente involucrado en el asunto, pero el disentimiento de los pueblos del nororiente (Zacapa y Chiquimula) terminaba con cualquier posibilidad de alargar la ratificación del contrato. La Asamblea fue confrontada con una virtual insurrección en contra de algunas cláusulas del acuerdo. Mientras tanto, el Comité de Gobierno de Guatemala argumentó que todo estaba de acuerdo a las leyes y que la miopía de las municipalidades provenía de haber tenido una simple lectura del acuerdo, que estaban más inspiradas por los cortadores de caoba, quienes tenían intereses personales y no querían perder su *statu quo* (Griffith, 1965).

Durante el último trimestre de 1835, el contrato de Chiquimula se convirtió en el punto focal para una rebelión bajo el estandarte de Nicolás Espinoza, jefe del Estado de El Salvador. El movimiento alegaba tener como objetivo derrocar al gobierno federal encabezado por Francisco Morazán y al régimen de Gálvez en Guatemala. Gálvez sintió que su posición estaba amenazada, lo cual fue confirmado por agentes de El Salvador que se aliaron a los disidentes de la provincia de Chiquimula[64]. El acuerdo con Meany & Bennett fue el principal punto utilizado por los dirigentes de la oposición en El Salvador y Guatemala. Ellos obtuvieron una copia del contrato e imprimieron 21 de los más ofensivos artículos para su distribución en apoyo a sus cargos. Ellos señalaban que Morazán y Gálvez habían traicionado al país y a su independencia frente a los ingleses. Por tanto, la única esperanza que le quedaba a la población era derrocar a los gobiernos de Gálvez y Morazán (óp. cit. 112).

La propaganda ganó simpatizantes entre las más diversas esferas de la sociedad en el nororiente de Guatemala y El Salvador. Los dirigentes de Chiquimula fueron acusados de realizar acciones clandestinas en su provincia y El Salvador, lo que alarmó a las autoridades de ambos lados de la frontera. Para fortalecer la defensa

64 Montúfar, Reseña Histórica, II, 192-193./Griffith, 1965:112.

del gobierno federal, Gálvez envió tropas y dinero a los territorios en contienda. Al mismo tiempo, tomó medidas para asegurar el control de la provincia de Chiquimula: ordenó al jefe político del departamento (Mariano Trabanino), que investigara sobre la insurrección, capturara y enviara a la capital a los líderes del levantamiento, asegurara que no quedaran armas en poder de los rebeldes y usara la guarnición como fuera necesario para evitar la violencia en contra de las autoridades[65]. La crisis tuvo corta vida, Espinoza renunció a su posición oficial a mediados de noviembre y luego se fue al exilio. Los centros de levantamiento fueron rápidamente sofocados y la amenaza de una revuelta disipada. El temor por lo que podía esperarse a partir de la amplia difusión del contrato por parte de las municipalidades del nororiente permanecía latente, y por algún tiempo Gálvez mantuvo un vivo intercambio de información sobre sospechosos y un pequeño flujo de prisioneros que habían sido trasladados desde las provincias del Salvador y Chiquimula hacia la capital.

Con todo, el asunto que había dado origen a la insurrección estaba sin resolverse. Tal vez movido por la necesidad o para calmar el descontento de los pueblos de la provincia de Chiquimula, Gálvez moderó su postura revisando el contrato. Al mismo tiempo, ordenó usar la fuerza si fuera necesario en contra de aquellos ciudadanos del nororiente que persistieran en sus manifestaciones de protesta. Gálvez logró una nueva versión del contrato para calmar la discordia en esta región. En ésta se agregaron seis clausulas en las que se intentaba proteger los derechos de los hijos nativos[66]. No obstante, Gálvez estaba lejos de haber resuelto las objeciones de los ciudadanos de la provincia de Chiquimula.

En enero de 1836, nuevamente las municipalidades de Chiquimula y Esquipulas pidieron al jefe de Estado suspender el contrato, al menos hasta que el Congreso pudiera actuar sobre éste.[67] Como resultado de su propia revisión o influenciado por los argumentos de los dirigentes del nororiente, Gálvez comenzó a reconocer que el acuerdo de concesión podría, de hecho, tener algunos riesgos para el Estado. Respecto al memorial presentado por Esquipulas, Gálvez admitió que aunque el Gobierno había actuado de buena fe para promover el bienestar público, podía haber errado en algunas provisiones y detalles del acuerdo.

65 Gálvez a Trabanino, noviembre 7, 12 y diciembre 8, 1835. ANG, leg. 16262m exp. 50968, nf y noviembre 27, 1835, ANG, leg. 162263m exp. 53129 nf,/Griffith, 1965:113.

66 Artículos del acuerdo firmado por Meany y Bennet. AMG, comunicaciones 1835.

67 Petición de Chiquimula, enero 4 de 1836. ANG, leg. 1395, exp. 32348 Petición de Esquipulas, enero 13 de 1835. ANG, Congreso 1836, No. 62, fols. 1-3, desclasificado.

El Comité de Gobierno aparentemente descuidó el cambio de actitud del jefe de Estado y presentó su reporte a la Asamblea, siguiendo el mismo patrón de los reportes anteriores. Antes de que la respuesta llegara de parte de la Asamblea, un nuevo memorial les fue presentado de parte de la municipalidad de Zacapa, con los puntos anteriormente presentados, pero con una nueva redacción, de tal forma que captó la atención del Comité de Peticiones de la Asamblea, por lo que también lo refirió al Comité de Gobierno.

El memorial de la municipalidad de Zacapa cambió la opinión del Comité, en tanto que en esta ocasión hacía una recomendación diferente a la Asamblea (Griffith, 1965:117). El pulir sus argumentos anteriores permitió a la municipalidad señalar que ellos no se oponían a la colonización, pero que el Gobierno debía definir con claridad sus fines para atraer a extranjeros útiles y no a aventureros, quienes abandonaban sus países solo porque otros les ofrecían oportunidades superiores. El problema es, señalaba la municipalidad, que el contrato de concesión de tierras de Chiquimula estaba diseñado para atraer aventureros; su gran debilidad radicaba en que sus signatarios no ofrecían ninguna garantía sobre las obligaciones contraídas. La prisa con la que los tratantes habían cortado la mejor caoba de la región convencía a cualquier observador respecto a que su «promesa de colonizar» solamente era un pretexto para obtener la autorización del corte de la madera. Además, el tiempo estipulado para concluir la primera etapa de la colonización había expirado sin el cumplimiento de parte de ellos; por lo tanto, existían suficientes razones legales para cancelar el contrato, en tanto que los concesionarios no estaban específicamente autorizados para explotar los recursos.[68] Además, el contrato no contenía especificaciones sobre el manejo del territorio previo a la colonización, y dichas omisiones debían ser corregidas. El comité recomendó a la Asamblea una declaración que instruyera al Gobierno a requerir a Bennett & Meany suspender el corte de madera hasta que cumplieran con la obligación de colonizar la región y dieran garantías de pago sobre los árboles cortados.[69] La recomendación fue aprobada por la Asamblea en abril de 1836, y el Gobierno proclamó la orden el 21 de mayo.[70] En 1837, el Gobierno reconoció que las circunstancias planteadas por la municipalidad de Zacapa eran legítimas y anuló el contrato por incumplimiento de obligaciones. Aunque tardíamente, esta particular contienda concluyó, no obstante, los nororientales

68 Petición de Zacapa, 8/04/1836. ANG, Congreso 1836, No. 62, fols. 5-10/Griffith, 1965:117-118.
69 Opinión del Comité de Gobierno 23/04/1836. ANG, Congreso 1836, No. 62. Griffith, 1965:117-118.
70 Orden legislativa No. 38, 21/05/ 1836. ANG, leg. 408, exp. 6679 nf/Griffith, 1965:119.

descontentos frente a los desatinos del régimen ya se habían aliado al Movimiento de la Montaña.

1.5 Descontento oligárquico y rebelión popular

Tal como venimos analizando a lo largo de este capítulo, el conjunto de las políticas impulsadas por la primera generación de liberales estimuló una variedad de respuestas por parte de todos aquellos sectores que veían afectados sus intereses. El reclamo popular en contra de los gobiernos liberales –tanto del Estado de Guatemala como de la Federación– se hizo cada vez más frecuente a partir de 1835. Ahora bien, las élites liberales no alcanzaron a comprender el poder potencial de la resistencia provinciana. Tampoco dimensionaron la envergadura que tendrían los levantamientos indígenas en contra de su política de tierras y el impuesto de la capitación, ni la fuerza que alcanzaría el combativo Movimiento de la Montaña, organizado por las élites provincianas y grupos de campesinos indígenas y mestizos del oriente de Guatemala, que se opusieron a las concesiones territoriales otorgadas a las compañías extranjeras de extracción maderera y al arribo de los colonizadores belgas y británicos que se asentaron en Izabal en julio de 1836.

Si bien en 1837 ocurrieron sublevaciones y revueltas en más de 30 comunidades indígenas de Los Altos, que se oponían al impuesto de la capitación, a las transformaciones del sistema judicial, a las políticas de privatización de sus tierras comunales y al anticlericalismo practicado por los dirigentes liberales, finalmente fue en el oriente del país donde se afianzó un movimiento vigoroso que logró establecer alianzas cruzadas entre élites provincianas, campesinos, un sector del clero y las élites oligarcas de la ciudad de Guatemala.

En un principio, la Rebelión de la Montaña o Guerra de la Montaña fue un movimiento de campesinos indígenas y mestizos dirigido por el caudillo Rafael Carrera, que abarcó casi todo el oriente del país (la mayoría de los municipios de los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa). Tal como lo vimos anteriormente, las élites nororientales se opusieron abiertamente a las reformas liberales en defensa de su territorio, sus privilegios comerciales y amplios márgenes de soberanía provinciana. Además, se opusieron a todas aquellas políticas que pretendieran transformar su normativa y sus creencias religiosas, particularmente al retiro de los curas de sus pueblos, a las leyes que regulaban los cementerios, a la aprobación del matrimonio civil y, sobre todo, al

divorcio. En una sociedad provinciana, patriarcal y con un fuerte arraigo católico, todas aquellas medidas que atentaran contra la autoridad masculina, la «unidad familiar» y/o buscaran secularizar la relación entre el Estado y la sociedad eran consideradas «absolutamente inmorales». Por consiguiente, se les etiquetó como «la ley de perros» (Miceli, 1974; Dary, 2008). Vistas desde el presente, todas estas transformaciones fueron radicalmente pioneras en una sociedad altamente conservadora como lo era la Guatemala de los siglos XIX y XX. De esa cuenta, era fácil que estas fueran utilizadas por los curas provincianos para inflamar la ira de sus parroquianos en contra de un gobierno que les desposeía de sus tierras, atacaba sus costumbres, sus sagradas instituciones y vulneraba los fundamentos de la sociedad provinciana y patriarcal. Al descontento general que ya existía en todo el oriente se sumó la epidemia del cólera y la arbitrariedad del Gobierno en la implementación de las medidas sanitarias. En principio, los funcionarios del Gobierno encargados de prevenir la epidemia consideraban que el cólera era una enfermedad propia de los indígenas y mestizos pobres, por lo que todos los aspectos de su estilo de vida –los alimentos que comían y excretaban, la forma de deshacerse de su basura, la manera de enterrar a sus muertos– estuvieron sujetos a debate, condena y reforma (Grandin, 2007:127). Cuando en 1837 el cólera ya había cobrado muchas vidas en el área rural, se extendió el rumor de que el Gobierno estaba envenenando las aguas y provocando la muerte de gentes inocentes para arrebatarles sus tierras. Dicho rumor fue ampliamente propagado desde el púlpito por los curas de aquellos pueblos donde la enfermedad estaba cobrando más víctimas (Ingersoll, 1972). Así, la epidemia del cólera apareció en un momento de crisis económica y justamente cuando el Gobierno había ignorado las necesidades y demandas de los campesinos en cuanto a la abolición de los impuestos, la defensa de sus tierras y el respeto al catolicismo.

Otro elemento que contribuyó ahondar el descontento de los nororientales fue el que, en octubre de 1838, el Gobierno firmó de nueva cuenta un contrato con la Eastern Coast of Central America Commercial and Agricultural Company en Guatemala. Este contrato concedía a la compañía inglesa: a) la absoluta y perpetua propiedad de todos los terrenos baldíos del distrito de Santo Tomás, menos los que se reservaban para el uso de pueblos ya existentes, con una extensión que se calculaba en 8,000 caballerías. Los terrenos concedidos principiaban en la boca del Motagua y siguiendo río arriba hasta el punto más próximo al pueblo de San Pablo; de allí en línea recta a la confluencia de los ríos Polochic y Cahabón; desde este al mar, bordeando las márgenes del río Polochic, el lago de Izabal, el golfo y

el río Dulce, y siguiendo por la costa marítima hasta el punto inicial de la barra del Motagua; b) durante 10 años, la compañía mantendría la posesión de todo el distrito, sea cual fuere su extensión, y al vencer dicho periodo se medirían los terrenos y la compañía escogería las 8,000 caballerías que le apetecieran, las cuales se le concederían en propiedad absoluta, con el derecho de disponer de ellas en la forma que mejor le conviniera, ya fuera vendiendo total o parcialmente las propiedades o sus derechos sobre ellas.[71] Por su parte, la compañía se comprometió: a) construir una ciudad portuaria en Santo Tomas –con una extensión no menor de una milla cuadrada–; b) traer inmigrantes europeos –en número no menor de mil– que colonizaran la región durante un periodo de veinte años; c) abrir caminos y canales para unir el nuevo puerto de Santo Tomás con los ríos Motagua y Dulce; d) introducir una línea de vapores en los ríos, lagos y costas comprendidos en el territorio concedido. Adicionalmente a la tierra y recursos acordados, la compañía obtenía: a) el monopolio de la navegación de vapores en los ríos Polochic y Cahabón, el lago de Izabal, el río Dulce, el río Motagua y en todas las costas y bahías incluidas en la concesión; b) el derecho a cobrar peaje por tiempo indefinido en los caminos que construyera; c) a cortar madera en los terrenos baldíos que no hubieran sido denunciados anteriormente en los distritos de Santo Tomás y a lo largo del río Motagua, con la exclusión de cualquier otro extranjero que pretendiera lo mismo[72].

El ambicioso contrato que la Eastern Coast of Central America Commercial and Agricultural Company firmó con el Gobierno de Guatemala prometía el desarrollo de un sistema mercantil complejo, el cual incluía, no solo una ciudad portuaria con todas las instalaciones y conexiones del caso, sino toda una red de comunicaciones y transportes terrestres y fluviales que conectarían todos los puntos neurálgicos del comercio transatlántico y transfronterizo en el triángulo norte de Centroamérica. En principio, la compañía se comprometió a construir caminos de carretas o mulas que comunicarían a Santo Tomás con el río Motagua y el lago de Izabal, y el establecimiento de un servicio de vapores en los ríos Motagua y Polochic hasta el punto donde comenzaban a ser navegables. Sin embargo, lo ofertado en este proyecto era sumamente ambicioso y complicado para los escasos recursos disponibles por dicha compañía. De nueva cuenta,

71 Brief Statement, Supported by Original Documents, of the Important Grants Conceded to the Eastern Coast of Central America Commercial and Agricultural Company by the State of Guatemala, seg. ed. (Londres, 1840), pp. 37-56/Griffth, 1959:23.

72 Ver más detalles de la concesión en Griffth (1959:21-30).

las expectativas del gobierno de modernizar el circuito comercial atlántico, sus puertos, aduanas, redes de comunicación y sistemas de transporte, fracasó.

Además, la ejecución de este contrato quedó temporalmente suspendido por las acciones del movimiento rebelde de la Montaña, en el que participaba activamente un importante sector de las élites y campesinos del oriente quienes, desde un principio, se oponían a que el gobierno de Gálvez otorgara a empresas extranjeras semejantes concesiones de tierra, ríos, lagos y costas que formaban parte de su territorio y de sus propias estrategias de producción y comercio.

La rebelión de la Montaña, acaudillada por el emblemático Rafael Carrera, duró dos años, de 1837 a 1839, y sus protagonistas tuvieron dos gritos de batalla «religión por siempre» y «muerte a los extranjeros y a los heréticos» (Dary, 2008:29). Finalmente, esta rebelión traería consigo el ocaso del primer régimen liberal, el desmantelamiento de la Federación de Centroamérica y la caída del Estado de Los Altos de Quetzaltenango (Grandin, 2007:120-121). A partir de su participación en el movimiento de la Montaña, la figura de Rafael Carrera destacó significativamente, pues aprovechando el carisma de su liderazgo y la fuerza de la rebelión campesina, éste logró establecer una estratégica alianza con la oligarquía criolla, derrocar el gobierno de Gálvez en 1838, terminar de desestructurar la débil Federación, y establecer una prolongada dictadura que duraría de 1839 a 1865. Durante todo este periodo, el Estado guatemalteco estuvo dominado por la élite conservadora de la capital y algunos sectores de las élites regionales del oriente de Guatemala, la cual organizó la administración estatal siguiendo el antiguo patrón de los corregimientos coloniales.

Revisando la conflictividad durante los primeros años del proceso de formación de las repúblicas y el Estado en Centroamérica, concluyo que éste se caracterizó por la exclusión y descontento de los campesinos mestizos e indígenas frente a todas aquellas medidas que constreñían aún más sus medios de vida y espacios de decisión política. Además, por la fragmentación provinciana, la agitación civil y la rivalidad entre aquellas élites liberales que refrendaban la idea de un «Estado moderno de tipo federal», y las élites criollas que defendían la vuelta al viejo orden provinciano de tipo colonial.

El nacimiento del Estado en Centroamérica se caracterizó por la rivalidad entre aquellos caudillos que pretendían establecer su dominio militar y político en la re gión. Las continuas guerras libradas entre las oligarquías provincianas y sus

respectivas fuerzas caudillas cerraron de antemano la posibilidad de construir un consenso social básico que hiciera viable un proyecto –por demás ambicioso– como lo fue el de federar aquellos territorios que históricamente habían sido rivales y/o estaban en disputa. Al fracasar el Estado federal se establecieron gobiernos provincianos débiles con un régimen constitucional teóricamente fuerte, pero con largos periodos de crisis institucional en los que todo el poder se concentró en la figura del caudillo de turno y sus respectivos caciques provincianos, quienes gobernaban sus territorios al mando de sus propios ejércitos milicianos.

En definitiva, la guerra y la violencia pública que se vivió en los procesos de constitución de las repúblicas y el Estado en Centroamérica, finalmente definieron las formas de entender lo político en esta región. Al rastrear las trayectorias de aquellos caudillos que estuvieron al frente de la precaria institucionalidad estatal, se observa que antes de mediar las diferencias, la mayoría de éstos mostró una excepcional disposición a demonizar y matar a los contendientes. Así mismo, expresaban un profundo desprecio por «las masas», particularmente si éstas representaban a los campesinos mestizos del oriente y/o a los pueblos indígenas.

La intolerancia y el caudillismo fueron modelando la arena política en las nacientes repúblicas de Centroamérica. En consecuencia, la formación del Estado llevó implícito el despliegue de la violencia sumaria y brutal, la cual contribuyó de paradójicas maneras a acrecentar el poder coercitivo de aquellos actores armados (privados) que tuvieran fuertes vínculos estatales, al mismo tiempo que empoderó a todos aquellos que desafiaran o socavaran su autoridad. Tal como lo planteara Robert Holden (2004), los nuevos actores políticos saturaron el campo de poder alrededor del Estado con la dinámica del caudillaje, el clientelismo político y la violencia. Así, las características decisivas del Estado en Centroamérica en el siglo XIX fueron la continua necesidad de improvisar su autoridad coercitiva mediante la negociación y los regateos con caciques provincianos y diferentes tipos de bandas armadas que operaban en su territorio siguiendo la vieja usanza de las milicias coloniales; la incorporación de estas fuerzas milicianas (con tradiciones e intereses diversos) en un solo ejército que se constituyó en «nacional» en un sentido estrictamente jurídico-formal, y la ausencia de una ciudadanía con sentido de inclusión e identidad nacional que fuera capaz de confrontar las ambiciones tiránicas y corruptas del caudillo de turno y sus fuerzas armadas.

2. La dictadura oligárquica

Si bien Rafael Carrera (1837-1865) se identificó culturalmente con las élites provincianas y los campesinos orientales que participaron en el movimiento de la Montaña, y logró establecer una alianza estratégica con los dirigentes indígenas que se levantaron en contra de la élite que proclamó el Estado de Los Altos, en la práctica éste no siempre representó los intereses de los alzados. De hecho, durante el periodo de mayor turbulencia del gobierno de Carrera (años 1840), quien presidió *tras el trono* fue Mariano Rivera Paz, un hábil político de Cobán que sabía manejar las delicadas relaciones entre el caudillo y la élite oligárquica de la ciudad de Guatemala (Woodward, 1992:62). Rivera Paz definió la profundidad del tono conservador que adquirió el gobierno de Carrera. Cuando el pacto federal fracasó, este influyente ideólogo conservador se presentó como *el hombre capaz* de «reconstruir Guatemala y restablecer la paz y la prosperidad» a través de la restauración del poder de la Iglesia católica y su clero, y la reactivación de la seguridad política y social del sistema colonial. En parte, esta vuelta a la forma de gobernar del viejo régimen fue posible gracias al apoyo de un movimiento popular respaldado por comerciantes, campesinos ladinos e indígenas que habían sufrido los efectos de las políticas «modernizadoras» de la primera generación de liberales.

Particularmente, el restablecimiento del Decreto 528, concerniente a la «República de Indios», permitió a los pueblos indígenas de Guatemala defender sus territorios y espacios de autonomía, justo en un momento en que muchas comunidades indígenas de América Latina estaban siendo rápidamente absorbidas por la expansión del capitalismo agroexportador (Woodward, 1992:62).

Según ideólogos de la misma oligarquía conservadora, entre 1839 y 1865, Carrera se ocupó de establecer un gobierno ejecutivo, fuerte y autoritario. Además, estableció el orden y la seguridad. Mientras sus ministros administraban, él gobernaba, dirigía y vencía. Carrera era particularmente hábil para reunir tropas, entrenar y controlar las milicias, establecer alianzas, cooptar grupos de alzados y ponerse al frente de éstos.

Las «familias cultas» e «ilustradas» de la ciudad de Guatemala veían en el general Carrera a un hombre poderoso, capaz de garantizarles la tranquilidad pública. Desde el punto de vista del colombiano Mariano Ospina (uno de los ideólogos más destacados de la élite conservadora y miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País), el poder absoluto que Carrera ejercía sobre «las masas ladinas»,

«la gente de color» y «los indios» se debía a su energía y severidad, con frecuencia violenta y cruel que inspiraba gran miedo (Ospina, [1884] 2003:100).

Vale decir que a pesar de su tinte guerrerista y militar, el régimen de Carrera no puede tipificarse como una dictadura castrense propiamente dicha; más bien, fue un régimen caudillo que empleó a fuerzas militares afines al régimen. Durante su gobierno, la institución militar estaba formada por milicias que servían para defender al régimen de sus enemigos y para ensanchar sus dominios.

Con núcleos de «andrajosas» guerrillas, según Holden (2004:51), Carrera construyó la más poderosa fuerza militar en Centroamérica. Estableció el control del país con *sus* jefes militares, hombres designados constitucionalmente para ocupar el cargo de *corregidores y* administrar los gobiernos regionales. Estos jefes militares tenían extensos poderes sobre la policía, las finanzas y el gobierno general, y administraban la justicia y la paz como jueces sobre todo el territorio de su jurisdicción (Woodward, 1992:62).

Los estudios de Jefferson (2000) y Zarazúa (2012) documentan que buena parte de las tropas fieles al ejército de Carrera provenían del oriente o la zona cercana a ciudad de Guatemala. En el grueso de estas tropas participaban campesinos mestizos del oriente, pero también arrieros y/o cuatreros involucrados en las redes del contrabando, la producción y/o comercio de aguardiente, el robo de ganado y la apropiación ilegal de tierra baldía o realenga que escapaba así al control de las autoridades de su pueblo. A partir de 1839, estas tropas fueron reconocidas como fuerzas «oficiales», y con sus victorias militares salvaron al Gobierno de las amenazas del Movimiento Morazánico y del Movimiento de Los Altos en 1840. Sin embargo, la lealtad y el apoyo de estas tropas hacia las autoridades gubernamentales no estaba garantizado a largo plazo, en tanto que éstas también respondían al mando de los caudillos rebeldes del oriente que habían participado en el movimiento de 1837. Esto último se puso de manifiesto en la rebelión ocurrida entre 1847-1850, conocida como la rebelión de los Lucios (Zarazúa, 2012). Para 1853, las fuerzas milicianas de la región central adyacente a la ciudad de Guatemala concentraban el 53% de los efectivos, el oriente el 26%, Los Altos el 15.90%, y los norteños departamentos de Petén y la Verapaz solo el 3.98% [73].

73 Ver el interesante estudio de Juan Carlos Zarazúa 2012/cuadro No. 5, en el que este historiador documenta la organización de batallones de milicias conforme a los resultados de las coyunturas de descontento provinciano y rebelión que se vivía en Guatemala.

Si bien durante el gobierno de Carrera existía una Asamblea Legislativa, y ésta se reunía anualmente, en la práctica este era un foro destinado a legitimar la continuidad del caudillo y formular aquellas leyes que le permitieran implementar con agilidad sus disposiciones y políticas anuales. Según Ospina ([1884] 2003:99), durante el gobierno *reparador* de este hábil y afortunado *dictador,* quien se denominó *presidente de la república*, se hacían elecciones sin violencia, se reunían cámaras legislativas y se procuraba imitar los procedimientos del gobierno representativo, según las formas que éste tiene en los Estados Unidos del Norte de América, pero ni antes de aquel gobierno ni durante él, ni después de él, ha habido en Guatemala un verdadero gobierno representativo, por la sencillísima razón de que no puede haberlo ante el peligro que presentan «esas hordas salvajes e ignorantes que constituye la gente de color».

La justificación que nos ofrece Mariano Ospina respecto al régimen dictatorial de Carrera sintetiza con elocuencia las ideas que organizaban el pensamiento político de la oligarquía guatemalteca y el porqué de su continua apuesta por la dictadura y todas aquellas ofertas de mano dura que prometieran llamar al orden a toda esa «gente de color» que constituía la mayoría de la población guatemalteca. Así, para la élite oligarca agrupada en la Sociedad Económica de Amigos del País (de la cual Ospina era miembro), la legitimidad de Carrera descansaba en su capacidad de haberle puesto fin a un largo periodo de guerras caudillas, rebelión campesina, ingobernabilidad y cambios abruptos en todos los campos de lo social. Para este influyente sector de la élite guatemalteca, el emblemático caudillo les había restablecido «la paz» a cambio de su poder absoluto. Efectivamente, Carrera utilizó el Ejército, la policía y el proselitismo religioso para ejercer su soberanía. Y controló el país militarmente hasta 1844, excepto por unos pocos meses, en 1848, y el Ejército le perteneció a él hasta su muerte en 1865. Según Woodward (2002), ningún individuo dominó tanto el primer medio siglo de la vida republicana de Guatemala como Rafael Carrera. Su movimiento llegó a la cresta de un rechazo frente a las políticas modernizadoras por gente de todas las clases, y conforme avanzaba iba restaurando la tradición y las instituciones hispánicas. Así, restableció la República de Guatemala dando un verdadero giro hacia la tradición más conservadora de los Habsburgo.

2.1 Protectorado indígena y defensa de las tierras ch'orti'

La política del gobierno de Carrera respecto a los indígenas consistió, básicamente, en un retorno de las tradiciones hispánicas. En agosto de 1839, la Asamblea Constituyente reconoció que los indígenas eran la mayoría de la población del Estado de Guatemala, y que el interés de esa entidad era no solo «proteger» a tan numerosa clase, sino también apoyar el desarrollo y crecimiento de sus «costumbres» y su «civilización». A partir de estas ideas, la política carrerista revertió la perspectiva liberal de Gálvez de privatizar las tierras de comunidad e «incorporar a los indígenas a la civilización occidental» bajo el marco conceptual del igualitarismo. En realidad, a los conservadores les preocupaban las explosiones de rebelión y la violencia indígena. Por consiguiente, insistían en ofrecerles paternalismo y protección.

Desde la perspectiva de Arturo Taracena (1999), el paso más importante que dio Carrera fue el incorporar la dimensión indígena a la política republicana, la cual había sido negada por la adopción liberal de la ciudadanía censitaria. Con ello, Carrera se legitimaba como abanderado de la unicidad republicana y, por tanto, como líder con dimensión nacional. Al mismo tiempo, el caudillo marcó los límites institucionales de la incorporación de los indígenas a la República. Estos límites les eran exigidos por la élite conservadora, la cual siempre les negó el derecho de ser ciudadanos; por consiguiente, reclamó para ellos un estatus especial: la República de Indios Adaptada[74], institución fundada en las antiguas Leyes de Indias, que contaba con sus propios «fiscales protectores de indios».

Los conservadores aducían que los indígenas eran diferentes, cultural, económica y políticamente, y que la ley debía reconocer esas diferencias. Por consiguiente, indígenas y blancos debían ser tratados de forma separada y con leyes diferenciadas. En otras palabras: no había que volver a sugerir «una igualdad que *no* existía». En teoría, los planteamientos conservadores eran más claros: los indígenas eran considerados como «menores de edad» y como a tales se les ofrecía *protección* frente a la enajenación de sus recursos y a su excesiva explotación.

74 Esto último, señala Taracena (1999), se expresa en el espíritu del decreto *Sobre varias disposiciones sobre los indios*, emitido en noviembre de 1851, el cual manda que los corregidores deberán cuidar que se conserve un ejemplar de la recopilación de las Leyes de Indias, a cuyas normas deberán arreglarse en las cosas que ocurran; y tanto los mismos corregidores como los jueces y demás autoridades de los pueblos de indios deberán, en el ejercicio de sus funciones, compenetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia ni se le perturbe en sus costumbres, no siendo estas, como dice la ley, claramente injustas. Ver Pineda de Mont, tomo I, 1978, 853-855.

Además, eran vistos como *diferentes*, por consiguiente era necesario mantenerlos en espacios segregados y al margen de la sociedad «blanca» e «ilustrada». A pesar del racismo abierto y descarado que se practicó durante la dictadura oligárquica, durante los primeros años del gobierno de Carrera los pueblos indígenas lograron resistir el ataque liberal y reafirmar la herencia colonial en materia de protección a sus tierras comunales y ejidales; asimismo, lograron frenar la creciente demanda de trabajo forzado y preservar significativos espacios de autonomía y poder comunal. Por ejemplo, el decreto firmado por Carrera el 8 de noviembre de 1851 en favor de «la clase aborigen» expresaba, según Woodward (2002), una sincera filosofía que favorecía la práctica colonial de *segregar* y *proteger* al indígena. En principio, dicho decreto señalaba que la Recopilación de las Leyes de Indias proveía protección para los indígenas y quedaba vigente, salvo en lo que fuera contraria a la Independencia o la Constitución de Guatemala. En dicha ley se encargaba a los corregidores ocuparse de combatir la «ebriedad» y «la holgazanería indígena», al mismo tiempo se les pedía que velaran para que no se privara a aquéllos de sus tierras comunales, y no se les exigiera servir en las fuerzas armadas. A sabiendas de que la mayoría de las sublevaciones indígenas ocurridas durante los gobiernos liberales estuvieron directamente relacionadas con la tenencia de sus tierras, Carrera siempre insistió a sus corregidores que resolvieran pronto y justamente los agravios cometidos contra los indígenas por cuestiones de tierra (Woodward, 2002).

Esta coyuntura favorable a la protección de los ejidos y tierras de comunidad fue ampliamente aprovechada por diferentes comunidades ch'orti' que habían sufrido un agresivo proceso de expropiación/privatización de sus tierras por parte de las familias potentadas de Chiquimula que participaban en los círculos de clientela política de aquellos que ocuparon los cargos de jefe político, alcalde primero, secretario y síndico municipal en los pueblos indígenas del departamento, durante las administraciones liberales de Mariano Gálvez y Francisco Morazán. Particularmente ilustrativo de este proceso es el memorial presentado por el gobernador y el alcalde primero indígena y los cuatro regidores y los Principales, y demás Común de Indígenas del pueblo de la Santísima Trinidad de Nuestra Señora de la Asunción de Chiquimula de la Sierra, al supremo Gobierno y al Fiscal Protector de Indígenas, denunciando las injusticias que venía sufriendo durante la administración de las familias liberales (principalmente por parte de las familias Valdez, Martínez y Trabanino). A criterio de los dirigentes Ch'orti', los hombres de dichas familias y sus allegados habían gobernado la región con

absoluta arbitrariedad, se habían adueñado de su iglesia y de las antiguas Casas Reales que ellos habían construido para sus corregidores; pero, sobre todo, se estaban adueñando de su tierra de comunidad -aduciendo que ésta les pertenecía en recompensa al financiamiento y servicio en armas prestado al gobierno federal.

A continuación, una síntesis de aquellos párrafos que ilustran el tipo de argumentación y acción política desplegada por los pueblos ch'orti' de Chiquimula de la Sierra en defensa de su territorio:

> Al Gobierno Superior del Estado de Guatemala y al señor Fiscal Protector de Indígenas El Común del Pueblo de Chiquimula se queja de los malos procedimientos de Antonio Valdez, 1840 [f2][75]
>
> El gobernador y el Alcalde Primero Indígena, los cuatro regidores y los Principales y demás [miembros del] Común de Indígenas del pueblo de la Santísima Trinidad de Nuestra Señora de la Asunción de Chiquimula de la Sierra, con el más reverente respeto a este Supremo Gobierno, hacemos presente que nos es bastante gravosa la existencia el tiempo que ha permanecido Antonio Valdez desde que fue Alcalde Primero el año de 1833; se justifica en bastante forma las familias que han reinado en nuestro pueblo, trasmitiéndose la vara de alcalde ya en el tío, ya en el sobrino; esto mismo han hecho los Martínez y los Trabanino. [Ellos] también se han tomado una gran porción de tierras útiles a nuestro pueblo, porque además de ser el indicado Valdez un hombre díscolo, inquieto y de un espíritu dominante, que quiere tener y nos ha tenido a todos como dicen bajo la suela de sus zapatos, tanto a los indígenas como a las otras parcialidades, con nosotros es con quien domina su prepotencia [f 2v].
>
> […] Esto, que es el origen de toda nuestra desgracia, porque por el influjo de Antonio Valdez y todos sus compañeros, han hecho cuartel general nuestra iglesia; todos unánime son estos que tenemos apuntados: Esteban Jarquín, Ysidro Lemus, José Molina, José Cruz Peralta, Antonio José Martínez, Filadelfo Benavente, Félix Godoy, Francisco Alvarado, José Godoy, Vicente Resulero, Ramón Godoy, vecino de Jalapa, hijo político de Timoteo Solís, Aleriano Trabanino, Gregorio Martínez, Laureano Hernández, José Antonio González, vecino de Zacapa, hijo de afinidad de Antonio José Martínez, José Antonio López, Felipe Argueta, Ramón Sagastume […].

75 AGCA, Sig. B, Leg. 3633, Exp.85326/Esta Tierra es Nuestra, Tomo IV (2004: 44-45).

Ramón Sagastume ha rematado y tomado el ganado de Antonio Valdez, remate que han hecho incluso con nuestras tierras. ¿Será posible que Antonio Valdez tiene derecho a vender nuestras tierras arbitrariamente con perjuicio de nuestro pueblo? No nos parece justo [f3] que hasta nuestras tierras sean vendidas y tomadas en posesión por particulares. El supremo Gobierno determine lo que tenga por conveniente. He aquí los otros secuaces de Antonio Valdez, Juan Bracamonte, Victoriano Barrios, Cirpiano Martínez, Fernando Sanchinel, Juan José Valdez, Francisco Martínez, José Monasterio, Carlos Xiron, Juan Sisto Cardosa, Manuel José Portillo, Manuel Calderón, que tiene muchas posesiones abarcadas arbitrariamente [sembradas] con nopal y cañales con regadíos, de los pobres indígenas, como dueño absoluto […].

Todos estos que hemos dicho arriba son federales […]. Todos estos son de la misma opinión de Antonio Valdez que reclaman [haber] auxiliado con dinero al gobierno federal […] todos estos que tenemos apuntados a una voz dicen que quieren ver a Antonio Valdez [de jefe político] en Chiquimula y a Morazán [de presidente de la Federación].

Al supremo gobierno pedimos que termine con todos estos fiebres que han violado la Santa Iglesia y sin atender a su Divina Majestad, que aún antes se nos despojó violentamente de nuestras tierras tituladas, que hasta el día carecemos del beneficio de ellas y también de nuestro cabildo que nos ha costado el sudor de nuestro rostro, lo cual hemos manifestado ante el señor corregidor en el mes de mayo próximo pasado del año de 1839, pero a la fecha no sabemos de nuestro expediente. Filadelfo Benavente, Antonio José Martínez, Mariano Trabanino, que le antecede es, quien ponía siempre dignos obstáculos en las providencias que han dictado en los años anteriores a nuestros reclamos. Antonio José Martínez es el que ha tomado el sitio de la que se nombraba Casa Real, destinada para los corregidores, no para particulares. [Por] estos motivos molestamos la ocupada atención del Supremo Gobierno, nos mueven a pedir encarecidamente y en virtud de ser tan justo, que no se le permita [a] Antonio Valdez volver a nuestro pueblo, porque de lo contrario nos hallamos en la muy precisa necesidad de expulsarlo nosotros, antes de que el pueblo todo se conmueva y se exponga a funestos resultados. Los Valdeces, los Martínez y los Trabaninos y todos sus secuaces, no queremos en nuestro pueblo ningún fiebre, nos atrevemos a decir que no respetan autoridad, ni sagrada alguna, siempre viven y vivirán en sus caprichos si se les deja impunes, nosotros lo hemos experimentado en nuestro pueblo.

¿Hasta cuándo Supremo Gobierno, tendremos el alivio de vivir en paz con estos hombres insolentados, que se han hecho temibles en aquel pueblo infeliz, porque actualmente no hay un gobernante para que vea nuestros intereses …arregle nuestras tierras y sus productos […] Al Supremo

> Gobierno pedimos rendidamente se sirva atender esta nuestra justa queja mandando hacer como solicitamos porque así nos parece justicia que imploramos y juramos [f4]. Por el común de indígenas por no saber el Gobernador y el Alcalde Primero Indígena, mandó firmar a todos los que supieron. Bartolo Megía, José María Sintug, Pablo Mendes, Andrés Canán[76].

El tono en el que fue escrito este memorial expresa el hartazgo de la comunidad indígena de Chiquimula frente al sistema de dominación que establecieron las élites ladinas en su territorio desde los primeros años de formación de la República y el Estado federal. Al mismo tiempo, se observa la beligerancia que les permitía el haberse aliado a Carrera, el contar con una instancia de protección de sus tierras, el conocer las disputas partidistas y así denunciar como «federales/morazanistas» a sus viejos enemigos. Pues esto último es lo que finalmente les podría garantizar que las nuevas autoridades conservadoras les acuerparan en su petición de expulsar de su territorio a aquellos hombres, objeto de sus denuncias. Aun cuando no contamos con estudios que documenten exhaustivamente lo que ocurrió con este y muchos otros casos en esta región, sí es claro que durante el gobierno de Carrera, cuando menos, las comunidades indígenas pudieron frenar durante varios años el vertiginoso proceso de expropiación de sus tierras que se había iniciado durante la primera generación de liberales. Estos procesos son retomados por la segunda generación de liberales, como bien lo documenta el libro *Esta tierra es nuestra*, en su volumen IV.

Las políticas de segregación y protectorado indígena practicadas durante la dictadura oligarca deben entenderse como parte de la misma filosofía conservadora, pero también como resultado de las alianzas que Carrera estableció con la Iglesia y la aristocracia criolla a partir del decenio de 1850. Durante este último periodo, el caudillo instituyó una dictadura fuertemente autoritaria que benefició principalmente a los grandes comerciantes y terratenientes de la ciudad de Guatemala. Sobre todo después de 1850, según Woodward (2002), Guatemala fue gobernada por una élite conservadora que se dedicó a restaurar y preservar los valores hispánicos tradicionales, así como el fortalecimiento de una estructura de castas que conservaría los privilegios y las ventajas que habían logrado en virtud de su «nacimiento» y «esfuerzos». Vale decir que durante la

76 AGCA, Sig. B, Leg. 3633, Exp.85326/Esta Tierra es Nuestra, tomo IV (2004:45).

dictadura oligarca, los principales funcionarios del Gobierno estaban vinculados –*por lazos de sangre o matrimonio*– con las familias patricias de la ciudad de Guatemala, particularmente con la familia Aycinena-Piñol, que desde el periodo colonial había ejercido una fuerte influencia en la jerarquía eclesiástica y en las instituciones gubernamentales[77].

Al interior de estas redes familiares prevalecieron formas de relación de carácter estamental cimentadas en principios coloniales, tales como la hidalguía o *la calidad de vida*[78]. Para estas familias el ostentar *calidad de vida* significaba demostrar que se tenía un estatus económico privilegiado, y que se era portador de valores como la honra, el ser buen cristiano y el pertenecer a un buen linaje (Sanchiz, 1976; Casaús, 1992). De este modo, las redes oligarcas constituían una forma de acumular distintas fortunas: haciendas, trabajo y capital. Además, eran una forma de diferenciación socio-racial ascendente y una forma de conservar la «legitimidad de origen» y la «pureza de sangre». Hasta muy recientemente, estas redes oligarcas constituían el medio más eficaz para marcar las *fronteras* y establecer la *distancia social* entre aquellos que reclamaban su origen criollo y la mayoría de la población de origen indígena, mestizo y afroamericano. A escala territorial, las élites provincianas buscaban emular los estilos de vida y los patrones de distinción propios de las élites patricias de ciudad de Guatemala. De este modo, contribuyeron activamente a reproducir la sociedad jerárquica que hizo posible la desigualdad social y la violencia que caracterizaron la vida provinciana de la Guatemala de fines de los siglos XIX y XX.

2.2 El pacto de dominación conservador

La alianza cruzada que Carrera estableció con las élites provincianas, los campesinos del nororiente y la oligarquía conservadora le permitieron establecer una vigorosa oposición en contra de las élites liberales y sus diferentes proyectos de modernización económica, política y cultural. Woodward (2002:597) considera que durante el periodo de Carrera –más de un cuarto de siglo– la conversión de Guatemala de una economía mayoritariamente de subsistencia a una economía agroexportadora dependiente fue detenida, o por lo menos

77 Entre las principales redes familiares de la oligarquía guatemalteca que se fortalecieron durante este periodo y cuyo linaje podemos rastrear desde 1700 hasta nuestros días están según Marta Elena Casaús (1992), los Aycinena, Arzú, Urruela, Díaz Durán y Castillo.

78 Tanto Pilar Sanchiz (*Los hidalgos de Guatemala*), como Marta Elena Casaús (*Guatemala: linaje y racismo*) hacen un interesante análisis acerca de cómo el principio de hidalguía asentado durante la Colonia ha continuado rigiendo como principio orientador de las relaciones sociales.

retrasada.[79] La mirada acuciosa de los historiadores nos muestra que el proceso de modernización capitalista se echó a andar en Centroamérica desde fines del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, y no solo fue lento sino muchas veces *reversible*. No solo porque el Estado y sus nuevas instituciones fueran económica y políticamente débiles, sino porque muchas de sus políticas se idearon con absoluto desconocimiento de las sociedades en donde se buscó implementarlas. Además, la mayoría de las veces, éstas se impulsaron en momentos de incertidumbre económica, fragmentación regional e inestabilidad, es decir, en momentos de profunda desconfianza y disputa entre las mismas élites provincianas, y de abierto rechazo por parte de aquellos pueblos indígenas que consideraban que dichas políticas afectaban aspectos fundamentales de su cultura y formas de vida cotidiana.

El análisis de este periodo ilustra que en lugar de un Estado soberano y fuerte, y naciones sólidamente constituidas, lo que prevaleció durante el primer medio siglo de vida republicana fue la fragmentación provinciana, las rivalidades entre caudillos y la disputa por el control de territorios, ciudades e instituciones que los gobiernos no fueron capaces de contener. En otras palabras, nos muestra la formación de Estados nacionales débiles, con un régimen constitucional *teóricamente* sólido pero cuyo poder se concentró en la figura del viejo caudillo hispánico, y, más adelante, en la de un dictador-militar.

Además, podemos observar las profundas debilidades estructurales de las nuevas repúblicas para sostener los costos de la modernización capitalista de tipo agroexportador, y la particular tendencia de las élites regionales de financiar *los cambios* acudiendo al trabajo forzado indígena y a los viejos modelos de *endeudamiento* o *habilitación colonial* que operaban en todas las escalas del mundo social. Pero, sobre todo, podemos constatar que independientemente de la adscripción política (liberal o conservadora), en las élites provincianas prevaleció el peso de una memoria colonial regida por jerarquías, estamentos y una larga historia de desigualdad social, racismo y violencia.

Al mismo tiempo, la lectura de este periodo nos permite observar que aun cuando las formas de dominación de los regímenes colonial y conservador se fundamentaron en el manejo calculado de la segregación y el protectorado de los

79 Es importante decir que el fenómeno de las alianzas cruzadas entre caudillos, pueblos indígenas y élites oligarcas cuyo interés común era enfrentar el avance de las políticas «modernizadoras» de la primera generación de liberales (1820-1830) se observa en diferentes momentos y escalas de intensidad en otros países de América Latina.

«indios» como seres inferiores, finalmente éstas buscaban establecer un *equilibrio* elemental en el pacto de dominación. Por un lado, exigían la obediencia, sujeción y trabajo indígena, y, por el otro, les ofertaban protección básica frente a los excesos de su explotación y el saqueo irracional de sus recursos por parte de individuos particulares y/o empresas dedicadas a la agroexportación.

En contrapartida, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a medida que las élites liberales –de la segunda generación– se involucraron de manera más activa dentro de los circuitos de la economía de agroexportación, sus exigencias en relación con los recursos y el trabajo indígena se tornaran cada vez más intransigentes hasta llevar *al límite* la relación con los pueblos indígenas.

3. Economía de plantación y reconfiguración del Estado (1880-1944)

En este libro no nos adentraremos en el período liberal, en tanto que, nuestro propósito no es escribir una historia lineal del proceso de formación del Estado desde el Nororiente Guatemala, pero sobre todo, porque durante la administración de la segunda generación de liberales *el epicentro de la acción estatal* se ubicó en los circuitos cafeteros de la Alta Verapaz y la Boca Costa Sur Occidental. Esto último no significó que el Nororiente no fuera impactado por las políticas de «modernización» capitalista que se ensayaron en esa época, no obstante, desde fines del siglo XIX hasta la Revolución de Octubre, el peso de la inversión y acción estatal se concentró en los territorios de la economía de plantación cafetera y benefició, fundamentalmente, a las elites de los Altos de Guatemala y a los empresarios alemanes que se ubicaron en los territorios del café y modelaron la institucionalidad estatal y su política pública desde los espacios finqueros[80].

Con la muerte del caudillo Rafael Carrera (abril de 1865) se puso de manifiesto los cambios profundos y las múltiples tensiones económicas, políticas y sociales que se fueron acumulando en los últimos años de la dictadura conservadora. En principio, la crisis en la producción y comercialización de la grana y su paulatina

80 Ver el artículo, González Izas (2011) "La formación transnacional del Estado. Modernización capitalista, inmigración europea y circuitos del café en Guatemala 1870-1930" en Agudo Sanchíz y Saavedra (Comp.) Universidad Iberoamérica y El Colegio de México, México y el libro Modernización Capitalista, Racismo y Violencia en Guatemala (2013). El Colegio de México, México, en el que abordo a fondo estos procesos.

sustitución por la agroexportación cafetera provocó cambios sustantivos, no sólo en la economía, sino en las constelaciones de poder, la configuración social y territorial del agro guatemalteco. Nuevos actores sociales –élites provincianas e inversionistas extranjeros– entraron a competir con la vieja oligarquía por el monopolio del comercio y los recursos estratégicos (tierra, trabajo, crédito, circuitos comerciales e instituciones estatales) necesarios para echar a andar las empresas cafeteras. Dentro de esta nueva contienda, «el indio» y sus recursos constituían el objeto de disputa, al mismo tiempo, el objeto de temor. En otras palabras, durante los años 60 del siglo XIX ocurrieron drásticos cambios en la manera de entender el proceso de modernización capitalista, en la forma de administrar el Estado, en la forma de representar y organizar el territorio nacional. Durante ese período cambió la manera de entender las relaciones entre el conjunto de actores involucrados en la dinámica modernizante; los territorios a modernizar y las formas de reorganizar los ciclos de la producción, los espacios, los tiempos y ritmos del trabajo.

La producción cafetera tomó impulso en la Bocacosta suroccidental y las Verapaces en la segunda mitad de los años 60, con ello se debilitó la influencia del viejo círculo de productores y comerciantes de Ciudad de Guatemala y sus socios locales radicados en el Nororiente, que hasta entonces, habían administrado los circuitos del comercio transatlántico y transfronterizo en el triangulo norte del istmo centroamericano. Los nuevos empresarios cafetaleros, tanto los extranjeros (principalmente alemanes) como aquellos pertenecientes a la élite regional de Los Altos, demandaban significativos cambios económicos y políticos, que el gobierno e instituciones conservadoras se mostraron incapaces o mal dispuestas a hacer. Algunos de estos cambios, señala David McCreery (1981), eran: 1) Mejoras en el sistema de comunicaciones en el suroccidente del país y la vertiente del Pacífico; 2) Mayor crédito a interés más bajo para la producción; 3) Libertad con relación al monopolio del Consulado de Comercio; 4) Acceso fácil a tierra y mano de obra indígena y fin a los impedimentos legales para su libre explotación. La indiferencia y la lentitud de la administración de chiquimulteco Vicente Cerna (sucesor del caudillo Rafael Carrera) para efectuar dichos cambios en los tiempos y lugares requeridos, provocó el desagrado de los nuevos plantadores de café y de los miembros de la Sociedad Económica, quienes llegaron a reclamar la destitución de funcionarios de gobierno al más alto nivel.

Un factor que influyó decisivamente en los cambios abruptos ocurridos en el decenio 60 fue la vieja disputa sostenida entre las élites criollas de la Ciudad

de Guatemala y las élites liberales de las más importantes ciudades de Los Altos (principalmente Quetzaltenango y San Marcos) que habían dirigido el movimiento separatista de Los Altos. Según el viajero suizo alemán Gustav Bernouilli (1975 [1868-1885]), durante casi 30 años, y con un ilimitado poder, la administración de Carrera [y la de su sucesor, Vicente Cerna] había hecho poco por erigir el país sobre una base ordenada. Además no había llevado a cabo nada por hacer olvidar el celo reprimido entre las dos ciudades más importantes del país, Guatemala y Quetzaltenango. En consecuencia, la población ladina de Los Altos era de la opinión de que solamente los indígenas, el clero y las familias conservadoras de la capital y el oriente de Guatemala, tenían motivos para estar satisfechos con el régimen de Carrera[81]. Pues aun cuando muchas de las familias de la élite provinciana de Los Altos habían acrecentado sus fortunas a través de la especulación y comercio de cereales[82], durante los años de la dictadura caudillo-oligarca, éstas estuvieron marginadas del poder central y solían ser castigadas con disposiciones gubernamentales tendientes a minar su monopolio comercial y sus espacios de influencia[83]. De hecho, observa Ralf Woodward (2002:355), los departamentos de Los Altos (Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Huehuetenango, Suchitepéquez y Totonicapán) eran virtualmente tratados como "territorios conquistados" y sujetos a una administración represiva dirigida contra las familias ladinas más acomodadas. Sin embargo, a la población indígena de dicha región por lo general se le dejaba en paz.

Con el auge de la producción cafetera, la élite altense empezó a reclamar para sí más espacios de decisión para impulsar las acciones modernizadoras del agro en sus antiguos dominios. Particularmente, reclamaba el derecho de privatizar expeditamente vastas extensiones de tierra que partencía a los pueblos indígenas

81 Castellanos Cambranes 1975:62-63/ Bernouilli, PGM: 1869, tomo 15, cuaderno XI, pág. 427.

82 Según Arturo Taracena (1999: 302), si se toman en cuenta los informes gubernamentales de la época, se advierte que los grandes acaparadores y comerciantes de cereales de Los Altos constituían un grupo poderoso capaz de controlar el abastecimiento de granos de todo el país. Por ejemplo, en el informe de 1847 se habla de que en los departamentos altenses había depósitos superiores a las 600,000 fanegas de granos, mientras el país se hundía en la penuria general.

83 Una de las disposiciones tendentes a romper el monopolio del comercio cerealero de los altenses fue el decreto presidencial No. 18 emitido en 1847, que suprimió la alcabala marítima y los impuestos internos para la importación de *harina extranjera*. Según Taracena (1999: 302), con tal disposición, por una parte, se presionaba a los altenses para que no continuaran con sus prácticas acaparadoras y, por la otra, se les daba un golpe bajo importando harina del extranjero. Mientras que en 1848 se consideró necesario prohibir la exportación del grano y se dispuso enviar comisionados a los departamentos cerealeros para establecer contacto con los productores directos y comprometerlos a vender a través de "contratos de depósito". Ambas medidas constituían golpes mortales para los intermediarios altenses, quienes probablemente estaban acaparando el grano para venderlo en el exterior, especialmente en México (Taracena, 1999: 303).

en la Bocacosta de Quetzaltenango, San Marcos y Suchitepéquez; y el derecho a manejar con «libertad y criterio propio» la movilización de trabajadores indígenas de las Tierras Altas hacia las nuevas plantaciones cafeteras ubicadas en el declive Pacífico. Al mismo tiempo, exigía al gobierno la construcción y mantenimiento de caminos y la construcción del puerto de Champerico en el Pacífico, el cual les permitiría liberarse del Consulado de Comercio que protegía el monopolio de los comerciantes de la Ciudad de Guatemala y sus socio locales en el nororiente, quienes controlaban las rutas y puertos del Atlántico desde el período colonial[84].

La dilación explicita por parte del gobierno en relación al avance de estos proyectos, constituía un gran agravio para los plantadores de café del Occidente del país y de la Verapaz, quienes, se adscribieron activamente al movimiento liberal de 1871 y exigieron la supresión del Consulado de Comercio y la construcción inmediata de nuevos puertos en el litoral del Pacífico (Woodward, 2002).

Jorge González-Alzate (1994) documenta que, desde el decenio 60 un grupo de finqueros quezaltecos y marquenses residentes en la Bocacosta venían enviando memoriales al gobierno en los que argumentaban que la infraestructura de transporte era crucial para la naciente empresa cafetera. Por consiguiente, solicitaban apoyo financiero para construir una carretera que uniera las fincas de la Costa Cuca con el pueblo de San Marcos y la provincia del Soconusco. En dichos escritos, ya se referían a la Costa Cuca como una región con un extraordinario potencial económico, pues argumentaban que desde 1850 su fértil tierra había incentivado la inversión y el *trabajo duro* de nuevos empresarios pertenecientes a «las familias más respetables de Los Altos». En estos escritos, los cafetaleros altenses solían cerrar sus demandas argumentando enfáticamente que la construcción de dichas carreteras contribuiría a reducir las distancias de viaje y los costos de transporte propios de la comercialización del café a través de nuevos puertos ubicados en el Pacífico. Al mismo tiempo, exhortaban al gobierno a apoyar "la cultura del café" con la protección que ésta merecía. Sin embargo, las promesas presidenciales no llegaban a concretarse en acciones, pues los conservadores estaban conscientes de la larga tradición del sentimiento

84 Es importante aclarar que durante la dictadura oligarca El Consulado de Comercio era el órgano principal de Guatemala dedicado a la construcción de carreteras nacionales, de puertos y de otras obras públicas, hasta que fue sustituido en 1871 por un ministerio de desarrollo del gobierno. El consulado administraba o ayudaba en proyectos de su propia iniciativa o los que le proponían los gobiernos departamentales o municipales, las compañías privadas, las personas individuales u otros entes cuasi autónomos, tales como la Sociedad Económica o el Consejo Eclesiástico. No obstante, la mira primordial de la institución era ejecutar proyectos a favor de los intereses de los comerciantes de Ciudad Guatemala (Woodward, 2002: 499-500).

regionalista y de los sentimientos liberales de los nuevos cafetaleros, y les denegaban asistencia en sus solicitudes (González-Alzate, 1994:562).

El descontento acumulado durante la dictadura oligarca, los desatinos de la política de Cerna y el avance del liberalismo en México incentivaron la reorganización del movimiento liberal en Guatemala. Inicialmente, éste estuvo liderado por un grupo de liberales ilustrados de la ciudad capital, quienes durante los últimos años de la dictadura oligarca ejercieron presión para que se hiciera una serie de reformas políticas desde la Asamblea Nacional Constituyente y asumieron una postura crítica frente al régimen en diferentes espacios de opinión pública e instancias de decisión político-administrativas como la misma Sociedad Económica. Paralelamente, se organizaron dos movimientos insurgentes: uno en el Oriente de Guatemala, comandado por Serapio Cruz, un viejo disidente del ejército de Carrera, y otro en el Occidente, liderado por Justo Rufino Barrios, joven militar, finquero, representante del regionalismo altense y la naciente oligarquía cafetalera.

El éxito inicial de los dos grupos que llegan al poder en 1871 radicó en su capacidad de formular una propuesta modernizadora con un renovado lenguaje institucional inspirado en los ideales democrático republicanos, al mismo tiempo que establecían un estilo de gobierno autoritario organizado por los jefes militares que comandaron el movimiento. Los nuevos *jefes políticos departamentales* y los comandantes locales, en la práctica, se encargaron de definir e implementar las nuevas políticas en la escala regional y local[85].

A partir de su llegada al poder (1871) los nuevos finqueros e inversionistas cafetaleros impulsaron un proceso de modernización expedito que privilegió: 1) una vinculación dependiente y desventajosa del país al mercado mundial como proveedor de productos agrícolas y comprador de productos manufacturados; 2) la inmigración de trabajadores y empresarios europeos; 3) la configuración de territorios altamente diferenciados en «espacios de modernidad» y «espacios de atraso»; 4) la definición de un modelo de ciudadanía que en la práctica fue altamente restringida y excluyente; 5) la definición de una administración del Estado que siempre privilegió formas de dominación autoritarias para impulsar «el progreso nacional»; y 6) formas de entender lo político que muy pronto transitaban del paternalismo piadoso a la violencia en todas sus gradaciones.

85 Todos los Jefes Políticos eran ladinos y tenían el cargo de Comandante 1º del Ejército de la República. Ver Jean Piel (1995) y Matilde González-Izás (2002).

Al igual que en muchos otros países de Latinoamérica, los caudillos guatemaltecos que abogaba por la «modernización» y el «progreso», muy pronto, reemplazaron la fe liberal en el sistema constitucional y el sufragio universal por las teorías evolucionistas y las ideas de la superioridad y degeneración de las razas. Justificando así, la necesidad de establecer un Estado fuerte que fuera capaz de enfrentar no sólo las rebeliones indígenas, sino cualquier movimiento provinciano de oposición al régimen, entre otros, el movimiento armado que se organizó en el Nororiente en apoyo al depuesto presidente Vicente Cerna.

Enarbolando las banderas del evolucionismo, el progreso y la estabilidad política durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX se instauraron una serie de dictaduras caudillas como las de Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Durante este período, el carácter autoritario y caudillo del Estado de Guatemala, arguye Holden (2004), tuvo serias implicaciones: la *primera*, fue la completa arbitrariedad y ausencia de un sistema de derecho sólido. Sin legitimidad ni capacidad de fomentar el respeto de la ley, la tendencia del Estado era el recurrir al uso de la violencia para hacer cumplir la ley, la cual continuó estando sujeta a los deseos y arbitrariedades de los caudillos y sus colaboradores. *La segunda,* la ausencia de un sentido fuerte de nación. *La tercera,* la adopción de formas de *patronazgo transnacional* en las que una potencia extranjera (primero Inglaterra, más tarde Alemania y Estados Unidos) distribuía favores y atraía clientes, fomentando y/o aprovechando divisiones dentro de los gobiernos. *La cuarta,* la constante dependencia de grupos armados y un poder extranjero que prolongó los viejos hábitos clientelares, acrecentó el personalismo y el uso de la violencia pública. En este contexto, el Estado se constituyó en un espacio al cual se vinculaban, de forma caótica, una serie de patrocinadores y entidades colaboradoras que ejercían diversas influencias y ponían en riesgo su propia estabilidad. Ante la carencia de recursos para fomentar una obediencia ciudadana no violenta, el Estado siempre dependió de un sistema de clientelas y milicias privadas para inducir la colaboración a través de relaciones de intercambio intrínsecamente violentas.

Durante el período que va de 1880 a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la formación del Estado en la región estará influida, si es que no, condiciona por la disputa imperial que se estableció entre Alemania y Estados Unidos por alcanzar el control de los circuitos del comercio trasatlántico, la apropiación de extensos territorios aptos para la economía de plantación y establecer su

hegemonía política. Mientras los finqueros e inversionistas alemanes ocuparon extensos territorios y formaron plantaciones cafeteras en el Valle del Polochic, la Alta Verapaz y buena parte la Bocacosta del Pacifico, los empresarios norteamericanos llegaron a tener el control de un extenso territorio de la costa Atlántica y los fértiles valles del río Motagua –en el departamento de Izabal-, justo el territorio que en los años 30 del siglo XIX la primera generación de liberales había concesionado a las empresas inglesas [Bennett & Meany y la Eastern Coast of Central America Commercial and Agricultural Company] ligadas a la industria extractiva de madera y a los circuitos del comercio inglés cuyo centro de operaciones era Belice. La disputa entre ambas potencias por el dominio de esta región se hace explicito en un interesante artículo de 1929, del etnólogo y geógrafo alemán Franz Termer, titulado «Alemanes y estadounidenses en Guatemala». En dicho artículo, Termer hace una brillante comparación de los territorios ocupados, los sistemas de producción, tipos de empresa, procesos de expansión comercial, formas de intervención política e influencia cultural que ejercen los empresarios, intelectuales y políticos de ambas potencias en este «pequeño país tropical». Independientemente de los sesgos nacionalistas que éste pueda tener, la descripción detallada que hace Termer de los territorios ocupados por ambas potencias en 1929, nos da una clara idea de la geografía y mecanismos de expansión imperial que ensayaron ambas potencias en Guatemala. Si bien, no nos adentraremos en el análisis comparativo que hace el citado etnólogo y geógrafo alemán, si nos parece interesante recuperar, la descripción que éste hace del territorio nororiental en 1929:

> «Que distinta es la primera impresión que tiene el extranjero que llega por primera vez a la república de Guatemala por un puerto situado en la costa del Pacífico, o si toca Puerto Barrios, establecido en una ensenada abrigada del mar Caribe... En el lado atlántico -describe Termer- el vapor desembarca en un moderno muelle construido de cemento, en el que rueda el transporte ferroviario y donde se afanan manos laboriosas y se oye el timbre opaco de la lengua inglesa de «negros y zambos». El viajero ve junto a la playa grandes edificios de oficinas y almacenes [de la United Fruit Company] construidos con refrescante cemento, alambrados y ventilados; observa también canchas de tenis y campos de golf, en que con el acento americanos de su inglés, los caballeros y damas elegantemente vestidos dan a conocer su procedencia. Esta impresión se borrará después de varias horas de viaje en el ferrocarril que atraviesa ininterrumpidamente umbrosos bananales, para luego pasar bruscamente a un tórrido matorral estepario [Zacapa] con escasos habitantes en donde de repente, en la estación se oye hablar más el español (Termer, [1929] 1989:263).

En el Nororiente la gran plantación bananera y el Ferrocarril del Norte constituyeron el eje para la expansión del capital norteamericano. Los enclaves bananeros se establecieron en las tierras bajas del litoral Atlántico regadas por el río Motagua (entre Puerto Barrios y Morales Izabal). La vieja idea de los liberales de la primera generación acerca de la modernización del circuito comercial Atlántico y la construcción de vías de comunicación y trasporte que hicieran ágil y eficiente la circulación de mercancías entre la ciudad capital y los puertos del Atlántico continuaba vigente en el último cuarto del siglo XIX.

Al igual que sus antecesores, las elites liberales de la segunda generación acudieron a la vieja fórmula de *la concesión de territorios estratégicos*, a cambio de la construcción de vías ferroviarias y la introducción de un servicio regular de trenes de carga y pasajeros que unieran la ciudad capital de Guatemala con la Costa Atlántica y la Costa Pacífica. Tanto en el caso de Guatemala, como el de Honduras y Costa Rica, la construcción de las líneas ferroviarias fue la puerta de entrada al gran capital bananero, el cual demandó de generosas concesiones de tierra en el litoral Atlántico. Como ejemplos, cabe citar que: En julio de 1880 el Estado de Guatemala firmó un contrato con Guillermo Nanne y Luis Schlessinger para el tendido de 48 millas ferroviarias que debían unir Escuintla con Ciudad Guatemala. Con la construcción de este tramo se pretendía conectar la capital con la línea ya existente entre Escuintla y el Puerto San José, en el Pacífico. A cambio, el Estado otorgó a la empresa 1,500 caballerías de tierra (166,500 acres) en el valle del Motagua a la altura del departamento de Izabal. Estas tierras, colindaban con Honduras y posteriormente fueron transferidas a la United Fruit Company, que las dedicó al cultivo de banano a gran escala desde 1906 (Posas, 1993).

En enero de 1904 el Estado firmó un contrato con Minor Keith y William van Horne en el que éstos últimos se comprometieron a construir el tramo de 62 millas de línea ferrocarrilera que conectaría la ciudad capital con la línea que venía de Puerto Barrios, cuyo trazado se había detenido en El Rancho[86]. A cambio de estas 62 millas, el gobierno de Manuel Estrada Cabrera les concesionó otras 1,500 caballerías de tierra en los valles del Motagua. Sumada a las tierras otorgadas [en julio de 1880], en pocos años la UFCO se convirtió en propietaria de 3,000 caballerías de tierra en los fértiles y codiciados valles del Motagua.

Además el gobierno de Estrada Cabrera concedió a esta empresa: a) el control durante 99 años de la línea ferroviaria entre Puerto Barrios y el Rancho; b) el

86 Municipio donde se bifurca el camino que va a Ciudad Guatemala, Las Verapaces, el Nororiente de Guatemala.

usufructo del muelle e instalaciones del Puerto Barrios; c) una extensa franja tierra de 100 pies de ancho en concepto de derecho de paso de la línea ferrocarrilera a construir a partir del contrato de enero del 1904; d) un terreno de treinta manzanas en la ciudad de Puerto Barrios para que la empresa construyera la estación, oficinas y talleres del ferrocarril; e) el derecho a usar el agua de los ríos o desviarlos a su conveniencia; f) el libre acceso y exoneración de los impuestos de importación en todos los materiales requeridos para la construcción y mantenimiento del ferrocarril; g) exoneración de todos los impuestos de exportación del banano que la empresa planeaba producir y exportar en un período de 35 años.[87]

En noviembre de 1924, la *United Fruit Company* firmó otro contrato con el gobierno de José María Orellana en el que obtuvo el arrendamiento de todas las tierras «incultas» de la cuenca de río Motagua en una extensión de 100 KM. Además, el derecho de construir líneas ferroviarias y líneas telefónicas en todo el Nororiente. Al igual, que en otros contratos, dicha empresa aseguro la importación libre de gravámenes de todos los materiales requeridos para la construcción de y mantenimiento de las instalaciones de las plantaciones bananeras. A cambio, la empresa se comprometió a pagar una renta anual de $6,000, un centavo de dólar por cada racimo de banano exportado y transportar de forma gratuita toda la correspondencia que saliera desde Puerto Barrios. Este contrato fue renovado en marzo de 1936 por un período de 45 años.

Según el citado artículo de Franz Termer ([1929] 1989) la *United Fruit* sembró banano en la cuenca del río Motagua, utilizando las vegas bajas costeñas hasta 100 kilómetros tierra adentro y hasta 12 kilómetros a lo ancho, de modo que en 1929 el tren recorría tales plantaciones durante 3 ½ horas ininterrumpidas (271). Visto desde la óptica agronómica –agrega Termer– lo que se hace aquí es la explotación exhaustiva de un monocultivo que afecta extraordinariamente el suelo. Se le extrae todo beneficio sin preocupación por el rumbo de su rendimiento. La siembra de banano es hasta hoy un cultivo extensivo, que con mucha rapidez agota la tierra y está expuesto a muchas plagas (272).

Para agilizar la comercialización de la fruta y aumentar su rentabilidad, esta empresa, no solo estableció sus propios ferrocarriles sino también una flota propia de vapores especiales llamada «*The Great White Fleet*», que en los años

87 Para más información al respecto, ver el interesante artículo de Mario Posas: La Plantación Bananera en Centroamérica 1870-1929 en Historia General de Centroamérica (1993 págs. 111-165).

20 y 30 del siglo XX era la más fuerte del mar Caribe. Para ello, por su puesto –amplía Termer–, se realizaron nuevas construcciones en la zona portuaria de Puerto Barrios que han permanecido como propiedad de la compañía. Ejemplo de lo anterior es el muelle con sus galpones de almacenamiento y tendido de vías férreas ([1929]1989: 273).

En 1925 la *United Fruit* poseía el 51% de las acciones de la IRCA que para ese entonces, controlaba 887 millas ferroviarias entre el Atlántico, Guatemala y El Salvador. Esta empresa contaba con tres líneas: una línea principal que comunicaba la zona portuaria atlántica de Puerto Barrios y la de San José en el Pacífico con la ciudad capital; otra que recorría la principal zona económica de la república [la Bocacosta y costa sur del Pacífico] desde la frontera mexicana hasta Escuintla; y, una tercera vía que conectaba Zacapa con El Salvador, enlazando este país con la costa atlántica. Huelga señalar -puntualiza el citado etnólogo y geografo alemán- que con los ferrocarriles Estados Unidos tiene el país en la mano ([1929] 1989).

El control de los ferrocarriles permitió a la empresa bananera disponer de transporte barato y eficiente para todos los productos que exportaba e importaba libre de impuestos. La bananera era propietaria de los muelles o en el peor de los casos mantenía control sobre los existentes (Posas, 1993:135). También era propietaria de los buques que transportaban los bananos y del las mercancías que importaban para surtir la red de comisariatos que tenían en los centros urbanos del nororiente en donde la empresa estaba afincada. De hecho, esta empresa prefería importar todos sus productos de Estados Unidos para usar de forma rentable el espacio disponible en los barcos durante sus viajes de regreso a Centroamérica. Como veremos en el siguiente capítulo, los comisariatos de la bananera se convirtieron en una interesante forma de expansión de las mercancías norteamericanas en todo el nororiente. Asimismo, en una importante corriente de influencia en el plano comercial, cultural y financiero, al punto que en los años 20 y 30 del siglo XX el dólar llego a ser una moneda de uso corriente en varios de los municipios del Nororiente. Igual, o aún más significativa, fue la introducción del Ferrocarril del Norte y la contratación de miembros de la elite regional para que ocuparan cargos de mando medio tanto en la bananera como en el ferrocarril. Estos hechos, en buena medida, definieron el curso de las decisiones políticas que asumieron aquellos nororientales que se veían beneficiados con la presencia de dichas empresas y se adscribieron al movimiento anticomunista.

Tercera parte

Contienda revolucionaria y restauración del orden provinciano

Capítulo III
La presencia del caudillo en la memoria del siglo XXI

> «La verdad es que nosotros no sabíamos nada de política, habíamos vivido la época de los 14 años del general Ubico y en todo ese tiempo no había ningún movimiento político. Ubico gobernó con una simbiosis liberal-conservadora y así se mantuvo en el poder. […] Nosotros no sabíamos mayor cosa de política» [E-Gt17-SO-11.08.2011].
>
> Lionel Sisniega Otero[88]

Las palabras anteriores fueron expresadas por el emblemático Lionel Sisniega Otero, en la entrevista que sostuvimos con él en agosto de 2011 (un año antes de su muerte). Ilustran con elocuencia el legado de la dictadura ubiquista en el pensamiento político de la élite oligarca guatemalteca de la segunda mitad del siglo XX. Para los miembros de su clase y su generación, la participación política del «populacho» siempre fue un riesgo a precaver. A partir

88 Como veremos más adelante, Sisniega Otero fue un influyente político anticomunista, participó activamente en el derrocamiento del gobierno de Arbenz. Sisniega fue miembro fundador del Partido Liberal Auténtico, del Partido de Unificación Anticomunista (Pua) y del Movimiento de Liberación Nacional (MLN); además, fundador y director general del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN). A raíz del asesinato de Francisco Javier Arana, participó en el levantamiento armado contra el gobierno de Juan José Arévalo. En 1951 colaboró en la fuga de Carlos Castillo Armas de la Penitenciaría Central. En 1952, desde Honduras contribuyó a la fundación del Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas Guatemaltecos en el Exilio (Ceuage). En 1954 ingresó en el Ejército de Liberación Nacional y, con José Torón Barrios y Mario López Villatoro integró el cuerpo de locutores de la radio clandestina La Voz de la Liberación.Fue secretario general del Partido Liberal y director de Relaciones Públicas del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) (Asociación de Amigos de País, 2004:846). Pero, sobre todo, Sisniega fue uno de los más destacados operadores políticos de la sucesión de golpes de Estado que definieron el rumbo autoritario que siguió el Estado de Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX.

de allí, su apuesta por el paradigma del hombre *en armas*, capaz de concentrar el poder e instaurar el orden oligárquico de forma expedita, tal como en su tiempo lo administrara el recordado caudillo liberal. Como veremos en este capítulo, la evocación continua de *la paz ubiquista* ayuda a explicar algunas de las razones por las cuales este sector de la élite guatemalteca y sus aliados provincianos les apostaron a los gobiernos militares, al fraude electoral, a los golpes de Estado y los estados de excepción para resolver las contiendas políticas y el conflicto social.

Desde mi perspectiva, la importancia que adquiere el controvertido caudillo liberal en la memoria de las élites oligarcas y provincianas no radica en su componente propiamente anecdótico, sino en las distintas maneras en que se viene recreando el paradigma de orden y progreso que éste difundió. Es particularmente significativo que en las memorias de mujeres y hombres nororientales que entrevistamos en el invierno de 2012, la breve historia de los gobiernos democráticos de 1944 a 1954 se funde, cuando no se *confunde*, con los recuerdos de la dictadura ubiquista y el Movimiento de Liberación Nacional, pues muchas de las ideas y formas de entender el orden social y político pregonadas por Ubico aún subsisten, con sorprendente actualidad en el imaginario provinciano y en la práctica política de los nuevos caciques locales que vienen gobernando la región a partir de las políticas de reforma del Estado que se implementaron en la coyuntura crítica de los años 90 del siglo XX, tal como veremos en el último capítulo de este libro.

En el nororiente de Guatemala, la formación del Estado revolucionario fue un proceso disputado, en tanto que muchas de sus aspiraciones de cambio real no eran compartidas por un importante sector de la élite regional, la cual siempre reclamó la restauración del viejo orden provinciano. Incluso, para algunos intelectuales nororientales que conocieron los pormenores del régimen ubiquista, las imágenes del dictador son ambivalentes y en algunos casos contradictorias desde su perspectiva democrática. Pues si bien critican los horrores del régimen, la persecución y ejecuciones extrajudiciales a los opositores políticos, la arbitrariedad de la ley fuga, la exhibición de la violencia pública en los fusilamientos, los trabajos forzados, la sociedad punitiva y carcelaria, aún añoran el orden racial y jerárquico, la obediencia, la calma, el ornato y la limpieza social de los tiempos del dictador. Más importante aún, frente a la actual crisis de gobernabilidad y violencia, la imagen del «hombre recio» y la «mano dura del

dictador» se reactualiza como paradigma alternativo al «*caos* y *el desorden social*». Distintas son las memorias de los viejos ch'orti', que recuerdan al gobierno de Ubico como «un gobierno *ruin*, que hizo *averías* con el pueblo indígena», o como «un régimen de trabajo forzoso y esclavitud».

Todavía hoy, la sorprendente divergencia, contradicción si se quiere, que caracterizó al gobierno de Ubico, nos dice Karlen (1991), provoca asombro, horror, pero también admiración. Por un lado, la gente recuerda que el caudillo conocía su país extremadamente bien, se presentaba como un estratega sagaz y muy sensible, que sabía tomar en serio la voz del pueblo y que aspiraba a lograr una mejora en las condiciones materiales de la población. Por el otro, lo recuerdan como un autócrata despiadado y brutal que fomentó el personalismo y convirtió a la mayoría del pueblo en juguete de su favoritismo (vid. Geller, 1996:429-439).

El verdadero significado del régimen de Jorge Ubico consiste, entonces, en el hecho de que éste se instaló en una coyuntura crítica de grandes transformaciones en la región centroamericana. Frente a la crisis económica y la incertidumbre política, fortaleció formas altamente personalizadas y expeditas de gobernar y ejercer control sobre el Estado, el territorio y la población, que determinaron muchas de las ideas y prácticas político-institucionales que perduran hasta la actualidad. A largo plazo, más significativos que el balance material son los cambios institucionales que el régimen ubiquista conscientemente introdujo o inconscientemente provocó; éstos forman la verdadera herencia de su gobierno, más duraderos que las construcciones infraestructurales, con las que Ubico trató de inmortalizarse (Karlen, 1991:453).

Dentro de estos cambios institucionales, particularmente decisiva fue la militarización de la institucionalidad pública. Durante su administración, la mayoría de los jefes políticos de cada uno de los veintidós departamentos de Guatemala era un general con amplias potestades para injerir en la administración pública, en el espacio social y en la vida cotidiana de los pueblos bajo su jurisdicción. La mayoría de los jefes políticos que gobernaron el departamento de Chiquimula fueron generales. Entre ellos destacan Carlos Jurado, Daniel Montenegro Morales, Daniel Corado, Serapio Cuyún, Pedro Marroquín; además, el coronel Salvador Bercián, y otros más (Mata-Retana, 1982:21).

Para contextualizar quiénes fueron y qué papel desempeñaron algunos de estos jefes políticos durante la dictadura ubiquista, cabe anotar que durante el primer

gobierno de la Revolución (en mayo de 1945), el Estado Mayor del Ejército y el Congreso de la República decretaron rescindir el grado de general a Jorge Ubico y a sus generales más cercanos: Federico Ponce Vaides (el sucesor del caudillo), Daniel Corado Ruiz y Serapio Monroy Cuyún (jefes políticos de Chiquimula), y David Ordóñez Peralta (conocido anticomunista zacapaneco y exjefe de la policía de Ubico). Todos ellos fueron acusados de «haber violado la Constitución de la República, haber mantenido al país en la más oprobiosa de las dictaduras, al extremo de haber segado la vida de muchos ciudadanos sin más razón que su capricho personal y con absoluto desprecio de la ley»[89].

Odiados por sus propios oficiales, los generales de Ubico fueron célebres por su ignorancia, incompetencia y crueldad. Su única calificación era su ciega obediencia a las órdenes de Ubico (Gleijeses, 2005:11). Particularmente, durante la segunda etapa de la administración ubiquista, los generales o jefes políticos de Ubico controlaban el quehacer de la institucionalidad estatal en los territorios bajo su dominio: desde las actividades propiamente militares y administrativas hasta el quehacer educativo, judicial y extrajudicial. Si bien Ubico les exigía obediencia y fidelidad incondicional, a cambio les concedió amplios márgenes de acción. Algunos de estos jefes, como los generales Daniel Corado y Serapio Cuyún, se movían como amos y señores en su feudo, debilitando el ejercicio ciudadano y la independencia de poderes en sus territorios. El general Corado, recuerda Mata-Retana (1973:28), solía pasear por las mañanas en un brioso corcel. Siempre sorprendía a grupos de muchachos estudiando, quienes tenían que hacerle honores militares aunque no luciera el uniforme. Igual cosa sucedía con los civiles que en horas de la tarde o de la noche descansaban en el parque Ismael Cerna. Eran obligados a ponerse de pie, porque, de lo contrario, quien no lo hacía iba arrestado al cuartel.

El control que estos jefes ejercieron sobre el trabajo, la movilidad y circulación de las personas dentro de su territorio de influencia aún es ampliamente recordada por aquellos ancianos ch'orti' que vivieron en carne propia «los trabajos forzosos de los tiempos de Ubico», atendiendo las exigencias de trabajo de la Vialidad, la Ley de Vagancia, y aquellos proyectos específicos que se les ocurrieran a los jefes políticos e intendentes de sus municipios. En algunos municipios del oriente, la persecución a los ch'orti' para que cumplieran con el trabajo forzado llegó a ser tal que provocó el desplazamiento interno de varias comunidades hacia las

89 Decreto No. 245, Congreso de la República de Guatemala, 31 de mayo de 1945

montañas de la región (tal como sucedió con el «repartimiento de indios» durante la Colonia). Tal es el caso de las aldeas Las Flores y Guareruche, en Camotán, cuyos ancianos recuerdan que sus aldeas se formaron luego de que un grupo de familias ch'orti' escapó de las exigencias del jefe político departamental para que éstos hicieran trabajos forzados en la construcción de las carreteras y los tramos de la línea férrea que aún quedaban por construir en la región. Respecto a esto último, el señor Héctor Suchité, de la aldea Las Flores, recuerda:

> «La historia de la aldea Las Flores dice que nosotros no éramos de aquí. Nosotros venimos de un lugar de Ipala, pero como allí era el trabajo de la línea de Puerto Barrios hasta Guatemala, a cada rato sacaban a la gente… la llevaban a trabajar con *orden competente* del jefe político. Entonces los familiares de nosotros, cuando se sintieron muy graves con tanto trabajo, ya no aguantaron más y se huyeron. Se vinieron acá, en la pura montaña… [montaña escarpada de Camotán]. Se vinieron para acá buscando un lugar alejado del pueblo para que la autoridad no pudiera dar con ellos. ¡Ya no van a trabajar de gratis! En ese tiempo, estas montañas no se conocían como un lugar viviente, era un terreno comunal pero no lo conocía ninguno. Entonces vinieron los abuelos y los hijos de los abuelos y empezaron a agarrar sus pedazos de tierra. Las gentes que venían con ellos agarraron sus pedazos de tierra. Así se fue multiplicando la gente hasta que llegó un día en que se hizo una aldeíta, se formó la aldea Las Flores… Eso pasó en el tiempo de Jorge Ubico» [E-Ch-AGyCR-19.01.13:6 y 7].

Mientras que el señor Simeón López Pérez, de la aldea Guareruche, Camotán, inicia la narración de su historia de vida recordando que su abuelo y su papá le contaban que en la época de Ubico pagaban la *Vialidad*:

> «Ellos me contaban que tenían que salir a trabajar en el campo, en las carreteras, en la línea tren (sic), y ninguno de ellos ganó ningún centavo. Allí los hacían trabajar como un animal, no le daban ni agua ni comida; ellos tenían que conseguir su comida para poder vivir durante quince días, cada vez que los llamaban para ir a trabajar. Ese Gobierno hizo *averías* con el pueblo indígena. Fue una amenaza muy grande para nosotros. A la gente indígena de todas estas aldeas de aquí [Jocotán y Camotán] les tocó hacer las carreteras que venían de Puerto Barrios a Zacapa y de Zacapa a Chiquimula; también hicieron la carretera que va para Ipala, Jalapa y la frontera con El Salvador; después la que va para Esquipulas, por ahí donde ahora es el Trifinio. Todavía mi papá trabajó abriendo la línea del tren, él trabajó en el trecho que va de San Pablo para acá (Chiquimula) y de Zacapa para Gualán. Esa fue una vida durísima» [E- Ch-AGyCR-19.01.13: 2 y 3].

Fotografía No. 4
Aldea Ch'orti', Camotán, Chiquimula



Fuente: Trabajo de campo Matilde González.

Mediante diferentes modalidades y mecanismos de trabajo forzado, la administración ubiquista buscaba tomar el control de la mano de obra para llevar adelante la construcción de la red carretera y concluir aquellos tramos de línea ferroviaria que aún quedaban pendientes para conectar los puertos del Atlántico con el nororiente y El Salvador. La violencia implícita en cada uno de estos mecanismos de trabajo forzado provocó el descontento entre los ch'orti', para quienes este tipo de trabajo, las multas, los arrestos y encarcelamiento no solo eran injustos, sino completamente desiguales, en tanto que las obligaciones recaían con especial rigor en los indígenas, quienes se veía obligados a trabajar al servicio de las autoridades ladinas que gobernaban Chiquimula. Finalmente, este largo periodo de abuso de autoridad, trabajos obligatorios y violencia pública fue formando una actitud de aparente sumisión frente al ladino y las autoridades gubernamentales; al mismo tiempo, un sentimiento de profunda injusticia y descontento popular frente a un sistema de dominación, que todavía ahora

recuerdan como «un régimen perro», «un tiempo de esclavitud, en el que no se podía andar libremente por los caminos». El descontento acumulado durante la dictadura estableció las bases para el proceso de organización y demanda campesina que se llevara a cabo durante los dos gobiernos de la Revolución, como lo veremos más adelante.

En julio de 1952, la historiadora chiquimulteca Rosa Flores escribió: «[…] la administración del general Ubico fueron 14 años en que el pueblo vivió hundido en la desesperante inconsciencia ciudadana. Catorce años en los que en todo el país había maniobras inescrupulosas para sostener al presidente en el poder; el indio era explotado con la vialidad; se aplicaba la ley fuga, y el servilismo se derramaba a torrentes para endiosar al mandatario. Fueron catorce años en que la soberana grandeza de la patria fue profanada por la suprema voluntad de don Jorge Ubico» (Flores, [1952] 1973:434-435).

Lo relevante de estas memorias acerca del emblemático caudillo liberal es que todavía en junio de 2012, un importante grupo mujeres profesionales de Chiquimula –quienes participaron en un grupo de discusión sobre la historia de la región nororiental– aún recuerdan con detalle el rigor, el orden y el ornato que se vivía durante la dictadura. La escritora María del Rosario Monroy recuerda que en el tiempo del general Ubico hasta los niños tenían que limpiar el monte que nacía en el empedrado de las calles de la ciudad de Chiquimula. Periódicamente, el jefe político o el intendente municipal pasaban a caballo por todas las calles revisando en qué casa no habían quitado el monte, y si alguna familia no lo había hecho, tenían que pagar una multa, de lo contrario… «¡Dios guarde!, iban directamente a la cárcel. Había cárcel para todo. Por cualquier cosa se iba uno preso, no como hoy […]» [E-Ch29-P-19.06.2012:15].

En el tiempo de Ubico, recuerda Leticia Suchini, «el jefe político era la máxima autoridad aquí en Chiquimula; él estaba al pendiente de todo y tenía línea directa para allá arriba […], por eso todo mundo lo respetaba y obedecía. En ese tiempo no había robos, no había abusos, todo el mundo temía. Existían los fusilamientos. Sí, aquí había lugares específicos para eso. Por el mismo miedo, había seguridad. Esa era una manera de llamar al respeto, para que hubiera honradez, nadie se robaba una cosita así por así… porque esperaban el castigo. Aquí había puntos de fusilamiento; por ejemplo, estaba la famosa entrada del cementerio, en la parte derecha había un árbol grandísimo y ahí era donde fusilaban al que cometía un delito. Otros puntos eran la escuela Florencio Méndez

y la escuela Juan Manuel Aguirre; ahí también era un lugar donde ajusticiaban. ¡Había miedo! Había temor por el castigo que se imponía a los que infringían la ley» [E-Ch29-P-19.06.2012:16]. En ese tiempo, agrega Suchini, existían «los celadores», cuando el jefe político o el intendente municipal necesitaba informar algo urgente a la población, sacaban los bandos. Los celadores se paraban en cada esquina, tocaban los tambores, entonces llegaban todos los vecinos a escuchar el bando. Ellos avisaban cada vez que iba a haber fusilamientos e invitaban a la gente para que fuera a observar. El pueblo presenciaba el fusilamiento. Eso era precisamente lo que querían, que el pueblo supiera por qué los iban a fusilar, porque si los fusilaban a medianoche en un paredón, o en un camino, ¿quién se enteraba? [E-Ch29-P-19.06.2012:17].

Aun cuando es clara la crítica a estas formas de violencia estatal, las participantes insistían con cierta nostalgia: «En aquel tiempo había seguridad», «La gente temía», «Tenía miedo al castigo», el cual, no solo era público, sino pronto y certero. En ese tiempo, reclamaban, «había cárcel para todo, aquellos que cometían delito eran castigados; en cambio ahora andan sueltos los delincuentes». Estos reclamos cobraron fuerza frente la escalada de violencia que se vivía en 2012 en todo el nororiente y la creciente desconfianza en el sistema de administración de justicia. El sentimiento de vulnerabilidad e impotencia frente al crimen era generalizado en ese entonces. En este contexto, los métodos de «limpieza social» que en su tiempo fueron aplicados por los subordinados del dictador, ahora son empleados por nuevos caciques y/o potentados locales que han privatizado la administración de la justicia de acuerdo a su propia interpretación y conveniencia.

1. Oposición a la dictadura y militarización de la vida cotidiana

1.1 La rebelión del 33 al 34

En 1933 se organizó en el nororiente uno de los primeros movimientos de oposición a la dictadura ubiquista, liderado por los abogados José León Castillo y los hermanos Luis Alberto y Enrique Paz y Paz, quienes criticaban los malos manejos e incipiente despotismo del régimen (De los Ríos, 1948). Los dirigentes de este movimiento estaban ligados al movimiento de oposición a la reelección de Ubico en ciudad de Guatemala. Cuando el dictador descubrió sus vínculos políticos, éstos fueron acusados de «conspiración», sometidos a estrecha vigilancia, amenazas e intimidaciones explicitas por parte de la policía secreta de Ubico.

A pesar de la vigilancia del régimen, en 1934, León Castillo y los hermanos Paz y Paz organizaron un movimiento de profesionales del nororiente (abogados y catedráticos de los institutos públicos), en oposición a la reelección del dictador, argumentando que ésta contravenía la Constitución. El 13 de septiembre de 1934, José León Castillo fue capturado y torturado bajo la acusación de conspirar contra el Gobierno. El día siguiente, el comisario de la policía de Zacapa, Francisco Pereira Urízar, lo asesinó y dejó tirado a pocos kilómetros de Zacapa, en el camino que conduce hacia Chiquimula (De los Ríos, 1948:283-298; Flores, 1973:438-442; Asociación Amigos del País, 2004:239). Ese 13 de septiembre, los hermanos Paz y Paz lograron escapar de Zacapa minutos antes de que la policía secreta de Ubico efectuara su captura. Gracias al apoyo de una red de colaboradores, finalmente los hermanos Paz y Paz huyeron atravesando las montañas de Lampocoy y Taguani hasta llegar a Honduras, donde vivieron los primeros años de su exilio. En ese mismo mes, también asesinaron al abogado Efraín Aguilar Fuentes y a los estudiantes de Derecho Jacobo Sánchez y Humberto Molina Santiago, y otros más salieron al exilio, entre ellos Carlos Sandoval.

La terrible noticia del asesinato de este reconocido intelectual oriental [José León Castillo], nos dice Flores (1973:44), conmovió el ambiente; una sorda pero profunda protesta se alzó de todas las conciencias ciudadanas, no solo en los departamentos de Chiquimula y Zacapa, sino en el oriente, y el país entero. Estando José León entre los que formaban parte de los conspiradores descubiertos, fue capturado en la estación de Zacapa, en el momento de bajar del tren procedente de la capital. Se le llevó prisionero y se le retuvo en la dirección de policía, donde se le martirizó hasta altas horas de la noche para sacarlo hacia Chiquimula y asesinarlo en el trayecto entre ambas cabeceras. «Se asegura –agrega Flores– que le aplicaron la *ley fuga*, pero hay quienes afirman que fue muerto a culatazos de fusil, habiendo sido el cadáver arrojado al barranco en cuyas profundidades cayó destrozado. Al saberse este hecho criminal, hubo consternación, protestas y maldiciones al tirano» (óp. cit. 440). En señal de indignación, los chiquimultecos suspendieron el baile de gala y las fiestas de la Independencia que estaban por celebrarse en los siguientes días.

Tras ocho décadas de los hechos ocurridos en septiembre de 1934, lo interesante de este movimiento es preguntarse quiénes eran esos profesionales orientales que se opusieron tempranamente a la dictadura ubiquista, cuáles sus filiaciones políticas e intelectuales, y cuáles las razones de su rebeldía. En principio, José León era sobrino del recordado caudillo oriental llamado de igual forma (José

León Castillo), quien es recordado por la historiografía regional por haber sido «Gran Maestro de la Masonería General», un aguerrido revolucionario y líder antidictatorial que dirigió el movimiento armado conocido como Los Castillistas, el cual estuvo cerca de derrocar la dictadura de Manuel Estrada Cabrera en 1906[90]. Las bases y centro de operaciones de este movimiento estaban en el nororiente, y varios de los jóvenes que más tarde se rebelaron frente a la dictadura ubiquista habían participado, o simplemente simpatizado, con el movimiento de Los Castillistas, que buscaba derrocar a Cabrera. Según la profesora y dirigente unionista Rosa Flores, el hecho de compartir las ideas del viejo revolucionario y haber dado muestras de un carácter independiente cuando fue estudiante en el Instituto Nacional para Varones de Oriente (INVO), así como en los grupos universitarios afiliados al Movimiento Unionista, que derrocó a Estrada Cabrera, le valieron a José León ser señalado como «un elemento peligroso para aquellas tiranías enemigas de los hombres de espíritu libre» (1973:439).

Entre los elementos comunes que compartían los intelectuales orientales que participaron en este movimiento podemos mencionar, primero: todos fueron estudiantes y/o catedráticos del INVO en la época de mayor esplendor académica de este instituto; segundo: estudiaron en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, fueron cofundadores de la AEU y el Club Político de Estudiantes Universitarios, en donde debatían las nuevas corrientes políticas con otros intelectuales guatemaltecos y centroamericanos. Además, la mayoría de ellos participó en las redes intelectuales de la generación del 20, que formaron el Partido Unionista en Centroamérica, y que anteriormente habían dirigido el movimiento que derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera[91]. Los intelectuales

90 José León Castillo (tío) fue inspector general y catedrático del Instituto Nacional Central para Varones y en la Escuela Politécnica. Fue jefe político de Chiquimula y miembro fundador del Instituto Nacional para Varones de Jalapa y del Instituto Nacional para Varones de Occidente (INVO). Participó como candidato en las elecciones presidenciales de 1898; sin embargo, ocho días antes de la fecha del evento, Manuel Estrada Cabrera suspendió las garantías constitucionales, circunstancia que impidió el normal desarrollo de los comicios. Tras el resultado electoral, Castillo dirigió un levantamiento armado en Chiquimula, apoyado por José Santos Zelaya, presidente de Nicaragua. Escribió los libros *América istmeña; Geografía elemental nacionalista de América del Centro* (1926); y *Pro patria: historia y geografía crítica de Centroamérica*. Falleció en diciembre de 1930. Como homenaje póstumo, el Congreso de la República le otorgó el grado de general de División (Asociación Amigos de País, 2004:238-239).

91 Teresa García Giráldez (2005) identifica dos momentos del unionismo: el de su gestación y desarrollo desde que Salvador Mendieta y otros centroamericanos lo constituyeron en 1899, hasta que el ideario unionista fue asumido por los guatemaltecos en diciembre de 1919, cuando como movimiento social y político aglutinó a las fuerzas que derrocaron a Estrada Cabrera e hicieron posible el Pacto de la Unión y la Constitución Federal de 1921. Según Giráldez, en el periodo unionista se amplía a los gobiernos de Carlos María Herrera, José María Orellana, Lázaro Chacón y Manuel Orellana, llegando hasta el golpe de Jorge Ubico en 1931, que puso fin al unionismo (2005:129-130).

de esta generación, según Casaús (2011), compartían una perspectiva filosófica cercana al *vitalismo* y la *teosofía*[92], la cual dio origen a un movimiento social y político llamado espiritualismo nacionalista o vitalismo teosófico[93], ya que produjo varios movimientos sociales y partidos políticos que, además de ser una alternativa político-cultural frente al liberalismo, se plasmaron en un proyecto regional de gran envergadura, como lo fue el unionismo centroamericano de las décadas de 1920 y 1930. Como corriente política, lo importante de esta perspectiva fue su trasfondo democrático, antidictatorial, regenerador y profundamente antiimperialista, que abarcó todos los saberes y las disciplinas impregnando a instituciones como la Universidad Popular, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos, la Sociedad Gabriela Mistral y las ligas unionistas femeninas de nuevos valores e ideales (óp. cit. 83).

En la difusión del vitalismo jugaron un papel muy importante la formación de las ligas o sociedades teosóficas, las sociedades masónicas y los congresos internacionales, en donde circulaban con bastante fluidez las nuevas ideas. En el caso de los dirigentes orientales, pudimos constatar que éstos participaron en la Gran Logia Masónica, en su momento fueron miembros del Partido Unionista y sostenían una fluida comunicación con otros intelectuales centroamericanos. En Chiquimula fundaron el periódico El Camino y en sus publicaciones literarias criticaban abiertamente al dictador, al igual que lo hicieran los otros escritores de la generación del 20. Por ejemplo, Alberto Paz y Paz ([1945], 1994) en una de sus publicaciones escribe una semblanza del general Ubico, en la que lo compara con el tigre, la hiena y la garduña, y hace una mordaz crítica a su gestión y pretensiones de perpetuarse en el poder:

> «Se ha dicho siempre, afirma Paz y Paz, que el General Ubico representa una especie de animal de presa, aunque a mí se me ocurre pensar que no es un animal de presa como lo han representado muchos creadores de pueblos. Se

92 La teosofía (del griego theos, *dios*, y sophos, *sabiduría*) es un movimiento filosófico-religioso esotérico que dio origen al teosofismo, el cual afirma tener una inspiración especial de lo divino por medio del desarrollo espiritual. Para sus promotores, la teosofía es el desarrollo de la filosofía y de la ciencia por medio de diversas religiones, y busca lo que haya en ellas de sabiduría divina. En Centroamérica y Sudamérica, el movimiento teosófico vivió una época de esplendor en la primera mitad del siglo XX, donde diversos intelectuales y artistas se identificaron con las enseñanzas de Helena Blavatsky. Las principales personalidades influidas por las doctrinas de la teosofía en América fueron Augusto Sandino, Joaquín Torres García, Rubén Darío, Gabriela Mistral, José Ingenieros, José Martí, Amado Nervo, Alberto Masferrer, Maximiliano Hernández y César Dávila, entre otros.

93 Según Casaús (2011), estas corrientes filosóficas se manifestaron en múltiples órganos de expresión pública, especialmente en revistas, diarios y semanarios, con títulos como *Vida, La Vida*, *Vivir*, *Ariel*, *Patria*, *Repertorio Americano, Repertorio Salvadoreño*, *Alma*, *Claridad*, *Orientación*, etc.

> trata simplemente de un animal feroz… Con los únicos animales feroces con los cuales el General Ubico conserva rasgos comunes, es con el tigre, con la hiena y la garduña. Con el tigre, porque es cruel sin necesidad; con la hiena, porque solo ataca al indefenso desde los puestos públicos y respaldado por la fuerza armada, tal como hiena que no ataca a los seres vivos por miedo a la defensa que le pudieran oponer; y con la garduña, por menguado y mezquino, por la joroba de su cuerpo, a causa de las muchas que lleva en el alma. Este es el General Ubico, continua Paz y Paz, una fiera que presenta caracteres comunes con el tigre, la hiena y la garduña, pero que no es garduña, ni hiena, ni tigre, sino una fiera especial, resto de una especie zoológica que está extinguiéndose ya para el bien de la humanidad y regocijo de la historia, que pertenece al género de los déspotas y tiranos de cuarta categoría. Por eso persigue el sentimiento de la dignidad personal, la inteligencia, la cultura, con un odio y una crueldad sin límites; por eso ha organizado al Ejército en pretorianos al servicio de sus locas ambiciones; por eso ha adiestrado a la policía en el espionaje, la delación y la hipocresía; por eso trata de corromper al pueblo, al que pretende obligarlo a su reelección, importándole muy poco pisotear la constitución política del país» (15-17).

La anterior semblanza escrita por Alberto Paz y Paz no es ajena a la narrativa de los escritores de su generación, cuyas vidas y espacios de sociabilidad fueron constreñidos por el influjo de los últimos caudillos liberales (Manuel Estrada Cabrera y, pocos años más tarde, Jorge Ubico). En esos mismos años, Rafael Arévalo Martínez escribió:

> «El general Ubico fue despótico, el general Ubico fue inexorable y duro en la represión de los que lo adversaron, el general Ubico hizo un agravio personal en la forma de vapulear, colgar y torturar a los hombres, no solo como medio de represión política, sino como simple medio de investigación hacendaria para que confesaran los robos. El general Ubico puso valladares a la vida y la estancó en su pueblo, fue del todo anacrónico e inactual, espécimen redivivo de una edad ya fenecida. Ubico tuvo una tiranía penetrante en la que nombró, desde los secretarios del Estado hasta el último portero; instituyó con rapidez el estado militar, admirablemente organizado. La casta del soldado, era de esperarse, fue más privilegiada que nunca. Proscribió toda otra educación que la elemental, como si considerara que la ciencia no es más que un instrumento de dominio. Se sirvió de la religión para afirmar su poder, como por instinto hacen todos los gobernantes tiránicos… Intuyó la concepción aristocrática que divide al mundo en señores y siervos; y, como verdadero príncipe, hizo suyas las palabras de Nietzche –que probablemente desconocía: "Lo mejor que existe nos pertenece a mí y a los míos y si no nos lo dan, nos lo tomamos: el mejor alimento, los pensamientos más fuertes, las mujeres más hermosas"» (Arévalo, 1984:160).

A esta generación de jóvenes intelectuales les enardecía la arrogancia y despotismo del dictador. Sobre todo, criticaban su ignorancia, el desprecio por la formación intelectual y el anacronismo de sus métodos de gobierno. Enfatizaron su crueldad, el odio y el silencio que imponían al pueblo, la intriga, la muerte, la cárcel, la ley fuga y el miedo como sistema de gobierno (Cerezo, 1984). De igual modo, les inquietaba la violación a la Constitución de la República, el ejercicio sumario de la justicia y la impunidad de los regímenes dictatoriales. En síntesis, les preocupó la fragilidad y la incertidumbre del ejercicio ciudadano. Le apostaron a la legalidad de sus demandas ciudadanas, y, como abogados, levantaron procesos judiciales en contra de las arbitrariedades y delitos cometidos por varios funcionarios de la dictadura ubiquista. Tanto José León Castillo como los hermanos Alberto y Enrique Paz y Paz trabajaron activamente en la Sala Séptima de Apelaciones, en Chiquimula, donde se ocuparon de aquellas denuncias que la gente se atrevió a presentar hasta que esta sala fue suprimida por orden de Ubico. Esto último no impidió que dieran seguimiento a los procesos judiciales iniciados, ello mediante sus bufetes privados.

El 7 y 8 de septiembre de 1934, en el diario oficial (el Liberal Progresista), se anunció que el Gobierno había descubierto los preparativos de un complot para asesinar a Ubico y poner término a su administración. A los tres abogados orientales se les vinculó a este movimiento sedicioso y se les acusó de organizar un levantamiento en armas en Zacapa, Chiquimula y otros departamentos del oriente. Según los escritos de Paz y Paz ([1945] 1994), la persecución, encarcelamiento y exilio que sufrieron durante el régimen de Ubico se debía, entre otras cosas, a una vieja rencilla política con el dictador, en tanto que ellos habían apoyado activamente la candidatura de Lázaro Chacón (originario de Teculután, Zacapa), quien derrotó a Ubico en los comicios presidenciales de 1926. Pero, sobre todo, el dictador temía que José León Castillo y los hermanos Paz y Paz fueran parte de un «complot nacional» que se estaba organizando desde la ciudad de Guatemala para impedir su reelección. Además, Ubico sospechaba que, siendo los Paz y Paz dueños de la finca San Luis, ubicada en el municipio de Uzumatlán, Zacapa, y teniendo buenas relaciones con otros finqueros de la región, éstos formaran una fuerza miliciana con los peones de sus fincas, tomaran los cuarteles del nororiente y secundaran el movimiento de la capital para asegurar el éxito de los complotistas. Por esta razón, cuando José León y los Paz y Paz se trasladaron a vivir de nuevo a Zacapa, Ubico les redobló la vigilancia, pues creía que «los peones de su finca venían a ser *hombres de armas bajo sus órdenes*, y de esa cuenta, ellos eran peligrosos» ([1945] 1994:29).

Desde un año antes (diciembre de 1933), en el contexto de las elecciones para renovar la otra mitad de los diputados a la Asamblea Nacional Legislativa, Alberto Paz, Juan Castañeda Morales y Sergio Castañeda Rodas habían sido capturados y conducidos a la ciudad de Guatemala, en donde Ubico les recibió en su despacho y les advirtió que si continuaban oponiéndose a su gobierno, «las escoltas rurales darían cuenta, de un momento a otro, de sus cadáveres al intentar fugarse a la vuelta de una esquina, en una calle o en el interior de sus propias casas». «Sépanlo [agregó], yo no gastaré papel ni tinta por ustedes que no lo merecen» (óp. cit. 29). Con Ubico, nos dice Paz y Paz, nadie merecía esos derroches, pues trataba de sanear el tesoro público y hacer al efecto esta clase de economías. Ubico gastaba en plomo y pólvora lo que economizaba en papel y tinta; economía que era más notoria en las escuelas, las cuales también fueron suprimidas con igual motivo; pero pese al gasto en plomo y pólvora, siempre quedaba una economía real; por cada boca callada para siempre, quedaba una ración más, hasta de agua y aire» (29).

Durante todos esos años de dictadura, escribe Efraín de los Ríos (1948:302),[94] se vivieron momentos de tensión en los que la gente se sentía vigilada y desconfiaba expresar sus ideas a aquellos interlocutores que no fueran realmente cercanos. En ese contexto surgió otro importante movimiento de rebelión en la ciudad capital, dirigido por el Dr. Julio Carrillo Marín, el coronel Pedro Montenegro Morales y el señor José Peláez, cuyo objetivo era derrocar a Ubico. Los dirigentes de este movimiento sostenían la tesis «cualquier intento de derrocar al tirano debería partir del centro mismo del país», es decir, desde la ciudad de Guatemala, donde los rebeldes debían contar con la colaboración de miembros del Ejército destacados en el famoso Fuerte de Matamoros. Algunos de los dirigentes de este movimiento eran observados de cerca por agentes secretos bajo el mando del general David Ordóñez Peralta (un destacado anticomunista zacapaneco) y Roderico Anzueto Valencia, directores de la policía de Ubico y ampliamente recordados por su largo historial de ejecuciones. El 24 de diciembre, los detalles del movimiento fueron descubiertos y la Auditoría de Guerra sentenció a muerte a doce personas acusadas de haber participado en el proceso. El día 28 de diciembre de 1940 se convocó a todos los pelotones destacados en el Fuerte de Matamoros y se invitó a un público selecto para que observara el espectáculo de la ejecución. Entre los sentenciados a muerte estaban el Dr. Julio Carrillo

94 Otro de los intelectuales de la generación de los 20 que denunció los abusos de la dictadura de Ubico y sufrió vejaciones y encarcelamiento a partir de la publicación de sus libros.

Marín, Efraín Aguilar Fuentes, Juventino Sánchez, Humberto Molina, Rafael Estrada Guilles, José Peláez González, Francisco Maltés Rosales; los sargentos Carlos Santa Cruz Fonseca, Miguel Ángel Jiménez, Víctor Adán Flores y Alberto Rojas Monroy; además, los soldados Francisco Pascual López, Manuel Petz Salán, Eulogio Rodas Gómez; y el coronel de línea Pedro Montenegro Morales. La escolta encargada de ejecutar el fusilamiento colectivo estaba integrada por sesenta tiradores que apuntaban a los sentenciados hasta que el oficial de mando diera la orden de ejecución, quien siguiendo la usanza real, «alzó la espada y al dejarla caer, dio la orden "¡fuego!" Inmediatamente, tronaron las descargas» (óp. cit. 340). Los cuerpos de los fusilados fueron enterrados en una fosa común en el Cementerio General, impidiendo que sus deudos supieran dónde habían sido enterrados. No fue sino seis años más tarde, durante el primer gobierno de la revolución (diciembre de 1946) que los familiares del doctor Carrillo promovieron la exhumación de todas víctimas de este fusilamiento colectivo.

En septiembre de 1951, en Zacapa, los colegas, simpatizantes y amigos de José León Castillo inauguraron un monumento en su memoria en el lugar donde encontraron sus restos. A este homenaje asistieron intelectuales de diferentes partes del país, profesores y estudiantes de los institutos de Zacapa, Chiquimula, Puerto Barrios y la capital. Se leyeron varias piezas literarias; entre otros, los discursos de Manuel Castañeda, Ernesto Lara y Enrique Paz y Paz. Mario Valdés dio lectura a un poema y José Torón España expresó la postura de la Sociedad de Amigos de Chiquimula Ismael Cerna (Flores, 1973: 441-442).

Lo paradójico de esta larga historia de ejecuciones es que cuarenta y dos años más tarde, un nuevo general reactualizó el «viejo derecho soberano de matar» a aquellos que perturbaran el orden establecido. A través del Decreto Ley 46-82, Ríos Montt creó los Tribunales de Fuero Especial, argumentando que «para proteger el *orden*, *la paz y la seguridad públicas,* se hacía necesario dictar una ley que garantizara una *rápida* y *ejemplar* administración de justicia […]» (considerandos del DL 46-82). Siguiendo el viejo modelo ubiquista, los jueces de estos tribunales eran nombrados directamente por el dictador; los detenidos no contaban con el debido proceso; incluso, muchas de las víctimas nunca llegaron a saber de qué se les acusaba, ni se les permitió comunicarse con sus familiares. Más preocupante aún, los Tribunales del Fuero Especial hacían parte de la amplia política represiva de Ríos Montt, la cual incluía la suspensión de los derechos y las garantías individuales; la libertad de asociación, la libre emisión del pensamiento

y difusión sin censura, la inviolabilidad de la correspondencia y de la posesión de libros o documentos privados, la inviolabilidad del domicilio y la protección contra allanamientos ilegales, el derecho a no ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, petición y *habeas corpus* (exhibición personal). De este modo, Ubico, Ríos Montt y todos aquellos dictadores que gobernaron a través de estados de excepción debilitaron, cuando no anularon, los más elementales derechos ciudadanos y la ya precaria independencia en la administración de justicia. La aplicación de estas viejas formas de ejercer la «justicia soberana» por parte de gobernantes y su aceptación o indiferencia por los gobernados hay que entenderla a partir de la vigencia de estas *memorias más antiguas* que dan sentido y legitimidad al pensamiento político de un importante sector de la oligarquía nacional y provinciana, que actualmente continúa apelando a la pena de muerte, al ejercicio sumario de la justicia y al establecimiento de Estados de Excepción para garantizar el viejo orden señorial y provinciano. Todavía en junio de 2012, un exgobernador de Zacapa expresó:

> «Ubico fue un hombre fuerte, un hombre de carácter. Él se rodeó de otros hombres fuertes como el general Ordóñez y luego del general Roderico Anzueto, que sustituyó al general Ordóñez en la jefatura de la Policía Nacional. Ubico no permitía cosas de ningún tipo contra la gente que vivimos (sic) horadamente y pagamos nuestros impuestos. Yo no puedo hablar mal de éste ni de los gobiernos posteriores, porque yo viví, por la gracia de Dios, sin problemas de ninguna naturaleza, aunque dicen que el pueblo sufrió vejámenes y muchas cosas más […]. Aquí había como dos o tres personas que se creían todopoderosas en el nororiente. Ellos mataban y se quedaban como si nada, les gustaba una patoja y la subían a su caballo, tenían dos o tres mujeres, cuatro o cinco muertos a su haber, y ¡amén! Cuando llegó Ubico, lo primero que hizo fue ordenar: "¡Me fusilan a estos! ¡Me los matan ya!". Estas son las diferencias notorias. La tranquilidad de Ubico se logró acabando con los transgresores del orden. Ahora esto no se puede hacer así nomás. Ahora hay ley, hay derechos humanos, hay de todo. Ahora cuesta poner orden, hay tribunales para todo. Todo eso puede ser que esté bien para Guatemala, pero para una Guatemala del futuro. No para una Guatemala que apenas se está haciendo» [E-Z33-No.21.06.2012].

Mientras que uno de los miembros de las familias más acomodadas de Gualán expresa que nunca vio el sistema de Ubico como un sistema abusivo, ni nada por el estilo. Más bien, era un sistema que los introducía en la vida normal de los pueblos, para que fueran cumplidores y respetuosos.

> «La gente temía. En mi juventud viví en el tiempo de Ubico y sé qué es eso. Ahora [los delincuentes] pueden morir en una cama cómoda, ligeramente atados y

> quedar privados de la vida como angelitos después que hicieron barbaridad y media por quitarle la vida a otro semejante. Eso para mí no es justo. Si yo maté a violencia (sic), que me maten a violencia (sic), pero públicamente, para que sirva de ejemplo. Hay que invitar gente en todo el tapial de cementerio y allí poner a los cinco o siete que hayan sido condenados […] por lo que sea […] que todo mundo sepa que esa aplicación ha llegado». [E-G3-EP, 30.06.2011].

1.2 Militarización de la educación

Tras el activo papel que jugaron los profesores y alumnos de los institutos de secundaria y las escuelas normales de la ciudad de Guatemala, Chiquimula, Quetzaltenango y Jalapa en el movimiento de oposición a la dictadura en 1933 y 1934, Ubico militarizó el sistema de educación pública y cerró la carrera de magisterio en el INVO de Chiquimula. A partir de entonces, los directores de las escuelas fueron oficiales de rango; tenientes y capitanes estuvieron a cargo de la disciplina, y a los estudiantes se les exigió entrenarse como reservistas (González-Orellana, 1970:360-62, 439-40).

El periodista Rafael Mata Retana (1973:18-23), estudiante del INVO en esta particular coyuntura, recuerda que en 1941 Ubico había militarizado las escuelas e institutos de secundaria del país y, al tomar esta medida, creó la Escuela Normal única en la ciudad capital, encargada de formar a los nuevos maestros del país. Los institutos Central de Guatemala; de Oriente, en Chiquimula; y de Occidente, en Quetzaltenango, ya solo formarían bachilleres en ciencias y letras (cuyos estudiantes oscilaban entre los 14 y 15 años). A partir de esa desafortunada medida, agrega Mata Retana, el Instituto para Varones de Oriente prácticamente estaba diezmado. El plan de estudios magisteriales había sido abolido. Las aulas del instituto se encontraban virtualmente vacías. Los estudiantes eran muy pocos, pues en esa época el bachillerato no ofrecía perspectivas de empleo y eran muy pocos los jóvenes cuyas familias tenían los recursos para apoyar sus estudios en la universidad (en muchos casos esto podía suponer gastos de transporte a la capital, pago de un internado o una casa de huéspedes). A partir de esta medida, el promedio de estudiantes del INVO bajó radicalmente de unos trescientos a cuarenta y siete alumnos. El internado que antes había dado albergue a estudiantes de diferentes lugares del país, El Salvador y Honduras fue clausurado, y los maestros más destacados habían sufrido la muerte o el destierro (entre otros, José León Castillo, Alberto Paz y Paz, Edelberto Torres Espinoza).

Tras el cierre de la Normal y la militarización de la educación, el dinamismo académico, cultural y político de Chiquimula se vino abajo durante varios años.

En 1941, los estudiantes del INVO pasaron a integrar una compañía militar, bajo el mando del Ejército. La dirección del instituto estaba a cargo del profesor Héctor Fabián Duarte, quien fue asimilado a coronel del Ejército. El inspector general era un capitán de artillería y se nombró a un capitán para que comandara la compañía del instituto. Diariamente, la compañía recibía instrucción militar en el estadio Las Victorias. A las cinco de la tarde, la compañía de alumnos pasaba al cuartel chiquimulteco a recoger los fusiles calibre 0.43 que servían para las prácticas (Mata-Retana, 1973:20). La tropa del Ejército se encontraba acantonada en ese mismo cuartel y recibía instrucción militar en el patio trasero. El jefe de este cuerpo militar era el mayor de plaza, pero también ejercía mando el jefe político y comandante de armas, que por lo regular era un general del Ejército. En esa época, todos los estudiantes de primaria, secundaria y diversificado tenían que recibir entrenamiento y participar en los desfiles cívico-militares del 30 de junio (Día del Ejército) y el 15 de septiembre (Día de la Independencia); además, tenían que hacer valla en cada una de las visitas del dictador, o de algunos de sus altos funcionarios que visitaran la región. Incluso a las profesoras de las escuelas e institutos públicos se las obligó a participar en los desfiles militares al ritmo de la banda marcial. Durante la dictadura de Ubico, nos dice la profesora Rosa Flores (1972:436-437), el magisterio de la ciudad de Chiquimula sufrió los tristes días de los desfiles militares. Los oficiales que fungían como instructores de los maestros y estudiantes de los institutos normales (INVO e INSO) eran muy exigentes, y aún después de regresar del campo de entrenamiento retenían en el cuartel a aquellas maestras de alguna edad que no podían –por vergüenza o por falta de costumbre– marcar el paso marcial. Este prolongado entrenamiento intranquilizaba a los familiares, pues se decía que las maestras estaban arrestadas. De igual modo, arrestaban a los maestros que faltaran a los ensayos. «En las épocas dictatoriales, como la que vivimos durante el gobierno de Ubico –argumenta la profesora citada–, en lugar de dignificar al maestro se le humilla, se le menospreciaba y se les hacía pasar por tiempos difíciles» (437). Con la militarización de estos burócratas «menores», opinaba el agregado naval estadounidense, el presidente Ubico buscaba extender su control militar sobre la vida cotidiana, sobre los pensamientos y acciones del pueblo de Guatemala[95].

95 Lamsom-Scribner, *Attaché's Report* No. 670, 14 de julio de 1938, RG165 RF, Box 1571, NA-S, citado en Gleigeses, 2005:11.

Mediante todos estos mecanismos, la dictadura de Ubico sentó las bases para la posterior militarización del mundo social que se vivió durante los gobiernos militares de la segunda mitad del siglo XX. En un amplio sector de la sociedad provinciana se fue formando una amplia aceptación, cuando no identificación por las formas de gobierno y cultura militar. Esto puede observarse en las trayectorias políticas y/o profesionales que siguieron durante los gobiernos militares algunos de estos jóvenes que fueron entrenados por militares durante la dictadura ubiquista[96]. El militarismo, arguye Tischler (2001), fue una concepción del orden social. Sus fundamentos estaban en la razón señorial de un mundo finquero, jerárquico y paternalista. La imagen de una sociedad disciplinada que respondiera a un mando central, era también la utopía oligárquica y reaccionaria de la eliminación del conflicto social.

2. Rebelión del 44 frente a la dictadura local

Tras la caída de la dictadura ubiquista en 1944, el presidente interino (el general Ponce Vaides) nombró al general Serapio Cuyún como jefe político de este departamento. Sabiendo del descontento ciudadano que su reelección había provocado en los chiquimultecos, Cuyún llegó a tomar posesión del cargo en avión y acompañado de un inusual despliegue de fuerzas armadas. Respecto a este movimiento, un intelectual chiquimulteco expresa:

> «Lo primero que recuerdo de la historia política de Guatemala fue la caída del general Jorge Ubico. Aquí, en Chiquimula, sucedió un acontecimiento muy importante durante la caída de Ubico, al jefe político y comandante de Armas del departamento lo nombran ministro de la Guerra en el gobierno interino de Ponce Vaides. Entonces llegó a sustituirlo el general Serapio Cuyún, quien ya había sido jefe político de Chiquimula. Por primera vez en mi vida vi un avión, porque el general Cuyún llegó a tomar posesión del cargo acompañado por tres aviones de los llamados "cuacos", que eran unos avioncitos de dos alas. Estaba la bulla de ir a ver los aviones. Nos fuimos con mi hermano, que tenía tres años, al campo de aviación a ver la llegada del general Cuyún» [E-Gt20-RP-02.2012:4].

96 Particularmente ilustrativo de esto último es el libro de Rafael Mata Retana (1982) *El rostro de mi pueblo*, en el que el autor ofrece una serie de fotografías históricas de incalculable valor, en tanto que muestran los entrenamientos y desfiles militares practicados por los jóvenes del INVO de Chiquimula durante la dictadura ubiquista (ver de la página 50 a la 58). Luego, en las últimas páginas del libro, el autor nos ofrece fotografías de algunos de estos jóvenes –ya adultos– participando en la administración del general Carlos Arana Osorio (ver de la página 90 a la 99).

El problema era que el general Cuyún ya había sido jefe político de Chiquimula y había estado involucrado en los hechos de represión que se vivieron en esta región tras la rebelión de 1933-34. Además, los chiquimultecos tenían presente que éste había matado a una persona con su carro, nunca se esclareció el hecho, ni se administró justicia. La mañana del 28 de julio de 1944, en el momento en que Cuyún bajó del avión, se inició un fuerte movimiento de protesta en contra de un segundo periodo de gobierno de Cuyún. Los chiquimultecos identifican este movimiento como el precursor de la Revolución de Octubre. «Cuando aterrizó el aparato que conducía al general Cuyún, un solo grito se escapó de muchas bocas: "¡No queremos a Cuyún!" Esa era la expresión enérgica de los chiquimultecos frente a un segundo periodo de dictadura impuesto por el viejo y mal recordado general Cuyún» (Flores 1973:443).

> «Al escuchar los gritos de protesta, el jefe que venía con el general Cuyún dijo, según Porta España (2012), "¡Bajen las ametralladoras y ametrallen!" Entonces fue aquel reguero de gente por todo el campo de aviación. El regreso de Cuyún era *como volver al tiempo de Ubico*. Lo cierto es que esos líderes juveniles (porque eran bien jóvenes) iniciaron una marcha de protesta contra Cuyún y avanzaron desde el campo de aviación hacia el centro de Chiquimula gritando con una multitud de gente: "¡No queremos a Cuyún! ¡No queremos a Cuyún!" El resultado fue que algunos de ellos fueron presos y se los trajeron para la capital como "enemigos del Gobierno". En ese tiempo eso era cosa seria» [E-Gt20-RP-02.2012:5]

En respuesta al descontento generalizado, esa misma mañana, el intendente y el síndico primero de la municipalidad organizaron una sesión a cabildo abierto. Antes habían invitado a Cuyún a llegar a la municipalidad; allí se le hizo ver el repudio de que era objeto de parte de todos los sectores de Chiquimula y se le sugirió que presentara su renuncia al puesto de jefe político. No obstante, éste contestó que por su condición de militar no podía renunciar, pero que se pondría en comunicación con el presidente y le pediría su traslado (Flores, 1973:443).

> «En representación del pueblo de este municipio y en esta Sala de Sesiones en donde se hallan alrededor de quinientas personas, la Corporación Municipal solicita se nombre como Jefe Político a otro ciudadano de limpios antecedentes, por ser aquí ya muy conocida la actuación del señor Cuyún de no grata recordación para el pueblo, la Municipalidad en cuerpo, acuerda unánimemente: Apoyar la voz popular haciendo gestiones ante el gobierno de la República en favor de este lógico sentimiento que entraña la tranquilidad de los distintos intereses que giran en este momento histórico en defensa de la libertad y la democracia [...]» (Flores, 1973:444-445).

Mientras esto sucedía en la municipalidad, numerosas personas que se habían reunido en el campo organizaron una manifestación que recorrió las calles de la ciudad con cartelones en los que se expresaba su repudio a un segundo gobierno autoritario por parte del mencionado jefe político. En esta manifestación participaron muchas mujeres, entre ellas jóvenes maestras y alumnas del INSO (entre ellas Blanca Elcira Aquino, Estela Ramírez y María Elena Ruano).

Esa misma tarde del 28 de julio se realizó una sesión en la que se nombró a dos representantes del movimiento para que viajaran a la capital y presentaran al presidente Ponce Vaides el manifiesto de protesta de los chiquimultecos frente al nombramiento de Cuyún, y solicitaran su remoción del cargo. Al llegar a la capital, los delegados fueron capturados y conducidos a prisión, acusados de establecer contacto con dirigentes del movimiento nacional.

La petición de los chiquimultecos no fue escuchada ni el general Cuyún fue removido del cargo de jefe político de aquel departamento. El descontento ciudadano, las protestas y huelga de los funcionarios públicos se prolongaron por varias semanas. Obreros, comerciantes, maestros y estudiantes de los institutos públicos fueron conducidos a la cárcel de Chiquimula, y varios de ellos enviados al Cuartel No.1 de la Policía Nacional, ubicado en la ciudad capital. Algunos de los detenidos fueron: Marco Tulio Girón, Ramiro Ponce Monroy, Belisario Díaz Vásquez, Carlos Alberto Vaccaro, Jorge Aguilar, Adrián Cabrera, Alfredo Monroy y Samayoa, los hermanos Francisco y Gregorio Cetino Rodas, Roberto Girón Lemus, Florencio Castañeda, Francisco López Granados, Salvador Casasola Torres, Gerónimo Tuch, Federico López y Rodolfo Rosal (Flores, 1973:447).

El movimiento de oposición en contra de un segundo periodo de gobierno autoritario por parte del general Cuyún y la posterior represión que vivieron sus dirigentes fue consolidando la organización de un influyente grupo de jóvenes chiquimultecos que más adelante participarán como dirigentes regionales o nacionales del movimiento obrero y campesino que se formó durante los gobiernos de las Revolución. Según Ronaldo Porta España, entre los dirigentes que se opusieron a la jefatura política de Cuyún y luego destacaron como dirigentes nacionales en los gobiernos de Arévalo y Arbenz estaban Carlos Vaccaro, Ramiro Ponce Monroy, Roberto Girón Lemus, Víctor Aquino, Efraín Vásquez Paiz, Víctor Manuel Gutiérrez, Leonardo Castillo Flores; todos ellos habían sido estudiantes y/o maestros de la Normal de Chiquimula [E-Gt20-RP-02.2012].

Este importante movimiento antidictatorial en Chiquimula no puede entenderse al margen del dinamismo político y las grandes transformaciones que estaban ocurriendo en la Guatemala del mediados del siglo XX, particularmente en la ciudad capital: el surgimiento de un movimiento de la clase trabajadora, de los maestros y estudiantes de los institutos públicos que en esos años se convirtió en una influyente voz de las nuevas ideas políticas. En el caso concreto del nororiente, este fue un movimiento que se desarrolló alrededor los pocos centros de formación académica que había en la región para ese entonces, particularmente alrededor de los maestros y estudiantes del INVO e INSO que habían tenido oportunidad de formarse en las nuevas tendencias políticas y veían más allá de las fronteras locales. Algunos de ellos habían sido o eran estudiantes de la Universidad de San Carlos o aspiraban a serlo; además, mantenían contacto con movimientos sociales que trascendían las fronteras del ámbito propiamente educativo y nacional. Sin embargo, no podemos generalizar el dinamismo político de estos jóvenes para toda la sociedad chiquimulteca, menos aún para el resto de la sociedad nororiental, en cuyos municipios no había institutos de diversificado. Para ese entonces, incluso, en aquellos municipios con un fuerte dinamismo económico, como Gualán y Zacapa (la misma cabecera departamental de Zacapa), no contaban con institutos públicos de diversificado. Solo aquellas familias relativamente acomodadas podían enviar a sus hijos a estudiar a un internado en Chiquimula, Cobán, Antigua o ciudad de Guatemala.

Tal como sucedió en ciudad de Guatemala, este fue un movimiento de profesionales y estudiantes urbanos, de clase media, y aun cuando en él participaron los hijos de algunas de las familias ricas de la región, ello no necesariamente significaba que éste hubiera sido apoyado por dichas familias. En todo caso, en esa precisa coyuntura sí había un descontento general por el abuso de poder y los excesos a los que habían llegado los famosos generales de Ubico en el espacio local. La gente estaba cansada del despotismo del dictador y sus colaboradores, particularmente luego de que éste se sintió amenazado tras los sucesos del 34 y el 40, que lo llevaron a redoblar los mecanismos de vigilancia y persecución contra todos aquellos que éste percibiera como potenciales enemigos. La gente empezó a sentir hartazgo del régimen claustrofóbico y carcelario del general Ubico. Con todo, muchas de las familias de la élite provinciana seguían compartiendo los *principios* del orden oligárquico y patriarcal que éste defendiera con tanto celo. Además, algunos de ellos todavía ahora son partidarios de la dictadura, y en sus memorias recrean interesantes analogías acerca *del carácter y las artes de gobernar,* de los generales

Jorge Ubico y Efraín Ríos Montt, tal como expresa con elocuencia un abogado chiquimulteco (contemporáneo de los jóvenes que se opusieron a Cuyún), que tuvimos oportunidad de entrevistar en junio de 2012:

> «El gobierno de Ubico, expresa el licenciado Cuéllar, fue un gobierno progresista, de pensamiento propio. ¡Sus jefes políticos eran unos tipazos! Yo no sé por qué la gente no los quería. Vea, aquí sin dictaduras no hay nada, porque lamentablemente la democracia puede ser una maravilla, pero nuestra cultura no está para la democracia […]. En el tiempo de Ubico había orden. Aquí solo puede haber orden con dictadura. Aunque se le achaque que fue sanguinario, y sepa Dios cuántas cosas más… Mire, aquí ha habido presidentes, jefes de Estado muy buenos, pero no sé por qué, mal queridos. Don Efraín Ríos Montt no fue mal jefe de gobierno, ¡fue magnífico! Si intervino en matanzas y masacres… ¡a saber! Solo ellos lo saben, pero era necesario poner orden. Con él había orden, todo funcionaba bien. Don Efraín fue un moralista y sigue siendo un buen padre de familia, un general íntegro. Aquí se trata de *uno* o *el otro*, el comunismo o el anticomunismo, y para mí el general Ríos Montt fue muy bueno. Ubico y Ríos Montt son generales odiados porque hicieron sus cosas, pero sobre todo, en el tiempo de ellos hubo orden» [E-Ch26-MC-18-06-2012].

Capítulo IV
Movimiento antioligárquico y cambio revolucionario

«Cuando se produjo la Revolución del 20 de Octubre –analiza un influyente político zacapaneco– realmente vivimos cambios profundos entre 1944 y 1954. Aquí en el nororiente había un grupo que participó en la caída de la dictadura de Ubico y su sucesor, el general Ponce Vaides. Este grupo simpatizaba con los cambios revolucionarios, pero otros no, a regañadientes lo aceptaron. En ese periodo se gestaron cambios muy importantes en el Estado de Guatemala. De un gobierno dictatorial pasamos muy pronto a uno democrático, y luego, de un gobierno democrático vivimos el golpe de Estado de 1954 que impulsó la Liberación. En esos años ocurrieron cambios radicales en muy poco tiempo. No fueron ni diez años los que pasaron, pero los cambios fueron abruptos. Nuestra sociedad no estaba preparada para cambios tan rápidos. La generación que vivió esos cambios era una generación de finales del siglo XIX y principios de XX. Cuando se dio el Movimiento de Liberación, mi padre era un hombre de cincuenta y seis años y los coterráneos de mi padre casi todos eran de las postrimerías del siglo XIX. Esta generación creció bajo la sombra de los gobiernos dictatoriales, primero con Manuel Estrada Cabrera, luego hubo un periodo corto de gobiernos electos como el del general Lázaro Chacón (originario de Teculután, Zacapa) y el del general José María Orellana (originario de El Jícaro, que en ese tiempo era municipio de Zacapa); después vino la dictadura del general Ubico. Yo recuerdo que a la gente le gustaba el orden y la seguridad que había durante el gobierno de Ubico. Por otra parte, estaba la represión a los antagonistas del régimen. A regañadientes la gente estaba contenta con el gobierno de Ubico, porque había seguridad, había confianza y se podía salir [a la calle] a cualquier hora de la noche. Hubo un momento en que la cosa ya no le gustó a la gente. Mi propio

padre que había sido ubiquista participó en el movimiento revolucionario del Dr. Arévalo. Durante esos años empezaron a haber ciertas divisiones entre los hombres pudientes del oriente, la mayoría de ellos no participaron del lado revolucionario del Dr. Arévalo, pero tampoco seguían apoyando activamente a la dictadura. El gobierno de Ubico había perdido fuerza, después de tanto año de dictadura era lógico que se desgastara»[97].

Recordemos que tras el éxito del movimiento en contra del general Cuyún –el viejo jefe político de Chiquimula durante las dictaduras de Ubico y Ponce Vaides–, la candidatura a la presidencia de Juan José Arévalo captó la simpatía de los profesionales, funcionarios públicos, maestros y estudiantes de los institutos de Chiquimula y Zacapa, quienes veían en él a un egresado del INVO, un pedagogo ilustrado que ayudaría a sacar al país del letargo que se vivía en los últimos años del dictador. No obstante, esta simpatía por Arévalo no era compartida por un importante sector de la élite nororiental, y aun aquellos que en un momento dado apoyaron su candidatura, no necesariamente eran partidarios de las políticas revolucionarias, particularmente, si éstas afectaban su *statu quo*.

Tras las primeras transformaciones de fondo que llevó a cabo el gobierno de Arévalo, las posturas políticas de los nororientales se radicalizaron. Por un lado, se destacó un pequeño grupo de profesionales orientales que apoyaron activamente la aplicación de las políticas revolucionarias, principalmente, de aquellas que permitían a las comunidades la recuperación de sus tierras y la transformación de las relaciones de servidumbre que aún se vivían en el campo. Por el otro, estaba un poderoso sector de la élite local, integrada por terratenientes medios, ganaderos y comerciantes que veía en las políticas revolucionarias una amenaza a su soberanía provinciana, a sus costumbres, propiedades y régimen de dominación. Como veremos en los siguientes apartados, este sector se opuso abiertamente a la intervención del Estado en aquellos asuntos que, hasta entonces, habían sido administrados por ellos (justicia, tierra y trabajo), participó activamente en las filas del anticomunismo y organizó sus propios grupos armados.

Durante éste periodo las comunidades ch'orti' asumieron el protagonismo político dentro de sus municipios y aprovecharon las promesas y espacios de oportunidad que les ofrecieron los dos gobiernos de la Revolución para recuperar sus tierras, defender sus derechos y fortalecer sus procesos de organización. De igual modo,

97 Fragmento parafraseado de la entrevista de Rubén Rosales Orellana, alcalde de Zacapa 1970-1974 y 1978-1982, Zacapa, 21-11-2011.

en este período fue crucial la lucha de los obreros ferrocarrileros de Zacapa y de los trabajadores de las plantaciones bananeras, por alcanzar un salario justo y hacer valer los derechos laborales estipulados en el Código de Trabajo.

1. Economía y relaciones de poder en el nororiente de los años 50

A mediados del siglo XX, la población del nororiente se dedicaba a la agricultura, la ganadería y/o el comercio. La élite local estaba integrada por un tipo de *terrateniente medio* que poseía tierras de mediana extensión y que por lo general vivía en su finca o en una cabecera municipal cercana; luego, estaba el pequeño terrateniente, que poseía tierras en cantidad más o menos suficiente para vivir de ellas, y usualmente vivía en su pequeña finca o en una comunidad cercana; el arrendatario que tomaba en arriendo suficiente tierra para vivir de ellas, y el trabajador, que laboraba tanto en forma permanente como por día (Adams, 1956:71). El terrateniente medio cultivaba su tierra empleando a trabajadores por día, a campesinos arrendatarios o tenía un pequeño grupo de 2 a 3 familias de mozos colonos en su finca. Este terrateniente medio solía reivindicar su origen hispánico y formaba parte del grupo social que Richard Adams (1956) llamó la «aristocracia de riego del nororiente», pues eran ellos los propietarios de la tierra irrigable de los valles e integraban la élite local.

El sistema de aparcería o *medianía* formaba parte de las relaciones entre el finquero y el colono, y algunas veces entre el mediano terrateniente y el jornalero. El pago a base del reparto de la cosecha era radicalmente diferente al del pago en dinero o en trabajo. El reparto de la cosecha se basaba en la idea de que una persona trabaja la tierra de otra; entonces, el pago consistía en dividirse entre ambas partes la cosecha, de acuerdo con la cantidad lograda (óp. cit. 74). Las relaciones implicadas en el reparto de la cosecha, como pago de la aparcería, existían entre el terrateniente mediano y el agricultor individual al nivel de la subsistencia.

En los años 50, Adams observó que en los valles del Motagua a las tierras bajas se las conocía con el nombre de «tierras de valle», y de ellas se cultivaban solo las porciones irrigadas a lo largo del río. La posesión de una de estas parcelas era un signo de riqueza y distinción social. Las tierras bajas casi siempre eran más productivas y, en vez de una sola cosecha anual, los propietarios podían producir

dos o tres cosechas anuales. Por su nivel más bajo y su acceso al riego, las tierras del valle eran altamente productivas y propicias para la diversificación de cultivos; por consiguiente, estaban en manos de la gente más rica de la sociedad local. Adams constató que en los años 50, el sistema de riego más intensivo de toda Guatemala ya se encontraba en *el corredor del Motagua medio*, particularmente en el departamento de Zacapa y, en grado más bajo, en los departamentos de El Progreso, Chiquimula, Baja Verapaz y Guatemala.

En el corredor del Motagua y el río Grande de Zacapa se encontraban ubicadas las principales haciendas ganaderas del nororiente. Según el Censo Agropecuario de 1950, solo en Zacapa se registraron 38,016 cabezas de ganado en 2,727 fincas. Más de la mitad del ganado eran vacas lecheras y los animales jóvenes eran vendidos para engorde. Por lo general, el ganado era mantenido en los valles durante la época lluviosa y se llevaba a las tierras de montaña durante la sequía (Palma, 1973:98).

En contrapartida, las comunidades cho'rti' vivían en las tierras de ladera y montaña de la Sierra de las Minas y las montañas del Merendón. Pese a su activa oposición, durante los gobiernos liberales [1880-1930] buena parte de sus ejidos habían sido titulados a nombre de las municipalidades, las cuales, regularmente, eran administradas por las familias ladinas que pertenecían a la élite local. Desde esos años se registra una problemática de deforestación, sequía e inseguridad alimentaria en las comunidades indígenas del nororiente. Durante los gobiernos revolucionarios, las comunidades ch'orti' aprovecharon la nueva legislación agraria para recuperar sus tierras.

2. La transformación revolucionaria en el nororiente

El gobierno de Arévalo fortaleció los espacios de participación política de las comunidades campesinas y de los trabajadores agrícolas, implementó una legislación que reguló el trabajo y apoyó la formación de un movimiento laboral capaz de cuestionar las viejas relaciones de trabajo servil que prevalecían en el campo y en las plantaciones de agroexportación. De hecho, uno de los logros más importantes que alcanzaron las organizaciones laborales durante este periodo fue la aprobación del Código de Trabajo el 1º de mayo de 1947 (Gleijeses, 2005; Handy, 1984). Por primera vez, en la legislación guatemalteca se reconoció el derecho a sindicalizarse, se protegió al trabajador en contra los despidos injustos y se garantizó el derecho a huelga como un mecanismo de

negociación/conciliación entre el patrono y el trabajador. Además, se estipuló una semana laboral de cuarenta y ocho horas, se reguló el empleo de las mujeres y los adolescentes y se establecieron niveles básicos de salud y seguridad en el trabajo[98].

2.1 La restitución de derechos comunales

En un contexto provinciano y finquero, donde aún predominaban diferentes mecanismos de servidumbre –tales como el sistema de medianía, la habilitación o enganche por deudas, la ley de vagancia, entre otros–, el esfuerzo por regular las relaciones de trabajo y fortalecer la organización de los campesinos fueron vistos como intervenciones radicales en la relación patrón/trabajador por parte del Estado. Por primera vez, en el país se intentó romper con las viejas relaciones de servidumbre y se consideró el trabajo dentro de un marco de regulación laboral que debía proveer a los ciudadanos de los medios para alcanzar un nivel de vida digno, seguro y autónomo respecto al patrón.

Respecto al acceso a la tierra, una de las más importantes medidas que definió la Junta Revolucionaria fue el otorgar poder de gestión a «las comunidades indígenas» o «comunidades campesinas» para reclamar la propiedad de sus ejidos, los cuales estaban siendo administrados por corporaciones municipales cuyos alcaldes, síndicos y secretarios solían ser los potentados ladinos que radicaban en sus municipios.

El énfasis analítico en el Decreto 900 (Ley de Reforma Agraria) que se hizo en diferentes estudios acerca de la política agraria de la Revolución (1944-1954) restó atención al hecho de que desde que se formuló la Constitución Política de 1945 se establecieron varios artículos que permitían a las comunidades indígenas recuperar, defender o proteger la propiedad de sus tierras comunales y ejidales. En el primer gobierno de la Revolución fue muy importante el artículo No. 96, el cual se refería a la protección del ejido y tierras comunales, declarándolas inalienables e indivisibles (Taracena et al., 2004:329). En este artículo se reconoció la existencia jurídica de las comunidades campesinas y/o comunidades

98 Según Gleijeses (2005:47), el movimiento laboral que se formó durante el periodo revolucionario se reagrupó en dos confederaciones rivales: la Federación Sindical de Guatemala (FSG) y la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG), quienes presionaban a Arévalo y a los partidos revolucionarios para que avanzaran en las reformas a la legislación laboral y agraria. A principios de 1950, la FSG y la CTG afirmaban tener aproximadamente noventa mil miembros. Aunque muchos de los sindicatos existían solo en el papel, el número de trabajadores efectivamente organizados todavía ascendía a varias docenas de miles; la mayoría eran obreros y empleados de oficina urbanos.

indígenas como entidades independientes de las alcaldías municipales, que hasta entonces, venían siendo gobernadas por los potentados ladinos que vivían en los municipios indígenas.

Entre 1945-1946, la nueva Constitución abrió el espacio para que los pueblos indígenas reclamaran aquellas tierras que les habían sido despojadas en años anteriores a la Revolución y, por tanto, contaran con la posibilidad de reconstruir la comunidad indígena en aquellos casos en que ésta se hubiese perdido (óp. cit. 329)[99]. Cuando la nueva legislación se dio a conocer en el nororiente, las comunidades ch'orti' se organizaron bajo la figura de Comunidad Indígena o Unión Campesina (atendiendo al lenguaje de la Revolución) y reclamaron como propias aquellas tierras de sus ejidos que les habían sido enajenadas por las familias ladinas que administraban sus alcaldías. A través de sus organizaciones, procesos de demanda y validación de sus antiguos títulos perseguían recuperar sus ejidos y librarse de las diferentes formas de trabajo servil a las que estaban sujetas hasta entonces. Entre los procesos de reorganización indígena/campesina que se observan en el oriente en los años tempranos de la Revolución destacan:

> *El 29 de enero de 1946*, se reconoció oficialmente la existencia de la Comunidad Indígena de San Carlos Alzatate, del departamento de Jalapa. En el artículo 1 de sus estatutos se definía como «miembros de la comunidad» a todos los individuos que correspondieran a las familias indígenas que se encontraban en la jurisdicción, tanto en la cabecera municipal como en las aldeas Las Flores, Zapotón, Sabanetas y Tapalapa, situadas en la montaña de Alzatate. También se incluyó a todos aquellos que, en lo sucesivo, figuraran en el registro de comuneros. Los estatutos de la comunidad establecían con claridad que las tierras de la comunidad no podían venderse o enajenarse por ningún título ni dividirse; tampoco podían embargarse o ser expropiadas. Además, a ningún condueño se le concedería una extensión de terreno mayor que la que se calculara podía trabajar[100].

> *El 30 de junio de 1946* se estableció legalmente la Comunidad Indígena ch'orti de Carí y Agua Fría, en el municipio La Unión, Zacapa. Según sus estatutos, eran miembros de la comunidad todas aquellas personas que habían comparecido al otorgamiento del acta notarial de fundación de la asociación, así como «todos los que en lo sucesivo ingresaran a la misma». Para ser miembros de

99 Según Taracena (2004:329), esta regulación se inspiró en la resolución del Congreso Indigenista de 1940, realizado en Pátzcuaro, México, donde se exaltó la importancia del reconocimiento de las tierras comunales.

100 Este terreno fue inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el Número 456, Folio 149, Tomo 2, del Diario del Sur de Jalapa, artículo 16 (Citado en Taracena et al., 2004:345).

esta comunidad se requería: a) ser mayor de edad, b) ser originario y residente de cualesquiera de las dos aldeas de Carí o Agua Fría y c) «pertenecer a la clase trabajadora». La comunidad reconocía, además, «igual categoría a hombres y mujeres», por lo que las personas de ambos sexos podían ocupar cualquiera de sus puestos[101].

El 4 de julio 1946 se organizó la Comunidad Indígena de San Jacinto, representada por Pablo Interiano y compañeros, vecinos del cantón Las Lomas, municipio de San Jacinto. En ese momento, los miembros de la comunidad solicitaron al ministro de Gobernación, a la Secretaría de la Presidencia y al presidente de la república (Juan José Arévalo) que les resolviera la titulación de un terreno ejidal cuya extensión era de 41 y media caballerías, propiedad de su comunidad. A manera de ejemplo del tipo de expedientes de denuncia y/o petición presentados por las comunidades ch'orti' frente a los funcionarios de la Revolución, transcribimos el siguiente memorial:

> Señor Presidente de la República
>
> Don Juan José Arévalo
>
> Pablo Interiano, Juan Borja, Félix Díaz, Vicente Borja, Vicente Miguel, Abelino Pérez, Jacinto Ventura, Juan Jacinto Pérez, Alberto Ramírez, Ángel Mauricio, Ernesto Martínez, todos originarios y vecinos del municipio de San Jacinto, residentes de los cantones "Las Lomas", "Agua Zarca", "Dolores" y "Pueblo Nuevo", y componentes de la sufrida Comunidad Indígena de San Jacinto, con todo nuestro respeto comparecemos ante usted para manifestarle que en el año de 1934, y después de innumerables gestiones, fue expedido un título de tierras por la Escribanía del Gobierno a favor de dicha Comunidad, adjudicándole 41 ½ caballerías de terreno para repartirse entre las familias de los aludidos cantones.
>
> Punto 2º. Con estas gestiones se logró por fin que fuera expedido el título adjudicativo del terreno a repartir entre las familias de los cantones ya dichos, pero al ser registrado en la Propiedad Inmueble, quién sabe por qué razón, se cometió el error de registrar el título a favor de "la Municipalidad", y debido a ello venimos padeciendo lo indecible, pues año tras año se suscitan las mismas dificultades con los terratenientes de nuestros cantones, que nos impiden trabajar y nos exigen –como dueños que dicen ser– grandes precios por arrendamiento, que nos imposibilita de poder

101 Méndez Rosendo (1952), Recopilación de Leyes de la República de Guatemala 1946-1947. Tomo LXV, Tipografía Nacional, Guatemala Pág. 299 (citado en Taracena et al., 2004:346).

> trabajar, y lo que es peor, que se nos cobra por lo que nosotros compramos al gobierno, y decimos que compramos, porque los gastos fueron crecidos, ya que hubo que llevar ingeniero para que deslindara los excesos de tierra de lo que eran ejidos municipales.
>
> El título lo tiene actualmente el Tesorero Municipal Alberto Morales, que es a la vez uno de los interesados en que la comunidad no goce de sus derechos adquiridos, porque los llamados "ladinos" son los que explotan las tierras y nos explotan incompasivamente a nosotros. Este título llegó a poder del indicado señor Morales, porque el ex-general Daniel Corado cuando fue Jefe Político de este departamento, obligó al que encabeza este memorial a entregar el título. Firman: Daniel Cardona, Juventino Minera, Aquileo Jacinto, Sarbelio Ramírez, Félix Martínez, Jesús María Pérez, Pedro Soto. [AGCA/Ministerio de Gobernación. Departamento de Chiquimula, 1946, S.B, L.32756, E.50/ Esta Tierra es Nuestra, Tomo IV. Pág. 552-554]

Los campesinos concluyen este memorial subrayando que ahora que tenían un gobierno que debía protegerles legalmente y reivindicarles en sus derechos, así lo pedían. Así mismo le expresan al Presidente que aun sabiendo que no era a él a quien debían dirigir dicho memorial, ellos querían que él estuviera enterado de su lamentable situación y le pedían que él indicara al Ministerio encargado del caso su pronta resolución. Este caso no prosperó, pues efectivamente, la corporación municipal de San Jacinto comprobó al Ministerio de Gobernación que el 19 de abril de 1933, esas tierras no habían sido registradas a favor de la Comunidad Indígena de San Jacinto, sino a favor de la Municipalidad administrada por los ladinos del pueblo. A estas gestiones, le siguieron muchas otras presentadas por las comunidades ch'orti' de todo el Nororiente, por ejemplo

El 26 de agosto de 1948 se formó la Asociación Unión Campesina del Municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula (Morales y Azurdia, 1949:527-529).

El 26 de agosto de 1948, la Asociación Unión Campesina del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula (Morales y Azurdia, 1949: 529-531).

18 de febrero de 1949, la Comunidad Campesina de San Jacinto, departamento de Chiquimula (Taracena et al., 2004:352).

15 de noviembre de 1949, la Comunidad Campesina de Tasharté, municipio La Unión, departamento de Zacapa (Taracena et al., 2004:353).

Entre las primeras asociaciones o uniones campesinas que se formaron en el nororiente figuran las de Chiquimula, de donde eran originarios Leonardo Castillo Flores y Clodoveo Torres Moss, dos de los más importantes funcionarios de la política agraria en los dos gobiernos de la Revolución. Los estatutos de estas asociaciones eran muy parecidos, pues todas tenían por objetivo el unificar a «la clase campesina» o «la clase trabajadora del campo». Fundamentalmente, diferían en la razón social, el domicilio y el monto de la cuota que debían pagar.

Cabe decir que durante el proceso de formación de las uniones campesinas se usaban indistintamente los términos «comunidad» y «asociación», y que en sus estatutos se declaraba que éstas estaban formadas por indígenas, campesinos o trabajadores del campo, cuyo objetivo era «el mejoramiento económico y cultural, y la protección entre sus miembros, la cual podía ser solicitada al Estado o a sus instituciones» (Taracena et al., 2004:352). Todas estas asociaciones incluían la declaración de que defenderían «los principios de la Revolución del 20 de octubre de 1944». Entre 1948 y 1949 se fundó la mayor parte de estas asociaciones, las cuales se integraron a la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), fundada el 30 de septiembre de 1950. Los esfuerzos del Estado guatemalteco por organizar a los campesinos por medio de las Comunidades Agrarias y/o las Uniones Campesinas buscaban crear las bases sociales de la CNCG que defenderían el proyecto revolucionario y su política agrarista (óp. cit. 354).

Otros artículos de la Constitución de 1945 que facilitaron el acceso a la tierra a los campesinos fueron: el artículo 90, en el cual se estableció que la propiedad privada de la tierra se respetaría, toda vez que ésta cumpliera «una función social»; el artículo 92, que permitía la expropiación previa indemnización al afectado cuando ésta fuera en bien público; el artículo 93, que ratificaba la potestad del Estado para disponer del patrimonio nacional al momento de darlo en usufructo de por vida, pues estipulaba que las tierras estatales no eran enajenables (óp. cit. 329).

Las leyes arevalistas que fueron cruciales para facilitar el acceso a la tierra a la población indígena fueron la Ley de Emergencia Agrícola de 1946 y las Leyes de Arrendamiento Forzoso de 1949 y 1951. Estas últimas permitieron a muchos campesinos romper el viejo sistema de «medianía» y tener acceso a la tierra pagando rentas bajas, en condiciones dignas y justas. La Ley de Arrendamiento Forzoso fue creada para controlar las pequeñas parcelas que se habían dado previamente

en arrendamiento, así como para regular las bases del mismo. De acuerdo con esta ley, las tierras que habían sido arrendadas, o que no estaban siendo utilizadas por el propietario, quedarían sujetas al arrendamiento forzoso mediante un pago anual equivalente al 5% del valor de la cosecha del año (Adams, 1956:66). En el oriente de Guatemala, donde las grandes fincas no eran numerosas y buena parte de las tierras eran municipales, esta ley fue considerada más severa que la misma Ley de Reforma Agraria. De hecho, la Ley de Arrendamiento Forzoso afectó a muchos terratenientes medios que habían ensanchado sus propiedades y afianzado su poder administrando como «propias» las tierras de sus municipios. De la misma forma que la Ley de Reforma Agraria fue un ensayo para romper el poder de los grandes terratenientes, la Ley de Arrendamiento Forzoso lo fue para debilitar el de los medianos y pequeños terratenientes (1956:68).

Es conocido por todos que el Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria fue la ley que emitió el segundo gobierno de la Revolución para desestructurar el viejo *orden finquero*. No obstante, lo que nos interesa destacar aquí es que el Decreto 900 protegió la propiedad corporativa de las comunidades desde el momento en que reconoció la existencia de las tierras de «comunidad» llamadas indistintamente Comunidades Indígenas o Uniones Campesinas. En el nororiente, estas tierras, no solo no eran afectables a la Reforma Agraria, sino las comunidades que las poseían en común gozaban de la protección del Estado frente a antiguos litigios con aquellos potentados ladinos que venían enajenándolas. Por ley, los casos de conflicto por tierras entre municipalidades y comunidades agrarias se resolverían siempre en favor de las segundas. Según el artículo 33 del Decreto 900, cuando surgiera un conflicto de este tipo, las tierras serían adjudicadas a las comunidades, «en el sitio que ellas eligieran, en usufructo perpetuo y en la medida que lo necesitaran». De igual forma, si el conflicto surgía entre particulares y comunidades agrarias en torno a tierras no cultivadas, afectables o no, se resolvería en favor de las segundas (Azurdia, 1953:737-738).

El examen cuidadoso de los expedientes de archivo del Decreto 900, correspondientes al nororiente de Guatemala, nos muestra que en esta región del país una buena parte de las denuncias presentadas por los campesinos correspondían a sus antiguas tierras comunales o ejidales que durante los gobiernos liberales habían sido tituladas a nombre de las municipalidades y eran administradas por corporaciones ladinas, quienes frecuentemente adjudicaban las mejores tierras a las familias ladinas de la región usando el mecanismo de *la*

titulación supletoria. Estos finqueros locales (ganaderos o terratenientes medios) normalmente poseían un buen número de cabezas de ganado y hacían producir la tierra (maíz y frijol) bajo el antiguo sistema de medianía. En los expedientes del Decreto 900 se establece que muchas de las fincas de la región se asentaron en los ejidos de aldeas completas, las cuales quedaban sujetas al dominio del finquero en condición de arrendatarios o colonos. En la mayor parte de los casos, los linderos y extensión de la fincas no era clara, en tanto que los propietarios solían expandir sus propiedades cercando los terrenos vecinos y arreglando sus posesiones mediante resoluciones emitidas por el alcalde y/o consejo municipal con base en la declaración del finquero y el informe de inspección ocular del síndico municipal (quien no solía manejar los instrumentos técnicos ni legales para llevar a cabo los trabajos de agrimensura de la tierra; además, en muchas ocasiones su criterio se sesgaba en favor de los intereses de su grupo social). A continuación, algunos ejemplos de los casos registrados en los expedientes del Decreto 900, correspondientes a Chiquimula y Zacapa:

a. Expedientes, denuncia de fincas en tierras de comunidad

1) El 2 de septiembre de 1952, Santiago Agustín y compañeros de la Unión Campesina de San Jacinto denunciaron 1 caballería con 14 manzanas de la finca Plan de la Peña y anexos donde se ubica el ojo de agua que surtía a su aldea. El propietario de esta finca era Herlindo Cardona, integrante de la familia ladina que gobernó el municipio de San Jacinto durante buena parte del siglo XX. La Unión Campesina argumentó que desde el año 1898, su comunidad fue víctima de la expropiación de 98 caballerías, 56 manzanas y 3,922 varas cuadradas de sus ejidos. Todas esas tierras efectivamente pertenecían a la Comunidad Indígena (o campesinado) de San Jacinto. En su denuncia, los comuneros afirmaron: «Hubo en aquel entonces, una "equivocación" intencionada al calificar de excesos tierras que trabajaban los campesinos, y el 19 de mayo de 1898 se había dictado un acuerdo gubernativo en el que se adjudicó a la municipalidad de San Jacinto un supuesto exceso de tierra. En dicho acuerdo se dispuso que la tierra fuera repartida por un ingeniero, en lotes medidos entre todos sus vecinos, debiendo la Jefatura Política extender certificaciones de propiedad en favor de cada adjudicatario. No obstante, los campesinos denunciaron que el resultado de dicho acuerdo fue que las tres familias ladinas que gobernaban el municipio tomaron todas las certificaciones y titularon la tierra en su favor. En consecuencia, desde ese entonces existía un conflicto entre la organización campesina y la municipalidad, y la organización campesina y los individuos particulares que habían registrado esas tierras como propias. Apelando a lo dispuesto en el Artículo 81 del Decreto 900 la Comunidad Campesina de San Jacinto denunció como propias:

> «98 caballerías 56 manzanas, 3,922 varas cuadradas que tiene una parte de la Municipalidad y la otra parte personas particulares, a fin de que conforme la Ley citada se adjudique a la Unión Campesina del Municipio el título que la acredita como Usufructuaria Vitalicia de esas Propiedades que en otra hora le arrebataron» [AGCA/Decreto 900/ Chiquimula/ Pag. 01, Exp.01 Pág. 20] y [Registro P.I/ Fca.6098 Fol.76 Lib.43].

Este caso fue tratado al más alto nivel del Departamento Agrario Nacional: por la Sección de Tierras, el licenciado Efraín Castillo; por la Oficina Jurídica, los licenciados Waldemar Barrios Klee y Horacio Rodríguez González; por el Consejo Agrario, los chiquimultecos Leonardo Castillo Flores, Clodoveo Torres Moss y José Luis Ramos. Por parte del propietario estaban el señor Daniel Cardona (alcalde de San Jacinto y hermano del propietario denunciado Herlindo Cardona) y su asesor, el licenciado Julio César Méndez Montenegro (años más tarde, presidente de Guatemala, 1966-1970). En su declaración, el señor Castillo Flores manifestó que conocía a fondo la problemática que se vivía en San Jacinto y que aun cuando los propietarios ladinos tuvieran títulos supletorios, dichas tierras estaban comprendidas en el plano de los ejidos del pueblo de San Jacinto. Por consiguiente, desde el punto de vista de la justicia, las adquisiciones del señor Cardona no podían estimarse como valederas.

Además, Castillo Flores inquirió al propietario cuál era el monto del salario que pagaba a los campesinos que trabajaban su tierra. Mientras que el licenciado Barrios Klee le preguntó si de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, estaba cumpliendo con llevar el Libro de Trabajadores Eventuales, en el que debían quedar registrados los jornales que pagaba a los trabajadores que tenían esa calidad, a lo que la parte patronal (el señor Cardona) respondió que no llevaba tal libro y que luego de la caída del gobierno de Ubico empezó a pagar salario a los campesinos, el cual oscilaba entre 0.50 o 0.60 centavos. Al respecto, el señor Castillo Flores indicó que en la próxima audiencia se tendría la oportunidad de constatar las afirmaciones de la parte patronal, escuchando a todos aquellos campesinos que habían trabajado para éste en condiciones de servidumbre, y que en dicha sesión serían los campesinos quienes expresarían la realidad del problema [AGCA/Decreto 900/Chiquimula/ Paq. 01, Exp. 01 P. 20 y 21] y [Registro P.I/Fca.6098 Fol. 76 Lib. 43].

2) Los dirigentes campesinos de las aldeas El Barreal, El Sauce, Plan de Guineo, Catocha, El Palmar, en representación de 2,777 trabajadores de 9 aldeas del municipio de Chiquimula, denunciaron ante las autoridades agrarias que desde 1941 venían siendo molestados por el señor José María Moscoso Espino, la señora María Oliva viuda de Barillas; Everildo Francisco y Luis Gómez. Los campesinos argumentaron que el licenciado Moscoso, con el respaldo del general Serapio Cuyún (el despótico jefe político de Chiquimula en los periodos de Ubico y Ponce Vaides), había gestionado la compra de sus tierras en 1941 y

pretendía despojarles de sus tierras a 4 aldeas de aproximadamente mil habitantes. Las 4 aldeas abarcaban una extensión aproximada de 54 caballerías. Este terreno poseía cultivos de café, guineo, caña de azúcar, árboles frutales, frijol y maíz, así como la construcción de ranchos. Todos estos bienes [argumentaron los campesinos] les habían sido heredados por sus antepasados hacía más de cien años. Este expediente se abrió inmediatamente después de la Constitución de 1945 y el litigio se extendió hasta 1952 sin resolución. Durante todos esos años, los demandantes enviaron varias cartas a Gobernación, pero no obtuvieron respuesta. La última carta que aparece en el expediente es de diciembre de 1952 [AGCA/Decreto 900/Chiquimula/ Paq.01, Exp.16] y [Registro P.I/ Fca. 6134, Fol. 112, Lib. 43].

3) Luciano Rivera y compañeros de la Unión Campesina de Nejapa denunciaron tierra de las fincas Nejapa y la Ceiba, en el municipio de Esquipulas, propiedad de Hercilia Oliva viuda de Trujillo. Con información proporcionada por los campesinos y arrendatarios, el inspector agrario confirmó que dicha finca tenía más o menos 2 caballerías de excesos. Los campesinos del comité agrario hicieron mediciones de la finca y constataron que solo 59 manzanas estaban respaldadas con escrituras; en tanto que la finca presentaba un exceso de 2 1/2 caballerías sin escritura. Según los denunciantes, dichos excesos era ejidos municipales; sin embargo, la Sra. Oliva los administraba como propios, aunque nunca los había cultivado. Por consiguiente, los arrendantes solicitaron esas tierras en usufructo vitalicio. En el informe de la inspección ocular se constató que esta finca poseía pasto natural y tenía sembradas 8 manzanas con maíz, frijol, arroz y caña de azúcar [AGCA/Decreto 900/ Chiquimula/Paq. 01, Exp. 04] [Registro P.I/ Fca. 1873, Fol. 94, Lib. 24].

4) José Víctor Aguirre y compañeros de la Unión Campesina El Socorro denunciaron que los terrenos San Carlos y Piedra Grande ubicados en la jurisdicción de la finca San José Real Alotepeque, propiedad de José Itén e Itén (nacionalidad suiza) pertenecían a sus ejidos. La extensión de esta finca era de 18 caballerías, estaba atravesada por el río Grande de Zacapa y contaba con 6 nacimientos de agua. El propietario tenía sembrado café, maíz, frijol, pasto, bosque con árboles de roble y tenía 35 cabezas de ganado. Esta finca poseía maquinaria para aserrar madera y el propietario había producido 300 mil pies de madera que antes vendía al Gobierno para construcción de escuelas y puentes. El río Grande regaba los cafetales y el Sr. Itén e Itén quería instalar una planta eléctrica movida por agua. La resolución del Consejo Agrario fue expropiar 6 caballerías y 36 manzanas que pertenecían a los ejidos de San Carlos y Piedra Grande de Alotepeque. En 1956, la administración de Castillo Armas dejó sin efecto la expropiación, se devolvió la totalidad de la finca al propietario y se desalojó a los campesinos [AGCA/Decreto 900/Chiquimula/ Paq. 01, Exp. 06] [Registro P.I/ Fca. 1508, Fol. 20, Lib. 21].

5) Demetrio Jácome y compañeros de la Unión Campesina de Ipala denunciaron los excesos de la finca San Antonio Jicamapa, propiedad de Fernando Cerón Dardón y Francisco Sanchinelli. Los campesinos afirmaron que dicha finca poseía una extensión aproximada de 80 caballerías que no estaban debidamente registradas ni cultivadas en su totalidad; en tanto que esta finca expandió sus linderos sobre los terrenos ejidales de la aldea Jicamapa en la cual había 140 viviendas, cuyos habitantes quedaron sujetos a los finqueros como arrendatarios; por consiguiente, éstos pedían en usufructo 25 manzanas cada uno. Esta finca poseía 300 cabezas de ganado y los arrendantes producían para sí y los propietarios maíz, frijol, arroz y maicillo. La resolución del Consejo fue expropiar a Fernando Cerón 1 caballería, 7 manzanas y a Francisco Sanchinelli 3 caballerías, 34 manzanas. En 1956, la administración de Castillo Armas dejó sin efecto la expropiación, se devolvió la totalidad de la finca al propietario y se desalojó a los campesinos [AGCA/Decreto 900/Chiquimula/ Paq. 01, Exp. 11] [Registro P.I/ Fca. 1445, Fol. 165, Lib. 20].

6) La Unión Campesina de la aldea Las Cruces denunció 20 caballerías de tierra en litigio con la finca Guajiniquilapa, propiedad de Ismael Rodríguez. La Comisión Agraria estableció que el propietario no tenía escritura ni registro en la Secretaría General de Rentas. En la inspección ocular se estableció que el propietario cultivaba únicamente 30 manzanas de terreno. Frente a las evidencias presentadas por la Comisión, el propietario manifestó estar de acuerdo con la denuncia de los campesinos, pidió que se les hiciera entrega del terreno, siempre y cuando a él se le confirmara la propiedad de los terrenos donde se ubicaban sus cultivos. Además de los denunciantes, se presentaron 25 individuos más que se consideraban con derecho sobre esta propiedad. El CAD resolvió la expropiación de 14 de las 20 caballerías denunciadas por el CAL para su nacionalización y adjudicación en usufructo vitalicio a la Unión Campesina y el resto al propietario.

7) Gerardo Pérez y condueños de la aldea Olopita denunciaron que la finca El Rodeo, jurisdicción de Esquipulas, propiedad de Rodrigo Sandoval y 3 condueños más, fue adquirida mediante la expropiación de tierras ejidales de la aldea Olopita. Los campesinos denunciaron que los terrenos comprendidos en esta finca nunca habían sido trabajados por sus propietarios y que éstos eran objeto de arrendamiento perpetuo. El comité agrario solicitó 100 manzanas para la agricultura y sostenimiento de sus familias; ellos afirmaban que la finca tenía una extensión de 7 caballerías. La topografía del terreno era planicie en su totalidad, no tenía casa ni casco de la finca, estaba pastada con grama, poseía dos ríos: El Rodeo y El Jiote. El Jiote regaba 12 manzanas. Había 20 manzanas de bosque, 10 manzanas de pino y 10 de roble. 20 manzanas estaban trabajadas por los arrendantes con milpa. Estas tierras eran buenas para siembra de maíz, arroz, frijol y caña. Los arrendantes tenían 80 reses y 35 bestias [AGCA/Decreto 900/ Chiquimula/ Paq. 01, Exp. 12] [Registro P.I.8116/ Fca. 267, Lib. 47].

8) Magdaleno López y compañeros de la Unión Campesina de la aldea Sesesmilito o Dulce Nombre denunciaron 15 caballerías y 23 manzanas de la finca El Dulce Nombre, en jurisdicción de Camotán, propiedad de Manuel Madrid. Los denunciantes argumentaron que desde tiempos antiguos sus padres trabajaban esos terrenos, que allí nacieron y allí estaban ubicadas sus casas. Nunca antes conocieron al señor Madrid (vecino de Zacapa), quien llegó a estorbarles en sus posesiones, despojándolos de las tierras donde cultivaban y orillándolos a las lomas más improductivas. Por consiguiente, solicitaban al Gobierno que les otorgara los correspondientes títulos de sus tierras. La inspección ocular de la Comisión confirmó que esta finca era de 18 caballerías registradas y 2 caballerías de exceso. Del total de dicha tierra, los vecinos de la aldea Sesesmilito cultivaban 15 caballerías. Los ranchos de las familias que vivían allí eran 40 y éstos fueron construidos por sus propietarios y/o heredados por sus antepasados. Además, constató que esta finca la atravesaba un riachuelo de regular caudal y otros pequeños, en ella había muchos ojos de agua y 3 caballerías de bosques de pinabete, roble, liquidámbares y encinares. Esta finca no poseía ninguna instalación para su explotación. El dueño tenía 50 cabezas de ganado, pero la finca nunca fue explotada por él o su antecesor. El propietario se opuso a la demanda de los campesinos, aduciendo que su propiedad no era afectable al Decreto 900, pues tenía una inclinación mayor de 30 metros en 15 caballerías y estaba gravada en hipoteca en favor del Instituto de Fomento de Producción por un crédito de 4 mil quetzales. La CAD acordó expropiar en favor de los campesinos 5 de las caballerías denunciadas; no obstante, esta decisión no llegó a implementarse [AGCA/Decreto 900/Chiquimula/Paq. 01, Exp. 15] [Registro P.I/Fca. 1673, Fol. 120, Lib. 131].

9) Basilio Maldonado y compañeros denunciaron como propias 16 caballerías y 10 manzanas de la finca El Pericón, inscrita a nombre de Marta Julia Díaz de Maldonado. Los denunciantes argumentaron que esa tierra pertenecía a los ejidos de la aldea La Laguna, municipio de Chiquimula. La CAD mandó expropiar 14 de las caballerías denunciadas y su adjudicación en usufructo vitalicio a los campesinos de la Unión Campesina de la Laguna y el resto a la propietaria. Dicha adjudicación no llegó a concretarse y su resolución fue revocada en 1954 por el gobierno de Castillo Armas [AGCA/Decreto 900/Chiquimula/Paq. 01, Exp. 10] [Registro P.I/ Fca. 7157, Fol. 154, Lib. 45].

b. Expedientes, denuncia de arrendamiento/sistema de mediania

1) La Unión Campesina de la aldea La Jagua, municipio de Esquipulas, denunció la finca San José Las Lágrimas, propiedad de Rubén Pazos. La Comisión Agraria Departamental (CAD) estableció que el propietario poseía otras propiedades en Chiquimula. Como pruebas se presentan los registros de la propiedad del inmueble. En cuanto a la extensión de la finca demandada, la Comisión estableció que ésta era de 19 caballerías. En contrapartida, la Unión Campesina de la aldea

La Jagua argumentó que la finca en cuestión tenía una extensión aproximada de 23 caballerías y que el propietario mantenía un constante litigio por linderos con los campesinos de la aldea, al punto que éste, aduciendo derechos de propiedad, llegó a quemar los ranchos de 25 familias y que éstas fueron lanzadas por la fuerza de sus casas; además, les echó los animales a sus siembras y destruyó sus cosechas. En esta finca se cultivaba maíz, frijol, café, tabaco y caña de azúcar; al sacar estas cosechas, la tierra se utilizaba para pastar 430 cabezas de ganado vacuno. La finca también contaba con tierra de bosques sin fuentes de agua. Según los campesinos, en dicha finca había extensiones de tierra que no estaban siendo cultivadas por el propietario sino por medio de «arrendantes», a quienes el finquero explotaba cobrándoles tres cajas de maíz por cada manzana. Los denunciantes y antiguos arrendantes del señor Pazos solicitaron a la CAD el usufructo vitalicio de los terrenos que estaban siendo arrendados en dicha finca, para que éstos fueran parcelados entre los campesinos. Luego de un largo litigio, se declaró sin lugar la demanda de expropiación de esta finca dada su productividad [AGCA, Decreto 900/Chiquimula/Paq. 01, Exp. 03] y [Registro P.I/ Fca. 442, Fol. 271, Lib. 03 y Fca. 131, Fol. 46, Lib. 02].

2) Los campesinos de la Unión Campesina de la aldea La Jagua denunciaron terrenos de la finca Plan del Remunadero y Pozas, jurisdicción de Esquipulas, propiedad de Tomás Chinchilla. Los denunciantes adujeron que históricamente venían trabajando esas tierras en arrendamiento. El propietario presentó la certificación de la propiedad de su tierra en la cual consta que ésta tenía una extensión de 6 caballerías con 20 manzanas, en donde sembraba café, caña y banano. La Comisión declaró afectables 75 manzanas a entregar a los mozos colonos/ arrendantes [AGCA/Decreto 900/ Chiquimula/Paq. 01, Exp. 02] [Registro P.I/ Fca. 2168, Fol. 121, Lib. 17].

3) Encarnación Ramírez y compañeros denunciaron 15 manzanas de terrenos ocupados en arriendo en Camotán, propiedad de los herederos de Antonio García. Los campesinos argumentaban que los propietarios tenían terrenos en demasía y que no los hacían producir personalmente, sino «los daban en arrendamiento, explotando al trabajador necesitado». Impugnaron, además, que dicha propiedad poseía excesos que no habían sido escriturados. Dada la pequeña extensión de esta propiedad, la Comisión la dictaminó «inafectable», a excepción de aquellos excesos que no estuvieran inscritos en el Registro de la Propiedad y procedió a adjudicarlos a los solicitantes [AGCA/Decreto 900/Chiquimula/Paq. 01, Exp. 08] [Reg. P.I., 1094/Fca. 238, Lib. 04].

4) La Unión Campesina de Ipala denunció terrenos ocupados en arriendo de la hacienda El Paxte, propiedad de María Girón Vda. De Franco. La hacienda en mención poseía 19 caballerías con 37 manzanas; además, la Comisión mostró pruebas de que la propietaria poseía otras fincas. La hacienda El Paxte se dedicaba a la crianza de 600 cabezas de ganado vacuno y 80 de caballar, buena parte de sus tierras era pastizales; tenía una sección árida, una caballería de reserva

forestal y una más que ocupaba el lago. En esta finca había 25 labradores a los que se les daba tierra arrendada. Atendiendo a la Ley de Arrendamiento Forzoso, el alcalde de Ipala resolvió que la propietaria diera tierras en arrendamiento a campesinos del lugar. No conforme ésta con la resolución, interpuso un recurso de amparo contra el alcalde; acto seguido, el señor Franco (propietario de dinero y amigo de la Sra. Girón) metió ganado en los terrenos sembrados por los campesinos y destruyó sus siembras. Este hecho llevó a que el Gobierno interviniera en el conflicto y les proveyera cereales a los damnificados. Los hechos descritos ocurrieron antes de haber sido promulgado el Decreto 900. La resolución del Consejo fue expropiar siete caballerías y 30 manzanas [AGCA/ Decreto 900/Chiquimula/Paq. 01, Exp. 09] [Registro P.I/Fca. 7072, Fol. 62, Lib. 47 y Fca. 2225, Fol. 212, Lib. 18].

5) Nicolás Hernández Nájera, Alfonso Lorenzo y compañeros denunciaron terrenos del municipio de Cabañas, propiedad de Manuel y Vicente Paiz, aduciendo ser arrendatarios de los mismos; por consiguiente, solicitaron que el Gobierno les comprara 15 caballerías de terreno que vendía el señor Paiz y Paiz. Señalaban que el propietario las tenía sobrevaloradas (Q1,200.00 la caballería). Los vecinos de las aldeas Sunzapote, El Solís, El Jute, El Arenal, San Vicente, y Plan de la Cruz aseguraban que eran arrendantes de esas tierras y que habían sido lanzados de sus casas por el propietario. Las 26 casas fueron derribadas a golpes de hacha, mientras que ellos no veían el motivo, ya que siempre habían vivido ahí y habían pagado renta sin que el finquero les diera recibo. Afirmaban que ahí vivieron sus bisabuelos y que eran más de 100 las personas desalojadas que se quedaron sin casa. Además, como ya habían sembrado no pudieron llevarse nada. El alcalde municipal de Cabañas fue quien les ordenó que desocuparan inmediatamente sus terrenos. Los denunciantes afirmaron que la finca del Sr. Paiz tenía grandes excesos de tierra sin escriturar. Por su parte, los propietarios presentaron sus escrituras. Este proceso se inició en 1945 y llegó a 1955 sin resolución. En el expediente se encontraron algunas cartas enviadas a Arévalo y a Arbenz por parte de los denunciantes solicitando ayuda, pero no les resuelven con prontitud. Posteriormente, hay solicitudes a Castillo Armas, y en respuesta, éste les ofreció comprar la tierra denunciada al propietario [En el expediente no aparecen registros de este hecho] [AGCA/Decreto 900/Zacapa/ Paq. 01, Exp. 10] [Registro P.I/Fca. 1487, Fol. 225, Lib. 13, y Fca. 152, Fol. 119, Lib. 03].

6) Nicolás Hernández y compañeros, en representación de la Unión Campesina de Cabañas, denunciaron 31 caballerías y 10 manzanas de las fincas San Juan Temblador, San Juan El Ovejero, San Juan El Cerrón, en jurisdicción de Cabañas, Zacapa, propiedad del señor Manuel Paiz y Paiz. El propietario no presentó los documentos de propiedad ni plano de la finca, pero presentó otras pruebas en las que hacía constar que las tres fincas denunciadas formaban parte de una sola propiedad. Los terrenos de esta finca eran utilizados para la siembra de cultivos (maíz, frijol, maicillo) mediante arrendamiento «a medias» o sistema de medianía. La finca tenía potreros, bosques naturales, caminos y quebradas, había

caballeriza y ganadería. Los denunciantes afirmaron poseer desde siempre los terrenos donde cultivaban y estaban construidas sus chozas. Algunos afirmaron ser nativos de ahí. La CAD dictaminó expropiar las tierras afectables y otorgarlas a los campesinos [AGCA/Decreto 900/Zacapa/Paq. 01, Exp. 04] [Registro P.I/Fca. 1484, Fol. 223, Lib. 13 y Fca. 1485, Fol. 224, Lib. 13].

7) Manuel Arias y compañeros de la Unión Campesina de Cabañas denunciaron dos caballerías y 40 manzanas de la finca Rincón Grande, propiedad de Manuel Paiz. Según la inspección de la Comisión, esta finca tenía excesos de terreno que no estaban respaldadas por ningún documento legal; además, en ella vivían campesinos arrendantes. La resolución por el Consejo fue expropiar 40 manzanas para la Unión Campesina de Cabañas, posteriormente aparece una carta del Ministerio de Gobernación de noviembre de 1956, donde dejan sin efecto el acuerdo gubernativo de expropiación sobre la finca. Firma Castillo Armas [AGCA/Decreto 900/Zacapa/ Paq. 01, Exp. 05] [Registro P.I/Fca. 1884, Fol. 222, Lib. 13].

8) Juan Martínez Interiano y compañeros denuncian 8 caballerías, 34 manzanas de las fincas Las Pavas, Cerrón, Santa María, Cerezal y anexos, en jurisdicción de Gualán, Zacapa, propiedad de Rosendo Paiz Trabanino y condueños. El propietario no presentó certificaciones del Registro de la Propiedad. El comité agrario local constató que había tierras cultivadas: ocho manzanas con café, 60 cuerdas con maíz y15 cuerdas con frijol. Los colonos cultivaban 14 manzanas. El finquero poseía 450 a 500 reses y 15 bestias mulares y media caballería de pastizales. A los denunciantes se les otorgaron en usufructo las parcelas donde cultivan [AGCA/Decreto 900/Zacapa/ Paq. 01, Exp. 06] [Registro P.I/Fca. 4757, Fol. 68, Lib. 01 y Fca. 394, Fol. 21, Lib. 35].

c. Expedientes, disputa de fuentes de agua y servidumbre de paso

1) Dionisio Flores, Clemente Ramírez, Gregorio Díaz y compañeros denunciaron terreno y nacimiento de agua de la finca Lashun, El Tuley anexos Sanchinelli y Plan del Jocote, jurisdicción de Chiquimula, propiedad de Octaviano Valdés Tejada. Los solicitantes atestiguaron que la extensión de la finca Lashun y El Tule era de 3 caballerías aproximadamente; Sanchinelli, 3 caballerías, y Plan del Jocote, 70 manzanas. En total, 6 caballerías y 70 manzanas. La Comisión constató que dicha finca poseía más tierra de lo estipulado y que su extensión ascendía a 7 caballerías, 30 manzanas, catalogadas como «excesos». Constató, además, que el propietario no cultivaba la tierra y que en su totalidad ésta era arrendada bajo el sistema de medianía. En la inspección ocular se confirmó que esta finca poseía un importante nacimiento de agua y que una sección de la finca era irrigada. Aun cuando el propietario tenía 32 vacas, algunos chivos y toros, no poseía medios probatorios de la propiedad de dicho ganado, ni él estaba inscrito como ganadero. Para este mismo caso también había otra demanda

de recuperación de la toma de agua, por parte de Salvador Cuéllar y Octaviano Valdés. En la resolución de la CAD se declaró de uso público la servidumbre de paso y uso de las aguas procedentes del río San José. Asimismo, declaró expropiables las dos caballerías de excesos que resultaron de la remedida de esta finca [AGCA/Decreto 900/Chiquimula/Paq. 01, Exp. 14] [Registro P.I/Fca. 686, Fol. 480, Lib. 06].

2) Manuel Lemus y Trinidad Villeda denunciaron obstrucción en la «servidumbre de agua» correspondiente a la toma de agua San Juan la Ermita, por parte de los finqueros Rufino, Lauro y Melecio Lemus. Dichos finqueros negaban el paso del agua a los denunciantes, quienes siempre la habían utilizado para el riego de una vega con plantaciones de banano, caña, café y cebollas a pequeña escala. Esta toma de agua, históricamente, les había dado «servidumbre de agua» [AGCA/Decreto 900/Chiquimula/ Paq. 01, Exp. 07].

La cantidad de denuncias presentadas por las Uniones Campesinas de diferentes aldeas y/o municipios de Zacapa y Chiquimula nos ofrece una idea muy diferente acerca de la aplicación del Decreto 900 en esta región. Si bien es cierto, en esta región no había grandes latifundios y el tamaño promedio de las fincas de los terratenientes de la región era de 20 a 35 caballerías de tierra, los argumentos de los denunciantes giraban en torno a una serie de razones contempladas como validas en la Ley de Reforma Agraria. Entre estas destacan: 1) las tierras denunciadas eran parte de los ejidos de sus municipios y los propietarios las habían adquirido a través de adjudicación arbitraria por parte de las autoridades municipales; 2) los finqueros habían extendido sus propiedades ilegalmente y poseían excesos que no contaban con títulos de propiedad; 3) los propietarios cultivaban sus tierras bajo el sistema de arrendamiento y medianía, y explotaban a los campesinos que siempre habían vivido y trabajado esas tierras; 4) la finca poseía extensiones de tierra sin trabajar; 5) el finquero se había apropiado arbitrariamente de un manantial, ojo de agua y/o toma de agua que servía a una o varias comunidades; 6) el finquero estaba obstaculizando el paso de agua a un caserío o aldea.

El antropólogo Richard Adams (quien realizó trabajo de campo en el nororiente, justo en los años en los que se estaban aplicando las leyes agrarias de la Revolución) observó que, desde el punto de vista de la cultura ladina local de Guatemala, la Ley de Arrendamiento Forzoso tenía un efecto social diferente al de la Reforma Agraria. La reacción de los terratenientes medios frente a esta ley fue inmediata, en tanto que al redividir la tierra se afectaba el cuerpo principal

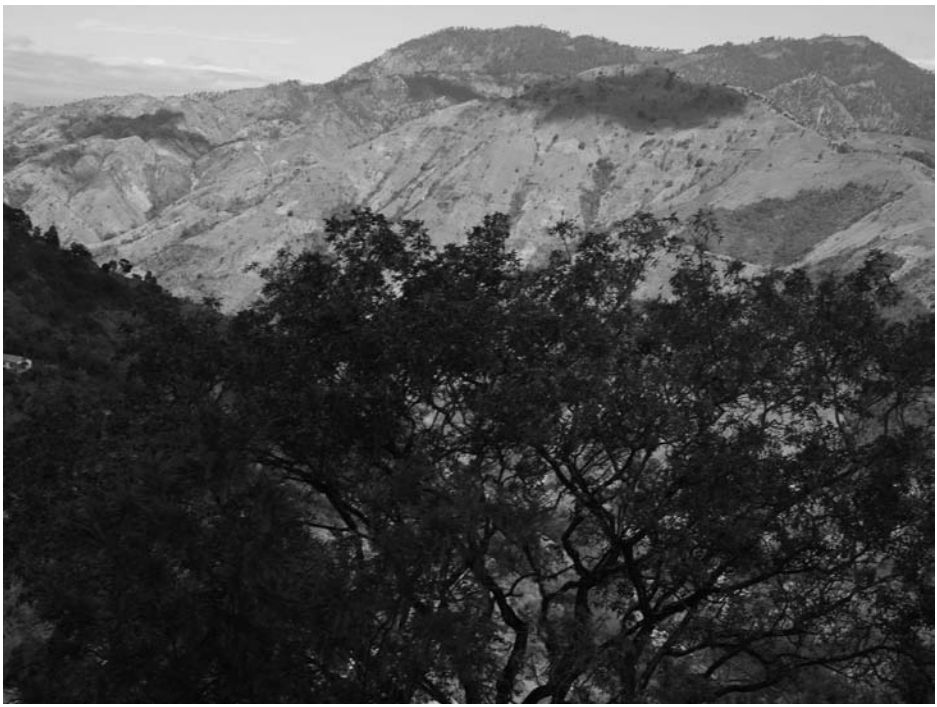
de sus costumbres y se quebraban las antiguas bases de la relación patrón-mozo. Las personas que recibían tierras principiaron a trabajar sobre una nueva base económica: si se trataba de tierras de milpa, trabajaban para ellos mismos; si, por el contrario, se trataba de tierras sembradas de café o caña, trabajaban en cooperativas controladas por el Gobierno.

La Ley de Arrendamiento Forzoso afectó las relaciones de poder y el cuerpo de costumbres que mediaban la interacción entre las clases sociales establecidas en las localidades del oriente, así como sus consiguientes patrones de trabajo. Anteriormente, la entrega de *la mitad de la cosecha* como retribución por el uso de la tierra era muy común en esta región, y la renta era uniforme para una gran variedad de tasas localmente establecidas (Adams, 1956:69). Además, la reorganización de las comunidades indígenas y/o la formación de uniones campesinas, comités o sindicatos agrarios, combinado con el *arbitraje* de jueces de trabajo instruidos en favor de los trabajadores, se convirtió en un peligro, desde el punto de vista del finquero, en tanto que el Estado estaba interfiriendo en los mecanismos más íntimos sobre los cuales él había asentado su autoridad dentro de sus dominios. Tanto la Ley de Reforma Agraria, como la Ley de Arrendamiento Forzoso y el Código de Trabajo contribuían a desestructurar las relaciones de tipo servil que aún existían en el campo. La Ley de Arrendamiento Forzoso fue elaborada para destruir las relaciones existentes entre el arrendatario y los medianos y pequeños propietarios de tierras (Adams, 1956:70).

Los líderes y funcionarios que dirigieron las políticas de los gobiernos de la Revolución de Octubre contribuyeron a fortalecer la organización popular y lograron reformas sociales y económicas de gran envergadura, a pesar de lo cual una de las debilidades de su programa de gobierno, según Streeter (2000), fue no haber logrado formar una coalición política que fuera lo suficientemente amplia como para vencer al movimiento contrarrevolucionario y defender los logros alcanzados por el proceso revolucionario. Quizá otra de sus debilidades fue el no haber establecido alianzas estratégicas con los pueblos indígenas, en tanto que su enfoque de organización política (sectorial, campesino o sindical) no logró potenciar sus formas de organización comunal y territorial. Si bien algunos ancianos ch'orti' recuerdan que los cambios impulsados por los gobiernos de la Revolución les permitieron «liberarse de la esclavitud» a la que estaban sometidos por los finqueros y autoridades municipales, también recuerdan que este fue un momento de «persecución y pena entre la misma gente». Es un tiempo en

el que muchos jóvenes se organizaron en los comités agrarios y demandaron parcelas que habían sido de sus ejidos, también demandaron tierras que estaban en manos de los finqueros de la región, quienes muy pronto reaccionaron, se organizaron en el Movimiento de Liberación Nacional (que entró desde Honduras), y se dedicaron a reprimir a todos aquellos que participaron en las uniones campesinas, los comités agrarios locales, y demandaron aquellas tierras que les habían sido heredadas por sus abuelos y padres.

Fotografía No. 5
Tierras altas del territorio Ch'orti'



Fuente: Trabajo de campo Matilde González.

Capitulo V
El Movimiento de Liberación Nacional (1954-1962)

El malestar de las élites nororientales frente a los cambios revolucionarios coincidió con el descontento del Ejército en el momento en que éstas percibieron que habían perdido el control del mundo provinciano. Los dos gobiernos de la Revolución reestructuraron aquellos espacios de autoridad estatal, que hasta entonces habían sido administrados por los jefes políticos (caciques provincianos con rango de militar), y ampliaron el equipo de funcionarios públicos que mediaban en asuntos cruciales del espacio provinciano, tales como la propiedad de la tierra y las relaciones entre patrones y trabajadores o entre finqueros y campesinos. Particularmente, cuando la institucionalidad agraria de la Revolución se extendió hacia las áreas rurales y apoyó los procesos de organización campesina amparados en la Constitución de 1945, la Ley de Arrendamiento Forzoso, el Código de Trabajo y/o el Decreto 900, los militares de la vieja guardia sintieron que el poder del Ejército sobre el territorio nacional estaba amenazado. Hasta entonces, los jefes políticos, y por ende el gobierno departamental, habían estado bajo su estructura de mando.

Desde finales del siglo XIX, la relación entre los caudillos liberales, el Ejército, los jefes políticos y las élites oligarcas (regionales, nacionales y extranjeras) había sido estratégica en el curso que siguió la formación del Estado finquero. En contrapartida, la administración de Arbenz confiaba cada vez más en el apoyo de los funcionarios civiles y los dirigentes del movimiento sindical y campesino. Y a medida que la conflictividad social aumentaba en el campo, los dirigentes del movimiento popular abogaban por que Arbenz formara una «milicia del pueblo» que fuera capaz de defender la Revolución, en tanto que el Ejército podría ser desleal al gobierno revolucionario (Buttrey, 1967:19).

En mayo de 1954, los altos mandos del Ejército se reunieron en dos ocasiones con el presidente para exponerle su preocupación por la injerencia del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en el Gobierno, y por los rumores que corrían sobre la formación de milicias populares para defender la Revolución. El 9 de junio de 1954, el Estado Mayor del Ejército pidió al presidente que apartara a «los comunistas» de los puestos de responsabilidad en la administración pública y que se controlara al PGT, que dominaba las bases de las organizaciones obreras y campesinas. Específicamente, le exigieron que prohibiera al chiquimulteco Leonardo Castillo Flores continuar organizando a los campesinos de la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), pues ello podría considerarse como un primer paso hacia la organización del Ejército Popular.

1. Formación del Ejército de Liberación

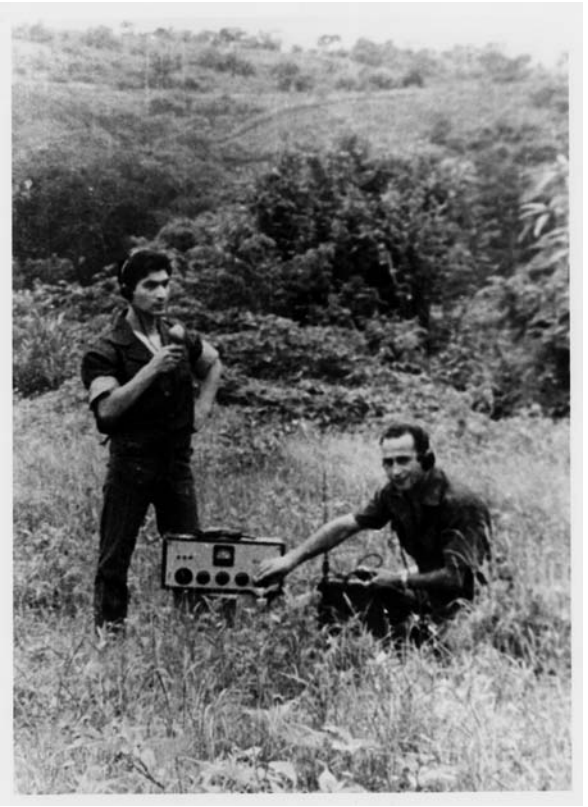
En este momento es ampliamente conocido que el Movimiento de Liberación Nacional o Ejército de Liberación, como le suelen llamar aquellos que lo integraron, se organizó en Nicaragua y Honduras bajo la jefatura del coronel Carlos Castillo Armas. Este ejército no era muy numeroso, pero tuvo el apoyo político, financiero y logístico de los Gobiernos de Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. En el documento conocido como Plan de Tegucigalpa, los integrantes del movimiento liberacionista se identificaron como «la oposición organizada contra la *sovietización* de Guatemala»; adoptaron como insignia una bandera tricolor: azul, blanco y rojo, con la cruz dagada y en el centro el lema «Dios, Patria y Libertad».

En la práctica el Movimiento de Liberación Nacional se formó de una alianza cruzada entre el sector más conservador de las élites oligarcas de la ciudad de Guatemala, la jerarquía de la Iglesia católica, los empresarios y funcionarios del Gobierno norteamericano, más aquellas élites provincianas que veían afectados sus intereses con las políticas de la Revolución. En el terreno, este movimiento se viabilizó con el activismo mediático de la radio clandestina La Voz de la Liberación, la participación activa de los dirigentes del movimiento anticomunista, mercenarios hondureños, miembros de la élite nororiental que engrosaron las filas del ejército liberacionista (con sus milicias privadas) y el apoyo financiero, logístico y militar del gobierno de Estados Unidos.

Según Lionel Sisniega Otero, el éxito del Movimiento de Liberación se debió a las transmisiones de Radio Liberación. «Nosotros trasmitíamos todo, todo por

la Radio Liberación. Sí, yo peleé con mi voz y un micrófono en la mano […]. Trabajamos juntos con José Torón. Nosotros transmitimos desde las cumbres de la montaña que divide Guatemala con Honduras. Se ha hablado mucho sobre esto […]. Se dice que transmitíamos desde el templo de Esquipulas, que desde la Embajada gringa […]. Pero no, nosotros estábamos en un lugar que se llamaba cerro Las Piedrecitas. Ahí estábamos, desde ahí hicimos la guerra» [E-Gt17-SO-11.08.2011:17].

Fotografía No. 6
La Radio Liberación

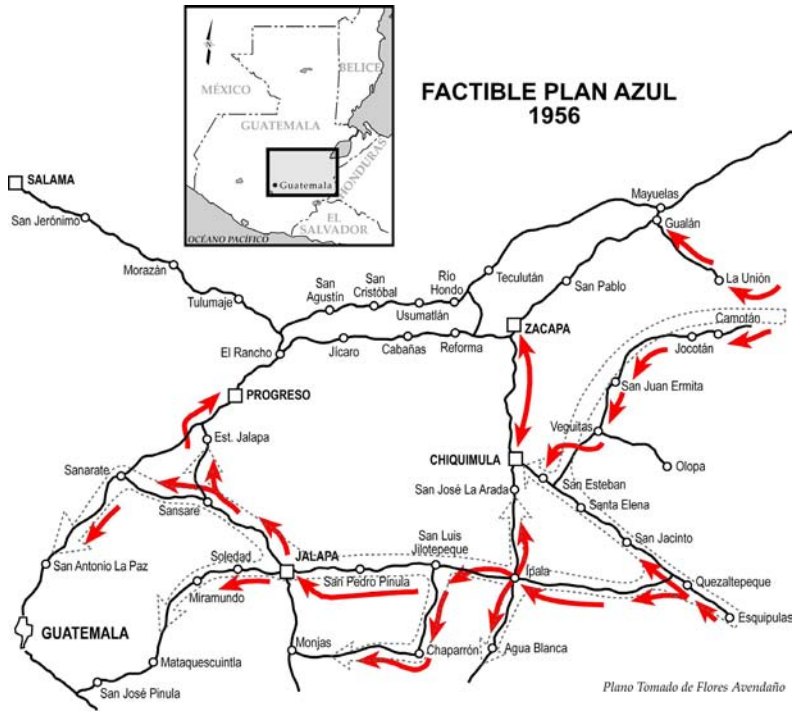


Fuente: Colección Taracena Flores/Fototeca Guatemala/CIRMA.

El Ejército de Liberación se entrenó en Nicaragua y Honduras, entró por la frontera hondureña que colinda con Gualán, Zacapa y Chiquimula. Según la crónica del coronel Flores Avendaño (uno de estrategas del Ejército de Liberación), a su ingreso en Guatemala, éste se constituyó en cinco columnas-comandos que

operarían de la siguiente manera: una por mar, con la misión de inmovilizar la base de Puerto Barrios, impidiendo que se desplazara en ayuda al destacamento de Zacapa; otra por Chachagualilla, en la frontera con Honduras, con la misión de cortar la comunicación con Zacapa; otra atacaría y tomaría Gualán para obligar a la base de Zacapa a empeñar parte de sus efectivos en defensa de dicha plaza y debilitar su acción en favor del destacamento de Chiquimula, el cual sería atacado por la cuarta y más importante columna, llamada Panchoy; y una quinta columna que operaría por la frontera de El Salvador para intervenir como reserva de la cuarta columna tomando Agua Blanca e Ipala (Flores, 1974:408). De estas cinco columnas, únicamente la cuarta operó con éxito, siendo batidas y controladas por el Gobierno tres de ellas y la quinta inmovilizada por el Gobierno de El Salvador, cuyos efectivos se unieron a la cuarta columna que participó en la toma de la ciudad de Chiquimula el 24 de junio de 1954 (409).

Mapa No. 8
Factible Plan Azul



Fuente: Flores-Avendaño (1974). Reinterpretación de Luis González.

Cuando atravesó la frontera Honduras-Guatemala, el Ejército de Liberación Nacional era un ejército pequeño de unos 300 hombres, no mucho más. Conforme fue pasando por los pueblos de Chiquimula se les fue uniendo más gente, en tanto que los finqueros orientales que participaban en el Ejército de Liberación habían reclutado a los mozos colonos de sus fincas y a los campesinos ladinos de la región. Particularmente importante fue la labor de reclutamiento que llevó a cabo el temido Isidro (Chilo) Carrera, responsable de la represión de los campesinos ch'orti' de los municipios de Jocotán y Camotán. Según las memorias de Flores (1974), Chilo Carrera enlistó a una milicia de 500 hombres en su finca El Salitrón, próxima a la frontera con Honduras, por el lado de El Florido. Estos hombres eran en su mayoría ladinos radicados en los municipios indígenas de Chiquimula, cuyo poder e intereses estaban siendo afectados con la política agraria y laboral de los dos gobiernos de la Revolución, en tanto que ésta había permitido que los pueblos ch'orti' se organizaran y reclamaran sus derechos territoriales. Según Flores, la composición de este grupo de milicianos fue la siguiente:

Hombres	Municipio de procedencia	Camiones
50	Jocotán	2
25	San José La Ermita	1
25	San Esteban	1
25	Santa Elena	1
50	San Jacinto	2
100	Quezaltepeque	4
100	Esquipulas	4
50	Ipala	2
75	San Luis Jilotepeque	3
500		20

Fuente: Flores Avendaño (1974:411).

Fotografía No. 7
Reclutamiento campesinos liberacionistas



Fondo Taracena/Fototeca Guatemala/CIRMA.

Los ancianos ch'orti' que entrevistamos en 2011 recuerdan que la mayoría de estos liberacionistas eran finqueros de Chiquimula, Jocotán, Esquipulas, Quezaltepeque y campesinos de las aldeas ladinas de la región, principalmente de Caparja, Caulotes, El Tesoro, La Libertad y El Naranjo. Los ladinos de estas aldeas se hicieron liberacionistas, pues muchos de ellos habían llegado a los pueblos ch'orti' durante la primera mitad del siglo XX, cuando el gobierno municipal estaba en manos de potentados ladinos que distribuyeron a sus parientes y clientela más cercana los ejidos municipales o tierras de las comunidades indígenas ch'orti'. Con la llegada de Juan José Arévalo y luego Jacobo Arbenz al poder, los ch'orti' empezaron a recuperar sus tierras haciendo uso de los lenguajes y formas de organización que las políticas agrarias les permitían. Ya fuera como Comunidad Indígena, Unión Campesina o Comité Agrario se organizaron y demandaron como propia la tierra que les pertenecía. Cuando los potentados ladinos sintieron amenazado su poder y sus propiedades se enlistaron en el Ejército de Liberación Nacional y se convirtieron en ardientes liberacionistas. Los jefes se fueron a entrenarse a Nicaragua y/o Honduras, mientras que sus subordinados engrosaron las filas liberacionistas en la aldea Caparja, del municipio de San Esteban, Chiquimula. Ahí acamparon en un lugar al que pusieron por nombre El Cerro de la Gloria, porque desde allí divisaban la ciudad de Chiquimula. Posteriormente, el MLN hizo en ese cerro un monumento al que llamó Monumento de la Gloria.

Además de la transmisión de Radio Liberación, en el teatro de operaciones fue particularmente efectivo el papel que jugaron los aviadores que tripularon los mal recordados aviones «Sulfatos» que bombardearon toda la región. En las memorias de la gente nororiental que vivió el ingreso del Ejército de Liberación son particularmente vivos los recuerdos de aquellos momentos en los que estos aviones lanzaban bombas sobre su pueblo. Una de estas personas nos dice:

> «A las siete en punto entró el Ejército de Liberación a Chiquimula. A las siete en punto de la mañana comenzó la batalla. La gente decía que había mil soldados del Ejército de Liberación Nacional en las orillas de Chiquimula. A esa hora, comenzaron tres aviones P-47 a bombardear Chiquimula. Eran aviones cazabombarderos llamados *Thunderbolt,* que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. A las siete empezó aquel espectáculo. Nosotros vimos aquellos aviones en picada con ocho ametralladoras abiertas sobre todas las orillas de Chiquimula dejando caer bombas, pero no era solo una bomba, sino varias, porque las tiraban seguidas e iban haciendo explosiones [E-Gt20-RP-02.2012:30]. Eran tres aviones gringos, la gente les puso los "Sulfatos". ¡Hacían un escándalo! Bajaba uno y disparaba, luego otro. Tiraban las bombas, volvían a subir, luego venía el otro, y después el otro. ¡Hicieron un escándalo horroroso! Y eso fue suficiente para que los liberacionistas entraran [en] Chiquimula y luego firmaran [un] pacto con los militares destacados en el cuartel de Zacapa» [31].

Mapa No. 9

The Fall of Arbenz, Operation PB Success June 18-27 1954



Fuente: Hall and Pérez Brignoli, (2003:235).

Tras bombardear las posiciones en donde se encontraba la resistencia arbencista y vencer al Ejército en Chiquimula, los liberacionistas ocuparon el pueblo y recibieron el apoyo de las familias ricas de la región. Desde Chiquimula afinaron las negociaciones con los jefes militares destacados en la zona de Zacapa; reclutaron a un buen grupo de milicianos nororientales, documentaron fotográficamente su entrenamiento y marcharon hacia la capital para legitimar su «victoria militar», negociar su participación en el Ejército Nacional y en la nueva junta de gobierno.

De cara a entender el arraigo militar/paramilitar en el pensamiento de muchos guatemaltecos que se adscribieron a los movimientos de la derecha política, es importante destacar el hecho de que aun cuando Estados Unidos intervino activamente en la invasión a Guatemala, muchos de los integrantes del Ejército de Liberación no fueron *títeres* o simples mercenarios de los «gringos». Por el contrario, éstos tenían sus propias razones de lucha y resignificaron la ideología anticomunista desde su propia forma de entender el mundo y lo político. Más importante aún, defendían sus propios intereses y tenían su propia agenda política/económica. Sin duda, uno de los objetivos compartidos por los integrantes del movimiento anticomunista era derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, revocar la amplitud de derechos que el gobierno de la Revolución concedió a los campesinos y obreros de la época, restituir el orden patriarcal y el régimen de privilegios que disfrutaban los oligarcas provincianos, nacionales y extranjeros en la Guatemala de mediados del siglo XX.

En una entrevista del 11 de agosto del 2011, Lionel Sisniega Otero, uno de los ideólogos del Movimiento de Liberación Nacional, nos planteó que los principios del anticomunismo se definieron, sencillamente, como la *antítesis* de lo que ellos creían que era «el comunismo». Su razonamiento doctrinario era muy simple. Ello permitió que fuera muy pronto asimilado por el sector más elitista y conservador de la sociedad provinciana, cuyos hábitos de lectura no iban más allá del catecismo de la Iglesia católica. Nos dice Sisniega:

> «El comunismo negaba a Dios, nosotros creíamos y creemos en Dios. El comunismo buscaba la disolución de la familia mediante el choque de los hijos con los padres, nosotros tenemos como valor fundamental la familia. El comunismo hablaba sobre la expropiación y nosotros creemos en la propiedad privada. El comunismo decía que *el mundo es la patria de todos* y nosotros queremos a nuestra Guatemala. El comunismo invitaba al despojo, nosotros pensábamos en el esfuerzo. En fin… una serie de contradicciones con todo lo que

nosotros habíamos aprendido en nuestros hogares» [E-Gt17-SO-11.08.2011:10]. «Nosotros no estábamos de acuerdo con todas esas ideas de las que hablaban los dirigentes "comunistas"; eso era una serie de contradicciones con "lo nuestro". Nosotros éramos deístas, nacionalistas, respetuosos de la familia, de la tradición y de la religión; nosotros considerábamos un valor la propiedad privada y creíamos en el esfuerzo y no en la expropiación. Nosotros queríamos una Guatemala completa para nosotros [las élites oligarcas que afirmaban su blancura y origen señorial] [11]. Cuando llegábamos a los pueblos, nosotros hablábamos precisamente del respeto a la familia, del respeto a la propiedad privada, del respeto de las tradiciones, del respeto y el temor a Dios. Hablábamos de lo que la gente realmente había aprendido desde chicos, respeto a los mayores, respeto a su familia, respeto a la autoridad. Sobre todo, nosotros hablábamos de *la autoridad* como un elemento muy importante para preservar el orden social. Así, nuestro movimiento fue creciendo» [11].

Fotografía No. 8
El Ejército de Liberación Nacional en el Nororiente



Fuente: Fondo Taracena/Fototeca Guatemala/CIRMA.

2. Los argumentos de la participación de los nororientales en el MLN

Si bien existe una amplia producción intelectual que documenta con elocuencia las distintas maneras en que el Gobierno de Estados Unidos brindó asesoría política, respaldo financiero y militar al Movimiento de Liberación Nacional (Jonas, 1994; Cullather [1999], 2002; Streeter, 2000, 2002; Holden, 2004; Brett, 2003; Gleijeses, 2005, entre otros), en este capítulo nos interesa comprender *por qué* las élites y algunos campesinos nororientales (originarios de Zacapa y Chiquimula) enarbolaron la bandera anticomunista, se aliaron a las élites de la ciudad capital y participaron beligerantemente en este movimiento pro oligárquico y pro norteamericano. Según Sisniega Otero (2011)[102], el Ejército de Liberación Nacional tenía un movimiento fuerte en el nororiente, el cual estaba encabezado por Mariano Sánchez y un importante grupo de ganaderos de Chiquimula y Zacapa. El grupo de Chiquimula estaba dirigido por los hermanos Pacheco de Esquipulas; el grupo de Zacapa por los Ordóñez y el grupo de Gualán por los Sánchez. Otros influyentes dirigentes anticomunistas del nororiente eran Carlos Thompson[103] y Herman Kaufman[104] y Rogelio Olavarruet[105]. «Los orientales fueron los más activos en el movimiento. Precisamente –afirma Otero- la mayor parte de nuestra tropa era de nororiente, todos eran familiares y amigos» [E-Gt17-SO-11.08.2011].

Conocer las razones políticas que tuvieron las élites regionales para adscribirse a este movimiento de la derecha política es un asunto crucial para entender no solo las tendencias políticas predominantes en el nororiente de la segunda mitad del siglo XX, sino el papel que jugaron los nororientales en la formación de Estado de Guatemala en el contexto de la Guerra Fría. En este caso nos interesa entender las diferentes maneras en que la influencia de asesores, inversionistas y representantes de las empresas multinacionales estadounidenses (con quienes las élites nororientales interactuaban) contribuyó a fortalecer su perspectiva autoritaria y anticomunista.

Algunas de las explicaciones que nos ofrecieron los viejos anticomunistas o *emelenistas* del nororiente, cuando los entrevistamos entre el 2011 y el 2012 respecto a su participación en el Ejército de Liberación Nacional son las siguientes:

102 Entrevista, trabajo de campo Matilde González.
103 Finquero de Gualán, originario de Estados Unidos y excombatiente de la Segunda Guerra Mundial.
104 Finquero/cafetalero de Gualán, originario de Alemania.
105 Militar Zacapaneco que recibió entrenamiento en Estados Unidos.

Primero. La defensa de la propiedad de la tierra y su estatus patrón

Hasta ahora, uno de los grandes silencios historiográficos respecto al nororiente había sido la conflictividad étnica y la disputa por el territorio que se estableció entre las élites ladinas (terratenientes medios y/o comerciantes) que gobernaban las cabeceras municipales y departamentales de la región y los pueblos ch'orti', cuyos ejidos fueron paulatinamente enajenados por las autoridades de los diferentes gobiernos municipales. Ahora bien, la mayoría de los hombres y mujeres ch'orti' de avanzada edad que entrevistamos entre el 2011 y el 2012, aludieron a la conflictividad por la tierra que se vivió durante el periodo de la Reforma Agraria y la inmediata represión por parte de aquellos potentados ladinos que *fueron a traer la guerra a Honduras* y participaron en el Ejército de Liberación. «En tiempo de este Carlos Castillo Armas –expresa un campesino ch'orti'– fue que mataron a la gente».

> «Eso fue tremendo porque *los castillistas* eran de Jocotán y [del] mero Chiquimula, eran ladinos de Chiquimula. Ellos se fueron a juntar con Castillo Armas a Honduras. De Honduras venían *los castillistas*, pero eran puros chiquimultecos y de la capital. Era como la medianoche cuando entraron por Jocotán. Yo estaba en Jocotán, cuando dijeron que ya venía Castillo Armas, y empezó la guerra […]. Se oían los balazos. Era de noche, yo salí para el monte. A mucha gente mataron porque [se] metieron a pelar sus terrenos, por eso los mataron. En tiempos de Castillo Armas fue duro. ¡Ah fue tremendo! Yo vi a *los castillistas*. Sí, aquí pararon. Aquí estaban buscando a los cabecillas de esta aldea. ¿Quién es el cabecilla de aquí? –decían–. Aquí estaba chillado [fichado] el finado Gabino Morales, Candelario Ramírez y Polinario Ramírez, mi tío. Ellos eran miembros de ese comité agrario […]. Pero cuando llegó [Castillo Armas] se fueron al monte […], ellos se libraron todavía. Solamente a Saturnino lo mataron aquí. Don Saturnino era de la aldea La Mina, aquí en la cumbre Roblar. Los demás se fueron huyendo, ya no están adentro de la aldea, y los policías decían ¿adónde se fueron? Pero que […] aquí ya no están, qué tiempos salieron» [E- Ch-AGyCR-19.01.12].

> «El terreno que habíamos conseguido con Arbenz se perdió. Se quedó en poder de la municipalidad, pero ¿qué hizo el alcalde? Lo vendió. Ahora es un terreno privado. Nuestro comité agrario se perdió. Ahí estuve yo. Pero a todos los que estuvimos ahí los estaban matando. Sí, mataron mucha gente de Camotán y de Jocotán. Ah, son bastantes los que mataron cuando vino don Chilo Carrera. El Chilo Carrera era un comisionado. Él vino de Honduras, él era de los puros de Castillo Armas, del MLN. El era un ladino del pueblo, si pues, gente de aquí que fueron a traer la guerra a Honduras. Él era un comisionado militar de Jocotán. Él se fue a Honduras y entró con el Ejército de la Liberación […]. Cuando regresaron de Honduras ya venían (sic) más mala esa gente. Ellos son los que desde el año 1956 empezaron a gobernar el pueblo» [E- Ch-AGyCR-19.01.13].

Estas memorias ch'orti' fueron las que nos llevaron a revisar los expedientes del Decreto 900 correspondientes al departamento de Chiquimula y Zacapa, cuyo análisis presentamos anteriormente. En estos expedientes constatamos que la Reforma Agraria, efectivamente, afectó el núcleo de las relaciones sociales establecidas entre patronos y mozos, ladinos e indígenas en el nororiente, empoderó a los campesinos y les ofreció un amplio marco legal para defender sus derechos territoriales y laborales. En otras palabras, el conjunto de la legislación agraria y laboral rompió el viejo orden provinciano, poniendo en tela de juicio, no solo la legalidad de buena parte de la propiedad de la tierra en manos de los potentados ladinos de la región, sino su legitimidad como patrón y autoridad local. Los ch'orti' son enfáticos al decir que con el gobierno de Arévalo «terminó la esclavitud» y por fin tuvieron libertad para moverse y trabajar en lo propio, mientras que el gobierno de Arbenz les permitió reclamar su derecho a la tierra. No obstante, también señalan que este fue un tiempo muy breve y de mucha confusión. También fue el preludio de un tiempo de persecución y violencia, en el que sus antiguos contendientes ladinos se reposicionaron en el poder local, les persiguieron y reprimieron durante varios años.

Por su parte, los viejos militantes del nororiente que participaron en el movimiento liberacionista recuerdan que las familias acomodadas de la región vivieron con preocupación y rabia la aplicación de la Reforma Agraria, en tanto que sus medianas y pequeñas propiedades estaban siendo objeto de expropiación (no tanto por su extensión, sino por los mecanismos que ellos habían empleado para su adquisición). Pero, sobre todo, para los hombres de estas familias constituía un verdadero agravio el que «aquel *indial* bajara de las montañas y se sintiera con el derecho de demandar sus tierras, botar los cercos, ocupar su finca y destazar su ganado» [E-GZ-MA, 03-05-2013]. Para ellos era inadmisible el irrespeto de sus antiguos mozos, quienes en tiempo de la Revolución se «sintieron a sus anchas» y con derecho a exigir como propia la tierra que les pertenecía, poseían y/o arrendaban, además, tenían la osadía de exigir un salario que contravenía el orden y la economía señorial que sus familias venían disfrutando desde el período colonial. Un miembro de la élite chiquimulteca que vivió muy de cerca este proceso, expresa:

> «Zacapa y Chiquimula son pueblos conservadores; entonces, cuando viene un gobierno que ofrece que lo va a cambiar todo, la gente reacciona pronto. Y en Chiquimula sucedió algo que en todo oriente es delito, o mejor dicho, es pecado: la gente de la Revolución dijo "te vamos a tocar tu propiedad". La respuesta fue: "¿pero qué propiedad? Si en Chiquimula ya no hay tierra". Además, gran parte

> de la tierra es árida, no desértica, pero sí muy árida. La buena tierra ya está supra dividida. Y viene la Revolución y dice: "¡te vamos a quitar tu tierra!". Ese fue un problema gravísimo. En oriente no hay grandes extensiones de tierra cultivable. El valor de una manzana de tierra cultivable, de esas tierras que le[s] llaman vegas y que están a las orillas de los ríos, es carísima. Y no solo carísima, sino muy apreciada. En oriente, cuando una gente tiene unas 10 manzanas de tierra cultivable, ya se le considera rica, ya es terrateniente, y piensa y actúa como tal» [E-Gt20-RP-02.2012:19-20].

En expedientes de tierra correspondientes a Zacapa y Chiquimula constatamos que la mayoría de denuncias que hicieron las Uniones Campesinas ch'orti' giraron en torno al proceso ilegal a partir del cual los ladinos habían privatizado sus ejidos y/o tierras de comunidad; por consiguiente, reclamaban la devolución de aquellas parcelas que ellos continuaron usando en calidad de arrendatarios. También hubo algunas denuncias de tierras de una comunidad por parte de algún comité agrario local de otra aldea, para conseguir su adjudicación en parcelas individuales. Esto último provocó enfrentamiento entre los mismos campesinos. Tal es el caso de la comunidad de Churischán, San Juan La Ermita, cuyas tierras estaban siendo disputadas por un comité agrario de otra aldea, por lo que se registraron enfrentamientos entre ambas. Posteriormente, los campesinos de Churischán se involucraron en las filas de los liberacionistas.

Segundo. La defensa del orden oligárquico, provinciano y patriarcal

Durante la primera mitad del siglo XX, en la mayor parte del país la vida cotidiana se organizaba en términos muy diferentes a aquellos planteados por el Estado liberal. Particularmente, en aquellos espacios en donde predominaron las haciendas ganaderas, las plantaciones de café o los enclaves del banano se construyeron amplios márgenes de soberanía local o provinciana; al mismo tiempo, un intenso tráfico de influencias hacia el Estado central. En estos territorios gobernaban finqueros, caciques, militares y autoridades regionales a través de entramados de relación jerárquica, que respondían a los intereses de la política finquera y provinciana.

A mediados del siglo XX, el espacio político del nororiente aún estaba dominado por un grupo de familias ladinas que reivindicaban su ascendencia española y su identidad ganadera. Estas familias consideraban como un derecho suyo gobernar a los ch'orti' y mestizos pobres de su región. Al rechazar sus orígenes ch'orti' y cualquier afirmación de igualdad o comunidad entre ellos y esos grupos

subalternos, la élite Nororiental reivindicó su pureza racial y superioridad cultural respecto a los indígenas y ladinos pobres del Nororiente, pero también respecto a las otras élites regionales del país.

Para administrar este territorio, los diferentes gobiernos centrales siempre se vieron obligados a buscar aliados entre las familias de la élite regional, quienes gobernaban su territorio con un amplio margen de soberanía, equivalente a lo que Daniel Nugent (2001:120) definió como «soberanía aristocrática», la cual se fundamentó en la afirmación de las distinciones de tipo racial (indio, mestizo, blanco), de género (sexo femenino o masculino), de ascendencia (española o indígena), y de tenencia de la tierra (hacendado o campesino), que segregaron a la población en categorías sociales «fijas» y «heredadas» a partir de las cuales se intentaba prescribir los cursos de vida de la gente que las ocupaba. Por ejemplo, los espacios de poder y autoridad, por lo regular, se hallaban reservados para los hombres de las familias antiguas del nororiente (de pretendida ascendencia española o extranjera), quienes a la vez concentraron la mayor parte de las oportunidades y beneficios que producía su dominio en todas las esferas del mundo provinciano (económica, política, militar, jurídica, religiosa y cultural).

Fotografía No. 9
Militantes anticomunistas en Zacapa y Chiquimula



Fuente: Fondo Taracena/Fototeca Guatemala/CIRMA.

Antes de comprender a fondo la ideología comunista y, por consiguiente, la anticomunista, este grupo defendía los valores conservadores que le permitían en pleno siglo XX continuar usufructuando sus pretensiones y privilegios señoriales. En este caso, estamos hablando de *la agencia política* de un sector de la élite cuya visión de mundo era provinciana y practicante de un catolicismo vigilante del orden patriarcal, la familia, la tradición y las costumbres sobre las cuales se había organizado el orden colonial. Un viejo militante del MLN explica cuáles fueron aquellos principios del movimiento anticomunista que hicieron eco en el pensamiento de las élites nororientales: «Mire, e*l movimiento fue simpatiquísimo* porque era contra el comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo está contra Dios, el comunismo estaba contra la familia, el comunismo está en contra de la autoridad de los padres. Ahora ya no muy se ve eso, pero en los pueblos de aquella época la autoridad de los padres estaba por encima de todas las cosas. En todos los departamentos del oriente los niños llegaban *con los brazos cruzados y la cabeza agachada* para que los mayores los saludaran. Era un mundo totalmente distinto y nosotros respetábamos al Dios que ellos respetaban, respetábamos la religión. Porque no solamente es Dios, sino la religión. Y en esa época el catolicismo era totalmente fuerte en Guatemala. También respetábamos a los mayores, a la familia, a la propiedad privada. Entonces, todos ellos tenían esos mismos valores, eran cinco valores nada más y esos cinco valores eran suficientes para unirnos y para trabajar» [E-Gt17-SO-11.08.2011:16-17].

Para las familias acomodadas de esta sociedad, la noción «moderna» o popular de soberanía nacional que promulgaron los dos gobiernos de la Revolución estaba apoyada en preceptos diametralmente opuestos a los del orden finquero y provinciano que ellos habían establecido. La noción democrática del Estado revolucionario, en teoría, rechazaba cualquier forma de *privilegio inherente* como fundamento de la sociedad. En contrapartida, abogaba por una comunidad de ciudadanos semejantes, con igualdad de derechos y un gobierno redistributivo que mediara la desigualdad social y el desequilibrio de poder sobre los cuales se asentó el orden oligárquico y provinciano. Para los patriarcas del nororiente, acostumbrados a gobernar «su territorio y su gente» con amplios márgenes de autonomía, los gobiernos de la Revolución cometieron la osadía de intervenir en aquellos asuntos que históricamente habían sido de su competencia, tales como la administración y distribución de las tierras de sus municipios, y la mediación entre patrones y mozos, alcaldes y clientela política, y no digamos entre hombres y mujeres, y entre padres e hijos. En esta sociedad provinciana, las

reglas eran claras, la autoridad era el hombre, el padre y patrón, y se obedecía sin razonamientos de ninguna índole. Ellos siempre habían estado bien así y no había por qué aceptar que vinieran otros (instituciones estatales, partidos políticos u organizaciones sociales) a irrumpir en el orden y la paz de sus pueblos.

Fotografía No.10
Niñas chiquimultecas simpatizantes del MLN



Fuente: Fondo Taracena/Fototeca Guatemala CIRMA.

Bajo el lema «Dios, Patria y Libertad», las élites provincianas con pretensiones oligarcas le apostaron a la instauración de un régimen anticomunista que les permitiera reconstruir sus viejas alianzas y reprimir a aquellos que consideraba sus «enemigos». Dentro de estas alianzas, tres fueron muy importantes: la vieja guardia del Ejército, los empresarios y funcionarios del Gobierno norteamericano, y la jerarquía de la Iglesia católica. De hecho, el arzobispo Mariano Rossell y Arellano, un chiquimulteco anticomunista, se identificaba abiertamente con este movimiento y ejerció una decisiva influencia en la definición de la nueva agenda estatal.

Tercero. Activar sus redes y mecanismos de influencia en el Estado

Luego de varias décadas en las que había prevalecido la influencia política de las élites del occidente altense y/o las élites de ciudad de Guatemala en la administración del Estado, un elemento no menos importante de la adscripción de las élites nororientales al movimiento liberacionista fue la oportunidad que éste les brindaba para acceder a la cúpula del poder estatal. Además, necesitaban recuperar el poder en todos aquellos municipios en los que los dirigentes indígenas o campesinos se organizaron en los comités agrarios y/o en los partidos de izquierda, y habían asumido la administración de sus municipios.

A partir de su adscripción a las filas del liberalismo, los anticomunistas del nororiente establecieron formas *sui generis* de dictadura local en sus propios municipios, y manejaron con habilidad sus contactos con el Ejército y los funcionarios de la institucionalidad estatal. Un caso emblemático de este proceso es el de Mariano Sánchez, quien gobernó de forma directa e indirecta el municipio de Gualán por varias décadas. Según varias personas de este municipio, Sánchez era jefe de uno de los más importantes grupos paramilitares del nororiente, ejercía un gran poder toda la región y decidía quien sería el alcalde de su pueblo en cada periodo electoral. Un gualanteco contemporáneo de Mariano Sánchez explica:

> «En el tiempo de Mariano Sánchez, él era el que ponía y quitaba al alcalde. Yo recuerdo que en ese tiempo [60 y 70], don Mariano Sánchez decía: "¡Vos vas a ser el alcalde!" o "¡Vos no sos alcalde!" Si el gobernador no cumplía con las órdenes que le daba don Mariano, lo quitaba a los ocho días y… ¡punto! No había vuelta de hoja. Cualquier papel o carta que don Mariano le diera a una institución no era una simple recomendación, era una "orden". A la casa de don Mariano, aquí en Gualán, venían las altas autoridades del gobierno. A don Mariano lo visitaba

> el general Carlos Arana, Lucas García, Kjell Laugerud y todos los generales que gobernaron en esa época. Incluso, recuerdo al capitán Anastasio Somoza [Presidente de Nicaragua], él venía a jugar gallos aquí al municipio. Yo recuerdo ese tiempo, ahí donde está la casa de doña Juana Flores, ahí en ese lugar venían a jugar (sic) gallos. Había un palenque de gallos, allí venían dos carros blindados del Banco de Guatemala, ahí traían el dinero para apostar. Uno de patojo se metía ahí al palenque a ver cuando se mataban los gallos, pero no era tanto por ir a ver cómo se mataban en el palenque, sino por ir a ver a esas personalidades» [E-G9-JM-11.09.2011:13].

Cuarto. La defensa de sus intereses comerciales

Un sector de la élites nororientales que participó en el Movimiento de Liberación Nacional defendía abiertamente los intereses de las empresas estadounidenses que operaban en la región, particularmente los de la Ufco y la Irca, en tanto que sus principales circuitos de producción y comercio (agropecuarias, almacenes, tiendas de consumo, comercio de ropa para los trabajadores de la plantación, etc.) y/o oportunidades de empleo como oficinistas, técnicos y cuadros de mando medio dependían de dichas empresas. De hecho, varias de las personas de entre 65 a 85 años que tuvimos la oportunidad de entrevistar en el trabajo de campo en el segundo semestre de 2011 y primero del 2012, hicieron referencia a un periodo de su vida en el que ellos y/o sus padres vivían, trabajaban o viajaban con frecuencia a la bananera por razones laborales o comerciales.

Por ejemplo, muchos de los comerciantes de Gualán, Zacapa, Chiquimula y Teculután regularmente viajaban en tren a Izabal a comprar mercancías importadas de Estados Unidos en los comisariatos de la bananera, para luego revenderlas en un almacén o tienda ubicada en una de las cabeceras departamentales de la región. Don Enrique Paz, miembro de las familias más acomodadas del nororiente, explica:

> «Aquí en Gualán circuló el dólar como una moneda común y corriente en los años 30 y 40. Circuló no solo el billete de dólar, también monedas; aquí era muy común ver los dólares. Tú comprabas con un quetzal como comprabas con una moneda de dólar, había una mezcla del estado económico y del tipo de trabajo con la frutera. Nosotros compartíamos haciendo negocios a través de los comisariatos de la frutera. Los comisariatos eran unas tiendas que vendían diversos productos americanos y productos que había en el país. La gente de ese tiempo tenía la mentalidad de que el producto americano era mejor. Ahora se puede ver que hay grandes empresas nuestras que nos presentan productos de calidad, pero si te ponen a la par un producto americano… hasta la fecha, uno

> elige el producto gringo. Ahora, imagínate cómo era antes. Mi mamá tenía tienda y viajaba dos veces por mes a Quiriguá, ese era el lugar más próximo donde se hallaba uno de esos comisariatos. En el comisariato se hallaba buen producto. Mi mamá traía a su tienda todo ese arsenal para comercializar, traía juguetes, conservas, ropa, de todo... hasta vestidos, blusas, ropa interior americana, pero excelente; no podemos decir lo contrario» [E-G3-EP-30.06.2011].

Mientras que, por su parte, otros comerciantes de Chiquimula y Gualán viajaban a las estaciones del tren donde estaban las plantaciones bananeras para vender sus productos a los trabajadores, principalmente telas, camisas, pantalones de confección artesanal.

> «Recuerdo bien [nos dice Víctor Robles (2011)] que en los años 50 nos íbamos con mi papá en el tren hasta Montúfar, que era una estación del ferrocarril en la bananera. Todavía tengo presente la lámpara Coleman llena de mosquitos […]. También recuerdo a mi papá, con una maleta llena [de] cortes para hacer pantalones y vestidos, era un gran rimero de ropa [...]. El día que les pagaban a los trabajadores de las fincas todos llegaban a comprar. Como a las 9 o 10 de la noche llegaba la gente a comprar, y mi papá vendía todo. Ellos le pagaban con billetes y monedas americanas» [E-Z5-VR-27.06.2011:10].

En Guatemala, el monopolio de los ferrocarriles estuvo unido a la historia de la International Railways of Central America (Irca) o Railroad Company en 1912. Para 1925, la United Fruit Company ya poseía el 51% de las acciones de la Irca que para entonces controlaba 887 millas ferroviarias entre la Costa Atlántica, Ciudad Guatemala y El Salvador. El contrato ejercido sobre las líneas férreas en Centroamérica permitía a las compañías bananeras disponer de transporte barato y eficiente para los productos que exportaban e importaban (Posas, 1993:135). La compañía bananera era propietaria de los muelles o, en el peor de los casos, mantenían control sobre los existentes. También era propietaria de los buques que transportaban los bananos que exportaban y las mercancías que importaban para surtir la red de comisariatos que tenían en los pueblos de la compañía o en los centros urbanos de la costa y *bocacosta* del Atlántico. De esta manera, la bananera mantuvo el monopolio del comercio y el transporte de carga y pasajeros en la región, con lo cual se aseguró el control de la circulación de mercancías y personas por los circuitos comerciales del Atlántico.

Desde el punto de vista de los comerciantes zacapanecos que entrevistamos, a partir de la construcción del Ferrocarril de Norte, ellos vivieron uno de los periodos más prósperos de su economía. En ese periodo, el comercio que circulaba

por Zacapa llegó a ser más fuerte que el de Chiquimula. Los comerciantes de Zacapa podían ir y volver en el mismo día hasta Puerto Barrios o Morales, que era donde estaban los comisariatos de la bananera, y regresaban con toda clase de productos para revender. En los años 50, el transporte ferrocarrilero era clave para el dinamismo económico de la región, y la estación de Zacapa se convirtió en el centro de operaciones de las redes comerciales del nororiente, allí se encontraba el mejor hotel de la región.

Al mismo tiempo, en Zacapa había un beligerante movimiento laboral. Allí estaba una de las filiales más grandes del Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero (Samf). Los miembros del Samf eran arbencistas y tenían contacto y apoyo de los más altos dirigentes de la Revolución. Varias de las personas que entrevistamos recuerdan haber participado en los mítines de los antiguos líderes sindicales que llegaban a Zacapa. Rubén Rosales, exalcalde de Zacapa, recuerda haber escuchado en su ciudad natal a Víctor Manuel Gutiérrez, Carlos Manuel Pellecer, Carlos Manuel Fortuny, a los «tres Manueles», como los llamaban, y a otros líderes sindicales. Eran «incendiarios». «Yo pienso que esa gente fue una generación […] muy, muy especial; entonces ellos lograron [agenciarse] la simpatía del pueblo, pero la gente de poder de aquí de Zacapa, no, no estaba de acuerdo con eso» [...] [E-Z1-RRO-02.07.2011].

Además, la *Fruit* amenazó a los sindicatos y al Gobierno de Guatemala, advirtiendo que cualquier aumento en los costos laborales haría que se fuera del país. Walter Rurnbull, vicepresidente de la compañía, dio un ultimátum a Arbenz: a menos que el Gobierno garantizara que no habría incrementos salariales durante tres años, y eximiera a la compañía de someterse al Código Laboral, la United Fruit Company interrumpiría sus operaciones. Para probar su determinación, suspendió el transporte de pasajeros a Estados Unidos (Cullather, 2002:19). De esa cuenta, entre 1951-1954, los empleados y representantes de la bananera y el ferrocarril frecuentemente amenazaban a los nororientales que si el Gobierno afectaba sus propiedades y los sindicalistas de la Sanf persistían con sus demandas laborales, la compañía se iría de la región, el ferrocarril suspendería el servicio de transporte, la gente se quedaría sin trabajo, y ya no habría más dinero [E-Z5-VR-27.06.2011:10]. Ante esta perspectiva, expresa un zacapaneco que vivió estos acontecimientos, casi toda la gente importante de Zacapa se metió al movimiento anticomunista. La gente de dinero tenía cifrada las esperanzas de que Zacapa siguiera siendo un pueblo próspero gracias al ferrocarril y la

United Fruit Company, que trabajaban aparejados. Según ellos, los sindicalistas del Samf se habían vuelto muy arrogantes y cada día le pedían más a la empresa. Ellos veían esa situación y decían: «De tanto ir el agua al cántaro, que termina quebrándose». En otras palabras, ellos pensaban que con tanta exigencia de los trabajadores, las empresas se irían de la región y la economía del nororiente se vendría abajo [E-Z1-RRO-02.07.2011].

Para los hombres pudientes de nororiente cuya vida había transcurrido bajo la dictadura de Ubico y el régimen de trabajo forzado que ésta había impuesto a los indígenas y campesinos pobres -para que éstos sirvieran a los finqueros de la región-, las demandas laborales de los obreros y campesinos por obtener un salario mínimo y mejores condiciones de trabajo eran incomprensibles y denotaban *la insolencia de los de abajo*. Ponerles un alto a semejantes pretensiones era un asunto político de primer orden. Desde su perspectiva oligárquica y provinciana, entendían las amenazas de las empresas norteamericanas y les preocupaba el futuro de sus negocios, por lo que optaron aliarse con éstas y adscribirse a las filas del movimiento anticomunista.

Fotografía No.11
Ejército de Liberación Nacional en el Ferrocarril del Norte



Fuente: Fondo Taracena/Fototeca Guatemala/CIRMA.

Quinto. La identidad miliciana del Ejército de Liberación

La participación de los nororientales en el Ejército de Liberación Nacional no era ajena a su orgullo y larga tradición miliciana. Su estructura y lógica de organización tampoco era distinta a las viejas milicias coloniales y/o cada uno de los ejércitos caudillos que organizaron durante las contiendas armadas que definieron el proceso de formación del Estado desde el nororiente. Baste recordar las milicias de Los Montañeses [1835-1838], Los Lucios [1846-1851], Los Nufios [1848-1849], Los Remicheros [1871-1873], Los Castillistas [1897 y 1906][106], entre muchos otros. Lo cierto es que durante buena parte del siglo XIX y primera mitad del XX, las contiendas entre distintas facciones de la élite fueron continuas, y a menudo violentas. Particularmente, porque el ascenso al poder de una de las facciones en lucha significaba la persecución de sus «enemigos», su empobrecimiento, exilio o muerte. Por consiguiente, cada facción formaba su propio ejército miliciano y peleaba despiadadamente a fin de proteger y promover sus propios intereses.

Fotografía No. 12
Milicias y ejército liberacionista



Fuente: Fondo Taracena/Fototeca Guatemala/CIRMA.

106 Movimiento anti dictatorial dirigido por el maestro José León Castillo, para derrocar a Manuel Estrada Cabrera en 1906.

En la práctica, el *servicio en armas* otorgó a las élites provincianas acceso a los círculos gubernamentales, conexiones políticas, financieras y sociales. Los oficiales que integraban estas fuerzas milicianas tendían a estar integrados por los comerciantes, finqueros o ganaderos más ricos y socialmente distinguidos de sus pueblos. La formación de estos grupos armados dependía de la orientación, financiamiento y jerarquía de élites provincianas. De este grupo provenían los oficiales, las armas y el dinero para su entrenamiento y manutención. Los grados más altos solían reservarse a los personajes más adinerados, sin que necesariamente hubieran hecho carrera militar[107]. A través del *servicio en armas,* las élites provincianas fueron adquiriendo conciencia de una existencia propia, ensancharon su poder y negociaban importantes espacios de soberanía regional con el gobierno central. Asimismo, gozaban del derecho de usar el poder y la fuerza en defensa de lo que ellos consideraban que eran prerrogativas legítimamente suyas, debido a su condición de vida, la cual disfrutaban por derecho de nacimiento. Nadie, ni siquiera el propio Estado, tenía derecho de interferir en sus privilegios (Nugent, 2001:122). No obstante, era inevitable que las diferentes facciones de la élite intervinieran continuamente en la habilidad de las demás para ocupar puestos en el gobierno.

Durante más de siglo y medio, Guatemala fue una nación fragmentada. El gobierno central nunca fue capaz de controlar su territorio nacional directamente, por lo tanto, se vio obligado a seleccionar a caciques o a un segmento de las élites provincianas con el fin de actuar en su nombre. En este proceso, el régimen central trataba de dar una imagen de solidez y coherencia; por consiguiente, trataba de negar u opacar a aquellas facciones de las elites oligarcas que tenían un amplio acceso al poder y a las armas en la escala regional. El resultado fue una sucesión de contiendas armadas a través de las cuales las diferentes facciones luchaban entre sí por el control de la institucionalidad estatal en el espacio regional y/o nacional. Antes de la Revolución de Octubre no existían los medios institucionalizados y no violentos a través de los cuales una facción de la élite pudiera ganar el control del Estado y que las demás facciones lo consideraran como legítimo.

107 De este hecho se derivó el fenómeno del «generalato», que pervivía en los años 60-70 del siglo XX.

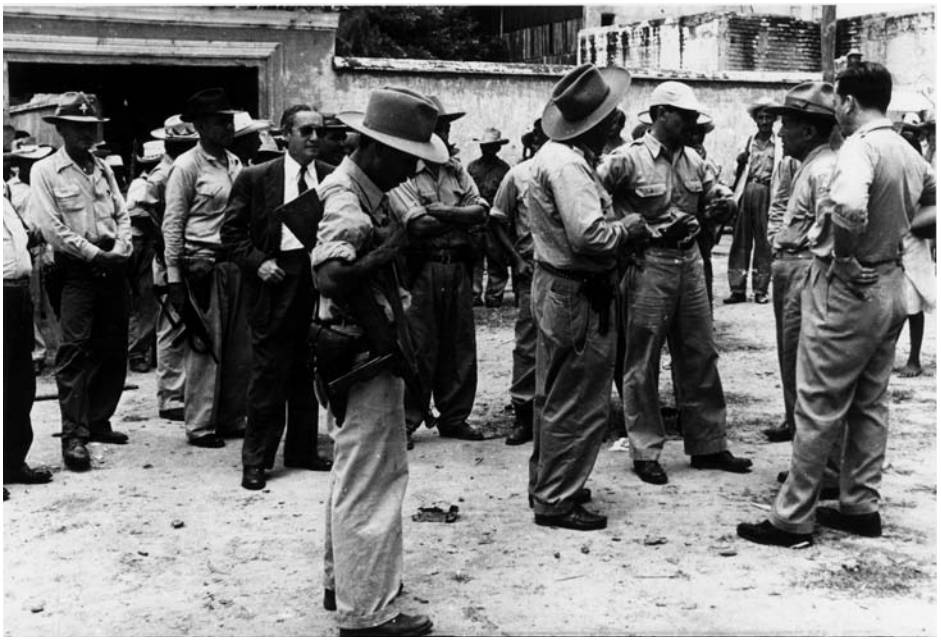
A diferencia de los clásicos ejércitos milicianos, cuyos recursos provenían casi exclusivamente del financiamiento de los potentados locales, el Ejército de Liberación Nacional recibió financiamiento, armamento y equipo de Estados Unidos. Además, este estaba comandado por algunos militares y estudiantes del movimiento anticomunista en ciudad de Guatemala. Este ejército contó con recursos anteriormente desconocidos por las milicias provincianas: la guerra psicológica (a través de los medios de comunicación escrita y radial, principalmente, a través de la Radio Liberación), el cabildeo y las presiones políticas que hiciera el Gobierno de Estados Unidos; y los tres aviones *gringos* de la Segunda Guerra Mundial que bombardearon la región. Los efectos mediáticos de estos recursos contribuyeron en buena medida al éxito de «la liberación».

Sin embargo, en el terreno y durante muchos años, fueron los potentados locales en representación del Ejército de Liberación Nacional y/o el Estado de Guatemala, quienes se encargaron de perseguir a todos aquellos nororientales que habían participado en los partidos de izquierda, en el movimiento campesino, en los sindicatos ferrocarrileros o en la institucionalidad de los gobiernos de la Revolución. Durante la Contrarrevolución, explica un catedrático chiquimulteco, este movimiento se consolidó y formó una estructura paramilitar, política y económica muy poderosa en la región [E-Ch27-FM.18.06.2012]. Todos aquellos nororientales que *los liberacionistas* consideraban «enemigos» vivieron un intenso periodo de persecución, encarcelamiento o muerte. Mientras que una de las intelectuales más reconocidas del nororiente, cuyo padre simpatizó con la administración de Arbenz y luego fue encarcelado junto a sus tres hijos, al referirse a la persecución que ellos vivieron durante este periodo expresa:

> «A mí me da mucha rabia, porque siempre han marcado al oriental como "anticomunista". Pero no es así. Aquí somos muchas las personas que pensamos diferente. Por decirle algo, en mi casa obligadamente mi mamá tuvo que recibir a una parte del Ejército de Liberación, porque ella tenía pensión. Mi mamá no quería porque se acababan de llevar preso a mi papá y a mis hermanos ¿Cómo iba a querer ella? Pero de una vez le pusieron la ametralladora en el pecho y le dijeron "¿sí o no?" Entraron [en] la casa y ella tenía que darles de comer. Pero así sucedió en muchas casas […]. Esa época fue tremenda, fue muy dura. Solo de acordarme se me enciende la sangre […]. A mi papá y a mis hermanos se los llevaron presos. A ellos no los mataron porque mi mamá era sobrina de monseñor Mariano Rossell y Arellano. En ese tiempo él era el arzobispo de Guatemala y tenía influencia sobre los liberacionistas. O sea que el arzobispo de

Guatemala era tío de mi mamá. Entonces, ella le pidió que la ayudara a salvar a mi papá y a mis hermanos. Él mandaba telegramas donde decía: "¡Cuidadito tocan a la familia […]!". Pero ellos siguieron presos, el único que salió fue mi hermano que era menor de edad, pero mis otros tres hermanos y mi papá siguieron presos y nosotras con la angustia porque ya habían matado a otros conocidos. Mi mamá gastó dinerales en telegramas […]. Telegramas para unos, telegramas para otros, el monseñor Mariano Rossell Arellano mandaba los telegramas diciendo: "Cuidado tocan a esta familia […]". Al final no los mataron» [E-Ch29-P-19.06.212:28-29]. «A toda nuestra familia la marcaron como "comunista". En esos años yo sufrí en el INSO, porque mis compañeras me decían "la comunista" y no me hablaban. Sufrimos en todas partes: en el instituto, en la calle, en [la] iglesia. Mi mamá nos mandaba al grupo de hermanitos a la iglesia y ahí nos decían: "¡Ahí vienen los hijos del comunista!"» [E-Ch29-P-19.06.212:26].

Fotografía No. 13a
La ocupación de Chiquimula



Fuente: Fondo Taracena/Fototeca Guatemala/CIRMA.

Fotografías No. 13b y 13c
La ocupación de Chiquimula



Fuente: Fondo Taracena/Fototeca Guatemala/CIRMA.



Fuente: Fondo Taracena/Fototeca Guatemala/CIRMA.

Tras la toma del pueblo de Chiquimula y las negociaciones con los militares del destacamento de Zacapa, el 30 de junio de 1954, el Ejército de Liberación marchó en posición triunfante a ciudad de Guatemala. Estando allí, luego de que los liberacionistas insultaran a varios cadetes de la Politécnica, el 2 de agosto de ese mismo año los oficiales jóvenes del Ejército se sublevaron y atacaron sus campamentos en la ciudad. El Ejército no se comprometió en esta batalla que duró tres días, en que murieron más hombres de los que habían muerto en la misma invasión. La mediación del arzobispo Rosell y Arellano obligó a los cadetes que estaban en una posición de fuerza a bajar sus armas, una vez que sus oponentes se hubieran marchado a la estación del tren y salieran de ciudad de Guatemala rumbo al nororiente (Buttrey, 1967:21). Varios estudiantes fueron encarcelados y muchos otros salieron al exilio, luego de que el Gobierno cerrara por un año la Escuela Politécnica. Una vez más, el Ejército fue tomado por los liberacionistas y la injerencia de Estados Unidos se hizo sentir a través del apoyo en armamento, equipo y entrenamiento militar.

El hecho de jugar un papel subalterno frente a las fuerzas norteamericanas y las milicias improvisadas del nororiente provocó en los oficiales nacionalistas un sentimiento de frustración. Esta frustración se revirtió en una particular forma de nacionalismo militar, el cual se expresó cuatro años después con el alzamiento de los oficiales de la Guardia de Honor en 1960. Mientras que el sector más conservador de los oficiales de línea se acomodó a la situación, explotando al máximo toda la ayuda militar disponible. De alguna manera, la batalla del 2 de agosto definió el curso de las contiendas político-militares entre el sector nacionalista del Ejército y el sector que le apostó al anticomunismo y se alió al Ejército de Liberación Nacional, cuyas bases formaron los grupos paramilitares o escuadrones de la muerte que operaron desde el nororiente y ciudad de Guatemala en los años 60 y 70.

En síntesis, a su regreso al nororiente, el Ejército de Liberación nunca se desarmó. Formalmente se desmovilizó, y Castillo Armas retomó el mando del Ejército nacional. Pero en la práctica, sus dirigentes continuaron armados, con sus contactos activos, y participaron en todas aquellas acciones armadas que consideraban convenientes. Según algunos de los viejos militantes del MLN, el Ejército de Liberación funcionó como una milicia privada al servicio del Ejército, los partidos de la ultraderecha política y los potentados locales del nororiente. Asimismo, participó activamente en las estructuras paramilitares de la contrainsurgencia y en buena parte de los golpes de Estado protagonizados

por el Ejército en el contexto de la Guerra Fría y el conflicto armado interno en Guatemala. Un importante político chiquimulteco recalca: «El Ejército de Liberación regresó a *Chiquimula, se estableció allí* y continuó organizado. Por muchos años, el Ejército de Liberación funcionó como una especie de milicia, cada quien vivía en su casa con su arma. Funcionaba al estilo del Ejército israelí en el que cada soldado tiene su propio armamento y lo llaman al cuartel cada vez que es necesario. También los llamaban a marchar al campo de aviación de Chiquimula. Por ejemplo, cada vez que los iban a traer a ciudad de Guatemala, los concentraban en el antiguo campo de aviación; allí los entrenaban y les enseñaban a marchar. *Este era un grupo de gente que se quedó con la idea de ejército y que se activaba cada vez que consideraron necesario.* Ellos decían: "Yo soy del Ejército de Liberación". Se quedaron con esa idea» [E-Gt20-RP-02.2012:65]. Y de igual modo que a sus antepasados, el *servicio en armas* les confirió acceso a los círculos gubernamentales, conexiones militares, políticas, financieras y sociales, como veremos más adelante.

3. Restableciendo el orden oligárquico y provinciano

Inmediatamente después de haber asumido el poder, Castillo Armas empezó a reestructurar el Estado, reemplazando el sistema democrático por uno autoritario y conservador. En un primer momento, derogó la Constitución de 1945, desautorizó al Congreso, destituyó a los gobernadores y los sustituyó por gente de su confianza y/o por simpatizantes del Movimiento de Liberación Nacional. Asimismo, promulgó una serie de decretos presidenciales cuyo propósito era destruir el sistema legal sobre el cual se había edificado el Estado democrático (Berger, 1992)[108].

La injerencia de Rossell y Arrellano (el arzobispo anticomunista) en el contenido de la nueva Constitución fue tal, que participó directamente en varias sesiones de la Asamblea Constituyente (Sloan, 1968:46). En esta coyuntura, la Iglesia logró introducir importantes cambios en la Constitución que le permitieron recuperar no solo el poder que había perdido durante la Revolución de Octubre,

108 Algunos de estos decretos fueron: Decreto 48, aprobado el 10 de agosto de 1954, proscribía las confederaciones obreras y los partidos políticos que habían apoyado al gobierno de Arbenz. Además, la Ley Preventiva en contra del Comunismo (Decreto 59) y una ley que creó el Comité Nacional de Defensa en contra del comunismo (Decreto 187) fueron utilizadas para encarcelar o ejecutar a los partidarios y miembros del gobierno de Arbenz. Según Berger (1992:82) bajo estos dos decretos se estima que se exiliaron unos 2,000 líderes políticos y sindicalistas y otros 9,000 fueron puestos en prisión, muchos de los cuales fueron torturados o asesinados.

sino las propiedades que le habían sido confiscadas a fines del siglo XIX por los gobiernos liberales. Entre sus logros más significativos figuran el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia y su consiguiente derecho a poseer bienes y propiedades inmuebles; el derecho a promover la educación religiosa en las escuelas católicas, aunque esta enseñanza no fuera incorporada de forma oficial al currículo nacional, y la posibilidad de ampliar su ámbito de acción en todo el territorio nacional, invitando a nuevas congregaciones religiosas a llevar a cabo su labor evangelizadora en Guatemala, y así contrarrestar los efectos del «comunismo».

Al mismo tiempo, durante la administración de Castillo Armas se centralizó el poder político, se restringió la competencia partidaria y se empleó la represión como medio para desmovilizar a las diferentes organizaciones populares que se formaron en el periodo revolucionario. En contrapartida, las élites del sector privado fueron invitadas a participar abiertamente en el Estado mediante sus propias asociaciones[109], y el Gobierno estadounidense se convirtió en un aliado ineludible que proveía al régimen asesoría política, asistencia económica y militar, a cambio de que éste derogara las reformas sociales y económicas que afectaban a sus empresas.

En 1957, el Congreso Norteamericano sobre Latinoamérica (Nacla) afirmó que los Estados Unidos habían ayudado a Castillo Armas y a sus sucesores para librar la «contrarrevolución» en contra de las leyes promulgadas de 1944 a 1954. Según el estudio del Nacla, la contrarrevolución buscó revertir las medidas progresivas de los gobiernos revolucionarios y creó nuevas instituciones diseñadas para satisfacer las necesidades de la burguesía guatemalteca y de los inversionistas extranjeros (citado en Streeter, 2000).

La literatura desclasificada ha puesto de manifiesto el nivel de involucramiento de Estados Unidos en el proceso contrarrevolucionario, el papel desempeñado por Eisenhower y las consecuencias de sus políticas de apoyo a las dictaduras en el Tercer Mundo, así como la intervención de Estados Unidos en Guatemala a través de la difusión del anticomunismo, las políticas de la modernización económica o el desarrollismo liberal. Una de las conclusiones a las que han llegado los analistas que están trabajando con la información de los archivos desclasificados es que a través del incremento o la disminución de la ayuda económica y

109 Inicialmente a través del Consejo de Iniciativa Privada y más tarde por el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif (Berger, 1992).

militar a Guatemala, la administración de Eisenhower trató de remodelar al Estado guatemalteco y reencauzar la contrarrevolución mientras mantenía la apariencia del buen vecino. Estas fuentes permiten observar las filiaciones, negociaciones, tensiones y márgenes de maniobra en que se movieron tanto los asesores norteamericanos como aquellos políticos y funcionarios guatemaltecos que buscaban mantener el control sobre las instituciones económicas y militares claves en Guatemala.

Desde los primeros años de la contrarrevolución, los Estados Unidos, afirma Berger (1992), concedieron a Castillo Armas asistencia financiera para construir carreteras, mejorar los servicios postales y ferroviarios, además, para modernizar las fuerzas militares y policiacas del país. Del mismo modo, financiaron estudios que contribuyeran a reorganizar el sistema político, tributario, presupuestario, aduanero y arancelario. Estos estudios subrayaban –sin éxito– la urgencia de mejorar el sistema de recaudación fiscal para poder financiar el proyecto contrarrevolucionario.

De hecho, Guatemala estaba sirviendo de ensayo para la nueva política de cooperación de la administración de Eisenhower, quien buscaba que este pequeño país sirviera de *botón de muestra* del éxito alcanzado por su administración en contra del avance del *comunismo* en América Latina. Solo entre 1954 y 1957, la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos otorgó a Guatemala más de US$61.8 millones –excluyendo el costo de la Operación PBSuccess. Gran parte de este financiamiento se otorgó en la forma de concesiones. Los otros financiadores más grandes fueron el Banco de Exportación e Importación y el Banco Mundial, quienes conjuntamente le prestaron a Guatemala alrededor de US$25 millones. Concesiones para propósitos especiales, como la construcción de la carretera Interamericana, sumaron otros US$27 millones (dentro de la categoría de Otros Programas Económicos). En este lapso (1954-1960) solo Guatemala recibió un 3% de un 15% de toda la asistencia económica de los Estados Unidos para Latinoamérica[110]. El objetivo principal de esta ayuda era, según Streeter (2000:112) fortalecer el régimen anticomunista para que éste tuviera éxito a la hora de levantar las barreras del intercambio comercial, eliminar las restricciones de inversión extranjera, suministrar materia

110 Para más información sobre este punto, ver Berger (1992), particularmente el capítulo que versa sobre el gobierno de Castillo Armas; y Streeter (2000), en el capítulo sobre el financiamiento de la contrarrevolución en la que éste último examina detalladamente todas las negociaciones, forcejeos y lucha de intereses alrededor del financiamiento de Estados Unidos para con el experimento contrarrevolucionario.

prima estratégica y barata, y salvaguardar la seguridad interna, persiguiendo «al enemigo comunista».

En materia económica, el régimen de Castillo Armas impulsó una estrategia liberal de desarrollo que limitó la intervención del Estado en la regulación del comercio, al mismo tiempo que apoyó la expansión de las agroexportaciones y la inversión extranjera. Debido a su origen, este gobierno conservó lazos muy estrechos con los funcionarios estadounidenses, así como con los inversionistas bananeros y cafetaleros (Berger, 1992). Para implementar su estrategia de desarrollo, en principio, la administración de Castillo Armas tenía que suprimir las reformas y legislaciones agrarias del periodo de 1944-1954. Inmediatamente abolió la Ley de Arrendamiento Forzoso y sometió a revisión la Ley de Reforma Agraria para restituir a los terratenientes y empresas bananeras las propiedades que les habían sido expropiadas.

El análisis que nos ofrece Jim Handy (1992) del contexto político dentro del cual se implementaron aquellas disposiciones tendientes a revocar los logros alcanzados por la Reforma Agraria nos muestra un panorama mucho más complejo y convulsionado del que hasta ahora habíamos imaginado. Por una parte, nos explica Handy, el gobierno liberacionista de Castillo Armas tenía que considerar que el mayor apoyo al Movimiento de Liberación Nacional provenía de aquellos terratenientes que deseaban acabar con la Reforma Agraria. Por otra parte, el MLN necesitaba tomar en cuenta los puntos de vista del Ejército –cuya oficialidad más joven solía ser de inspiración nacionalista– y el de los asesores norteamericanos que no estaban necesariamente en contra de una reforma agraria moderada. Además, muchos funcionarios del MLN y oficiales del Ejército estaban seriamente preocupados por el potencial explosivo que imperaba en el medio rural, preocupación que parecía ser antagónica a una reversión total de las conquistas logradas por los campesinos durante la Revolución.

Entre 1954 y 1956, el Gobierno emitió dos decretos tendientes a derogar la Reforma Agraria promovida por los gobiernos anteriores. El primero buscaba eliminar la Ley de Arrendamiento Forzoso, emitida durante el gobierno de Arévalo. Más tarde, en julio de 1954, se emitió el Decreto 31, con el propósito de anular el proceso de reparto de tierras promovido por los Comités Agrarios, bajo el amparo del Decreto 900. El argumento de esta nueva legislación agraria fue que el Decreto 900 estaba creando «serios» problemas económicos, provocaba la lucha de clases en el interior del país, y trataba de destruir la institución de

la propiedad privada sobre «la cual la estructura social guatemalteca estaba construida». Según Handy (1984, 1992), la diferencia más grande entre las dos leyes liberacionistas y el Decreto 900 era la intención de reducir la tensión en el campo y arrebatarle al campesinado el poder de determinar el resultado de las decisiones agrarias. Con este fin, el MLN excluyó a todas las organizaciones campesinas y a los representantes de los campesinos de participar directamente en los comités agrarios. De acuerdo a la nueva ley, todos los terratenientes cuyas tierras habían sido expropiadas durante 1952-1954 podían apelar la decisión ante la Dirección General de Asuntos Agrarios (DGAA), dirigida por tecnócratas que, en la mayoría de los casos, decidieron en favor de los terratenientes. En el caso del nororiente, prácticamente todas las propiedades cuya resolución era favorable a los campesinos fueron devueltas a los finqueros, mientras que la mayoría de los campesinos que se habían organizado en las Uniones Campesinas fueron perseguidos y reprimidos por los integrantes locales del Ejército de Liberación.

El señor Arturo García Ramírez, de 81 años, originario de la aldea Las Flores, Jocotán, al referirse a la Reforma Agraria y a la persecución que supuso para los dirigentes de los Comités Agrarios la entrada del Ejército de Liberación Nacional, explica: «Cuando entró el gobierno del presidente Jacobo Arbenz, [dijo:] "Al que no tiene terreno hay que repartir". Sí, dice el tonto, y va a agarrar un terreno, pero sin papeles. Yo, como era patojo, agarré un sitio cerca de Jocotán; me dieron una manzana en la aldea Los Bajos. Sí, sí, allí estuvimos. Pero en eso vino el gobierno de Castillo Armas y mataron al mero cabecilla, mataron a Saturnino García, que era de aquí de Los Bajos. Después fue dirigente Claudio Gutiérrez, de aquí de Lanquitín, y lo mataron también. Los mataron a los dos. Cuando vino este Castillo Armas mató a todos los que estaban organizados. Entonces se terminó todo… Así fue la cosa; en tiempo de este Carlos Castillo Armas fue que mataron a la gente» [E- Ch-AGyCR-19.01.13:9].

Fotografía No. 14
Represión a campesinos arbencistas



Fuente: Fondo Taracena/Fototeca Guatemala/CIRMA.

La decisión de los liberacionistas de desestructurar las organizaciones campesinas y de anular el proceso de la Reforma Agraria dio paso a conflictos en el país: no solo no permitió un periodo de «coexistencia pacífica», que era su deseo expreso, sino que sacudió a Guatemala con una purga de organizaciones revolucionarias, en la cual fueron arrestados más de cuatro mil «comunistas», más de mil personas buscaron asilo en embajadas extranjeras, huyeron del país dirigentes y activistas campesinos, y aun simples beneficiarios de la Ley de Reforma Agraria y muchos otros fueron asesinados por la guardia privada o agentes secretos de los finqueros (Handy, 1984, 1992).

El análisis que han hecho Handy (1984), MacCreery (1994), González-Izás (2002), de los archivos de la DGAA ofrece suficiente evidencia de la perseverancia de los campesinos por defender los logros alcanzados por la Revolución, particularmente en aquellos casos en que las mismas comunidades indígenas habían reclamado fincas que se edificaron en tierras que antiguamente les pertenecían. Tal es el caso de las «fincas de mozos», ubicadas en las tierras altas, y que desde fines del siglo XIX y primeros años del XX habían sido anexadas a las plantaciones cafeteras de la *bocacosta* y/o fincas cañeras de la costa del Pacífico,

con el fin de forzar a sus pobladores a trabajar durante el corte de café o la zafra de la caña de azúcar. El examen de estos expedientes de tierra ofrece evidencia de que, ocasionalmente, se dio el caso de que por temor a los disturbios rurales y a las propias estipulaciones de la nueva legislación, las autoridades agrarias no efectuaron la devolución de las tierras a algunos finqueros cuyos casos eran indefendibles. Como resultado, algunos beneficiarios del Decreto 900 lograron conservar sus parcelas.

Aun cuando algunos campesinos lograron retener la tierra que les había sido adjudicada durante el proceso de Reforma Agraria, en términos generales, las políticas gubernamentales diseñadas para proteger la gran propiedad latifundista y fomentar la economía de plantación (derogación de la Ley de Arrendamiento Forzoso del régimen de Arévalo y confiscación de las tierras distribuidas a los campesinos por Arbenz) tuvo como consecuencia la pérdida de las tierras que utilizaban los campesinos; consecuentemente, hubo un descenso de la producción de los cultivos de subsistencia. El mal tiempo agravó la situación, y la producción de maíz y frijol descendió sustancialmente entre 1954 y 1956. De hecho, a inicios de 1955, el Gobierno se vio forzado a importar grandes cantidades de maíz para satisfacer la necesidad nacional (Berger, 1992:90).

Posteriormente, con el apoyo de asesores estadounidenses –del International Development Services– el gobierno de la contrarrevolución promulgó en 1956 una nueva ley de reforma agraria, el Decreto 559. Esta nueva ley hacía énfasis en la ventaja comparativa de la propiedad privada de la tierra. En contraste con la estrategia de redistribución de Arbenz, esta nueva ley simplemente pedía que se cobraran impuestos sobre las tierras ociosas, sobre la base de una evaluación de la calidad de los suelos que hiciera el mismo terrateniente. La International Development Services (IDS), según Liza Grandia (2009:99), fue contratada en los albores del golpe de la CIA para asesorar al gobierno contrarrevolucionario en materia de reforma agraria. En diciembre de 1954, este grupo firmó un convenio de asistencia técnica con el Gobierno de Guatemala y empezó a trabajar en marzo de 1955. El IDS continuó asesorando a los gobiernos militares hasta la década de los 60 y produciendo los mapas topográficos, mosaicos de fotografías aéreas y mapas de vegetación y uso de tierras (ibíd. 99-100).

El propósito del Decreto 559 era salvaguardar la institución de la propiedad privada y el desarrollo de la economía de plantación, al mismo tiempo, alentar el desarrollo de las comunidades campesinas en fincas no cultivadas hasta

entonces. Para ello se ideó la formación de las Zonas de Desarrollo Agrario o los parcelamientos, como finalmente se les conoció.

Según la ley, tres tipos de tierras podían ser clasificadas como futuras zonas para el desarrollo agrícola: tierra privada adquirida por el Estado, plantaciones nacionales subutilizadas, y tierras estatales no utilizadas. El Decreto 559 instaba a aquellos grandes terratenientes que poseyeran vastas extensiones de tierra ociosa a que las cultivaran, donaran o vendieran al Estado, para que éste pudiera impulsar las Zonas de Desarrollo Agrario. Sin embargo, la noción de «tierras ociosas» era ambigua y en extremo laxa; por consiguiente, los terratenientes pronto encontraron los mecanismos legales para continuar preservando vastas extensiones de tierra ociosa dentro de sus latifundios.

El gobierno de Castillo Armas no solo devolvió las tierras expropiadas a los grandes terratenientes, sino ayudó política y financieramente a los propietarios de las grandes plantaciones bananeras y cafetaleras. Por ejemplo, el régimen subvencionó a los productores de café para que sobrellevaran las presiones del mercado, concediéndoles asistencia financiera a corto plazo (Berger, 1992:87-89). Asimismo, asistió a la United Fruit Company restituyéndole buena parte de sus tierras y franquicias de las que gozaba antes de la Revolución. Entre 1954 y 1957, el Gobierno de Guatemala firmó varios contratos con la Ufco en los que se favorecía ampliamente a la compañía. El primer contrato, firmado en diciembre de 1954, devolvió toda la tierra expropiada a la Ufco y estipuló que el Gobierno y la compañía retirarían todos los cargos de reclamaciones durante los años de 1951 a 1954. Los contratos también detallaban los planes para la continuación de las operaciones de la compañía en las tierras costeras del Pacífico. La Ufco acordó devolverle al Gobierno los derechos de 110 mil acres y a pagar un 30% anual de impuesto sobre los beneficios netos. A cambio, la compañía fue librada del pago de impuestos de importación en varios productos, incluyendo pesticidas, y recibió los derechos de utilización de aguas y ríos y el uso preferencial de las redes de transporte y comunicación en copropiedad de la Ufco. Los contratos firmados en diciembre de 1954 en relación con las operaciones de la compañía en la costa atlántica eran muy similares.

A pesar del triunfo de Castillo Armas en las elecciones de octubre de 1954 y los esfuerzos de la Asamblea Constituyente, el régimen «liberacionista» nunca logró legitimarse con la izquierda o con el sector nacionalista del Ejército y la clase media. Una de las razones fue que el gobierno de Castillo Armas era visto, tanto

en Guatemala como en otros países, como una creación del Departamento de Estado (Sloan, 1968:45). Aunque la mayor parte de las élites concordaban con la necesidad de disolver las reformas económicas de 1944-1954 y desmovilizar las organizaciones obreras y campesinas, éstas no estaban de acuerdo con la estrategia de desarrollo del Estado. Por consiguiente, la decisión del régimen de Castillo Armas de adoptar una estrategia enfocada en la expansión de las exportaciones cafetalera y bananera, el libre comercio y la inversión extranjera, naturalmente fue en contra de los intereses de algunos sectores económicos emergentes, particularmente el sector comercial y manufacturero y los plantadores de los nuevos cultivos de agroexportación (algodoneros y cañeros) (Berger, 1992). Esto provocó la oposición de la clase dominante contra el régimen.

Tras el asesinato de Castillo Armas en 1957, hubo un intervalo de disputa, tensión y ruptura al interior del partido anticomunista, el Movimiento Democrático Nacionalista (MDN), formado por Mario Sandoval Alarcón y otros de los dirigentes del Ejército de Liberación. Miguel Ydígoras Fuentes asumió la presidencia, postulado por el partido Reconciliación Democrática Nacional (Redención), liderado por Lionel Sisniega Otero después de su salida del MDN.

Para muchos, la figura de Ydígoras representaba la vieja guardia ubiquista y el retorno de los cafetaleros al poder. Este general era ampliamente recordado por su cercanía con Ubico y la colonia alemana en Guatemala, además como un entusiasta simpatizante de los gobiernos de Hitler y Mussolini. Todas estas cualidades lo hacía un presidente no meramente apreciado por los asesores norteamericanos radicados en el país. Empero, éste continuó la política anticomunista de su antecesor. Reinsertó a Guatemala en la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca) y firmó el Tratado de Libre Comercio e Integración Económica en el que se establecieron las bases para la formación del Mercado Común Centroamericano (Mercomún). Ydígoras rompió relaciones con el Gobierno de Cuba y permitió que se estableciera un campamento para el entrenamiento de las tropas que estaban organizando la contrarrevolución en Cuba. Aun políticos, como Sisniega Otero, que apoyaron activamente su candidatura y defendieron su llegada al poder, consideran que el gobierno del viejo general ubiquista fue demasiado flojo. No llegó a concretar nada y se involucró en proyectos insensatos que no respondían a problemática que se vivía el país. Además, inició el proceso de colonización de Petén, pero sin tener claro un programa de desarrollo de esta región. El gobierno de Ydígoras Fuentes, dice Sisniega, «cayó porque fue muy flojo, no tenía norte ni raíz» [E-GT17-SO-11.08.2011:33].

Cuarta Parte

La contradicción entre la seguridad o el desarrollo

Capítulo VI
Formación del Estado en el contexto de la Guerra Fría

En este capítulo nos adentraremos en las contiendas revolucionarias que dieron forma al Estado de Guatemala en el periodo que va de 1960 a la coyuntura crítica de los años 80 y 90, cuando se produjo la apertura democrática, se firmaron los Acuerdos de Paz y se implementaron las políticas de reforma del Estado. Al examinar el proceso de formación del Estado desde el territorio nororiental, constatamos que en la década de los años 60 fue particularmente significativo el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, por varias razones: *la primera*, de este movimiento se desprenden nuevos movimientos sociales y guerrilleros que buscaban recuperar los principios democráticos y nacionalistas de los gobiernos de la revolución; *la segunda*, en reacción a éste, el Estado puso en marcha un fuerte programa contrainsurgente que permitió al Ejército tomar el control de la política e institucionalidad estatal en el contexto de la Guerra Fría; y, *la tercera*, desde el nororiente podemos observar *la tensión* implícita en la estrategia de seguridad y desarrollo que siguieron las dictaduras militares con el apoyo de Alianza para el Progreso. Desde este territorio es posible observar a aquellos actores protagónicos que modelaron el Estado guatemalteco durante los decenios 60 y 70. Asimismo, podemos observar qué tipo de *actor político* fue modelado por el Estado (principalmente por el Ejército) durante esos mismos años. Esto último es importante, en tanto que son estos actores quienes definieron el curso de la guerra y las circunstancias en las que se produjo la apertura democrática, tal como veremos en los próximos capítulos.

En el análisis de la contienda guerrillera de los años 60, me interesa comprender cuáles fueron las razones que llevaron a los campesinos orientales a enrolarse en las filas de la guerrilla y cómo se estableció el proceso de reclutamiento e interacción entre los dirigentes guerrilleros –militares y estudiantes citadinos– y sus bases campesinas. Asimismo, me interesa comprender la agencia política de la élite nororiental (ganaderos y agricultores acomodados), que colaboraron activamente con la estrategia contrainsurgente. En tal sentido, examinaremos cómo se desarrolla la contienda política y el enfrentamiento armado en la región, y cuáles fueron las lógicas y mecanismos utilizados por el conjunto de actores que participaron en éste. Esto último es crucial, en tanto que, algunos de los jóvenes nororientales que participaron en esta primera guerrilla *dieron un giro* y se incorporaron en «el bando contrario», sobre todo después de que el Ejército lanzó un fuerte programa contrainsurgente y estableció una compleja red de inteligencia, la cual incluía la participación de comisionados militares, la Policía Militar Ambulante, paramilitares organizados en escuadrones de la muerte y sofisticadas técnicas de tortura (McClintock, 1985; Schirmer, 1999).

Al examinar estos procesos desde el nororiente de Guatemala, discuto las limitaciones del concepto de Estado-Nación (centralizador y coherente), y reconstruyo el papel que desempeñaron los diferentes actores regionales en la definición del *pacto de dominación* que se estableció en el contexto de la Guerra Fría. Observo también las particularidades que adquiere la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, y *la tensión* que se produce entre las ideas del «desarrollo» *versus* las ideas de «la seguridad nacional». Finalmente, documento con información de campo las distintas maneras en que el proceso de formación del Estado, su presencia institucional y la aplicación de la política pública fue altamente diferenciado al interior de un mismo territorio y entre los diferentes territorios del país.

Retomando las sugerencias de Philip Corrigan (2002) la cuestión clave aquí, no se reduce a *quién gobernó o cómo debió haber gobernado,* sino cómo se efectuó ese gobierno. Para entender esto es preciso analizar a fondo el *contenido cultural* de las instituciones y actividades del Estado durante las dictaduras militares. Se trata de observar qué tipo de actor político fue modelado por Estado en el contexto de la Guerra Fría y cómo se construyó la autoridad de las diferentes fuerzas armadas en la región. Particularmente, en aquellos municipios y aldeas del nororiente en dónde se organizaron los grupos paramilitares y/o la mayoría de sus hombres

prestaron el servicio militar obligatorio durante el enfrentamiento armado, pues estos hechos cambiaron radicalmente las subjetividades, la identidad y el curso que siguió la vida de dos o más generaciones jóvenes orientales. De igual manera, cambiaron el rumbo de la historia regional, la cultura y el sentido de lo político.

Observaremos las distintas maneras en que las instituciones y actividades del Estado orientaron o moldearon los múltiples modos en que la vida social podía ser vivida. Por un lado, observaremos cómo el Estado promovió o alentó algunas capacidades humanas, mientras suprimió, marginó, socavó o persiguió otras (Corrigan y Sayer [1985] 2007). Pues esto último, aún tiene consecuencias culturales acumulativas en cómo la gente concibe su identidad y cómo identifica "su lugar" en el mundo (Ibíd. 45).

Otro elemento que tendremos presente en este capítulo es que, si bien algunas prácticas gubernamentales pueden ser efectivas para moldear las subjetividades políticas, estás siempre encuentran poblaciones que ya han sido integradas en diferentes sistemas políticos. Por consiguiente, los rituales y discursos del Estado siempre se *mezclan* y *resignifican* con representaciones del Estado que ya están en circulación (Pigg, 1997; Nuijten, 2009). En este caso, sugiere Monique Nuijten (2003), resulta provechoso estudiar las prácticas organizativas, los procesos ideológicos y las relaciones de poder que se desarrollan en ciertos campos de fuerza. Se trata de estudiar *el flujo de la organización,* las ideas y representaciones de la gente e identificar aquellos patrones y formas de gobierno que no suelen estudiarse en detalle. Por ejemplo, algunos de los patrones organizativos que están detrás de una serie de actividades que se etiquetan bajo el sello de lo "ilegal", "desorganizado" y "corrupto" que se desarrollan paralelamente a los procedimientos formales del Estado. Esto implica que no podemos analizar los mecanismos de *lo legal* al margen de *lo ilegal*, lo militar y lo paramilitar y viceversa.

1. El Nuevo ciclo contencioso

1.1 El alzamiento de los militares y formación de los focos guerrilleros

El inicio de este nuevo ciclo contencioso puede situarse en noviembre de 1960, cuando un grupo de oficiales jóvenes, de inspiración nacionalista, organizaron una sublevación dentro de las filas del Ejército, en oposición a la influencia que llegaron a tener los liberacionistas y los asesores norteamericanos, no solo en

la política pública, sino en la reestructuración, formación y entrenamiento de las fuerzas armadas. El descontento de los rebeldes se agravó con el uso del territorio guatemalteco para entrenar a los exilados cubanos que participaron en el desembarco de Playa Girón. Aun cuando este movimiento fue sofocado, dio origen a los dos movimientos revolucionarios armados en los años 60: el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).

En los primeros meses de 1960, los oficiales descontentos organizaron un movimiento clandestino al que denominaron *Logia del Niño Jesús*, liderado por militares cercanos a la Logia Masónica que antes habían apoyado a Arbenz. Su principal inspirador fue Alejandro de León Aragón, comandante de la compañía de cadetes de la Escuela Politécnica; sus dirigentes tenían el grado de subteniente o teniente, y varios de ellos habían recibido cursos de especialización de guerrilla y contraguerrilla en escuelas norteamericanas. En este movimiento participaron unos 105 oficiales del Ejército con mando sobre cerca de unos 3,000 hombres. No obstante, llegado el momento decisivo, no todas las guarniciones respondieron al llamado de los alzados. Finalmente, la insurrección se llevó a cabo con los oficiales destacados en el Cuartel General Justo Rufino Barrios (legendario Fuerte de Matamoros), el Cuartel General (sede de la Policía Militar) y las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios. Entre los militares que apoyaron esta insurrección estaban Marco Antonio Yon Sosa, Luis Trejo Esquivel, Ángel Ortiz Palencia, Luis Augusto Turcios Lima, Eduardo Llerena, Guillermo Chicas, Rafael Sessam, Julio Cesar García Montenegro y Vicente Loarca, además de otros. Los boletines de la presidencia involucraban también al licenciado Mario Méndez Montenegro y al coronel Carlos Paz Tejada (Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 2004:654).

Los oficiales que participaron en este levantamiento aún tenían presentes los agravios recibidos por los liberacionistas en la contienda del 2 de agosto de 1956. A partir de entonces, los conflictos ideológicos entre aquellos que estuvieron *en pro* o *en contra* de la Revolución se habían intensificado. A todo ello se agregaron demandas corporativas insatisfechas e irritación ante hechos de corrupción en el Gobierno y en el propio Ejército. Pero, sobre todo, había un profundo malestar por la hegemonía alcanzada por los excombatientes del Ejército de Liberación Nacional y los militares norteamericanos en «su propia escuela», y por la decisión presidencial de permitir que se instalara el campamento de expedicionarios cubanos que se preparaban para participar en la invasión de bahía de Cochinos.

En esa época, explica el general Héctor Gramajo (1995:95), «la mayoría de jóvenes oficiales habíamos tenido la oportunidad de ver a nuestro país y a nuestra institución desde la perspectiva extranjera, por haber efectuado estudios de especialización en diferentes escuelas del Ejército y aviación de Estados Unidos, así como de otras especialidades en la Zona del Canal, en Panamá; mientras que los oficiales que habían sido expulsados de la Escuela Politécnica –a raíz de los acontecimientos del 2 de agosto de 1954– continuaron sus estudios en academias militares de Europa y Sudamérica». Ambos grupos de oficiales, agrega el militar citado, «regresamos a Guatemala con una buena preparación técnica, así como experiencia de vida en países más democráticos. Siendo oficiales [formados] tuvimos que desempeñarnos en un ejército de guarnición, estático y casi desequipado; a ello se agregaba la sensación de derrota que aún persistía en las filas militares por el control político, psicológico y administrativo que mantenían militares del Movimiento de Liberación Nacional desde hacía cinco a seis años. Además, el gobierno de la Liberación había agravado la situación militar, incorporando en la oficialidad militar a terratenientes y correligionarios políticos sin preparación militar» (óp. cit. 96).

En sus preparativos, este alzamiento involucró aproximadamente un 30% de los cuadros del Ejército. Su base de apoyo estuvo en el cuartel de Matamoros, ubicado en la ciudad capital, y las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios. Aun cuando la insurrección fracasó, los alzados del Cuartel General se apoderaron de armamento y vehículos del cuartel y se dirigieron rumbo a Zacapa, cuya base militar apoyaba al movimiento. Los alzados tomaron el mando de esta guarnición, a la cual se sumaron los oficiales de la base militar de Puerto Barrios. A los pocos días, los rebeldes fueron reprimidos con aviones B-26, mientras columnas de tropa comandadas por el coronel Enrique Peralta Azurdia se movilizaban en dirección a Zacapa y Puerto Barrios. Finalmente, por deficiencias en la planificación y conducción, este levantamiento fue disuelto con relativa facilidad. Su disolución se logró luego de varios días de combate, el apoyo de las fuerzas y aviones norteamericanos que se encontraban en el campo de entrenamiento cubano y el apoyo de los viejos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional radicados en Zacapa y Chiquimula. Algunos oficiales fueron detenidos, procesados y luego amnistiados. Otros, aproximadamente 70, se exilaron en México, El Salvador y Honduras (Aguilera, 1997). Algunas de las personas que entrevistamos en Zacapa y Gualán en 2012 aún recuerdan el paso de los alzados por sus pueblos, los rumores e interpretaciones encontradas que

se escuchaban en ese momento y la manera en que estos eran bombardeados por los aviones norteamericanos. Así, el profesor Álvaro Estrada explica:

> «En Gualán nada más se sabía que había un movimiento contrario al gobierno de Ydígoras. En el pueblo había conmoción, agitación y todas las puertas de las casas estaban cerradas. Había un estado de ánimo igual al del Movimiento de Liberación. Se escuchaban rumores, la gente no entendía bien qué estaba pasando (porque en ese tiempo no llegaba la prensa y no había televisión como hay ahora), pero la gente decía que algo chueco estaba pasando. De repente, los aviones empezaron a bombardear la escuela, porque los rebeldes habían tomado la escuela y los alumnos se fueron a su casa. Nosotros solo mirábamos cómo llegaban los aviones a bombardearlos [a] la escuela. También llegaron a tirarles allá por la estación del ferrocarril, y donde miraban grupos armados, ahí les tiraban. Aquí bombardearon con unos aviones que fueron de la Segunda Guerra Mundial, los *Sulfatos* le[s] decíamos a esos aviones. Cuando el Ejército entró aquí, algunos de ellos tiraron las armas y se fueron a Honduras, y uno que otro se entregó. Entonces quedó un *impasse*» [E-G8-AE-27.06.2011:13].

En reconocimiento a los méritos de esta campaña, Ydígoras ascendió al rango de general al coronel Peralta Azurdia y lo nombró su ministro de la Defensa en 1960. En 1963, el mismo Peralta –valiéndose de su posición de mando como ministro de la Defensa– comandó el golpe de Estado que derrocó a Ydígoras, le permitió llegar a la presidencia, y al Ejército tomar el control del Estado[111]. Aunque en los regímenes posteriores a 1944 los oficiales del Ejército habían ocupado cargos en el gabinete (en los Ministerios de Defensa, del Interior, de Comunicaciones y Obras Públicas), esta fue la primera vez en que buena parte del organismo Ejecutivo estaba en manos del Ejército (Buttrey, 1967). La experiencia obtenida era invaluable: el Ejército pretendía demostrarse a sí mismo, a los guatemaltecos y a sus patrocinadores norteamericanos que los militares podían gobernar donde los civiles habían fracasado.

En los primeros años del gobierno de Peralta Azurdia se derogó la Constitución y se suspendieron las garantías ciudadanas. Peralta gobernó mediante decretos presidenciales y declaró fuera de la ley a todos los partidos de izquierda. A partir de 1962, luego de que las fuerzas guerrilleras se establecieran en el nororiente (como veremos en el siguiente apartado), el Gobierno empezó a desarrollar un programa contrainsurgente que incrementó el presupuesto de la defensa; para ello, el régimen aceptó un incremento substancial de la asistencia militar

111 Ver el acucioso análisis que hace Edgar Ruano del Golpe de Estado de 1963, en el capítulo II, del libro Guatemala: Historia Reciente (1954-1996), Tomo I Proceso Político y Antagonismo Social [FLACSO-Guatemala, 2013: 76-167]

estadounidense, incluyendo armamento e instructores. Entre 1960 y 1965, los gastos en la defensa del Estado de Guatemala se incrementaron más que en cualquier otro país latinoamericano (Berger, 1992).

Durante este periodo, el Ejército expandió su rol en la política y en los diferentes campos de la acción estatal. Continuó llevando a cabo las tradicionales tareas políticas, la eliminación de los disidentes del régimen, el diseño e implementación de un programa contrainsurgente y la construcción de obras públicas. Además, los oficiales militares ocuparon las direcciones de varias instituciones gubernamentales, la mitad de los puestos del gabinete, y todas las gobernaciones departamentales.

Los Estados Unidos financiaron proyectos de desarrollo estrechamente relacionados con el Ministerio de la Defensa y el programa contrainsurgente. Estos proyectos fueron diseñados para incrementar la presencia estatal en aquellas regiones en donde se asentó la guerrilla, proporcionar los servicios básicos a los campesinos, y de esta manera, convencerles para que continuaran siendo leales al Estado (Berger, 1992). En este contexto, se impulsó el programa «Operación Honestidad», cuyo eslogan era «Seguridad y progreso». Según el general retirado Ricardo Peralta Méndez (1991), mediante este programa, la Usaid y el Gobierno de Guatemala pretendían facilitar el proceso de pacificación y ganarse a la población mediante «obras sociales»[112] y «evitar que el país cayera en manos del comunismo».

Como parte de este programa, el gobierno de Peralta Azurdia llevó a cabo la construcción del sistema de riego de La Fragua, de Zacapa, el cual benefició, principalmente, a aquellos agricultores acomodados del nororiente que habían participado en el Ejército de Liberación Nacional y eran proclives a colaborar con el Ejército. La concreción de este proyecto se agilizó gracias a que en la administración de Peralta Azurdia participaban varios zacapanecos cercanos al presidente, entre ellos el coronel Emilio Peralta Portillo (viceministro de Gobernación) y los hermanos Carlos Humberto de León (ministro de Agricultura) y Romeo Augusto de León (presidente de la Corte de Justicia) [E-Z1-RRO-02.07.2011:21]. Según un exfuncionario del ayuntamiento de Zacapa, esa coyuntura les valió a los zacapanecos que se concretara el proyecto de riego de La Fragua, el cual se concluyó en el periodo de Méndez Montenegro (cuando Arana Osorio fue comandante de la Zona Militar de Zacapa y se hizo cargo de

112 Entrevista realizada por Jennifer Schirmer en 1991 (1999:76).

éste). De acuerdo con la información local, en este periodo se construyó un sistema de represas y canales que irrigó 14,284 caballerías de tierra. Este sistema de irrigación benefició, fundamentalmente, a los terratenientes medios que tenían propiedades en las fértiles tierras de los valles del río Motagua y Grande de Zacapa, quienes se asociaron a las empresas tabacaleras, y años más tarde a empresas agroexportadoras de tomate y melón. Respecto a los beneficios que este sistema de riego trajo a los agricultores de Zacapa, Rubén Rosales explica:

> «Si usted ve por aquí [carretera al Atlántico], son caballerías y caballerías de terreno cultivado de melón. El área que cubre el sistema de riego es considerable, es una parte de Zacapa, Llano de Piedras, San Jorge, Estanzuela, Cabañas, Huité y San José (Teculután). El valle de La Fragua es muy grande, sigue hasta El Jícaro, que ya es de El Progreso. El municipio más beneficiado con este sistema de riego es Estanzuela, donde se ubican las planicies más fértiles de La Fragua» [E-Z1-RRO-02.07.2011].

A partir de la construcción del sistema de riego de La Fragua se consolidó la alianza entre las élites nororientales que fueron beneficiarias del proyecto y los militares que dirigieron la institucionalidad estatal a escala nacional y regional durante los gobiernos de Peralta Azurdia, Méndez Montenegro y Arana Osorio. De acuerdo a la perspectiva de seguridad y desarrollo promulgada por Alianza para el Progreso durante esos años, el resultado de este proyecto fue exitoso, en tanto que fortaleció a los agricultores y ganaderos acomodados del nororiente que participaban en el Movimiento de Liberación Nacional. Con ello ganó un aliado indiscutible en la lucha contra «el comunismo» en la región[113].

113 Como veremos más adelante, durante los mismos años que se construyó el sistema de riego, el Gobierno organizó a los agricultores y ganaderos de la región en el sistema de comisionados militares, les otorgó autorización de portar todo tipo de arma sin licencia y les confirió espacios de acción propios de un agente de seguridad (ver artículo 26, Decreto 283 del 27 de octubre de 1964).

Fotografía No. 15
Sistema de riego de la Fragua de Zacapa



Fuente: Trabajo de campo Matilde González (Noviembre, 2012).

El sistema de irrigación de los llanos de La Fragua dinamizó la economía del nororiente, como pocos proyectos lo han hecho; de igual modo, los criterios respecto a quiénes beneficiaría el riego profundizaron las desigualdades sociales entre este sector de la élite nororiental y los campesinos, indígenas y ladinos que viven en las agrestes tierras de ladera y montaña, cuya historia de expropiación de tierras vimos en los capítulos anteriores. Actualmente, las diferencias son tales que ahora se habla de un nororiente rico, fértil y altamente productivo vinculado a la economía de agroexportación de legumbres y frutas tropicales; en contraposición, a otro nororiente semiárido, denominado como el «corredor seco» de Guatemala, en donde la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad de sus servicios ecosistémicos han alcanzado niveles alarmantes en los últimos años. El análisis histórico acerca de cómo se produce *la desigualdad socioterritorial* entre las tierras de montaña o ladera y las tierras irrigadas en los fértiles valles del nororiente nos ayuda a explicar los actuales problemas socioambientales que enfrenta esta región.

1.2 Formación del MR-13 y las FAR

El alzamiento del 13 de noviembre de 1960 fue la insurrección de mayor envergadura dentro de la serie de actos de sedición protagonizados por oficiales del Ejército desde 1954. Este fue un hecho, por demás significativo, que marcó la historia del Ejército y puso de manifiesto la divergencia de perspectivas e intereses en su interior. El ala dura del Ejército trató de solventar estas divergencias persiguiendo a los sediciosos y ofertándoles amnistía a cambio de sumisión; afirmando la idea acerca de la unificación granítica del Ejército, y restringiendo los espacios de formación y disenso en su interior[114]. En este contexto, el 6 de marzo de 1961, veintitrés de los alzados en Zacapa retornan a Guatemala procedentes de Honduras e intentan reorganizar un nuevo movimiento rebelde. Entre sus dirigentes estaban Luis Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa, Alejandro de León Aragón, Luis Trejo Esquivel, Vicente Loarca y Francisco Franco Armendáris. La lógica de sus primeros fundadores respondía a la tradición golpista del Ejército, cuya finalidad era *tomar por asalto el poder*. Por consiguiente, sus primeros planteamientos se restringían a la destitución del ministro de la Defensa, la depuración de la oficialidad militar, la profesionalización del Ejército y el retorno de los valores morales aprendidos en la Escuela Politécnica. No fue sino hasta que el grupo comenzó a interactuar con organizaciones políticas, como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y con los campesinos de la zona nororiental donde se internaron, que se fue produciendo un proceso de cambio del pensamiento político de varios de los alzados. La idea de derrocar al gobierno se enriqueció con la búsqueda de transformaciones sociales y políticas, y la adopción de un pensamiento de izquierda.

Estando en la ciudad de Guatemala, a fines de 1961, Alejandro de León (uno de los ideólogos más destacados del movimiento) fue asesinado por una patrulla de la policía. En respuesta a este hecho, los tres jefes del movimiento: Yon Sosa, Luis Turcios Lima y Luis Trejo, montaron un atentado en contra de Renulfo González, jefe de la policía secreta de Ydígoras Fuentes. Inmediatamente después, el Gobierno decretó estado de sitio en todo el país. Este hecho es particularmente significativo, porque marca el inicio de un largo ciclo contencioso que se caracterizará por el secuestro y asesinato de dirigentes de la izquierda; en respuesta a estos hechos, los grupos guerrilleros en la ciudad efectuaban atentados

114 La profesionalización del Ejército aumentó al incrementarse la asesoría militar norteamericana y difundirse el pensamiento militar de Estados Unidos que, acorde con la época, enfatizaba el discurso anticomunista y la visión polarizada del mundo (Aguilera, 1989:21).

y secuestros a empresarios, diplomáticos, políticos o funcionarios públicos con fines de venganza, canje de militantes secuestrados por el Gobierno o rescate económico. Inmediatamente después, el Estado decretaba prolongados estados de excepción –bajo la modalidad de estados de sitio y toques de queda– en los que se suspendían todas las garantías constitucionales. Durante estos periodos, la represión se intensificaba y extendía a amplios sectores de la sociedad acusados de «comunistas». Se anulaban las garantías constitucionales y cerraban los espacios de expresión. Se vivía entonces lo que el sociólogo Gabriel Aguilera Peralta (1971) llamó una intensa *ola de terror*.

Entre enero y febrero de 1962, el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre (Frente Guerrillero Alejandro de León-13 de Noviembre) se desplazó a Izabal, donde se encontraban las principales plantaciones de la United Fruit Company, destruyó las instalaciones de dicha empresa, ocupó los destacamentos militares de Mariscos y Morales durante varias horas, y recuperó armamento y material bélico. Para escapar de la respuesta del Ejército, los rebeldes dispersaron sus fuerzas, y varias columnas se internaron en la montaña. En ese entonces, uno de los objetivos del grupo era apoderarse nuevamente de la base militar de Zacapa, el principal fuerte en la región; sin embargo, fracasaron en su intento.

El 26 de febrero de 1962 se leyó en la Radio Internacional la declaración *Quiénes somos, qué queremos y por qué luchamos*, en la que los alzados se autodefinían como «oficiales del Ejército de Guatemala, que desde el 13 de noviembre de 1960 estaban luchando para darle a Guatemala un gobierno que actuara con normas democráticas según los intereses del pueblo». Al mismo tiempo, hacían un llamado a estudiantes, obreros, campesinos, periodistas, escritores, industriales, comerciantes progresistas, jefes y oficiales del Ejército a incorporarse a la lucha armada.[115] Entre febrero y marzo de 1962, el MR-13 publicó en Guatemala y países afines a su movimiento, varias proclamas en las que exponía su postura militar y recuperaban las reivindicaciones políticas y socioeconómicas de la Revolución de Octubre, más las demandas de la rebelión militar de 1960, las cuales se resumían en las consignas de «democratización y nacionalismo» (Taracena-Arriola, *elPeriódico*, 05-02-2012:6).

115 Declaración (26-02-1962), citada en el artículo de Taracena-Arriola "El Movimiento Rebelde 13 de Noviembre (MR-13) y el surgimiento de la lucha armada en Guatemala", en ElPeriódico, 5 de febrero de 2012.

En diciembre de 1962, las fuerzas insurgentes se fusionaron en las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), integradas por el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre, el Movimiento 20 de Octubre, que había actuado en Concuá, y el Movimiento 12 de Abril, formado por estudiantes de posprimaria. Los dos últimos grupos estaban dirigidos por el PGT. De esta manera, la organización de las FAR implicó una alianza de los militares insurgentes con el partido comunista y con algunos líderes de izquierda (Aguilera, 1997:136).

En el acuerdo de formación de las FAR se dio una suerte de división del trabajo militar y político entre las organizaciones que lo conformaron: el MR-13 proporcionaría nuevos cuadros, base social y recursos militares; además, conduciría la estrategia militar, la cual siguió el modelo de la guerra de guerrillas. Mientras que el Partido [PGT] organizaría un amplio movimiento político llamado Frente Unido de la Resistencia, el que agruparía a los antiguos partidarios de Arévalo y Arbenz (Debray y Ramírez, 1975:263).

Si bien varios de los dirigentes de las FAR se entrenaron en Cuba y su contacto con la Revolución cubana les llevó a redefinir sus concepciones revolucionarias, su estrategia acerca de la guerra estaba poco desarrollada. En algunos dirigentes pervivía la idea del *cuartelazo golpista,* que había definido el curso de la historia política de Guatemala desde el surgimiento de la República. Mientras que otros buscaban aplicar la experiencia del *foco guerrillero,* desarrollada por el Che Guevara. La idea principal del *foco* era que un núcleo de 10 a 30 revolucionarios profesionales, enteramente consagrados a la causa, e incrustados en el punto más vulnerable del territorio nacional, sería como una *mancha de aceite* que, lentamente propagaría sus movimientos concéntricos a «la masa» campesina, a las poblaciones intermedias y finalmente a la ciudad capital. Mientras que en las ciudades surgiría un movimiento de «masas» (huelgas, manifestaciones, etc.) y un movimiento de resistencia clandestino, respaldado por las operaciones de la guerrilla rural. La clave del foco, explica Debray (1969), radicaba en unir a las masas antes de la conquista del poder y hacer de esa unión previa la condición *sine qua non* de la conquista final. El foco buscaba «poner a las masas en condiciones de derrocar por sí mismas el poder establecido».

Haciendo una aplicación *sui generis* de estas ideas, en el territorio nororiental, los núcleos guerrilleros operaban en torno a una columna de combatientes, apoyada en una red de Comités de Aldea que se constituían como un poder local alternativo. Estos comités colaboraban organizando grupos de milicianos

auxiliares y la base de apoyo en la región de operaciones. Se esperaba que los frentes guerrilleros se extendieran por todo el país y provocaran una situación de insurrección generalizada. Mientras que la Resistencia Urbana de las FAR y el PGT se encargaría de actividades de propaganda, atentados y acciones de sabotaje, además de proporcionar apoyo logístico a los frentes rurales.

Heredera de las ideas de la Revolución de Octubre, para la guerrilla de los años 60, el nororiente continuaba siendo estratégico, porque allí se ubicaban las grandes plantaciones bananeras propiedad de la United Fruit Company, el ferrocarril, la carretera y los puertos que formaban parte de los circuitos comerciales del Atlántico. Otro de los criterios que prevalecieron en la elección de esta región fueron la experiencia de movilización adquirida por el MR-13 y los niveles de organización alcanzados por el PGT, en especial con los trabajadores agrícolas y portuarios, que se integraron como base social de la insurgencia. Se pensaba que las acciones militares impactarían en el corazón de la economía agroexportadora de enclave, en la medida en que afectarían la comunicación entre la capital y los puertos del Atlántico (Aguilera Peralta, 1997). Además, topográficamente, algunas de las áreas húmedas de la Sierra de las Minas permitirían albergar a los *focos* guerrilleros. Otro criterio importante en esta elección fue la presencia de excompañeros y/o partidarios del movimiento al interior de las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios, que les facilitarían información acerca de los movimientos del Ejército en la región, lo cual les permitía moverse con flexibilidad y expandir su radio de operaciones. Atendiendo a estos criterios y a las experiencias personales de los alzados, el plan militar del MR-13/FAR consistió en la formación de tres frentes guerrilleros en el nororiente de Guatemala, comandados por los tres principales jefes del MR-13: Marco Antonio Yon Sosa (el *Chino*), Luis Turcios Lima y Luis Trejo.

a) El Frente Alaric Bennett o Alejandro de León

Inicialmente, este frente se llamó Alaric Bennett[116], más tarde le darán el nombre Alejandro de León, en honor al dirigente del MR-13 asesinado en 1961. Yon Sosa, comandante de este frente, estableció como su teatro de operaciones la Sierra de las Minas, entre los departamentos de Zacapa e Izabal (principalmente en Puerto Barrios, y los municipios colindantes con la frontera con Honduras). El *Chino* Sosa –como le decían los orientales– era originario de Los Amates, Izabal,

116 Nombre de un obrero agrícola afrodescendiente a quien las tropas liberacionistas de Castillo Armas le hicieron estallar una granada en el rostro.

y conocía de cerca los problemas que enfrentaban los trabajadores agrícolas de la bananera, los obreros portuarios y los ferrocarrileros. A partir de su activa participación en el alzamiento militar de 1960 había ganado gran popularidad, contactos políticos y un buen conocimiento del territorio y la cultura nororiental.

Aunque Yon Sosa fue un destacado estudiante de la Politécnica, y había recibido entrenamiento de guerrillas y antiguerrilla en Fort Benning (Estados Unidos) y en Fort Gullick (Zona del Canal de Panamá), nunca se preocupó mucho por la teoría revolucionaria. Según Debray y Ramírez (1975), su lema era sencillo: «Contra el poder de los ricos, por la tierra y la patria». Su análisis de clase, sintético: «Ricos contra pobres». Como buen nororiental, lo que le interesaba era su terruño, sus dominios y los campesinos que lo rodeaban. Ni militarista, ni ideólogo, ni político, Yon Sosa era un caudillo patriarcal, un agitador social que se movía entre los campesinos como un pez en el agua. La simplicidad de sus modales, su modestia, su ardor y hasta su sentido de la desorganización política y militar le permitieron más que a ningún otro guerrillero vivir en simbiosis con la población de Izabal y del norte de Zacapa, que veían en él a un caudillo más que a un líder (óp. cit. 1975:302). Las anécdotas y leyendas respecto al carisma y astucia de este emblemático caudillo de la revolución guatemalteca abundan en el imaginario nororiental; algunos incluso lo creían dotado de poderes mágicos para burlar los cercos del Ejército.

A los pocos meses de ubicarse en la región, Yon Sosa había formado varias escuelas de entrenamiento guerrillero en la montaña. A estas escuelas asistían los campesinos y obreros de la región por periodos cortos. En lo militar, este jefe guerrillero aceptaba sin discriminar todas las solicitudes de incorporación que le hicieran, de modo que su campamento era un vaivén de simpatizantes, colaboradores y militantes. Los campesinos iban a pasar un rato en la guerrilla, se marchaban en época de siembra y volvían después de la cosecha, o simplemente ya no volvían. El MR-13 fue lo más parecido a un ejército de milicias campesinas, pues aunque no contaba con un núcleo fuerte de combatientes, gozaba de una extensa periferia de simpatizantes, colaboradores y militantes esporádicos, quienes, cual típicos milicianos, se *alzaban en armas* al llamado de sus jefes.

El segundo jefe de este frente era Rodolfo Chacón, quien se encargó de organizar un frente guerrillero cerca de Puerto Barrios con antiguos militares del MR-13, obreros portuarios y campesinos (este frente estaba pensado estratégicamente para realizar acciones de sabotaje en el principal puerto del Atlántico y en las

instalaciones de la Ufco). Una de las primeras acciones del frente de Chacón fue el ataque a las guarniciones militares de Morales e Izabal, donde recuperó bastante armamento para su grupo. Tras estas acciones, descuidaron las medidas de seguridad, y muy pronto el Ejército ubicó el destacamento guerrillero donde se encontraban, organizó una emboscada y Chacón, junto con 22 guerrilleros, cayó en combate.

b) El Frente Las Granadillas

Este frente estaba comandado por los subtenientes Luis Trejo y Bernal Hernández, antiguos militantes del MR-13. Además de las rivalidades personales entre ambos jefes, sus concepciones acerca de la guerrilla eran muy distintas. Según Macías (1998:34), Luis Trejo escogió la zona de Zacapa para la instalación del frente que comandaría, entre otras razones porque conocía el terreno; tenía confianza en sus relaciones con los militares de alta en la guarnición en donde él se había alzado; asimismo, mantenía buenas relaciones con pobladores civiles de ese departamento y, en cierto modo, tenía un sentido histórico y quería retomar el camino de las armas en el mismo sitio donde lo había iniciado. Aun cuando no descartaba la posibilidad de conquistar el poder a través de un golpe de Estado, Trejo había estado en Cuba y tenía una concepción revolucionaria de la guerra de guerrillas. En contrapartida, Bernal Hernández era un militar anticomunista que veía en la guerrilla una fuerza de apoyo para organizar un alzamiento militar desde la base de Zacapa, el cual permitiría un golpe de Estado y el cambio inmediato de gobierno.

Dadas las profundas diferencias en la concepción política entre Luis Trejo y Bernal Hernández, la composición de este frente fue radicalmente heterogénea: algunos de sus integrantes eran veteranos del MR-13 y estudiantes de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT); otros eran sargentos y exmiembros de la Policía Militar Ambulante, campesinos y algunos desempleados de la región. En la organización de este frente, los estudiantes del Movimiento 12 de Abril y la JPT aportaron algunos contactos en Zacapa, Chiquimula e Izabal. Uno de estos contactos fue *el Cura* (Miguel Ángel Cabrera), militante de la JPT/PGT, y sobreviviente de la década revolucionaria del 44 al 54. Según Macías (2008), *el Cura* era un militante *sui generis.* A pesar de su adhesión al PGT, actuaba siempre en forma poco ortodoxa y poco disciplinada. Este era un ejemplo atípico de lo que el partido comprendía como militante, a la vez típico modelo de los que se

consideraban a sí mismos miembros «del partido» en el oriente y norte del país. Por su parte, Pilar Cabrera (sobrino del *Cura*) recuerda que su tío era un hombre de la Iglesia católica; él era responsable de la comunidad, organizaba la fiesta patronal y las actividades religiosas de la aldea La Trementina. «Él se vestía como un franciscano, con su traje largo café y un cinto blanco [aun no siendo cura, ni religioso]. Cuando Cabrera sintió la presión militar, tuvo que irse a la montaña, tomar las armas y empezar a luchar junto con los otros grupos que se movían en la región. El luchó [agrega] contra el sistema, contra el gobierno. Él era el comandante de un grupo de campesinos bastante numerosos de La Trementina que se unió a la lucha por las reivindicaciones sociales y políticas que planteaba el movimiento revolucionario en ese tiempo. El estaba con Turcios Lima y los que se alzaron en el MR-13. A fines de los años 60 e inicios de los 70, él era el hombre más buscado en todo Zacapa» [E-Z-JA-02.02.2013:2].

Los jóvenes de la JPT organizaban círculos de formación política con los campesinos de la región. En estos círculos leían textos marxistas y discutían sobre la lucha de clases, la injusticia social y la revolución. Según Cabrera, en la casa de su abuelo (un potentado progresista de la región) funcionaba una escuela en la que se estudiaban textos sobre marxismo y la realidad de Guatemala. El historiador Guillermo Paz Cárcamo era uno de los que enseñaba doctrina marxista a los campesinos de La Trementina.

Por su parte, el subteniente Bernal Hernández tenía una postura anticomunista y consideraba que los procesos de formación política que realizaban los jóvenes de la JPT únicamente confundían a los campesinos. Al final, la disputa entre las diferentes concepciones ideológicas, objetivos de lucha y estilos de jefatura llevó a una controversial división del Frente Las Granadillas, la cual tuvo graves consecuencias para la seguridad de sus integrantes, principalmente para aquellas familias del lugar que colaboraban activamente con la guerrilla. En principio, los guerrilleros empezaron a diferenciarse entre sí como «comunistas» y «patriotas» y ya no acampaban juntos (Debray y Ramírez, 1975). En 1966, cuando empezó la ofensiva militar, el Ejército bombardeó la montaña y los dos grupos guerrilleros se dispersaron. Luis Trejo y los veteranos del MR-13 enterraron sus armas y volvieron a la capital. Bernal Hernández desertó y se convirtió en un activo colaborador de Arana Osorio. Cuando la presión militar recayó sobre sus padres y hermanos, Miguel Ángel Cabrera se trasladó con su esposa y sus hijos mayores a la capital. El Ejército continuó llegando a la casa de sus padres por las noches y las madrugadas; a esas horas sacaban a todos (niños, adultos, mujeres) porque

andaban buscando al *Cura*. En junio de 1966, Miguel Ángel Cabrera, su esposa María Augusta Ramírez y tres de sus hijos, Arnoldo, Mirza y Teresa, fueron secuestrados en ciudad de Guatemala. Sus padres los buscaron por muchos años, pero nunca supieron de su paradero. De la familia del *Cura* solo sobrevivieron sus dos hijas menores, que se habían quedado al cuidado de su abuela en la aldea La Trementina, Zacapa, siendo unas niñas de 11 y 13 años [E-Z-JA-02.02.2013:5]. El sobrino y una de las hijas de Cabrera fueron de los primeros en atreverse a romper el silencio y narrar los hechos de violencia que se vivieron en los años 60 y 70 en la montaña Las Granadillas. Participaron activamente en la reconstrucción de la memoria histórica y en la publicación del libro *Tiempo de callar, tiempo de hablar…*, en el que se recogen los testimonios de los campesinos nororientales que vivieron los hechos de violencia ocurridos en esta región.

Fotografía No. 16
Mural conmemorativo a las víctimas de la represión
Aldea La Trementina, Zacapa



Fuente: Trabajo de campo Matilde González (2012).

Según el relato de Pilar Cabera, a finales de los años 60, la aldea La Trementina fue militarizada, muchos hombres fueron secuestrados por el Ejército y nunca más se volvió a saber de ellos. En el destacamento militar que se estableció en La Trementina, los comisionados militares cavaron un hoyo profundo de tres metros, a donde llevaban a los hombres sospechosos de participar en el movimiento guerrillero; ahí los castigaban y torturaban. Desde este destacamento militar se dirigían las acciones represivas en contra de las aldeas de La Montaña y Las Granadillas, que colaboraron con la guerrilla: Cerro Grande, Pinalito, Los Achiotes, La Ceiba, Cerro Chiquito y Cerro Grande [E-Z-JA-02.02.2013:5].

c) El Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI)

El comandante de este grupo era Luis Turcios Lima; el segundo jefe, Rigoberto Molina; luego, César Montes, y el responsable político, Ricardo Ramírez. Al morir Turcios Lima en 1966, asumió la comandancia de este frente y de las FAR César Montes. Este frente se organizó a mediados de 1963 en la Sierra de las Minas, entre Zacapa e Izabal, a lo largo del tramo de la carretera al Atlántico que va de Zacapa a Izabal. Su centro de operaciones se encontraba en el municipio de Río Hondo, Zacapa, con un destacamento en la aldea Panaluyá. Los guerrilleros bajaban con frecuencia a hacer vida social en la cabecera municipal. Este frente alcanzó el mayor grado de organización y desarrollo militar, y el más alto protagonismo en la confrontación con el Ejército. El FGEI operaba en torno a una columna de combatientes que en ocasiones se subdividía y se desplazaba a lo largo de la Sierra de las Minas, en los departamentos de Zacapa e Izabal; también incursionaba en Alta Verapaz y Chiquimula. En Zacapa organizó varios Comités de Aldea como base social (Monsanto, 1983). En sus momentos de auge llegó a tener cerca de 60 combatientes y 700 colaboradores de las aldeas y municipios de la región. Sus principales acciones militares fueron la toma de Río Hondo, Zacapa, y Panzós, Alta Verapaz, en 1964; y la emboscada de Sunzapote, en la carretera al Atlántico (jurisdicción de Zacapa) en 1966. Esta emboscada ocasionó 11 bajas al Ejército y la muerte del capitán Dolores Amézquita, militar apreciado no solo en las filas del Ejército sino en las del mismo MR-13, ya que éste pertenecía a la misma promoción de los alzados y había permitido la convivencia –hasta cierto punto pacífica– de ambas fuerzas en la región. Este hecho marcó un cambio radical en la estrategia contrainsurgente del Ejército y en la reacción de

la élite anticomunista del nororiente. Particularmente, porque este atentado puso en evidencia el involucramiento de un buen grupo de jóvenes de la región en las filas de la guerrilla y la fuerza que ésta había alcanzado en poco tiempo.

> «En ese atentado, nos dice una observadora, hicieron lo propio los riohondanos […]. Fue gente de aquí, de Río Hondo, la que lanzó la emboscada. Eran de los nuestros, pero bien adoctrinados por la guerrilla, quienes hicieron la emboscada al Ejército. Un informante les dijo que a las seis de la mañana pasaba por ahí ese pelotón de 11 soldados comandados por el capitán Dolores Amézquita. En esa emboscada murieron todos. Los agarraron desde arriba. Entonces, usted va a encontrar un monumento a los caídos del Ejército ahí en la carretera al Atlántico» [E-RH2-CCH-01.07.2011].

Según el general Gramajo (1995), hasta ese entonces la presencia de sus compañeros en armas dentro del movimiento insurgente había provocado entre los oficiales jóvenes «un sentimiento de confusión y ambivalencia». Sin embargo, dicha confusión cesó después de la mencionada emboscada de Sunzapote y la muerte de su compañero, el capitán Amézquita. A partir de ese momento, definieron su postura y decidieron combatir a la insurgencia.

Por otra parte, luego de este hecho, la guerrilla local se sintió triunfante, dueña del terreno y prácticamente sin rival. Los militares no solo no reaccionaron, sino se replegaron a sus guarniciones. Ya no había patrullas por la carretera general ni puestos de control en los atajos y veredas. Las FAR interpretaron ese repliegue táctico como una retirada estratégica y confesión de una derrota política del Ejército. De ahí un irresistible relajamiento de la disciplina entre los combatientes y el olvido de las elementales medidas de seguridad (Debray y Ramírez, 1975). En Río Hondo, nos dice la observadora citada, «los guerrilleros circulaban por todo el pueblo con tranquilidad; ellos llegaban aquí, en ese salón que tenemos a la par de la iglesia y al centro nutricional donde yo trabajaba. Allí venían ellos a jugar *ping-pong*. Bajaban de la Sierra de la Minas solo a jugar *ping-pong*. En muchas ocasiones me acerqué a conocerlos en persona, no llegué a tener ningún tipo de amistad con ellos, pero sí los llegué a conocer bien como todo mundo los conocía aquí. Río Hondo se había convertido en una fortaleza de la insurgencia que nació con los militares que se sublevaron en la Zona Militar de Zacapa en noviembre de 1960. Aquí se sentaban tranquilos, así como estamos nosotras ahora» [E-RH2-CCH-01.07.201].

Mapa No. 10
Frentes Guerrilleros en el Nororiente años 60



Fuente: Interpretación de Luis González.

En el contexto de la contienda electoral de 1966 y la elección presidencial de Julio César Méndez Montenegro, candidato del Partido Revolucionario (PR), las FAR experimentaron una de las peores crisis de su historia. En ese momento se polarizaron las posturas entre aquellos que consideraban conveniente apoyar al gobierno de Méndez y aquellos que argumentaban que las elecciones constituían únicamente un mecanismo dilatorio, que no implicaría cambios sustanciales para el país; por consiguiente, que era necesario continuar con la lucha (Debray y Ramírez, 1975:274; Aguilera, 1998:139). En esta coyuntura de confusión

(octubre de 1966) muere Turcios Lima, comandante de las FAR, en un accidente automovilístico. Su muerte provocó un gran vacío de poder y una fuerte disputa por la comandancia entre las diferentes facciones y/o jefaturas. En ese preciso momento, el Ejército lanzó una gran ofensiva militar en la Sierra de las Minas. Esta ofensiva y las que le siguieron fueron comandadas por el coronel Carlos Arana Osorio, y contaban con un significativo apoyo de las fuerzas armadas norteamericanas y de la élite nororiental (las mismas fuerzas que años atrás se habían aliado para derrocar al gobierno de la Revolución).

2. La ofensiva militar 1966-1967

Mientras la guerrilla se sentía triunfal y desprevenida, el coronel Arana Osorio acumuló la información disponible acerca del Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI), infiltró su base de apoyo en la región, contacto a los hacendados de la región, organizó y entrenó a las milicias clandestinas que entrarían en acción en octubre de 1966. En el libro *Las pruebas de fuego, la crítica de las armas*, Regis Debray y Ricardo Ramírez plantean que una de las debilidades de la guerrilla en el nororiente fue que ésta organizó su «retaguardia» sobre bases más logísticas que políticas; por consiguiente, los campesinos que colaboraban con la guerrilla no recibieron una sólida formación política de ella. Además, los guerrilleros se instalaron en campamentos fijos muy cerca de los poblados; ello les permitía preparar sus alimentos en la casa de algún campesino, y aún coquetear con sus hijas (Debray y Ramírez, 1975:288), pero ponían en riesgo la seguridad de sus colaboradores.

Desde la perspectiva del Ejército, la insurgencia armada tenía vulnerabilidades tácticas, además de discrepancias, que presentaban serios problemas internos, debido a la rivalidad, dentro del movimiento, de los líderes de origen militar con los de origen estudiantil. Según Gramajo (1995:105), esta rivalidad afectaba la capacidad para adecuar la dirección estratégica e integrar dos aspectos fundamentales de su lucha: la política y la lucha armada propiamente dicha. Estos problemas de carácter conceptual entre la insurgencia favorecían al Gobierno, pues mientras llegaban a un acuerdo, el movimiento sedicioso se mantuvo aislado de la población por no haber desarrollado un programa político motivador. Mientras que el Ejército organizado, entrenado y equipado para pelear una guerra como la de Corea, empezó a aplicar los conceptos básicos de la contrainsurgencia

en Guatemala, cuyo eje era el involucramiento de la población civil en el combate a la insurgencia a través de la formación de fuerzas paramilitares.

Para algunos guerrilleros, el ubicarse en el nororiente era como «sentirse en casa», ya fuera porque algunos de ellos eran originarios de esta región, o porque habían estado destacados en alguna de sus bases de militares. Este grupo no previó la reacción de las élites anticomunistas del nororiente, quienes no eran partidarias de aquellos cambios revolucionarios que afectaran sus intereses y espacios de soberanía provinciana que habían recuperado en la contrarrevolución. Según algunos de los viejos liberacionistas, durante la primera etapa de este movimiento no se sintieron muy amenazados por los sublevados, pues de alguna manera éstos eran militares con quienes habían tenido un trato cercano. Además, en la historia política de Guatemala, pero particularmente en la historia del nororiente, este tipo de sublevaciones militares había sido frecuente. De hecho, era la forma usual, aquella en que se solía solventar la contienda política entre diferentes facciones que peleaban por el control del Estado (las memorias de *los Montañeses, los Lucios, los Remincheros, los Castillistas,* entre otros, no eran muy distintas a lo que observaban durante los primeros años de este movimiento). Las cosas empezaron a cambiar cuando los militares se aliaron a sus antiguos «enemigos» del Partido Guatemalteco del Trabajo. Pero, sobre todo, cuando ajusticiaron a los potentados locales y comisionados militares de La Fragua de Zacapa que participaban en las filas de MLN. Entre ellos, Abelardo Cordón, Idalecio Ventura, Daniel Franco, Sinecio Vanegas, Manuel Orellana Portillo, Rigoberto Orellana y Manuel Aldana.

Estas muertes, provocadas por la guerrilla de Turcios Lima, asegura el escritor zacapaneco Marco Antonio Ordoñez (2007:22), solo lograron despertar el repudio de los demás agricultores acomodados, pues todos los asesinados lo eran. Además, agrega Ordoñez, «le tentaron *las criadillas al tigre*, cuando emboscaron y asesinaron a once militares en la ruta al Atlántico, donde murió el capitán Amézquita. Tras esta emboscada, Méndez Montenegro ordenó al Ejército *combatir a la guerrilla hasta terminar con ese cáncer, aplicando la cirugía amputativa*» (op. cit. 23). Entonces, nombró comandante de la brigada Rafael Carrera (Zona Militar de Zacapa) al coronel Carlos Arana Osorio, quien, haciendo uso de buena estrategia y con el apoyo de los agricultores descontentos, consiguió eliminar a la guerrilla (óp. cit. 23).

El coronel Arana había sido entrenado en escuelas militares norteamericanas y conocía bien la estrategia contrainsurgente difundida por la Doctrina de

Seguridad Nacional, pero, sobre todo, conocía muy de cerca la tradición miliciana, el pensamiento anticomunista y la destacada participación que tuvo un influyente sector de la élite oriental en las filas del MLN. El éxito de su estrategia contrainsurgente se basó, entre otros factores, en la coparticipación de los potentados de la región y la reorganización del Ejército de Liberación Nacional, el cual no se había desarmado y continuaba funcionando como una milicia privada que se reactivaba cada vez que era necesario defender el orden provinciano. Una de las primeras acciones de Arana para llevar adelante la campaña militar del 66-68 fue contactar a los viejos anticomunistas de Esquipulas, Chiquimula, Estanzuela, Zacapa, Gualán, Teculután y Río Hondo. De hecho, estos ya estaban molestos con las acciones de la guerrilla en la región.

Cuando comenzó el combate contra la guerrilla, analiza Consuelo Chacón (2011), aquí se estableció una relación directa entre el MLN, la gente de la Liberación y las milicias civiles. «Ahí establezco la relación, imagínese, estamos hablando solo de 10 años de diferencia, de 1954 a 1961, fue muy poco tiempo, cuando aparecen las primeras organizaciones guerrilleras acá. La gente estaba preparada. En los años cincuenta, aquí habían quedado los *liberacionistas* que estuvieron apoyando la llegada de Castillo Armas y sacaron a *los comunistas* de aquí» [E-RH2-CCH-01.07.2011:8].

La idea de esta campaña era hacer que la represión no pareciera un sistema de Estado aplicado desde arriba, sino una reacción popular y espontánea procedente de abajo, desde los mismos vecinos a manera de cruzada cívico-religiosa, que ponían en marcha los antiguos reflejos de la lucha contra del comunismo y en defensa de los valores de la sociedad provinciana, católica y patriarcal. Al mismo tiempo, involucrar a la sociedad local y hacerla actor y cómplice de la violencia. A partir de junio de 1966 empezaron a aparecer diferentes asociaciones anticomunistas, cuyo objetivo era «restablecer el clima de orden, de seguridad y de trabajo alterado hasta entonces por la subversión».

El Gobierno autorizó a los ganaderos, agricultores acomodados y comerciantes del nororiente a portar las armas que prefirieran y a emplearlas a discreción contra cualquier persona que consideraran sospechosa (campesinos, empleados, trabajadores agrícolas); y en diciembre de 1966, un decreto oficial otorgó a las milicias civiles la categoría de un cuerpo de seguridad legal. Además, se perfeccionó la red de vigilancia y espionaje, compuesta por los comisionados militares ya instalados en cada uno de los municipios del país. En el nororiente,

explica un funcionario chiquimulteco muy cercano al general Arana, la mayoría de los comisionados militares eran ganaderos, agricultores acomodados y exmilitares que representaban los intereses de la élite regional. A partir de la ofensiva militar de Arana, los comisionados militares llegaron a ser individuos realmente poderosos. Ellos representaban la autoridad del Ejército, así como el poder derivado de su posición en la estructura de la élite local. Realmente, enfatiza el funcionario citado:

> «La gente de fuerza de Arana era de Chiquimula. Cuando Arana llegó a la Zona Militar de Zacapa, la gente que lo empezó a apoyar fue la gente de Chiquimula. Después que él tomó cierto auge, se organizó la gente de Zacapa, pero, básicamente, la gente que estuvo con él, la gente civil que estuvo con él desde un principio, los que dijeron: "*vamos a lo que salga*", fue la gente de Chiquimula, porque en Chiquimula había muchísima gente que lo conocía y lo quería. Lo que sucede en oriente es que en ese tiempo estaba el famoso sistema de comisionados militares, pero aquí en oriente los comisionados militares no son gente pobre. No, no, aquí son los que tienen educación y tienen dinero, esos eran los comisionados militares. En Chiquimula, los ganaderos eran los comisionados militares y también había algunos maestros que eran comisionados militares. Esa fue la gente que originalmente apoyó a Arana. Después vinieron los de Zacapa. Pero sí fue gente muy útil la que apoyó a Arana» [E-Gt20-RP-02.2012].

Luego de que fueran publicados los informes de esclarecimiento de la memoria histórica, fue ampliamente conocido que la mayoría de los escuadrones de la muerte se organizaron en el oriente de Guatemala a partir de la campaña militar de 1966-1968 para combatir a la guerrilla que se asentó en esta región. En el contexto de dicha ofensiva, cobraron fuerza las organizaciones clandestinas de contrainsurgencia autodenominadas Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (Mano); Ojo por Ojo[117], El Jaguar Justiciero, Nueva Organización Anticomunista (NOA), Consejo Anticomunista de Guatemala (Cadeg)[118], las que contribuyeron a implantar un clima de represión agravado con el asesinato de varios líderes políticos (Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 2004:117).

117 Comandada por Oliverio Castañeda Paiz, vicepresidente del Congreso en representación del MLN en el periodo 1970-74. Castañeda Paiz fue asesinado el 25 de junio de 1972, antes de cumplir su periodo como diputado, por un comando de militares vestidos de civil.

118 El Cadeg y el NOA estaban organizados directamente por el Ejército sin integrar a civiles en las estructuras de mando; esto último les permitía controlar mejor las acciones de sus integrantes y las de aquellos escuadrones cuyos mandos fueran influyentes oligarcas o políticos anticomunistas asociados con ganaderos o agricultores acomodados de la región nororiental en un momento en que éstos operaban con importantes márgenes de independencia del Ejército y su empresa del terror se estaba privatizando.

Además del apoyo económico y operativo que les brindaba el Ejército, la mayoría de estos escuadrones recibía dinero de gente pudiente, especialmente de familias oligarcas y comerciantes radicados en la ciudad capital, Antigua Guatemala, en el oriente y en la costa sur.

El Movimiento Anticomunista Nacional Organizado, conocido comúnmente como la «Mano Blanca», divulgó el inicio de sus acciones el 3 de junio de 1966. Su consigna era «Por una Guatemala próspera y libre del comunismo»; y su insignia, una mano blanca sobre un círculo rojo y debajo de estos una advertencia: «Esta es la mano que erradicará a los renegados de su nacionalidad y traidores de la patria». La insignia de la mano representaba a los cinco mandos civiles del escuadrón, entre ellos el hacendado Raúl Lorenzana, Orantes Alfaro y Nufio (Remhi, tomo II, 1996:93). Esta agrupación anticomunista paramilitar, dedicada a tareas de represión política, operó en todo el territorio nororiental donde se movía la guerrilla, particularmente en Morales y Los Amates (Izabal), Gualán, Teculután y Río Hondo (Zacapa), en Chiquimula y en la capital. En un manifiesto publicado en noviembre de 1967, la Mano, haciendo uso de las metáforas de la enfermedad y la intervención quirúrgica, planteaba:

> «Urge adoptar medidas que pongan fin a la inmoralidad reinante. "La gangrena requiere amputación de los miembros enfermos, y el cáncer la extirpación de sus raíces". Nuestro movimiento hará un gobierno fuertemente organizado, con hombres fuertes, pero dentro del marco de las normas jurídicas. Impondremos el orden, la organización, la disciplina, el sentido del deber, la honestidad y el trabajo. Ningún país puede sobrevivir cuando en él domina la anarquía con máscara democrática» [La Mano, 08-11-1967].

En un principio, las fuerzas paramilitares de oriente se organizaron en pequeños escuadrones comandados por un jefe local. La mayoría de estos grupos se aglutinó bajo el amplio paraguas de la Mano Blanca, organizada por el capitán Germán Chupina, y recibían entrenamiento en la Brigada Militar de Zacapa. A sus integrantes orgánicos, el Ejército los equipó con una metralleta, tres granadas y una pistola automática calibre 9 milímetros. La mayoría de sus dirigentes eran *finqueros* locales (principalmente ganaderos o agricultores acomodados), que habían sido colaboradores y/o excombatientes del Ejército de Liberación Nacional y fungían como jefes de comisionados militares en su municipio. Estos hombres tenía claro que «su lucha desde 1954 había sido contra el comunismo; por lo mismo, apoyaban sin discusión la estrategia del coronel Arana». Entre los nororientales que figuran por su participación en el Ejército de Liberación

Nacional en 1954, y que años más tarde se unieron a las fuerzas paramilitares comandadas por Arana en 1967, están: Manuel Orellana Portillo (La Fragua, Zacapa); Rubén Cordón, Rubén Guzmán, Coronado Cordón, Antonio Cordón, Indalecio Ventura, Arturo Galdámez, Julio y Jorge Urzúa (San Jorge); Oliverio Castañeda Paiz, Romilio Torres Chacón, Arnoldo Vargas (Zacapa), Mariano Sánchez y Carlos Thompson (Gualán); Tomás Orellana, Gonzalo o *Chalo* Orellana, Alfredo Orellana (Río Hondo); Héctor Solís, José Duarte, Emilio y José Moscoso (Chiquimula); los Pacheco, Oscar Baldizón y Chaulín Valdez (Esquipulas); los Sánchez Cabrera (Estanzuela); los Cordón (Teculután). La mayoría de estos hombres pertenecía a las familias pudientes de sus municipios; eran hombres respetados, pero muy temidos por su comunidad» (Ordóñez, 2007:32).

Estos grupos de civiles armados fueron concebidos como *los brazos operativos* de la inteligencia, sobre todo para amenazar y llevar a cabo ejecuciones perpetradas contra los opositores políticos. Uno de sus principales impactos fue la creación del terror psicológico entre la población, en tanto que sus integrantes eran vecinos del mismo pueblo y conocían la identidad y movimientos de aquellas personas acusadas de «comunistas». Solo en 1967 aparecieron en listas de la muerte más de 500 personas. Fue notable el fuerte acento anticomunista, con el que pretendían ganar legitimidad para su causa entre ciertos estratos sociales (Remhi, tomo II, 1996:93).

La operación militar, comandada por Arana entre 1966-68, fue radicalmente diferente a las anteriores. En principio, el Ejército contaba con financiamiento, armamento moderno y entrenamiento por parte de Estados Unidos. Según el general Gramajo (1995), a través del Programa de Asistencia Militar (MAP, por sus siglas en inglés), se les equipó con armamento moderno (para ese entonces), como el fusil M-1 Garand, morteros de 81 mm y 60 mm, ametralladoras Browning calibre 0.30. De igual modo, sus oficiales habían sido entrenados en la Escuela de la Américas (en Panamá) y en diferentes escuelas de EE. UU. Muchos oficiales habían realizado cursos de paracaidismo, *Ranger* (comandos), cursos básicos y avanzados de diferentes tipos de armas. Además, «habían absorbido la experiencia de combate norteamericana aplicada en las guerras de Corea y Vietnam», y habían estudiado «los principios filosóficos para defender al mundo libre de la amenaza comunista contenidos en la doctrina de Seguridad Nacional» (Gramajo, 1995:105). El Programa de Asistencia Militar estadounidense le

concedió alrededor de US$6.8 millones al gobierno de Méndez Montenegro entre 1967 y 1970. El Gobierno guatemalteco también recibió otros US$11 millones en equipo militar estadounidense. Además, la Oficina de Seguridad Pública (PSO, por sus siglas en inglés), bajo la tutela de la AID, incrementó su asistencia financiera a la Policía Nacional guatemalteca de US$1 millón en 1963 y 1966, hasta US$2.4 millones entre 1967-1970, y la policía aumentó de 3,000 a 11,000 agentes[119].

Siguiendo la experiencia de combate norteamericana, en la ofensiva militar del 66, el Ejército estableció un cerco en toda regla, móvil y permanente al mismo tiempo. Los pueblos más elevados, cercanos a las cúspides de la sierra, fueron evacuados por la fuerza, creando así un vacío desde arriba. Al mismo tiempo, el Ejército ocupó desde abajo los pueblos que bordean la carretera al Atlántico y estableció en ellos fuertes guarniciones. Simultáneamente, patrullas ligeras, dotadas de armas automáticas y comunicadas entre sí por radio, subían sin cesar hacia la cumbre, coordinando sus movimientos y cuadriculando la vertiente boscosa y habitable de la sierra, por donde se movían los guerrilleros, y cerrando cada rectángulo así aislado. La línea de las crestas de la sierra fue ocupada, mientras una columna móvil se desplazaba en camiones por la carretera, más abajo. En el momento en que una patrulla establecía contacto con la guerrilla, indicaba sus coordenadas por radio al convoy motorizado. Entonces, una columna de soldados subía al camino que había seguido la patrulla para tomar por detrás a la guerrilla en su retirada. A un tiempo, la aviación bombardeaba la zona de operaciones para aterrorizar a la población civil y obligar a la guerrilla a delatarse con sus movimientos (Debray y Ramírez, 1975). Una profesional que trabajaba en Río Hondo durante la ofensiva militar de 1966-68, que estableció un trato cercano con los militares que llegaron a Zacapa en ese contexto, explica:

> «En esos años 1966-1968, yo vi cómo se levantaba el polvo en este cerro que usted ve aquí enfrente [del casco urbano de Río Hondo]. Cuando el Ejército dio la orden de atacar, ya habían organizado a toda la gente civil, ya había apoyo de otros cuerpos militares, principalmente de la base de Jutiapa. Se fortaleció a los militares y se fortaleció a las milicias que apoyaban al Ejército; y se entrenó a los comisionados militares que eran los meros jefes [...]. Entonces, ya con todo eso organizado vinieron a bombardear la Sierra de las Minas. Vinieron a bombardear todo lo que se moviera en la montaña. ¡Todo lo que se movía había que matarlo! Así es como yo pude ver desde el centro de Río Hondo cómo venían

119 Institute for Policy Studies, *Background Information on Guatemala, The Armed Forces and U.S. Military Assistance* (Washington, D.C.: Institute for Policy Studies, junio de 1981:5/Citado en Berger, 1992:141).

> los aviones […], cómo se daban la bajadita en esta montaña que tengo enfrente y se levantaban aquellas nubes de polvo [E-RH2-CCH-01.07.2011:22]. Uno de los pilotos que venía como refuerzo de la Fuerza Aérea, una noche, con lágrimas en los ojos, llorando me decía: "¡No tenés idea [de] lo que me está costando hacer ese trabajo!" (Claro, eso me lo dijo bajo los efectos de unas cervezas). "He tirado las bombas, he visto cómo el polvo se levanta, pero he visto cómo salen de aquellos ranchos gente pobre que vive ahí, he visto corriendo mujeres, niños, ancianos. Y, saber que yo traía la orden y la ejecuté"» [29].

Historias como la anterior escuchamos muchas durante el trabajo de campo en el nororiente, en tanto que la ofensiva del 66-68 rebasó lo que hasta entonces era factible dentro del mismo Ejército. Esta fue la primera vez, de muchas otras que le siguieron, en la que se bombardeó indiscriminadamente a la población civil durante el conflicto armado en Guatemala. Tras los bombardeos, la población de la Sierra de las Minas quedó circulada por el Ejército. Muchos fueron los campesinos que entre la espada y la pared se volvían contra los guerrilleros y les reprochaban su comprometedora presencia, que traía contra ellos y sus familias la ira de la represión, mientras que los guerrilleros siempre tenían la posibilidad de huir (Debray y Ramírez, 1975:298-299). En agosto de 1967 ya no existía más la guerrilla rural organizada en el nororiente de Guatemala. No obstante, los mismos nororientales que participaron en la estrategia contrainsurgente no previeron que ese era apenas el primer círculo de una compleja espiral de violencia.

2.1 La acción cívico-militar

La ofensiva del 66-67, comandada por Arana, se distinguió radicalmente de las anteriores por hallarse frente a una guerrilla desorganizada, desmovilizada, sin unidad interna, con la mayoría de sus jefes ausentes de la zona de operaciones; y por lo novedoso de la estrategia y medios empleados. Por primera en vez en Guatemala se aplicaba metódicamente la contrainsurgencia en su doble cara: *civil* y *militar* (Debray y Ramírez, 1975:290). Siguiendo las recomendaciones de la doctrina de Seguridad Nacional y las recomendaciones de Alianza para el Progreso, se puso en marcha un programa de «acción cívica» entre la población. El Ejército construyó escuelas y puentes, reparó los caminos en mal estado, y se instaló el agua potable en los pueblos de la zona de operaciones. Se abrieron brigadas de salud que ofrecían gratuitamente atención médica y odontológica a personas que hasta entonces no habían visto a un médico, ni a un dentista; por la noche, se proyectaban películas en la plaza del pueblo. El 22 de diciembre de 1966 se proclamó la reforma agraria de «urgencia nacional» (Decreto 1653).

El Gobierno aceleró la distribución de «fincas nacionales» a los pequeños campesinos, sobre todo en las zonas en que se simpatizaba con la guerrilla. La AID ofreció medio millón de dólares para ayudar al desarrollo de los departamentos de Zacapa e Izabal. Fundamentalmente, estas medidas apuntaban a fortalecer a los terratenientes medios o agricultores acomodados de la región que estaban participando activamente en la campaña contrainsurgente de la región. Un funcionario chiquimulteco explica:

> «Arana reconquistó […] Zacapa a base de *acción cívica militar.* No sé si usted recuerda […] ese programa. Ese programa lo inauguró Arana en Zacapa; se llamaba Acción Cívica Militar. Le ayudaba a la gente con sus siembras, les daba trabajo, riego y agua potable. Arana miraba todos los planes comunitarios. Entre esos planes construyó la famosa toma de Zacapa, que es la toma de Agua Blanca. Esa es una toma que está en un lugar que ahora se llama la Presa, porque la gente nombró así al lugar. Pero ese lugar es en una aldea de Zacapa que se llama Los Llanos de Calderón; ahí está la presa en el río Grande».

Durante este periodo, el Ejército expandió su papel en la política. Continuó llevando a cabo las tradicionales tareas políticas, la eliminación de los disidentes políticos, el diseño e implementación de un programa contrainsurgente y la construcción de obras públicas. Además, los oficiales militares (muchos de ellos oriundos de Zacapa y Chiquimula) ocuparon las direcciones de varias agencias gubernamentales, la mitad de los puestos del gabinete, y todas las gobernaciones departamentales (Berger, 1992). Los Estados Unidos también financiaron proyectos de desarrollo que estaban estrechamente relacionados con el programa contrainsurgente y el Ministerio de Defensa. Estos proyectos fueron diseñados para incrementar la presencia del Estado en las regiones afectadas por la guerra, y proporcionar los servicios necesarios a los campesinos y de esta manera conquistar su lealtad al Ejército.

De hecho, el Ejército y la AID experimentaron por primera vez en el nororiente el modelo de seguridad y desarrollo, que con sus variantes y matices continuarán implementando durante el conflicto armado. Durante los años 1966-1970, los ministros de Defensa, Agricultura, Servicios Públicos y Salud coordinaron una serie de proyectos, financiados en gran parte por la AID, en la región de Zacapa e Izabal ocupada por la guerrilla. Los objetivos consignados por estos proyectos eran el promover el desarrollo comunitario y la extensión de los servicios agrícolas; construir escuelas, carreteras de acceso, suministro de agua y establecimientos de salud; así como ayudar en la formación de cooperativas y brindar las facilidades de créditos rurales (Berger, 1992:142).

3. Las zonas militares y la formación de actores armados

A fines de los años sesenta y principios de la década de los setenta, la Segunda Brigada Militar de Infantería Capitán General Rafael Carrera (Zona Militar de Zacapa) se convirtió en la principal instancia de entrenamiento y fogueo de los militares que ocuparon los cargos más altos en la institucionalidad estatal. Desde este espacio es posible observar las trayectorias políticas que siguieron varios de los presidentes, ministros de gobernación y defensa que administraron el país durante las dictaduras militares. De hecho, su experiencia en las tareas contrainsurgentes les permitía ascender rápidamente en la jerarquía militar, asumir los cargos de alto nivel en la institucionalidad del Estado, y adquirir espacios de poder y notoriedad dentro de las estructuras militares del país. Ejemplos de ello, son las trayectorias seguidas por aquellos que fueron presidentes, Jefes del Estado Mayor Presidencial, ministros de la defensa y gobernación o directores de la Policía Nacional (entre ellos destacan las figuras de Carlos Arana Osorio, Romeo Lucas García, Otto Spiegler, Mario López Fuentes, Donaldo Álvarez Ruíz, Germán Chupina Barahona, entre otros,). Durante los años 60 varios de estos militares hacía parte de la «Plana Mayor de la Zona Militar de Zacapa», la cual, se convirtió en la guarnición más poderosa de todo el país durante la primera etapa del enfrentamiento armado [E-RH2-CCH-01.07.2011:8].

Aunque la Zona Militar de Zacapa tenía su propio regimiento de oficiales y soldados, en el período más intenso de la ofensiva militar del 66-68, por esta zona pasó buena parte del ejército de Guatemala. Cada tres meses el personal se reforzaba con dos compañías de la Guardia de Honor y dos compañías del Mariscal Zavala que eran las bases de la capital. Además, rotaban por esta zona las compañías de la vecina Zona Militar de Jutiapa. Todas estas compañías pasaban tres o cuatro meses al año bajo el mando del emblemático comandante de esta zona (el coronel Carlos Arana Osorio). Esto último le permitió a Arana alcanzar una gran popularidad entre las filas de Ejército. Mientras que, la administración del programa de Acción Cívica Militar le permitió concentrar el poder, no solo del ejército, sino de las diferentes instituciones del Estado en la Región. En todo el oriente de Guatemala, explica un notable abogado chiquimulteco y gran conocedor de la gestión del coronel citado:

> Arana dirigía a todas las autoridades civiles. Ellos tenían que trabajar en función de la Acción Cívica Militar. Realmente, allí el poder era él. Desde los 60, hasta el año 76, la Zona Militar de Zacapa era la expresión material del poder en Oriente. Ahí no mandaban ni los Ministros. Arana llegó como comandante de

> la Zona con todos los poderes que eran necesarios para operar en la región. No sé, si usted ¿conoce el sistema? A Arana le entregaron el oriente ¡con todo! Básicamente lo que Arana tenía allí era un *gobiernito* propio, porque las organizaciones de los ministerios tenían que consultar todo con él. Dependían de lo que él ordenara. Él era como un *presidentito* del nororiente. Déjeme decirle que en esos tiempos, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa e Izabal, eran algo así como el territorio de Arana. Él era como «el manda más» de todo ese territorio. Allí se hacia lo que él decía [E-G-RP- 02-08-2012].

El proceso de militarización, los abusos en el reclutamiento forzoso y la organización de los cuadros militares y paramilitares en el Oriente de Guatemala fue ampliamente documentado por el antropólogo norteamericano John Durston, quien hizo su trabajo de campo en Jutiapa durante los primeros años del decenio 60, del siglo XX. En esos años, Durston observó por ejemplo, que el comandante de la zona militar de Jutiapa (El coronel Arana Osorio, previo a su traslado a la zona militar Zacapa) era el principal representante del poder del gobierno en la región. Tenía bajo su mando varios cientos de soldados con armas automáticas modernas, estacionados en la base principal situada a cinco kilómetros de la cabecera de Jutiapa y en destacamentos en otros puntos de la región, especialmente en el segundo centro regional, Asunción Mita (Durston, 1972:81-82). Observó además, que dicho comandante trabajaba con un extenso sistema de inteligencia, por medio del cual recibía regularmente reportes sobre actividades políticas sospechosas en la región. Este sistema consistía en: 1) comisionados militares en todos los poblados; 2) el servicio de información secreta conocido como S-2 o G-2; y 3) las fuerzas regulares de la policía. Los comisionados hacían frecuentes reportes al comandante de reserva del departamento sobre la situación militar y política de su municipio; proveían información sobre la guerrilla, los bandidos u «otros grupos con propósitos de alterar el orden público», así como la presencia y actividad de personas desconocidas y sospechosas (81). Buena parte de los comisionados eran antiguos miembros del ejército, designados a estas posiciones honorarias después de su regreso a la vida civil. Un jefe de comisionados militares en cada municipio era nombrado por el Comandante de Reservas del departamento. Bajo el jefe había comisionados propuestos por él en cada cantón y aldea, y tantos ayudantes como fueran necesarios para cubrir a toda la población. Los reportes de los comisionados llegaban al jefe por telégrafo, correo, teléfono público y visitas personales, y se pasaban al Comandante en Jutiapa, quien a su vez enviaba la información importante a la S-2, el servicio secreto de la inteligencia en la

base de la Zona. Para 1965, Durston estableció que había 170 comisionados y ayudantes en el municipio de Jutiapa; 123 en Asunción Mita y 16 en Jeréa y Pasaco. Solo en el departamento de Jutiapa había 971 comisionados militares lo cual hacia un promedio de un comisionado por cada 50 hombres (84). Tanto la Policía Nacional como la Guardia de Hacienda complementaban los reportes regulares de la inteligencia militar de los comisionados y la S-2 notificaba a la Zona sobre cualquier actividad política sospechosa que observaran. (81). Durante el régimen militar, añade Durston, aun la administración de justicia en lo criminal estaba a cargo del Ejército. El Auditor de Guerra decidía en fallo escrito sobre todos los casos de asesinato, robo y posesión de armas de calibres reservados para el Ejército, incluyendo rifles, pistolas y armas automáticas. (85).

Según el antropólogo citado, a través de una bien llevada campaña publicitaria sobre el programa de «Acción Cívica», una pequeña parte del poder militar estaba dedicada a satisfacer las necesidades expresas del consejo municipal (postes para lámparas de alumbrado en el parque, o proveer materiales y camiones para construcción de escuelas, un conjunto musical para un baile de la localidad, etc.). El Programa de «Acción Cívica» del Ejército estaba bajo la oficina de Relaciones Públicas, y este acercamiento para proyectar una imagen favorable del ejército podía también ser visto en cartelones ubicuos proclamando «Trabajos del Gobierno Militar» en construcciones de escuelas, carreteras, puentes, etc. (85). Oficiales de la zona ayudaban también a organizar el «Programa Cultural de la comunidad», con diversiones públicas en el parque de Jutiapa. También participaban en ceremonias de entrega de ganado a finqueros y en el programa de crédito supervisado del Servicio Cooperativo Interamericano de Crédito Agrícola Supervisado –SCICA–. Todas estas participaciones por benignas que parecieran eran planteadas por el Comandante de la Zona.

En los años sesenta la participación del ejército se extendía a todos los planos de la vida provinciana del oriente y el comandante de las zonas militares y sus altos mandos, gozaban de prestigio social, lo cual era claramente perceptible en cada una de las fiestas, y celebraciones civiles, religiosas y militares. La destacada posición en la estructura de poder regional del comandante de la zona -observó Durston- fue gráficamente demostrada durante la inauguración de una nueva base del Ejército en Jutiapa. Compartiendo la gloria con el comandante estaban sus «invitados de honor» figuras tales como el Obispo, varios militares de los Estados Unidos y sus consejeros, así como el propio Jefe de Gobierno.

Además estaban los más influyentes finqueros de la región, los miembros del Club de Leones, el gobernador departamental y los alcaldes de los municipios del departamento (86). Durante la ceremonia de inauguración y la inspección de los campos, el Comandante de la zona, el Obispo y el Jefe de Gobierno estuvieron constantemente juntos conversando, sino como iguales, por lo menos como miembros de la misma alta esfera de prestigio y poder (86). Además, el Comandante de la zona era un activo miembro del Club de Leones y como uno de los grandes finqueros de la región, era un participante activo en la estructura de poder suprarregional. Su capacidad de control y dominio, era obvia para todos y universalmente respetada (86). La combinación militar y política en un sistema de seguridad con una concentración sin rival de fuerzas armadas, agrega el antropólogo norteamericano, hacía del Comandante la persona más poderosa de la región. Como el oficial de más alta graduación, era el principal representante en la región, del poder nacional (87).

La fuerte presencia y ostentación del poder militar en el oriente de los años sesenta y setenta, llevó a que muchos jóvenes de la región vieran en el ejército la vía más expedita de asenso social. Mientras que para algunas mujeres jóvenes el "casarse bien", significaba casarse con un militar. Durante esta particular época, ubicarse dentro del círculo de oficiales que llegaban a "la zona", era un asunto de prestigio social. Implicaba, no solo, disfrutar de las prebendas que en ese entonces disfrutaban los miembros del ejército, sino cierta probabilidad de *conexiones*, *influencias* o ascenso rápido a la cúpula de poder nacional. Durante esos años, conseguir una plaza de maestro/a, enfermero/a, juez/a o cualquier otro empleo público dependía de la buena conexión que se tuviera con alguien de "cuello" dentro de las filas del ejército. Las puertas de las más altas esferas del poder se abrían con mayor facilidad por medio la carta de recomendación o la llamada oportuna de un militar bien posicionado en el gobierno. En tanto que, la parte beneficiada por el favor, contraía una deuda moral que debía ser pagada ayudando o apoyando al superior en cualquier forma que estuviera dentro de sus posibilidades. El individuo que había recibido un favor explicita o tácitamente expresaba: "Estoy altamente endeudado con usted; si hay algo que yo puedo hacer por usted no dude en decírmelo" (Durston, 1972:89).

La prolongada dominación militar que se vivió en el nororiente durante los años 60 y 70, sumada a la formación de los escuadrones de la muerte y la intensificación de los mecanismo de reclutamiento forzoso o "agarradas al cuartel", configuró

esta región como una importante reserva de cuadros militares (desde militares de escuela hasta aguerridos kaibiles y soldados) y cuadros paramilitares que se incorporaron activamente a la inteligencia militar y las estructuras paralelas del Estado. Durante este período muchos de estos cuadros recibieron entrenamiento y una orientación especial por parte de ejército de Guatemala, y en no pocos casos, en la Escuela de las Américas con sede en Panamá.

En los archivos regionales y las entrevistas del trabajo de campo constaté que durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolló una fuerte identidad militar en la región. Esta identificación con las armas, la cultura guerrerista y la integración a las fuerzas militares y/o paramilitares del Estado tiene su arraigo en memorias milicianas más antiguas en las que se rememora la gallardía de aquellos orientales que participaron en la defensa de la fronteras coloniales de la Costa Atlántica frente a las amenazas de otras potencias imperiales (Inglaterra, Holanda y Francia), y más tarde, en las luchas provincianas frente a la formación del Estado Federal en Centroamérica. No obstante, es claro que fue durante las primeras décadas de la Guerra Fría, cuando el Estado Guatemala, con apoyo financiero y asesoría del gobierno norteamericano formó a la mayoría de los cuadros militares y paramilitares del oriente.

En este sentido, hay que tener presente que para los jóvenes de escasos recursos que vivían en comunidades pobres, distantes y carentes de escuelas, el servicio militar llegó a ser la única manera a través de la cual podían cursar los primeros años de escolaridad. Además, éste era un espacio de ascenso social e incidió en la diferenciación económica a lo interno de sus comunidades (Dary, 2010:178). El reto de algunos de los jóvenes orientales que se incorporaron a las filas del ejército era «*no quedarse como simples soldaditos*», sino tratar de ascender en la jerarquía militar. Para lograr esto, debían dar prueba, no solo de su disciplina y lealtad para con las fuerzas armadas, sino de su coraje y sangre fría a la hora de ejecutar las tareas que le fueran asignadas. No es casual, entonces que muchos de los oficiales y especialistas de la inteligencia militar saldrán de esta región y luego desempeñaran cargos de dirección operativa en la estrategia contrainsurgente que se llevará a cabo en la ciudad capital, en los territorios indígenas de las Tierras Altas noroccidentales, en la Franja Trasversal del Norte y Petén. No fue casual tampoco, que muchos de estos jóvenes murieran en combate en una guerra cuyos objetivos e intereses desconocían, mientras muchos otros, aún guardan en silencio las memorias del horror.

4. Privatización de la violencia y soberanía provinciana

Tras el éxito de la ofensiva militar del 66-68, la fuerza que alcanzaron los dirigentes de las organizaciones paramilitares en el nororiente les permitió fortalecer su poder y soberanía regional. Los jefes de estas agrupaciones se movían como verdaderos caciques en todo el oriente del país. Ellos elegían y quitaban alcaldes, administraban la justicia desde su particular forma de entender la vida, movían sus *influencias* dentro de la jerarquía militar y hacían favores a una amplia clientela política. Aquellos que militaban en los partidos de derecha, principalmente en el MLN y el PID cerraron filas, y aprovecharon la coyuntura para tildar de comunista a sus posibles opositores y sacarlos de la arena política. Las historias del cierre de espacios y persecución a los contendientes políticos se refrendaban en cada contienda electoral. En varios municipios de Zacapa y Chiquimula, no había pierde. El único partido que se inscribía era el MLN y los alcaldes y diputados eran nombrados a dedo por los jefes de las organizaciones anticomunistas.

Por otra parte, algunos de los hombres que integraron éstos escuadrones de la muerte se involucraron activamente en el secuestro de personas influyentes y empezaron a cobrar su rescate, el caso más sonado de este tipo de prácticas fue el secuestro del arzobispo monseñor Mario Casariego, el 16 de marzo de 1968. Uno de los sindicados de haber dirigido este hecho fue Raúl Estuardo Lorenzana Morales, influyente anticomunista y fundador de la Mano. Un mes más tarde, el 18 de abril de 1968, Lorenzana murió acribillado a balazos a una cuadra del Cuartel General, contiguo al Fuerte de Matamoros (Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 2004:570).

Los excesos cometidos durante los operativos contrainsurgentes motivaron la reacción del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, que le recomendó al presidente Méndez Montenegro controlar la actuación del Ejército. En este contexto se destituyó al ministro de la Defensa, coronel Arriaga Bosque, y al comandante de la base militar de Zacapa, coronel Carlos Arana Osorio, responsable de la estrategia contrainsurgente en el principal teatro de operaciones (Rosada, 1999:129). La destitución de Arana provocó descontento entre sus subalternos y entre aquellos nororientales que habían colaborado activamente en la ofensiva militar que éste coordinó entre 1966-1968. Finalmente, la separación de Arana del cargo de comandante de la Zona Militar de Zacapa y su exilio diplomático en Nicaragua, contribuyó a resaltar la imagen del coronel, y a capitalizar las bases

electorales que apoyaron su candidatura como presidente de la república para el periodo 1970-1974.

5. Paramilitares, crimen organizado y disputas de poder

> «Se convirtieron en especialistas de *eliminar* gente en la capital y quedaron enviciados de matar en su mayor gozo […]. Pero no tiene culpa el caballo, sino […] quien le enseña a trotar». Marco Antonio Ordóñez

La anterior frase del escritor anticomunista *Maco* Ordóñez expresa al desnudo el tipo de actor político modelado por el Estado durante la estrategia contrainsurgente que se aplicó en el nororiente de Guatemala durante la década de los 60. Para algunos de estos hombres, la experiencia adquirida durante la persecución a los« comunistas» se volvió rentable en términos políticos y económicos. Pasada la ofensiva militar, montaron su particular empresa del terror: empezaron a amedrentar, extorsionar y cobrar cuotas de seguridad a sus vecinos. Se convirtieron en vendedores de protección, secuestradores y asesinos por contrato, o dicho en el leguaje local, en matones por encargo. Los asesinatos se convirtieron en la vía más rápida y barata de dirimir conflictos, principalmente aquellos relacionados con la propiedad de la tierra. Los rumores, chismes y envidias avivaban el ejercicio de la violencia y fortalecían el poder de estos hombres.

Aun cuando buena parte de los ganaderos, agricultores y comerciantes acomodados de la región estaban convencidos de la legitimidad de la figura de los comisionados militares y de las fuerzas paramilitares, recuerdan que a muchos de sus integrantes «*se les pasó la mano* y cometieron abusos e injusticias con gente inocente». Es decir, con gente a la que no se conocía por «comunista», pues el serlo justificaba su muerte. Al analizar el papel que desempañaron algunos comisionados militares del nororiente, una profesional zacapaneca, esposa de un militar que participó en la estrategia contrainsurgente de Arana, recuerda:

> «Estos hombres, ya envalentonados, agarraron un poder tremendo en estos pueblos […]. ¡La ley eran ellos! Cuidado de aquel que les caía mal o era contrario […]. Ellos usaban la palabra contrario para perseguir a sus enemigos. Mucha gente murió así. Mucha gente a la que ellos le pidieron un viaje para que los llevara a algún lugar y se dieron cuenta de algo… o miraron algo, se murieron. Le puedo hablar de cinco pilotos que murieron en ese tiempo […]. Entonces iban a hacer viajes de noche […] Después dejaron de hacer viajes porque esto

> también sucedía en Zacapa, no solo aquí, porque ya estaban conformadas las Patrullas de Autodefensa Civil en todas las aldeas» [E-Z –CCH, 2011:19]. «Aquí quedó esto muy pesado, con gente así, que solo quería matar. Ya se había vuelto costumbre. Ya no había compasión, ya no había piedad, y eso se fue heredando, quedó ese pensamiento que ¡*solo matando al chucho se acaba la rabia*! Esa gente ya estaba bien envalentonada. Ellos tenían el poder, ellos eran los comisionados militares. Era gente que podía entrarle a todo. Estaban preparados para matar sin corazón. Así murieron muchos inocentes [19]. Ahora ellos son los que están reclamando indemnizaciones por todo el tiempo de servicio militar que dieron. Ellos erradicaron [a] la guerrilla en el oriente, eso es cierto, la erradicaron. Entonces, estos hombres se convirtieron en personas poderosas. Aquí el que se metía a problemas lo mataban y luego… silencio. Aquí nadie decía nada» [20].

Lo que en un inicio se expresó como un apoyo civil a la acción antisubversiva del Ejército fue derivando con el tiempo en una auténtica política del terror. Durante la segunda mitad de la década de los 60 y primera de los 70 circulaban listas de las personas consideradas enemigos de la patria por su proclividad al movimiento guerrillero; se atentó contra la vida de profesionales y dirigentes del movimiento popular, y principiaron a aparecer cadáveres con señales de haber sido torturados y después, asesinatos con arma de fuego (Rosada, 1999:127). Más aún, las extorsiones y secuestros por simple lucro se hicieron frecuentes. Todos estos hechos quedaban en la completa impunidad. En principio porque las víctimas o familiares de las víctimas tenían miedo de denunciarlos, pero sobre todo, porque el sistema de administración de justicia estaba cooptado por estas fuerzas represivas.

De acuerdo a la interpretación del general Gramajo (1995:108), para 1968, el sistema judicial ya se había convertido en un mecanismo inefectivo para impartir justicia. Los procedimientos judiciales resultaron ser muy vulnerables para las amenazas de los extremismos políticos. Represalias contra jueces, abogados y testigos se convirtieron en una práctica común; la mayoría de las veces, agrega el general citado, para entorpecer genuinos movimientos de reivindicación laboral o social, aprovechando la lenidad de los organismos policiacos y judiciales. Era muy eficiente y expedito etiquetar como «insurgentes» a estos movimientos, o simplemente asociarlos con la insurgencia para entorpecerlos o deslegitimarlos. Esto no solo agravó el deterioro del sistema judicial y la efectividad de las fuerzas de seguridad, sino al mismo tiempo mantuvo vigente al movimiento insurgente (óp. cit. 108).

Durante los primeros años de la administración de Arana surgieron contradicciones y disputas de poder entre los funcionarios de éste y los representantes del MLN, base política del terror, cuyos excesos se tornaban molestos para el nuevo gobierno. Los dirigentes del MLN consideraban que el programa político de Arana era demasiado avanzado para el país. De hecho, el discurso inaugural del nuevo presidente fue una sorpresa: hizo hincapié en un programa de desarrollo económico nacional para erradicar las causas económicas de la violencia, añadió que la lucha contrarrevolucionaria debía ser una «acción pacificadora con respeto a la ley»; y llegó a afirmar que «el asesinato destinado a intimidar al enemigo o vencerlo no era una forma legítima de lucha política» (Debray y Ramírez, 1975:318-319). Se dibujaba así una convergencia con el Frente Contra la Violencia, organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el nuevo gobierno. En agosto de 1970, el Consejo Superior Universitario llamó a todas las fuerzas políticas del país a un diálogo para poner fin a la violencia. Sus delegados se reunieron con el presidente, quien les dijo que estaba harto de los excesos cometidos por la extrema derecha (óp. cit. 319). Por su parte, el zacapaneco Oliverio Castañeda Paiz, vicepresidente del Congreso y fundador del escuadrón de la muerte Ojo por Ojo, en representación del MLN rehusaba categóricamente el diálogo con representantes del Frente Contra la Violencia, argumentando que los partidos del Gobierno no tenían razón alguna para dialogar con la oposición. Por su parte, el Gobierno cedió a la presión social y prohibió que la policía secreta –sin uniforme– procediera por sí a efectuar detenciones, suspendió los cateos nocturnos y autorizó a los ciudadanos a oponerse a todo intento de secuestro hecho de noche por civiles (óp. cit. 319).

En un artículo escrito por Joaquín Noval en 1971, titulado *El Estado y la violencia*, este antropólogo guatemalteco problematiza la política de terror que se vivía en el contexto del estado de sitio que estableció la administración de Arana Osorio de noviembre de 1970 a octubre de 1971. En este artículo, Noval se deslinda de la visión totalizadora del Estado y la violencia ejercida por éste, y nos presenta un panorama complejo del uso de la violencia por los diferentes actores armados que *compiten* por el dominio estatal. En ese contexto preciso, Noval plantea que aun cuando las matanzas populares se decidían en el nivel político, su ejecución por las organizaciones armadas de las distintas facciones en el poder respondía a su propia interpretación, sus necesidades inmediatas y, acaso, sus pasiones (1971:8). Los grupos de la clase dominantes –argumenta– tienen un poder de decisión y veto dentro del Estado, cuentan con leyes decididamente contrarias al

cambio. Además, tienen sus propias organizaciones armadas, las cuales operan fuera de un verdadero control del Ejército (óp. cit. 8).

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Noval, estas organizaciones paramilitares tenían estrechos vínculos con el oficialismo, pero no todas actuaban bajo la dirección de una jefatura única. Algunas actuaban por cuenta de sus jefaturas inmediatas en forma ocasional y, en algunos periodos, en forma sistemática. Por consiguiente, afirma el antropólogo citado, no hay tal unidad. La matanza popular no se ejecuta bajo una dirección única, capaz de decidir previamente en los casos concretos que políticamente lo ameritan. Sin embargo, hay apariencia de centralización (óp. cit. 9).

Desde el punto de vista del empleo de las armas, según Noval, el problema interno del Gobierno era grave. En principio, no podía controlar ni negar abiertamente a su propia gente, ni eludir los problemas que ésta le creaba; además, tenía que enfrentarse a los bandoleros incubados en sus propias filas y luego desligados de ellas; a los bandoleros «independientes» (que habían aprendido que era posible sobrevivir a salto de mata, con un arma en la mano y no tenían posibilidad de encontrar empleo como no fuera en el presupuesto oficial de la contrainsurgencia); y a las fuerzas de la izquierda revolucionaria, que ejercían la violencia armada.

Lograr que los grupos armados de las distintas fracciones en el poder dejaran de torturar, mutilar y matar, según este analista, sería muy difícil, en parte porque muchos de sus hombres de acción estaban enfermos, pero sobre todo, porque no se enfermaron solos y continuaban siendo pagados, mandados y protegidos desde las más altas esferas del poder económico y político. Estas «altas esferas» estaban unificadas en torno a un pensamiento estratégico: cerrarle el paso a la revolución. Mientras solo se tratara de reafirmar esta idea general, los organismos centralizados funcionaban. No obstante, agrega Noval, el conjunto reaccionario representa intereses contradictorios que impedían el funcionamiento de organismos operativos y tácticos centralizados (óp. cit. 10). Tal era la razón por la cual el Ejército no podía frenar las matanzas, no obstante la existencia de evidencias de que observaba los asesinatos perpetrados por grupos de militares y paramilitares con cierto sentimiento de disgusto y empezaba a sentir aprehensión.

En el seno del Gobierno, la «cuestión política» era realmente escabrosa: cómo neutralizar, en unos casos, y cómo conciliar, en otros, los distintos intereses

de las diversas facciones que lo integraban, para aceptar algún tipo de cambio. Desde la perspectiva de Noval, la «pacificación» no iba a producirse solo porque el Gobierno matara, por mucho que éste matara. El *bandolerismo* ya era desenfrenado. Había cuatro sectores de la sociedad guatemalteca que usaban las armas: a) el Gobierno, con todas sus facciones incluidas; b) las organizaciones de la izquierda revolucionaria; c) los bandoleros incubados en el seno del Gobierno y luego desvinculados de él; y d) los bandoleros «independientes». Los dos primeros sectores lo hacían por razones políticas. Los otros dos, lo hacían por razones personales. Pero en el sector político del Gobierno había grupos que en «sus ratos libres» también actuaban por motivaciones personales, con la tolerancia de sus jefes, aunque sin necesidad de su permiso previo. De la misma manera, en el sector particular de los bandoleros incubados en las filas oficiales y luego desligados de ellas, existían grupos que se unían a los anteriores en empresas de secuestro, extorsión, vejación o muerte, y que por el carácter de las víctimas, creaban problemas políticos de consideración.

Como ejemplo de la independencia alcanzada por algunos de los grupos paramilitares que operaban en los 70, Noval examina el caso del Ojo por Ojo, agrupación paramilitar comandada por el señor Oliverio Castañeda Paiz, diputado por Zacapa en representación del MLN y vicepresidente del Congreso de la República. Las evidencias reconstruidas por Noval mostraban que dicha agrupación no siempre actuaba supeditada a un organismo central único. Por lo menos en algunos casos, actuaba por cuenta de una de las fracciones en el poder. Esta, a su vez, procedía con la anuencia de alguna de sus alianzas tácticas, pero por su propia iniciativa y sin esperar la decisión de ningún organismo coordinador. Tal facción estaba representada por la dirección (o parte de ella) del Movimiento de Liberación Nacional (óp. cit. 26, 27). Dicho partido dominaba el Congreso de la República de 1970 a 1972. Para este mismo periodo, Noval identificaba a varios grupos similares, aunque ninguno tan poderoso como el descrito, ni con el mismo acceso a todos los lugares públicos o secretos en los cuales el Gobierno recluía a los presos o secuestrados políticos. Según Debray y Ramírez (1975:323) en aquellos días, Oliverio Castañeda Paiz llegaba en persona a las delegaciones de la policía, escogía a los detenidos y se los llevaba, sin que se levantara acta de salida de ninguna clase, a lugares desconocidos, donde los torturaban y asesinaban.

Un cable de la Embajada norteamericana indicaba que Oliverio Castañeda Paiz era la figura más conocida dentro de las filas de la contrainsurgencia desde mediados de los 60 hasta finales de los 70. Nacido en Zacapa, Castañeda Paiz fue uno de los primeros en unirse al movimiento guerrillero de los 60, incluso viajó a Cuba para ser entrenado. Cuando la contrainsurgencia militar se intensificó a finales de 1966, Castañeda regresó y se unió a las fuerzas paramilitares locales que trabajaban junto a los militares. Pronto se convirtió en el líder principal del escuadrón de la muerte conocido como la Mano Blanca, mediante el cual el régimen aterrorizó a la región. Al concluir la ofensiva militar en el nororiente, apoyó decididamente la candidatura de Arana Osorio y llegó a ser diputado del Congreso representando al Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Sus intereses económicos crecieron al igual que sus intereses ilegales. A lo largo del tiempo construyó su propia organización leal (Ojo por Ojo) que «combinaba acciones políticas con clientelismo y criminalidad» (cable de la Embajada de los EE. UU. en Guatemala, citado en Brocket, 2012:5).

El 25 de junio de 1972, un comando de militares de civil se introdujo en el restaurante El Parador, donde Castañeda Paiz, celebraba una fiesta privada; neutralizó a sus guardaespaldas y lo ametralló. El despliegue de fuerzas utilizado en este operativo buscaba de algún modo mostrar a las facciones contendientes, a las agrupaciones de *matones* independientes, a los observadores internacionales y a la población guatemalteca, que el Ejército estaba recuperando el monopolio del ejercicio de la violencia, y aun cuando aceptaba colaboradores civiles no permitiría competidores que operaran al margen y/o en oposición a su autoridad.

Luego del asesinato de Castañeda, un «grupo representativo» de sus «vigilantes en Zacapa» fueron convocados a una reunión con el presidente Arana donde, según reportes de la Embajada estadounidense, el mandatario les aseguró que si pensaban vengarse, ellos también serían asesinados. Al parecer, plantea Charles Brockett (2012:5) éstos obedecieron; sin embargo, en los siguientes meses, según los reportajes de prensa, al menos doce hombres vinculados con Castañeda fueron «asesinados, desaparecidos o arrestados por actividades criminales», y otros tantos, que no fueron reportados por la prensa, por igual.

Militantes anticomunistas que entrevistamos durante el trabajo de campo que realizamos en 2011 en Zacapa y Chiquimula expresaron que entre 1972 y 1973 algunos de los hombres que habían participado en la estrategia contrainsurgente del 66-68 fueron asesinados por el Ejército o fuerzas leales a éste. El móvil

del asesinato de éstos solía estar relacionado con el tipo de información «confidencial» que éstos manejaran, pero especialmente porque éstos «se habían salido del *guacal*», es decir, del control de las autoridades militares. Entre los paramilitares del nororiente cuya trayectoria terminó de esta manera están Tomás Pinto, Heriberto Orellana, José Calero y el emblemático *Gallo Giro,* aguerrido excombatiente de la guerrilla, quien *da la vuelta* y se une al Ejército tras el impacto de la ofensiva militar de Arana. Otros de los hombres asesinados fueron David Ordóñez Bardales, viejo anticomunista, y el exalcalde de Zacapa Marco Tulio Aldana Sánchez y Miguel David Ordóñez Duque[120], Víctor Hugo Rodríguez (Ordóñez, 2007:24). De igual modo, algunos de estos colaboradores del Ejército fueron asesinados como consecuencia de calumnias, envidias y pleitos de tierra, como fue el caso del abogado Víctor Hugo Rodríguez Vázquez, Alirio Recinos y Marco Tulio Flores (óp. cit. 24).

Durante los primeros años de la década de los 70 hubo momentos de miedo y mucha desconfianza entre los militantes anticomunistas del nororiente. El sentimiento que predominaba era que todos aquellos hombres que habían colaborado con el Ejército para combatir a la guerrilla en Zacapa los iban a «eliminar». La guerra terminó, expresa el escritor *Maco* Ordóñez (2007), y las ejecuciones extrajudiciales continúan. En Chiquimula mataron a *Chalío* Rubén Cordón; en Santa Rosa, a *Lino* Pinto; a Oliverio Castañeda Paiz lo asesinaron siendo primer vicepresidente del Congreso; también mataron a *Campeche* Orellana, Juan *Polla,* Jorge Dardón Ordóñez y a Leonel Sierra. No obstante, eso no fue así para todos. Pues el grupo de hombres leales a las fuerzas armadas fueron gratificados con tierras en Izabal o la Franja Transversal del Norte (como veremos en el siguiente apartado). Además, aquellos cuya vocación no era la ganadería o la agricultura podían optar a puestos en instituciones públicas, principalmente en su región de influencia. De este modo, hombres previsores como Arnoldo Vargas, Gonzalo Orellana y Waldemar Lorenzana más bien solicitaron puestos en las aduanas de las fronteras con Honduras y El Salvador, desde donde podían controlar el flujo de mercancías, y aprendieron los *gajes* del rentable negocio del narcotráfico.

120 En el atentado en que matan al Sr. Ordóñez también dan muerte a su esposa, Teresa Aldana de Ordóñez.

El desmantelamiento de los grupos paramilitares luego de la contrainsurgencia fue una tarea difícil e incompleta. Un buen número de ellos utilizó su posición para dominar las áreas donde vivían, incluso mediante la violencia (Brockett, 2012:5). En la primera década de 2000 se observó que algunos de estos viejos actores de la contrainsurgencia se movían con versatilidad dentro de las estructuras legales del Estado, las redes ilegales del comercio ilícito y el crimen organizado (ejemplos paradigmáticos de ello son los casos de Arnoldo Vargas, Manolito, Juancho León y Waldemar Lorenzana, entre otros). Este movimiento versátil entre lo legal y lo ilegal, lo militar y lo paramilitar, lo estatal y lo paraestatal, es finalmente uno de los legados que dejó la política contrainsurgente y el prolongado «estado de excepción» que se vivió en la Guatemala de fines del siglo XX.

Capítulo VII
La estrategia de seguridad y desarrollo

Expansión económica de los militares y la élite nororiental

Guatemala representa un caso de singular importancia para analizar las políticas de la modernización y las funciones estratégicas que desempeñó Alianza para el Progreso en países con profundas desigualdades sociales y una larga historia de militarización. La Alianza para el Progreso financió asistencia militar y de seguridad, reformas sociales de control centralizado y programas para estimular el crecimiento del sector privado (Streeter, 2006). Los programas de desarrollo económico contenían incentivos para los inversionistas extranjeros, así como medidas para promover nuevas exportaciones.

A partir de 1963, los militares guatemaltecos definieron las reglas del juego político, ocuparon importantes espacios en las instituciones estatales y dirigieron los principales proyectos destinados a impulsar el desarrollo económico del país. A finales de la década de 1970, el Ejército no solo controlaba el país, sino también el presupuesto nacional. Se había convertido en el actor político más fuerte de Guatemala; unos pocos oficiales de alto rango, aprovechando las políticas de cooperación financiera a los países del Tercer Mundo en el contexto de la Guerra Fría, definieron su propia estrategia de acumulación de capital; privatizaron tierras y otras propiedades en el norte del país, incursionaron en las empresas ganaderas, agroforestales y extractivas de esta región. A menudo, estos militares se asociaron con inversionistas extranjeros y crearon empresas público-privadas (Torres-Rivas, 1983; Jonas, 1992[121]; Gleijeses, 2005).

121 Al examinar el periodo presidencial del general Carlos Arana Osorio (1970-1974), Susan Jonas pudo comprobar que el hijo del mandatario había montado una red de relaciones comerciales con intereses extranjeros, incluyendo acaudalados exiliados cubanos quienes a su vez eran socios de los Somoza y de Howard Hughes en Nicaragua, de Robert Vesco en Costa Rica y otros de los estados del «cinturón del sol» en Estados Unidos (ver Jonas, 1992).

En las décadas de los 60 y 70, los gobiernos militares hicieron énfasis en el desarrollo de los departamentos del nororiente (Zacapa, Chiquimula, Izabal[122]) y en los norteños departamentos de Petén y Alta Verapaz, principalmente en los territorios comprendidos en la Franja Transversal del Norte (FTN). La estrategia de desarrollo que se impulsó en esta región tenía varios propósitos: el primero, gratificar y facilitar el ascenso económico de los militares de alto rango y de aquellos agricultores medios y/o ganaderos del nororiente cuya participación había sido crucial en el programa contrainsurgente del Estado en las zonas donde había más actividad guerrillera. En palabras de Alianza para el Progreso, se trataba de capitalizar a la clase media (vista a escala nacional) y/o élite provinciana (vista a escala local). El segundo propósito de esta estrategia fue impulsar el desarrollo económico, expandir y diversificar la producción de exportación y atraer a inversionistas extranjeros a esta región.

Sin abandonar el impulso de la economía de la economía de plantación (café, algodón, caña, ganado) en la Bocacosta y Costa Pacífica, durante los gobiernos militares eje del desarrollo económico y, por consiguiente, el epicentro de la planeación y la acción estatal giró hacía el nororiente y norte del país. Justo en aquellos territorios en donde los militares y sus colaboradores más cercano podían expandir sus nuevas empresas. Principalmente los gobiernos de los generales Peralta Azurdía y Arana Osorio utilizaron la mayor parte de los recursos del Estado y el financiamiento externo para impulsar el desarrollo del nororiente (Zacapa, Chiquimula e Izabal), Petén y la Franja Transversal de Norte. La administración de estos generales le apostó a la construcción de carreteras, mejorar las instalaciones portuarias en el Atlántico, construir sistemas de riego, impulsar la producción ganadera, la diversificación de cultivos de exportación (cebolla, tomate, pepino, chile pimiento, y sobre todo melón y sandía), además de la extracción petrolera y minera en el norte.

Durante la administración de Arana Osorio, tanto la participación de los nororientales en la institucionalidad estatal como el impulso al desarrollo económico de esta región fue explícito. Aun cuando Arana era originario de Barberena, Santa Rosa, venía construyendo su red de relaciones más cercanas, su poder e identidad en el nororiente desde 1939, cuando trabajó como maestro de

122 El departamento de Izabal, en su conjunto, fue un territorio destacado en la estrategia económica de los gobiernos militares. Fundamentalmente en la estrategia de Arana Osorio, quien promovió la producción ganadera en la región. No obstante, éste únicamente es visto como parte de la FTN, con lo cual se pierde de vista su importancia para la expansión económica de los nororientales que apoyaron la política contrainsurgente comandada por Arana en la región.

caminos en esta región y contrajo nupcias con una mujer de la élite chiquimulteca. Sin embargo, no es sino hasta los años 60 cuando llegó como comandante de la Zona Militar General Luis García de León, en Jutiapa (marzo de 1963-noviembre de 1965), y luego comandó la Zona Militar General Rafael Carrera, en Zacapa (junio de 1966- marzo de 1968), que se constituyó en el emblemático caudillo oriental de la Guerra Fría. Arana veía en los nororientales a «su gente», es decir, a sus parientes, compadres y coterráneos que se organizaron en armas, lo apoyaron a vencer a la guerrilla y luego lo llevaron a la cima del poder. A muchos de ellos les debía gratitud:

> «Aunque Arana no era chiquimulteco, nos dice un influyente miembro de la élite chiquimulteca, por razones sentimentales se consideraba chiquimulteco. Para empezar, Álida España (su esposa) era chiquimulteca; además, recuerde que a él le tocó combatir [a] la guerrilla en Zacapa, Chiquimula e Izabal. Por eso él le agarró cariño a su gente y apoyó la agricultura y la ganadería en la región. Aunque el oriente no tuviera mucho desarrollo agrícola, les dio apoyo para el impulso de la ganadería y el desarrollo de sus sistemas de riego. Ya pacificada la región, viene el gran desarrollo agrícola y ganadero del nororiente. Recuerde que los ganaderos orientales son los principales beneficiarios de los proyectos ganaderos, no solo de Izabal, sino del Petén (sic)» [E-Gt20-RP-02.2012].

Como en épocas anteriores, durante los gobiernos militares, algunos sectores de la élite provinciana (principalmente la élite nororiental) aprovecharon su acceso al Estado para convertirse en propietarios, se aferraron a las nuevas oportunidades que ofrecía la diversificación económica, se apropiaron de grandes extensiones de tierra y se incorporaron a la clase dominante. Este proceso, que llevó al «saqueo» del Estado, se volvió particularmente importante en el caso de militares de alto rango (Torres-Rivas, 1983; Jonas, 1992).

Arana Osorio completó la militarización del Estado iniciada por Peralta Azurdia, y expandió el dominio militar sobre la sociedad. Durante los años de 1970-1974, el régimen militar tuvo un espacio importante dentro del cual pudo realizar políticas agrarias, y su autonomía se intensificó (Berger, 1992:156). La posición de Arana Osorio dentro del poder político-económico y militar de las fuerzas armadas mejoró por el hecho de que él había alentado al Ejército a establecer un proyecto económico luego de 1970. Los oficiales del Ejército se convirtieron en los terratenientes de extensiones ricas en minerales en el norte del país, y las fuerzas armadas crearon empresas comerciales, proyectos industriales, compañías de comunicación masiva, así como servicios bancarios (Banco del Ejército, S. A.)[123] .

123 Ver Torres-Rivas, 1983; Jonas, 1992; Berger, 1992.

Para 1970, el general Arana Osorio y el cuerpo de oficiales creían que estaban mejor preparados para gobernar que la fraccionada élite política civil. Argumentaban que el cuerpo de oficiales era educado y unido por la disciplina, el entrenamiento y las experiencias compartidas; además, tenía una estrategia coherente de desarrollo, tal como lo expresaba, en parte, la doctrina de seguridad nacional (óp. cit. 157). Al momento de conformar su gabinete, Arana Osorio acudió al cuerpo de oficiales para que ocuparan los principales puestos en el gobierno; además, se rodeó de un eficiente equipo de tecnócratas formados en las principales escuelas de Estados Unidos y Europa para asegurar el éxito de su estrategia de desarrollo. Principalmente, acudió a aquellos tecnócratas que eran de su entera confianza y habían sido becados por la AID para estudiar maestrías en Administración Pública, Desarrollo, Finanzas, Banca, etc. Entre ellos destacan el abogado chiquimulteco Ronaldo Porta España, quien había ganado la beca John Kennedy para estudiar una maestría en Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico, y se encargó de coordinar el Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975.

El Plan Nacional de Desarrollo había sido formulado por un equipo de expertos nacionales y extranjeros (especialistas en agricultura, transportes y comunicaciones, industria, energía y economía del desarrollo) bajo la coordinación del equipo del Consejo Nacional de Planificación Económica (CNPE), y la dirección de Gert Rosental, secretario general, durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro. El 17 de junio de 1970, este plan fue presentado para su aprobación al presidente de la república, y en la carta de presentación se propuso que éste se diera a conocer, se discutiera y promoviera con las autoridades entrantes (gobierno del General Carlos Manuel Arana Osorio).[124]

Este era un plan nacional bastante amplio, que se basó libremente en *la doctrina de seguridad nacional* que se adoptó en toda Latinoamérica en el contexto de la Guerra Fría. Hacía un llamado a la intervención del Estado para fomentar la diversificación y expansión de la producción agrícola, así como el crecimiento y estabilidad de la clase media y la erradicación de la oposición de la clase subordinada. Para viabilizar la ejecución del plan se planteó un proceso de fortalecimiento del Estado y una reforma institucional integral que atendiera los problemas de «la dispersión de fuentes de decisión, el debilitamiento del

124 Ver Carta de presentación del plan, tomo I. Secretaría general del Consejo de Planificación Económica. *Plan de Desarrollo 1971-1975. Guatemala*, junio de 1970.

Ministerio de Agricultura, la escasez de recursos y la falta de coordinación a nivel nacional y en el campo» (Anexo II, primera sección, págs. 5-6). El objetivo de estas reformas era fortalecer al Ministerio de Agricultura, al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y al sector público agrícola para que éstos tuvieran presencia en aquellos campos y regiones definidas como prioritarias por el Plan Nacional de Desarrollo.

En este plan se definió la primera etapa del programa de colonización de la Franja Transversal del Norte, que atraviesa los departamentos de Quiché, Alta Verapaz e Izabal. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), en esta región, eventualmente se podrían asentar 40,000 familias. En principio, se contempló un proyecto de desarrollo ganadero en la zona de Ixcán, que beneficiaría a aproximadamente 3,200 familias. El costo de esta primera etapa se estimó en 6 millones de quetzales de los cuales se esperaba financiar 3.6 millones de quetzales con un préstamo del BID. Asimismo, el proyecto requería la construcción de un camino de acceso complementario (el cual se describe en el acápite: Cuadro de inversión por año) (Políticas de Desarrollo e Inversiones Públicas, tomo II, págs. 20 y 21). Entre los proyectos prioritarios del plan de acción a corto plazo figuraban: a) la consolidación del desarrollo de los parcelamientos agrarios, b) el desarrollo de fincas cooperativas, c) la colonización de Ixcán, d) el drenaje de la costa sur del país, e) el impulso de sistemas de pequeño riego y f) el desarrollo de la ganadería lechera. Además, el impulso del desarrollo de 43 fincas administradas por el INTA con un área total de 170,000 hectáreas y con una población estimada en 7,450 familias (pág. 26).

La administración de Arana ratificó el plan e impulsó una serie de medidas para alcanzar los objetivos de éste. Primero expandió y reorganizó la burocracia agraria estatal, mejoró la coordinación burocrática y extendió la presencia del Estado en el interior del país (principalmente en el norte y nororiente de Guatemala). Además, el plan contemplaba estímulos importantes al sector industrial para solventar aquellos problemas ocasionados por la crisis del Mercado Común Centroamericano (Mercomún), a raíz de la guerra entre Honduras y El Salvador. Contemplaba, además, la promoción de las exportaciones agrícolas no tradicionales (carne, algodón, cardamomo), cuyo auge databa de años atrás.

En 1971, el Gobierno puso en marcha el Plan de Desarrollo Rural 1971/1975, el cual implicó una movilización masiva de recursos humanos, financieros y técnicos, con el objeto de provocar cambios sustanciales en el bienestar de los

habitantes del área rural, especialmente en los renglones de agricultura, salud y educación. Para llevar adelante los programas de desarrollo trazados en este plan, el Gobierno contó con financiamiento –donaciones y préstamos– de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), el Banco Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), el Gobierno de Taiwán y la Fundación Rockefeller, entre otros; y cooperación técnica de la Universidad de Misisipi, el Centro Agronómico para la Investigación y Enseñanza (Catie), el Incap y equipos de voluntarios del Cuerpo de Paz.

En principio se reorganizaron las dependencias del Ministerio de Agricultura y se institucionalizó el Sector Público Agrícola con el objeto de aumentar sostenidamente la producción agrícola por medio de un programa integral de asistencia técnica, crédito y mercadeo dirigido a pequeños y medianos agricultores (Informe ICTA, 1976). Además, se creó el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Bandesa), cuyo objetivo era financiar la expansión de la exportación agraria.

Como parte del Sector Público Agrícola del Ministerio de Agricultura se creó el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (Icta), cuya tarea era generar, probar y validar tecnología apropiada para el pequeño agricultor. El Icta trabajaba en cinco campos de investigación y asistencia técnica: a) estudios agro-socioeconómicos, b) fitomejoramiento y estudios agronómicos fundamentales, c) ensayos de finca, parcelas de prueba; y d) evaluación de tecnología apropiada.

Además se creó la Dirección General de Servicios Agrícolas (Digesa), que ofrecía asistencia técnica y entrenamiento para fomentar la diversificación de la producción agraria. El Instituto Técnico Agrícola administraba 285 cooperativas agrarias y contaba con 14,528 afiliados.[125] Para fortalecer los procesos de almacenamiento, comercialización y estabilización del precio de los granos básicos se creó el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca), el cual contaba con una cadena de silos, para comprar granos básicos y revenderlos a precios razonables en los momentos de mayor escasez. El objetivo de Indeca era contrarrestar el papel de los intermediarios y acaparadores que contralaban la relación entre el productor y el consumidor y garantizar la seguridad alimentaria de la población de escasos recursos.

125 Arana Osorio, *Informe al Congreso,* 1 de julio de 1971.

En el Ministerio de Agricultura también se crearon nuevas secretarías para promover aquellos productos que eran prioritarios para el Gobierno. Por ejemplo, en mayo de 1973 se estableció la Secretaría de Producción Ganadera y la Oficina de Asuntos Madereros. Estas instituciones debían fortalecer los procesos de formación de las haciendas ganaderas y la industria extractiva de maderera en Izabal, Petén y la Franja Transversal del Norte.[126] Al mismo tiempo, el Gobierno estableció agencias conjuntas del sector privado y estatal para fomentar la producción de la exportación agraria. Guatexpro fue la más importante de estas agencias y su junta directiva estaba conformada por representantes del sector público-privado. Guatexpro proporcionaba información a los exportadores acerca del mercadeo y crédito, así como asistencia técnica. También organizó las categorías de las exportaciones para poder «crear una mentalidad de exportación» entre los productores guatemaltecos.[127]

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 71/75, en el nororiente, el Icta llevó a cabo estudios sobre las características ecológicas, la infraestructura, potencialidad y necesidades de inversión del valle de La Fragua. En dichos estudios se establecieron como prioridades: a) la producción de legumbres y frutas tropicales de agroexportación (melón, sandía, cebolla, pepino, tomate, chile pimiento y okra) cuyo destino eran los mercados de Centroamérica y Estados Unidos; b) la construcción y mejora de los sistemas de riego, y c) la construcción de vías de comunicación hacia los principales mercados centroamericanos y hacia los puertos del Atlántico. En1973, en sociedad con la empresa Central American Produce Co. (Capco) se empezaron a instalar las condiciones para la producción y exportación de dos variedades de melón: el *cantaloupe* y Honey Dew (Orozco/Icta, 1980). Simultáneamente se fomentó la expansión de la producción ganadera del nororiente hacia Izabal y Petén, y se adjudicaron tierras a los orientales en dichos departamentos, tal como veremos en los siguientes apartados.

1. Los sistemas de irrigación del nororiente

Recordemos que, la construcción de los sistemas de riego en La Fragua de Zacapa inició con el gobierno de Peralta Azurdía, como parte de su política de seguridad y desarrollo en la región nororiental; luego, durante la administración de Arana Osorio, este sistema se amplió, no solo en unidades de riego, sino en beneficiarios

126 *El Imparcial*, 16 de mayo de 1973.
127 *El Imparcial,* 23 de febrero de 1973.

y extensión de hectáreas irrigadas. Con la asesoría de ingenieros agrónomos y especialistas en sistemas de riego de diferentes instituciones del Sector Público Agrícola (principalmente del Icta) se construyó el sistema de riego del valle de La Fragua de Zacapa, el cual tuvo un impacto significativo en el desarrollo agrícola de este departamento.

El valle de La Fragua abarca los municipios de Zacapa, Teculután y Estanzuela. Tiene una extensión de 9,000 hectáreas, de las cuales 5,500 son susceptibles a una agricultura intensiva de riego. Entre 1966-1976 se construyó un sistema de riego que abarca 3,000 hectáreas irrigables. La mayor parte del riego se efectúa por gravedad y una parte mediante bombeo (Orozco/Icta, 1980). La principal fuente de agua para riego se deriva del río Grande, en la represa ubicada a la altura de la aldea Santa Rosalía. Este río abastece la unidad de riego El Guayabal, la cual tiene capacidad de irrigar 1,700 hectáreas, y Llano de Piedras, con capacidad para irrigar 1,011 hectáreas. Además, se construyó la unidad de riego Oaxaca, en el municipio de Gualán, Zacapa, la cual abarca las aldeas El Zapote, Oaxaca, Los Limones y El Pedregal. Esta unidad de riego se alimenta con el caudal del río Naranjo [E-G8-AE-27-06-11:19-23]

Para ilustrar el potencial y formas de uso de estos sistemas de riego tomaremos el ejemplo de la unidad de riego Llano de Piedras, la cual se localiza en la parte sur central del valle de La Fragua y colinda al norte con las unidades de riego de El Guayabal y La Fragua, en el departamento de Zacapa. Esta unidad brinda el servicio de agua para riego a varios terrenos y servicio para consumo doméstico a las aldeas La Fragua, Llano de Piedras, San Felipe, San Jorge, Barranco Colorado, San Juan y San Nicolás, todas en el municipio de Zacapa (Romero, Bueso, Orellana y Turcios, 2007:4). Esta unidad de riego fue diseñada para irrigar 1,011 hectáreas y atender a 280 usuarios, en su mayoría medianos productores de hortalizas, granos básicos y ganado de doble propósito (leche y carne)[128]. El padrón original de beneficiarios de este sistema era de 280 usuarios que poseían predios que oscilaban desde 5 a 10 hectáreas. Sin embargo, en la actualidad el sistema sirve el agua solo a 31 usuarios individuales y a las empresas exportadoras que arriendan predios a otros usuarios, para un total de 447.3 hectáreas, lo que representa

128 El funcionamiento de la unidad de riego de Llano de Piedras requiere de dos sistemas de bombeo: Uno denominado Caja Estrella, con cuatro motobombas de 300 caballos de fuerza y caudal nominal de 9,511 galones/min, mientras que el segundo, denominado Cerro Redondo, funciona con tres motobombas de 75 caballos de fuerza y un caudal nominal de 3,963 galones/min. En ambos casos se cuenta con una motobomba en espera. La fuente de agua de Cerro Redondo es el canal alimentado por el sistema de Caja Estrella (Romero, Bueso, Orellana y Turcios, 2007:4).

solo el 44% del área diseñada, la cual era de 1,011.5 hectáreas (Romero, Bueso, Orellana y Turcios, 2007:4). La ostensible reducción del número de beneficiarios de este sistema de riego (de 280 a 35) pone de manifiesto el acelerado proceso de concentración de la tierra que se produjo en todo el valle de La Fragua a partir del aumento de la productividad del suelo que trajo consigo el sistema de riego y la presencia de empresas transnacionales dedicadas a la agroexportación que, directa o indirectamente, desplazaron a aquellos campesinos pobres que aún poseían tierras en el valle, hacia las tierras de ladera y montaña en esta región.

Fotografía No.17
Sistema de riego la Fragua de Zacapa



Fuente: Trabajo de campo Matilde González.

Este proyecto dinamizó, no solo la producción agropecuaria, sino la economía de esta región. Actualmente es allí donde se ubican las empresas de agroexportación melonera dirigidas por un importante sector de la élite nororiental, asociado a empresas de exportación norteamericanas. Asimismo, el acelerado proceso de concentración de estas tierras en manos de un pequeño grupo de terratenientes y/o empresas, profundizó las desigualdades sociales en la región y aumentó el problema de la inseguridad alimentaria que hoy afecta al «corredor seco» del nororiente, el cual se ubica justo en las tierras de ladera y tierras altas de las fértiles e irrigadas tierras de los valles del nororiente.

Fotografías No. 18a y 18b
Producción melonera en la Fragua de Zacapa



Fuente: Trabajo de campo Matilde González.



Fuente: Trabajo de campo Matilde González.

Fotografía No. 19a
Siembra de maíz en El Corredor Seco



Fuente: Trabajo de campo Matilde González.

Fotografía No. 19b
Campesinos si tierra en la Fragua de Zacapa



Fuente: Trabajo de campo Matilde González.

2. Los proyectos carreteros

Uno de los primeros proyectos que promovió el Consejo de Planificación Nacional, tras el golpe de Estado de Peralta Azurdía en 1963, fue el diseño y trazado de la carretera que conectaría el departamento de Izabal con la frontera hondureña y otra que se adentraría en la selva de Petén. El Consejo convenció a los ministros de economía y obras públicas de Centroamérica para que éstos apoyaran la gestión del financiamiento de estas carreteras –estimado en US$20 millones- ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Al mismo tiempo el Gobierno de Guatemala, financió la construcción de una carretera en Petén por medio del Fydep y el Inta.[129]

Otro proyecto importante en esta región fue la construcción del tramo carretero que unía la carretera al Atlántico con Zacapa y Chiquimula, y las respectivas fronteras con Honduras y El Salvador. Este tramo carretero se construyó con el apoyo de Méndez Montenegro en el contexto de la ofensiva militar 1966-67. Esta carretera era estratégica, no solo para la pronta movilización del Ejército en la zona de conflicto, sino para el impulso del comercio transatlántico y transfronterizo de la región nororiental. Benefició directamente a los comerciantes y ganaderos de la región, principalmente a la élite comercial de Chiquimula que históricamente ha dominado el comercio transfronterizo entre Guatemala, El Salvador y Honduras.

Según los comerciantes de esta región, esta carretera es estratégica para la economía del nororiente, pues constituye un *canal seco* que conecta los puertos del Atlántico de Guatemala con los puertos del Pacífico salvadoreño y los pueblos fronterizos de Guatemala, Honduras y El Salvador. En la ruta del Atlántico, a la altura de Río Hondo, se halla el entronque para las fronteras. Dicho entronque viene de la ruta al Atlántico y se divide en dos: una carretera que va para El Salvador y que sale por Anguiatu, y otra carretera que enfila hacia Esquipulas y llega a la frontera de Agua Caliente, Honduras. Entonces, explica Porta España (2012),[130] *el canal seco* viene de Santo Tomás de Castilla y permite que cantidades enormes de *trailers* transiten para Honduras por Agua Caliente y para El Salvador por Anguiatu o Santa Ana. Ese es un comercio directo entre el puerto Santo Tomás de Castilla, Honduras y El Salvador. Los furgones vienen de regreso cargados de mercaderías de El Salvador y de Honduras, y pasan dejando algo en los pueblos. Este comercio se originó con la ruta del Atlántico, pero básicamente

129 Consejero de la Embajada estadounidense para asuntos económicos, James C. Lobenstine, al Departamento de Estado, 5 de mayo de 1964, citado en Berger, 1992:126.

130 Entrevista, trabajo de campo Matilde González.

cuando el gobierno de Julio César Méndez Montenegro construyó en 1966-1967 el entronque de Río Hondo a Chiquimula, y de Chiquimula a las fronteras con Honduras y El Salvador. Sin duda, esta carretera es vital para el desarrollo económico del nororiente. En la misma confluyen diferentes redes de comercio legal e ilegal que han configurado el dinamismo económico del nororiente.

3. Desarrollo ganadero en Izabal y Petén

El objetivo principal de la política agraria durante las administraciones de Peralta Azurdia (1963-1966) y Arana Osorio (1970-1974) fue el desarrollar el potencial de exportación de Petén, Izabal y Alta Verapaz (Berger, 1002:130). En los años 60 y 70, las tierras bajas del norte y nororiente de Guatemala, aptas para la producción de madera, ganadería extensiva y la industria extractiva minera y petrolera, constituyó una especie de *Far West* o El Dorado para los militares de alto rango, los ganaderos y los especuladores de la clase media ascendente ligada a los militares (Rouquié, 1984, 1994). Durante estos años, se observa un nuevo proceso de conquista y colonización de estos territorios por parte de las capas medias y/o élites provincianas vinculadas a los militares, principalmente por parte de aquellas élites provincianas del nororiente que militaban en las organizaciones anticomunistas.

3.1 La formación de las haciendas ganaderas de Izabal

La expansión de las fincas ganaderas se inicia en el municipio de Gualán, Zacapa, y se extiende hacia los municipios Los Amates, Morales, Puerto Barrios (siguiendo la carretera al Atlántico); además se formaron haciendas del lado de Río Dulce y El Estor. La formación de las haciendas ganaderas del norte se produjo en un momento en que la expansión ganadera en el litoral pacífico había llegado a su límite, en tanto que muchas de las viejas haciendas se habían convertido en plantaciones algodoneras o cañeras y la tierra se había vuelto extremadamente cara. Cuando ocurren los procesos de colonización de Izabal y Petén, algunos de los ganaderos del sur amplían sus propiedades en esta región y forman nuevas haciendas. No obstante, los principales beneficiarios de la adjudicación de tierras en la sabana de Izabal fueron oficiales del Ejército y pequeños y medianos ganaderos del nororiente. Pasados los primeros años de la adjudicación, los grandes ganaderos del nororiente comenzaron a comprarles la tierra a los pequeños adjudicatarios, y muy pronto se forman las grandes haciendas ganaderas de esta región.

Fotografías No. 20a y 20b
Haciendas ganaderas de Izabal



Fuente: Trabajo de campo Matilde González.



Fuente: Trabajo de campo Matilde González.

El reparto de todas las tierras del departamento de Izabal y la Franja Transversal del Norte[131] constituye una de las primeras políticas agrarias del gobierno de Arana. A las pocas semanas de haber asumido el poder, el 20 de agosto de 1970, emitió el Decreto 60-70[132], cuyo artículo No. 1 sucintamente declara de interés público y de urgencia nacional el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agrario en el área comprendida dentro de los municipios Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Nentón, Jacaltenango, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango; Chajul y San Miguel Uspantán, en Quiché; Cobán, Chisec, San Pedro Carchá, Lanquín, Senahú, Cahabón y Chahal, en Alta Verapaz, y la totalidad del departamento de Izabal. A partir de la emisión de esta ley, el Congreso anuló de un plumazo todas las formas de adquisición y tenencia de la tierra que se venían practicando en los territorios definidos como su prioridad. En el artículo No. 5 de este mismo decreto deja expresamente prohibida la titulación supletoria, las denuncias de baldíos e inscripción de excesos de fincas rústicas situadas en la totalidad de los municipios de Izabal y Petén, y todos aquellos municipios incluidos en el mencionado Decreto 60-70. En su artículo No. 6, el decreto va mucho más allá y advierte: «cuando se trate de inmuebles titulados supletoriamente y que formen parte de baldíos o terrenos nacionales, tanto el Ministerio Público como el Instituto Nacional de Transformación Agraria deberán promover las acciones pertinentes para obtener la anulación de las inscripciones hechas a favor de particulares, recuperándolos a favor de la Nación». Este último artículo fue crucial en los procesos de despojo de los campesinos y comunidades indígenas que poseían tierras apetecibles por *los nuevos colonizadores*. Las memorias de campesinos ladinos y q'eqchi' de Izabal hablan de la incertidumbre en la tenencia de sus tierras y los sucesivos procesos de despojo y desplazamiento que sufrieron por parte de nuevos finqueros (coroneles, capitanes o miembros de los grupos paramilitares) que de un día a otro llegaban a sus comunidades con los títulos de propiedad de unas tierras que hasta entonces desconocían.

131 La Franja Transversal del Norte es un cinturón de 70 kilómetros de anchura que se extiende desde Huehuetenango hasta el Caribe, con un total de 8,500 kilómetros cuadrados. Para propósitos de colonización, el Inta dividió la Franja en cinco regiones de oeste a este: 1) Ixcán, 2) Lachuá, 3) Sebol, 4) Modesto Méndez, y 5) Livingston (Grandia, 2009:111).

132 Este decreto se fundamentó en el artículo 126 de la Constitución de la República, en el que se plantea que «es obligación fundamental del Estado, realizar programas de transformación agraria, proporcionando a los campesinos, pequeños y medianos agricultores, los medios necesarios para elevar su nivel de vida y los que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional y que para la realización de esos programas se hace necesario contar con todos los bienes que por virtud de la ley pertenecen a la Nación».

El 2 de octubre de 1972, Arana anunció que otorgaría 20,447 hectáreas[133] de tierra en Izabal a 1,584 ganaderos y/o agricultores medios del nororiente, distribuidas de la siguiente manera: 1,827 en Coatepeque, Izabal; 5,120 en San Gil, Izabal; 13,500 en Los Andes, Izabal. Además, adjudicaría 17,306 hectáreas en Raxruhá, Alta Verapaz; y 17,784 en Ixcán, Quiché; estas últimas en la Franja Transversal de Norte.

El 30 de octubre de 1972, Arana Osorio inició el proceso de adjudicación de tierras en el emblemático municipio de Río Hondo, Zacapa. En esta ocasión, Arana hizo la entrega simbólica de 4000, hectáreas de tierras cultivables y/o aptas para la producción ganadera en el vecino departamento de Izabal a 400 agricultores medios del nororiente. Esta adjudicación se llevó a cabo, justo seis años después de la masacre de Río Hondo (noviembre de 1966[134]) y de que se formaran los grupos paramilitares en la región. Otro elemento no menos importante de recordar es que esta adjudicación de tierras se llevó a cabo en el preciso momento en que el Ejército estaba recuperando el control de aquellos grupos paramilitares que se habían salido del orden y operaban con amplios márgenes de autonomía, no solo en el nororiente sino en la ciudad capital, tal como lo analizamos en el apartado anterior. Este contexto nos permite ubicar el discurso de Arana en el acto público de la adjudicación de tierras que se llevó a cabo en el parque de Río Hondo, en compañía del embajador estadounidense y el máximo dirigente del MLN (Mario Sandoval Alarcón). En su discurso de entrega de tierras, Arana expresó:

> «Creí que éste era un acto sencillo, pero esta enorme manifestación espontánea compromete más mi gratitud. He asistido a muchas inauguraciones de obras hechas por el gobierno, pero en esta oportunidad, tenía especial interés en visitar a quienes llamo yo "los bragados [valientes] del Nororiente de la República". Pues en verdad son ustedes quienes hombro con hombro con el ejército ayudaron a combatir con valor y con hombría a la guerrilla y lograron

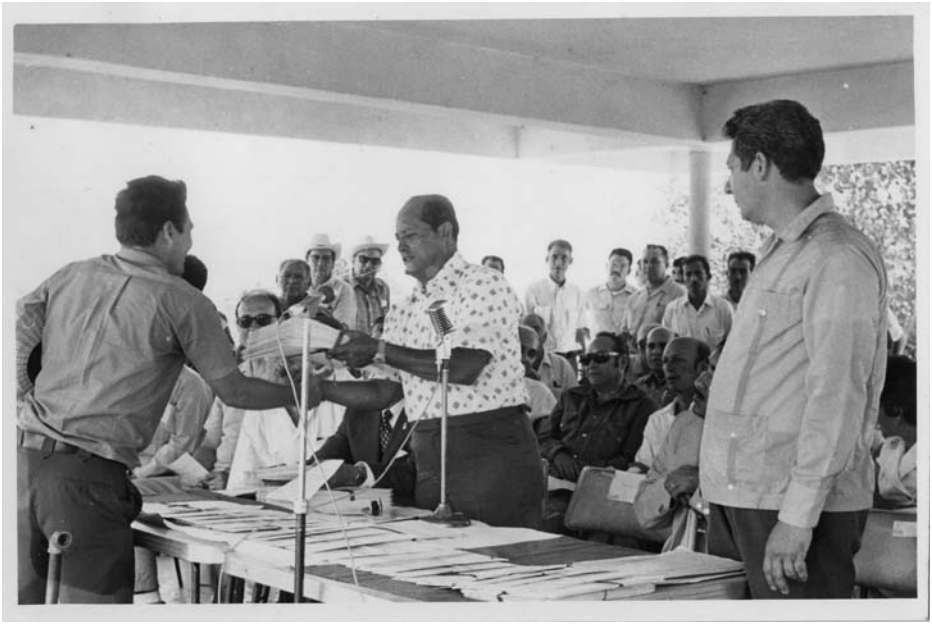
133 Una caballería de tierra es equivalente a 45.12 hectáreas.

134 Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en noviembre de 1966, en la cabecera municipal de Río Hondo, departamento de Zacapa, miembros del Ejército de Guatemala, asignados al destacamento de la aldea La Palma y comisionados militares de la zona cercaron el pueblo y capturaron aproximadamente a sesenta personas. Las víctimas fueron trasladadas al campamento El Roblar, ubicado entre las aldeas La Palma y Chanchán, en donde permanecieron durante 30 días. Posteriormente, las víctimas fueron obligadas a cargar tambos de combustible hasta un cerro de Chanchán, en donde los soldados los rociaron con gasolina y comenzaron a lanzarles bolas de papel ardientes. Estas personas fueron quemadas vivas. Entre las víctimas identificadas están: Carlos Chacón, Pastor Hernández, Julio Marín, Tomás Marín Chacón, Gonzalo Marroquín, Gabriel Mejía, Gonzalo Mejía, Antonio Oliva, Miguel Orellana, Gustavo Ramírez (CEH, tomo XI, 1999:1681).

reconquistar la paz para provecho de Guatemala.…Murieron muchos de ustedes, soldados y muchos de los guerrilleros que engañados querían tomar el poder con violencia» (El Imparcial, 31/10/1972).

«[Luego] cuando ustedes supieron de mi destitución [28 de marzo de 1968], me ofrecieron sus casas y su apoyo, y querían que fuéramos a la capital a derrocar al gobierno y ponerme a mí de presidente. Pero eso no va conmigo y les dije que me gustaría "llegar por camino recto y la puerta ancha". Si es necesario, me contestaron, "le ponemos recto el camino y le anchamos (sic) la puerta". Les agradezco, porque también trabajando honradamente se hace gobierno. Quiero patentizarles nuevamente mi admiración y mi reconocimiento y abrazarlos como el amigo que soy y seguiré siendo» (El Imparcial, 31/10/1972).

Fotografía No. 21a
General Carlos Arana Osorio
Adjudicación de tierras en el Nororiente



Fuente: Fondo El Imparcial/Fototeca Guatemala CIRMA.

Fotografías No. 21b y 21c
General Carlos Arana Osorio
Inaugurando proyectos en el Nororiente



Fuente: Fondo El Imparcial/Fototeca Guatemala CIRMA.



Fuente: Fondo El Imparcial/Fototeca Guatemala CIRMA.

Algunos agrónomos que entrevistamos en el trabajo de campo, que laboraron en Digesepe, Izabal cuando se implementó el proceso de adjudicación de tierras en dicho departamento, explican que buena parte de estas tierras fueron otorgadas a militares, ganaderos del nororiente, comisionados militares y miembros de los grupos paramilitares formados por Arana en Río Hondo, Gualán, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa. Uno de los requisitos para tener acceso a dichas tierras era contar con una carta de recomendación de los jefes de comisionados de la región [E-I-A- 06.2013].

Entre octubre de 1972 y octubre de 1973, el Gobierno concedió títulos de tierra a 860 ganaderos y agricultores medios provenientes del nororiente en la provincia de Izabal (*El Imparcial,* 30 de octubre de 1972, y 6 de octubre de 1973). A partir de esos años se comienzan a crear los hatos ganaderos en Izabal. Posteriormente, esa tierra se concentró en manos de los grandes ganaderos de la región, que durante muchos años dominaron el comercio de la carne. Un funcionario del gobierno de Arana, que estuvo a cargo de la estrategia de desarrollo de esta administración gubernamental, explica que Arana distribuyó la tierra de Izabal a precios verdaderamente favorables, con el objetivo de apoyar la economía del nororiente, formar las haciendas ganaderas de la región e incentivar la exportación de carne. Como parte del proceso de formación de las haciendas ganaderas, el Gobierno creó estaciones pecuarias en la región y dotó de financiamiento a los nuevos ganaderos para que se hicieran de un buen número de cabezas de ganado e hicieran los potreros correspondientes.

Según funcionarios del gobierno de Arana que participaron en la ejecución del Plan 71/75 el proyecto ganadero de Izabal fue más exitoso que el de Petén. En principio, las tierras de la sabana de Izabal eran más apropiadas para el ganado; luego, este departamento tenía la gran ventaja de colindar con las zonas ganaderas de Honduras y estar muy bien comunicado a través de la carretera al Atlántico.

> «La principal característica de las fincas de Izabal es que son limítrofes con Honduras. Usted preguntará: ¿y eso qué quiere decir? Pues mucho. Por allí pasa una gran cantidad de ganado robado o de contrabando. Es ganado que viene de Honduras por pasos ciegos de la frontera. También hay muchas fincas que están entre los dos países, una parte del lado de Guatemala y la otra parte en Honduras. Entonces, el ganado anochece en Honduras y amanece en Guatemala. Ese es ganado para carne, que lo (sic) engordan en las haciendas de Izabal» [E-Gt20-RP-02.2012:118].

Fotografía No. 22
Hacienda ganadera de Izabal



Fuente: Trabajo de Campo Matilde González.

El proyecto ganadero y de extracción minera del gobierno de Arana en Izabal implicó la construcción de los 33 kilómetros de carretera asfaltada que comunican la ruta al Atlántico hasta llegar a las riberas del río Dulce; además, construyó una carretera de terracería que comunicó a Río Dulce con Melchor de Mencos, y estableció el sistema de ferry para garantizar el cruce del río Dulce y vincular así ambos tramos carreteros. Años más tarde se construyó el puente sobre el río Dulce. También construyó una buena carretera de terracería entre Río Dulce y Modesto Méndez (municipio que se ubica en la frontera entre Izabal y Petén). En contrapartida, el desarrollo ganadero de Petén enfrentaba el problema del transporte del ganado, pues hasta los años 90, para llegar a Petén solo existía la brecha cuya construcción dirigió Oliverio Casasola durante el gobierno de Ydígoras Fuentes. Esa brecha era de terracería y únicamente llegaba a Melchor de Mencos.

> «En la década de los 60, Arana les garantizó a los orientales la tranquilidad absoluta. En los años 70 ya se había acabado la subversión; entonces, les garantizó la propiedad de sus tierras para que se dedicaran a invertir en ganado. Actualmente, Izabal es una de las más importante[s] regiones ganaderas de Guatemala. En los años 70 comienza a desarrollarse la ganadería en Izabal, y ahora está sumamente desarrollado, y se ha tratado de hacer lo mismo en Petén. Hay algunas buenas ganaderías en Petén, pero la tierra del Petén es muy mala. Los pastos son muy malos. En Izabal, tal vez la tierra no es ideal, no es la mejor,

> pero en comparación con la del Petén es buena, y tiene fincas que sí son muy buenas. Precisamente, el municipio de San Luis Petén, que colinda con Izabal, es la mejor tierra del Petén» [E-Gt20-RP-02.2012:118].

La mayoría de los proyectos que impulsó Arana en el nororiente formaban parte del Plan de Desarrollo Nacional 71/75. Entre estos destacan los sistemas de riego, el impulso de la ganadería, la construcción de carreteras y obras de infraestructura tales como la introducción del agua potable, las escuelas, la energía eléctrica, los hospitales y centros de salud. Como parte del programa de fomento a la ganadería se impulsaron exposiciones pecuarias en Centroamérica y cursos sobre el manejo de carne impartidos por técnicos de la Universidad de Florida en Gainsville, y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (El Imparcial, 13/03/72). Además, se fortalecieron las empresas privadas de financiamiento de mejoras de las fincas, nuevas instalaciones de potreros y riego, adquisición de equipo y capital de trabajo (compra de sementales). Entre estas empresas aparecen la Financiera Industrial y Agropecuaria, S. A. y El Ganadero, S. A. Adicionalmente, se establecen las grandes exportadoras de carne de res que compraban el ganado del norte. La más importante de estas exportadoras era Exguapagra, cuyos inversionistas tenían vínculos con el gobierno de Arana.

Fotografía No. 23
General Carlos Arana Osorio
Exposición fotográfica visita presidencial a Izabal 1972



Fuente: Fondo El Imparcial/Fototeca Guatemala CIRMA.

3.2 El desarrollo ganadero de Petén

Desde 1963, la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo del Petén (Fydep)[135] comenzó a realizar giras en ese departamento del norte de Guatemala para motivar a los grandes ganaderos de la costa sur y a los ganaderos medios del nororiente a formar nuevas haciendas ganaderas en Petén. Estos viajes fueron diseñados para convencerlos de que las sabanas de aquel departamento eran terrenos ideales para la cría de ganado, y demostrarles que las redes de transporte y comunicación ya construidas, o por construir, servirían adecuadamente a la producción ganadera en la sabana.[136] En diciembre de 1964, el Ejecutivo aprobó el Decreto 226, que facultaba al Fydep para vender y arrendar más de 1 millón de acres de tierra ociosa en Petén. El Fydep, por lo tanto, anunció que vendería inmediatamente 125 fincas, de 62,471 acres cada una, para la crianza de ganado (Berger, 1992:127).

Durante muchos años, el director del Fydep fue el coronel Oliverio Casasola, un militar zacapaneco de la generación de Arana Osorio, quien acorde con el pensamiento de la élite nororiental y el sector del Ejército al que representaba, consideraba que desde ningún punto de vista, el territorio petenero debía concebirse como un espacio de reforma agraria, menos aún como un territorio de «especulación social y política» (Casasola, 1968:61). Más bien, para el sector del Ejército que él representaba, Petén debía verse como un «gran proyecto económico» que alentara la producción ganadera, la industrialización, la explotación de minerales, petróleo y la extracción maderera (óp. cit. 61). Durante varios años, Casasola definió la política a seguir en Petén y gobernó este territorio con amplios márgenes de autonomía. El Fydep contaba con un fideicomiso como fondo privado para llevar adelante sus objetivos, gozaba de exención de impuestos, derechos, tasas, contribuciones y demás cargas fiscales. Se le

135 Empresa de Fomento y Desarrollo Económico del Petén creada en 1959, para promover la adjudicación de tierras y el desarrollo económico de Petén. El Fydep dependía directamente del Ministerio de la Defensa, gozaba de importantes márgenes de autonomía en relación con el Ejecutivo y fue una institución estratégica dentro del proceso de expansión económica de los militares. Según el Decreto 12-86, que le dio sustento legal, el propósito del Fydep era impulsar: a) el desarrollo económico integral y la integración de Petén al territorio nacional; b) la protección, explotación y administración de los recursos naturales y las tierras nacionales; c) el incremento de la población, organización de colonias industriales, agrícolas y agropecuarias y la fundación de nuevas comunidades urbanas y centros de turísticos; d) el mejoramiento de las condiciones económicas, sanitarias y culturales existentes, realización de obras y trabajos que contribuyeran a elevar el nivel de vida de los habitantes y e) el establecimiento de empresas industriales agropecuarias y comerciales.

136 Consejero de la embajada estadounidense para asuntos económicos, James C. Lobenstine, al Departamento de Estado, 5 de mayo de 1964 (Citado en Berger, 1992:127).

exoneraba de algunas leyes y disposiciones que regulaban las compras, así como de los requisitos de licitación en aquellas compras que no excedieran Q25,000. Se le dio jurisdicción sobre las explotaciones madereras, realizaba sin licitación los contratos de extracción y explotación del chicle y contrataba libremente a sus trabajadores técnicos (Hurtado, 2010:82). Según el asesor jurídico de Casasola, «en un momento dado, el Fydep era un Estado en sí mismo. Era totalmente autónomo, en Petén solo mandaba el Fydep; era como otra república. ¡Claro!, y Casasola era realmente el que dirigía, él era el presidente de Petén. Al extremo que tenía su propia policía. Sí, se llamaba Grudep: Guardia Rural de Petén» [E-Gt20-RP-02.2012].

La postura de Casasola respecto al destino económico-social de Petén se radicalizó frente a la propuesta de algunos políticos reformistas que planteaban la necesidad de ampliar los procesos de colonización de aquel departamento, y abogaban por la formación de más cooperativas durante el gobierno de Méndez Montenegro (1966-1970). En una entrevista que le hicieron reporteros del diario El Imparcial, en noviembre de 1967, Casasola enfatizó que pensar en Petén como un territorio sujeto a reforma agraria constituía un crimen, en tanto que el desarrollo de Petén necesitaba de «empresarios ladinos» con capacidad de inversión, y no de «campesinos indígenas» pobres que fueran a sembrar maíz. «No importa –recalcó– cuánto comprendamos o no *el problema indígena*, simplemente, éste no es el contingente humano que el proceso del Petén necesita»[137]. En noviembre de 1969, el coronel Casasola y uno de los asesores jurídicos del Fydep fueron despedidos por Méndez Montenegro, acusados de apoyar la candidatura de Arana Osorio y contravenir la política planteada por Méndez Montenegro para el desarrollo de Petén (la cual abría la posibilidad de ampliar los procesos de colonización y la formación de cooperativas).

Frente a la emergencia producida por las diferentes crisis de inseguridad alimentaria de los años sesenta, el Gobierno encargó al Fydep que colonizara la cuenca del río Usumacinta y sus afluentes, con el fin de cubrir la creciente demanda de granos básicos. De este modo, dicha región se definió como «zona de reserva de producción de alimentos». Este proyecto, además, buscaba frenar las incursiones de mexicanos en el territorio petenero y frenar sus actividades extractivas en la región. Pero la necesidad de ocupar aquella zona, explica Rodas (2001), se acrecentó cuando se conoció la intención de construir la hidroeléctrica

137 *El Imparcial*, 18 de noviembre de 1967 y 27 de mayo de 1967; Oliverio Casasola, Casasola, *Grandezas y miserias del Petén* p. 61

que suministraría energía a todo el sur mexicano, inundando con su embalse una gran extensión del territorio guatemalteco. Hasta entonces, la colonización de las márgenes del río Usumacinta cobró importancia, en tanto que esta aliviaría la presión poblacional sobre las tierras de la costa sur occidental y construiría una muralla humana que impediría los planes del Gobierno mexicano. En este contexto, el Gobierno de Guatemala decidió colonizar en 1967 las riberas de los ríos Usumacinta y La Pasión, con unas setecientas familias de campesinos pobres, ladinos de oriente (Zacapa, Chiquimula y Jutiapa) e indígenas de diversos departamentos de la costa sur (Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez) e indígenas mames, k'iche' y k'aqchikel provenientes de Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos. Se formaron dieciséis cooperativas y cuatro pueblos a lo largo de estos ríos (Schwartz, 1990; Hurtado, 2010).

Al llegar a la presidencia de la república, Arana Osorio restituye al coronel Casasola en su cargo y nombra como coordinador del Plan de Desarrollo Nacional 71/75 a Ronaldo Porta España[138]. Ambos funcionarios definieron la Ley de Adjudicación, Tenencia y Uso de la Tierra de Petén (Decreto 38-71)[139]. En el artículo No. 6 de esta ley, se define con precisión la desigual distribución de la tierra que se seguiría en Petén y las normas que deberían cumplir los diferentes tipos de concesión: a) las tierras comprendidas dentro de las áreas previstas para ser conservadas como bosques debían conservarse como bosques nacionales y no podrían ser enajenadas en favor de persona alguna. Sin embargo, dichas tierras sí podían otorgarse en arrendamiento o bien mediante «concesión» a empresas [madereras] de capital mixto con la participación del Estado, quien podría reservarse el porcentaje que considerara necesario, el cual no podría ser mayor del 45% del capital, hasta por plazos de veinticinco años, cuando su objetivo fuera el aprovechamiento de la tierra en cultivos o explotaciones de tipo forestal (Decreto 38-71/Art. 6a). La superficie que se adjudicaba a los campesinos que formaran parte de Sociedades

138 Prominente abogado chiquimulteco, primo hermano de Álida España (esposa del presidente), asesor jurídico y representante legal de Casasola, diputado por Chiquimula, presidente la Comisión de Finanzas del Congreso y coordinador de la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Arana.

139 En el artículo 2 del Decreto 38-71 se establece que la Comisión de Tierras del Petén dependería directamente del presidente de la república (en este caso, de Arana Osorio) y estaría integrada por: a) el Ministro de Agricultura, b) el promotor de la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico de Petén (Fydep), c) el presidente del Instituto Nacional de Transformación Agraria (Inta), d) el secretario general del Consejo Nacional de Planificación Económica, y e) un representante de la Asociación de Municipalidades del departamento de Petén. Esta comisión estaría encargada de dictar la política relativa al sistema de tenencia de las tierras de Petén y dirigir la implementación de todos los programas relacionados con la tierra.

Agrícolas de Desarrollo de El Petén (Sadep) (sic)[140], cooperativas de producción, empresas comunitarias o beneficiarios individuales, no excedería en ningún caso de cuarenta y cinco hectáreas por persona (Decreto 38-71/Art. 6b). Además, los beneficiarios de estas adjudicaciones estaban obligados a constituir sin derecho a indemnización o retribución alguna las servidumbres que fueran necesarias en favor de otros beneficiarios o de las entidades del Estado, cuando ello fuere conveniente para el desarrollo de la región (Decreto 38-71/Art. 9).

Para 1972, Carlos Centeno (1973) registra que de las 700 familias migrantes que habían llegado durante el segundo lustro de los 60, únicamente quedaban 368 asentadas en 13 cooperativas, de las cuales, el 81.8% era ladina y el resto indígena (6.7%, k'iche'; 3.9%, k'eqchi'; 3.7%, mam; 3.7%, k'aqchikel; 0.1% poqom, y 0.1%, tz'utujil. Según el autor citado, para esos años la población de las cooperativas vivía en condiciones precarias y en total abandono por parte de la institucionalidad estatal responsable de apoyar su desarrollo. Con excepción de la educación, el Fydep no les había brindado la asistencia técnica ni el crédito requeridos para el arranque de la producción en las cooperativas; tampoco invirtió en la construcción de la infraestructura y servicios indispensables para mejorar las condiciones de los campesinos (Hurtado, 2010:97). En contrapartida, las tierras con fines ganaderos o de cultivos permanentes podían ser adjudicadas en superficies de hasta seiscientas setenta y cinco hectáreas por persona (Decreto 38-71/Art. 6c). Los principales beneficiarios de estas adjudicaciones fueron militares, empresarios, políticos y profesionales ligados a la institucionalidad del Estado; además, ganaderos medios en el nororiente. Como parte del proceso de la formación de las haciendas ganaderas, el Fydep, el Ministerio de Agricultura, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y las demás entidades competentes del Estado debían garantizar que los beneficiarios del reparto pudieran disfrutar de la asistencia técnica y financiera necesarias para el desarrollo de sus actividades, así como de los servicios de comercialización (Decreto 38-71/Art. 22). Según Porta España:

> «Nosotros siempre pensábamos que las tierras del (sic) Petén eran aptas para la ganadería, nunca para la agricultura. Eso lo sabíamos, la agricultura no se podía dar ahí. Es más, Casasola había conseguido que una misión holandesa viniera [a] hacer un estudio sobre el desarrollo ganadero del Petén, y que identificaran qué zonas del Petén eran las más apropiadas para la ganadería. Teniendo

140 Se entiende por Sociedad Agrícola de Desarrollo del Petén, la forma asociativa de producción en la que las aportaciones de capital y trabajo se hacen en términos iguales por las mismas personas, copropietarias de las utilidades, de reserva y capitalización que asumen por igual las responsabilidades de gestión, administración y trabajo (38-71/Art.30).

> claro el panorama, iniciamos un proceso de adjudicación de tierras a aquellos orientales que se quisieran ir al Petén e Izabal. Arana les dio acceso a tierras, crédito, asesoría técnica e insumos para que pudieran impulsar la producción ganadera. Si usted va al Petén, solo orientales encuentra. Puros orientales. Al mismo tiempo, se forman las fincas de los militares. Sí, de grupos enteros de militares. Sobre todo en una zona cerca de Belice, cerca del río Mopán, en el proyecto del río Mopán. Ese era un proyecto de adjudicación de tierras a militares. La idea era darles un pedazo de tierra de unas cuantas manzanas a cada militar. Creo que en el fondo la idea era tener una colonia militar pegada a Belice. Después que creamos la Ley de Adjudicación y Tenencia de la Tierra, se implementaron todos los programas de Indeca, Digesepe, Bandesa e Icta. Ahí es cuando comienza la verdadera colonización del Petén. Allí comenzó la migración al Petén, se forman las haciendas ganaderas y el comercio se vuelve enorme. ¡Los peteneros se quedan sin Petén!» [E-Gt20-RP-02.2012:85-87].

Según el estudio realizado por Grümber, Grandia y Milian (2012) *Tierra e Igualdad, desafíos para la administración de tierras en el Petén, Guatemala*[141], inicialmente, el Fydep distribuyó grandes parcelas de 628 hectáreas (equivalentes a 14 caballerías) para ganadería, en el Proyecto La Libertad I, en la sabana central de los municipios de La Libertad y Santa Ana, hasta un total de 124,000 hectáreas distribuidas en 198 fincas. Les siguieron otros proyectos similares localizados en Las Cruces y el río Subín (375,000 ha.), la ribera oriental del río La Pasión (180,000 ha.) y el valle del Mopán (85,000 ha.), abarcando en su totalidad una quinta parte de Petén (17). Luego, el Fydep continuó distribuyendo fincas ganaderas hasta 675 hectáreas (posteriormente se redujo a 225 ha.) a tres categorías de beneficiarios: empresarios y profesionales de Guatemala, Cobán y el oriente, políticos y militares con «méritos», de diferentes regiones del país[142] y ganaderos medianos de oriente (Chiquimula, Zacapa, Jutiapa y Jalapa). En el valle del Mopán, la influencia de militares era tan grande que se le nombró el *Valle de las Estrellas* (Kaimowitz, 1995, citado en Grünberg, Grandia, Milian, 2012:18).

141 En este estudio participó un amplio equipo de profesionales especialistas en la problemática de la tierra en Petén. Fue patrocinado por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Ambiental y Socialmente Sostenible (TFESSD) de los Gobiernos de Noruega y Finlandia con el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural para América Latina y el Caribe (LCSAR) del Banco Mundial, con el objetivo de apoyar el proceso de regularización de la propiedad de la tierra en Petén.

142 Según el estudio citado, en el listado de los primeros beneficiarios del Fydep en este importante proceso de adjudicación de tierras aparecen renombradas familias guatemaltecas como Beltranena, Castillo, Paiz-Bocelli, Paíz-Maselli, Skinner Klee, Fisher, Arimani y familiares cercanos a los generales Arana, Spiegeler, Laugerud, Mejía Víctores (ver Grümberg, Grandia, Milian, 2012:17).

Desde la estrategia contrainsurgente de los años 60, el Ejército desempeñó un papel preponderante en el desarrollo económico y el desarrollo de la institucionalidad estatal en nororiente y norte del país. De hecho, los procesos de colonización, tanto en Izabal como en Petén, fueron utilizados para aumentar su poder económico, político y militar en el país. El periodo posterior a la firma de la paz coincide con el inicio de la narcoactividad en esta región. Actualmente, hay abundante información pública que señala la participación de algunos militares de baja en estas actividades. Estos exmilitares operan en alianza con ganaderos y potentados del nororiente y norte de Guatemala que influyen activamente en la economía y política regional.

4. Poder militar y desarrollo en sociedades poscoloniales

Si hiciéramos una comparación entre el reparto de tierras que hace Arana en los años 70 del siglo XX, con el reparto que hizo Justo Rufino Barrios un siglo antes (años 70 del siglo XIX) podemos observar que los argumentos acerca de quiénes debían ser beneficiados, como los objetivos y criterios del reparto, guardan profundas similitudes. Primero, en ambos procesos se argumenta que el indígena no es el elemento «apto» para impulsar el desarrollo del territorio donde se adjudican las tierras; segundo, se prioriza la producción de agroexportación (en el primer caso la producción cafetera, en el segundo la ganadera, minera y petrolera); tercero, la presencia de indígenas y campesinos pobres se ve en función de tener cerca a un contingente de trabajadores a emplear en las empresas capitalistas; cuarto, se «gratifica» con tierra a aquellos generales, coroneles y milicianos que prestaron un destacado *servicio en armas*; quinto, la porción adjudicada a cada quien respondía a su rango militar y estatus social y/o al grado de lealtad, parentesco o compadrazgo con el caudillo de turno; sexto; y muy importante, ambos repartos de tierras permitieron la acumulación de capital y el asenso económico de un sector de la élite provinciana (en el caso de Barrios fue la élite altense de Quetzaltenango y San Marcos; en el caso de Arana fue la élite nororiental de Chiquimula y Zacapa); séptimo, ambos casos nos dicen mucho acerca de las intrincadas relaciones que se establecen entre el poder militar, la formación del Estado y el desarrollo de la económico en una sociedad poscolonial. Ambos casos nos permiten observar la pervivencia de una idea de modernización y/o desarrollo basada en la economía de plantación y la extracción de bienes y/o recursos exportables (maderas, minerales, petróleo); octavo, al igual que en el siglo XIX, tanto los planificadores como los militares y

funcionarios de la institucionalidad desarrollista continuaron dándoles amplias concesiones a los inversionistas extranjeros en los territorios indígenas; ello, en detrimento de sus agrosistemas y medios de vida. En el siglo XIX, los principales beneficiarios de las políticas de la modernización agroexportadora fueron los militares liberales, las élites ladinas altenses y los empresarios alemanes del café; en el siglo XX, los beneficiarios fueron los militares que participaron en la estrategia contrainsurgente, las élites nororientales y los inversionistas petroleros, madereros y mineros (estadounidenses y canadienses). En ambos casos, los pueblos indígenas defendieron sus antiguos territorios frente a las nuevas empresas colonizadoras. A pesar del caos en las oficinas agrarias gubernamentales y de la falta de voluntad política de los funcionarios para distribuir tierra a los pequeños propietarios, los indígenas, asegura Grandia (2009:136, 137), se hicieron tenazmente un nicho dentro del esquema de colonización que los excluía y se las arreglaron para desarrollar un sofisticado sistema de derechos de uso y un activo mercado de tierras, creando sus propios sistemas de documentación y vendiéndose mejoras entre sí. Además, los residentes indígenas eran los «expertos» que informaban a los recién llegados sobre aquellas tierras que eran disponibles y las que según su criterio no lo eran. Como resultado de estas batallas cotidianas, según la historiadora citada, el 15% del total de los beneficiarios de las tierras de Petén –con quienes los planificadores de la colonización no contaban– son q'eqchí' (137).

Independientemente de la voluntad del Ejército y de los funcionarios del Fydep, la misma demanda de trabajadores en la construcción de infraestructura (brechas, caminos, campamentos, aserraderos, etc.) y producción, extracción y circulación de los nuevos productos de exportación abrió las puertas a diferentes grupos de campesinos que llegaron a Petén por esfuerzo propio (Rodas, 2001; Hurtado 2010). De esa cuenta, las dimensiones que adquirió la ocupación de las tierras bajas del norte siguieron lógicas muy diferentes a las previstas por el Estado[143]. Los procesos sociales que desplegaron, incluso aquellos actores que no habían sido invitados a colonizar Petén, desempeñaron un papel decisivo en la

143 El censo que el propio Fydep realizó en 1972 establece que para ese año ya se registraban 1,929 fincas, cubriendo una superficie de 234,765 hectáreas. En principio, el Fydep había hecho concesiones para la formación de 1,515 fincas con una superficie de 511,471 hectáreas, aunque se habían formado 414 fincas más al margen de la planificación realizada por dicha institución. Del total de estas fincas, 54 habían sido otorgadas en propiedad privada; 15 eran cooperativas campesinas; 823 estaban en manos de adjudicatarios aprobados pero que aún no contaban con sus títulos de propiedad; y 623 solo contaban con la autorización de asentamiento por parte de las autoridades locales (Fydep, 1972, citado en M. Hurtado, 2010:90).

formación de los diferentes territorios e instituciones peteneras. Algunas de estas dinámicas (movilidad, ocupación, poblamiento, producción) se desarrollaron como contratendencias a las prioridades y formas de intervención estatal. De hecho, afirma Margarita Hurtado (2010), fue la acción decisiva de los diversos actores sociales, con sus distintas visiones del mundo, con sus deferentes intereses y desequilibrios de poder quienes han configurado el territorio de Petén a través de su permanente interacción y arreglos.

Quinta parte

Las consecuencias no previstas de la reforma del Estado

Capítulo VIII
Apertura democrática *versus* reforma del Estado

> «Modelar un Estado por medio de la violencia política puede adoptar diversas formas. En Guatemala, una cierta democracia "nació" del seno de la campaña contrainsurgente desatada en 1982 que se calcula dejó 75,000 muertos, 440 aldeas arrasadas y más de un millón de refugiados desplazados» (Schirmer, 1999:193).

Al analizar el proceso de «apertura democrática» que se vivió en Guatemala en la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX, tendremos en cuenta que aquí, como en muchos otros países de América Latina, este proceso estuvo acompañado de endémicas crisis económicas y agresivas reformas estructurales. En un período de violencia generalizada y vuelta a las promesas autoritarias –como el que estamos viviendo ahora-, se vuelve crucial analizar esta doble coyuntura. Particularmente porque durante varios lustros el optimismo en los procesos de apertura democrática nos impidió observar qué tipo de Estado se fue modelando a partir de una larga historia de conflicto armado, militarización y violencia en la que el Ejército se constituyó en un actor protagónico del rediseño estatal. No hay que olvidar, nos dice Schirmer (1999), que el proyecto político militar que surgió del golpe de Estado de marzo de 1982 reconfiguró la burocracia del Estado para un co-gobierno entre militares y civiles por igual, que dejó intactas las estructuras del poder y autonomía de los militares.

Además, el énfasis analítico en la cúpula del Ejército y de los partidos políticos, combinado con una lectura romántica del poder local, nos impidió observar cómo se produjo el reacomodo del poder militar/paramilitar en los diferentes territorios del país durante el proceso de apertura democrática y reforma del Estado, cuyos énfasis eran la privatización y la descentralización estatal. Sin embargo, una

mirada más atenta a las trayectorias políticas de aquellos actores que ocuparon los espacios más importantes de la institucionalidad descentralizada nos permite observar que durante este período las estructuras de la contrainsurgencia se incorporaron en el corazón mismo del Estado. La genialidad de este proyecto político-militar, nos dice Schirmer, fue doble: contrariamente a la suposición de que el gobierno civil implicaba el retorno de los militares a los cuarteles, este *co-gobierno* nacido de la contrainsurgencia, no solo aseguró el poder y la autonomía de los militares, sino que institucionalizó a ambos (ibíd.1999:419).

Durante esta coyuntura en el nororiente de Guatemala –como en muchos otros territorios del país- se produjo un reacomodo de poder entre los viejos militantes anticomunistas –que perdieron autoridad durante el gobierno de facto del general Ríos Montt y el gobierno de la Democracia Cristiana –DC– y aquellos exmiembros de las fuerzas armadas que se vincularon a los nuevos partidos políticos (primero DC y luego el Frente Republicano Guatemalteco –FRG–, La Unidad Nacional de la Esperanza –UNE–, la Gran Alianza Nacional –GANA–, el Partido Patriota –PP– y comités cívicos), y empiezan a ocupar importantes espacios de poder en la región. De hecho, algunos de los exmilitares y exparamilitares que entrevistamos en el nororiente consideran que nunca antes el Ejército había estado en mejores condiciones que durante el primer gobierno civil de la Democracia Cristiana y aquellos que le sucedieron. El gobierno de la DC supuso para ellos la posibilidad de participar (con camiseta de civil) en la contienda electoral de sus regiones de origen. Además, el éxito de su campaña política podía asegurarse gracias al respaldo de sus superiores y a la posibilidad de aprovechar la red de relaciones tejidas por el Ejército a través de sus estructuras militares y paramilitares (comisionados militares, especialistas de inteligencia, patrulleros de autodefensa civil y exsoldados). En otras palabras, la apertura democrática y las políticas de descentralización, lejos de significar el desmantelamiento de las estructuras militares y paramilitares, supuso el reacomodo de sus integrantes en las nuevas formas de hacer política.

Algunos alcaldes y diputados del Nororiente aluden que a fines de los años 80 del siglo XX, fue el apoyo de la Zona Militar de Zacapa y las estructuras militares que existían en las aldeas de sus municipios lo que les permitió construir una plataforma electoral y disputar el gobierno municipal a las familias de la élite local que desde fines de los años cincuenta militaban en el MLN o partidos afines y gobernaban la región. Al ser entrevistado, el alcalde de un municipio de Zacapa explicó que

él inició su carrera política en la DC, y que gracias a su trayectoria militar pudo abrirse el espacio político. En esos años, nos dice el alcalde en mención, cada vez que llegaba a la brigada algún comandante, segundo comandante o el jefe de la S2 «yo me iba a presentar y cuando ellos me veían, inmediatamente sabían que yo había sido miembro activo en el Ejército y que estaba participando en la política; entonces me apoyaban para que yo me abriera espacio político en el municipio. Al Ejército nunca le importó por qué partido me estaba postulando. Simplemente, el Ejército sabía que conmigo iba a tener una persona de confianza dentro del municipio y ya no la gente que tradicionalmente había gobernado [E-G9-JM-11.09.2011:19]. El espacio político lo abrí poco a poco, hasta que ellos [las familias de la élite local] se dieron cuenta [de] que la mayoría de gente que me apoyaba eran patrulleros y exsoldados, gente que había estado conmigo en los frentes. Cuando empezó este proceso [de apertura democrática] ellos miran que la gente que salimos (sic) del Ejército empezamos a incursionar en la política y que la Zona Militar nos protegía. Entonces, la gente del pueblo ya nos respetó más. Porque antes, si alguien de las aldeas quería hacer política y llegaba por un partido diferente al MLN, luego lo acusaban de guerrillero, llamaban al jefe de comisionados militares, lo iban a traer a la casa…y no se andaban con tantas cosas» (ibíd:19).

En ese mismo período (1985), Arnoldo Vargas ganó las elecciones para ser alcalde de Zacapa, y promovió la diputación de su hermano Elder Vargas, quien figuró como uno de los diputados «constitucionalistas» que redactaron la Constitución del 85. En esta coyuntura dio inicio lo que en Zacapa se denomina la «Era de los Vargas de Manzanotes». Con una educación académica mínima, pero con una amplia experiencia en las estructuras paralelas del Estado y una extensa red de relaciones político-militares, Arnoldo ejerció un gobierno populista y gamonal. Actualmente, este es uno de los hombres más recordados por los zacapanecos de diferente extracción social, particularmente por todos aquellos que en un momento de necesidad extrema tuvieron el apoyo solícito por parte del cacique. En las elecciones de 1990, Arnoldo y Elder se lanzaron a la reelección como alcalde y diputado, respectivamente. En ese entonces, el principal oponente de Arnoldo fue el transportista Manuel Olavarrueth. Según la revista Somos Zacapa (1999:14), los seguidores de Olavarrueth y un sector de la población que no estaba de acuerdo con la administración de Vargas daban por segura su derrota; sin embargo, los Vargas arrasaron en las urnas. La oposición alegó fraude, hubo denuncias de compra de votos e intimidaciones, pero estas no prosperaron. Sin

embargo, Arnoldo no asumió el cargo edil, pues el 27 de diciembre fue acusado de narcotráfico y capturado con un impresionante despliegue de fuerzas de seguridad, y el 19 de mayo de 1992 fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 30 años de prisión.

Tal como vimos en el capítulo anterior, desde los años sesenta, Arnoldo Vargas había sido uno de los comisionados militares más destacados de Zacapa, miembro de un temido escuadrón de la muerte y uno de los 50 hombres que disfrutaron de la confianza del general Arana Osorio cuando este fue comandante de la Zona Militar de Zacapa y luego presidente de la república. Mas importante aún, durante los años setenta a ochenta, Arnoldo Vargas mantenía muy buenas relaciones con los militares que estuvieron en la región, se encargó de administrar las aduanas entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y formó parte de la red de contrabando que operaba en el nororiente desde los años setenta[144] y, al igual que muchos de los aduaneros que formaban parte de dicha red, amasó mucho dinero (La Hora, 24/04/2008). Al ser despedido se dedicó a la ganadería y a la política, pero nunca perdió sus buenos contactos en aquellas aduanas de su interés. En los siguientes años, Arnoldo generó un gusto por el dinero y la búsqueda de oportunidades gracias a las relaciones de trabajo que mantenía con figuras políticas y militares (Brockett, 2012:9).

En los años ochenta, cuando los colombianos necesitaron ampliar sus rutas de comercio, Arnoldo se convirtió en su socio principal en Guatemala. Lo paradójico de esto es que las razones por las cuales el nororiente de Guatemala atrajo el interés de los narcotraficantes colombianos no fueron muy distintas a aquellas que tuvieron los piratas y contrabandistas (ingleses, holandeses y franceses) que dominaron las redes del comercio ilegal en la región desde fines del siglo XVII a la primera mitad del XIX. Según un alto funcionario de la Drug Enforcement Agency de Estados Unidos (DEA), estas razones fueron: «su [ubicación], la vulnerabilidad de sus fronteras, sus costas escasamente pobladas, la infraestructura de sus carreteras y los continuos problemas de corrupción» (Cámara de Representantes, Guatemala)[145]. Tanto en el período colonial como ahora, la participación de los nororientales en fuerzas militares privadas, pero

144 A esta red se la llamó el Cartel de Zacapa. Estaba integrada por militares y funcionarios de Estado de alto rango, y controlaba el contrabando que entraba o salía por las aduanas del puerto Santo Tomás de Castilla y las fronteras de Guatemala-Honduras (Agua Caliente y El Florido) y Guatemala-El Salvador (Anguiatu) y la Aduana Central en la ciudad de Guatemala.

145 A inicios de los noventa, un 15 o 25 por ciento de la cocaína colombiana que llegaba a los EE. UU. primero atravesaba Guatemala; a finales de esa misma década alcanzó casi la mitad (Smyth, 2005).

al servicio del Estado (milicias durante la Colonia o grupos paramilitares durante la Guerra Fría), les permitió situarse como intermediarios del tráfico ilegal de mercancías y gobernar su territorio con amplios márgenes de soberanía provinciana. Tanto en el pasado como en el presente inmediato, la presencia del Estado se vio condicionada al poder que ejercen sus caciques, traficantes y fuerzas milicianas en la región.

El 21 de mayo 1992, el diario El País publicó la noticia de la extradición del alcalde citado en los siguientes términos: «Arnoldo Vargas Estrada, alcalde de la ciudad de Zacapa (150 kilómetros al este de Guatemala) fue enviado ayer a Nueva York para que haga frente a la acusación de introducir cocaína en Estados Unidos. La extradición se resolvió al cabo de casi año y medio de batalla legal en la que la presión de la embajada estadounidense fue decisiva. La historia se remonta a diciembre de 1990, cuando en vísperas de las elecciones presidenciales, Vargas Estrada –conocido financiador del partido Unión del Centro Nacional– fue detenido en su ciudad natal por la policía guatemalteca con el apoyo de la DEA y la policía norteamericana antinarcóticos. Washington pidió inmediatamente la extradición del alcalde zacapaneco y con ello se abrió una intensa lucha con los abogados de Vargas que produjo *un rico anecdotario bananero*, en el que se incluyen desde amenazas a jueces hasta jugosos intentos de soborno. Fracasados esos intentos, un hermano del acusado, el diputado Elder Vargas Estrada, intentó una operación de rescate que incluía actas judiciales falsas que ordenaban a las autoridades penitenciarias la liberación del detenido. La operación falló en el último momento, gracias a una decidida actuación del procurador general de la nación, Acisclo Valladares. Concedida la extradición del exalcalde, la embajada norteamericana montó su traslado hasta el aeropuerto con un espectacular aparato de seguridad, que incluyó coches blindados con matrículas diplomáticas y helicópteros artillados de la DEA».

El lunes 16 de septiembre de 2013, el diario elPeriódico publicó el informe DI-03-15-0048-58 que saca a luz los vínculos de algunos militares que estuvieron destacados en la Segunda Brigada Militar de Infantería Capitán General Rafael Carrera (Zona Militar de Zacapa) con algunas personas acusadas de narcotráfico[146]. En este mismo artículo, elPeriódico documenta que en la década

146 El Informe DI-03-15-0048-58 se refiere al asunto de la reparación y mantenimiento de la pista de aterrizaje, ubicada en la Brigada Capitán General Rafael Carrera, por parte de Mario Mendoza y Julio Girón. Según este informe, ambas personas, propietarias de las avionetas TG-FPS y TG-MAN, ofrecieron pagar el costo de mantenimiento de la rampa de rodaje «ya que Aeronáutica Civil no lo ha llevado a cabo». Este informe considera que esa autorización compromete a la Brigada

de los ochenta, cuando Arnoldo Vargas era alcalde de Zacapa, la DEA estableció que en esta zona militar aterrizaban aeronaves con cocaína procedentes de Colombia. Según los registros de la DEA, todas las operaciones contaban con la aprobación de los comandantes de la Zona y el alcalde Vargas. De acuerdo con los informes de la DEA, en los años tempranos del Narco en Guatemala, la pista de dicha zona militar era uno de los principales puertos de ingreso para la droga al país. Estimaciones hechas entonces, daban cuenta de que al menos una tonelada era descargada semanalmente en el lugar [elPeriódico, 16/09/2013]. Además, Vargas tenía acceso directo y pronto a esta zona debido a que su hacienda quedaba a menos de una cuadra de la misma (Smyth 2005, López 2010, Brockett, 2012).

Durante los años de mayor poderío de Arnoldo, diferentes diarios del país publicaron que los vecinos de Zacapa aseguraban que ovnis merodeaban su ciudad durante las noches. Sin embargo, luego se pudo comprobar que se trataba de avionetas cargadas con cocaína que descendían en la Zona Militar, aprovechando la oscuridad. De este modo se inició la organización, que posteriormente se conoció como el Cártel de Zacapa, del cual el alcalde Vargas se convirtió en principal jefe con la venia de los hermanos Orejuela, que lideraban el Cártel de Cali. Como veremos más adelante, el Cártel de Zacapa se inició como un grupo clandestino de la contrainsurgencia que operaba en las principales aduanas de la región y se dedicó al contrabando, el tráfico de armas y el narcotráfico. Actualmente, Vargas figura como uno de los primeros nororientales extraditados a los Estados Unidos que guarda prisión por narcotráfico [elPeriódico, 16/09/2013].

Algunos reportajes de prensa escritos por zacapanecos aseguran que «Arnoldo fue un alcalde muy querido y un exitoso ganadero, que ayudó a financiar parte de la campaña de Jorge Carpio Nicolle que días antes [de la captura de Arnoldo] había pasado a la segunda vuelta electoral, perfilándose seriamente como el futuro presidente de Guatemala» (Guillermo Castalleda/La Hora, 24/04/2008).

Personas de diferentes posturas que entrevistamos en Zacapa coincidieron en plantear que Arnoldo se movía en el municipio como un auténtico cacique y

Militar al permitirles a ambos financiadores utilizar la pista aérea sin pasar por una inspección de lo que transportan. Además, considera que la instalación podría ser aprovechada por individuos comprometidos en actividades ilícitas, y cita textualmente el narcotráfico y demandas judiciales. Concluye que no es conveniente que Mendoza y Girón patrocinen la reparación y mantenimiento de la pista, pero al mismo tiempo admite que esto es ya un hecho, según consta en el memorando número OL-MEDV-03-2005 de fecha 25 de septiembre de 2005 [elPeriódico, 16/09/2013].

que su arraigo popular respondía a la antigua figura del *comendador*, cuyos códigos de relación patrón/cliente aún seguían vivos en las aldeas más pobres de Zacapa. Aludiendo a esta figura del comendador y su relación con los ganaderos, contrabandistas, alcaldes, diputados y *varones del narco* del nororiente, una entrevistada recuerda que cuando ella era niña su papá le decía que había dos tipos de seres humanos: «el tipo de hombre *suertudo* que era tocado por Dios y estaba destinado a proteger a los otros que no tenían tan buena suerte con el dinero. Entonces, estos señores eran los que obtenían mucho dinero y tenían lo que la gente común llama "suerte", "bendición de Dios" y "hacían producir todo lo que ellos tocaban". Esto hacía que el común de la gente se cobijara a merced de ellos» [E-Z24-RP-15.06.2012]. La reificación que han hecho los nuevos caciques locales y las familias de la élite narco acerca de este «orden divino», jerárquico y desigual, les ha permitido disfrutar de su «buena suerte en el dinero», legitimar su poder y ganar la lealtad de sus protegidos. Además, estos han sabido utilizar con habilidad los recursos e instituciones del Estado para reafirmar su dominio personal y ampliar los márgenes de su soberanía provinciana.

Otro entrevistado afirma: «Arnoldo Vargas era el cacique de Zacapa; este tipo es listo e hizo servicio a la comunidad. Arnoldo tenía sus cuestiones… él regalaba el dinero, parecía como si el dinero no era de él… Una vez fuimos a pasear a los tanques de agua, pero él vio que iba un cliente arriba de La Trementina, con su mecapal de leña. Inmediatamente se bajó del carro y le dijo: "¡Tené, tené tu billete!". Eran billetes de […] Q10 o de Q20 y los regalaba. La gente llegaba a la municipalidad a pedirle pisto y él decía: "Tené, tené, tené". Les daba. No sé de dónde venía el dinero […]. Dicen que las gavetas donde antes había expedientes, él las desocupó y metió dinero. Y cuando él abría el archivo, ¡así brincaban los billetes!, ¡fíjese! ¡Arnoldo es un gran tipo! ¿De dónde le venía el dinero? Eso si no me lo pregunté. Pero como persona, ahí sí mire… ¡era listo el hombre! Arnoldo era muy caritativo y visionario. Él construyó la calzada principal de Zacapa, desde la Reforma hasta la Cruz de Mayo. En la inauguración de la calzada la imagen que recuerdo de él es [la de] aquel hombre subido en un caballo blanco, precioso. La gente decía: "¡Ahí viene Arnoldo, Ahí viene Arnoldo!", y la gente salía a verlo» [E-Z&-AP-02.07.2011:22-23].

El 29 de octubre de 1995 hubo una manifestación de 400 personas enfrente de la oficina regional de la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (Minugua) en Zacapa, cuyo objetivo fue

presentar una denuncia sobre la arbitrariedad e ilegalidad cometida en la captura, extradición y prisión en Estados Unidos del alcalde Arnoldo Vargas. Asimismo, los manifestantes solicitaron la mediación de Minugua para que ésta verificara los hechos violatorios y gestionara la pronta libertad y regreso de su alcalde a Zacapa [vid. Revista Somos Zacapa, diciembre, 1995:15].

Unos días más tarde, el 12 de noviembre de 1995, ganó las elecciones municipales Carlos Roberto Vargas y Vargas –originario de la aldea Manzanotes y primo hermano de Arnoldo–, quien gobernó el municipio de Zacapa durante el período 1996-2000. Según la revista Somos Zacapa (30/03/2002:14), cuando el primo de Arnoldo asumió el gobierno municipal informó del estado en que encontró las arcas y de los cambios que se proponía hacer. Expresó, además, que había que trabajar mucho y sin discusiones, que él sabía manejar a los «alborotadores» y «holgazanes», y, por consiguiente, «no quería nada de organizaciones obreras que siempre desembocan en revueltas». Según la misma fuente, Carlos Vargas, aunque incansable en sus recorridos por las aldeas recogiendo solicitudes qué atender, se mostraba solemne en su despacho, cortante en sus audiencias, rápido e inapelable en sus decisiones. Desde su punto de vista y el de sus seguidores, este tercer Vargas tenía razón en la forma de hacer las cosas, porque después de la caída de Arnoldo, el gobierno del municipio había caído en un vacío de poder. Entonces, parecía necesaria «la mano dura y poner a cada quien en su lugar» (Revista Somos Zacapa. 30/03/2002:14). Tres años más tarde, el 25 de enero de 1999, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones declaró con lugar un antejuicio en contra del alcalde Carlos Vargas y Vargas, el tesorero y el pleno de la corporación municipal por desfalco, alteración de documentos y supuestos malos manejos en el dinero utilizado en la construcción del mercado municipal de Zacapa (ibíd. 30/03/2002:14). El 31 de enero del 2002, el proceso aún continuaba sin resolución.

El 14 de noviembre del 2003, Elder Vargas participó nuevamente en la contienda política. Esta vez ganó las elecciones para ocupar el cargo de alcalde, mientras César Augusto Paiz, *Paicito* y/o *el Patrón*, fue nombrado gobernador departamental. Al igual que los Vargas, desde la *apertura democrática*, los hermanos Paiz Gómez (César Augusto y Víctor Hugo) de Teculután se turnan en los cargos de diputado, alcalde o gobernador, y vienen administrando su municipio con amplios márgenes de autonomía. César Augusto fue diputado por Zacapa en dos períodos consecutivos (1991-1994 y 1996-2000) y gobernador departamental en

2003, y al igual que muchos otros diputados y alcaldes cuenta con sus propias ONG, sus empresas de construcción y servicios, influye en la conformación de los consejos de desarrollo y promueve a sus candidatos a alcalde.

Los Vargas, analiza un profesional del nororiente, son una dinastía que define la historia reciente de Zacapa. «Ellos son originarios de la aldea Manzanotes. El apellido Vargas ha pesado bastante en la política de Zacapa. Primero vimos a un Arnoldo Vargas, hombre campestre, el típico hombre con ascendiente español: blanco, alto, que desfila en sus caballos de muy buena raza y tiene un buen manejo de las armas. Era una ostentación la de ese hombre macho, ese hombre protector, ese hombre gamonal... eso lo hace ser un hombre temido y querido, un hombre que satisface las necesidades inmediatas de la gente, pues es un hombre que se hace popular. Gana un período electoral y luego gana el siguiente período, pero ya no le permiten asumir porque se lo llevaron extraditado. Su nombre todavía pesa en Zacapa. Su nombre pesa, porque después de él fueron alcaldes Carlos Vargas, su primo, y luego Elder Vargas, su hermano. Mientras Arnoldo estuvo de alcalde, el hermano era diputado. El peso del apellido Vargas aún está vigente. Actualmente, el alcalde de Zacapa es [de] apellido Salguero Vargas, también es [de] la misma familia de Manzanotes. Entonces, el apellido Vargas es como el emblema de Zacapa, ese apellido ha pesado en el poder y la autoridad municipal» [E-Z24-CSPR-15.06.2012].

1. Desmitificando el poder local

El caso de la familia Vargas quizá sea uno de los más ilustrativos acerca del reacomodo de poder que experimentaron las viejas redes patrimonialistas dentro de la nueva institucionalidad descentralizada del Estado. Este caso nos permite observar el poder que llegaron a tener aquellos hombres (como Arnoldo) que participaron en las fuerzas paralelas del Estado en el contexto de la Guerra Fría, y la manera en que estos consolidaron su poder y ampliaron su autonomía con las políticas de descentralización y el fortalecimiento del «poder local». El caso Vargas, como muchos otros del nororiente, presentan *un rostro no imaginado* en el enfoque acerca del poder local y la descentralización, cuya misión era promover el desarrollo humano, ampliar las estructuras democráticas de gobernanza, optimizar la responsabilidad gubernamental en la reducción de la pobreza, contribuir a la resolución de conflictos y promover la cohesión social.

Examinando más de cerca las trayectorias político-militares que siguieron los cuadros más destacados del Ejército y sus estructuras paralelas, tanto a nivel de la cúpula como de los mandos medios, el caso de Guatemala, más bien nos obliga a repensar las cuestiones tradicionales de cómo puede un ejército acomodarse a las nuevas instituciones de gobierno civil y hasta qué grado se logra la desmilitarización si es este mismo ejército el que «prepara el ambiente» para las elecciones mediante la «pacificación» e introduce la seguridad del Estado en la Constitución y en la presidencia, con poca protección de los derechos humanos (Schirmer, 1999:423). En otras palabras, aquí el asunto a evaluar no era cuándo se iba a lograr que los militares regresaran a los cuarteles, que dejaran el poder o que se sometieran al gobierno civil, sino más bien, hasta qué punto estos habían sido capaces de *borrar el guion que une la relación civil-militar*, con la total colaboración, si no la complicidad, de los partidos políticos, presidentes, gobernadores, diputados y alcaldes.

En el trabajo de campo que realizamos en varios municipios del nororiente de Guatemala durante 2011 y 2012 constatamos que aun cuando se produjo la desmovilización de los militares, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil, estos actores se reorganizaron en diferentes partidos políticos, comités y diferentes agrupaciones, en el marco de la descentralización y la formación de los Consejos de Desarrollo. Particularmente, a raíz del incentivo del «pago por *el servicio en armas* prestado durante la guerra», las estructuras municipales y departamentales de las ex-PAC se han mantenido activas y administran los nuevos programas de asistencia social. Incluso, algunos exjefes de comisionados militares y de las Patrullas de Autodefensa Civil han incorporado la participación de sus esposas, madres o hijas en los proyectos de ayuda y han monopolizado el reparto de las bolsas (primero *Solidarias* y luego *Seguras*), enseres de cocina o materiales de construcción (principalmente láminas). La distribución de estas nuevas formas de asistencia está asociada con los candidatos locales o lugartenientes de los partidos políticos, cuyo objetivo es capitalizar una «clientela segura» en las contiendas electorales. Vale decir que en la recién pasada contienda electoral (septiembre de 2011) fue posible observar algunos de los mecanismos mediante los cuales muchos de los actores que se situaron en la arena política a partir de la «apertura democrática» y las políticas de descentralización actualmente se mueven como auténticos caciques regionales, con una amplia red de colaboradores que les permite reelegirse entre dos a cuatro

períodos en las alcaldías municipales y/o en las diputaciones departamentales y administrar discrecionalmente las estructuras y fondos de la descentralización[147].

En buena parte del nororiente, las políticas de la descentralización fortalecieron el poder de viejos caciques locales que habían alcanzado importantes cuotas de poder en el contexto de la Guerra Fría; asimismo, abrieron el camino a nuevos caciques, cuya experiencia política se había forjado en las filas del Ejército. La laxitud de la Ley de Partidos Políticos respecto a la reelección de alcaldes y diputados, sumada a la posibilidad que estos tienen de administrar los recursos financieros y la cartera de proyectos de sus municipios y/o departamentos sin una adecuada auditoria social, ha dado por resultado la formación de nuevas formas de dictadura local que pueden ser más opresivas o asfixiantes que una dictadura de tipo presidencial, en tanto que estos dictadores locales están allí –muy cerca de la gente– y hacen valer su autoridad en el lenguaje cultural de sus súbditos.

Revisando la literatura existente acerca de la reforma del Estado en Guatemala, me atrevo a decir que, en un primer momento (años 90), el entusiasmo en las políticas de descentralización y la formación de los nuevos Consejos de Desarrollo se asentó en una perspectiva binaria que identificó al Estado central como violento, ineficiente, despilfarrador y corrupto, en oposición a un poder local y/o comunal democrático, cercano a los ciudadanos y pertinente culturalmente, ignorando así las trayectorias políticas de aquellos actores que se harían cargo de la institucionalidad descentralizada. Asimismo, se ignoraron los profundos legados de la guerra y la cultura clandestina e impune que se fue modelando tras largos años de regímenes militares, violencia indiscriminada e impunidad. Hoy en día no son pocas las voces que nos alertan sobre la persistencia del clientelismo político, la corrupción, el nepotismo y un variado repertorio de malas prácticas en el diseño y administración de la política pública por parte de aquellos actores que al igual que los Vargas, Paiz, Hichos, Castillo, etc. dirigen las entidades descentralizadas del Estado en el espacio local y departamental.

Mi argumento es que muchos de los fracasos o deficiencias que ahora se imputan a las entidades descentralizadas del Estado responden a la aplicación

147 Incluso el día de las elecciones, alcaldes y diputados (en persona) andaban repartiendo billetes de Q50.00 a cambio del voto de aquellas personas «sueltas» que aún no estuvieran incluidas dentro de un contingente de votantes comprometidos. Además, en las aldeas de los principales municipios de Zacapa observamos que los lugartenientes de cada partido acarreaban votantes a cambio de láminas, vajillas y/o reparto de comida.

generalizada de formulas de reforma estatal que pasaron por alto los procesos sociales que modelaron la cultura y formas de entender lo político de aquellos actores que hoy se mueven en la institucionalidad estatal descentralizada a escala local/regional o nacional. De igual modo, el esquema organizativo de estas «nuevas» estructuras de gobierno se aplicaron indistintamente sin observar las formas diferenciadas que adquirió el Estado en los diferentes territorios que conforman la actual geografía de la violencia, ni identificar aquellos procesos que eran necesarios para desarrollar las capacidades humanas, económicas, técnicas y administrativas que se hubieran requerido para que estas nuevas estructuras efectivamente respondieran a las necesidades de la población.

La falta de voluntad política por parte de las élites gobernantes para llevar a cabo las reformas socioeconómicas establecidas en los Acuerdos de Paz, la precaria presencia del Estado a escala territorial y, en algunos casos, la carencia de mecanismos coherentes por parte de los gobiernos para regular las políticas de descentralización, generaron consecuencias imprevistas dentro de los gobiernos (Stein, 2011). Actualmente, los riesgos de la inseguridad ciudadana y una mayor presencia del crimen organizado hacen que estas debilidades sean cada vez más críticas y conduzcan a una mayor inestabilidad social en la región (ibíd. 4). Una vez que las organizaciones ilegales hacen sombra al Estado -nos recuerdan Comaroff y Comaroff, (2009:52 y 53)- el orden social se convierte en una especie de salón de espejos: visible, opaco y traslúcido a la vez. Y, lo que es más, esta dialéctica tiene su propia geografía. Una geografía de soberanías discontinuas y solapadas en donde prevalece el crimen organizado, la privatización de la seguridad y la formación de gobiernos personalistas, *cuasi* privados.

2. La privatización del desarrollo y los servicios del Estado

La apertura democrática y la firma de los Acuerdos de Paz coincidió con la promoción en la región del llamado Consenso de Washington, el cual implicaba la aplicación de políticas neoliberales destinadas a liberalizar las economías, a cambio de préstamos por parte de instituciones financieras multilaterales para mejorar las finanzas de los Estados (Stein, 2011). Un elemento no menos importante dentro de este proceso de «modernización» de la estructura y dimensiones de la institucionalidad estatal fue la reducción de sus burocracias

públicas, la privatización de las empresas y servicios del Estado, además del recorte y/o tercerización de las políticas de desarrollo.

Durante el segundo quinquenio de los años 90 en Guatemala ya se habían privatizado Guatel, la Empresa Eléctrica, Aviateca, Correos y Telégrafos, entre otras. Asimismo, se desmantelaron varios de los ministerios y dependencias estatales que habían sido responsables de implementar las políticas de desarrollo durante las dictaduras militares. Por ejemplo, se desmanteló el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y toda la institucionalidad agraria que había sido financiada por Alianza para el Progreso en el contexto de la Guerra Fría, con el fin de fortalecer la producción del pequeño y mediano campesino.

Simultáneamente se desacreditó la planificación macroeconómica, las políticas sectoriales y regionales a partir de las cuales se habían impulsado las políticas de desarrollo económico. En contrapartida, cobraron fuerza la descentralización, los fondos de inversión social y la formación de los Consejos de Desarrollo. A la par se crearon nuevos fondos de inversión social (FIS) o Fondos para la Paz, que contaron con préstamos millonarios del Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Vistos en retrospectiva, podría decirse que la creación de estos fondos fue coyuntural. En principio, a través de estos fondos los organismos multilaterales buscaban administrar con «transparencia» y «agilidad» buena parte del financiamiento que anteriormente se había canalizado a través de los diferentes ministerios que estaban siendo desmantelados y cuyos empleados eran despedidos o sometidos a nuevas formas de flexibilidad laboral. Algunos de estos fondos, particularmente el FIS, crecieron desmesuradamente hasta llegar a convertirse en una especie de megaministerios que concentraban y otorgaban el financiamiento para múltiples proyectos ejecutados directamente por las corporaciones municipales: construcción de escuelas y puestos de salud, adoquinado de calles, producción de cultivos no tradicionales, etc. Normalmente, estos financiamientos eran otorgados directamente a los gobiernos locales o a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajaban en los renglones, espacios y ritmos solicitados por el donante. Uno de los graves problemas en la aplicación de estos fondos fue el que inyectaron muchísimo dinero, de gestión y ejecución expedita, a instituciones locales que hasta entonces no tenían una clara noción acerca del desarrollo local ni la experiencia administrativo-financiera para el manejo de los nuevos recursos.

Por otra parte, los esfuerzos por reconstruir el tejido económico y social, así como la búsqueda de nuevas formas de desarrollo, se vieron seriamente afectados por el huracán Mitch, el cual impactó seriamente el nororiente de Guatemala a finales de 1998. Según Alfredo Stein (2011), el Mitch puso en evidencia la vulnerabilidad social de la región y de las disparidades abismales en la distribución de los ingresos, así como el acceso a la tierra urbana y rural. A raíz de Mitch, las agencias de cooperación internacional redefinieron su apoyo en la región. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional redirigieron alrededor del 50 por ciento de sus préstamos hacia los esfuerzos de reconstrucción (Flacso, 1996, citado en Stein, 2011:10). Muchas de estas iniciativas tenían como propósito fortalecer la gobernanza territorial, la transparencia, la democracia y el respeto de los derechos humanos. La descentralización se convirtió en algo esencial dentro de las negociaciones de diferentes agencias de cooperación. La idea era que los gobiernos municipales se hicieran cargo de la emergencia y la reconstrucción (post-Mitch), implementaran los proyectos de desarrollo local y administraran los fondos de inversión social a la brevedad exigida por cada donante.

La inyección, si es que no, *sobredosis* de financiamiento, inimaginado por una corporación municipal de aquel entonces, la celeridad en los tiempos de ejecución de cada proyecto y la administración descuidada que se le dio a los fondos de inversión social (principalmente a aquellos destinados a la emergencia del Mitch) contribuyó a fomentar en los directivos y funcionarios de la nueva institucionalidad local descentralizada aquellas «malas prácticas» que antes se les criticó a los funcionarios de la institucionalidad estatal que estaban desbaratando: nepotismo, clientelismo y corrupción. De hecho, una auditoria rigurosa sobre la ejecución de estos fondos ofrecería muchas luces para explicar cómo surgen los nuevos potentados y/o caciques locales que ahora gobiernan buena parte de los municipios del nororiente.

Por otra parte, el financiamiento otorgado por los fondos de inversión social, así como el financiamiento otorgado por múltiples agencias de cooperación internacional, provocaron el fenómeno de la *oenegización* de las organizaciones y movimientos sociales. Durante el proceso de las negociaciones de los Acuerdos de Paz, diferentes coordinaciones de ONG, abrazaron de facto la fórmula neoliberal y creyeron fehacientemente que sus pequeñas y dependientes organizaciones de desarrollo (no lucrativas) podrían reemplazar al Estado implementando

enfoques de desarrollo «alternativos al modelo dominante». Sin lugar a dudas, los años noventa son años de una inmensa circulación y creatividad de ideas, enfoques, metodologías y prácticas que abonaban al impulso del liderazgo y el desarrollo local, principalmente en aquellos territorios que habían sido devastados por la guerra. En su momento fueron de particular relevancia los procesos de formación y capacitación que se llevaron a cabo en comunidades indígenas del altiplano central y noroccidental en donde se concentró la ayuda[148]. Asimismo, se impulsaron proyectos experimentales en todos los campos de lo que entonces se llamó el desarrollo integral.

El problema consistió en que, apenas una década más tarde (2000), el flujo del financiamiento sufrió un drástico e inesperado recorte. Peor aún, cuando muchas de las organizaciones sociales despertaron del sueño *oenegizante* descubrieron que era tarde. En la primera década del año 2000, el panorama era menos alentador que cuando iniciaron sus organizaciones: desaparición de la institucionalidad estatal de desarrollo y financiamiento altamente condicionado, tanto para las pocas ONG que sobrevivieron como para los gobiernos locales. Los vicios de la cooperación llevaron a que muchos de los proyectos de desarrollo respondieran cada vez más a las concepciones, intereses y ritmos de las agencias donantes, y no así a las necesidades y demandas de las contrapartes locales.

Derivado de estos procesos de reconfiguración del Estado y privatización del desarrollo, en muchos territorios del país actualmente observamos graves carencias y deficiencias en los servicios públicos y privados, corrupción y fortalecimiento de poderes fácticos en el espacio territorial. En algunos casos se observa la formación de pequeños feudos, nuevas formas de cacicazgo y dictadura local. Como ejemplo, basta con rastrear las trayectorias políticas de aquellos alcaldes y diputados que en estas elecciones cumplieron de tres a cuatro períodos en el poder (12 o 16 años). Durante todos esos años, estos nuevos funcionarios de la institucionalidad estatal descentralizada han manejado los «listados de obras», la asignación de fondos presupuestales, el financiamiento y ejecución de los proyectos de sus municipios a través de sus propias ONG o empresas de construcción y servicios. Asimismo, al evaluar el conjunto de iniciativas de desarrollo que convergen en un mismo territorio, regularmente se observa la

148 Entre otros, se promovieron diplomados, cursos cortos, seminarios, talleres y muchísimas charlas sobre igualdad de género, derechos humanos, identidad y cultura, salud reproductiva y salud comunitaria, tecnología apropiada, manejo de recursos naturales, producción agropecuaria, etc.

improvisación, duplicación y competencia por recursos, y beneficiarios entre las diferentes instituciones que trabajan allí.

Los casos de los alcaldes y diputados descritos con anterioridad nos muestran que, lejos de la anunciada democracia, la trasparencia administrativa y el desarrollo local con equidad en muchos de los municipios del nororiente, la apertura democrática permitió la formación de nuevas constelaciones de poder provinciano que operan a partir de las viejas estructuras de la impunidad administrativa y judicial con amplios márgenes de soberanía local. Desde estos espacios, la gente de los barrios y aldeas pobres de los municipios del nororiente pelea sus derechos y la aprobación de sus proyectos usando, en la medida de lo posible, los mecanismos que le ofrecen los Comités de Desarrollo Local y sus propias organizaciones de base comunitaria, territorial, sectorial y/o nacional. De igual modo, aprovecha el gamonalismo y practicas clientelares de aquellos caciques que gobiernan sus municipios y se sirve del clientelismo y la corrupción para avanzar en sus gestiones con el Estado. En este caso se trata más bien de distinguir aquellos patrones organizativos dentro de la multitud de actividades que suelen etiquetarse como «ilegales», «desorganizadas» y «corruptas» (Nuijten, 2003). Particularmente, porque en muchos de los pueblos del nororiente estos patrones quedan claros a partir del hecho de que la gente sabe a dónde debe ir para que sus gestiones avancen, qué lenguaje o argumentos deben usar al presentar sus peticiones frente a los caciques locales y qué debe hacer para pagar los servicios prestados por estos. En el nororiente, las nuevas formas de corrupción se asientan en una vieja tradición de gobiernos patrimonialistas en los que la línea de lo legal y lo ilegal, lo estatal y lo paraestatal se difuminan con relativa frecuencia.

2. Descentralización y crimen organizado

En 2007, el vicepresidente la república Eduardo Stein declaró públicamente que el crimen organizado tenía el control del nororiente del país –algo que ya era un hecho para los partidos, que veían casi imposible postular candidatos que no tuvieran vínculos directos con esas mafias o fueran financiados por ellas desde los años ochenta. Los departamentos nororientales de Zacapa, Chiquimula e Izabal (entre otros, como Petén y Alta Verapaz) ya eran territorios estratégicos para la droga y estaban controlados por el crimen organizado. Según Stein, estos grupos usaban el soborno y la violencia para alcanzar puestos políticos en las elecciones

generales, con el fin de ampliar impunemente sus negocios y espacios de poder en estas regiones (Prensa Libre, 19/02/2007). La preocupación del vicepresidente de aquel entonces se vio reflejada en el acucioso reportaje realizado en varios departamentos del oriente por Lorena Seijo y Juan Carlos Menocal, cuyo informe se publicó el 19 de febrero de 2007. En las entrevistas que estos investigadores hicieron a los representantes de diferentes agrupaciones políticas, de justicia y de derechos humanos en esta región, efectivamente constataron que el primer problema que afrontaban los políticos de estos departamentos era cómo financiar sus campañas. Al consultar a los gobernadores, estos aseguraron que cada vez era más difícil conseguir «recursos limpios para el proselitismo». Con amplio conocimiento de causa, César Augusto Paiz, gobernador de Zacapa y anterior diputado por Zacapa (en dos períodos consecutivos), aseguró que para postular a una diputación se necesitaba al menos un millón de quetzales. La gente quería que los candidatos les financiaran las ferias, les donaran terrenos o les regalaran electrodomésticos. La pregunta clave era: ¿De dónde salía ese dinero? Según los gobernadores entrevistados en ese entonces, había dos posibilidades de cubrir esos gastos: financiación por parte del narcotráfico o por empresarios interesados en apoyar a algún candidato para obtener sus favores cuando este llegara al poder (Seijo y Menocal, 2007). Mientras que en los procesos de reelección de alcaldes y diputados otra importante fuente de financiamiento ha sido la corrupción, ello aunado al manejo de los fondos sociales y los proyectos municipales con objetivos clientelares y electorales. Vía la corrupción, aquellos alcaldes y diputados con pretensiones de reelección se han hecho de fondos para cubrir los gastos de campaña, la compra directa o indirecta de votos y el acarreo de personas. A partir del análisis de casos concretos, el reportaje de Seijo y Menocal documenta que el ambiente y control de las mafias en los departamentos del oriente hacían que el ser un político honesto no fuera tarea fácil. En algunos casos, la muerte de precandidatos y reconocidos políticos estaba siendo motivo de alarma en los partidos, que creían que el crimen organizado y el narcotráfico promovían ataques a sus adversarios. Por ejemplo, el gobernador de Izabal de ese entonces, el señor José López, afirmó que involucrarse en política en esos departamentos era jugarse la vida.

En contrapartida, el gobernador de Zacapa César Augusto Paiz Gómez (conocido en la región como *Paicito* o el *Patrón*) consideraba que la violencia no sería empleada en la campaña política de Zacapa «mientras no llegara gente de fuera a crear un clima de intranquilidad. ¡Aquí, ya todos nos conocemos!, añadió» (Seijo

y Menocal, 2007). Y, efectivamente, todos se conocían, pues en las elecciones de 2007, 8 de los 10 alcaldes de Zacapa integrantes del partido oficial buscaron reelegirse, entre ellos figuraba Elder Vargas, hermano del exalcalde Arnoldo Vargas, extraditado y sentenciado en Estados Unidos por trasiego internacional de estupefacientes. «¡Todos somos los mismos de siempre!», reiteró *Paicito* (gobernador de Zacapa). «Aquí no importan los símbolos ni los colores políticos. Por eso es difícil que aquí haya violencia».

Al analizar la dinámica política de la región, un intelectual de Zacapa plantea: «Es terrible, porque aquí vemos normal que el poder lo sigan asumiendo los mismos líderes, estén en el partido que estén, o en el régimen que estén, siguen siendo los mismos hombres. Aquí no hemos visto la transición. Aquí es normal ver a gente que antes estaba como oficial del Ejército en puestos públicos, con su mismo corte militar y su misma forma de gobernar, es normal. Efectivamente, no vimos el cambio. Estamos acostumbrados a que la gente que está en el poder haga uso de los recursos del pueblo sin ningún problema. Tal vez somos apáticos, quizás hay un miedo intergeneracional, porque el que anda preguntando esas cosas puede amanecer en una cuneta, como en aquella época» [E-Z24-CSPR-15.06.2012].

A las incursiones de la mafia en la política se suma el financiamiento de los proyectos que estas obtienen por medio de sus propias empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG). En el sitio de Guatecompras se puede observar que la mayoría de obras adjudicadas por las gobernaciones departamentales y ejecutadas por las municipalidades utilizan dichas organizaciones como canal para encargar las obras a empresas vinculadas con el narcotráfico. Curiosamente, explican Seijo y Menocal (2007), observamos que algunas ONG de Zacapa tenían participación en licitaciones en Puerto Barrios, El Estor (Izabal) y Petén. Mientras que en esos años, la Constructora OM, propiedad de Walter Obdulio Mendoza Matta, hermano de Milton Mendoza, obtuvo una obra por Q3.8 millones el 5 de enero de 2006 en San Benito, Petén. Allí debía entregar el concreto hidráulico del periférico de San José, en el mismo departamento. Normalmente, estas empresas eran beneficiadas con las obras asignadas al municipio de Morales, Izabal. Actualmente, en el nororiente existen más de una veintena de ONG que se benefician en la construcción de caminos, puentes, escuelas, polideportivos, muros de contención, tratamiento de desechos sólidos y dispensarios. Por ejemplo, el famoso patriarca del narcotráfico Waldemar Lorenzana Lima tenía 15 empresas de construcción, varias de ellas contratadas por el Estado. Además de empresas de transporte de carga pesada, exportadoras de fruta y gasolineras,

que podía emplear para lavar dinero que venía del narcotráfico, para construir lucrativos proyectos con las instituciones estatales en la región, para involucrar y/o comprar voluntades (López/Plaza Pública/ 30/04/2011).

3. Tradición paramilitar, contrabando y narcoeconomía

Durante el posconflicto, el problema de la violencia estructural y política adquirió nuevas formas de expresión, sobre todo a partir de las últimas crisis económicas y el afincamiento de redes criminales dedicadas a diferentes formas de malversación y comercio ilícito (redes de contrabando, tráfico de personas, armas y drogas). En los últimos años, Centroamérica es considerada como una de las regiones más violentas del mundo. Debido a su ubicación geográfica, la fragilidad de sus instituciones gubernamentales, la corrupción y la falta de políticas públicas efectivas que se coordinan entre los niveles de gobierno nacional y local, la región se ha convertido en un blanco para el crimen organizado, especialmente para el tráfico de drogas y armas.

Entre las nuevas formas de acumulación capitalista que se ensayan en América Central, y particularmente en el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), una de las más lucrativas es el narcotráfico, el cual implica todo un sistema económico que se oculta tras la acción del Estado e implica una estructura de producción, tráfico, almacenamiento, generación de recursos financieros, acciones de compraventa, inversiones y consumo de drogas (PNUD, 2007-2008: 4). El problema radica en que el istmo centroamericano se ha convertido en una de las bisagras que soportan las transacciones de grandes cargamentos que se mueven entre América del Sur y América del Norte, en dirección especialmente al gran mercado estadounidense. Esto ha hecho que en los últimos años, Guatemala reciba el nombre de «depósito de la droga», y sea un punto estratégico para el tránsito de los cargamentos que van por vía terrestre de México a los Estados Unidos[149].

Los expertos en la guerra contra las drogas dicen que un 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa a través del corredor de América Central, del cual Guatemala es una parte integral. Una parte de la tarifa de peaje por transitar

149 Guatemala está situada en el corredor económico comercial que conecta las zonas productoras de Colombia, Perú y Bolivia con el más grande mercado de consumo (Estados Unidos). Se calcula que por Guatemala pasan anualmente 330 y 350 toneladas de cocaína, lo que significa como valor de tránsito entre 700 y 1,000 millones de dólares (PNUD, 2007 y PNUD, 2007-2008).

por Guatemala también se paga con cocaína, la cual se filtra hacía las pandillas (Goepfert, 2011). El asunto es que Guatemala no sólo es un lugar de tránsito, también cumple con otras funciones propias de la economía del narcotráfico: 1) sirve de espacio de tránsito para las drogas; 2) es un sitio de depósito y redireccionamiento de los destinos de la mercancía; 3) es un mercado de consumo; 4) es un mercado financiero de lavado de dólares y de inversión, y 5) es un productor de heroína, en tanto que produce flores de amapola que luego se trasladan al mercado mexicano (PNUD, 2007-2008:22).

La situación de Guatemala, arguye Julie López (2010-2011), es de doble filo: por un lado, el tráfico de drogas es estimulado por la demanda constante de cocaína en Estados Unidos; por otro, el país en sí mismo tiene dos graves problemas: instituciones débiles y un creciente aumento de la pobreza. Las instituciones débiles (la policía, el sistema judicial, el sistema carcelario) son herederos de la impunidad y la corrupción aprendida durante las dictaduras militares y sobre las cuales se intentó edificar la democracia; mientras que la desigualdad social y la pobreza crea un ambiente en el que las personas con falta de oportunidades, en un momento dado se ven orilladas a tomar este tipo de opciones. Cuanto mayor sea el alcance del tráfico de drogas, la impunidad y la corrupción en Guatemala, más efectivo será el puente que hace el país para el transporte de drogas hacia los Estados Unidos (ibíd. 38).

De acuerdo con Narcotics Affairs Service (NAS) de los Estados Unidos, desde Guatemala se controla la mitad de las rutas del tráfico de drogas que van hacia México y los Estados Unidos[150]. A lo largo de varios años los carteles de la droga en Guatemala se fueron enraizando en los territorios desde donde operan y se insertaron en la institucionalidad estatal, tanto a escala local como nacional. Ante la ausencia, privatización y graves falencias de la institucionalidad estatal de desarrollo, muchos de los empleos, proyectos (escuelas, institutos, puestos de salud, préstamos productivos y apoyos de emergencia) otorgados por las familias narco produjeron una amplia aceptación en las comunidades en donde ellos radican u operan. En la mayoría de los casos, los jefes de los carteles desarrollaron relaciones de clientelismo y compadrazgo con algunos funcionarios del Estado, empresarios y miembros de las élites locales. Asimismo, fueron recreando y

150 La Drug Enforcement Administration (DEA) y la NAS estiman que en 2008 las autoridades locales de Estados Unidos se incautaron solamente del 25 por ciento de la cantidad estimada de cocaína transportada por Guatemala. Ese mismo año, las autoridades guatemaltecas se incautaron solo de un uno por ciento de la cantidad total.

divulgando lo que hoy conocemos como «la cultura narco», con sus desfiles hípicos, jaripeos, peleas de gallos, fiestas, narcocorridos y demás estilos de vida y patrones de consumo ostentoso (esto es particularmente evidente en las ferias titulares de los pueblos que se ubican en su territorio de influencia). Si bien los desfiles hípicos, jaripeos y peleas de gallos hacen parte de la cultura hispánica y ganadera del oriente de Guatemala, con la llegada del narco, estas tradiciones se resignificaron y dieron cabida a la ostentación del poder y las armas, la hombría y riqueza de los nuevos potentados locales. Hoy en día, los carteles del narco no solo tienen mucho poder, sino que gozan de autonomía territorial y cierta hegemonía cultural en varias aldeas y municipios del nororiente.

Además, la economía narco tiene efectos visibles en la movilidad social de quienes la ejercen. El cambio de estatus ocurre en muy pocos años, sobre todo por la utilización de símbolos y patrones de consumo que imitan a las clases altas (caballos de pura raza, vehículos de marca BMW, Mercedes-Benz y *pick-ups* para todo terreno, celulares, relojes, ropa y perfumes de marca, botas y cinchos de piel de animales exóticos, pistolas, armamento sofisticado etc.). Estos nuevos marcadores de *distinción,* son particularmente notables en las comunidades del nororiente que se caracterizan por una profunda desigualdad social. Por consiguiente, en dichas comunidades el ícono del *varón del narco* se vuelve contradictorio, temido y admirado a la vez. Temido por los hechos delictivos que cometen como parte de su profesión, admirado porque se *la juega y con valentía* burla el orden social establecido, adquiere riqueza y escala una posición social que le hubiera sido vedada en un sistema de dominación profundamente jerárquico y desigual.

El corredor del contrabando y tráfico drogas en el nororiente

En el nororiente «la economía no observada ilegal», particularmente el contrabando y el robo de mercancías, no es un asunto nuevo[151]; recordemos que desde el período colonial esta región ya era un *corredor* estratégico para la circulación de mercancías, tanto legales como ilegales que entraban por los puertos caribeños de Honduras, Belice y Guatemala. Además, la economía de

151 La economía no observada, ilegal, se caracteriza por la versatilidad y flexibilidad de su organización, rasgos que le permiten evadir las regulaciones nacionales y posibilitar cambios en su estructura al trasladar las bases de suministro, alterar las rutas de transporte y encontrar nuevos lugares de residencia. La *interconexión* es su forma de operación, tanto interna como en relación con otras organizaciones (PNUD, 2007/2008-4:7).

contrabando a través de las fronteras de lo que ahora se llama *el triángulo norte* del istmo centroamericano era normal y se practicaba a diferentes escalas, desde tráfico de ganado y armas a gran escala hasta el tráfico del guaro clandestino, *el gato,* que circulaba en morrales o pequeñas cajas de madera por los pueblos de frontera.

De hecho, cuando se construyó la carretera del Atlántico en los años sesenta particularmente, los ramales que conectan Zacapa y Chiquimula con Honduras y El Salvador se estableció una especie de *corredor seco* que conectó los puertos del Atlántico guatemalteco y hondureño con los puertos del Pacífico salvadoreño. A partir de ese entonces se produjo un intenso tráfico de tráileres con mercancías de todo tipo, que se iban y venían dejando mercadería autorrobada en los diferentes pueblos de la región.

Otro elemento de crucial importancia en el caso del nororiente es la vieja tradición paramilitar que se desarrolló en la región en el contexto de la Guerra Fría[152], pues muchos de los hombres que hicieron parte de los escuadrones de la muerte que dependían de la Zona Militar de Zacapa mantuvieron viva la relación con sus antiguos jefes de la contrainsurgencia militar y formaron parte de las redes de contrabando de mercancías que operaban en las aduanas de la región. Incluso, algunos de ellos formaron parte de una poderosa organización paralela que creó el Ejército de Guatemala durante el gobierno del general Lucas García, para detectar el tráfico de armas y municiones destinadas a los grupos de la insurgencia (Peacock & Beltrán/WOLA, 2004:21). Esta oficina ocupaba el décimo quinto nivel del Ministerio de Finanzas Publicas, y los militares que la dirigían ubicaron a miembros de la inteligencia militar en los principales puestos del sistema de aduanas. En el nororiente fueron particularmente importantes las aduanas de Santo Tomás de Castilla, el principal puerto en el Atlántico[153], y las aduanas entre Guatemala y Honduras: Agua Caliente[154], El Florido[155] y Entre Ríos[156]; además, las aduanas entre Guatemala y El Salvador, particularmente la aduana de La

152 Ver los capítulos VI. Formación del Estado en el contexto de la Guerra Fría y VII La estrategia de seguridad y desarrollo.

153 Ubicada dentro del puerto marítimo Santo Tomás de Castilla en la calle principal al muelle, a la altura del kilómetro 298 de la carretera Centroamericana CA-9 norte, municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal.

154 Ubicada en el kilómetro 240 de la carretera Centroamericana número CA-10. Aldea Agua Caliente, municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula.

155 Ubicada en el kilómetro 228 de la carretera Centroamericana número CA-11. Caserío El Florido, municipio de Camotán, departamento de Chiquimula.

156 Ubicada en kilómetro 267 de la carretera Centroamericana número CA-13. Aldea Entre Ríos, municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal.

Ermita, conocida comúnmente como Anguiatu, ubicada en Chiquimula[157]. En estas aduanas estuvieron personajes emblemáticos de la contrainsurgencia en el nororiente, tales como el propio Arnoldo Vargas, Gonzalo o *Chalo* Orellana y Valdemar Lorenzana, entre otros.

Según el informe citado de WOLA (2004), la organización clandestina que se formó a través del control de sistema aduanero del país logró penetrar otras instituciones clave del Estado que le sirvieron para llevar a cabo operaciones de contrabando, narcotráfico y otras actividades ilícitas (22). Esta organización contaba con la continua ineficacia del sistema de justicia para asegurar la impunidad de los delitos pasados y presentes. En su búsqueda implacable de enriquecimiento personal ilícito, muchos de los actores poderosos que formaban parte de esta organización adaptaron a sus nuevas empresas métodos ya probados en el pasado contra la insurgencia (WOLA, 2004). Asimismo, aprovecharon las relaciones personales, modelos de interacción y estructuras de autoridad que habían desarrollado en el contexto de la Guerra Fría en todo el nororiente del país.

En septiembre de 1996, fuerzas de seguridad capturaron a Alfredo Moreno (el gran capo del contrabando que operaba desde la Aduana Central). Las investigaciones realizadas por el Ministerio Publico pusieron de manifiesto que la red de Moreno estaba conformada por integrantes de la cúpula militar, la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda y el Sistema Aduanal. Los documentos encontrados por el MP en los archivos de Moreno ligaron a esta red de contrabando a 9 militares de alto rango; estos fueron retirados de sus cargos y trasladados al Cuartel General. Entre estos militares figuraba el propio viceministro de la Defensa, el general César Augusto García, y el general Francisco Ortega Menaldo, quien era el representante guatemalteco ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Ambos fueron destituidos de sus cargos y puestos a disposición de la ley en el Cuartel General. No obstante, las investigaciones y procesos judiciales no prosperaron (Crónica, 1996:27).

Las acusaciones en contra de los íconos de la contrainsurgencia militar como el general Francisco Ortega Menaldo, el capitán de navío Romero Guerra Reyes, los coroneles Juan Oliva Carrera, Rolando Díaz Barrios y Jacobo Salán Sánchez, no solo rompieron con una estructura que se había convertido en un

157 Ubicada en el kilómetro 237 de la carretera Centroamericana número CA-12. Aldea Anguiatu, municipio de Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula.

poder independiente dentro del mismo Ejército, sino esclarecieron un inmenso foco de corrupción e impunidad que funcionaba a través del sistema aduanero (Berganza/Crónica, 1996).

Las investigaciones que condujeron a la captura del supuesto capo del contrabando (Alfredo Moreno) también revelaron los nexos existentes entre la red del contrabando y el narcotráfico (Crónica, 1996:28). Asimismo, dieron la pauta para establecer el funcionamiento de otros dos grandes grupos dedicados al tráfico ilegal de mercaderías y al robo de furgones que juntos se repartían cerca de Q2 mil millones al año, que nunca llegaron a las arcas del Estado (28). Según las autoridades, uno de estos grupos era el «Cártel de Zacapa», el cual operaba en el nororiente y se había formado de una escisión de la banda de Moreno a causa del desigual reparto de las millonarias ganancias. El otro grupo lo integraban pequeños evasores, principalmente comerciantes árabes, sirios y jordanos, no necesariamente conectados entre sí.

El territorio del Cártel de Zacapa tenía como puerto Santo Tomás de Castilla, con bodegas en Izabal, Zacapa, Chiquimula y El Progreso. El área de almacenamiento de las mercancías robadas o contrabandeadas por esta red se encontraba en las aldeas El Rosario, Estancia de la Virgen, Río Blanco y La Palma (todas estas habían sido aldeas muy importantes en la formación de los grupos paramilitares que se formaron en los años 70 y 80). Al momento de la caída de Moreno, este territorio del contrabando y narcotráfico continuaba siendo utilizado sin problemas por los contrabandistas y los nombres de sus cabecillas nadie se atrevía a mencionar (Crónica, 1996:36).

La caída de Moreno puso al descubierto la forma en que las redes de contrabando (paramilitares, altos jefes militares y policiacos y empresarios) defraudaban al fisco. Las autoridades también descubrieron que los capos del contrabando habían encontrado la forma de sacar contenedores con mercadería diversa de los puertos y aduanas, repartiendo dinero por doquier. Asimismo, subfacturaban el precio de los artículos importados, practicaban el robo y autorrobo de furgones, además falsificaban documentos y hacían declaraciones falsas (Crónica, 1996:19 y PhillipChicola/elPeriódico, 22-10-2013).

Entre los mecanismos más usuales para evadir el fisco figuraba el subvalorar el precio de los artículos importados; otro mecanismo muy usado era el seguir el procedimiento de ley, pero con documentación alterada. Para lograrlo, los

importadores se encargaban de que cada una de las personas involucradas en el proceso aduanal recibiera la cantidad de dinero a cambio de su complicidad y silencio[158]. No obstante, el mecanismo preferido de defraudar al fisco por parte de algunos empresarios guatemaltecos y extranjeros, durante los años 80 y 90 fue el *furgonazo* o autorobo de furgones, en tanto que este mecanismo les ofrecía un triple beneficio: 1) evadían el pago de los impuestos correspondientes; 2) vendían la mercadería al consumidor final al precio del mercado o un tanto más bajo que este, y 3) cobraban el seguro de su mercadería.

Mucha de la mercadería que ingresaba en el país a través del mecanismo de *autorobo* de furgones se vendía en tiendas y almacenes autorizados en diferentes ciudades del nororiente y en la ciudad capital bajo la apariencia de bienes de consumo que habían llenado todos los requisitos aduaneros. Informantes del Organismo Ejecutivo y del sector privado consideraban que el 50% de la evasión fiscal se producía mediante el autorobo de contenedores. Si un comerciante importaba productos por los cuales debía pagar Q300 mil de impuestos, los capos del contrabando le ofrecía traerle su contenedor (aparentemente robado) por menos de la mitad hasta la puerta de su negocio; incluso le hacían los trámites para reportarlo como robado para que este pudiera cobrar el seguro. De este modo, el comerciante no solo cobraba el dinero del seguro, sino podía vender la mercadería libre de aranceles (Crónica, 1996:36). En esos años se constató que una de las modalidades utilizadas por empresas bien establecidas era ingresar dos o tres furgones con el mismo tipo de mercadería. Ingresaban uno legalmente y el otro u otros eran autoplagiados a través de las redes del contrabando y luego la mercadería era amparada con la póliza del furgón que ingresaba legalmente.

Una parte importante de esta mercancía robada y/o autorobada se colocaba en una red de negocios ubicados a lo largo de la carretera el Atlántico. Incluso se hizo popular el término del *furgonazo* y se establecieron negocios fijos en varios pueblos de la región conocidos como el *duty free,* en donde se comerciaban los

158 Según un reportaje especial de la revista Crónica, en 1996 un custodio de aduana podría recibir Q1,000.00 por dejar que el propietario de la mercadería la trasladara del puerto a una bodega clandestina. En algunas ocasiones, el piloto del tráiler obtenía Q5,000.00 con la condición de conducir el vehículo al lugar indicado por el comerciante; mientras que una persona que trabajaba en la Aduana Central podía recibir hasta Q3,000.00 para sellar una guía aduanera sin haber visto la mercadería y enviar el documento a una almacenadora. Finalmente, el encargado de la almacenadora podía recibir Q2,000.00 por dar fe de que la mercadería descrita en la documentación era la que ingresaba en la empresa. Estos últimos eran algunos de los mecanismos preferidos por los capos del contrabando, pues estos le permitían tener vigente una red de contactos alrededor del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Gobernación (Crónica, 1996:21).

productos robados o autorobados a precios por debajo del mercado. En estos negocios los nororientales podían comprar whisky, cigarros, electrodomésticos, herramientas, productos ferreteros y agroquímicos, rollos de tela, ropa de marca, zapatos y juguetes importados a precios más bajos, con lo cual esta práctica ganó gran aceptación entre los sectores acomodados de la región que venían de una vieja tradición de consumo de productos de importación.

A pesar de los intentos de desmantelamiento de la red de contrabando que se hicieron en 1996, la práctica de este continuó siendo frecuente en todo el sistema aduanero. A 17 años del golpe que habría de poner fin a la corruptela, *el pulpo* se ha fortalecido. La intervención de las aduanas y la creación de la SAT resultaron insuficientes, ante el fracaso de la persecución judicial (Phillip Chicola/ elPeriódico 22-10-2013). Las redes mafiosas más antiguas y mejor organizadas anidan en las aduanas y controlan la SAT. Según el excanciller Edgar Gutiérrez, estas redes se constituyeron desde hace casi medio siglo en un *Ciacs* (cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad) para dominar el contrabando, y en los últimos años se diversificaron y surgieron otras estructuras criminales aún más poderosas en torno al narcotráfico y la trata de personas (elPeriódico 27-10-2013).

Como ejemplo, vale mencionar que en el informe sobre *La economía no observada,* del PNUD, se registró que solo entre 2002 y marzo de 2007 fueron robados 2,066 camiones-furgones y 1,154 cabezales de furgón. El valor de la mercadería robada en estos furgones varía según el tipo y la calidad de los productos transportados. Actualmente se estima que la absoluta impunidad en la comisión de los diferentes delitos asociados al contrabando se traduce en por lo menos Q4 millardos (miles de millones) que deja de percibir anualmente el fisco. Además, los delincuentes aduaneros corrompen funcionarios, se apoderan de cargos públicos, promueven irregularidades en las comunicaciones, generan ambigüedad y contradicciones en las leyes, y asesinan a quienes obstaculizan sus ilícitos, entre otros despropósitos (elPeriódico, 27-20-2013). En el año 2013, el desfalco fue tal que se perdió el equilibrio entre recaudación/corrupción. Esto se reflejó como incoherencia en los indicadores macroeconómicos e impactó los flujos de caja de las finanzas públicas. Además, el equilibrio fiscal en Guatemala es tan precario que esa sola alteración hizo trastabillar al funcionamiento entero del aparato estatal (E.Gutiérrez/elPeriódico, 27-10-2013).

El Cártel de Zacapa

A partir de esta vieja historia de grupos paramilitares amparados en la clandestinidad e impunidad de sus acciones delictivas, no es casual que cinco de los siete grupos criminales más importantes del narcotráfico (2004) se encuentren en los departamentos de Izabal, Zacapa y Chiquimula, y más recientemente en Jutiapa (PNUD, 2007-2008-4:23). Paralelamente al contrabando de mercancías se estableció el tráfico ilegal de drogas, personas, armas de fuego y municiones. El control paramilitar sobre el territorio del litoral atlántico, Izabal, Zacapa y Chiquimula, pero particularmente sobre los pasos fronterizos y aduanas entre Guatemala-Honduras-El Salvador fue utilizado para asegurar el libre tránsito de los cargamentos de droga.

Desde los años 80, Izabal, Zacapa y Chiquimula han sido importantes centros del narcotráfico en Guatemala y de violencia asociada a este. La importancia geográfica de Izabal radica en que este es el único departamento que cuenta con territorio, tanto en la costa atlántica como en la del Caribe. Su ubicación es central para las operaciones de las organizaciones del tráfico de la droga (igual que lo fue para las redes de piratas y contrabandistas durante el período colonial), particularmente porque al sureste de este departamento se extiende la costa del norte de Honduras, un área cada vez más importante para el trasiego de droga. Además, el norte de Izabal limita con Petén, el cual posee una extensa y descuidada frontera con Belice y México. Actualmente, Petén cuenta con cientos de pistas de aterrizaje ilegales a disposición de las organizaciones del tráfico de la droga (Brockett, 2012). Mientras que la importancia de Zacapa y Chiquimula radica en su ubicación estratégica a lo largo de la carretera al Atlántico y sus ramales que conectan el nororiente con Honduras y El Salvador. Además, ambos departamentos se ubican en una intersección privilegiada para el trasiego de las drogas que entran por el Caribe guatemalteco y hondureño, y de aquellas que entran por el Pacífico salvadoreño.

Particularmente, el territorio nororiental fue estratégico por las configuraciones de poder que se establecieron en contexto de la Guerra Fría. Recordemos que en esta región se organizaron los principales grupos paramilitares que operaron en todo el país y que este pequeño, pero poderoso sector de la población nororiental, se formó en la clandestinidad, el uso de la violencia sumaria y la impunidad. Recordemos que un aspecto central de su práctica política se asentó en la capacidad de desvanecer los precarios límites entre la legalidad estatal y

la ilegalidad de sus acciones, a partir de ello, todo era posible. Particularmente, en contextos como el que se vivió en el nororiente a partir de los años 60s -militarización, violencia política y regímenes autoritarios- la validez de la ley emerge no tanto del mito del Estado, sino más bien de la práctica política de este tipo de actores cuyas habilidades para representar al Estado, o hacer cumplir sus leyes están basadas en el reconocimiento de la impunidad de su aplicación. Desde la perspectiva de Vaena Daas y Deborah Poole (2008) regularmente, estos actores se mueven entre la apelación a la ley y las prácticas extrajudiciales que son claramente representadas como permaneciendo por fuera, o con anterioridad al Estado. Entre los ejemplos de tales figuras están el cacique u hombre fuerte local que representa al Estado a través de formas de violencia marcadas como ilegales; las guardias privadas o grupos paramilitares que actúan como una extensión del ejército; y un conjunto de intermediarios que transitan las fronteras político-económicas. Estas figuras de autoridad local o regional representan -al mismo tiempo- cargos de autoridad estatal -supuestamente neutrales e impersonales-, y expresiones poder privado altamente personalizado que les reditúa vastas utilidades.

Conocedores de estas historias, en la década de los 80, los narcos colombianos llegaron a Zacapa para afianzar sus conexiones con los nororientales. En ese entonces su principal socio fue el emblemático alcalde de Zacapa Arnoldo Vargas. Al principio, el Cártel de Zacapa era una sola organización. Tras varias disputas de poder, este se dividió en varios grupos familiares: los Vargas, los Berganza, los Lorenzana y los León. Se dice que a pesar de esta separación, durante varios años estos grupos continuaron colaborando con Vargas.

Luego del arresto de Vargas, su organización de tráfico de drogas continuó bajo el liderazgo de su socio Byron Berganza, comisionado militar chiquimulteco, ganadero e importante beneficiario del reparto de tierras que llevó a cabo la administración de Arana en Izabal durante los años 70. Para los años 90, buena parte del personal de Berganza eran oficiales militares. De acuerdo a información recabada por Julie López (2010:13), durante el primer quinquenio de los 90 «ninguna carga de cocaína era transportada en el país sin su consentimiento». En 1996, la policía encontró una avioneta con 359 kilos de cocaína en la finca Guacamayo, propiedad de Berganza. Este fue detenido. No obstante, un juez en Izabal pronto lo dejó libre argumentando insuficiencia de pruebas. En 1999 y 2001 Berganza sobrevivió a dos atentados. En 2003 fue arrestado en El Salvador

y extraditado a Estados Unidos; en el 2008 fue condenado por estar involucrado en el trasporte de veinte toneladas de cocaína hacia ese país (Brockett, 2012:7).

Tras la separación de la organización de Vargas, la banda de los Lorenzana se convirtió en una de las más dominantes del país. A lo largo de los años, sus operaciones se expandieron a varios territorios de Guatemala, sus haciendas aumentaron y sus empresas se diversificaron. En noviembre del 2012, el Department of the Treasury Office Control estableció que la familia Lorenzana era propietaria de más de 8 empresas registradas en la SAT, de las cuales dependían una o dos más, con lo cual las empresas registradas a nombre de esta familia sumaban 18. Estas empresas son: 1) la Constructora W. L. y el Servicentro La Gran Vía; 2) la Importadora y Exportadora Lorenzana y la Importadora Lorenzana S. A.; 3) la Administradora de Oriente, el Hotel Regente y la Estación Guadalupe; 4) los Transportes J-L. Cordón y la Empresa Obra Civil y Carreteras; 5) la Constructora H.L.P. la gasolinera Jesús María y Transportes L.C.; 6) la Constructora H.L.T. Zacapa, Guatemala; 7) Lolalimes Zacapa, Guatemala; 8) Inversiones Iris Manuela S. A., Servicentro del Lago y Servifiestas Elegance.

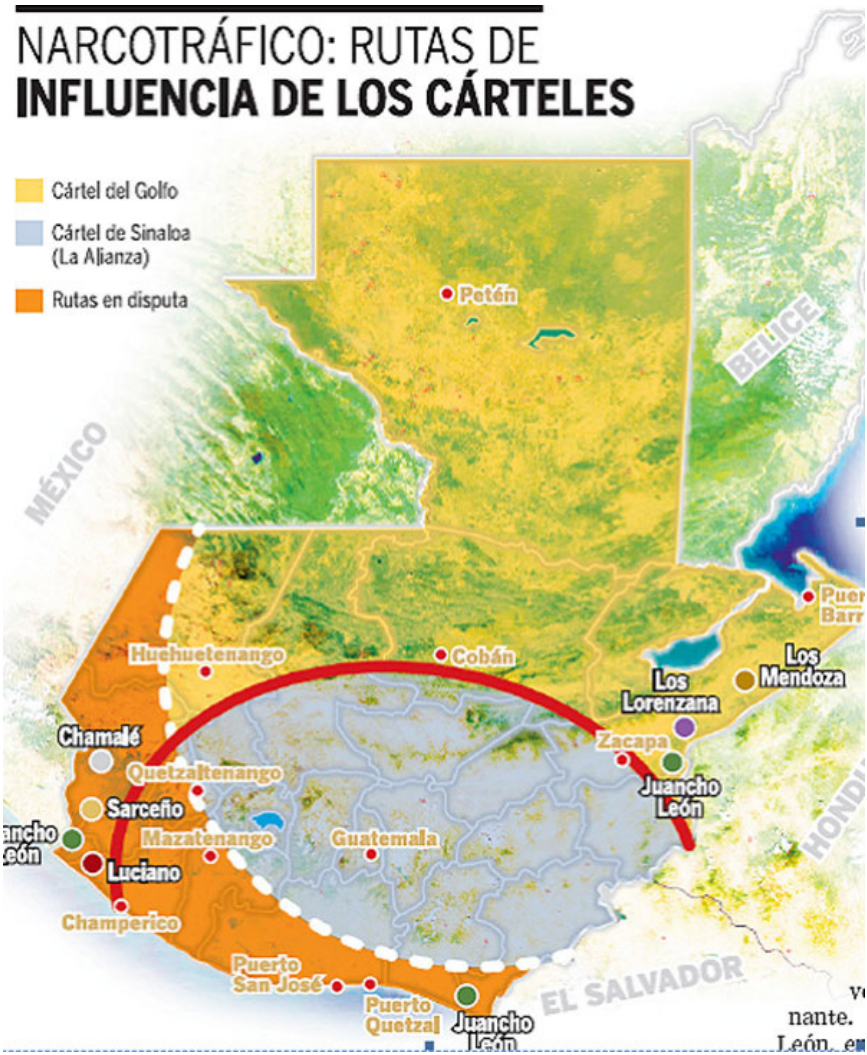
Waldemar Lorenzana Lima, el *Patriarca,* se convirtió en una de las figuras más importantes de la droga en Zacapa, Chiquimula, Izabal, El Progreso, Jutiapa y Jalapa, contaba con conexiones desde la costa norte del Caribe hasta la costa pacífica, ello le permitía tener presencia en todo el país. El *Patriarca* comenzó a familiarizarse con el contrabando desde que fue comisionado militar y agente aduanero en las fronteras de Guatemala-Honduras y luego Guatemala-El Salvador. El mismo camino había recorrido Arnoldo Vargas antes de convertirse en alcalde de Zacapa. Ante el Tribunal Tercero de Sentencia, Lorenzana se describió a sí mismo como un productor y comerciante exportador que trabajó para una empresa norteamericana desde 1959. De hecho la familia Lorenzana es una de las grandes propietarias de tierra y productora de frutas tropicales de exportación (empresas meloneras) en el valle del Motagua. El Ministerio Público asegura que desde la década de los sesenta, los Lorenzana recibieron miles de kilos de cocaína colombiana que, vía El Salvador, era transportada a Guatemala por tierra o mar y entregada al Cártel de Sinaloa en México (López/ Plaza Pública/30-04-2011).

Otra de las grandes bandas del narcotráfico en Guatemala que opera desde el nororiente es la de los Mendoza, una antigua familia de ganaderos y transportistas de Morales, Izabal. Los Mendoza son socios del Cártel del Golfo, radican

en Izabal, cuentan con grandes propiedades en Alta Verapaz y Petén, incluso poseen propiedades y pistas de aterrizaje en el Parque Nacional Lacandón. Además, tienen fincas en Honduras desde las cuales transportan la cocaína a sus bodegas ubicadas en Guatemala. Los cuatro hermanos a cargo del cártel (Milton, Geovanny, Walter y Haroldo) se dividen las responsabilidades entre ellos y también trabajan con varios primos (Brockett, 2012:13). Los Mendoza han logrado mantener un bajo perfil, puesto que existe poca información sobre sus actividades. Se decía que a principios de 2008 los Mendoza contaban con más de 800 hombres armados que estaban a cargo de la seguridad y vigilancia de su territorio. Hoy por hoy, los Mendoza sostienen que son una familia de agricultores y ganaderos honestos. Además de sus haciendas ganaderas en Izabal, Petén y Honduras, la familia también es propietaria de empresas de transporte (FDN, Autobuses Fuente del Norte) y empresas de construcción como la Constructora del Nororiente, propiedad de Edwin Mendoza, y la constructora O.M., de Obdulio Mendoza. Estas empresas han establecido importantes contratos con el Estado para construir carreteras, parques, polideportivos, malecones y adoquinado de calles en Petén e Izabal. De enero de 2007 a marzo de 2012 en el portal de *Guatecompras* se registra la adjudicación de 41 proyectos de ejecución de obra pública a la constructora O.M. (elPeriódico, 22.03.2012).

En el nororiente, los Vargas, Berganza, Lorenzana y Mendoza son conocidas como las bandas de droga «tradicionales», cuando no como las antiguas y prestigiosas familias del narco. Son descritos como personas que refrenan su violencia y que mantienen sus actividades de bajo perfil para no llamar la atención. Además, la gente ha construido un extenso repertorio de anécdotas en las se les representa como hombres ocurrentes, chabacanos y gamonales (ver mapa en el que se representan los territorios de influencia de las antiguas familias narco y su relación con los carteles mexicanos). Este comportamiento contrasta con el de las nuevas y más violentas bandas (Los Leones, Paredes, Castillo, Turcios y Zetas) a quienes su relación con la gente en los territorios que operan parece preocuparles menos (Brockett, 2012).

Mapa No. 11
Narcotráfico: Rutas de influencia de los cárteles



Fuente: Fundación DESC, Informe Guatemala (2009).

El problema que ahora preocupa a las personas que viven en aquellas comunidades que se ubican en los «corredores de la droga» es que durante el segundo quinquenio de 2000 la dinámica narco cambió. La guerra entre cárteles se volvió más virulenta y los grupos locales empezaron a desplegar estrategias

más agresivas, particularmente en la disputa de territorios y espacios de poder que sostienen con los Zetas. A diferencia de las «antiguas familias del narco» a quienes todos conocían y de alguna manera respetaban, los nororientales ven con preocupación la llegada de los Zetas y sus métodos violentos de dominio del territorio. Como todos sabemos, el Cártel de los Zetas surgió como el brazo armado y de sicariato del Cártel del Golfo y está formado por exmilitares mexicanos y exkaibiles guatemaltecos. En 2007, luego de que se independizaron del Cártel del Golfo, incursionaron en Guatemala vía Huehuetenango y se dirigieron rumbo a Cobán, en donde establecieron su centro de operaciones, el cual incluía campos de entrenamiento en Quiché y desplazamientos importantes en el oriente (López/Plaza Pública 30-04-2011). La primera demostración de los Zetas en el nororiente fue el conocido asesinato de «Juancho» León y su gente en marzo de 2008. El saldo fueron 11 muertos. Según fuentes de inteligencia militar y civil, esta matanza tuvo lugar en venganza de que León había tumbado droga a los Zetas y había matado a dos de ellos.

En el nororiente, los Zetas carecían del poder y del tiempo para ganar «mentes y corazones» y se impusieron a la fuerza. Durante los meses de octubre a diciembre de 2010 establecieron su propio *toque de queda* en varias cabeceras municipales de la región y cometieron una serie de asesinatos selectivos de gente que ellos consideraban relacionada con los cárteles rivales. El delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Zacapa, Waldemar Barrera, informó que algunas personas les presentaron denuncias anónimas acerca de esta particular forma de *toque de queda*. Los denunciantes provenían de los municipios de Estanzuela, Gualán, Río Hondo, La Pepesca, Teculután y Zacapa, donde los residentes aseguraron que durante esos meses vivían en la zozobra y bajo el dominio armado de los Zetas. Reforzó la versión de los pobladores el ataque ocurrido el 5 de noviembre de 2010 cuando, a bordo de vehículos *todo terreno*, un grupo arremetió con AK-47 y M-16 contra la gasolinera JP, en Juan Ponce, Gualán, municipio limítrofe con Los Amates, Izabal. Un mes antes, en esta última localidad, se había denunciado la incursión de los Zetas. Este ataque fue una amenaza consumada, dijeron ese día trabajadores a la PNC (Prensa Libre 02.12.2010).

En esta ocasión, el presidente Álvaro Colom aceptó la presencia de los Zetas en la región y el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, reveló que ya se estaba investigando acerca del «toque de queda» y el ambiente que se vivía en

el nororiente. Señaló también que habían montado operativos con las fuerzas especiales a fin de reforzar la seguridad en las carreteras. Además, trasladaron a cien agentes recién graduados de la Policía Nacional Civil (PNC) para que resguardaran la región (Prensa Libre 02.12.2010).

Edgar Gutiérrez, excanciller de Guatemala (2000-2004) y asesor del Presidente Otto Pérez Molina en la propuesta para regular el mercado de las drogas, en su momento planteó que el *parteaguas* de la incursión de los Zetas se ubicaba el 25 de marzo de 2008, cuando mostró su poderío al matar a Juan José León, alias «Juancho». Gutiérrez coincidió con Martínez-Amador y afirmó que la ruta que quieren controlar los Zetas se encuentra entre Honduras y México, y atraviesa Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango. El excanciller añadió: «Este grupo temible, que se mueve bajo una estructura militar, contrainsurgente, va en busca de controlar algo que nadie ha logrado: el tramo de frontera a frontera EE. UU. hasta Honduras» (Prensa Libre 02.12.2010)[159].

Entre el 10 y el 25 de mayo de 2011, los Zetas llevaron a cabo una serie de asesinatos, presuntamente para recobrar un cargamento robado por Otto Salguero, un ganadero de familia zacapaneca radicada en Los Amates, Izabal, y propietario de fincas ganaderas en la región[160]. El 12 de mayo de 2011, los Zetas hicieron una demostración de violencia extrema, similar a las peores masacres cometidas durante el conflicto armando interno, en la finca Los Cocos, km 569, ruta a El Naranjo, La Libertad, Petén, en donde presuntamente Salguero había ocultado la droga robada.

Tanto los analistas del narcotráfico como los mismos nororientales, hoy en día hablan del ocaso de las antiguas familias del narco de la región. Mientras los Zetas avanzan por todo Guatemala, las alianzas entre los carteles locales se rompen o debilitan. Además, en los últimos años el trabajo de investigación del

159 Con base en datos de inteligencia policial y militar, un investigador del Ministerio Público, en 2010, afirmó que el grupo de los Zetas contaba con 800 integrantes, de los cuales un tercio eran mexicanos y el resto guatemaltecos (López/Plaza Pública 30-04-2011). En 2010, los Zetas ya controlaban la llamada «ruta de ingenieros», la droga proveniente de Honduras pasaba por el departamento de Izabal, seguía a Raxrujá (Alta Verapaz), cruzaba la frontera hacia México por Ingenieros (Quiché) y llegaba a San Cristóbal de las Casas, donde las rutas varían (Pardo e Inzunsa/Domingo/El Universal 19.08.12).

160 Otto René Salguero Morales, hijo de Juan José Salguero y de Cándida Rosa Morales, nació en San Jorge, Zacapa, el 15 de marzo de 1961; la familia se trasladó en los años 70 a Los Amates, Izabal, donde residen en la actualidad y de donde eran originarios la mayoría de campesinos ejecutados en la finca Los Cocos (elPeriódico, 19 de mayo, 2011). Fuentes consultadas por Prensa Libre resaltan que Salguero Morales era propietario también de las fincas Nueva Alsacia y Nuevo Chapulco, en Los Amates, Izabal, a solo 14 kilómetros de la frontera con Honduras; también es propietario de las fincas San Juan y Los Cocos, en Petén, a 50 kilómetros de la frontera de México (Prensa Libre, 19.05.2011).

Ministerio Público y la DEA en la zona ha permitido la captura de sus principales jefes, entre los primeros Byron Berganza, Waldemar Lorenzana y sus hijos Elio y Waldemar[161], Byron Gilberto Linares Cordón y Mario Ponce. Entre los detenidos y extraditados figuran Juan Chamalé (San Marcos) y el propio Walter Overdick (Alta Verapaz), quien fue capturado a principios de abril de 2012[162]. A partir de estas capturas, el tablero del narco cambió de piezas. El orden que establecieron los narcos guatemaltecos que empezaron el negocio como *agentes aduanales* se acabó. El despliegue de violencia que observamos en las narcomatanzas al estilo mexicano son apenas un indicador del peligro implícito en estas nuevas estrategias de acumulación capitalista que permean, no solo a las empresas que se mueven en el mundo de lo ilegal, sino a diferentes empresas e instituciones estatales que se mueven en la esfera de lo legal.

Es conocido por todos que la economía no observada del narcotráfico produce fuertes sumas de capital circulante y permite el ascenso social rápido de aquellos que participan de este tipo de negocio, no obstante este también contribuye a profundizar las grandes desigualdades sociales que cruzan la sociedad guatemalteca. Además, por su naturaleza violenta e ilegal no contribuye al desarrollo, en tanto que este genera externalidades que operan como factor que contradice la dinámica regional o local del desarrollo, la relaja o condiciona negativamente (PNUD, 2007-2008:26).

En principio, el narcotráfico modificó enteramente los parámetros convencionales de la corrupción. Los débiles o inexistentes controles de financiamiento de campañas electorales y la pérdida de la tradición y lealtad partidistas abrieron las puertas a la influencia criminal en el Estado (Gutiérrez y Méndez, 2012:113-114). Esa porosidad institucional fue más allá de los órganos de seguridad y justicia, y se extendió hacia el sistema de compras y contrataciones públicas, y a medida que se fortalecía la autonomía y base financiera de los gobiernos municipales, se dirigieron hacia el poder local y regional, desde donde caudillos

161 Desde el 2009, los Lorenzana son reclamados por la justicia de Estados Unidos, que los acusa de integrar una estructura de narcotráfico que desde hace décadas está aliada al Cártel de Sinaloa, en México. Están en proceso de ser extraditados Lorenzana Lima y Elio Lorenzana Cordón, hermano de Waldemar. Por información, para capturar a Lorenzana Lima, detenido en abril de 2011, EE. UU. ofrecía US$500 mil y US$200 mil por sus hijos.

162 A Overdick se le conocía como el principal representante guatemalteco de los Zetas. Overdick había sido acusado desde 2002 por los EE. UU. de traficar más de mil kilos de cocaína. Por muchos años fue visto como el principal representante de los Lorenzana en Alta Verapaz. En 2008, según fuentes de la embajada estadounidense, Overdick invitó a los Zetas para «concertar una sociedad lucrativa», pero ahora Overdick ha sido extraditado y los Zetas están al mando.

y narcotraficantes ejercen un control más directo sobre sus territorios y sobre el Congreso de la República, a través de los diputados a quienes financian sus campañas y/o hacen parte de su estructura de poder. Según las estimaciones de Brockett (2012), el valor total de la cocaína transportada a través de Guatemala oscila entre US$7,000 millones y US$10,000 millones al año. Utilizando la cifra más alta, un reporte de 2009 sugería que un 10% de esa suma era utilizada para sobornar a funcionarios públicos, incluyendo policías y jueces. Para ser explícitos, agrega Brockett, eso significa mil millones de dólares al año en sobornos en un país pobre que nunca ha contado con un sistema de justicia eficiente. La DEA también sostiene que los criminales con conexiones políticas en Guatemala «operan dentro de varios departamentos del Gobierno, incluyendo las Cortes y la Policía Nacional Civil».

Por otra parte, en la posguerra el gobierno central no ha sido capaz de ejercer la gobernabilidad territorial como parte de una política de descentralización regulada (Calvaruso, 2007). La inyección, si es que no sobredosis, de financiamiento proveniente de los fondos de inversión social, los fondos de emergencia del huracán Mitch y el incremento de los recursos fiscales transferidos a las municipalidades en los años 90, no estuvo acompañada por procesos de discusión sobre desarrollo local y/o territorial, planificación estratégica, gestión local y auditoría social. Por consiguiente, las inversiones han obedecido a la lógica de las políticas partidistas, a los intereses y empresas de sus financiadores de campañas, y no así a las estrategias destinadas a generar un desarrollo local sostenible. En este contexto, la atomización de las inversiones públicas y la estructura atomizada del poder Ejecutivo no contribuyeron al fortalecimiento de la política pública social (Calvaruso, 2007).

Las configuraciones de poder que observamos en el territorio nororiental de Guatemala en la primera década del siglo XXI muestra la acción de nuevos y viejos actores (con nuevos intereses y empresas) que hoy definen, no solo la inversión y acción estatal, sino su propia visión acerca del desarrollo en sus territorios de influencia. Independientemente de la urgencia de una intervención estratégica para resolver las problemáticas de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental en el nororiente de Guatemala, la prioridad en la ejecución de los fondos administrados por las corporaciones municipales está puesta en *la obra gris* y las empresas constructoras se han convertido en el adalid del desarrollo local, al mismo tiempo en un espacio privilegiado para la corrupción y el lavado

de dinero que proviene de la economía no observada o ilegal. Esta complejidad de actores e intereses con presencia cada vez más fuerte en los diferentes territorios de Guatemala nos exige abandonar la falsa dicotomía entre poder central/poder local y afinar nuestra interpretación del Estado desde una perspectiva territorial. En todo caso, se trata de conocer las relaciones de poder que se tejen a todas las escalas del mundo social e identificar las estrategias de intervención de aquellos actores que se mueven en los territorios en los que trabajamos.

Capítulo IX
Repensar la reforma del Estado

La apertura democrática, la firma de los Acuerdos de Paz y el auge de la cooperación al desarrollo durante los años 90 provocaron un gran optimismo en el fin de la confrontación violenta y en la posibilidad de construir una sociedad democrática e incluyente basada en formas alternativas de desarrollo. Sin embargo, dos décadas más tarde, observamos que las desigualdades sociales son aún más profundas que en ese entonces; y la pobreza, la inseguridad ciudadana y la violencia continúan marcando la experiencia de vida de miles de guatemaltecos.

Si comparamos la magnitud de estos problemas, analizados en el capítulo anterior, con una buena parte de la producción intelectual de los años 90, parecería que abruptamente nos apartamos «del camino hacia una sociedad democrática e incluyente». Desde mi punto de vista, el problema radicó en que el entusiasmo puesto en la democratización no nos permitió dimensionar la magnitud de los legados de la guerra y la prolongada militarización del mundo social que se vivió en Guatemala durante la última mitad del siglo XX. Nos preocupamos por contabilizar los hechos de violencia y el número de víctimas, pero muy poco nos preguntamos respecto a qué pasaría con todos aquellos actores cuyo ejercicio de la violencia se había vuelto rentable, y posiblemente era su único o principal expertise.

Por otra parte, no dimensionamos las consecuencias implícitas en el conjunto de cambios que estaban ocurriendo durante la coyuntura crítica de los años 80 y 90[163]. Particularmente, no previmos las consecuencias de la aplicación de

163 La noción de coyuntura crítica alude a *un período histórico de cambios significativos a escala global*, el cual puede manifestarse de forma diferente en cada uno de los países, atenido a su propia historia; por consiguiente, produce distintos legados que pueden ser de largo alcance (Mahoney, 2010). Estos son períodos en los que los recursos, oportunidades y representaciones colectivas cambian bajo el impacto de circunstancias excepcionales, desbaratando los juegos de interacciones en marcha entre Estado y actores sociales (Brachet, 2002 y 2006). En estos momentos de reacomodo y disputa social, diferentes actores con intereses, muchas veces contrapuestos, perciben posibilidades para cambiar las reglas de la dominación.

las políticas neoliberales en un país devastado por la guerra, con profundas desigualdades sociales y una larga historia de militarización del mundo social y político.

De nueva cuenta, hoy nos presentan como «nueva» la reedición de diferentes modelos para reformar o modernizar el Estado e impulsar el desarrollo territorial. No obstante, las experiencias del pasado más reciente ilustran con elocuencia la urgencia de desarrollar respuestas críticas frente a la difusión y aplicación de este tipo de recetas que no toman en cuenta la densidad histórica de nuestras configuraciones sociales.

El análisis de las consecuencias no deseadas de la aplicación insensata y ligera de las políticas de la descentralización en el nororiente de Guatemala, nos plantea la necesidad de ir más allá de los modelos normativos de reforma del Estado, asimismo, no invita a investigar con seriedad la complejidad del entramado social que ha dado forma al Estado de Guatemala durante las últimas décadas. En este caso, se trata de repensar el Estado a partir de una lectura responsable y aterrizada de nuestra historia presente, y de las particularidades que ésta adquiere en cada uno de los territorios del país.

En síntesis, este capítulo constituye una invitación a retomar el estudio de los procesos sociales que transformaron la conflictiva relación entre Estado, economía y sociedad en Guatemala durante la coyuntura crítica de los 80 y 90, y su relación con los problemas que actualmente enfrentamos. Constituye una invitación a estudiar, por un lado, el grave deterioro de la capacidad del Estado para manejar las grandes variables macroeconómicas y las tensiones derivadas de la lógica del mercado, y, por el otro, a estudiar las múltiples presiones tendientes a expandir la participación popular y los derechos de los ciudadanos más allá del terreno político-institucional de las campañas electorales.

Teniendo presente la hondura y complejidad de las problemáticas contemporáneas que aquejan a la población guatemalteca, tanto las universidades, como los diferentes centros de pensamiento, necesitamos ir más allá de las consultorías e investigaciones a pedido, que nos dicen poco o nada acerca de cómo este país funciona. Necesitamos comprender la magnitud y profundidad de los cambios ocurridos en Guatemala a partir de la apertura democrática y las políticas de liberalización económica o reforma estructural que derivaron en la actual crisis política y económica que se vive en la región. Necesitamos estudiar la formación

de Estado como una construcción histórica y contingente, y trazar un mapa más complejo de su desigual disposición y distribución en el territorio nacional. Particularmente porque uno de los grandes problemas del Estado en Guatemala, tanto en el pasado como en el presente, radica en que sus instituciones no han tenido presencia ni controlan el conjunto de su territorio; por consiguiente, han implantado una legalidad truncada y la legitimidad de la coerción que lo respalda es desafiada por su escasa credibilidad como intérprete y realizador del bien común (O'Donell, 2007:33-34). Estas falencias del Estado constituyen un grave problema en términos del desarrollo económico y social. También lo son porque este Estado, y los gobiernos de la posguerra, han tenido poca voluntad y escasa capacidad para democratizar una sociedad con una larga historia de violencia política y desigualdad social, la cual demanda persistentes esfuerzos en los que un Estado revitalizado (financiera, política y técnicamente) debería jugar un papel central (ibíd. 33-34).

La reconstrucción que hemos hecho en los capítulos anteriores acerca del proceso de formación del Estado en el nororiente de Guatemala pone de manifiesto la necesidad de conocer a fondo los legados de la guerra y su impacto en el rediseño estatal que se llevó a cabo en la coyuntura crítica de los años 80 y 90. Pues aun cuando hay varios estudios sobre el papel que desempeñó el Ejército en la implementación de la estrategia contrainsurgente, aún estamos escasamente informados en relación a cómo operaban los militares dentro de la institucionalidad estatal (local, regional y nacional) y hasta qué punto y de qué maneras influían en la definición de las políticas públicas durante los gobiernos militares y civiles. De igual manera, necesitamos profundizar en la comprensión de la derecha política guatemalteca (sus agrupaciones y bases regionales, sus filiaciones, alianzas, disputas y rupturas), pues aún no hemos reunido suficiente información como para calcular las verdaderas posibilidades de que sus varios componentes se conviertan en democráticos, algo que necesitamos saber si vamos a pronosticar las posibilidades de consolidación de un Estado democrático (Brachett, 2001:73). En otras palabras, necesitamos repensar el Estado desde los grandes desafíos que presenta la nueva dinámica de los cambios, pero sin olvidar la historia más reciente y los diferentes papeles que han jugado en ella los diferentes actores sociales. En otras palabras, necesitamos llevar adelante investigaciones rigurosas que nos permitan conocer a fondo el proceso de transformación del Estado de Guatemala y nos permitan reevaluar la cultura e historia político-institucional sobre la que se asentó el modelo de reforma

del Estado en el espacio local/regional/nacional. En este caso, necesitamos escudriñar en la historia aquellas ideas y prácticas gubernamentales que limitan o eventualmente potencian el desarrollo de la democracia a todas las escalas del mundo social. De igual modo, necesitamos entender por qué buena parte de la cooperación al desarrollo canalizada a través de los fondos de inversión o cohesión social tras años de experimentos, hoy en día aún está lejos de haber alcanzado los frutos esperados. Se trata de reevaluar las limitaciones de aquellas perspectivas que reducen la complejidad del problema de la «gubernamentalidad» a la oposición binaria entre Estado versus mercado, o entre centralización versus descentralización. Más bien, necesitamos evaluar a fondo los legados de las políticas neoliberales que se impulsaron en los años 80 y 90, y su impacto desigual en los diferentes territorios del país. Esto último pasa por situarnos en el debate contemporáneo acerca de la reforma del Estado, pasa también por aprender de las experiencias de otros países de América Latina.

1. Los legados de la coyuntura crítica de los 80 y 90

La gran paradoja de la coyuntura histórica de los años 80 y 90 fue la doble transición que se vivió en América Latina. Por un lado, se transitó hacia la economía de mercado desregulado, y, por el otro, hacia la democracia política. En este doble movimiento hay que observar la dimensión de los cambios ocurridos en Guatemala y sus profundos legados para nuestra sociedad. Justo porque estos cambios tuvieron lugar en un ambiente internacional favorable y contradictorio a la vez. Lo favorable apuntaba a la posibilidad de avanzar en la construcción de sociedades democráticas, cuyo valor sustantivo era la tolerancia y la aceptación de la diversidad. Lo contradictorio fueron las políticas de ajuste estructural y los graves problemas derivados de la crisis económica más prolongada de este siglo, que provocó el creciente empobrecimiento de importantes segmentos de población. Ambas tendencias (política y económica) han alterado y continuarán alterando profundamente a nuestra sociedad (Kruijt y Torres-Rivas, 1991).

En las últimas décadas experimentamos una fase más intensiva y extensiva del capitalismo que se caracteriza por formas «flexibles» de regulación de los mercados financieros, los circuitos de producción y comercialización, y de los mercados de trabajo. En palabras de David Harvey (2007), en esta nueva etapa del capitalismo han aparecido mecanismos completamente nuevos de acumulación por desposesión, que se caracterizan por una creciente penetración de compañías

transnacionales y la formación de nuevas compañías centroamericanas con alcance intra y extrarregional que están rediseñado la geografía territorial de nuestros países. Este proceso recibió un nuevo ímpetu con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los acercamientos comerciales con la Unión Europea.

En el presente cada vez es más claro que la soberanía territorial del Estado está siendo socavada desde arriba por el mercado, y desde abajo por los procesos de descentralización y formación de soberanías provincianas de diferente tipo, como las que analizamos en el capitulo anterior. Los vertiginosos cambios en la composición y la territorialización del capital han vuelto las intervenciones gubernamentales en la producción y comercio internacional cada vez menos efectivas. De igual forma, los Estados centroamericanos están perdiendo soberanía para el manejo de problemas tales como la macroeconomía, el narcotráfico y el armamentismo, el cambio climático; el manejo de sus ecosistemas (entre otros), los cuales se consideran cada vez más propios del ámbito de acción de los organismos internacionales. De hecho, muchos de los procesos y prácticas características del Estado están siendo asumidos por instancias no gubernamentales e instituciones transestatales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y las diferentes instancias especializadas del sistema de la Organización de Naciones Unidas. Las políticas y prácticas de estas instancias normalmente producen efectos de Estado tan poderosos como aquellos de los gobiernos nacionales, lo cual ha llevado a hablar de formas de «gubernamentalidad transnacional» (Blom y Stepputat, 2001). En este sentido, lo que interesa conocer es cómo convergen, se asocian o compiten las estrategias de trabajo de esa multiplicidad de agencias e instancias multilaterales en el espacio territorial. Más importante aún, cómo se relacionan con el Estado a escala nacional y local, cómo se articulan con las iniciativas de los actores que gobiernan estos espacios y cómo se relacionan con las comunidades que habitan los territorios en donde estos intervienen.

1.1 Desigualdad socio-territorial y vulnerabilidad ambiental

En buena medida, el debilitamiento o vaciamiento del ámbito de acción y funciones de Estado está ocurriendo por la incapacidad y/o la indiferencia de los gobiernos de hacer frente a la creciente desigualdad social y violencia introducida por las nuevas formas de acumulación capitalista que están reestructurando los

territorios del país. A partir de la firma de los Acuerdos de Paz y la aplicación de las políticas de reforma de Estado, Centroamérica constituye un destino importante para captar nuevas inversiones que se reflejan en sectores como la minería y el petróleo, los agrocombustibles, el desarrollo inmobiliario asociado con el turismo y los megaproyectos de infraestructura (Prisma, 2011:2). En la práctica, estas formas de acumulación forman parte de una tendencia del capitalismo global que busca expandir sus inversiones y utilidades en nuevos territorios y nuevas esferas de la economía real. Si bien todas estas formas de acumulación capitalista eventualmente pueden potenciar el desarrollo económico del país, tanto las estadísticas como los estudios territoriales que tenemos a nuestra disposición documentan que muchas de las empresas que lideran estas actividades económicas suelen vulnerar aún más los ecosistemas, los medios de vida y la seguridad alimentaria de la población que vive en los territorios en donde estas se instalan. Estas nuevas lógicas de acumulación capitalista tienen expresiones concretas y generan contradicciones y disputas territoriales que redimensionan los desafíos para muchas comunidades rurales que ya presentan severas condiciones de exclusión social, pobreza y degradación de sus ecosistemas, lo que compromete aún más la viabilidad y sostenibilidad de sus estrategias de vida. No es fortuito que durante la primera década que va del siglo XXI observemos que las desigualdades territoriales se ha acentuado, los flujos de migración se han intensificado y la concentración de población y recursos en las áreas urbanas sigue creciendo, suscitando tensiones sociales y deterioro ambiental por falta de control y planificación.

Los resultados más evidentes de la aplicación de las políticas neoliberales en Guatemala son la persistencia de un modelo de acumulación excluyente, la profundización de las desigualdades socio-territoriales, la precarización de las relaciones salariales, la naturaleza estructural del desempleo, la migración transnacional, la exposición de grandes sectores de la población a diferentes situaciones de riesgo y la incapacidad del sector público para enfrentar los diferentes ciclos de desastre y emergencia.

La inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad de los ecosistemas de las tierras altas (ladera y montaña) de todo el nororiente de Guatemala, donde vive la mayoría de la población indígena de la región, es un claro ejemplo de los problemas derivados de la creciente desigualdad social que se produjo en esta región con la aplicación insensata de las políticas de reforma del Estado

que desmantelaron la precaria institucionalidad estatal de desarrollo agrícola y designaron la administración de los recursos municipales a actores políticos que saben poco o nada acerca del desarrollo territorial. No es casualidad, entonces, que durante las últimas décadas observemos un aumento vertiginoso de la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental en todo el nororiente de Guatemala, al punto que durante los últimos años se hable de esta región en términos del «corredor seco» o «corredor del hambre»[164].

El termino «corredor seco» se acuñó en 2002 con el documento Cartografía y Análisis de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria en Guatemala, publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería bajo los auspicios del Programa Mundial de Alimentos. En este documento se registra que cerca del 59% del territorio nacional se ubica en «áreas vulnerables por poseer un alto grado de amenaza a los factores ambientales considerados sequías, heladas e inundaciones. Estas áreas se caracterizan por una baja producción de alimentos así como una concentración de desnutrición y pobreza extrema y baja capacidad de respuesta» (2001:ii). Este documento se publicó después de que el país sufrió uno de los períodos más severos de sequía (2001-2002). Esta problemática se volvió a repetir en 2009 y representa un riesgo inminente en cada uno de los ciclos de lluvia.

En el nororiente, el corredor seco atraviesa las comunidades ch'orti' de Chiquimula (Jocotán, Camotán, Olopa, San Juan La Ermita y San Jacinto), que durante el período colonial y republicano experimentaron el despojo de sus tierras bajas en los fértiles valles del río Motagua y el río Grande de Zacapa. Estas son las mismas comunidades que a mediados del siglo XX intentaron recuperar sus tierras a través de los mecanismos que les ofreció la Ley de Reforma Agraria y luego fueron reprimidas por *los liberacionistas* que gobernaron su región a partir de 1954. Actualmente, estas comunidades experimentan de forma dramática los efectos del cambio climático[165] y presentan los índices más altos de pobreza extrema y desnutrición crónica infantil, la cual alcanzó niveles del 71% en el municipio de Jocotán durante 2008 (Gallardo, 2008:5).

164 Dentro del «corredor seco» se suelen incluir municipios de los departamentos de Baja Verapaz, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa y El Progreso, el cual se conoce de manera específica como el «corredor seco de oriente».

165 En 1998, el huracán Mitch causó miles de muertes y desaparecidos en esta región. Posteriormente, cada año la gente enfrenta los efectos de una combinación de ciclos de tormentas tropicales e intensas sequías; en 2006 el Stan volvió a afectar severamente estas comunidades del nororiente.

Fotografías No. 24a y 24b
Niña ch'orti' en el Corredor Seco



Fuente: Trabajo de Campo Matilde González.

Fotografías No. 25a
Madre y niña ch'orti' en el Corredor Seco



Fuente: Trabajo de Campo Matilde González.

Fotografía No. 25b
Madre y niño ch'orti' en el Corredor Seco



Fuente: Trabajo de Campo Matilde González.

De acuerdo al documento de la Red Humanitaria (2009), la problemática de inseguridad alimentaria afecta de forma severa a aquellos municipios del nororiente cuyo territorio se encuentra en las tierras altas (por encima de los 1,200 msnm), donde la degradación ambiental (deforestación, sobreutilización de tierras de vocación forestal y avance de la frontera agrícola) es mayor. Estos son municipios densamente poblados y con una marcada atomización de la propiedad agraria. Esto es evidente en los municipios ch'orti' en donde más del 79.75% de su territorio está deforestado, lo cual supone pérdida de la biodiversidad, contaminación y reducción de los caudales de fuentes de agua; altos niveles de erosión y degradación de las tierras (26.92% de las tierras están erosionadas, abandonadas o en barbecho) (Sinafip, 2004).

Fotografías No. 26a y 26b
El corredor Seco
Tierras altas del territorio ch'orti'



Fuente: Trabajo de Campo Matilde González.



Fuente: Trabajo de Campo Matilde González.

Fotografía No. 26c
Anciano ch'orti' en el Corredor Seco



Fuente: Trabajo de Campo Matilde González.

Fotografías No. 26d y 26e
El corredor Seco
Tierras altas del territorio ch'orti'



Fuente: Trabajo de Campo Matilde González.

Actualmente, Guatemala presenta uno de los más bajos índices de desarrollo humano de América Latina (0.704), así como el más alto índice de malnutrición crónica de la región (49.3%). Además, continúa sufriendo una marcada desigualdad producto de las grandes diferencias estructurales en la distribución de la riqueza que hoy hacen que el 53.51% de la población viva en condiciones de pobreza y el 13.33% en situación de extrema pobreza (Encovi, 2011)[166]. La expresión espacial de la pobreza se hace evidente en Zacapa cuya tasa de pobreza general se disparó de 42.4% en 2002 a un 53.9% en 2006, y la pobreza extrema de 7% a 18.9%; mientras que en Chiquimula en 2002 la pobreza general era del 56.5% y en 2006 alcanzó 59.5%, y la extrema pobreza de 13.3% se agravó a 27.7% durante el mismo período (INE/Encovi, 2006). Esta problemática se torna alarmante en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2011, en la que se registra que en Zacapa el 71% de población es pobre, mientras que en Chiquimula el porcentaje de personas pobres alcanzó el 78.98% (INE/Encovi, 2011). El aumento acelerado de la pobreza en esta región contrasta alarmantemente con la inversión municipal en infraestructura suntuosa, el derroche del gasto público y el gamonalismo ostentado por los caciques locales del nororiente, para quienes la prioridad de su gestión está puesta en la rentabilidad de sus proyectos y/o empresas de construcción.

El desempleo constituye otro de los problemas graves y complejos que enfrenta el país. Su gravedad radica no solo en la cantidad de personas que hoy no tienen empleo, sino en la persistencia de su condición de desempleados, subempelados o «subocupados» (en condiciones de alta precarización laboral)[167]. La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) registró que en 2010 había 202,876 personas claramente desempleadas, mientras que 3.4 millones de personas, lo que equivale al 59.65% de la población económicamente activa, estaban subempleadas o con un «empleo informal» que no ofrecía ninguna estabilidad laboral ni las prestaciones sociales de ley[168].

166 Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2011).

167 La precarización laboral es un fenómeno del mundo salarial en el actual momento de globalización. Para entender la magnitud de este problema es necesario tomar en cuenta tres dimensiones que suelen estar intrínsecamente articuladas y que no siempre resulta factible analizarlas de manera separada: reestructuración productiva y flexibilidad laboral; desregulación laboral y debilitamiento del actor sindical (Mora Salas, 2010).

168 En 2010, la población en edad para trabajar era de 10.6 millones de personas; no obstante, la población económicamente activa (PEA) para ese año era de 5.76 millones de personas, integrada por 3.6 millones de hombres y 2 millones de mujeres. De estos trabajadores, 2.7 millones eran del área rural (47.8 % de la PEA), 1.2 millones más eran del área urbana metropolitana (21.7 %) y 1.7 millones de la periferia urbana (30.5 %) (INE, 2010).

Las grandes transformaciones en el mundo laboral no son ajenas a los cambios ocurridos en las relaciones entre el Estado y los sectores subalternos. Tal como sugiere Pérez Sáinz (2012) el nuevo tipo de ciudadanía social que ha impuesto el orden neoliberal cuestionó la identificación entre ciudadanía y trabajo generada en el período previo a la crisis. Esta disociación opera de ambos lados de la vieja ecuación. Por un lado, las ocupaciones asalariadas han ido progresivamente perdiendo su naturaleza formal, ya que lo que caracteriza al actual proceso de salarización es su precarización generalizada. Y, por el otro, la ciudadanía social ya no se define más en términos de empleo formal, sino que se ha orientado hacia el consumo básico del hogar (23). Esta pérdida del sentido profundo del concepto de ciudadanía social ha dado pie a la definición de una nueva idea de ciudadanía basada en la noción de pobreza y en la constitución de una población de «pobres»[169]. Ni conflicto ni poder son elementos definitorios de la invención de los «pobres», lo que hace que el término «pobreza» sea políticamente tan correcto (Pérez Sáinz, 2012:23), pero al mismo tiempo tan estrecho para explicar las múltiples relaciones causales de aquellos problemas asociados a la reproducción de la desigualdad social.

La falta de empleo y precarización del mismo, la exigua inversión social[170] y el incremento de la violencia urbano-rural han acelerado los flujos de migración. En la actualidad se estima que cerca del 11% de la población guatemalteca se ha movido al exterior. Entre 2002 y 2010, el promedio anual de personas que migraron al exterior en busca de mejores oportunidades fue de 44,440 (aproximadamente) (Unicef, 2011)[171]. El problema grave de este aumento en los flujos migratorios radica, no solo en los riesgos que asume cada migrante en su trayecto, sino en la criminalización que este experimenta al momento de llegar a otro país.

En el nororiente, la migración hacia Estados Unidos es quizá una de las más antiguas. No obstante, las primeras generaciones de migrantes eran miembros de las familias ladinas que contaban con algunos recursos para poder financiar el viaje de ida y el enganche con el *coyote*. En contrapartida, la población ch'orti'

169 Esta nueva forma de ciudadanía, según Pérez Sáinz (2012:23) se define a partir de tres premisas. La primera es que la condición de pobreza es sinónimo de integración social deficiente. La segunda, corolario de la anterior, es que esta condición es superable si se aplican las políticas adecuadas (como las transferencias condicionadas). Y finalmente, la pobreza no se entiende como *un fenómeno relacional,* sino que se define de manera normativa respecto de estándares fijados por expertos.

170 Guatemala representa uno de los valores más bajos a nivel regional (6.5% del PIB).

171 Ver Encuesta sobre Remesas/Unicef 2010/Protección de la niñez y adolescencia/Guatemala marzo de 2011.

económicamente activa es dependiente del sector agrícola (entre el 81% para Jocotán y el 93% para Olopa). La falta de tierras de vocación agrícola, la falta de certeza jurídica de la tierra, sumada a la falta de empleo local, les obliga a migrar temporalmente como jornaleros en el corte de café, cebolla, tomate y chile pimiento que se produce en la región. Actualmente, para los jóvenes no se vislumbran oportunidades de trabajo digno, lo cual representa un riesgo en el contexto de la economía narco y la violencia que se vive en la región. De hecho, la mayoría de los jóvenes exsoldados que entrevisté durante el trabajo de campo plantearon que, luego de su desmovilización, las pocas opciones laborales a las que tienen acceso son el trabajar en una empresa de seguridad, ser guardaespaldas de un narco, migrar al corte de café en otras regiones o migrar a Estados Unidos. Sin embargo, esta es una opción inalcanzable para todos aquellos que no tienen cómo pagar el enganche con el *coyote*.

Como hemos visto en los diferentes capítulos de este libro, el rostro hostil del Estado en el nororiente de Guatemala no es nuevo y tiene estrecha relación con las profundas desigualdades socio-territoriales existentes en esta región. Corregirlas requerirá persistentes y prolongados esfuerzos para comprender cómo se produjeron esas desigualdades y cómo revertir esa historia de despojo y violencia sostenida a lo largo de varias generaciones. Entretanto, se deberían hacer todos los esfuerzos necesarios para extender al conjunto de la población una amplia gama de derechos civiles y al menos una canasta básica de derechos sociales (O'Donnell, 2007). Esto no solo sería un acto de justicia; también implicaría empoderar a los sectores populares para que estén en mejores condiciones de ir definiendo y defendiendo sus propios intereses e identidades.

2. Crítica a la ortodoxia neoliberal

La crisis económica de 2008-2009 mostró con elocuencia devastadora la necesidad de fortalecer la capacidad reguladora del Estado. Desde mucho antes, incluso funcionarios del Banco Mundial (BM) habían consignado las consecuencias negativas en la aplicación de las políticas de ajuste estructural para el desarrollo del propio mercado. En un informe oficial de 1997, el BM planteó que del modelo de desarrollo dominado por el Estado de los 60 y 70 se giró abruptamente hacia el Estado minimalista de los 80. En muchos países, los esfuerzos para rebalancear el gasto y el endeudamiento público fueron descoordinados y se cortó tanto lo bueno como lo malo. Para cumplir con sus obligaciones financieras, los gobiernos

más endeudados constriñeron programas de importancia crítica en educación, salud e infraestructura; el resultado fue el descuido de las funciones vitales del Estado *amanzanando* el bienestar social y erosionando las bases para el propio desarrollo del mercado (Banco Mundial, 1997:24 y 25).

Durante esos mismo años, analistas de organismos multilaterales y centros de investigación como el ILPES de la CEPAL señalaron que si bien las reformas del Estado y del libre mercado propugnadas por el Consenso de Washington habían logrado dominar la hiperinflación, imponer una mayor disciplina para contener el déficit fiscal del sector público y equilibrar las cuentas externas, estas fracasaron en alcanzar su objetivo de crecimiento sostenido en la mayor parte de los países latinoamericanos. La aguda declinación del ingreso *per cápita* en la mayoría de estos países exacerbó la pobreza y deterioró aún más las condiciones, de por sí atroces, de desigualdad y de concentración del ingreso y la riqueza (Acuña y Smith, 1996: 203).

La evaluación que hace Joseph Stiglitz (2003), Premio Nobel de Economía y exfuncionario del Banco Mundial, sobre la reforma del Estado, muestra que esta fracasó rotundamente en América Latina y que sus resultados fueron peores de lo que muchos de sus críticos temían: para gran parte de la región, la reforma no solo no generó crecimiento económico, sino que contribuyó a ahondar la desigualdad social y la pobreza. Además, en la segunda mitad de los 90, y especialmente a partir de 1997, hubo estancamiento, recesión y depresión. De hecho, el ingreso *per cápita* disminuyó drásticamente en esos cinco años, período que la CEPAL ha llamado «la media década perdida» (ibíd. 11).

Los impulsores de la reformas, asegura Stiglitz, no pusieron todas las cartas sobre la mesa, en tanto que estas políticas llevaron a una mayor volatilidad económica y más pobreza de lo que era previsible[172]. En este contexto fueron los sectores más pobres de la sociedad los que sufrieron con mayor rigor las consecuencias del aumento del desempleo; y los trabajadores no calificados pasaron a engrosar las

172 Las principales fallas de las reformas del Estado dictadas por el consenso de Washington, según Stiglitz (2003), radican en que 1) estas aumentaron la exposición de los países al riesgo, sin acrecentar su capacidad de enfrentarlo; 2) las reformas macroeconómicas no fueron equilibradas en tanto que impulsaron la privatización y el fortalecimiento del sector privado, pero dieron escasa importancia al mejoramiento del sector público; 3) en lo que respecta a la pobreza, el consenso se basó en las antiguas teorías de la filtración o goteo (*trickle-down)*: las políticas económicas no estaban específicamente diseñadas para combatir el problema de la pobreza; lo que se presumía era que los prometidos beneficios del crecimiento llegarían de algún modo a los pobres, aunque para entonces ya estaba ampliamente demostrado que una marea que sube no eleva necesariamente todos los botes (ibíd. 7-11).

filas de los desocupados (ibíd. 2003:12)[173]. En la región, el desempleo creció casi tres puntos porcentuales y las cifras habrían sido peores si una buena parte de los trabajadores no se hubiera incorporado al sector informal de la economía, un sector en el que se tiene menos acceso al capital y menos protección laboral[174]. De hecho, uno de los elementos del programa de reforma, denominado «aumento de la flexibilidad del mercado laboral», consistió en reducir las medidas de protección del empleo, dando a las empresas mayores facilidades para despedir a los trabajadores y rebajar los salarios (ibíd. 12-13).

En Guatemala de la posguerra, uno de los problema más graves de la aplicación de las políticas de reforma del Estado consistió en que estas de entrada coartaron la posibilidad de formar un Estado democrático, en tanto que ahondaron su incapacidad histórica de penetrar en el conjunto del territorio nacional y de incluir en su radio de acción a los diferentes segmentos de la sociedad, garantizando de forma universal el acceso a los servicios públicos esenciales, en las áreas de salud, educación y saneamiento básico, así como la eficacia de sus ordenamientos legales (Diniz, 2009). Además, el nuevo rediseño estatal se asentó en una vieja historia de ilegalidad e impunidad administrativa y judicial. Los intentos de reducir el tamaño y los déficits del Estado como burocracia finalmente terminaron destruyendo el «Estado como ley», erosionaron su legitimidad ideológica, y fortalecieron el poder y autonomía de redes criminales que operan bajo su sombra (O'Donnell, 1993)[175].

173 Según la evaluación de Stiglitz, los efectos de una contracción incluso temporal de la actividad económica pueden ser duraderos, porque las personas que se quedan sin trabajo no pueden seguir costeando la educación de sus hijos. Una vez interrumpidos los estudios, existe una alta probabilidad de que no se retomen, aun cuando mejoren las cosas. De esa manera, la pobreza se transmite de una generación a la siguiente. Por añadidura, algunas de las reformas son en sí mismas la causa directa del aumento de la pobreza: obligar a los agricultores pobres a competir con la agricultura subsidiada estadounidense disminuyó los ingresos de algunos de los más pobres de la región; y la aplicación de regímenes de restricción monetaria dificultó la creación de nuevos puestos de trabajo que proporcionaran otras fuentes de empleo. Además, el legado de una educación deficiente para los más desfavorecidos hizo aún más difícil la redistribución de la mano de obra, especialmente cuando la liberalización se llevó a cabo con rapidez (ibíd. 12).

174 La estructura general de la reforma dio lugar a la adopción de medidas que tuvieron por efecto eliminar puestos de trabajo o rebajar los salarios de los trabajadores no calificados, como paso previo a la aplicación de otras medidas que podrían haber propiciado la creación de empleos y el aumento de su productividad, o, peor aún, se tradujo en la adopción de medidas que provocaron la eliminación de puestos de trabajo, acompañadas de medidas que reprimieron la creación de empleos (Stiglitz, 2003:12-13).

175 En su artículo Estado, Democratización y Ciudadanía, O'Donnell muestra que en muchas democracias emergentes la eficacia de un orden nacional representado por la ley y la autoridad del Estado se desvanece en cuanto uno se aleja de los centros urbanos nacionales. Pero incluso allí se evidencia también la evaporación funcional y territorial de la dimensión pública del Estado (O'Donnell, 1993: 69).

Lo que no calcularon los economistas neoliberales fue que una de las consecuencias del bajo poder infraestructural del Estado, tras las políticas de ajuste estructural, fuera la erosión de su capacidad para realizar sus funciones más elementales e intransferibles, tales como la garantía del orden y la seguridad públicas y el asegurar condiciones mínimas de existencia en los sectores más pobres de la sociedad. A los problemas de pobreza, vulnerabilidad ambiental, crimen organizado y violencia que actualmente se vive en territorios como el nororiente de Guatemala es difícil encontrarles salida si antes no redefinimos el papel del Estado en la sociedad, esto pasa por pensar no solo la dimensión sino el modelo de institucionalidad estatal que necesitamos, pero, sobre todo, qué tipo actor debería estar al frente de esta nueva institucionalidad y cuál sería su relación con la sociedad. El asunto es *para qué tipo de nación se propone ese Estado* (O'Donell, 2007). La respuesta a esta pregunta, finalmente, tendría que determinar cuáles son aquellas problemáticas cuya respuesta estatal es impostergable, cuál es la estrategia de desarrollo económico-social a impulsar en cada territorio del país y cuáles las características que debería tener la institucionalidad estatal en estos espacios, atendiendo a sus particularidades y prioridades. Esto último pasa por redefinir, no solo los roles y funciones de la institucionalidad estatal, sino su escala de intervención, sus mecanismos de coordinación interinstitucionales y sus mecanismos de participación ciudadana. Teniendo claro esto, es posible pensar qué instituciones se requerirían, cuáles son necesarias y cuáles no, cuáles deberían ser reformadas y, asimismo, cuáles creadas y en qué circunstancias.

3. Redefinir la relación Estado, economía y sociedad

Precisamente, la evaluación de las crisis económicas, la violencia generalizada y los múltiples fracasos de las reformas de los años 90 llevaron a autores como Dani Rodrik (2000, 2001, 2005), Joseph Stiglitz (2003) y Amartya Sen[176] a formular un paradigma alternativo de reforma estatal que, por ahora, han dado en llamar el «post Consenso de Washington». Para Rodrik (2000) queda claro que las lecciones de la historia afirman que, en última instancia, todos los países exitosos desarrollaron sus propias modalidades de capitalismo nacional. Todas las economías que se desempeñaron bien en el período de las posguerra triunfaron aplicando sus propias políticas heterodoxas. Por consiguiente, recomienda que los gobiernos y los asesores de política dejen de pensar en la integración económica

176 Ver su artículo El futuro del Estado de Bienestar, conferencia dictada en el Círculo de Economía de Barcelona (http:www.lafatorianeb,com/artículos/amartya.htm)

internacional como un fin en sí mismo. En tanto que los países en desarrollo deben aproximarse a la economía mundial *en sus propios términos* y no en los términos fijados por los mercados globales o las instituciones multilaterales.

Por su parte, Stiglitz (2003) sostiene que es necesario entender el papel del Estado para llegar a una sólida comprensión de la economía, y aboga en favor de formular un conjunto de políticas económicas que se alejen de las falacias de la teoría del goteo del crecimiento económico y centren la atención en la reducción de las desigualdades sociales, de manera que la nueva agenda económica de reforma se ubique dentro del contexto más amplio de la transformación de la sociedad (ibíd. 7). Esto último pasa porque en sociedades como la guatemalteca el Estado desempeña un papel preponderante en la regulación de sectores estratégicos como el agua, la energía eléctrica, el transporte y el gas.

Desde este paradigma, el Estado no solo tiene una función clave en los procesos de democratización y el cambio estructural, sino se constituye en un actor insustituible en el impulso del desarrollo económico-social y en el logro de objetivos concretos en materia de políticas públicas. Esto significa, en palabras de Peter Evans (1996), que el Estado no debería ser el problema sino la solución del desarrollo económico-social.

Pensar en la reforma del Estado desde esta perspectiva demanda interpretaciones sólidamente fundamentadas y analíticamente profundas de las regularidades causales que subyacen en las historias de los Estados, las estructuras sociales y las relaciones transnacionales en el mundo moderno (Skocpol, [1985] 2007). La importancia de este enfoque estriba, según Brachet-Márquez (2010:32), en que el análisis del proceso de formación del Estado no se limita a observar la adquisición o ejercicio estatal de algunas capacidades sobre un territorio dado, sino que observa históricamente las formas de relación que se establecen entre el Estado, la economía y la sociedad, y que definen las formas que adquieren la desigualdad y la dominación.

Al mismo tiempo, se trata de examinar el papel del Estado en los procesos de desarrollo e identificar las características institucionales que diferenciaron a los Estados que lograron mayor éxito en esta tarea respecto de los que no lo lograron. (Evans, 1996: 19). En todo caso, la existencia de Estados «desarrollistas» es ampliamente reconocida, y el fenómeno de un desarrollo exitoso debe entenderse como un proceso en el cual los Estados desempeñaron un papel estratégico en

el dominio de las fuerzas del mercado interno e internacional y en su sujeción al interés económico nacional (ibíd. 19).

En oposición a las recetas normativas con las que ahora se pretende corregir las fallas en la gestión pública y disfrazar las viejas organizaciones patrimonialistas en burocracias eficientes, según Evans (1996: 47), la reconstrucción del Estado es una tarea amorfa y frustrante, un proyecto que puede llevar décadas, si no generaciones enteras. Transformar el Estado de modo que deje de ser un problema y se convierta en una solución debe ser el punto central en cualquier plan de acción realista emprendido en nuestro país. En esta tarea puede ser útil prestar atención a aquellos países de América Latina en los que está ocurriendo un relanzamiento o una reconfiguración de lo público-estatal como instrumento de gobierno, de acuerdo con el giro «neodesarrollista» que caracteriza a naciones como Brasil, Ecuador o Argentina. Sin duda, el activo papel que están desempeñado los Estados posneoliberales en la formulación de políticas contracíclicas, la disminución de las desigualdades sociales, la nacionalización de los recursos estratégicos y la renegociación de los tratados de libre comercio internacional, nos ofrece un interesante marco de discusión para pensar el papel que debería jugar el Estado en el impulso del desarrollo, particularmente en tiempos de crisis económica y violencia generalizada como la que actualmente vivimos en Guatemala.

4. Recuperar el papel del Estado como entidad reguladora y redistributiva

Tras las graves consecuencias del dogmatismo neoliberal y la aplicación de las políticas de ajuste estructural, cada vez es más claro que el Estado juega un papel importante, no solo en cuanto a garantizar la seguridad material para todos los ciudadanos y perseguir otros objetivos sociales, sino también en relación con la promoción del desarrollo económico social. Sin embargo, nos advierte Przeworski (1998), nada garantiza que la intervención estatal de hecho será beneficiosa. Operando en un contexto de información limitada y sujeto a presiones por parte de intereses particulares, los funcionarios públicos pueden no saber cómo, o pueden no querer, comprometerse en acciones que promuevan el bienestar general más que el de sus aliados privados o el suyo propio. De ahí que la tarea principal de la reforma del Estado consistiría en equipar al Estado con instrumentos para una intervención efectiva y en crear incentivos para que

los funcionarios públicos actúen en aras del interés público (ibíd., 143). Algunos de estos incentivos pueden ser generados por la organización interna del Gobierno, pero estos no son suficientes. Para que el Gobierno funcione bien, la burocracia debe ser efectivamente supervisada por los políticos electos, quienes a su vez deben rendir cuentas a los ciudadanos. Si estos mecanismos están bien diseñados, una economía con un Estado intervencionista funcionará mejor que los mercados librados a sí mismos (143-144).

En este caso, la capacidad del Estado no debe entenderse simplemente en el sentido de la cualificación, experiencia y sagacidad de los tecnócratas que lo integran (que también es importante), sino en el sentido más amplio de una estructura institucional perdurable y eficaz. De entrada, esto implica ponerle un alto a la volatilidad, la supeditación política y el nepotismo en la adjudicación de los cargos públicos. En todo caso, se trata de evitar que estos se conviertan en el botín del partido político que llega al gobierno. Implica también repensar toda la institucionalidad estatal en términos de su pertinencia, estabilidad, acumulación de experiencia, sostenibilidad y eficacia de sus servicios públicos.

Por un lado, hay que evitar el acomodamiento, vicios y envejecimiento al que llegó la burocracia estatal de los años 70 y 80, por el otro, hay que ponerle un alto a la volatilidad de los cargos públicos y a la inestabilidad laboral de aquellos funcionarios altamente cualificados que desempeñan su trabajo atendiendo a la pertinencia, eficacia y puntualidad de sus resultados.

Actualmente, la inestabilidad y flexibilidad laboral de la burocracia estatal, finalmente, ha servido para que los cargos públicos de las instituciones estatales se conviertan en una parte sustantiva del paquete a repartir entre los financistas de las campañas electorales y los afiliados del partido gobernante, ello independientemente del expertise y eficiencia del funcionario despedido y/o contratado. También ha sido un mecanismo que ha permitido la presencia cada vez mayor de actores vinculados al crimen organizado en la institucionalidad estatal. Esto último ha provocado graves distorsiones funcionales y desórdenes administrativos; además, ha impedido al Estado pensar estratégicamente y alcanzar la sostenibilidad de sus acciones. Cada cuatro años se hace borrón y cuenta nueva y se inicia un nuevo ciclo de despidos injustificados e improvisación institucional. En dirección contraria, necesitamos pensar las dimensiones, espacialidad, estabilidad y formas de coordinación de la institucionalidad de desarrollo y servicios públicos del Estado. Necesitamos revalorar la capacidad

de acción estatal como un prerrequisito del éxito de los gobiernos en la administración de situaciones de crisis y transición. La centralidad de la reforma del Estado significaría, por lo tanto, la afirmación de un enfoque alternativo de mayor alcance territorial y amplitud de servicios básicos. Esto último pasa por transformar los espacios de decisión y los procesos de selección de los actores locales que están a cargo de administrar la institucionalidad estatal en la escala territorial. Se trata, no solo de reformar la Ley de Partidos Políticos, sino de transformar todos aquellos mecanismos que han permitido el afincamiento de los actuales caciques locales y sus asfixiantes dictaduras locales. En contrapartida, es necesario repensar, crear y/o fortalecer la institucionalidad estatal de desarrollo con funcionarios conocedores, no solo de su profesión, sino de las problemáticas que vive la gente en el sector y/o territorio de trabajo.

El énfasis de una nueva reforma del Estado tendría que desplazarse hacia la reconstrucción del Estado como agente regulador (Diniz, 2009). Para ello es necesario reconocer que el crecimiento, el desarrollo económico y social no se producen espontáneamente, sino que son el resultado de políticas deliberadas, de elecciones realizadas por los actores sociales y las elites dirigentes, determinadas a revertir situaciones adversas y a elevar el nivel de bienestar de la sociedad en su conjunto.

En síntesis, la reforma del Estado no es un asunto que se refiera propiamente a la administración o gestión gerencial del Estado; se trata más bien de un proceso sumamente complejo que exige repensar qué tipo de Estado se requeriría para esta nación, pues ninguna fórmula preestablecida podrá reemplazar la discusión política acerca de qué tipo de nación y sociedad son posibles y deseables y, por lo tanto, qué tipo de Estado sería apto para avanzar en esta dirección (O'Donell, 2007).

En cualquier caso, los hallazgos encontrados en la interpretación del proceso de formación del Estado de Guatemala desde el territorio nororiental pone de manifiesto que una nueva reforma del Estado no podría ignorar las profundas desigualdades socio-territoriales, la inseguridad alimentaria, la vulnerabilidad ambiental y la violencia generalizada que actualmente se vive en el país. Tampoco podría ignorar las constelaciones de poder criminal que ahora están definiendo, no solo la política, sino las prioridades del desarrollo en territorios de importancia estratégica. En territorios con altos niveles de riego, crisis alimentaria y vulnerabilidad ambiental y violencia extrema, las decisiones del

desarrollo no pueden continuar en manos de caciques o pequeños dictadores locales, que amparados en el romanticismo del poder local de los años 90 han establecido su propio orden local y gobiernan sus municipios con amplios márgenes de soberanía local o provinciana.

En Guatemala, como en muchos otros países de América Latina, la reforma del Estado exige superar varias modalidades de déficits históricamente acumulados: *el déficit de inclusión social*, revirtiendo los altos grados de concentración de renta y de desigualdad, el cual está estrechamente relacionado con *el déficit en la recaudación fiscal; el déficit de capacidad de producir resultados socialmente deseados*, revirtiendo el patrón patrimonialista de acción estatal y, finalmente, *el déficit de rendición de cuentas*, reduciendo los grados de discrecionalidad de las autoridades gubernamentales (Diniz, 2009:27-28). Requiere, en fin, el fortalecimiento de las conexiones del Estado con la sociedad y con sus instituciones representativas, expandiendo también los mecanismos de exigencia y rendición de cuentas, los medios de control externo, la transparencia y la publicación de los actos del gobierno a escala local y nacional (28).

De manera prioritaria, una nueva reforma del Estado debe superar el déficit de legalidad y justicia y poner un alto a la impunidad administrativa y judicial que ha permitido el afincamiento de circuitos de poder que funcionan conforme a reglas incompatibles con las leyes que supuestamente regulan el territorio nacional. Se trata de superar la pobreza material y legal de la mayoría de la población guatemalteca y su continua restricción a movilizarse y ser políticamente representada. En este sentido, el reto de la nueva reforma del Estado es doble: cómo diseñar la institucionalidad estatal para que ésta responda a la realidad y prioridades del país e intervenga estratégicamente en su campo y territorios de acción, y cómo inducirla a que actúe en función del interés de la mayoría de la población. Responder a este reto, no es tan simple como escribir una propuesta de «papel», pues bien sabemos, «el papel aguanta», no obstante, las constelaciones de poder criminal que ahora dominan la institucionalidad estatal descentralizada, la corrupción e impunidad administrativa y judicial con la que se mueven los nuevos caciques locales y sus patrocinadores, han llevado a que un importante sector de la sociedad Guatemalteca ya no aguante más. Esto último, requiere de un buen número de profesionales, políticos honestos y organizaciones sociales que se comprometan a pensar nuevas formas de organizar la institucionalidad estatal a escala nacional, territorial y local, de modo que ésta efectivamente responda estratégicamente a las problemáticas que actualmente enfrenta el país.

Bibliografía

Abrams, Philip ([1977] 1988). "Notes on the Difficulty of Studying the State". *Journal of Historical Sociology* (1), pp. 58-89.

Acuña, Carlos H. y Smith, William C. (1996). "La economía política del ajuste estructural: la lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales". *Desarrollo Económico*, vol. 36, No. 141 (abril-junio).

Adams, Richard (1956). "Encuesta sobre la cultura de los ladinos en Guatemala". Seminario de Integración Social Guatemalteca, Ministerio de Educación Pública, Guatemala.

_____ (1995). *Etnicidad en el ejército de la Guatemala liberal (1870-1915)*. Guatemala: Flacso. (Cuaderno Debate No. 30).

Agudo Sanchiz Alejandro. (2012) Del "crimen organizado" al tejido social: múltiples formas de la reproducción de violencias. (Documento Inédito).

Aguilera Peralta, Gabriel (1971). *La violencia en Guatemala como fenómeno político*. Cuadernos del Cidog, México D. F.

_____ (1989). *El Fusil y el Olivo. La cuestión militar en Centroamérica*. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, San José de Costa Rica.

_____ (1997). "La Guerra Interna, 1960-1994". En: Luján Muñoz (Coord.). *Historia General de Guatemala*. Tomo VI, Época contemporánea: de 1945 a la actualidad. Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Ciudad de Guatemala.

Arévalo Martínez, Rafael (1984). *Ubico*. Tipografía Nacional: Ciudad de Guatemala.

Asociación de Amigos del País-Fundación para la Cultura y el Desarrollo (2004). *Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala*. (Enciclopedia Guatemala) Guatemala.

Asturias de Barrios, Linda "et al." (2005). *Bosques, tierra y gestión comunitaria en el oriente de Guatemala*. Flacso, Sede Académica Guatemala, Ciudad de Guatemala.

Azurdia, Roberto (1959). *Recopilación de Leyes de la República de Guatemala 1952-1953*. Tomo LXXI. Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala.

Banco Mundial (1997). *El Estado en un Mundo en Transformación*, Oxford University Press. Washington D. C.

Barrientos, Claudia (2007). *Participación ciudadana y construcción de ciudadanía desde los Consejos de Desarrollo. El caso de Chichicastenango*. Flacso, Sede Académica Guatemala, ciudad de Guatemala.

Bastos, Santiago (2004). *Etnicidad y fuerzas armadas en Guatemala. Algunas ideas para el debate*. Flacso, Sede Académica Guatemala, ciudad de Guatemala.

Bertrand, Michel (1995). "Baja Verapaz". En: *Historia General de Guatemala*, Tomo III. Fundación para la Cultura y el Desarrollo/Asociación de Amigos del País. Ciudad de Guatemala.

Berger, Susan (1992). "Political and Agrarian Development in Guatemala". *West View Special Studies on Latin-American and Caribbean*. Colorado.

Bernouilli, Gustav (1975). "Cuaderno XI", t.15, en Aspectos del Desarrollo económico y social de Guatemala, a la luz de las fuentes históricas Alemanas 1868-1885, fragmentos traducidos en Julio Castellanos Cambranes. IIESS/ USAC, Guatemala.

Blom, Hansen Thomas, Finn Stepputat (2001). *States of Imagination, Ethnographic Explorations of the Poscolonial State*. Duke University Press, Durham.

Bornholt, Jens (2007). *Cuatro siglos de expresiones geográficas del istmo centroamericano, 1500-1900*. Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.

Brachet, Viviane (2001a). "Transformación democrática en América Latina: un intento de teorización". En: Brachet, Viviane (Coord.). *Entre Polis y Mercado: el análisis sociológico de las grandes transformaciones políticas y laborales en América Latina*. El Colegio de México. México D. F.

_____ (2001). "Los dilemas del análisis sociológico del cambio: Una introducción". En: Brachet, Viviane (Coord.). *Entre Polis y Mercado: el análisis sociológico de las grandes transformaciones políticas y laborales en América Latina*. El Colegio de México. México D. F.

_____ (2002). "Transformación democrática en América Latina: Un intento de teorización. En: Brachet, Viviane (Coord.) *Entre Polis y Mercado: el análisis sociológico de las grandes transformaciones políticas y laborales en América Latina*. El Colegio de México. México D. F.

_____ (2006). "Formación del Estado y democracia en Hispanoamérica 1808-2008". Revista Estudios Sociológicos XXIV: 72.

_____ (2010). *Contienda y dominación: una propuesta para teorizar la desigualdad*. El Colegio de México. México D. F.

Brett, Edward T. (2003). *The U.S. Catholic Press on Central America*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.

Brockett, Charles (1998). *Land, Power, and Poverty: Agrarian Transformation and Political Conflict in Central America*. Westview Press, Colorado, United States of America.

_____ (2012). *The Consequences of Expanding Domestic and Transnational. Drug Trafficking Organizations for Guatemala and for Hemispheric Drug Policy*. Prepared for delivery at the 2012 Congress of the Latin American Studies Association, San Francisco, California May 23-26, 2012.

Buttrey, Jerrold (January 1967). *The Guatemalan Military, 1944-1963. An interpretive Essay*. Austin, Texas (inedited). Antigua Guatemala, Biblioteca Cirma.

Cabezas Carcache, Horacio (1994). "La piratería en la Capitanía General de Guatemala". En: *Historia General de Guatemala*. Tomo III. Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Ciudad de Guatemala.

_____ (1995). "El Comercio". En: *Historia General de Guatemala*. Tomo III. Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Ciudad de Guatemala.

Calvaruso, A. Feliciani, F. and Stein, R., con la colaboración de Contreras V. (2007). *Transformaciones en el Estado guatemalteco a diez años de la firma de la paz. Un ensayo*. Final

Consulting report for: 'Sistemas de Apoyos Estratégicos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República', Gobierno de Guatemala, Vicepresidencia de la República, Guatemala.

Casasola, Oliverio (1968). *Grandezas y miserias del Petén*. Ediciones Indiana, ciudad de Guatemala.

Casaús, Marta Elena (1992). *Guatemala: linaje y racismo*. Flacso, Costa Rica.

_____ (2011). *El lenguaje de los ismos: Algunos conceptos de la modernidad en América Latina*. F&G Editores, ciudad de Guatemala.

Casaús, Marta y Teresa García Giráldez (2005). *Las redes intelectuales centroamericanas: un siglo de imaginarios nacionales (1820-1920)*. F&G editores, ciudad de Guatemala.

Castañeda, Gabriel A. (1983). *Monografía de Gualán*. Tipografía Nacional, Colección Guatemala, Serie 1 Francisco Vela. Guatemala.

Castellanos Cambranes, Julio (1975). *Aspectos del desarrollo económico y social de Guatemala a la luz de fuentes históricas alemanas, 1868-1885*. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.

Castells, Manuel (1999). *Globalización, identidad y Estado en América Latina*. Ponencia preparada para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sede de Chile. Berkeley, California – Santiago de Chile, Mayo/ Junio.

Cazali Ávila, Augusto (Coord.) (2000). *Las transiciones políticas: del ydigorismo al gobierno militar de Peralta Azurdía (1958-1966). Historia de Guatemala, Siglo XX*. Dirección General de Investigación, Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad de Guatemala.

Centeno, Carlos Enrique (1973). *Cooperativas de El Petén, Situación Socio-económica*. Facultad de Ciencias Económicas, Usac, Volumen I. Ciudad de Guatemala.

Cerda-Crespo, Jorge (2008). *La guerra de la Oreja de Jenkins: un conflicto colonial*. Tesis doctoral, Universidad de Alicante, Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencia y Tecnologías Historiográficas, Alicante, España.

Cerezo Dardón, Hugo (1984). "Prólogo". En: Arévalo Martínez, Rafael. *Ubico*. Tipografía Nacional: Ciudad de Guatemala.

Comaroff, John L. y Jean Comaroff (2006). "Law and order in the postcolony: An introduction". En: Comaroff, J. y Comaroff, J. L. (eds.), Law and order in the postcolony, University of Chicago Press. Chicago.

_____ (2009).*Violencia y ley en la poscolonia: una reflexión sobre las complicidades Norte-sur*. Katz editores. Buenos Aíres/Madrid.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- (1999). *Guatemala, Memoria del Silencio*. Capítulo Primero: Causas y Orígenes del Enfrentamiento Armado Interno. Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), ciudad de Guatemala.

_____ (1999). *Guatemala, Memoria del Silencio*. Resumen. Oficina de Servicios para el Proyecto de las Naciones Unidas (UNOPS), Guatemala.

Corrigan, Philip y Derek Sayer (1985). *The Great Arch: English State Formation as Cultural Revolution*. Blackwell, Oxford, UK and New York, USA.

Corrigan, Philip (2002). "La formación del Estado". En: Gilbert Joseph y Daniel Nuget (comps.). *Aspectos cotidianos de la formación del Estado.* ERA, México, D. F.

_____ ([1985]2007). "El gran arco: la formación del Estado inglés como revolución cultural". En: María Lagos y Pamela Calla (Comp.). *Antropología del Estado, dominación y prácticas contestatarias en América Latina*. Cuaderno de Futuro No. 23, Informe de Desarrollo Humano. INDH/PNUD, La Paz, Bolivia.

Cortés y Larraz, Pedro (1958). *Descripción geográfico-moral de la Diócesis de Goathemala (1768-1770)*. Biblioteca 'Goathemala' de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala.

Cullather, Nick (2002). *PBSUCCESS. La operación encubierta de la CIA en Guatemala, 1952-1954*. Avancso, ciudad de Guatemala.

Daas Veena y Deborah Poole (2008). *El Estado y sus márgenes: Etnografías comparadas*. Cuadernos de Antropología Social No. 27. Enero /julio. Buenos Aíres.

Daepp, David (2010-2011). "Two Paths to Development: Distinct but Convergent? En: Revista Harvard Review of Latin America: Guatemala Legacies of Violence. Fall 2010/Winter 2011.

Dary Fuentes, Claudia. (1995). *Chortís, Negros y Ladinos de San Miguel Gualán, Zacapa. Una perspectiva etnohistórica*. Centro de Estudios Folklóricos, Universidad de San Carlos de Guatemala, La Tradición Popular No. 103/1995. Guatemala.

_____ (2008). *Ethnic Identity, Community Organization and Social Experience in Eastern Guatemala: The case of Santa María Xalapán*. PhD dissertation. University at Albany, New York.

Dary, Claudia; Silvel, Elias; Reyna, Violeta (1998). *Estrategias de sobrevivencia campesina en ecosistemas frágiles: los Ch'orti' en las laderas secas del Oriente de Guatemala*. Flacso, Guatemala.

Dary Claudia y Violeta Reina (2002) "La comunidad tiene su poder. Dinámicas sociales en torno a las tierras y bosques comunales en Jalapa". En *Tierras y Bosques Comunales de Mesoamérica*. Guatemala, Flacso. Inédito (biblioteca FLACSO-Guatemala).

Davis, Ralph (1998). *La Europa atlántica desde los descubrimientos hasta la industrialización*. Siglo XXI, Madrid.

Dean, Mitchell (2001). "Demonic Societies": Liberalism, Biopolitics, and Sovereignty …". En: Blom Hansen Thomas, Finn Stepputat, *States of Imagination, Ethnographic Explorations of the Poscolonial State*. Duke University Press, Durham.

Debray, Regis (1969).*Ensayos sobre América Latina. El hombre y su tiempo*. Editorial Era, México.

Debray Regis [en colaboración con Ricardo Ramírez] (1975). *Las pruebas de fuego, la crítica de las armas*. Editorial Siglo XXI, México D. F.

De los Ríos, Efraín (1948). *Ombres contra Hombres*. Tomo II. Fondo de Cultura, Universidad de México, México, D. F.

Del Valle Matheu, Jorge (1956). *La verdad sobre el caso de Guatemala*. Talleres de Imprenta Moderna, ciudad de Guatemala.

Demyk, Noelle (1995). "Los Territorios del Estado Nación". En: *América Central, una problemática regional*. Taracena y Piel (comps.). Universidad de Costa Rica, San José.

Diniz, Eli (2009). "El Post-consenso de Washington: Globalización, Estado y Gobernabilidad reexaminados". *Documentos de trabajo IELAT*. Universidad de Alcalá de Henares.

Durston, John (1972). *La estructura de poder en una región ladina de Guatemala. El departamento de Jutiapa*. Guatemala. Seminario de Integración Social Guatemalteca e Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas.

Escalante, Sergio (2004). *Contribución al Debate sobre la Modernización y Descentralización del Estado: El caso de los Consejos de Desarrollo en Guatemala*. Flacso, sede académica Guatemala, ciudad de Guatemala.

Evans, Peter ([1985] 2007). "El Estado como problema y solución". En: Acuña (comp.) Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas, publicación del Proyecto de Modernización del Estado, Buenos Aíres.

_____ ([1985] 1996). "El Estado como problema y como solución". *Desarrollo Económico*, Vol. 35, No. 140, (Enero-Marzo), pp. 17-47.

Fedelman, Lawrence (1985). *A Tumpline Economy: Produccion and Distribution Systems in Sixteenth Century Eastern Guatemala*. Labyrinthos, Culver City, California.

Flores Avendaño, Guillermo (1974). *Memorias 1900-1970*. Tomo II, Editorial del Ejército. Guatemala.

Flores, Rosa (1972). *Chiquimula en la Historia*. Editorial José de Pineda Ibarra. Ciudad de Guatemala.

_____ (1973). *Chiquimula en la Historia*. Editorial José de Pineda Ibarra. Ciudad de Guatemala.

Fry, M. F. (1998). "Política agraria y reacción campesina en Guatemala: La región de la Montaña, 1821-1838". En: *Mesoamérica*, año 9. Cuaderno 15. Cirma y Mesoamerican Studies, Plumsock y Antigua Guatemala.

Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio ([1690] 1933). *Recordación Florida*. Tipografía Nacional. Ciudad de Guatemala.

Fundación para la Cultura y el Desarrollo (2004). *Diccionario Biográfico de Guatemala*. Editorial Amigos del País. Cali, Colombia.

Gallardo Carmelo (2008). *Diagnóstico de Seguridad Alimentaria Nutricional en la Región Copán-Ch'orti'*. Monografía del Programa de Doctorado de la Universidad de Salamanca, en Guatemala. Ciudad de Guatemala.

García Giráldez, Teresa (2005). "La patria grande centroamericana: la elaboración del proyecto nacional por las redes unionistas". En: Casaús Arzú & García Giráldez, (123-205). *Las redes intelectuales centroamericanas: un siglo de imaginarios nacionales (1820-1920)*. F&G Editores. Ciudad de Guatemala.

_____ (2010). "El espiritualismo en el antiimperialismo centroamericano 1890 1945". En: *XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica*. Santiago de Compostela, 16-18 de septiembre de 2010.

García Peláez, Francisco de Paula (1971). *Memorias para la Historia del Antiguo Reino de Guatemala*. Tomo II."Biblioteca Goathemala" SGHC, ciudad de Guatemala.

Geller, Gisela (1996). *Reseña del libro: Stefan Karlen: Paz, progreso, justicia y honradez. Das Ubico Regime in Guatemala*. Revista Mesoamérica Número 32, diciembre 1996, pp. 429-433.

Gilly, Adolfo (1965). *The Guerrilla Movement in Guatemala*. MONTHLY Review, No.1 (17).

Girard, Rafael (1949). *Los C'hortís ante el problema maya*. Editorial Cultura. México D. F.

Gledhill, John (2001). "La Dialéctica región-centro-nación a fin del siglo: poderes regionales, poderes transnacionales y transformación del Estado. En: Maldonado Aranda, Salvador (Ed.). *Dilemas del Estado Nacional: una visión desde la cultura y el espacio regional*. El Colegio de Michoacán y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social -Ciesas-. México D. F. Págs. 27-53.

Gleijeses, Piero (2005). *La esperanza rota. La Revolución Guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954*. Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad de Guatemala.

Goepfert, Paul (2011): *The International Commission Against Impunity In Guatemala: Undoing the Legacy of Violence and Corruption. Country. Harvard Review of Latin America: Guatemala, Legacies of Violence*. Cambridge, Mass., Volume X No. 1. Harvard University. pp. 40-43.

Gómez-Carrillo, Agustín ([1892]1906). *Compendio de la Historia de América Central*. Imprenta de la República. Ciudad de Guatemala.

González Alzate, Jorge (1994) A History of Los Altos. Guatemala a Study of Regional Conflict and National Integration 1750-1885, tesis de doctorado. Tulane University, New Orleans

_____, (2006). "Las milicias y la preservación del dominio español en los Altos de Guatemala, 1673-1821". En: AFEHC (Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica). *Boletín No. 26* (Noviembre 2006).

González-Izás, Matilde (2002). *Se cambió el tiempo. Conflicto y poder en territorio K'iche' 1880-1996*. Avancso, ciudad de Guatemala.

_____ (2009). *Las accidentadas trayectorias de la modernización capitalista en Guatemala (1750-1880)*. Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avancso. Guatemala.

_____ (2011). "La formación transnacional del Estado. Modernización capitalista, inmigración europea y circuitos del café en Guatemala 1870-1930". En: Agudo Sanchiz y Saavedra (Comp.).*Transformaciones del Estado*

en los márgenes de Latinoamérica: Imaginarios alternativos, aparatos inacabados y espacios transnacionales. Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México; Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana.

_____ (2014). *Modernización Capitalista, Racismo y Violencia en Guatemala*. El Colegio de México, México, D.F. (en prensa).

González Orellana, Carlos (1970). *Historia de la educación en Guatemala*. Editorial José Pineda Ibarra, ciudad de Guatemala.

Gramajo Morales, Héctor Alejandro (1995). *De la guerra a la guerra. La difícil transición política en Guatemala*. Fondo de Cultura Editorial, S. A. Ciudad de Guatemala.

Grandia, Liza (2009). *Tz'aptz'ooqeb': El despojo recurrente al pueblo q'eqchi'*. Avancso, Autores Invitados No. 20. Ciudad de Guatemala.

Grandin, Greg (2007). *La sangre de Guatemala, raza y nación en Quetzaltenango 1750-1954*. USAC/CIRMA/PLUMSOCK, ciudad de Guatemala.

Griffith, William (1959). *Santo Tomás, anhelado emporio del comercio en el Atlántico*. Tipografía Nacional. Ciudad de Guatemala.

_____ (1965). *Empires in the Wilderness. Foreign Colonization and Development in Guatemala 1834-1844*. The University of North Carolina Press, Chapel Hill.

Grümber Jorge, Grandia Liza y Milian Bayron (2012). *Tierra e Igualdad. Desafíos para la Administración de Tierras en Petén, Guatemala*. Patrocinado por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Ambiental y Socialmente Sostenible (TFESSD) de los Gobiernos de Noruega y Finlandia con el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural para América Latina y el Caribe (LCSAR) del Banco Mundial. Ciudad de Guatemala.

Gutiérrez, Edgar y Claudia Méndez (2012). "Guatemala: narcotráfico, lavado de dinero e instituciones fallidas". En Salcedo-Albarrán, Eduardo y Luis Jorge Garay Salamanca y Luis Astorga. *Narcotráfico Corrupción y Estado: Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones de Colombia, Guatemala y México*. Editorial Grijalbo, México, D. F.

Hall, C., H.; Pérez-Brignoli, J. Cotter (2003). *Historical Atlas of Central America*. Norman Publishing-University of Oklahoma Press, Vermont.

Handy, Jim (1984). *Gift of the Debil: a History of Guatemala*. South end Press, Boston, USA.

_____ (1992). "Reforma y Contrarreforma: la política agraria en Guatemala, 1952-1957". En: Castellanos Cambranes (ed.): *500 años de lucha por la tierra*. Volumen 1. Flacso, Guatemala.

_____ (1994). *Revolution in the Countryside. Rural Conflict and Agrarian Reform in Guatemala, 1944- 1954*. The University of North Carolina Press, Chapel Hill y London.

Harvey, David (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Akal, Madrid.

Hintze, Otto ([1931]1981). "Formación histórica de los Estados". En: *Revista de Administración Pública*. México D. F. Págs. 23-36.

Hobsbawn, Eric (1992). *Nations and Nationalism since 1780*. Cambridge University Press, Cambridge.

Hoffmann, Odile y Fernando Salmerón Castro (coords.) (1997). *Nueve estudios sobre el espacio, representación y formas de apropiación*. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS-Mission-Orstom-Mexique, México D. F.

Hoffmann, Odile (2002). "Del territorio étnico a la ciudad: las expresiones de identidad negra en Colombia a principios del siglo XXI". En: B. Nates. (Comp.). *Territorio y cultura, Territorios de conflicto y cambio sociocultural*. Universidad de Caldas, Manizales Colombia.

Holden, Robert (2004). *Armies without Nations. Public Violence and State Formation in Central America 1821-1960*. Oxford University Press, New York.

Hurtado Paz y Paz, Margarita (2010). *Petén: ¿La última frontera? Construcción social de una región*. Flacso-Guatemala. Ciudad de Guatemala.

Ingersoll, Hazel (1972). *The War of the Mountain: A study in Reactionary Peasant Insurgency in Guatemala, 1837-1873*.PhD dissertation. George Washington University, Washington D. C.

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola ICTA (1976). I*nforme de la Gerencia*. Sector Público Agrícola y Ministerio de Agricultura del Gobierno de Guatemala.

Instituto Nacional de Estadística, INE (2010). Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) registro que en el 2010. Guatemala.

_____ (2011) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), Guatemala.

Jackson, Henry (1937). *Notes on a Drum. Travel Sketches in Guatemala*. The Macmillan Company, New York.

Jefferson, Anne (2000). *The rebellion of Mita, eastern Guatemala, in 1837*. Ph.D. dissertation. University of Massachusetts at Amherst.

Joseph, Gilbert & Daniel Nugent (comps.) (1994). *Everyday Forms of State Formation, Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*. Duke University Press. Durham and London.

_____ (2002). *Aspectos cotidianos de la formación del Estado*. Editorial ERA. México D. F.

Jonas, Susanne (1994). *La batalla por Guatemala*. Flacso, Caracas, Venezuela.

Johnson Calder, Bruce (1970).*Crecimiento y cambio de la Iglesia católica guatemalteca*. Estudios Centroamericanos No. 6. Seminario de Integración Social Guatemalteca. Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Texas. Editorial José de Pineda Ibarra. Ministerio de Educación, ciudad de Guatemala.

Karlen, Stefan (1991). *Paz, progreso, justicia y honradez: Das Ubico-Regime in Guatemala, 1931-1944 (BeitragezurKolonial- und Uberseegeschichte)*. F.Steiner, Edition. German.

Kruijt Dirk y Edelberto Torres-Rivas (Coord.) (1991). *América Latina: militares y sociedad*. Flacso (tomos I y II) San José Costa Rica.

Lefebvre, Henry (1975). *Espacio y política*. Península, Barcelona.

Lindo Fuentes, Héctor (1993). "Economía y sociedad (1810-1870)". En: *De la Ilustración al Liberalismo 1750-1870, Historia General de Centroamérica*. Pérez-Brignoli (ed.). Flacso, Madrid.

Little-Siebold, Christa (2004). "Orientando las vicisitudes de la identidad: etnia, pueblo y comunidad en el oriente de Guatemala". En: Darío Euraque, Jeffrey Gould y Charles Hale. *Memorias del Mestizaje. Cultura política en Centroamérica de 1920 al presente*. Cirma, Guatemala.

Little-Siebold, Todd (1995).*Guatemala and the Dream of Nation: National Policy and Regional Practice in the Liberal Era (1871-1945)*. Tesis de doctorado. Tulane University, New Orleans.

_____ (1999). "La centrifugación del Estado: sueños centralistas, realidades locales. Formación, deformación y reformación del Estado guatemalteco, 1871-1945". En: J. Piel y Little-Siebold (Comps.). *Entre Comunidad y Nación, la historia revisitada desde lo local y lo regional*. Cirma, Antigua Guatemala.

Lopez, Julie (2010-2011). *A Key Player: Postcards from a Drug-Trafficking Country*. Harvard Review of Latin America: Guatemala, Legacies of Violence. Volume X, No. 1. Cambridge, Massachusetts, Harvard University. pp. 36-38.

Lutz, Christopher (1995). "Evolución Demográfica de la Población Ladina". En: Asociación de Amigos del País. *Historia General de Guatemala*. Tomo III. Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala.

MacClintock, Michael (1985). *The American Connection: State terror and popular resistance in Guatemala*. Vol. 2. Zep Press, London.

MacCreery, David (1981). *Desarrollo económico y política nacional. El Ministerio de Fomento de Guatemala, 1871-1885*. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, Antigua Guatemala. (Serie Monográfica No. 1).

_____ (1994). *Rural Guatemala, 1760-1940*. Stanford University Press, California.

Macías, Julio César (2008). *La guerrilla fue mi camino. Epitafio para César Montes*. Editorial Piedra Santa. Ciudad de Guatemala.

MacLeod, Murdo (1980). *Historia Socioeconómica de América Central Española 1520-1720*. Editorial Piedra Santa. Guatemala.

Mahoney, James (2010). *Colonialism and Post-Colonial Development, Spanish America in comparative perspective*. Cambridg University Press. New York.

_____ (2002). *Los patrones de dependencia en los cambios de régimen: América Central en perspectiva comparada*. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, Año 4, Nº 7, Primer semestre de 2002.

Mallon, Florencia ([1995] 2003). *Campesino y nación, La construcción de México y Perú poscoloniales*. CIESAS/COLSAN/COLMICH, México D. F.

Mann, Michael ([1986] 1993). *The Sources of Social Power, volume II: The Rise of Classes and Nation State, 1760-1914*. Cambridge University Press, Cambridge.

_____ ([1986] 1997). *Las Fuentes del poder social*. Alianza Universidad (Tomos I y II). Madrid.

_____ (2000). "¿Ha terminado la globalización con el imparable ascenso del Estado Nacional?". En: *Zona abierta*, N° 92-93, Madrid.

_____ (2006). "El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados". En: Revista Académica de Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Madrid, Núm. 5, UAM-AEDRI. Madrid.

Martínez Peláez, Severo (1991). *Motines de Indios*. Ediciones en Marcha, Guatemala.

Massey, Doreen (1999). "Spaces of Politics". In D. Massey, J. Allen & P. Sarre (eds.). *Human Geography Today* (pp. 279-294). Polity Press, Cambridge.

Mata, Retana Rafael (1973). *Remembranzas con motivo del primer Centenario de la fundación del Instituto Normal para Varones de Chiquimula (INVO)*. Editorial José Pineda Ibarra. Ciudad de Guatemala.

_____ (1982). *Rostro de mi Pueblo (Remembranzas)*. Editorial José de Pineda Ibarra, Ministerio de Educación, ciudad de Guatemala.

Metz, Brent Ernest (1995). *Experiencing Conquest: The Political and Economic Roots and Cultural Expression of Maya-Chorti Ethos*.Ph.D. dissertation, Department of Anthropology, State University of New York at Albany. Ann Arbor, Mich.

Mérida, Cecilia (2010). *Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango, ¿Un espacio para la Transparencia?* Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala Cedfog, Huehuetenango.

_____ (2010). *Consejos Comunitarios de Desarrollo: Espacios de Lucha para las mujeres*. Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala –Cedfog-, Huehuetenango.

Mérida, Cecilia y Wolfgang Krenmayr (2010). *Prácticas de participación ciudadana: Oportunidades y limites en los Consejos de Desarrollo de Huehuetenango*. Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala –Cedfog-, Huehuetenango.

Miceli, Keith (1974). "Rafael Carrera: Defender and Promoter of Peasant interests in Guatemala, 1837-1848". En: *The Americas. A Quarterly Review of Inter-American Cultural History*. Vol. XXXI, No. 1. Academy of American Franciscan History, Washington, D. C.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (2001). *Cartografía y Análisis de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria en Guatemala*. Programa Mundial de Alimentos, Guatemala.

Mitchell, Timothy (1991). "The limits of the State: Beyond Statist Approaches and their critics". En: *The American Political Science Review*, Vol. 85, No.1 pp 77-96.

_____ (1999). "Society, Economy and the State Effect". En: George Steinmentz (ed.). *State/Culture, State-Formation after cultural turn*. Cornell University Press, New York.

Montúfar, Lorenzo (1878). *Reseña histórica de Centro-América*. Tipografía El Progreso, Guatemala.

Moncayo Jiménez, Edgar (2002). "Nuevos enfoques teóricos, evolución de las políticas regionales e impacto territorial de la globalización". En: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes). Gestión Pública. Santiago de Chile.

Monsanto, Pablo (Jorge Soto García) (1983). "El pueblo de Guatemala lucha por tomar el poder". En: Martha Harnecker (ed.). *Pueblos en armas*. Universidad Autónoma de Guerrero. México.

Mora Salas, M. (2010). *Ajuste y empleo: la precarización del trabajo asalariado en la era de la globalización*. El Colegio de México, México, D. F.

Moore, Barrington ([1967] 2000). *Los Orígenes Sociales de la dictadura y de la democracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno*. Ediciones Península, Barcelona.

Morales Mateo y Roberto Azurdia ([1949] 1958). *Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala 1948-1949*. Tomo LXVII. Tipografía Nacional, ciudad de Guatemala.

Morley, Sylvanus ([1920] 1972). *La Civilización Maya*. Fondo de Cultura Económica. México D.F.

Naylor, Robert (1988). *Influencia británica en el comercio centroamericano durante las primeras décadas de la independencia (1821-1851)*. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica Serie Monográfica, Vol. 3.

Nordstrom, Carolyn. 2007. *Global Outlaws: Crime, Money and Power in the Contemporary World*. University of California Press.

Noval, Joaquín (1971). *El Estado y la violencia*. Documento Póstumo Mimeografiado.

Nugent, Daniel (2001). "Estado y Nación vistos desde el margen". En: Maldonado Aranda Salvador (Ed.). *Dilemas del Estado Nacional: una visión desde la cultura y el espacio regional*. El Colegio de Michoacán y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social -Ciesas- Págs. 105-156. México D. F.

Nuijten Monique (2003). *Power, Community and the State. The Political Anthropology of Organization in Mexico*. Pluto Press. London, Sterling and Virginia.

O'Donnell, Guillermo (1980). "Comparative Historical Formations of de State Apparatus y Socioeconomic Change in the Third World". En: UNESCO, International Social Science Journal 32 Págs. 717-729.

_____ (1984). "Apuntes para una teoría del Estado". En: Oscar Oszlak (ed). *Teoría de la burocracia estatal*. Paidos, Buenos Aires.

_____ (1993). "Estado, Democratización y Ciudadanía". En: *Nueva Sociedad*, No. 128, pp. 62-87.

_____ (1994). "Delegative Democracy". En: *National Endowment for Democracy: Journal of Democracy*. Washington, D.C. pp. 55-69.

_____ ([1984] 2007). "Acerca del Estado en América Latina contemporánea, Diez Tesis para la discusión". En: Acuña C. (Comp.). *Lecturas sobre el Estado y las Políticas Públicas*. Publicación del Proyecto de Modernización del Estado Argentino, Buenos Aíres.

Ordóñez Madrid, Marco Antonio (2007). *Némesis en Zacapa*. Editorial Oscar de León Palacios, ciudad de Guatemala.

Orozco, Lionel/ (1980). *Generación, validación y transferencia de tecnología del cultivo de melón para la explotación del valle de La Fragua, Zacapa*. Seminario de Impacto de Nueva Tecnología. 26-28 de Noviembre de 1980. IICA, San José de Costa Rica.

Oslak, Oscar (1978). *Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teórico-metodológicos para su estudio*. Buenos Aíres, Estudios CEDES. Vol. 1. No. 3.

_____ (1981). *Ensayos sobre la formación histórica del Estado en América Latina*. CSUCA, EDUCA, San José de Costa Rica.

Ospina, Mariano ([1894] 2003). "Carta dirigida al general presidente Don Vicente Cerna, el 19 de diciembre de 1868". En: Toledo Ricardo. *Tres escritos sobre Guatemala del colombiano doctor Mariano Ospina*. Anales de la Academia de Geografía de Historia de Guatemala, LXXVIII.

Palma, Sandoval Álvaro Enrique (1973). *Monografía de cien años de Zacapa*. Editorial José Pineda Ibarra. Ciudad de Guatemala.

Palma Murga Gustavo (1993). "Economía y Sociedad en Centroamérica". En: Pinto Soria, Julio (editor). *Historia General de Centroamérica, El Régimen Colonial*. Tomo II. Sociedad Estatal Quinto Centenario, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. España.

_____ (2004). "Introducción". En: *Esta Tierra es Nuestra*. Horizont 3000, Proyecto Ch'orti' Parroquia Santiago Jocotán. Ciudad de Guatemala.

Palomo de Lewin, Beatriz (1995). "Esclavos, Negros". Asociación de Amigos del País. "Historia General de Guatemala". Tomo III. Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala.

Paz y Paz, Alberto ([1945] 1994). *Lampocoy y Taguani (Historia de mi fuga)*. Serviprensa Centroamericana, ciudad de Guatemala.

Peacock, Susan y Beltran Adriana/WOLA (2004). *Poderes Ocultos: Grupos ilegales armados en la Guatemala Post Conflicto y las fuerzas detrás de ellos*. La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA-, Washington, D.C.

Pérez, Demetrio (2004). *Políticas Públicas, poder local y Participación Ciudadana, en el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural*. Flacso sede académica Guatemala. Ciudad de Guatemala.

Pérez Sáinz, Juan Pablo (2012). "La redefinición de las relaciones de poder con los sectores subalternos en Centroamérica hacia fines del siglo XX". Publicación Inédita, presentada en "Central American Elites", Workshop sponsored by the American University Center for Latin American and Latino Studies y el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP) de la Universidad Rafael Landívar. Antigua, Guatemala, February 16-19.

Piel, Jean (1995). *El Departamento del Quiché bajo la Dictadura Liberal (1880-1920)*. FLACSO-CEMCA, Guatemala.

Pigg Stacy (1997). "Found in most traditional societies": traditional medical practitioners between culture and development. In F. Cooper and R, Packard (eds) International development and the social sciences. Berkeley: University of California Press, pp. 259-90.

Pineda Mont, Manuel (1978). *Recopilación de las leyes de Guatemala 1869*. Imprenta de la Paz, Tomo I, Vol. III. Guatemala 1978.

Prisma (2011). Cuéllar, Nelson; Kandel, Susan; Davis, Andrew; Díaz, Oscar; Luna, Fausto; Ortíz Xenia. *Dinámicas Territoriales en Centroamérica: Contexto y Desafíos para Comunidades Rurales*. Prisma, San Salvador

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2007). *Crimen y desarrollo en Centroamérica. Atrapados en una encrucijada*. Oficina contra la droga y el delito, Nueva York.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2007-2008). *La economía no observada: una aproximación al caso de Guatemala*. Cuadernos de desarrollo humano, No.4 PNUD/Guatemala, ciudad de Guatemala.

Pinto Soria, Julio (1983). *Raíces del Estado en Centroamérica*. Guatemala, Editorial Universitaria-USAC.

_____ (1993). *Historia General de Centroamérica. El régimen colonial*. FLACSO, Quinto Centenario España, Unión Europea. Tomo I. Guatemala.

_____ (2004). *El Estado y la violencia en Guatemala (1944-1970)*. Centro de Estudios Urbanos y Regionales -CEUR-, Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad de Guatemala.

Posas, Mario (1993). "La Plantación Bananera en Centroamérica 1870-1929. En: Acuña, Víctor Hugo. *Historia General de Centroamérica*. FLACSO, Madrid.

Cuéllar, Nelson; Kandel, Susan; Davis, Andrew; Díaz, Oscar; Luna, Fausto; Ortíz Xenia (2011). *Dinámicas Territoriales en Centroamérica: Contexto y Desafíos para Comunidades Rurales*. Prisma, San Salvador.

Prseworski, Adams (1989). *El capitalismo democrático en la encrucijada: Capitalismo y Social democracia*. Alianza Universidad, Madrid.

_____ (1998). "Acerca del diseño del Estado: una perspectiva principal-agente". En: Revista Argentina de Ciencia Política, EUDEBA No. 2, diciembre, Buenos Aires.

Prseworski, Adams y Wallerstein, Michael (1988). *Structural Dependence of the State on Capital*. Cambridge, Mass. American Political Science Review, 82, Págs, 12-29.

Radcliffe, Sarah (2001). "Imagining the State as a Space: Territoriality and the Formation of the Satate in Ecuador". En: Blom HansenThomas, Finn Stepputat. *States of Imagination, Ethnographic Explorations of the poscolonial State*. Duke University Press, Durham.

Ramos y Sosa (2010). *Los Caminos de la Participación Ciudadana, el Clientelismo y la cultura política en Huehuetenango*. Centro de estudios y documentación de la frontera Occidental de Guatemala –Cedfog-, Huehuetenango.

Ramírez, Margarita (1994). "El Corregimiento de Chiquimula de la Sierra" en Historia General de Guatemala, Dominación Española: Desde la Conquista hasta 1700. Tomo II Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Ciudad Guatemala.

_____ (1995). "El Corregimiento de Chiquimula". En: *Historia General de Guatemala*. Tomo III. Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala. Págs. 375-383.

REMHI (1996). *Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica*. Tomo II: Los mecanismos de la violencia. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

Rodas, Isabel (2001). *Las rutas del norte, la migración por el Usumacinta, Guatemala*. Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 2, 2001.

Rodrik, Dani (2000). *¿Cómo hacer que la apertura funcione? La nueva economía global y los países en desarrollo*. Bogotá, TM Editores y Overseas Development Council.

Rodrik, Dani (2001). *¿Por qué hay tanta inseguridad económica en América Latina?* Revista de la CEPAL No. 73, Santiago de Chile.

_____ (2005). *Políticas de diversificación económica*. Revista de la CEPAL, No. 87, Santiago de Chile.

Rodríguez, Mario (1995). "Presencia inglesa en la Federación y en Guatemala (1823-1852)". En: *Historia General de Guatemala*. Tomo IV: Desde la República Federal Hasta 1898, (ed.) Luján, Asociación de Amigos del País-Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Ciudad de Guatemala.

Romero, Lorena; Marlon Bueso, Hugo Orellana y Marvin Turcios (2007). "Fortalecimiento de las capacidades administrativas de asociaciones de productores en el manejo y prestación de servicios de irrigación en el valle de La Fragua, Zacapa, Guatemala. En: *Coastal Areas and Land Administration – Building the Capacity*. 6th FIG Regional Conference. San José, Costa Rica 12–15 November 2007.

Rosada Granados, Héctor (1999). *Soldados en el Poder. Proyecto Militar en Guatemala (1944-1990)*. Unidad de Relaciones Externas de FUNPADEM y Universidad de Utrecht, Holanda.

Roseberry, William (1994). "Hegemony and the Language of contention". En: Gilbert Joseph & Daniel Nugent (comps.). *Everyday Forms of State Formation, Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*. Duke University Press, Durham and London.

Rubio Sánchez, Manuel (1973). *Comercio de y entre las provincias de Centroamérica*. Tomo I. Editorial del Ejército de Guatemala, ciudad de Guatemala.

_____ (1988). *Historia de la Fortaleza y Puerto de San Fernando de Omoa*. Tomo II. Negociado de Historia, Departamento de Información y Divulgación del Ejército, ciudad de Guatemala.

_____ (1988). *Auge y Desarrollo del Ejército de Centroamérica en el Siglo XVII*. Colección Militar: Editorial del Ejército. Ciudad de Guatemala.

Samayoa-Chinchilla, Carlos (1956). *El Quetzal no es rojo*. Imprenta Arana Hermanos, México, D. F.

Sanchiz, Pílar (1976). *Los hidalgos de Guatemala, realidad y apariencias de un sistema de valores*. Publicaciones del Seminario de Antropología, Universidad de Sevilla. Sevilla.

Sayer, Derek (2002). "Formas cotidianas de formación del Estado: algunos comentarios disidentes acerca de la 'hegemonía". En: Gilbert Joseph, Daniel Nuget. (Comps.). *Aspectos cotidianos de la formación del Estado*. ERA. México, D. F.

Sassen, Saskia (2010). "Desnacionalización de las Políticas Estatales y Privatización de la producción de Normas". En: Teubner G., Sassen S., Krasner. *Estado, soberanía y globalización*. Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar.

Schirmer, Jennifer (1999). *Intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala*. Capítulo 6: "Enfoque militar de ley y seguridad". Flacso, Guatemala.

Schwartz, Norman (1990). *Forest Society: A Social History of Petén, Guatemala*. University of Pennsylvania Press, United States of America.

Scott, James (1994). "Foreword". En: Gilbert Joseph & Daniel Nugent (comps.). *Everyday Forms of State Formation, Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*. Duke University Press, Durham and London.

_____ (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press, New Haven.

Seidner, Emmanuel (2010-2011). "Central America Competitiveness Project, a Harvard Legacy". En: Revista *Harvard Review of Latin America: Guatemala Legacies of Violence*. Fall 2010/Winter 2011.

Seijo, Lorena y Carlos Menocal (2007). *Crimen organizado, tras diputaciones y alcaldías Elecciones: Presiona para postular candidatos en al menos seis departamentos*. Reportaje especial, Prensa Libre, 19 de febrero de 2007.

Sistema Nacional de Financiamiento de la Pre inversión (SINAFIP) (2004). *Informe final. Caracterización y diagnóstico biofísico y socioeconómico. Estudio de factibilidad y diseño final para ordenamiento y plan de manejo integrado del área de la cuenca del río grande comprendida entre los municipios d de Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa, departamento de Chiquimula*. Guatemala.

Skocpol, Theda ([1985] 2007). "El Estado regresa al primer plano: Estrategias de análisis en la investigación actual". En: Acuña C. (Comp.).*Lecturas sobre el Estado y las Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Publicación del Proyecto de Modernización del Estado*. Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Buenos Aires.

Sloan, John W. (1968). *The electoral game in Guatemala*. Austin, Texas. University of Texas.

Smyth, Frank (2005). *The Untouchable Narco-State: Guatemala's Army defies DEA*. The Texas Observer, November 18, 2005.

Soto Ramírez, Carlos (1990).*Las políticas de descentralización en Guatemala y su sistema de consejos de desarrollo, ¿solución o problema?* INFOP. Ciudad de Guatemala.

Streeter, Stephen M. (2000). *Managing the Counterrevolution: The United States and Guatemala, 1954-1961*.Center for International Studies, Latin American Series No.34. Ohio, University Press. Athens, United States of America.

_____ (2002). *Nation-Building in the Land of Eternal Counter-insurgency: Guatemala and the contradictions of the Alliance for Progress*. Third World Quarterly, Vol. 27. No. 1, pp. 57-68.

Stein, Alfredo (2011). *From Civil Wars to Drug Wars: The Limits of Decentralization Policies in Central America*. University of Manchester, Manchester, UK.

Stieglitz, Joseph (2003). *El Rumbo de las Reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina*. Revista CEPAL No. 80 (Agosto, 2003).

Taracena, Arturo (1999). *Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena: Los Altos de Guatemala, de región a Estado, 1740-1850*. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, Antigua Guatemala, 1999.

Taracena, Arturo et. al. (2004). *Etnicidad, Estado y nación en Guatemala, 1944-1985*.Colección "¿por qué estamos como estamos? CIRMA, Antigua Guatemala.

Terga, Ricardo (1982). *El valle bañado por el río de plata, Un estudio etnohistórico de los pueblos del valle medio del Motagua, desde Morazán hasta Gualán*. Tipografía Nacional. Ciudad de Guatemala.

_____ (1988). *La Mies es abundante, España en la Chiquimula y Jutiapa Colonial*. Sociedad de Beneficencia Social, Cultural y Altruista. Michigan.

Termer, Franz ([1929] 1989), *Alemanes y estadounidenses en Guatemala* (1929), Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, LXIII (1989). Trad. Teodora van Lotum, pp. 263-276.

Tilly, Charles (1975). *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton University Press. Princeton.

Thillet Braulia (comp.) (2004). *Los Consejos de Desarrollo Frente al desafío de la transición hacia la democracia*. Flacso, Sede Académica Guatemala.

Thompson Eric ([1938] 1959). *Grandeza y Decadencia de los Mayas*. Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Tischler Visquerra, Sergio (2001). *Guatemala 1944: crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una forma estatal*. F&G Editores. Guatemala.

Tobar Cruz, Pedro (1971). *Los Montañeses. La facción de los lucíos y otros acontecimientos históricos de 1846 a 1851*. Universidad de San Carlos, Editorial Universitaria. Ciudad de Guatemala.

Torres Moss, Clodoveo. (1987). *Don Joseph González de Rivera y Rancaño, Corregidor por su Majestad de Chiquimula de la Sierra y Acasaguastlán*. Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos. No. 9. Ciudad de Guatemala.

_____ (1997). *Apuntes para la Historia de Jocotán*. Editorial Cultura. Colección obra varia No. 11, serie: Monografías No.2. Guatemala, Ciudad de Guatemala.

Torres-Rivas, Edelberto (1983). *Crisis del poder en Centroamérica*. EDUCA, San José, de Costa Rica.

_____ (1989). *Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano*. Flacso, Costa Rica.

_____ (2006). *La Restauración Conservadora, Carrera y el destino del Estado Nacional*. Notas corregidas de la conferencia dictada en el Ciclo de Historia Política de Guatemala, Casa Ariana, 26 de septiembre, Ciudad de Guatemala.

Unicef (2011). Encuesta sobre Remesas/UNICEF 2010/Protección de la niñez y adolescencia Ciudad Guatemala, Marzo 2011.

Urzúa S., Carlos A. (1994). *La Abuela, al galope del tiempo 1860-1960*. Editorial Oscar de León Palacios. Guatemala.

Vázquez Olivera, Mario (2006). *Naciones y Fronteras*. Manuscrito en proceso de publicación. México D.F.

Villagrán Kramer, Francisco (1993). *Biografía Política de Guatemala, los pactos políticos de 1944 a 1970*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso. Ciudad de Guatemala.

Wagner, Regina (1996). *Los alemanes en Guatemala 1820-1944*. Afanes, S. A. Ciudad de Guatemala.

Weber, Max ([1965] 2002). *Economía y Sociedad*. Fondo de Cultura Económica. México.

Webre, Stephen (1987) "Las compañías de milicia y la defensa del istmo centroamericano en el siglo XVII: el alistamiento general de 1673", Mesoamérica, 14, pp. 511-529.

_____ (1993). "Poder e ideología: La consolidación del Sistema Colonial". En: Pinto Soria, Julio (ed.). *Historia General de Centroamérica*, El Régimen Colonial. Tomo II. Sociedad Estatal Quinto Centenario, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. España.

Wisdom, Charles (1961). *Los C'hortís de Guatemala*. Editorial del Ministerio de Educación Pública "José de Pineda Ibarra". Colección del Seminario de Integración Social No.10. Ciudad de Guatemala.

Woodward, Ralph (1982). *Liberalismo, conservadurismo y la actitud de los campesinos de la montaña hacia el gobierno de Guatemala, 1821-1850*. Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, LVI.

_____ (1992). *Changes in the Nineteenth-Century Guatemalan State and Its Indian Policies, en Guatemalan Indians and the State: 1540 to 1988*.Carol Smith(ed.). University of Texas Press, Austin.

_____ (1995). "El Consulado de Comercio" En: Asociación de Amigos del País. *Historia General de Guatemala*. Tomo III. Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Ciudad de Guatemala.

_____ (2002). *Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala 1821-1871*. Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica y Plumsock Mesoamerican Studies, Antigua Guatemala, South Woodstock.

Wortman, Miles (1976). *Legitimidad política y regionalismo. El Imperio mexicano y Centroamérica en Historia Mexicana*. El Colegio de México (ed.). México D. F.

_____ (1991). *Gobierno y Sociedad en Centroamérica 1680-1840*. Publicación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). EDUCA, San José de Costa Rica.

Zarazúa, Juan Carlos (2012). *Fuerzas militares para defender al Estado: Guatemala 1823-1863*. State Building in Latin America Proyect. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona-European Research Council (ERC).

Fuente Oral

Listado de Personas Entrevistadas

1. Adolfo Siguí	24. Juan Pedro Godoy Elvira
2. Aidée Robles de Spiegler	25. Leonel Sisniega-Otero Barrios
3. Alexis de Paz Sosa	26. Luis Lima
4. Álvaro Estrada	27. Manuel Antonio García
5. Ariel Rivera	28. Mario Cuéllar
6. Arturo García	29. Mario René Sánchez Solís
7. Baudilio Hichos	30. Miguel von Hoegen
8. Catalina Soberanis	31. Nery Ordóñez
9. Claudio Ramírez	32. Omar Jerónimo
10. Consuelo Chacón	33. Rafael López
11. Consuelo Chacón	34. Rebeca Pérez
12. Enrique Paz Galdámez	35. Ricardo Antonio Martínez
13. Felícito Barahona	34. Ronaldo Porta España
14. Fermín García	36. Rubén Rosales Orellana
15. Fernando Rivera	37. Salomón García
16. Franklin Moscoso	38. Sede UCN
17. Héctor Suchité	39. Sergio Tishler
18. Javier Antonio Díaz	40. Simeón López
19. José Ángel Escobar	41. Soldado
20. José Paco Elvira López	42. Sonia María Pellecer
21. José Pilar Álvarez Cabrera	43. Víctor Robles
22. Juan José Mejía	44. Juan Pedro Godoy Elvira
23. Adolfo Siguí	

Entrevistas transcritas y editadas (2011- 2012)

Entrevistas actores clave				
No.	**Persona entrevistada/ Código**	**Lugar y fecha**	**Duración Entrevista**	**Páginas Transcritas**
01	E-Z1-RRO-02.07.2011	Zacapa 02-07-2011	2:45:50	43 páginas
02	E-RH2-CCH-01.07.2011	Rio Hondo 01-07-2011	3:40:08	32 páginas
03	E-G3-EP-30.06.2011	Gualán 30-06-2011	5:23:43	61 paginas
04	E-G4-SG-27.06.2011	Gualán 27-06-2011	0:44:52	13 páginas
05	E-Z5-VR-27.06.2011	Zacapa 27-06-2011	3:20:42	44 paginas
06	E-Z6-AP-02.07.2011	Zacapa 02-07-2011	1:37:24	27 páginas
07	E-Z7-MS-28-06-2011	Zacapa 28-06-2011	0:53:54	10 páginas
08	E-G8-AE-27.06.2011	Gualán 27-06-2011	2:20:16	29 páginas
09	E-G9-JM-11.09.2011	Gualán 11-09-2011	1:43:29	37 páginas
10	E-G10-AS-11.09.2011	Gualán 11-09-2011	1:26:02	31 páginas
11	E-J11-JE-18.08.2011	Jutiapa 18-08-2011	1:48:07	42 páginas
12	E-J12.JE-12.2011	Jutiapa 12-2011	58:45	25 páginas
13	E-J13-JG-12.2011	Jutiapa 12-2011	1:14:27	24 páginas
14	E-Z14-LL-08.12.2011	Zacapa 12-2011	1:03:35	24 páginas
15	E-J15-MG-12.2011	Jutiapa 12-2011	1:19:32	35 páginas

Entrevistas actores clave				
No.	**Persona entrevistada/ Código**	**Lugar y fecha**	**Duración Entrevista**	**Páginas Transcritas**
16	E-J16-J1-12.2011	Jutiapa 12-2011	1:58:29	30 páginas
17	E-Z24-RP-15.06.2012	Zacapa 15-06-2012	2:00:46	47 páginas
18	E-Ch26-MC.18-06-2012	Chiquimula 18-06-2012	1:18:14	30 páginas
19	E-Ch27-FM.18.06.2012	Chiquimula 18-06-2012	1:31:59	39 páginas
20	E-Ch28-JD.19-06-2012	Chiquimula 19-06-2012	00:57:21	17 páginas
21	E-Ch29-P.19.06.2012	Chiquimula 19-06-2012	1:36:48	35 páginas
22	E-Ch30-UCN.20-06-2012	Chiquimula 20-06-2012	4:44:00	18 páginas
23	E-Ch31-RM.20.06.2012	Chiquimula 20-06-2012	00:1:58	1 página
24	E-Z32-CChyRL.20.06.2012	Zacapa 20-06-2012	1:59:58	31 páginas
25	E-Z33-NO.21.06.2012	Zacapa 21-06-2012	1:50:50	22 páginas
26	E-Ch-TA.16.06.2012	Chiquimula 16-06-2012	3:00:00	26 páginas
27	E- Ch-AGyCR-19.01.13	Aldea Las Flores Jocotán, Chiquimula 19-01-13	1:30:08	30 páginas
28	E-Ch-SLyHS-19.01.13	Aldea Las Flores Jocotán, Chiquimula 19-01-13	1:48:32	28 páginas

Entrevistas actores clave				
No.	**Persona entrevistada/ Código**	**Lugar y fecha**	**Duración Entrevista**	**Páginas Transcritas**
29	E-U-FB-20.01.13	Aldea Lampocoy, La Unión, Zacapa 20-01-13	1:32:43	41 páginas
30	E-Ch-OJ-02.02.2013	Camotán 02-02-13	2:57:19	56 páginas
31	E-Z-JA-02.02.2013	Aldea Trementina, Zacapa 02-02-13	2:34:35	57 páginas
32	E-Gt17-LSO-11.08.2011	Ciudad de Guatemala 11-08-2011	2:55:14	42 páginas
33	E-Gt18-AR-17.08.2011	Ciudad de Guatemala 17-08-2011	1:04:57	24 páginas
34	E-Gt19-FR-27.08.2011	Ciudad de Guatemala 27-08-2011	1:19:43	29 páginas
35	E-Gt20-RP-02.2012	Ciudad de Guatemala 02-2012	10:53:07	205 páginas
36	E-Gt34-BH.27.06.2012	Ciudad de Guatemala 27-06-2012	0:30:14	10 páginas
37	E-Gt21-AR-31.08.2011	Ciudad de Guatemala 31-08-2011	0:40:11	16 páginas
38	E-Gt22-SP-13.10.2011	Ciudad de Guatemala 13-10-2011	2:23:13	35 páginas

Entrevistas actores clave				
No.	**Persona entrevistada/ Código**	**Lugar y fecha**	**Duración Entrevista**	**Páginas Transcritas**
39	E-Gt23-CS-02.2012	Ciudad de Guatemala 02-2012	1:31:56	32 páginas
40	E-Gt24-ST-13.12.2010	Ciudad de Guatemala 13-12-2010	1:25:45	27 páginas
41	E-Gt35-MVH.07.07.2012	Ciudad de Guatemala 07.07.2012	1:55:57	29 páginas

Fuente de archivo
Decreto 900/Chiquimula
Archivo General de Centroamérica (AGCA)

Municipio	Finca	Propietario	Denunciantes	Extensión						Fuente				
				Total			Denunciado			Decreto 900 AGCA		Inscripción de registro		
				Cab.	Mz.	Cuerdas	Hs.	As.	Cs.	No. Paq.	No. Exp.	FCA.	FOL.	LIB.
San Jacinto	Peña y anexos	Herlindo Cardona	Unión Campesina de San Jacinto	1	14	2,700	53	9	0.98	1	1	6098	76	43
Esquipulas	Plan del Remunadero y Pozas	Tomás Chinchilla	Unión Campesina de la aldea Jagua	6	20	2,208	284	93	20.6	1	2	2168	121	17
Esquipulas	San José Las Lágrimas	Rubén Pazos C.	Unión Campesina	6	33	2,908	294	1	57.21	1	3	442 131	271 46	32
Esquipulas	Nejapa y Selva (Nejapa y la Ceiba)	Hercilia Oliva vda. de Trujillo	Luciano Rivera y compañeros		34		23	75	71.21	1	4	1873	94	24

Esquipulas	Nejapa	Hercilia Oliva vda. de Trujillo	Juan E. Ruiz y compañeros		34		23	75	71.21	1	5	1873	98	24
Concepción Las Minas	San José Real Alotepeque	José Itén e Itén	José Víctor Aguirre y compañeros. El Socorro	17	8	6218	773	16	9.64	1	6	1508	20	21
San Juan Ermita	Toma de Agua	Rufino, Lauro y Melecio Lemus	Manuel Lemus y Trinidad Villeda							1	7	No tiene inscripción		
Camotán	Terrenos	Herederos de Antonio García	Encarnación Ramírez y compañeros		15		10	48	10.84	1	8	1094	238	4
Ipala	El Paxte	María M. Girón P. vda. de Franco	Unión Campesina de Ipala	19	37	2,19	883	39	48.24	1	9	7072 2225	62 212	47 18
La Laguna	El Pericón	Marta Julia Díaz de Maldonado	Basilio Maldonado y compañeros	16	10	6,671	729	46	44.48	1	10	7157	154	45
Ipala	San Antonio Jicamapa	Fernando Cerón Dardón	Demetrio Jácome y compañeros	14	42	1012.6	561	17	73.29	1	11	1445	165	20

Esquipulas	El Rodeo	Rodrigo Sandoval Flores y condueños	Gerardo Pérez y condueños	5	60	8,813	268	16	86	1	12	81116	267	47
Las Cruces Ipala	Guajiniquilapa	Ismael Rodríguez	Unión Campesina de la aldea Las Cruces	8						1	13	342	71	3
Chiquimula	Lashún y anexos	Octaviano Valdés Tejada	Dionisio Flores, Clemente Ramírez y Gregorio Díaz							1	14	686	480	6
Camotán	El Dulce Nombre	Manuel S. Madrid	Magdaleno López y compañeros	15	23	6030	693	37	79.67	1	15	1673	120	131
Aldea El Barreal	El Palmar, El Sauce y otras	Licenciado José María Moscoso	Vecinos de Plan de Guineo, Catocha, El Palmar y otras (según el documento son 4 aldeas)							1	16	6134	112	43

Decreto 900/Zacapa

Municipio	Finca	Propietario	Denunciantes	Extensión						Fuente				
				Total			Denunciado			Decreto 900 AGCA		Inscripción registro		
				Cab.	Mz.	cuerdas	Hs.	As.	Cs.	No. Paq.	No. Exp.	FCA.	FOL.	LIB.
La Unión	Guaranja y Guachipilín	Maximiliano Muñoz	Unión Campesina de Guaranjá		22		22	35	96	1	1	2,737	156	34
Zacapa	Tashoro	Berta Octavila Paiz Barillas y condueños	Benedicto Pérez y compañeros	18	8	7,200	818	35	52.7	1	2	1,224	144	19
Cabañas	Terreno	J. Antonio Paiz	Evaristo Garcia y compañeros							1	3	4,842	158	1
Cabañas	San Juan Tamblador, San Juan el Ovejero, San Juan El Cerrón	Manuel Paiz y Paiz	Nicolás Hernández y compañeros	31	10	5360	1,405	85	15.46	1	4	1,484 1,485 1,486	223 224	13

Cabañas	Rincón Grande	Manuel Jose Paiz	Manuel Arias D. y compañeros	2	40	1194	118	28	43.45	1	5	1,884	222	13
Gualán	Las Pavas, Cerrón Santa María Cerezal y anexos	Rosendo Paiz Trabanino y condueños	Juan Martínez Interiano y compañeros	8	34	9,512	385	42	72.11	1	6	4,757 394	6,8 21	1 35
Zacapa	San Juan Piedra Pintada y Coyoles	Salvador Paiz Trabanino y condueños	Eliseo Morales y condueños	1	54	5,300	83	22	79.09	1	7	1,088	434	9
Gualán	Los Robles	Benjamín Paz Archila	Reyes Caballeros y Compañeros	29	31	4,975	1,330	65	33.44	1	8	5,089 1497	48,242	4 12
Gualán	Los Terrenos	Juventino Paz Archila	Juan José López y Compañeros	7	39	5,789	343	53	50.82	1	9	5,092	199	3
Cabañas	Terrenos	Manuel y Vicente Paiz	Nicolás Hernández y compañeros (Nicolás Hernández Nájera y Alfonso Lorenzo)	23 aprox	NO HAY DATOS					1	10	1,487 152	225 119	13 3

Usumatlán	San Jorge y La Esmeralda	Alonzo Castro Conde	Luis Alberto Moreira y Compañeros	5	25	9,066	243	73	4	2	1	6,668 4,540	98,215	9 57
Gualán	Guasimas o Islotes	Juan José Cordón y condueños	Dolores Gregorio y compañeros							2	2	1633	15	48
Gualán	Capucal y anexos	Herman Kaufman L.	Francisco Aragón López y compañeros	90	63	7,132	4,105	83	2.39	2	3	1,803	308	15
La Unión	Guaranjá	Manuel Muñoz	Jaime Gonzáles R. y compañeros							2	4	No tiene inscripción		
Gualán	Los Tarros	Ricardo Miyares Castellanos	Tránsito Franco y compañeros de la Unión Campesina de La Vainilla	10	39	1,079	478	58	30.19	2	5	4,639	158	58



La presente edición de *Territorio, actores armados y formación del Estado*, se terminó
de imprimir en los talleres litográficos de Magna Terra editores
(5a. avenida 4-75 zona 2, Ciudad de Guatemala) en junio de 2014.
El tiro sobre papel bond beige 80 gramos consta de 500 ejemplares.